

AMPUERO

1917-1996

El Socialismo Chileno

RAUL AMPUERO

1917-1996

El Socialismo Chileno

Ediciones Tierra Mía

Agradecemos la cooperación de:

Eduardo Paredes, Ramón Silva, Gustavo Meza, Eduardo Osorio, Jaime Ahumada,
Belarmino Elgueta, Oscar Núñez y Mario Garay.

© Hernán Ampuero

Inscripción N° 129.849

Editado e impreso por EDICIONES TIERRA MÍA Ltda.

Fono/Fax 518 6316

tierramia@adsl.tie.cl

Composición: Salgó Ltda.

Portada: Rodrigo Ampuero

Santiago de Chile, diciembre 2002

INDICE

Prólogo de los editores	5
Pensamiento y Acción de Ampuero. <i>Belarmino Elgueta</i>	9
Fundamentos de una política y construcción de una fuerza dirigente. <i>Jaime Ahumada</i>	27
 TEXTOS ESCOGIDOS (1934 - 1966)	
NUESTRO MOVIMIENTO POPULAR Y LA JUVENTUD. Los Ultimos Veinte Años De "La Juventud en el Frente del Pueblo", Departamento de Publicaciones, Partido Socialista, 1939	39
UNA NUEVA POLITICA JUVENIL. ACCION POLITICA DESDE EL III CONGRESO Informe al IV Congreso de la FJS. Mayo de 1939	49
CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN CHILENA	55
POSICIÓN SOBRE LA INTERVENCION SOVIÉTICA EN HUNGRÍA	62
REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO Revista Arauco Nº 18, julio 1961	65
EL SOCIALISMO, UNICO FUNDAMENTO DE LA DEMOCRACIA Discurso en el Senado publicado en "La controversia permanente: socialismo y liberalismo", por Eugenio González Roja. Colección Documentos Nº 2, Prensa Latinoamericana.	72
LA POLEMICA SOCIALISTA - COMUNISTA Respuesta del Comité Central del Partido Socialista incluida en "La Polémica Socialista-Comunista", Prensa Latinoamericana, 1962.	78
1964, AÑO DE PRUEBA PARA LA REVOLUCION CHILENA Extracto del Informe al XX Congreso General del Partido Socialista, Concepción, febrero de 1964.	94
POSICIÓN SOBRE LA INTERVENCION SOVIÉTICA EN CHECOSLOVAQUIA Discurso en el Senado, Agosto de 1968.	102
UN POCO DE HISTORIA. LOS AÑOS VERDES De "La Izquierda en Punto Muerto", Editorial Orbe, 1969.	105
PUNTOS DE CONFLICTO De "La Izquierda en Punto Muerto", Editorial Orbe, 1969.	115
VIDA Y PASION DE LA UNIDAD De "La Izquierda en Punto Muerto", Editorial Orbe, 1969.	129
LA BRECHA SINDICAL De "La Izquierda en Punto Muerto", Editorial Orbe, 1969.	148
AMERICA EN ESTADO DE SITIO De "La Izquierda en Punto Muerto", Editorial Orbe, 1969.	161
LA UNIDAD ¿MITO O TAREA POLITICA? De "La Izquierda en Punto Muerto", Editorial Orbe, 1969.	177
LAS FUERZAS ARMADAS: CHILE O EL PENTAGONO Revista "Chile-Hoy", septiembre 7 de 1973	190
EL NUEVO PODER MILITAR Seminario en la Universidad Autónoma de México, 1977	194

PROPOSICIONES PARA UNA REORGANIZACION ANTIFASCISTA DE LAS FF.AA. Informe para la Comisión de Estudios de la nueva institucionalidad Roma, Italia, 18 de septiembre de 1977	209
OSCAR SCHNAKE Y EUGENIO GONZÁLEZ: NO SÓLO HISTORIA Octubre de 1977	217
INFORMES INTRODUCTORIOS A LAS REUNIONES PARA CONFIGURAR EL AREA SOCIALISTA Los Seminarios de Ariccia	
INFORME 1 Razones de la Convergencia. Ariccia, Italia, marzo de 1979	221
INFORME 2 Enero de 1980	229
MILITARES Y POLÍTICOS EN LA CRISIS CHILENA DEL '73 "Le Monde Diplomatique" en español, marzo de 1980, México.	238
A LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS ACTOS DEL 50º ANIVERSARIO DEL PSCH Milán, abril de 1983.	253
LOS CAMINOS DE LA UNIDAD "Pensamiento Socialista". Año VIII, nº 30, 1983.	256
EL SOCIALISMO ENTRE AYER Y MAÑANA Notas sobre la reconstitución del Partido Socialista de Chile, Roma, Italia, noviembre de 1985	263
CRITERIOS GENERALES DE REORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA Marzo 1987, Roma, Italia.	280
MENSAJE Y VIGENCIA DE LA TESIS DE ARICCIA "Convergencia" Nº 14 de noviembre de 1988	284
LOS DESAFIOS DEL SOCIALISMO CHILENO "El Mercurio", Santiago, Noviembre 24 de 1989	292
ALREDEDOR DE LA UNIDAD DE LOS SOCIALISTAS ¿Partido de qué clase? ¿Qué clase de partido? Publicado en "Convergencia", Nº 17, Enero-marzo 1990, Santiago, Chile.	296
APUNTES PARA LA CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN Depto. Nacional de Organización del PSCH, junio 1991.	304
NOTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN EL PARTIDO Santiago, diciembre de 1992.	309
CONTINUIDAD Y CAMBIO: Notas sobre el programa de 1947. Santiago, octubre de 1992.	313
SOBRE EL "PROYECTO SOCIALISTA" Contribución al Seminario para un nuevo Programa del Partido Socialista Santiago, noviembre de 1994.	320
CARTA AL XXV CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA Santiago, mayo 2 de 1996.	323
EPILOGO	
LA POLITICA COMO ETICA PERSONAL Y EL ARTE DE LA CONVERSACION <i>Oscar Núñez</i>	329
CRONOLOGIA DE UNA EPOCA Y DE UNA VIDA MILITANTE <i>Mario Garay</i>	337

PRÓLOGO DE LOS EDITORES

Como Luis Emilio Recabarren, Raúl Ampuero Díaz es uno de aquellos grandes líderes que en vida sembraron futuro y conquistaron un alto sitio en el corazón del pueblo, pero a quienes la Historia ha de reconocer su inmensa contribución al progreso de Chile y de sus trabajadores sólo después de su muerte.

Hijo de profesores normalistas, este joven chilote ingresó a la política militante a los 17 años, fue elegido Secretario General de la Federación Juvenil Socialista a los 20, y tomó el timón del Partido Socialista a los 29, el año 1946, cuando esta colectividad padecía una profunda crisis que la tenía a las puertas de su extinción.

Y partió por los principios, convocando a una Conferencia Nacional, con el único propósito de discutir y aprobar un Proyecto de Programa cuya redacción se encomendó a Eugenio González Rojas, quien más tarde sería senador y Rector de la Universidad de Chile.

Desde entonces y hasta 1996, Ampuero, como un verdadero artesano, se dio a la paciente tarea de construir, desde los cimientos, una organización capaz de cristalizar, con su acción, aquellos grandes principios que inspiran al socialismo chileno. En ese sentido, Ampuero marcó la diferencia entre el político tradicional —manipulador de una clientela electoral subordinada— y el líder revolucionario. Se preocupó de la educación política, de la formación cultural, doctrinaria y ética de los militantes, se involucró personalmente, recorriendo el país palmo a palmo, para articular la nueva organización y proyectarla en una lucha por el socialismo, con la mirada puesta en América Latina y en el interés de los trabajadores de todo el mundo.

De principio a fin, fue un protagonista privilegiado del siglo veinte. Toda su actuación pública se basó en sólidos fundamentos éticos. Su capacidad de análisis, su amplia cultura y su penetrante oratoria, le hicieron ganarse el respeto de partidarios y detractores. En su recia personalidad se amalgamaban las excepcionales condiciones del agitador social y hombre de Estado.

Para aquilatar la trascendencia histórica del liderazgo de Ampuero, hay que situarse en la atmósfera que se vivía en América Latina, recién concluida la Segunda Guerra Mundial. Por una parte, la implacable dominación de carácter neocolonial impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos. Por la otra, la consolidación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre cuyo ejército recayó el peso principal de la victoria militar sobre el Tercer Reich, en el

apogeo del stalinismo. En ese contexto, era imprescindible saber diferenciar lo que había de nuevo orden social en el régimen soviético —esto es, sus logros en la distribución de la riqueza y en el desarrollo socioeconómico y cultural del pueblo— de aquello que implicaba una forma burocrática de dominación política y un intento de imponer una estrategia y un modelo de sociedad a los movimientos populares de todo el mundo.

Para posicionarse correctamente ante un problema tan medular, fue necesaria una gran lucidez intelectual, un espíritu abierto, ajeno al dogmatismo y, ante todo, un claro compromiso con los intereses del pueblo chileno por sobre cualquiera otra consideración. Y ese es un logro teórico y político que la historia reconocerá a la dirección socialista encabezada por Raúl Ampuero Díaz. De ello da cuenta un documento de extraordinaria validez histórica que presentamos en esta obra: La polémica socialista-comunista de 1962.

Este libro es fruto de la iniciativa personal de sus familiares, amigos y colaboradores más cercanos, quienes se dieron a la tarea de rescatar, desde distintas fuentes dispersas en Chile y en el exterior, los principales escritos, discursos y entrevistas en los que Ampuero plantea los fundamentos teóricos, políticos y orgánicos del socialismo chileno.

Contiene, además, dos artículos introductorios escritos por Belarmino Elgueta, —ex diputado y ex miembro del Comité Central del PS— y por Jaime Ahumada, ex Secretario General de la FJS. A ello se agrega una certera semblanza humana escrita por Oscar Núñez, ex Presidente de la Central Unica de Trabajadores y una cronología de los principales hitos históricos en la trayectoria política del líder socialista, preparada por Mario Garay, ex miembro del Comité Central del PS.

Esta edición no es tan completa como quisiéramos. Tarea pendiente es profundizar en la selección de los documentos y testimonios que ilustran la vida de quien, junto a Salvador Allende, contribuyó de manera decisiva al surgimiento de una alternativa de cambio social en Chile, basada en la unidad de la izquierda, la unidad de los trabajadores y la unidad latinoamericana.

Nada más ajeno a los editores el presentar al gran líder socialista como exento de fracasos o errores. Ciertamente los tuvo, como todos los que nos empeñamos en ofrendar lo mejor de nuestra capacidad en transformar la estructura de dominación que oprime a la mayoría del pueblo chileno. Sólo que a la hora del balance, sus méritos, sus aportes, su entrega de toda una vida, su coherencia entre el pensamiento y la acción, prevalecen y han de perdurar en la memoria histórica de nuestro pueblo.

En los tiempos que corren encontramos a menudo dirigentes involucrados en hechos políticos claramente antagónicos a los principios y proyectos que dicen proclamar. En estas páginas los lectores tendrán la satisfacción de identificar

una época de luchas y sacrificios con un liderazgo transparente, cimentado en valores y principios, acotado con metodologías y estrategias ampliamente divulgadas y compartidas por las bases y sus cuerpos dirigentes. Todo ello es indispensable si en verdad, lo que se persigue, es la construcción de una democracia participativa en la que el pueblo avance hacia su emancipación nacional y social.

Quienes compilamos, redactamos y editamos este libro, apreciamos la oportunidad de haber emprendido, junto a su familia, la tan honrosa como necesaria misión de divulgar el pensamiento y los hechos relevantes vividos por un patriota que entregó generosamente todo el tiempo de su existencia a la tarea de desbrozar la senda del socialismo.

Los Editores

Santiago de Chile, diciembre de 2002.

PENSAMIENTO Y ACCIÓN DE AMPUERO

Prólogo de Belarmino Elgueta
Ex Diputado y ex miembro del
Comité Central del Partido Socialista

LAS GRANDES ILUSIONES DE LA JUVENTUD

La vida de Raúl Ampuero giró en torno a la lucha por el socialismo. En 1934 se incorporó a la Federación de la Juventud Socialista, recién fundada en ese mismo año, en cuyas filas destacó desde el primer día por su idealismo y voluntad de lucha. En el segundo congreso general ordinario de esta organización fue elegido Secretario General y, con esta representación, integró el Comité Central del partido. En el tercer congreso de la FJS fue reelegido por aclamación. En esta etapa de su vida militante le correspondió actuar durante la década de los años treinta y cuarenta, período en que la juventud latinoamericana comenzó a jugar un papel fundamental en las luchas populares del continente. En Chile existe un punto de referencia, entre el despertar de la conciencia social de 1920 y la lucha contra la dictadura en 1930, con la apertura de un proceso de democratización que culminó con la victoria electoral del Frente Popular en 1938.

Los pasos fundamentales de este proceso de cambio en las luchas políticas en Chile, lo constituyeron la revolución del 4 de junio de 1932 y la fundación del Partido Socialista el 19 de abril de 1933. En ese tiempo, se combinó la participación de estos factores que influirán profundamente en los acontecimientos políticos. Por una parte, la conciencia de clase de las masas trabajadoras, que generaron un cauce de lucha tras sus objetivos históricos e inmediatos y, por la otra, la irrupción de los jóvenes en la lucha revolucionaria. El nuevo partido formuló, desde el primer día, una política realista y unitaria, capaz de enfrentar la dictadura legal de Arturo Alessandri y conducir al pueblo a la victoria. La unidad del movimiento popular era, por encima de las diferencias, la tarea prioritaria.

El Frente Popular, con la candidatura presidencial de Pedro Aguirre Cerda, triunfó el 25 de octubre de 1938. Un acontecimiento espectacular en la historia política de Chile. Raúl Ampuero, cuando tenía sólo 21 años, percibió el sentido profundo de esta victoria del pueblo. "El 25 de octubre, expresa, tiene un contenido revolucionario, que nosotros no podemos dejar que se malogre con una

actitud negativa o ultrarrevolucionaria. Significa nada menos que romper cien años de estancación política y de casi ininterrumpido dominio reaccionario. Significa que se abren las puertas para que las masas participen en la vida pública de Chile y determinen su futuro. Significa que comienza un ciclo de renovación de valores y de libertad, en que debemos dar consistencia y claridad al movimiento obrero” Esta es una lúcida comprensión del momento político. El Frente Popular no dio satisfacción a las grandes reivindicaciones económico-sociales de los trabajadores, pero les brindó respeto y dignidad, libertad y democracia, una mayor participación en la vida pública, que los conduciría tres décadas más tarde al gobierno, esta vez del pueblo, con Salvador Allende.

La acción de Raúl Ampuero en la FJS tuvo una extraordinaria importancia. En los años que fue su Secretario General se preocupó de fortalecer las bases de organización y de lucha en los centros industriales, en los minerales del salitre, del carbón, del cobre, en las pampas ganaderas de Magallanes. Previó también lo que él llamó la misión de desfeudalizar el campo e impulsó el trabajo de los jóvenes en las ligas de campesinos y sindicatos agrícolas conjuntamente con el movimiento obrero de los centros urbanos. Similar acción se realizó en los colegios, liceos y universidades, organizando brigadas, conformadas en escuelas del socialismo, donde los niños y jóvenes asimilaban las primeras lecciones para ser trabajadores conscientes, en el futuro inmediato. En esos lejanos años, planteó también la necesidad de convertir a las fuerzas armadas en escuelas democráticas, para lo cual había de impedir que la oligarquía gobernante continuara usándolas “en provecho de sus intereses de casta”. Exigía asimismo que los muchachos, que año tras año hacen el servicio militar obligatorio, reciban mejores condiciones de vida y un trato más digno. Un problema que sigue vigente, sin resolver, sesenta años después.

El Partido Socialista se incorporó al gobierno del Frente Popular, presidido por Pedro Aguirre Cerda. Este movimiento político se basó en una alianza de sectores burgueses y la clase trabajadora, con la hegemonía de los primeros, que facilitó las luchas de las masas urbanas por sus reivindicaciones inmediatas, pero deterioró al mismo tiempo el papel revolucionario del partido. Graves pugnas con sus aliados, tornaron ineficaz su participación en el gobierno de la coalición, que estaba subordinado al Partido Radical y, a través de éste, a la burguesía. Como siempre sucede en esta especie de procesos, se formó en la capa directiva un sector que empezó a asumir los estilos de vida de la clase dominante, que los militantes de base criticaban abiertamente. No obstante, en los primeros años de este período se proyectaron los resplandores de la izquierda y, dentro de éstos, las grandes ilusiones de la juventud trabajadora.

EL OCASO DEL PARTIDO SOCIALISTA

La acción protagónica más destacada de Raúl Ampuero en la historia del Partido Socialista corresponde a un período de ocaso y recuperación, comprendido entre los años 1942 y 1966. Son 24 años de lucha dramática por superar la descomposición política, que tenía repercusión en los comicios electorales y en el movimiento sindical. En la década de los años cuarenta se había agotado el Frente Popular, aunque se configuraron otras alianzas con patrones programáticos similares y confluencia de los mismos sectores sociales. Los problemas de la Segunda Guerra Mundial y de la postguerra no pudieron resolverse de acuerdo a las demandas de los trabajadores, sino que éstos continuaron siendo los sacrificados.

El ocaso del Partido Socialista comenzó precisamente durante el período presidencial de Juan Antonio Ríos (1942-1946). Su gobierno puso el énfasis en la unidad nacional para promover el desarrollo económico y asegurar la estabilidad social. Pero su interés por la situación de los trabajadores era menos marcado que el de su antecesor. La colaboración ministerial, en estas condiciones, no permitía resolver las demandas sociales, sino que hundía al Partido Socialista cada vez más en el oportunismo. Los beneficiados con la participación en el gobierno se reducían a una pequeña capa dirigente.

El Partido Socialista vivió una crisis intermitente entre 1939 y 1943, determinada por el conflicto entre sus principios revolucionarios y la colaboración gubernativa, durante la cual maduró la conciencia social de la organización. Esta crisis explotó en el Sexto Congreso General Ordinario del partido, celebrado en Santiago en diciembre de 1939. Dos corrientes se enfrentaron abiertamente. Por una parte, el "inconformismo", dirigido por el diputado César Godoy Urrutia, que luchaba por el retiro del partido de las actividades ministeriales, debido a su ineficacia y descomposición. Por la otra parte, la mayoría de la militancia, representada por sus líderes más destacados, Oscar Schnake y Marmaduke Grove, que defendía la alianza de gobierno. Entonces se produjo la primera gran división.

El Partido Socialista celebró su Octavo Congreso General Ordinario en marzo de 1942, donde se enfrentaron de nuevo las tendencias opuestas. Raúl Ampuero estuvo, esta vez, a la cabeza de la corriente "anticolaboracionista", que pugnaba por alejar al partido del gobierno y la burocracia, con el propósito de cohesionarlo y restituirlo a sus cauces revolucionarios. La capa dirigente impulsó la continuación en el gobierno y reeligió a Grove como Secretario General. Poco tiempo después se precipitaron los acontecimientos a gran velocidad, agravándose la crisis latente. El comité central de la FJS, dirigido por Ampuero, expuso a la dirección nacional del partido la frustración y el descontento de las

bases militantes por el servilismo manifestado por ésta a la política reaccionaria del gobierno. La respuesta fue la expulsión de todos los integrantes del Comité Central de la FJS.

La oposición de izquierda en el seno del Partido Socialista venció en el Noveno Congreso General Ordinario de 1943, celebrado en Rancagua, eligiendo como Secretario General a Salvador Allende, en virtud de un acuerdo con el sector que dirigía Ampuero. El nuevo liderazgo retiró al partido del gobierno, contando con el apoyo de 80% de los militantes, que reclamaban la independencia política para recuperar el espíritu revolucionario. Por su parte, Raúl Ampuero, a quién el Congreso General restituyó todos sus derechos de militante socialista, fue elegido además, miembro del Comité Central.

El retiro del Partido Socialista del gobierno del Presidente Ríos provocó la división. Los partidarios de Grove, derrotados en el congreso de Rancagua, constituyeron el Partido Socialista Auténtico en 1944, el que continuó colaborando con el gobierno desde algunos cargos en el gabinete y en la administración pública. Esta escisión marcó el inicio de la decadencia del partido, el que se expresó en las elecciones parlamentarias de 1945. En ellas ambas fracciones sumaron 12,8%, descenso notorio respecto a los resultados de 1941, en las que había obtenido 20,7% de la votación nacional. Entre los años 1945 y 1946 se desarrolló una política oportunista, denominada Tercer Frente, que tenía cierta base teórica en la realidad internacional, que aparecía obscurecida por los comienzos de la guerra fría.

LA RECUPERACIÓN SOCIALISTA

El décimo primer Congreso General Ordinario, celebrado en 1946, marcó el comienzo de la recuperación del Partido Socialista. En este torneo, Raúl Ampuero enfrentó, con su insistente posición revolucionaria, a la corriente oficial, responsable de la dirección partidaria durante la aventura en el gobierno de Duhalde. Fue elegido por primera vez Secretario General, derrotando por escasos votos a Salvador Allende, tras cuyo nombre se había agrupado el "oficialismo", aunque él no había sido directo responsable de aquella política. El nuevo Comité Central, del que formó parte, inició sus actividades con un espíritu reconstructivo.

En este sentido, reconoció la victoria electoral de Gabriel González Videla, votó por él en el Congreso Pleno y declaró que actuaría en orden de ayudar al cumplimiento del programa difundido en la campaña electoral. Asimismo, condenó a las organizaciones clandestinas de corte fascista que, a pretexto de combatir el comunismo, preparaban la vuelta de regímenes reaccionarios, en particular la Acción Chilena Anticomunista.

En el mes de noviembre de 1947 se celebró la Conferencia Nacional de Programa, en la que se aprobó este instrumento estratégico que, uniendo la teoría y la práctica, se planteó la lucha por una **República Democrática de Trabajadores**. El propio Raúl Ampuero destacó, más tarde, la importancia de esta iniciativa que puso de relieve, precisamente, ideas que se desarrollarían con posterioridad, antes y después del derrumbe de la Unión Soviética, sobre la revolución socialista. Entre otras, la reducción del papel del estado en el proceso de socialización de los medios de producción y de cambio, la reivindicación humanista del trabajo como factor económico y valor social, así como la de conferir a la democracia la función de ordenamiento institucional de la construcción del socialismo.

El retroceso de la izquierda se hizo más evidente todavía con la división del Partido Socialista, en 1948. A la política de principios aplicada por el Comité Central elegido en el décimo primer Congreso General Ordinario, se opuso la antigua capa dirigente, que se había unido a la campaña anticomunista de la derecha y del Presidente de la República y aspiraba a ocupar cargos en el gobierno. Este sector desafió la línea política aprobada en el mencionado congreso y la disciplina exigida por la nueva dirección. En el último Pleno (Comité Central más los Secretarios Regionales), celebrado antes de la división, Ampuero los fustigó violentamente, sosteniendo que el Partido Socialista no sería, por la acción de ese sector de derecha, “mascarón de proa de un barco de piratas” (se refería a la organización anticomunista). Las posiciones eran absolutamente contradictorias. La política acordada en el Décimo primer Congreso General reconocía la independencia de los gobiernos de turno y la apertura de la lucha por el poder. Por otra parte, el Comité Central de entonces rechazaba la persecución en contra del Partido Comunista, porque su crítica a éste había sido siempre desde el punto de vista de izquierda. En contra de las posiciones de derecha, de “unidad nacional”, así como de todas las deformaciones stalinistas y, por lo tanto, nada tenía que ver con las campañas anticomunistas de la derecha proimperialista. Producida la división de 1948, el sector de izquierda del socialismo, bajo la conducción de Ampuero, adoptó el nombre de Partido Socialista Popular (PSP). Se inicia desde entonces un proceso de recuperación. La grave situación de desprestigio de los partidos políticos tradicionales y del gobierno de Gabriel González, la ilegalización del Partido Comunista, el debilitamiento del movimiento obrero y la división socialista, pusieron en la mayoría nacional un sello de desilusión y repudio al régimen imperante. Esta misma situación abrió las puertas a un movimiento independiente de los partidos, que se personificó en la figura de Carlos Ibáñez del Campo.

El Partido Socialista Popular tuvo el coraje de apoyar la candidatura presidencial de Ibáñez, quien obtuvo, en las elecciones del 4 de septiembre de 1952,

el 47% de la votación nacional en una elección a cuatro bandas. Su incorporación a este vasto movimiento popular le permitió superar la crisis, eligiendo 19 Diputados y 5 Senadores en las elecciones parlamentarias de 1953, como en el año 1937. El populismo ibañista fue, desde el punto de vista de su base social de apoyo y de sus propósitos programáticos, la continuación del Frente Popular. El Partido Socialista Popular participó durante los ocho primeros meses de dicho gobierno, etapa en la cual se pusieron en marcha todas las medidas avanzadas de política social, aunque aquél no pudo encarar la crisis en que se debatía la sociedad, debido a las limitaciones de la herencia que le transmitió su antecesor.

El PSP se esforzó por dar conducción al movimiento social que respaldó al Presidente Ibáñez, pero fracasó en este intento. En abierto conflicto con él, se retiró del gobierno al cabo de ocho meses y actuó en oposición a la nueva política de derecha inaugurada en ese momento por Ibáñez. Con todo, el Presidente Ibáñez, con la colaboración de los socialistas, dejó a los chilenos un legado democrático. En un balance general, cabe destacar la unidad de la clase trabajadora a través de la fundación de la Central Unica de Trabajadores en 1953, cuyo Congreso General fue inaugurado por el Ministro del Interior, Guillermo del Pedregal. Se aprobaron, por decretos con fuerza de ley, fundamentales derechos sociales, como el salario obrero agrícola, reajustado anualmente, la asignación familiar para los trabajadores urbanos y campesinos y la indemnización por años de servicios para los mismos. Además, con el auspicio del gobierno de Ibáñez y el apoyo del conjunto de la izquierda, se derogó la ley de defensa permanente de la democracia, poniendo término a la represión sistemática al movimiento obrero, y se aprobó la reforma electoral, que hizo posible doce años después la victoria en las urnas de Salvador Allende como Presidente de Chile.

UNA NUEVA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA

Recuperado su impulso revolucionario, el socialismo chileno sustituyó la política practicista seguida en los años anteriores por una política de principios que, abandonando la colaboración ministerial, se planteó como objetivo central la conquista del poder. Durante más de 20 años, bajo la conducción principal de Raúl Ampuero y de una nueva generación de trabajadores manuales e intelectuales, erradicó las tendencias oportunistas y pragmáticas que llevaron a la declinación a un movimiento que se había alzado trece años antes como la más promisoriosa arma de combate de la clase obrera.

Los años de Ampuero en la dirección del Partido Socialista fueron de enriquecimiento teórico y de lucha constante contra el orden existente. Ella se manifestó en el plano político y sindical, en el Congreso y en la calle, teniendo siem-

pre como fundamento la defensa de los intereses de los trabajadores. En el curso de esos años, el movimiento popular experimentó un notorio ascenso a través de la lucha de masas, avanzó en medio de las contradicciones interburguesas, cuyos sectores trataron a su vez de neutralizarlo por la represión y el compromiso. Así surgieron los espacios políticos dentro de los cuales se discutía, bajo ciertas reglas, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y en la lucha democrática.

Esta marcha facilitó la formación de la conciencia social de las masas y trajo consigo importantes conquistas parciales. Son los aspectos positivos. No obstante, esta forma de inserción en la dinámica de la sociedad capitalista produjo su contrapartida al convertir a los trabajadores por largo tiempo en soporte del sistema político, inculcándoles una confianza exagerada en la democracia formal. Son los aspectos negativos. Dentro de esta etapa, el lapso comprendido entre 1946 y 1966 se caracterizó por un decidido afán de conseguir la superación política y orgánica del Partido Socialista. Los nuevos dirigentes trabajaron tesoneramente para restablecer y profundizar la unidad teórica del socialismo.

Este camino es un proceso de autonomización política de los trabajadores, por medio del cual desarrollaron su capacidad para proyectar sus alternativas de acción en la lucha por el poder y la transición socialista. En este marco conceptual, la clase trabajadora adoptó una política independiente de la política burguesa, superando de este modo la fase en que el movimiento obrero se limitó a la crítica de las alternativas capitalistas. Desde el punto de vista programático, en el Frente de Trabajadores los intereses de las clases explotadas se proyectan a través de la radicalización del proceso revolucionario tras los objetivos socialistas. Tal fue la experiencia del gobierno de Allende. En los frentes de clases antagónicas, conducidos por fracciones burguesas, en cambio, sólo se consideran reducidas soluciones para los intereses de corto plazo de los trabajadores, por intermedio de programas orientados hacia la consolidación del sistema capitalista.

La nueva estrategia revolucionaria comprendía también el análisis de la conducción reaccionaria de las fuerzas armadas dentro del aparato del Estado, su dependencia del Pentágono, durante el período de la guerra fría, su carácter golpista y antidemocrático. El Partido Socialista más que cualquier otro partido de izquierda, y Ampuero, con un interés superior a todos los demás dirigentes políticos, se preocuparon de formular orientaciones, medidas y estructuras que impidieran la utilización de las fuerzas armadas como factor de intimidación, formación represiva y grupo de presión al servicio de intereses extranjeros o, en el caso extremo, como superpoder de facto situado por encima de la soberanía popular.

LA LUCHA POR EL PODER

El Decimoséptimo Congreso General Ordinario, celebrado en Santiago durante los días 5, 6 y 7 de julio de 1957, marcó la lucha decidida contra el sistema capitalista y por la conquista del poder. En este torneo, llamado Congreso de Unidad, porque en él confluyeron los dos sectores en que se encontraba dividido el partido, se reafirmó la oposición al gobierno de Ibáñez, que ya terminaba su mandato, el fortalecimiento del Frente de Acción Popular, que se había fundado el año anterior y el rechazo de los intentos de los partidos centristas por encabezar el movimiento político popular y recuperar el poder del Estado. El Partido Socialista, con su nueva estrategia revolucionaria, desahuciaba el viejo modelo de alianza, y decidía levantar una candidatura presidencial del FRAP a la Presidencia de la República, con un programa propio.

En esta forma se inició el camino del pueblo hacia el poder, por la vía democrática, superando el escepticismo de muchos y convirtiéndose en una ofensiva impetuosa que desafiaba el dominio reaccionario. Las mismas agrupaciones políticas del FRAP, que difícilmente habían recibido 160.000 sufragios en 1957, conquistaron 356.000 en 1958, ubicándose a 30.000 votos de la primera mayoría relativa. Salvador Allende había dado la primera batalla de la izquierda unida por la Presidencia de la República. Ampuero señaló, con razón, que con una organización embrionaria, un aparato electoral casi inexistente y menguados recursos financieros, había disputado voto a voto la victoria a los poderosos clanes económicos y a los partidos de más añeja experiencia en la manipulación de la opinión pública y en las artimañas electorales.

Al término del período de Alessandri, en 1964, lo sucedió Eduardo Frei Montalva, la otra cara de la derecha. La revolución en libertad concluyó con un fracaso estruendoso. El propio Radomiro Tomic estableció este resultado negativo, con las siguientes estadísticas estremecedoras: tasa de inflación para los últimos cuatro años, promedio anual, 23.2%; deuda pública externa de Chile, casi 200 dólares por habitante, es decir, la segunda del mundo; índice de desarrollo económico por chileno, en 1967 y 1968, negativo, bajo cero. Además la riqueza disponible por cada chileno era inferior en 1969 a la de 1966, y el desequilibrio entre la presión social y la escualidez de la economía se agudizaba. Todos estos hechos demostraban -según Tomic- “el agotamiento final del sistema capitalista y de las estructuras jurídico-políticas que le dan expresión en Chile” (Ibidem). La era demócratacristiana considerada por el mismo Tomic en 30 años se reducía así sólo al período de Frei Montalva.

Después de su recuperación, el Partido Socialista, en las décadas de los cincuenta y de los sesenta, enfrentó la lucha por el poder -en 1970- en el marco de una amplia alianza de izquierda. Era la culminación de la estrategia de Frente

de Trabajadores. No obstante, Raúl Ampuero, que había sido su creador originario, estaba fuera de sus filas, por la injusta expulsión de que fue objeto en 1966. Pero el sector que dirigía -la Unión Socialista Popular- apoyó a Salvador Allende tanto como candidato presidencial como en cuanto Presidente de la República. Históricamente, por una de esas extrañas paradojas, el proyecto político de Ampuero, forjado en las décadas anteriores, se cumplía con la victoria de Allende en las urnas, confirmada por el congreso pleno en 1970.

AUGE Y CAÍDA DEL MOVIMIENTO POPULAR

El Partido Socialista accedió con Allende al gobierno como culminación de un proceso democrático, inscrito en una acentuada lucha de clases. La década de los setenta marcó así el vórtice de la crisis del estado burgués. Durante ella se produjo, en efecto, el mayor ascenso del movimiento popular en el camino hacia el poder, pero la burguesía, apoyada en las fuerzas armadas, instauró la más brutal dictadura a partir del 11 de septiembre de 1973. En este último año se derrumbó una etapa en la vida política chilena. Son 50 años de avances democráticos, que se iniciaron con el ascenso de los sectores medios al gobierno en 1920, para compartir su conducción con la antigua clase dirigente, y culminaron con el ensayo de democracia social puesto en marcha en 1970. Pero, en esta etapa, las organizaciones políticas y sindicales de los trabajadores y las masas se sometieron a la institucionalización de sus luchas, según las reglas de la clase dominante.

Esta crisis social y política es, por eso, la más grande en el siglo XX (comparable a la de 1891, en el siglo XIX), a la vez que la mayor derrota del pueblo chileno, lo que la constituye una fuente de enseñanza para las luchas del presente y, sobre todo, del porvenir. Por ahora sólo es posible hacer una referencia a ciertos problemas en torno a los cuales han girado principalmente las críticas y autocríticas en la izquierda. No me referiré a las deformaciones históricas de la derecha civil y militar. Sin embargo, es preciso recordar antes que las revoluciones son procesos colectivos impulsados por agudas luchas de clases que comprometen la acción de millones de seres humanos tras la conquista del poder. El éxito o el fracaso de estos procesos no dependen, por lo tanto, de la voluntad de un solo hombre, sino de la conciencia y decisión de los pueblos y sus vanguardias, en condiciones objetivas revolucionarias.

La izquierda no eligió entre varias opciones el camino de las urnas en 1970, sino que éste fue el único abierto y posible entonces. Desde su lugar de oposición al sistema capitalista dominante, con una fuerza electoral relativa, una clase trabajadora sin preparación para la lucha armada, con las ramas de las

fuerzas militares dominadas por la burguesía derechista, no podía hacer otra cosa que iniciar (como decía el programa de la Unidad Popular) el proceso revolucionario conforme a la institucionalidad vigente. De otra parte, tampoco la izquierda había vivido una experiencia como esa para desechar el camino, sin intentarlo, con la sola enseñanza extraída de la lucha revolucionaria en otras latitudes, con distintos resultados, porque la vía no asegura el éxito por sí sola. Cada pueblo debe abrir su propio camino.

No obstante, los hechos históricos -ya no los prejuicios teóricos- comprobaron que los instrumentos institucionales y el ordenamiento jurídico burgués no permiten dicho tránsito por la resistencia de la clase dominante. Ellos tienen por objeto la defensa, por todos los medios, del sistema capitalista. El gobierno popular, por consiguiente, al someter el desarrollo de su programa a dicha legalidad, se autolimitó y con ello selló su propia sentencia de muerte. A los que todavía sueñan con una revolución desarmada, es preciso recordarles que, a lo menos, la contrarrevolución nunca es pacífica ni legal.

EL GOLPE DE ESTADO DE 1973

Raúl Ampuero analizó lúcidamente este proceso en el ensayo titulado **Militares y políticos en la crisis chilena del 73**, de gran penetración histórica y agudeza crítica, que iba más allá de los comentarios ideológicos en que se desarrollaban hasta entonces las controversias entre la derecha y la izquierda. Su punto de partida consistía en superar los factores propiamente militares del proceso para considerar además, otros elementos -políticos, económicos, institucionales- que contribuyeron a la generación de la crisis y su brutal desenlace. En el mismo sentido, se propuso rectificar algunos juicios "apresurados y a veces temerarios" sobre las posibilidades de evitar el derrumbe y dirigirse hacia una alternativa distinta. Como ya se mencionó anteriormente, los hechos demostraron -por encima de las consideraciones teóricas- que la Democracia Cristiana, como expresión del capitalismo, exigía la rendición incondicional del gobierno, al tiempo que la Unidad Popular no dominaba el problema militar.

Con estos elementos de juicio, él sitúa la crisis en un esquema mundial y en el marco del desarrollo de la lucha revolucionaria en un período más largo que en los tres primeros años de la década de los setenta. "Nada sería más equivocado que analizar el golpe como un episodio inusitado o como una simple respuesta coyuntural y desesperada del imperialismo y de las clases dominantes locales frente al decidido asalto a sus reductos de clase. Lejos de eso, el levantamiento militar es la culminación, de un proceso largo y contradictorio, el momento de máxima tensión en un enfrentamiento social que no dejaba espacio al

compromiso y debía terminar con la victoria del socialismo o –como ocurrió– de la contrarrevolución burguesa.” En un proceso de avance del movimiento popular, la izquierda conquistó al gobierno, con Salvador Allende, en medio de una crisis, que no tenía un carácter sólo local, sino que golpeaba en distintas partes del mundo, donde las fuerzas de avanzada chocaban con los “centros de mando” de la reacción y el imperialismo.

La primera cuestión que analiza es la ilusión de la alianza civil, es decir, la hipótesis de una alianza de centro-izquierda que comprendiera a la Unidad Popular y a la Democracia Cristiana, que habría resuelto la estabilidad del gobierno. “En la época de la contienda presidencial (1970), entonces, las distancias entre ambas concepciones hacían imposible cualquier convergencia estratégica. Lo reconoce inclusive Luis Corvalán, secretario del Partido Comunista, en su informe al pleno del comité central (agosto de 1977), cuando define al gobierno demócratacristiano como ‘una experiencia reformista que buscaba, con métodos y lenguaje nuevos, salvar al capitalismo en Chile e impedir la revolución popular y el socialismo’, en circunstancias que toda la historia de los últimos años constituía una prueba abrumadora de que las masas trabajadoras disponían de la voluntad y de la madurez necesarias para proponerse esa ruta’.

La segunda hipótesis mencionada es la neutralización estéril de los militares, que es más difícil de refutar. “Si los dirigentes chilenos tenían la convicción o el fundado temor de que una revuelta militar era inminente, parece legítimo preguntarse por qué no hicieron nada verdaderamente eficaz para conjurarla. Ciertamente, no se trataba de constituir una fuerza armada popular, capaz de sobreponerse al ejército profesional en combate abierto.” Las condiciones del momento parecen concordantes con la carencia de una reacción de fondo. Por una parte, no había tiempo ni recursos materiales para una empresa como esa y, por la otra, tampoco podía realizarse clandestinamente, porque habría sido incompatible con la línea central del gobierno popular, que asentaba su legitimidad en el respeto a las normas jurídicas vigentes. La oposición reaccionaria, en cambio, sí podía conspirar abiertamente, con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Es en este punto, precisamente, donde las críticas son más profundas.

Esta experiencia chilena representa el caso más dramático de una revolución desarmada y, por lo mismo, condenada al fracaso. Ampuero la define claramente “... ya nadie desmiente –afirma–, que la dirección oficial de la izquierda demostró una impreparación inexcusable y una penosa carencia de ideas frente a la cuestión militar, pese a la significación que se le reconocía verbalmente al problema. En ningún plano se anunció una verdadera política: ni en el de la defensa nacional, entendida como seguridad física del país, ni en el de la renovación institucional de las fuerzas armadas, ni por último en el diseño de una

acción antisubversiva, orientada a frustrar la eventualidad de una rebelión castrense.” (Ibidem). Esta carencia de una política nacional de defensa fue parcialmente compensada por una diplomacia dinámica y abierta, impulsada por el Presidente Allende, por encima de las fronteras ideológicas.

Cuatro años después del golpe militar, el 18 de septiembre de 1977, Raúl Ampuero emitió un informe a la Comisión de Estudios de la Nueva Institucionalidad de la Unidad Popular, en Roma, sobre **Proposiciones para una reorganización antifascista de las fuerzas armadas**. Este proceso supone devolver a éstas su carácter nacional, a lo menos en tres aspectos fundamentales. En el plano de la doctrina, desahuciando la noción estratégica de la defensa hemisférica como misión esencial de las fuerzas armadas, para lo cual deben abrogarse todos los tratados, convenios y compromisos que la consagran y establecerse que ellas sólo tienen deberes de lealtad con el Estado chileno, con sus autoridades democráticas y con su pueblo. En el plano de aprovisionamiento de armas y equipos, debe buscar fuentes múltiples y alternativas de elementos bélicos, comenzando por producir en el país aquellos compatibles con nuestros niveles tecnológicos. En el plano de la formación profesional, debe recurrir a países con experiencia moderna de carácter militar, desprovistos de ambiciones hegemónicas y que tengan con Chile algunas condiciones comunes.

El objetivo anterior está relacionado con la necesidad de conferir a las fuerzas armadas un carácter democrático, restándoles su condición de congregación cerrada para convertirlas en un verdadero servicio del Estado y no, como ahora se proyectan, “un Estado dentro del Estado”, con olvido de sus funciones específicas y limitadas para transformarlas en un sistema polivalente, apto para dirigir, controlar o sustituir -con medios propios y paralelos- los servicios vitales del Estado. Para corregir esta tendencia de las fuerzas armadas e integrarlas al conjunto del país debe fundirse el “aparato armado de la nación en el tejido de la sociedad y asignándole únicamente aquellas tareas específicas inseparables de su naturaleza militar.” En otras palabras -dice Ampuero- “la democratización de las fuerzas armadas consiste en hacerlas permeables a los problemas del país, en estimular la convivencia de ciudadanos y soldados, en suprimir todo lo que signifique privilegios o fueros especiales para los hombres de armas, que no sean requisitos del servicio, así como las limitaciones a sus derechos que no obedezcan a idénticas razones.”

Las fuerzas armadas en el sistema de defensa nacional es, por último, un aspecto fundamental que es necesario revisar. Las premisas que justifican una nueva estructura del dispositivo de defensa se pueden resumir de la siguiente manera: a) la excepcional conformación geo-estratégica del país, b) las previsibles tensiones políticas con los estados contiguos, c) la necesidad de hacer

económicamente compatibles la protección de la soberanía y del territorio con un programa social de orientación popular, d) la necesidad de crear una fuerza alternativa de defensa para compensar el inevitable debilitamiento del sector militar profesional durante la dictadura.

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO

El Partido Socialista sufrió el mayor impacto por la acción represiva del golpe militar y la consiguiente dictadura. Miles de sus militantes y dirigentes fueron asesinados o arrastrados a las cárceles y campos de concentración, numerosas direcciones locales y regionales fueron exterminadas. Cinco miembros del Comité Central, un Diputado y un miembro del Comité Central de la FJS fueron también asesinados, 15 miembros del Comité Central del partido y 10 del Comité Central de la juventud, todos los Ministros y Subsecretarios y 13 parlamentarios fueron encarcelados. Numerosos dirigentes seccionales, regionales y nacionales, así como de frentes de masas se vieron obligados a exiliarse. Raúl Ampuero también fue detenido en septiembre de 1973 por una patrulla del ejército de Pinochet y conducido a la Escuela Militar, en donde permaneció hasta fines de diciembre del mismo año, incomunicado y sometido a tortura psicológica. Enseguida fue trasladado a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea por un breve tiempo y después, previo arresto domiciliario, es expulsado del país.

La represión de la dictadura redujo a escombros la organización del Partido Socialista en el interior del país, situación que repercutía en el exilio. No obstante estar desafiliado, Ampuero luchó por reconstruir al partido. Desde su arribo a Roma, se incorporó a la Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, presidida por el Senador italiano Lelio Basso, desde donde participó en campañas mundiales en defensa de los derechos humanos, como la reunión de Argel, convocada por la liga y el Tribunal Russel. Asimismo participó en seminarios sobre la cuestión militar en América Latina, convocados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero quizás lo más importante que hizo en el exilio, fueron las dos reuniones celebradas en Ariccia, en las proximidades de Roma, para tratar sobre **El socialismo chileno: historia y perspectivas**, y las posteriores, realizadas en Milán y Madrid.

La primera de estas reuniones se celebró en marzo de 1979 y partía de la base que, durante mucho tiempo, la izquierda chilena había tenido dos componentes sustantivos: el comunismo (PC) y el socialismo (PS). Después del golpe militar, el primero se estaba restableciendo unitariamente en tanto que el segundo, dividido en grupos y fracciones, sufría además una crisis ideológica. El seminario planteaba el fortalecimiento del socialismo para restaurar la alianza de la

izquierda y reconstituir el movimiento popular. El propio Ampuero señaló que el **área socialista**, que había comenzado siendo una hipótesis de trabajo, en el curso de la misma reunión pasó a ser una evidencia, constituyendo un comité de iniciativas destinado a preparar la fase siguiente. La segunda reunión de Ariccia, celebrada en enero de 1980, confirmó la existencia y actividades del comité de iniciativas, cuya misión principal consistía en encontrar formas de trabajo común que contribuyeran a la mayor unidad y desarrollo de la vertiente socialista. En ambas reuniones estuve presente.

Mientras el Partido Socialista se dividía en pedazos, en Chile y en el exilio, Ampuero continuaba su obra integradora, tanto desde el punto de vista ideológico como del punto de vista orgánico, promoviendo el diálogo y la discusión en Europa y la comunicación con los compañeros de América Latina y de Chile. Posteriormente se celebró una nueva reunión en Milán, donde se constituyó un comité de coordinación para Europa, en reemplazo del comité de enlace de Ariccia, como instancia destinada a integrar bajo una conducción común las dos líneas organizativas, la de los grupos partidarios y la de adhesiones libres e individuales. En Milán se había acordado también la elaboración de las bases políticas del Movimiento de Convergencia Socialista. En febrero de 1983 se dio un nuevo paso en la reunión de Madrid, con representación del interior de Chile, convocada esta vez por el comité de coordinación.

En su presentación introductoria en la reunión de Madrid, Ampuero planteó diversas tesis definitorias de la vertiente o área socialista, que hasta hoy gravitan en el movimiento popular. Primero, el campo de consenso, reivindicando la memoria histórica de las masas, que se identifica con el socialismo, “ese socialismo moderno que -al decir de Engels- no es sino el reflejo en la mente de los hombres de los conflictos objetivos y materiales que genera el capitalismo en crisis.”. Afirma su fidelidad a los principios. “Un socialismo -agrega- que las multitudes alcanzaron a tocar con las manos en los días de Allende y que -con todas sus convulsiones y errores- dio a los explotados y a los pobres la sensación de ser, por primera vez, hombres y ciudadanos.”. Segundo, la ubicación como una “alternativa política autónoma de la izquierda”. Tercero, rechaza el anticomunismo y sostiene que la convergencia socialista “se ha definido siempre como una fuerza integrante de la izquierda, atribuyéndole a ésta en su conjunto un papel protagónico en el futuro chileno”. Cuarto, autoidentificación del movimiento, mediante una carta-programa para la reconstrucción democrática.

De regreso en Chile, escribió en noviembre de 1988 un análisis titulado **Mensaje y vigencia de las tesis de Ariccia**, cuando ya habían transcurrido 10 años desde la primera reunión celebrada en ese lugar de Italia sobre **El socialismo chileno: historia y perspectivas**. En aquel análisis hizo un balance de la doble vertiente del movimiento popular -comunismo y socialismo-, sintetizando sus

principales discrepancias, señalando que la existencia de ellas “no fue obstáculo en el pasado para generar un cierto paralelismo político que en algunas épocas llevó a compromisos muy estrechos y en otros períodos a situaciones de crisis.”. Los acuerdos más sólidos -dice- generalmente se produjeron en las fases de reflujo del movimiento popular, pero no se logró la consistencia al asumir el gobierno en 1970.

En 1988, cuando Ampuero hizo el balance mencionado, el colapso del eje socialista-comunista ya se había consolidado, no sólo con el sector representado por Altamirano, sino también con el sector dirigido por Almeyda. Las discrepancias eran ostensibles en cuanto a la línea estratégica concreta para enfrentar a la dictadura en su etapa de extinción, tanto en las formas de lucha cuanto en la manera de encarar el plebiscito. Los nuevos entendimientos entre el PC y el sector socialista de Almeyda, que culminaron en la Izquierda Unida, demostraron una capacidad de decisión aún más precaria que la que había tenido la Unidad Popular en sus peores momentos.

UNIDAD SOCIALISTA, LA VIEJA DISCUSIÓN

Raúl Ampuero es uno de los tipos humanos que presentan una mayor coherencia en su pensamiento político, entre su juventud y su vejez. En esta última etapa de su vida conservó la fidelidad a los principios, en plena lucidez mental. Cuando otros se acomodan al curso de los acontecimientos, él tuvo el valor intelectual de actuar contra la corriente. En prueba de ello están sus escritos de los últimos años. En 1987, formuló algunos criterios generales de reorganización del Partido Socialista, en la perspectiva del área socialista que se venía diseñando desde 1979. “El rechazo de la fórmula ‘marxista-leninista’ como doctrina, según mis **Notas sobre la reconstrucción del PSCH** impone la necesidad de diseñar un tipo de organización que sustituya también las concepciones y las prácticas organizativas predominantes en los partidos comunistas formados bajo la tuición de la Tercera Internacional, cuyas características esenciales deben ser superadas.

Las orientaciones partidarias deben ser claras para compatibilizar la línea política con la disciplina. Se pronuncia en contra de las fracciones, que son las cristalizaciones de las corrientes. La formal aceptación de éstas, “sería el peor camino en la búsqueda de una síntesis intelectual y operativa que represente verdaderamente la mentalidad del partido.”. Con verdadera perspectiva, agrega: “Son muchos y muy potentes los agentes interesados en desvirtuar nuestra historia y, con ella, nuestro futuro, mediante la manipulación de grupos fraccionales. Precisa también el alcance que puede y debe tener el pluralismo en el interior

del partido. Como concepto relativo, permite estimular la libre discusión interna, “pero no significa que en el partido tienen cabida todas las posiciones.”. Cada partido -dice Ampuero- tiene fronteras culturales e ideológicas naturales, codificadas explícitamente en un conjunto de principios o diseñadas en el curso de su historia.

En 1989, cuando se aproximaba la unidad de los sectores principales del viejo partido, Ampuero planteó de nuevo las bases y condiciones de este reagrupamiento, bajo el título: “**¿Partido de que clase? ¿Qué clase de partido?**”. En este análisis contribuyó decisivamente a esclarecer la definición socialista del partido, rescatando el esquema teórico marxista emanado de su Declaración de Principios de 1933 y de la Fundamentación Teórica del Programa de 1947, “a menos que se busquen puras y simples posiciones de poder con la cobertura de un cínico pragmatismo. Más todavía. Abjurar de este compromiso intelectual, en nombre de una secularización del partido, significaría -dice- exponerlo a toda clase de contrabandos ideológicos y oportunismos políticos”. Es una afirmación categórica.

En esos momentos tuvo el coraje de rechazar la desviación del marxismo-leninismo, como escuela del pensamiento socialista, toda vez que ella no contribuye a esclarecer el contenido sustantivo de determinadas políticas. Por ignorancia de algunos y oportunismo de otros, la fórmula adoptada en la Conferencia Nacional de Organización de 1967 y ratificada después en el Congreso General Ordinario de Chillán del mismo año incorporó al Partido Socialista en la “corte de los milagros” del marxismo-leninismo, ingeniada por Stalin, y constituida, entre otros, por Mao, Polpot, Hodxa, Marchais y Ceasesco. Ampuero no tuvo responsabilidad en esta oscura definición porque ya había sido expulsado de este nuevo partido. En el documento aludido, rechaza igualmente el ingreso a la Internacional Socialista, en otra desviación, contraria a la anterior, que implica “una nueva elección de campo en el orden ideológico, del cual se mantuvo distante el socialismo chileno por más de medio siglo”.

La otra reflexión de Ampuero, en el instante de reconstrucción del Partido Socialista, se refiere al carácter de clase del partido. “Ni la circunstancia de participar en una empresa nacional de rescate de la democracia, en el más generoso sentido de las palabras, ni el compromiso de colaborar con el gobierno de transición que surgirá de los comicios de diciembre, exime a los socialistas de su responsabilidad como partido de los trabajadores. Es esta calidad la que justifica su presencia en nuestro escenario y condiciona su conducta. Concebir al partido reconstituido como interclasista, como simple partido de opinión, implicaría cancelar un rasgo esencial de su pasado.”. En seguida, refuta irónicamente la más desvergonzada negación de la lucha de clases de los oportunistas, afirmando que no se ha inventado esta contradicción social o sus proyecciones

en la sociedad contemporánea por una perversión especulativa. Cita a Marx, refutando una imputación de esta especie: “No me pertenece a mí ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases sociales en la sociedad moderna, ni de haber descubierto la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, historiadores burgueses habían expuesto la evolución histórica de esta lucha de clases y economistas burgueses habían expuesto la anatomía económica de las clases.”

El 2 de mayo de 1996 Raúl Ampuero se dirigió por última vez a su partido a través de la **Carta al XXV Congreso General del Partido Socialista**. Tenía entonces 78 años y estaba sumamente enfermo por una afección incurable y, por lo tanto, mortal, a tal punto que su vida se extinguió dos meses después, el 11 de julio de ese mismo año. Este documento tiene por consiguiente el carácter de testamento político. No obstante estar ausente de toda función directiva - como él mismo lo reconoce- no puede excusarse de enunciar algunos juicios, derivados de su extensa experiencia de dirigente y como militante en un tiempo crucial del partido. “Por más de medio siglo el Partido Socialista ha sostenido en el escenario político chileno la presencia de una poderosa corriente inspirada en los valores de la justicia social y de la libertad y en los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, generando un cuerpo de ideas y comportamientos que le conceden una fuerte identidad histórica.”. Esta es una herencia que no puede quedar yacente, sin que nadie la reclame. Por el contrario, un partido que se proclame socialista no podrá nunca formular un nuevo horizonte teórico en el cual enmarcar su programa sin asumir plenamente esa rica tradición para proyectarla en el futuro, con las innovaciones que sean razonables. Sólo así recuperará su vigencia en las condiciones actuales y conquistará credibilidad entre los trabajadores. Es su primera reflexión.

En seguida remarca que el carácter socialista del partido lo convierte en clara alternativa al capitalismo. La historia de este sistema demuestra que, “a lo largo de dos siglos ha servido de soporte a una estructura social caracterizada por la explotación del trabajo humano en las naciones del centro del sistema y el saqueo de sus materias primas y recursos naturales en los pueblos de la periferia del mundo”. Esta es la historia desde el punto de vista de los explotados. En la hora actual -agrega Ampuero- “la globalización de la economía y de otros aspectos de la vida moderna, sin ser un fenómeno absolutamente nuevo, ha acentuado el poder político de las empresas transnacionales por encima de las fronteras, debilitando severamente el rol de los estados nacionales y otorgando al capital financiero una absoluta discrecionalidad operativa”.

Ampuero, en una mezcla de penetración psicológica e ironía, enfrenta en su carta al XXV congreso del Partido Socialista la vieja treta capitalista. “Algunos de nuestros intelectuales han acogido dócilmente la tesis de la muerte de las ideologías, a comenzar por la que sirvió de constante marco a las postulaciones del

socialismo chileno. Sobre esta premisa se fundamentó el llamado a construir un partido 'pluralista', de 'ciudadanos', cruzado de tendencias o fracciones, donde el pragmatismo sería la fórmula rectora de la acción, inspirada a su vez en un conjunto de 'ideales' (o valores) genéricos y abstractos, sin apoyo en la vida real. Con este rumbo el partido derivaría fatalmente en un club de debates o en un ente benéfico, a mitad de camino entre la Sociedad Fabiana y el Ejército de Salvación." Una previsión cumplida: exactamente lo que sucedió en el XXV Congreso General.

Consciente que su voz no ha sido escuchada en el nuevo partido, que conserva sólo el nombre del viejo Partido Socialista, termina su carta con otra embestida contra el capitalismo.". Resulta evidente que el neoliberalismo -cobertura ideológica de esta fase del capitalismo- ha generado los niveles más altos de desempleo en los países industrializados, junto con justificar la virtual demolición de los servicios sociales, mientras en los países del Tercer Mundo, presionados por la competencia en un mercado casi sin fronteras, la cesantía y el envejecimiento de los salarios constituyen un efecto inevitable de las tesis económicas que asignan una consideración casi teológica al mercado. Paralelamente al saqueo de sus materias primas y recursos naturales, acompañado con la desvalorización de la fuerza de trabajo, las burguesías -nativas y extranjeras- llevan adelante una despiadada campaña contra los sindicatos."

Este patético llamado, según versiones de prensa, no fue considerado en el "congreso ideológico", sino enviado al archivo. Raúl Ampuero no luchó durante su vida en vano, porque su legado intelectual y su trayectoria política se proyectan en la memoria colectiva, tanto de los militantes del Partido Socialista como del conjunto de la izquierda.

FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA FUERZA DIRIGENTE

Prólogo de Jaime Ahumada Pacheco
Cientista Político y ex miembro del
Comité Central del Partido Socialista

INTRODUCCIÓN

Sin dudas, que la vida de Ampuero está profundamente ligada al desarrollo de la fuerza dirigente del socialismo chileno y a la inserción de éste en el acontecer del país, la región latinoamericana e inclusive en la compleja dialéctica del movimiento democrático y revolucionario mundial.

Resulta relevante la forma como la hegemonía dirigente conformada alrededor de Raúl Ampuero, en el período comprendido entre 1946 y 1967, logra fundamentar una política de poder, un proyecto de sociedad, una línea internacional y una concepción de partido.

Estos grandes enunciados que marcaron época y fueron decisivos para el posterior triunfo de la izquierda en 1970, se concretaron en: **la Política de Frente de Trabajadores**, que posiciona al proletariado en la conducción de la izquierda, **el Programa de 1947**, que fundamenta la **República Democrática de Trabajadores**, la línea internacional **Independiente y autónoma**, que le da dimensiones latinoamericana y mundial a la estrategia impulsada por el partido de unidad de todos los movimientos, partidos y países que luchan por el socialismo a nivel planetario, la construcción de un tipo de partido que, en los hechos, implicaba la alianza de los sectores más avanzados del pueblo con los sectores medios e intelectuales.

Sería equívoco afirmar que Ampuero elaboró una teoría acabada del socialismo chileno, pero igualmente equívoco sería desconocer o silenciar su compromiso en el desarrollo de una posición partidaria original e independiente, dentro del marxismo y, al mismo tiempo, colaborar activamente en la conformación de una fuerza dirigente.

En este intento, que marca a las genuinas posiciones socialistas, resalta su capacidad teórica y política para articular las particularidades nacionales con los distintos escenarios de orden latinoamericano y mundial.

Poseedor de una vasta cultura marxista, creadora y crítica, supo unir los conceptos de clase social y lucha de clases con los de Estado y revolución y explicar cómo éstos influían en lo nacional e internacional, en función de la correlación de fuerzas, las especificidades de cada situación y el período histórico concreto que se vivía.

Partiendo de un anclaje que aplica las tesis marxistas a las particularidades de una situación concreta, especialmente en Chile y América Latina, penetra en los rasgos de identidad y carácter del partido, en la elaboración de su línea estratégica, las vías para llegar al socialismo, la autonomía ideológica y política en sus relaciones con los centros, los llamados campos o bloques de posicionamiento de las grandes potencias y las alianzas y los partidos que las sustentan, la paz y la guerra; el latinoamericanismo, el internacionalismo, el antiimperialismo y la integración democrática del movimiento revolucionario mundial.

En todos estos análisis, se perfilan evidentes rasgos de originalidad y apertura política e ideológica. Considera que el partido no es una secta ni el marxismo es una religión, sino que son creaciones del hombre y, por lo tanto, deben responder a sus intereses y demandas, a sus formas de organizarse y de ver la vida en una realidad determinada.

Ampuero piensa que la elaboración de la estrategia tiene tiempos, velocidades y dirección y se construye con el pueblo, de cara al país y tomando en cuenta sus inserciones regionales y mundiales, ya que no existe una sola vía para llegar al socialismo. Esta es una empresa humana y de gran complejidad y no está sujeta a un mismo ritmo, programa o dirección en todas las latitudes, de modo que más de algún pueblo que emprenda su camino de liberación, sin ceñirse a las sagradas pautas de la ortodoxia, puede alcanzar estadios superiores de praxis revolucionaria, que otros que, siguiendo al pie de la letra las "escrituras" lo han intentado o incluso coronado.

En una época de auge de la política soviética de "país y partido guía", Ampuero plantea que no existe un solo centro ideológico y político, porque cada partido y país determina el desarrollo de su estrategia de acuerdo a sus propias realidades, ya que ni la antigüedad de la experiencia, ni la magnitud geográfica del país, ni el tamaño de su población, ni su poderío bélico o material, ni menos la aristocracia de los partidos guía o de los monopolios de clase, constituyen factores suficientes para asignar la dirección del movimiento socialista a una nación o partido determinado.

Polemizando con fuerzas que pretendían trasladar mecánicamente el modelo soviético a las particularidades del país, sostiene que para un marxista consecuente el mundo no está dividido en campos o áreas geográficamente determinadas o responde al mando de potencias o liderazgos que dicen estar en posesión de verdades cuasi inmanentes. La historia de todas las sociedades que han

existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, más nítida y esquemática en algunas regiones y más primaria y compleja en otras, pero constituyendo siempre un factor decisivo de la pugna histórica.

Como se sabe, el socialismo no es una gracia del cielo, ni una categoría abstracta, es una realidad, es un proceso donde el establecimiento de relaciones socialistas auténticas y avanzadas entre los hombres, está indisolublemente ligado al avance de la base material y de la conciencia político-moral de la clase trabajadora, en función de las condiciones específicas, estado de avance del proceso revolucionario y la capacidad de dirección y acción del o los partidos.

En el período de mayor influencia dirigente, se sumerge en la teoría y práctica de un camino nuevo y autónomo para el partido.

En los años de 1947 hasta 1957, transita en medio de las complejidades y alineamientos de la posguerra, levantando las banderas del nacionalismo revolucionario y la fuerte crítica desde la izquierda al capitalismo y al estalinismo que, tratando de imponer sus estrategias expansionistas y de enfrentamiento bélico, pretendían la sumisión de pueblos, países y partidos a la lógica guerrillera y de gran potencia de sus respectivos bloques político-militares.

Con posterioridad; entre 1957 y 1967, no solamente se juega por el entendimiento socialista-comunista en el Frente de Acción Popular y la unidad del partido, ya muy permeado por la estrategia de Frente de Trabajadores y la hegemonía popular de la izquierda, sino que junto a la Federación Juvenil Socialista es uno de los principales impulsores de la política internacional independiente, no alineada, de apoyo a la revolución latinoamericana y de unidad del movimiento revolucionario mundial en los marcos de los principios marxistas y del desarrollo de la democracia socialista.

AMPUERO Y ALLENDE EN LA HISTORIA DEL PARTIDO SOCIALISTA

Ampuero es junto a Allende, uno de los más importantes líderes del socialismo chileno. Ambos se proyectan hacia el presente con sus propias identidades y estilos. Tanto en la historia del partido como del movimiento popular, sus vidas se cruzan y constituyen ejemplos de liderazgo consecuente, proyección histórica, honradez a toda prueba y decisión revolucionaria.

Ampuero, resalta como teórico, organizador y dirigente del partido. Allende es el indiscutible líder de masas y articulador del movimiento popular.

La firmeza en la expresión de los principios, en la dirección estratégica y en la creación de una política de poder son las más relevantes cualidades de Ampuero.

Su carisma de conductor de masas, su lealtad al pueblo y a los trabajadores y su protagonismo histórico en la praxis de la vía chilena al socialismo, distinguen la vida política de Allende.

Juntos, constituyen la expresión más acabada de las grandes matrices históricas del socialismo en Chile que arrancan de una visión original para aplicar el marxismo a las particularidades nacionales, construir un partido de los trabajadores y desarrollar un movimiento popular, democrático y revolucionario de gran autonomía ideológica, política y orgánica, portadores singulares del cuestionamiento radical al desarrollo capitalista y, a la vez, impulsores de la construcción del socialismo en los escenarios del país y de la región latinoamericana.

En el entorno de ambos líderes, se desarrolla, también, una notable generación de dirigentes cuyo enlace histórico con los fundadores es la lúcida figura intelectual de Eugenio González.

En esta perspectiva, y comprendiendo a fondo la relación dialéctica de personalidades y dimensiones de la política que conduce a la histórica victoria popular de 1970, destaca el rol jugado por Ampuero en el partido eje de esta política. No en vano él es el hombre que recupera al socialismo de sus crisis de los años '40, que le abre decididamente paso a los procesos unitarios del partido y de la izquierda, que consolida la autonomía ideológica y política de la organización partidaria en todo el país, le otorga identidad y definición internacional, que cohabita en un complejo juego de contrarios y de hegemonía política con Salvador Allende y que contribuye poderosamente en la reconstrucción de una fuerza socialista, independiente, plural y alternativa de poder y sociedad, fundamentada en la unidad de la izquierda, en el singular entendimiento con los comunistas y con otros partidos y fuerzas populares.

Si bien Ampuero es el que posiciona al partido como candidato al poder, la destreza táctica de Allende es el factor que posibilita la construcción de un gobierno popular y que proyecta la vía chilena al socialismo como uno de los más singulares caminos para avanzar hacia la nueva sociedad. La historia y las circunstancias conspiraron para que estas tremendas personalidades no pudieran unirse en un ejercicio conjunto de un proyecto de país que ellos habían contribuido tanto a elaborar.

SOCIALISMO Y HEGEMONÍAS PARTIDARIAS

En el Partido Socialista de Chile, organización política de gran influencia en el desarrollo del país desde los años 30 del siglo recién pasado, se incubaron hegemonías políticas decisivas para entender sus formas de análisis, originales y creadoras de la realidad chilena, latinoamericana y mundial.

Tanto Marmaduke Grove como Salvador Allende y Raúl Ampuero, agruparon alrededor de sus concepciones de partido, estrategias, políticas de alianzas,

proyectos de país y de inserciones internacionales, a grupos dirigentes internos y externos que los apoyaron en sus respectivos liderazgos.

En este sentido, en el momento mismo en que surge la idea de crear el partido, se posicionan los elementos que desarrollaran su fuerte personalidad nacional e internacional.

El socialismo chileno nace de una revolución que tuvo como protagonista a un movimiento de masas, de trabajadores y grupos medios con apoyo activo de un sector progresista de las fuerza armadas, cuya expresión más contundente es el Comodoro del Aire, Marmaduke Grove Vallejos.

La organización asume como fundamento ideológico y político el socialismo marxista, enriquecido con la práctica social y rectificado por el devenir histórico. Se constituye a la vez, en los hechos, contrariando todos los dogmas establecidos de la época, como partido socialista marxista y movimiento democrático-revolucionario, en base a la unión de los trabajadores manuales e intelectuales, proletariado y pequeña burguesía, para lograr la constitución de una república y un gobierno democrático, hegemonizado por los trabajadores, que posibilite el surgimiento de una federación de repúblicas socialistas de América Latina.

Su adscripción original al marxismo, en un gran esfuerzo de síntesis entre las particularidades nacionales y las exigencias de la vida internacional, rechazando las rigideces dogmáticas del comunismo estalinista y del pragmatismo extremo de la social democracia, devenida en la izquierda del sistema capitalista, articulan su internacionalismo fundamentado en la unidad e integración latinoamericana, lucha contra los imperialismo y expansionismos y su inserción en el amplio movimiento mundial por el socialismo y la democracia.

En base a éstos originales lineamientos y de su evidente proyección estratégica, es posible explicarse su carácter de movimiento-partido que permitió que surgieran, en los años 30 y 40, primero, el grovismo y posteriormente, en los años 50, 60 y 70, el allendismo y el ampuerismo.

El grovismo de los orígenes del partido, no fue otra cosa que la articulación de un singular liderazgo nacional con la construcción de un partido que debía expresar creadoramente al movimiento que sustentaba al líder y que se proyectaba para aplicar el marxismo en las condiciones específicas de Chile y para Chile, sin sujeción a centro internacional alguno.

Resaltan en el período de desarrollo del grovismo, la fundación del partido, el reagrupamiento del movimiento popular, la formación del Block de Izquierda y del Frente Popular, que posibilitan la primera experiencia de gobierno del socialismo y la incorporación a los cuadros de dirección de Allende, como Diputado y Ministro y de Ampuero, como Secretario General de la Federación Juvenil Socialista y más tarde como Secretario Regional de Santiago.

La fortaleza política y electoral del PS y las candidaturas presidenciales de

Grove y Schnake, que intentaron posicionar a los trabajadores y sus partidos en la conducción de la alianza con los sectores medios, chocaron con las pretensiones de poder burocrático del Partido Radical que, paradójicamente, fueron apoyadas por los comunistas, cumpliendo las consignas de la Internacional, que estrenaba en Chile su estrategia de colaboración de clases y de las alianzas con la mal llamada burguesía progresista.

El allendismo es expresivo de otro momento de la lucha de clases y de las contradicciones en el seno del pueblo. El movimiento popular ha sobrepasado al partido y lo que podría denominarse el diálogo entre Ampuero y Allende y sus hegemonías partidarias, se va transformando en un juego de los contrarios. Si bien el allendismo convive contradictoriamente con el ampuerismo, no puede explicarse si no es en la dialéctica de este diálogo antagónico con el líder juvenil que lo derrota en el XI Primer Congreso, celebrado en Concepción, en octubre de 1946.

El partido termina por agotar su frustrante experiencia en el frente popular y corroído por el ministerialismo, los oportunismos y corrupciones, pasa de la política de Tercer Frente y la colaboración con el interinato presidencial de Duhalde a una estrategia de reposicionamiento ideológico y político que encabeza Raúl Ampuero. Éste, que tiene que superar escisiones, el ataque constante de la derecha y del centrismo e incluso el hostigamiento del Partido Comunista desde las espurias posiciones de poder con González Videla, celebra su histórica Conferencia Nacional de Programa, en noviembre de 1947, donde se aprueba el documento Por una Democracia de Trabajadores, fruto en gran medida de la inteligencia y lucidez de Eugenio González y de la dirección surgida en Concepción, en 1946. El programa redefine las bases teóricas y programáticas del socialismo a la luz de las realidades que surgen de la segunda guerra mundial, de la primera experiencia de gobierno del partido y de las líneas fundamentales que se abren en el escenario nacional e internacional.

No obstante, que la derrota interna de Allende lo desperfilaba en el seno del partido, esta circunstancia lo convirtió en referente, directo o indirecto, de las oposiciones internas de 1948 a 1950, aunque sin aceptar la terca renuencia de los viejos equipos dirigentes y de la burocracia sindical a la política aprobada en Concepción y en la Conferencia Nacional de Programa.

Sin embargo, el audaz e inesperado apoyo del socialismo mayoritario (PSP) a la candidatura presidencial del General Carlos Ibáñez del Campo, en 1950, provocó la salida del partido de Allende y su grupo más cercano que, incorporándose a la minoría existente, asume el control de esa organización.

En 1952, la minoría socialista, junto al Partido Comunista, en un paso táctico que no da los resultados esperados, conforma, primero, el Frente del Pueblo y proclama, después, la candidatura a la Presidencia de Chile de Salvador Allen-

de, que solamente obtuvo 50 mil votos frente a los 450 mil sufragios del General Ibáñez.

Sin lugar a dudas que tanto la fría decisión de los socialistas populares de incorporarse al inmenso caudal de masas impulsadas por la figura potencialmente antioligárquica de Ibáñez, como la proclamación de Allende, en las presidenciales de 1952, que hace la minoría socialista, en una también impensada alianza con el Partido Comunista en el Frente del Pueblo, constituyen pasos de gran audacia de políticas que buscan una potente inserción de masas y de reconstrucción de la izquierda y del movimiento popular; además, consciente o inconscientemente, pareciera que ambas políticas buscaban la instalación de un liderazgo que abriera nuevas perspectivas, en un escenario de auge y movilizaciones populares.

Ahora bien, si en los años 30, el inmenso apoyo de masas que concitara la figura de Grove y el surgimiento del socialismo, provocó el rechazo de los comunistas, que no aceptaban rivales en la eventual conducción de las alianzas y que además, apoyaba sin condiciones el sectarismo estalinista soviético, este mismo partido, en los escenarios de los años 50, debilitado por la aplicación de la represiva Ley de Defensa de la Democracia y el discurso de Jruschov, denunciando el culto a la personalidad y los crímenes de Stalin, le pidió disculpa a los socialistas y demás partidos de la izquierda por sus actitudes antiunitarias y seguidistas, cerró filas en el Frente de Acción Popular y apoyó al candidato socialista Salvador Allende, en 1958.

De alguna forma, para que esto ocurriera, fue necesario que Ampuero y el Socialismo dieran fe del viraje comunista a nivel internacional y su nueva y abierta actitud para llevar adelante la política de alianzas.

Se partió del hecho de que socialista y comunistas habían agotado, cada uno en su oportunidad, la experiencia de gobernar en colaboración con partidos centristas, de clara filiación burguesa.

En algún momento, ambos partidos pensaron que la hegemonía sobre las masas que no habían podido dirimir en una larga rivalidad alentada en la base, podría definirse desde las alturas del poder, especialmente en los gobiernos de Gabriel González Videla y de Carlos Ibáñez del Campo. Para lograrlo, separadamente, habían desplegado tácticas diferentes, pero unos y otros habían fracasado.

Luis Corvalán, Secretario General del Partido Comunista, reconoció con honestidad que socialistas y comunistas habían disputado muchas veces la dirección del movimiento general de los trabajadores, tratando de desalojarse recíprocamente. A su vez, Ampuero, desde la Secretaría General del Partido Socialista, fue claro al decir: que la división del movimiento popular, sólo le serviría a los enemigos del pueblo y de los trabajadores.

LA CRISTALIZACIÓN DEL CAMINO AUTÓNOMO Y DE LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO

Entre 1946 y 1967 se dimensiona una compleja, rica y creadora praxis en el socialismo chileno. La complejidad está dada por las diversas experiencias que se suceden en el gobierno del país y los quebrantamientos internos del socialismo que desarrollan corrientes oportunistas, de derecha y de izquierda, que repercutirán en la experiencia revolucionaria de 1970-1973.

En el período, se agota la experiencia reformista de los presidentes radicales.

El terremoto ibañista, en 1952, si bien produce réplicas de modernización político-institucional y de derogación de leyes represivas, resulta incapaz para avanzar hacia la reforma agraria, la sindicalización campesina, la nacionalización de las riquezas básicas o el desahucio del pacto militar con los Estados Unidos.

Jorge Alessandri (1958-1964) posiciona una suerte de gobierno de gerentes o de una tecnoburocracia que intenta modernizaciones en el aparato del Estado y en sus relaciones con el sector privado, pero que termina entrampado en el juego de la clase política más tradicional y del empresariado conservador, postergando las crecientes demandas que se venían articulando desde el Frente Popular.

En fin, hacia 1964 se instala en el gobierno Eduardo Frei Montalva que, con su revolución en libertad y el Partido Demócrata Cristiano, del comunitarismo y la promoción popular, propone al país un amplio programa de reformas en la agricultura, industria, las riquezas básicas y las políticas sociales.

Esta es una época de ensayos y cambios, donde el país busca, con creciente presencia popular e incorporación de nuevos contingentes sociales, un profundo cambio en el desarrollo económico y en su sistema político.

Los quebrantamientos internos del socialismo, especialmente el de 1967, limitaron su potencial ideológico, político y orgánico que se estaba desarrollando desde 1946, ya sea por las exigencias de un proceso unitario (1957), por muchos conceptos precipitado, y obligado más por el desastre electoral que por un debate transparente de las divergencias y convergencias o, también, por la validez creciente de la opción presidencial socialista y de la izquierda que fue transformando al partido en un gran afluente orgánico de diversas corrientes ideológicas y en un virtual campo de maniobras de los oportunismos de derecha e izquierda.

La rica y creadora praxis del socialismo, se instala con la forma democrática de resolución de los conflictos de 1948 y de 1950 y por el desarrollo de la política nacional e internacional liderada por Ampuero y que lleva a la victoria, con su estilo y capacidad táctica, Salvador Allende, en 1970.

Ese proceso de creación teórica y de instalación en el escenario chileno de una forma de hacer política de vastos alcances estratégicos, consecuencia teórica y práctica así como de solventes dimensiones éticas, contrasta y supera las complejidades de los quebrantamientos internos, le da resolución democrática al desplazamiento de la hegemonía grovista por el ampuerismo emergente y permite la difícil y dialéctica cohabitación de las hegemonías de Allende y Ampuero, dentro de los principios matrices del socialismo

Ambas hegemonías partidarias, surgen del enfrentamiento del Congreso de Concepción (1946), se desarrollan buscando espacios propios en las experiencias del Partido Socialista Popular (mayoría) y del Partido Socialista de Chile (minoría), establecen un virtual pacto de coexistencia y división del trabajo interno, entre 1957 y 1965, para, posteriormente, volver a enfrentarse en el Congreso de Linares (1965), y el Pleno del Comité Central, de junio de 1967.

Ampuero derrota a Allende en Concepción, en 1946, aún cuando ambos estaban por desplazar al grovismo agotado de las instancias de dirección del partido. Sin embargo, por esas jugarretas de la historia, Allende acepta representar, en ese Congreso, a los sectores más marcados por la frustrante experiencia del Frente Popular y de los gobiernos radicales.

Allende derrota a Ampuero en Santiago, en 1967, estando ambos de acuerdo que se incubaban, en el partido, políticas oportunistas y extremismos revolucionarios que ponían en jaque las bases estratégicas delineadas desde el Programa de 1947, el desarrollo de una vía político-electoral para conquistar el gobierno y la autonomía e independencia en el tratamiento de las relaciones internacionales que han caracterizado al socialismo chileno.

Simplemente no pudieron, ni Allende ni Ampuero, profundizar las líneas que habían permitido la cohabitación de sus hegemonías desde la unidad de 1957. Ambos liderazgos fueron sobrepasados por las rigideces de sus entornos y su incapacidad para entender que se necesitaban para coronar con éxito el camino al socialismo que ambos habían forjado.

Si se mira con perspectiva histórica, tanto lo ocurrido en Concepción, en 1946, como en Santiago, en 1967, son momentos políticos decisivos para entender el período 1967-1973, que dejan profundas lecciones para un análisis autocrítico del desarrollo del Partido Socialista durante la dictadura militar y la misma transición hacia la democracia de estos años.

Los veinte años de Ampuero entregan tres momentos de creación, intensa praxis y proyección histórica del socialismo chileno:

- a) La elaboración del Programa de 1947, **Por una Democracia de Trabajadores**, que fundamenta la autonomía y las originalidades del Partido Socialista en su línea nacional e internacional;

- b) La teoría y práctica de su **Política Internacional Independiente**, especialmente a partir de 1957; y,
- c) La cristalización de la **Vía Chilena al Socialismo**, dimensionada de forma magistral en los consensos y disensos que protagonizaron los liderazgos de Allende y Ampuero, las figuras más sobresalientes del socialismo en las últimas cinco décadas.

Más allá o más acá de las divergencias de la época, el programa democrático de la República Socialista de 1932, "**De acción económica inmediata**", se continúa y se profundiza en el Programa de 1947, **Por una Democracia de Trabajadores**, y éste es el antecedente y la base del **Programa del Gobierno Popular de Salvador Allende**.

La revolución y la democracia, el pueblo movilizado y la construcción de historia y de un país en la dirección de una democracia activa y de un socialismo autónomo, nacional y latinoamericano, signan al partido en el desarrollo de su historia y en su entronque con el desarrollo del país.

El Partido Socialista, desde sus orígenes, considera a la democracia y al socialismo como un proceso ininterrumpido donde la mente liberadora del hombre, su esfuerzo y su trabajo, la producción, la creación y entrega solidaria y la capacidad de convencer, trabajar con las ideas y las utopías desde la sociedad y el estado, se pluralizan y socializan como condición de igualdad de oportunidades, de libertades, y de crecimiento de los unos y de todos.

En resumen: Marmaduque Grove, Eugenio Matte Hurtado y Oscar Schnake son protagonistas de primera línea en la República Socialista del 4 de junio de 1932, en la fundación del PS y en la elaboración de las bases de sustentación ideopolítica hasta 1947, en el Block de Izquierda y en las políticas antiimperialistas, el latinoamericanismo, el antifascismo y en la formación del Frente Popular.

Eugenio González, Salvador Allende y Raúl Ampuero, representan el Programa por una Democracia de Trabajadores, de 1947, el relanzamiento del partido como conductor del movimiento popular, la reconstrucción de la izquierda, la política internacional independiente y la elaboración y puesta en práctica de la vía chilena al socialismo, que culmina Allende con la instalación del gobierno popular, democrático y revolucionario, en 1970.

TEXTOS ESCOGIDOS
(1934 - 1966)

NUESTRO MOVIMIENTO POPULAR Y LA JUVENTUD

LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS

De "La Juventud en el Frente del Pueblo",
Departamento de Publicaciones,
Partido Socialista, 1939.

Hoy podemos decir, por primera vez en nuestra corta historia, que del Congreso que iniciamos depende en gran parte el destino de la juventud trabajadora de Chile. Cuando al finalizar el Congreso anterior nos separamos teníamos frente a nosotros, a algunos meses plazo, una batalla por librar, una enorme batalla en que se jugaría el porvenir de nuestro pueblo y, con él, los intereses también de las masas juveniles de nuestro país. Ahora que esa batalla ha sido ganada, no desaparece nuestra antigua responsabilidad, sino por el contrario, se dificulta y acentúa, porque empezamos a avanzar por caminos nuevos en que se probará otra vez la justeza de nuestra línea.

Sólo ahora la juventud comienza a afirmar una personalidad colectiva, que le permite participar con una fisonomía propia en el proceso social chileno. A lo largo de nuestra historia encontramos múltiples intervenciones juveniles que no alcanzan, sin embargo, a tener características permanentes y recias, como para permitirnos afirmar que la juventud ha determinado algunos acontecimientos. Sólo una vez, en el año 20, aparece en nuestra arena política un movimiento joven que alcanza su plenitud en el sector universitario y que se extiende a algunas capas medias de esa generación. Tal movimiento significó en nuestro país el despertar democrático de América, la iniciación de la revolución democrática-burguesa, influenciada, sí, en muchas de sus expresiones, por la ideología que recién alcanzaba el triunfo en Rusia. Ya en esta ocasión se demostraba que la juventud es más permeable a las nuevas influencias que las generaciones maduras, y ello por razones claras y objetivas: **los jóvenes, por llegar a la vida y formarse en un medio distinto del que rodeó a los adultos, están en mejor condición para captar las nuevas situaciones sociales y económicas y para dar a sus problemas presentes una expresión más de acuerdo con los nuevos tiempos.**

La "generación del año 20" y su movimiento comenzaron a declinar con los años. La ausencia de una concepción medularmente clasista, la falta de sentido colectivo, el plano exclusivamente ideológico —casi romántico— en que situaron

su acción, y la misma vaguedad de sus objetivos le quitaron trascendencia y proyecciones.

Desde los golpes militares que se sucedieron a mediados del decenio pasado, y la posterior dictadura que ahogó todo ascenso popular, hasta la caída del dictador Ibáñez, desaparece casi totalmente el impulso de la juventud. Con la crisis de la dictadura aparecen otra vez en el primer plano de la política los estudiantes. Pero ya las masas obreras comienzan a tener una marcada intervención y una fuerza política creciente. Las heroicas luchas de la Federación Obrera de Chile y de múltiples grupos socialistas, logran en esta etapa interesar a los muchachos. Es, en realidad, en los años 31 al 34, cuando tiende a cristalizar la juventud trabajadora en las organizaciones políticas.

EL FRENTE POPULAR Y LA JUVENTUD

La Revolución del 4 de junio de 1932 y, fundamentalmente, el nacimiento del Partido Socialista, dieron al movimiento popular una extensión insospechada. De golpe, las masas trabajadoras se daban cuenta de su tremenda importancia y de su fuerza. Y eran hombres jóvenes los que con mayor entusiasmo se colocaron en las filas de la Revolución. A partir del 4 de junio la inquietud social abraza cada día sectores más amplios. Cuando el Partido Socialista se constituyó, no tuvo más que capitalizar aquellas masas que buscaban ansiosamente un cauce en que volcarse para formar una avalancha incontenible.

La acción socialista planteó desde el primer momento la adopción de una política realista y unitaria: **para que el pueblo triunfara era indispensable apretarlo en torno a un solo movimiento cuya finalidad inmediata fuera la detención de la dictadura alessandrista que ya se insinuaba.** Nació así el Block de Izquierda y se lanzó la campaña en favor de la Central Sindical Unica. Más tarde, respondiendo a la orientación unitaria también del socialismo, aunque transigiendo en su formulación teórica y política, entramos a formar parte del Frente Popular.

La unidad sindical quedó sellada, el Frente Popular significaba la unidad política del pueblo; se colocaba a la orden del día el desencadenamiento de un vigoroso movimiento popular, que abarcara a todos los sectores del trabajo con vista a las elecciones presidenciales, que presentaban la oportunidad de abrir una brecha que permitiera el desarrollo ulterior del movimiento de masas. Entre esos sectores estaba la juventud, la que contestó de inmediato a la movilización.

En la práctica, las organizaciones de algún arraigo de masas entre los jóvenes, son las Juventudes Socialista y Comunista. En un comienzo, las Juventudes Comunistas se incorporaron con mayor audacia a la acción política, gracias

a su mayor experiencia y a sus cuadros mejor constituidos. Después del Sexto Congreso de la Internacional Juvenil Comunista, principalmente, nuevas tácticas adoptadas por las Juventudes Comunistas nos pusieron frente a algunos problemas teóricos. El "frente de la nueva generación" fue la fórmula en que cristalizó la política de la Juventud Comunista, y ante ella nosotros respondimos con una posición que mantenemos: la de poner por encima de los problemas y conflictos de generaciones, el principio de la lucha de clases. Desde entonces pasamos a ocupar la vanguardia.

Nuestra Federación se mantuvo durante su vida inicial bajo la influencia de una concepción puramente secundaria de su papel político. Apenas éramos un organismo del Partido, una agrupación propagandista y activa, que no definía aún su personalidad y que no encontraba sus tareas y su misión específicas. A pesar de que desde el II Congreso General nos dimos cuenta de nuestra responsabilidad, en orden a impulsar un movimiento de masas de la juventud trabajadora, no pasamos nunca de las palabras a los hechos; nos conformamos con formular la necesidad de ese movimiento.

Como consecuencia de la ineficacia de la táctica comunista, del conformismo y la condescendencia con que plantearon el movimiento, y de la falta de audacia y experiencia de nuestra Juventud, el movimiento amplio de la juventud del pueblo no ha pasado más allá de donde estaba hace tres años atrás. Es cierto que muchos miles de jóvenes se han enrolado en los cuadros de las agrupaciones políticas, pero es ridículamente insignificante la cifra que representamos ante la enorme cantidad de muchachos que aún flota sin ubicación partidaria.

LA VICTORIA DE OCTUBRE

Decíamos que nuestra responsabilidad se acentúa y se dificulta después de la victoria de octubre. En efecto, después de esa fecha el proceso de definición de la juventud se hace más rápido, aquéllos que nunca sintieron la necesidad de preocuparse siquiera de política, afloran, ahora, a ella. Y esto es natural, todo cambio como éste produce, inevitablemente, una mayor preocupación por los problemas sociales. Es, en consecuencia, más urgente que antes la adopción de métodos de trabajo y de orientaciones que nos permitan comandar y organizar la juventud.

El 25 de octubre tiene un contenido revolucionario, que nosotros no podemos dejar que se malogre con una actitud negativa o ultra-revolucionaria. Significa nada menos que romper cien años de estagnación política y de casi ininterrumpido dominio reaccionario. Significa que comienza un ciclo de renovación de valores y de libertad, en que debemos dar consistencia y claridad al movimiento obrero.

Paralelamente al agrupamiento de las capas populares se produce el aglutinamiento de los sectores de la oligarquía. "Estamos en el umbral de una nueva crisis política; están la Revolución y la Contrarrevolución en plena marcha", como decía un camarada en nuestro periódico. Un retroceso de nuestra parte o la incomprensión de nuestras tareas actuales, significaría dejar el paso abierto a la reacción, porque la vacilación y la debilidad del triunfo no se corrigen con una postura académica, sino dándole al Gobierno un apoyo activo, que lo empuje y lo sostenga, para cumplir con su finalidad reformadora.

En estos momentos nos sorprende el IV Congreso. No debemos salir de él sin las herramientas que nos permitan actuar sobre una realidad tan compleja, en condiciones de satisfacer no ya un anhelo sentimental, sino un imperativo serio y urgente que no admite postergaciones.

Nueva Situación: Nuevas Tareas

GENERACIÓN Y CLASES

La cuestión de las generaciones y las clases, sólo se ha presentado en estos últimos años en la política juvenil, y tiene cierto valor estudiar de paso las diferentes opiniones.

El error de algunos consiste en basar toda la acción social de la juventud en una divergencia de generaciones y en concebir los problemas de la juventud como que abrazaran a toda una generación con la misma intensidad. Tal es el fondo de la cuestión, aún cuando prácticamente se manifieste como una tendencia evangélica a "unir a los jóvenes por encima de sus diferencias". Por otra parte, algunos camaradas nuestros niegan o subestiman los problemas específicos de la juventud. Unos y otros se equivocan. La verdad es que como fundamento indiscutible de toda acción política y social encontramos el principio de la lucha de clases. Negarlo sería desconocer el motor de todo movimiento, la dinámica de toda la historia. Pero nos parece que, como sector juvenil del socialismo, nuestra misión tiene que referirse, en especial, a desentrañar los problemas propios de la juventud trabajadora y estudiantil, como capa intensamente explotada de nuestra población, la primera, y como sector indirectamente oprimido, la segunda. Porque la juventud tiene condiciones especiales de vida que se refieren a su estado de desarrollo y formación física e intelectual, y porque ella es la que con mayor abnegación y entusiasmo emprende las tareas renovadoras; por eso debemos hacer que todas sus energías vengán a acrecentar las fuerzas de la Revolución.

Desde sus primeros pasos, el fascismo derrochó una intensa demagogia “juvenil”, que distribuía pródigamente en todos los sectores de las nuevas generaciones. Tal hecho hizo sospechosa cualquier tendencia que tratara de reivindicar para la juventud un papel preponderante en la Revolución, “no en balde las jornadas del fascismo se cumplían al ritornello de “Giovinezza, Giovinezza” (Mariátegui). Pero algunos años de fascismo en Europa nos permiten ver con extraordinaria claridad el papel de soldados y de esclavos que tienen que jugar los jóvenes bajo el yugo totalitario, y los acontecimientos de España y China nos muestran, a su vez, el magnífico aporte que significa para una causa revolucionaria el tener a su lado a la enorme mayoría de la juventud. Nuestra convicción es –como hace años decía Mariátegui:– que “la conquista de la juventud no deja de ser una de las necesidades más evidentes, más actuales de los partidos revolucionarios. Pero, a condición de que los jóvenes sepan que mañana les tocará cumplir su misión sin la ligereza de la juventud, con responsabilidad y capacidad de hombres”.

En el seno del movimiento revolucionario los jóvenes aprenden a ejercitar sus magníficas cualidades creadoras, ya que sólo en él pueden encontrar el espíritu y el ambiente necesarios para sus múltiples iniciativas.

LA JUVENTUD OBRERA

Durante todo el tiempo corrido desde el anterior Congreso, ha sido nuestra principal preocupación fortalecer las bases de la Federación en los centros industriales. La juventud obrera se encuentra actualmente dispersa y alejada aún de sus propios sindicatos. Esta es la primera cuestión que tenemos que resolver en las actuales condiciones políticas. Las modificaciones al actual Código del Trabajo –en forma que se permita a los jóvenes ejercitar los derechos sindicales en la misma medida que los adultos– es indispensable para romper la traba legal que impide la sindicalización de los muchachos. Después, la preocupación de los sindicatos por la situación de sus afiliados jóvenes y la transformación misma de las actuales agrupaciones obreras en organismos llenos de vitalidad, de actividades variadas y nuevas, permitirán capitalizar toda aquella enorme fuerza joven que se mantiene al margen de la organización sindical, a pesar de su calidad indiscutiblemente proletaria.

Las concentraciones obreras del salitre, del carbón, de Magallanes, se hacen cada día más permeables a nuestra propaganda y cada día se identifican más con nuestras posiciones. Lo verdaderamente importante es reemplazar la penetración espontánea que hacemos en esos sectores, por una expansión firme, sistemática, que jamás retroceda un solo paso.

LOS JÓVENES Y EL CAMPO

El Gobierno del Frente Popular, en el aspecto agrario, tiene la misión mínima de desfeudalizar el campo. Una enorme ola de organización campesina se extendió inmediatamente después del triunfo. La Juventud Socialista debe tener una intervención de primera importancia en la organización de los trabajadores de la tierra, porque de esta manera se construye la mejor herramienta de lucha contra la oligarquía agraria.

Hasta ahora hemos desarrollado en el campo una labor más que todo experimental; sólo hemos secundado la labor que en mayor escala desarrolla el Partido; no hemos incorporado métodos propios de penetración en el campo. No obstante, esta experiencia nos indica que no es posible enunciar una forma única de trabajo campesino. El deporte y la acción cultural nos permiten ahora lanzar una campaña nacional que venga a ser otro elemento de progreso y liberación para los trabajadores agrícolas.

Los campesinos jóvenes son los que con mayor interés han aflorado a las inquietudes del momento; en ellos descansan casi todas las Ligas de Campesinos y casi todos los Sindicatos Agrícolas. Son ellos, también, los que más necesitan de cultura y de una situación económica soportable. Quieren leer y educarse y no pueden hacerlo porque faltan escuelas, porque tienen que trabajar de sol a sol. Mientras el Gobierno del Frente Popular puede dar soluciones gubernamentales a los problemas, nosotros no debemos permanecer en la inercia, sino que por el contrario, con nuestros propios medios, con el trabajo de nuestros hombres, tenemos que lanzarnos al campo con misiones y brigadas culturales, con teatro ambulante, con organizadores campesinos, con escuelas temporales.

Después de la última experiencia de conciliación, en lo que se refiere a la sindicalización campesina, respecto a la cual el Frente Popular accedió a suspender transitoriamente la actividad organizadora de nuevos sindicatos y los patronos se comprometieron a terminar con el despido de obreros, mientras una Comisión estudiaba una legislación especial, nos queda una conclusión: el Frente Popular y los campesinos cumplieron la parte del pacto que a ellos les correspondía, pero los latifundistas continúan obstinadamente despidiendo a sus trabajadores por la menor tentativa de mejorar su aflictiva situación económica. Esto nos obliga a duplicar nuestra actividad al lado de los sindicatos agrícolas y ligas de campesinos, defendiéndolos de las maniobras de los señores feudales y de todo intento de destrucción.

Como una variedad del panorama agrario, pero como un trabajo hasta hoy subestimado, conviene referirse a la cuestión indígena.

La Juventud Comunista creó hace algunos años la Federación Juvenil

Araucana, que aún subsiste teóricamente, pero que en la práctica no ha tenido vitalidad suficiente para atraer a los jóvenes mapuches. Son los Comités Regionales de las provincias del sur, los que mejor pueden planear la manera de hacer de la juventud araucana una fuerza viva y militante; pero al iniciar una acción como ésta, deberán considerar la necesidad de incorporar entre las finalidades de las organizaciones que surjan, no sólo la defensa de los intereses materiales de la raza, sino que también la recuperación de su propia cultura, el afianzamiento de los lazos de comunidad.

UNIVERSIDADES, LICEOS, ESCUELAS

Constatamos en el presente una notoria declinación del movimiento estudiantil, cuya causa no es una atenuación de sus impulsos revolucionarios ni de su actividad política, sino la falta de una actitud adecuada frente a los nuevos problemas. Hemos tenido bajo nuestro control los más importantes organismos estudiantiles, y, sin embargo, hasta la fecha no hemos conseguido gran cosa en lo que se refiere a la recuperación del antiguo prestigio del estudiantado. Urge formular una política que coloque a los estudiantes a la cabeza de la culturización de las masas y que se proponga terminar con el analfabetismo, sin olvidar en ningún momento que tan urgente como esta tarea es la de democratizar la Universidad, de acuerdo con viejos postulados de renovación universitaria.

Los estudiantes secundarios han comenzado, desde hace algunos años, a organizarse y moverse con el más cálido apoyo de nuestra Federación, sin lograr una estructuración seria y permanente de sus organizaciones. La razón podía estar en la resistencia que tal organización suscitaba entre el profesorado y los directores educacionales, resistencia que comienza a ser vencida, con lo que se permitiría alejar el temor de padres y alumnos por las represiones que la militancia en esas agrupaciones significaba.

En casi todas nuestras Seccionales importantes existen Brigadas Infantiles, formadas por escolares, principalmente, las que han vivido gracias a la iniciativa personal de algunos camaradas. Un sentido con cierta tendencia militar de su contenido y un desarrollo rutinario de su vida, han impedido transformarlas en verdaderas escuelas primarias de socialismo, en que los niños recojan las primeras lecciones para ser trabajadores conscientes en una mañana más o menos próximo.

Orgullosamente podemos decir, a pesar de todo, que somos la primera organización juvenil que ha tomado con cariño el agrupamiento de los niños, conscientes de que representan el más rico patrimonio para el porvenir.

DEPORTE Y SALUD

Las desastrosas condiciones económicas de los jóvenes, fundamento y causa común de todos sus problemas vitales, se expresan en nuestro récord mundial de mortalidad infantil, en los enormes porcentajes de mortalidad que se presentan entre los 13 y 25 años y en nuestro reducido promedio de vida. Los organismos estatales que cuidan de este aspecto de nuestra nacionalidad, han sido absolutamente ineficaces, pero esta tarea comienza a ser superada por la actual administración, tendiendo en primer lugar a una elevación del estándar de vida popular.

Consecuentes, siempre, con nuestra idea de actuar paralelamente desde los organismos estatales y desde la masa misma, nos hemos trazado la tarea de impulsar un movimiento de educación física popular, que atienda al mejoramiento físico de la raza y que responda a las exigencias actuales con un hondo sentido social. En un movimiento de tal naturaleza no sólo convergen nuestras esperanzas de un mejoramiento físico de los muchachos, sino que también una posibilidad de un amplio movimiento de masas de la juventud.

En su aspecto orgánico, el movimiento debe desechar las formas demasiado esquemáticas de organización, para adoptar una estructura elástica, democrática y variada. Con respecto a lo que pudiéramos llamar las bases ideológicas de él, debe contemplar, además de una mínima definición democrática y antiimperialista, los postulados de la educación física moderna, que no busca ya el descubrimiento de grandes valores individuales —que casi siempre son casos excepcionales en medio de pueblos raquíticos— sino que va tras la superación y el perfeccionamiento de las condiciones biológicas de la masa.

UN EJÉRCITO QUE SEA UNA ESCUELA DEMOCRÁTICA

Durante los ciento y más años corridos desde nuestra independencia, las fuerzas reaccionarias se han preocupado de crear y mantener un Ejército teóricamente apolítico, profesional, y a usar de ese Ejército políticamente, en provecho de sus intereses de casta, en la práctica. No creemos que el Ejército en pleno régimen democrático deba ser un Ejército político, ni aún que de alguna manera se le pretenda comprometer en luchas meramente partidarias; pero sí debe incorporársele a la vida social de la República y deben transformarse los cuarteles en centros de vida y educación democráticas. La gran mayoría de los jóvenes tendría así una oportunidad de vincularse temporalmente a una institución que les permitiría, posteriormente, un mejor ejercicio de sus derechos ciudadanos.

No es posible mantener la situación antigua, en que las fuerzas armadas no jugaban ningún papel social y se las mantenía artificialmente alejadas del pueblo, porque su misión actual es la de constituir una defensa del régimen popular y democrático, y ser un factor de primera importancia en la construcción material de un Chile más vigoroso y fuerte.

Además los millares de muchachos que, año a año, forman los diversos contingentes, deben encontrar en los cuarteles mejores condiciones de vida que las actuales, mejor trato, y deben arbitrarse los medios que impidan la miseria de las familias de los conscriptos que, no encontrándose en condiciones de eximirse del servicio, restan su contribución económica, indispensable a la caja familiar.

UN EJEMPLO DE ACTIVIDAD SOCIAL: EN LA ZONA DEVASTADA

La Juventud Socialista, por medio de un mensaje radiado a todo el país, ocho horas después del terremoto, fue la primera organización que llamó a sus afiliados para acudir a prestar su ayuda y su cooperación a las víctimas de la catástrofe de enero, en las provincias del sur. E inmediatamente, en muchas ciudades y pueblos de nuestro territorio, nuestros compañeros comenzaron la recolección de medicamentos y ropas, cuando se encontraban lejos de la región afectada; o tomaron a su cargo la difícil tarea de organizar los primeros auxilios: el aprovisionamiento, la remoción de escombros, en la zona misma destruida por el sismo. Pasados los primeros momentos, en que algunos militantes hicieron derroche de sangre fría, de abnegación y de espíritu de organización y disciplina, de todos los puntos cercanos acudieron las Brigadas de la Juventud; los estudiantes de medicina con elementos sanitarios; las compañeras, con ayuda para los niños; los demás, con sus herramientas al hombro. Nunca habíamos realizado una movilización más vasta y más rápida, y, sin embargo, habiéndose improvisado casi todo, el maravilloso espíritu de iniciativa y creación de centenares de compañeros, allanó todos los obstáculos, eliminó todos los inconvenientes. Es éste un ejemplo de cómo debemos realizar un trabajo social, que haga sentir al pueblo constantemente nuestra presencia amiga a su lado, que nos permita "hacer" cosas prácticas de beneficio inmediato para la juventud.

Existen en los archivos del Comité Central muchos certificados de altos jefes militares, que espontáneamente felicitan a los jóvenes socialistas y a sus directivas, por el esfuerzo desplegado en medio de la tragedia. ¡Que el recuerdo de esas jornadas, valerosas en el dolor, y que el ejemplo de Oria —muerto en ellas— sean el símbolo del heroísmo en el trabajo y la construcción!

LA PENETRACIÓN HITLERISTA EN NUESTRO SUELO

Las nuevas tareas que actualmente encaramos, y que se derivan de un cambio importantísimo en nuestra política interna, deben considerar también la penetración del fascismo extranjero en las tierras americanas, y, específicamente, en las tierras mismas de Chile.

Desde la primera denuncia de actividades anti-nacionales, realizadas por emigrados alemanes en el sur de la República, que hizo públicamente en la Cámara de Diputados nuestro camarada Julio Barrenechea, hasta ahora, se han multiplicado los casos de violación de leyes chilenas y de actividades contrarias a nuestra soberanía. En tales contravenciones y maniobras, se considera con una dedicación especial la propaganda y la organización de los jóvenes descendientes de colonos alemanes.

Cada organismo de la F.J.S. tiene que ser un atento vigía de la penetración fascista y estar prontos para denunciar los casos concretos que lleguen a nuestro conocimiento. La supervivencia de la organización "Jugendbund" es una amenaza permanente, al igual que la existencia de instituciones de carácter deportivo, pero que ocultan una finalidad política incuestionable.

La campaña por el cierre de las escuelas nazistas del sur tiene que contarnos entre sus más efectivos propulsores, para limpiar de la opresión totalitaria nuestra educación, que debe ser, sustancialmente, democrática. Aún en la propia educación estatal se han denunciado casos de propagando hitlerista realizada por profesores alemanes. Contra todo esto debemos estar de pie, ahora y siempre.

UNA NUEVA POLITICA JUVENIL ACCION POLITICA DESDE EL III CONGRESO

Informe al IV Congreso de la FJS.
Mayo de 1939

El Comité Central ha cumplido con estrictez la resolución de no pactar en forma permanente con ninguna organización. Se han realizado alianzas de carácter temporal aconsejadas por los acontecimientos, las que han dejado de tener vida desde que su transitoria finalidad ha sido superada. Así estuvimos en su oportunidad integrando los Comités de Juventudes Frentistas en el período de agitación pre-electoral y en la propia lucha eleccionaria. En ciertos puntos, en que tomamos con calor y personalidad la tarea, pudimos aumentar nuestros efectivos y cobrar una marcada importancia; en otras partes, en que se tomó con flojera y timidez, no avanzamos, o, simplemente, quedamos rezagados.

Inmediatamente de terminada la campaña dimos las instrucciones necesarias para terminar con estos organismos de enlace, de acuerdo con las resoluciones del III Congreso y con la convicción de que ellos ya no respondían a las nuevas circunstancias en que comenzábamos a desenvolvemos.

Después de aquella experiencia no sostuvimos relación alguna con otras juventudes, hasta después del llamado hecho a la juventud chilena por el Ministro del Trabajo, llamado que incorporaba una serie de proposiciones e ideas basadas en los acuerdos del Congreso Mundial de la Juventud, en el que participamos oficialmente. Estimamos necesario llegar hasta el Consejo Nacional de la Juventud, surgido del mensaje del Ministro, porque el Consejo significaba y significa aún, una nueva posibilidad de despertar a las capas juveniles del pueblo y porque a su disposición se ponen preciosos elementos de propaganda y cultura. Manifestamos nuestra adhesión a la iniciativa ministerial en un documento público que expresaba lo siguiente:

"Frente a la iniciativa del Ministro del Trabajo, en orden a la formación de un Departamento que se preocupe de los problemas de los jóvenes, el Comité Central de la Juventud Socialista concreta su posición en los siguientes puntos:

1° Estima acertada la gestión ministerial en cuanto se trata de crear los órganos administrativos indispensables para la realización del programa de mejoramiento de la juventud, que, patrocinado por el Comité de Juventudes Frentistas, hizo suyo el Frente Popular, durante la campaña presidencial;

2° Discrepamos en cuanto a la finalidad inmediata que se pretende dar a la Oficina de Acción Juvenil del Ministerio del Trabajo; pues, aún cuando estimamos de estricta necesidad el conocimiento documentado de la situación de la juventud, a través de estadísticas, encuestas, etc., creemos que su misión inaplazable debe ser la solución de aquellos problemas más urgentes y graves de los jóvenes, problemas innegables, crudamente planteados, y que han tenido su expresión en los Doce Puntos y Cincuenta Reivindicaciones de la Juventud, que constituyen parte integrante del Programa del Frente Popular;

3° Considera que el espíritu de la iniciativa debe ser fundamentalmente, la solución del estado angustioso de vida de la juventud trabajadora y estudiantil, con un criterio frentista y democrático, antes que el mero deseo sentimental de unir a la "juventud chilena" en una acción sin orientación social determinada;

4° Creemos indispensable la vinculación del órgano estatal con la juventud misma, a través de sus organizaciones propias, para lo cual participamos de la idea de un Consejo Nacional de Juventudes como mero organismo de enlace, pero negamos a este Consejo toda atribución de comando sobre la juventud organizada en general, o sobre las organizaciones en particular. Planteamos, en consecuencia, la participación de la juventud en las orientaciones y funcionamiento de la Oficina de Acción Juvenil, y, al mismo tiempo, la total autonomía de cada organización con respecto al Consejo Nacional, para la realización de su propia acción política, cultural, social, etc.;

5° Estimamos indispensable que, junto a las medidas inmediatas y constructivas que tiendan al mejoramiento de la situación de la juventud, debe dársele a ella una conciencia democrática y antiimperialista que permita a la propia masa juvenil conseguir conquistas más amplias y profundas, que ya no son del resorte gubernamental;

6° Declaramos, por último, sostener entusiastamente la idea lanzada por el Gobierno de Frente Popular, esperanzados que con ella se inician las medidas prácticas que darán margen a los jóvenes para vivir una vida digna, comprometiéndonos a trabajar incansablemente junto al Departamento aludido, mientras sea un instrumento eficaz de mejoramiento de la juventud oprimida."

En el seno del Consejo todavía se debaten dos posiciones: la de la Juventud Comunista, que pone por sobre todas las cosas el deseo de "unir a la nueva generación por encima de sus diferencias"; y la de la Juventud Socialista que estima que un movimiento juvenil, en estos momentos, debe significar un apoyo efectivo para el sector obrero del Frente Popular.

ACCIÓN INTERNACIONAL

Al presente Congreso ya podemos presentar un balance positivo en lo que se refiere a la acción internacional. El Congreso Mundial de la Juventud, realizado a mediados del año pasado en Nueva York, en el que estuvimos presentes, nos dio la mejor oportunidad de conseguir un enlace estable con decenas de organizaciones de otros países del mundo, y, en especial, del continente americano. Y aun cuando, desde un aspecto puramente doctrinario, el Congreso no significó para nosotros un aporte notable, constituyó un aporte valioso desde el aspecto técnico y de estudio de los problemas de la juventud; muy importante para Chile, que tiene que realizarlo todo en este terreno.

A partir del Congreso Mundial se ha realizado un regular intercambio de publicaciones con organismos de Estados Unidos, México, Francia, Argentina, Uruguay, principalmente, y, en menor escala con otros países. La presencia de los camaradas argentinos y uruguayos en las II Jornadas nacionales, es la culminación de un acercamiento que comienza con una conferencia informal realizada en Nueva York y con un intercambio de correspondencia que se mantiene desde el año pasado. Ellos simbolizan la fraternidad internacional que agrupa a los jóvenes socialistas del mundo, fraternidad conocida sólo abstractamente por nosotros, hasta ahora, pero que con la asistencia de los compañeros Colle y González, de la Confederación Juvenil Socialista Obrera de Argentina, y de los compañeros D'Elía y Olga Scarabino, de la Juventud Socialista de Montevideo, se hace ahora tangible y real. Propongo, para solemnizar este hecho importante, que desde hoy los compañeros mencionados sean Militantes de Honor de la Juventud Socialista de Chile.

Si lográramos unir en una sola acción a las Juventudes Socialistas de Uruguay, Argentina y Chile, habríamos dado el primer paso hacia una política internacional de proyecciones. El Congreso que se realizará próximamente en México, convocado por la juventud del Partido de la Revolución, dará la primera oportunidad de una actuación conjunta.

NECESIDAD DE UN MOVIMIENTO DE MASAS

El III Congreso de la Juventud, consideró la necesidad de movilizar a la juventud trabajadora, para que nosotros, saliendo de las cuatro paredes de los locales, nos sumiéramos en su marcha y lográramos orientarla en su destino. No obstante esta predisposición, la estrechez de las normas de acción política aprobadas por ese Congreso, nos impedían la libertad de movimientos, que era indispensable para llevar a la realidad los planes elaborados. En tales resoluciones se nos prohibía toda alianza permanente con cualquiera organización, pro-

hibición que significaba alejarnos de toda posibilidad de un serio movimiento de masas, ya que las otras organizaciones de la juventud de izquierda acudían tan prósperas como nosotros mismos a aquellas partes en que tal posibilidad se insinuaba.

¿AISLAMIENTO O POLÍTICA AUDAZ?

En estas dos direcciones puede orientarse nuestra acción futura. Ambas posibilidades existen actualmente en la política juvenil. El Comité Central que deja sus funciones estima que la actitud "aislacionista" es la negación de toda oportunidad de hacer la política de masas; es sólo la expresión de un temor escondido y la resultante de una política falta de realismo. Ante el lema de "solos contra todos" levantamos la actitud que estimamos verdaderamente revolucionaria, de utilizar todos los medios disponibles para conseguir un vigoroso y pujante movimiento colectivo. "Pero —dice Lenin— estas condiciones, de otra parte, no pueden surgir de golpe y porrazo; son únicamente el resultado de un trabajo prolongado, de una dura experiencia y su elaboración se ve facilitada si se tiene una teoría revolucionaria justa, que no es un dogma, sino que se forma definitivamente en estrecho contacto con la práctica de un movimiento efectivo de masas y realmente revolucionario".

Toda norma estrecha de acción que impida a la futura directiva utilizar ciertos resortes para conseguir el fin enunciado, puede ser la negación misma de nuestra voluntad de alcanzarlo. Siguen también siendo profundamente verdaderas estas otras palabras de Lenin: "Preparar una receta o una regla general ("ningún compromiso") para todos los casos, es absurdo. Es preciso contar con la propia cabeza para saber situarse en cada caso particular".

¿TODO DEBE VENIR DEL GOBIERNO?

No faltan camaradas que crean que llegó la hora de pedirlo todo al Gobierno, o de esperar que, como el maná vayan cayendo sobre nuestras cabezas benditas todas las glorias del paraíso terrenal. Está bien que la juventud pida el cumplimiento de aquellas promesas que el Frente Popular levantó como programa de reivindicación juvenil; es justo que se exija que los Doce Puntos de la juventud pasen del papel a los hechos. Pero, lo que es profundamente errado, es la idea de que todo esto va a venir exclusivamente del nuevo Gobierno. Tal vez sea este error uno de los que, generalizándose, vayan a constituir el más serio peligro para la estabilidad y avance del nuevo régimen. Sostenemos que el porvenir de la juventud y su bienestar, tienen que ser, fundamentalmente, conquistados

por la propia juventud, pasando de las posturas conformistas y de mero aprovechamiento de la victoria, a posiciones combativas y dinámicas.

CONDICIONES DE UNA POLÍTICA DE MASAS

Nos interesa plantear con el máximo de claridad, las condiciones indispensables para una política de masas, necesaria para crear un pueblo orgánico y una juventud con personalidad y fuerza. Tales condiciones serían:

1° **Constatar que la política de masas aún no ha sido hecha.** Reconocer nuestra tremenda suficiencia cuando decimos que “controlamos la mayoría de la juventud trabajadora”. Una seria posición, una autocrítica responsable, tiene que concluir que nuestro trabajo ha sido estrecho, unilateral, sin ninguna flexibilidad;

2° **Deshacernos del prejuicio teorizante que pretende trabajar con masas perfectas.** En “El extremismo, enfermedad infantil de Comunismo”, Lenin dice: “debemos (y podemos) emprender la construcción del socialismo, no partiendo de un material humano fantástico, creado por nosotros, sino del que nos deja como herencia el capitalismo”. Debemos tomar la juventud como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus vicios y madurez actual, para aplicar, sobre esa realidad, los métodos de trabajo apropiados. Las formas de agrupamiento actuales de la juventud, las que busca instintivamente, tienen que ser la base de toda acción de masas. Necesitamos una política acertada para interesar y movilizar a los sectores jóvenes tales como son, y no como abstractamente quisiéramos que fuesen;

3° **Hay que hablar a la juventud en su lenguaje.** A veces nuestros camaradas hablan en un lenguaje teórico que nadie entiende, a no ser ellos mismos (y lo dudamos). Urge adoptar un lenguaje sencillo y claro, convincente y objetivo. Que cada vez que expliquemos algo, la juventud sienta que expresa sus propios pensamientos a través del orador.

4° **Identificar nuestros intereses con los de la juventud entera del pueblo.** No somos una secta encargada por la Divina Providencia de guiar a la juventud hacia la verdad; somos, eso sí, una parte de esa juventud que comparte sus problemas, sus inquietudes, sus pasiones. No tenemos intereses opuestos, ni siquiera diferentes a los de la masa de la juventud; sólo tenemos una responsabilidad más acentuada, por militar en su vanguardia;

5° **La organización de la FJS no es una finalidad en sí misma, sino una herramienta de acción.** La hemos edificado no para que sea un monumento de organización, para contemplarlo y admirarlo, sino para que con esa organización actuemos y luchemos en la vida. La mejor organización no es la más perfecta desde el aspecto teórico, sino la que mejores resultados consigue en la práctica;

6° Los dirigentes de masas no se forman en los invernaderos, sino en contacto con la masa misma. Se aprende a nadar en el agua y no en los gimnasios. La mejor escuela es la lucha; pueden haber errores al comienzo, pero al fin se almacenan experiencias, todo esto, sin subestimar en absoluto la tenaz preparación teórica del dirigente;

7° Variedad en nuestras manifestaciones y actividades. Que no nos empantanemos en la rutina de la amargura; que todos los días se hagan cosas nuevas. Que haya también alegría. La lucha tiene ancho margen para el optimismo. No seamos como aquel alemán, hombre de dinero, que durante toda la guerra pasó durmiendo en el suelo, junto a una magnífica cama, "porque los pobres soldados dormían en el barro, en las trincheras". La juventud tiene que reconquistar el optimismo y llenar con su vida y su dinámica todas las actividades grandes, nobles y útiles.

8° Un trabajo más externo, más visible. No somos una organización conspirativa; somos la organización más generosa y combativa de la juventud. No tenemos que escondernos de nadie y en cada minuto debemos mostrarnos al pueblo, enteros y altivos, bregando por nuestra emancipación y la de nuestros hermanos;

9° Educación, estudio, cultura. Hay que aprender mucho para ser buen socialista. No es, simplemente, una postura superficial. Debemos transformar la Federación en una inmensa escuela, en que adquieran todos los conocimientos posibles y en que cada afiliado sea un serio estudioso de los problemas que nos afectan;

10° Responsabilidad y audacia. Todo esto debe ser llevado adelante con fe y con esfuerzo, sintiéndonos responsables del destino de la juventud oprimida y realizando con la más grande audacia las tareas de la hora presente.

Llamamos, pues, la atención del Congreso, sobre estas premisas que estimamos esenciales.

CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN CHILENA

El Socialismo, como tendencia diferenciada del comunismo, surgió en Chile hace veinticinco años y tuvo, de inmediato, un desarrollo sólo explicable por circunstancias históricas muy propicias. Aquí, como en cualquier lugar del mundo, las ideas políticas se transforman en movimientos sociales de gran magnitud cuando existen condiciones objetivas que justifican su presencia, cuando responden a aspiraciones profundamente sentidas por las masas, determinadas por el grado de evolución de las fuerzas productivas y por los obstáculos sociales que encuentran para su indefinida expansión.

UNA NUEVA CONCEPCIÓN SOCIALISTA

Pero, si bien un socialismo genérico y más o menos amorfo, relativamente diferenciado del comunismo, daba nueva expresión al movimiento popular, su éxito definitivo dependía de la forma en que interpretara su misión, en el campo teórico y de su adaptación estratégica a las condiciones concretas en que le tocaba desempeñarse.

Desgraciadamente, por muchos años se abandonó todo esfuerzo por definir las cuestiones básicas. Transplantamos mecánicamente a nuestro país ideas y consignas de filiación colectivas, extraídas de diferentes escuelas, con lo cual aplazamos, por una parte, toda tentativa de analizar con métodos verdaderamente marxistas nuestra realidad nacional, y, por otra, incorporamos a la vida del partido posiciones teóricas antagónicas, germen original de todas las divisiones sufridas por el socialismo chileno. Resulta penoso constatar como, en nombre del marxismo, durante años nos hemos destrozado, sosteniendo posiciones del más puro corte idealista.

La experiencia viva de la lucha social nos obligó a reaccionar. Primero, en forma más o menos inconsciente, comenzó a expresarse una nueva actitud ante los acontecimientos políticos inmediatos, pero luego hubimos de darnos cuenta que ella debía cimentarse en un replanteamiento total de los problemas fundamentales de la revolución chilena.

PLANTEAMIENTOS FUNDAMENTALES

Muchas veces, desde 1945, hemos avanzado ciertas formulaciones fragmentarias acerca de la materia, pero hasta hoy carecemos de una exposición orgánica de sus líneas principales, aun cuando ellas, en cierta medida, se han incorporado a lo que pudiéramos llamar la mentalidad del partido. Sin perjuicio de que alguna vez se llene completamente esta necesidad, creo conveniente hacer un breve resumen de los principales conceptos teóricos que han determinado la conducta del socialismo popular en los últimos veinte años.

Pese a que los calificativos no son del todo exactos ni aplicables a todas las áreas, se ha definido nuestra economía como semifeudal y semicolonial. Probablemente sea este un aserto de aquellos que no requieren discusión en un congreso del partido. Sabemos de qué manera subsisten, en el campo, los rasgos esenciales de la encomienda española; la magnitud de los latifundios; el cultivo extensivo; las formas indirectas de explotación rural; los métodos anticuados de cultivo; las condiciones elementales de vida de los trabajadores agrícolas, en fin, todos los factores característicos de una economía pre-capitalista. Conocemos, igualmente, la estrecha dependencia de Chile con relación a las inversiones y al mercado norteamericano; su calidad de país monoprodutor, el trato excepcional que reciben aquí las grandes empresas extranjeras, la estructura colonial de su comercio exterior, su capitalización fundamentalmente basada en recursos foráneos, todo lo cual se proyecta en una mutilación real de su soberanía política.

Para un marxista no es difícil comprender cuáles son, en consecuencia, las clases dominantes y, por tanto, conservadoras, en el más fiel sentido de la palabra: la oligarquía agraria, los sectores sociales vinculados al imperialismo, todos los integrantes del sistema bancario, industrial y comercial, que tienen por plataforma la estructura económica actual de la nación.

Los observadores desprejuiciados, y con mayor razón los socialistas y los hombres de criterio avanzado, saben que el sistema ha llegado a un punto crítico en su evolución natural: no es posible expandir la economía chilena, desarrollarla cuantitativa y cualitativamente, en términos apreciables y lograr un progreso rápido de las fuerzas productivas, sin cambiar profundamente sus bases estructurales.

Esta es, en su más puro sentido, una tarea revolucionaria. Significa despojar del poder político a las clases dominantes y reemplazarlas por otras, actualmente explotadas o dominadas, pero capaces de colocar al país sobre cimientos nuevos y de inaugurar una fase de transformaciones radicales.

OBJETIVOS Y NATURALEZA SOCIAL DE LA REVOLUCIÓN

Expresado positivamente, los objetivos económicos que se propone la revolución son, por tanto, la reforma agraria y la liberación nacional anti-imperialista. Allí donde el latifundio impone su sello a la producción rural, debe ser reemplazado por una redistribución de la tierra entre pequeños propietarios, sujetos a programas nacionales de cultivo. Las empresas extranjeras deben ser nacionalizadas.

Tal es nuestra misión inmediata reducida al más elemental de los esquemas.

Son, también, los rasgos característicos de la “revolución democrático-burguesa”, –según la clásica terminología marxista–, definidos desde un ángulo económico: consolidación del estado nacional y eliminación de la clase terrateniente. En todos los países desarrollados, esa lucha fue conducida por la burguesía en ascenso, transitoriamente aliada a los siervos, a los artesanos y al proletariado en formación. Políticamente, su victoria trajo consigo una nueva forma de la democracia, enunciada esta vez en los planos jurídico y filosófico como la más alta, universal y definitiva expresión de la convivencia colectiva.

Como antítesis y sucesora natural de esta fase histórica Marx enunció su teoría de la revolución proletaria y socialista, destinada a eliminar las clases sociales y, eventualmente, el Estado. Debería realizarse, bajo la dirección de los obreros industriales, para entregar a la comunidad entera el dominio de los medios de producción.

Sin embargo, en el caso chileno y, generalizando, en casi todos los países coloniales y dependientes, la realidad es mucho más compleja. Nuestra burguesía nació con un campo de operaciones limitado y subsidiario de las grandes empresas foráneas. Porque nunca tuvo el poderío necesario para abordar inversiones de gran magnitud, en lugar de rivalizar con el capital imperialista, estableció con él una estrecha asociación de intereses, más o menos complementarios. En tales condiciones –a las que se añaden otras que la vinculan a la clase de los poderosos propietarios rurales–, está orgánicamente incapacitada para cumplir las tareas revolucionarias que tomó en sus manos en las naciones maduras.

Ha dado, es cierto, uno que otro líder de relieve en las crónicas americanas, pero los protagonistas de todos los movimientos libertadores han sido la clase obrera, los indios y campesinos.

PAPEL DE LA CLASE OBRERA

Esta es la primera lección que se desprende de cualquier estudio: la burguesía no es, en nuestros países, una clase revolucionaria. Los son, en cambio, los

trabajadores industriales y mineros, los campesinos, la pequeña burguesía intelectual, los artesanos y operarios independientes, todos los sectores de la población cuyos intereses chocan con el orden establecido. Y en este conjunto, cada vez juega un papel más determinante la clase obrera. Por su organización, su experiencia sindical y política, su sentido de clase es el núcleo más resuelto de la lucha social.

Ahora bien, una clase que asume la misión históricamente abandonada por otra necesariamente le imprime sus propias características, le da un alcance de mayores proyecciones, le introduce modalidades propias de un estado más avanzado y radical. No puede tener la misma fisonomía ni igual contenido la revolución capitalista y burguesa realizada, bajo el mando de la burguesía, que si ella se desencadena y es conducida por los trabajadores, o más específicamente, por la clase obrera.

NACIONALIZACIÓN Y SOCIALISMO

En efecto, las “nacionalizaciones” no serán un mero desplazamiento patrimonial de las manos extranjeras a las de los ciudadanos particulares del país, sino que ordinariamente se incorporarán al dominio del Estado, y en su gestión se afecta, de uno u otro modo, el control obrero, como en el caso reciente del estado boliviano. La tierra será redistribuida, pero, mediante sistemas comunitarios de explotación –casi siempre de raíces autóctonas– o bajo formas cooperativas de diferente desarrollo, se buscarán las bases jurídicas que, acompañadas de una mecanización intensiva, faciliten la evolución hacia modalidades colectivistas más avanzadas.

Agregamos a todo esto las fuertes tendencias hacia la estatización de múltiples actividades monopolistas ejercidas por nacionales, que se hacen sentir en todo el continente, y la dinámica actuación que se le asigna al poder público en el planeamiento integral de la economía, incluidos los sectores privados. Debemos convenir en que la revolución americana, cuyos objetivos sustanciales venimos enunciando, es fundamentalmente agraria y anti-imperialista, pero tiene simultáneamente un evidente sentido socialista, derivado de la preponderante participación del proletariado en su dirección política y de su tendencia consecuencial a buscar formas primarias de propiedad colectiva.

Hasta podríamos añadir que su finalidad únicamente se logra con plenitud en la misma medida en que subsiste la orientación socialista y se acentúa gradualmente la hegemonía de la clase obrera.

REVOLUCIÓN Y DEMOCRACIA

Jamás me he explicado por qué nuestros teóricos entregan a la burguesía títulos exclusivos sobre la democracia. Para mí, toda revolución es esencialmente democrática, así como toda contrarrevolución es esencialmente antidemocrática. Es claro que cuando ella adquiere contornos sociales, alguna clase debe sucumbir: en el orden económico, porque se destruye su base material; en el orden político, porque se le niega el derecho a gobernar. Pero no por eso la revolución pierde su carácter democrático, desde que se produce siempre una ampliación real de la soberanía popular. Indiscutiblemente, para sus adversarios no será lo mismo: ni la nobleza feudal pudo aceptar la guillotina como símbolo de la democracia, ni lo han sido para la burguesía rusa los decretos de expropiación, pero estamos examinando el problema con un criterio, si se quiere, histórico y objetivo.

Con mayor razón será la americana una revolución democrática. Pese a la consagración constitucional de los más avanzados principios libertarios, en los hechos América es un continente de dictaduras desembozadas o encubiertas, donde jamás se ha conocido por largo tiempo y en toda su amplitud el funcionamiento de las instituciones representativas.

No sé hasta qué punto expreso el pensamiento del partido, pero quisiera resumir el mío acerca de los objetivos y la naturaleza de la revolución chilena, en los términos siguientes: es una revolución democrática de los trabajadores manuales e intelectuales orientada hacia el socialismo, y destinada, en su primera fase, a liberar a la nación de toda dependencia extranjera y a eliminar las formas feudales de explotación agraria.

Casi todo lo dicho vale para la generalidad de los países hermanos de América Latina. En un grado u otro, están sometidos al imperialismo y a los terratenientes, sin perjuicio de la existencia de condiciones internas peculiares que, naturalmente, exigirían una adaptación relativa de las conclusiones anteriores. Este solo hecho bastaría para encarar sus luchas como un proceso unitario, integrado en un gran movimiento de liberación continental. No obstante, más allá de las consideraciones sociológicas, lo que exige una teoría común, una estrategia común, es, por una parte, las circunstancias de que todos ellos se mueven en la órbita del poder norteamericano, por otra, la certeza de que sólo unidos podrán alcanzar su independencia, vale decir, la condición primaria para su progreso.

PROCESO DE LA ACCIÓN ANTI-IMPERIALISTA

Hablamos de anti-imperialismo, pero es preciso preguntarse: separadamente cada país, ¿tendrá la fuerza necesaria para conquistar su libertad nacional? ¿O deberemos esperar que los Estados Unidos sean un estado socialista, para lograr esa finalidad? Ninguna de las dos cosas.

Crear lo primero es un romanticismo político; afirmar lo segundo es derrotismo contrarrevolucionario, peor aún, insensata aspiración de derrocar al capitalismo yanqui desde el sur de Río Bravo, doctrina que tiene sus devotos partidarios, como se ha visto en los gestos suicidas del nacionalismo portorriqueño.

Como todo conflicto humano, la lucha antiimperialista es un proceso dinámico, antes que un dilema formal. Es una pugna de fuerzas contradictorias, muy difícil de resolver en términos categóricos, dejando un vencedor y un vencido.

En nuestros días, por ejemplo, comprometidos los Estados Unidos en una disputa por el predominio universal con la Unión Soviética, acentúa su tendencia a la hegemonía hemisférica por consideraciones político-militares absolutamente objetivas, hasta el punto de atropellar doctrinas, formalidades diplomáticas, normas de ética internacional, etc., en cuanto parezca estorbar sus planes de expansión y su particular sentido de la seguridad. En tales condiciones, la inercia de los gobiernos, su pasiva adaptación al sistema, es algo peor que mantener el statu quo, es caminar hacia el colonialismo bajo la apariencia de compromisos igualitarios y multilaterales.

Cada nación, individualmente, algo puede hacer por su propia independencia, como lo comprueban los casos de Guatemala y Bolivia, pero los resultados serán escasos o tendrán que pagar por ellos un alto precio.

UNIDAD EN LA LUCHA CONTINENTAL

Por eso, la única alternativa lógica es la unidad. Unidad de los movimientos nacionales de liberación, primero, y unidad de la política económica y exterior de los estados, en seguida. Unidad para fortalecer la resistencia popular contra las diferentes formas de penetración imperialista y para constituir un sistema económico regional, destinado a reemplazar la actual servidumbre de la América Latina respecto de los Estados Unidos por relaciones equitativas y justas entre comunidades libres y soberanas.

Tanto los procedimientos adecuados para organizar la defensa de las materias primas de las regiones subdesarrolladas, como las líneas directrices de una política de integración económica, son materias extrañas a los modestos límites de este informe. Pero debemos insistir en la necesidad de diseñar una teoría

general, válida para todos nuestros países, una sola estrategia de batalla, y en establecer un comando operativo de tipo continental.

Por lo que se refiere a la teoría, no se trata de inventarla en la esfera de las divagaciones abstractas. Las concepciones marxistas, particularmente sus métodos de interpretación de la realidad tangible, nos proporcionan los elementos básicos, siempre que se utilicen como una guía para la acción y no se acepten en calidad de dogmas metafísicos. Su confrontación dialéctica con la práctica social y las experiencias de la lucha de clases de Indoamérica, debe darnos un conjunto de conclusiones altamente positivas.

Probablemente recién en nuestro tiempo sea posible contar con los materiales imprescindibles para enunciar una verdadera doctrina revolucionaria.

Las ventajas que se lograrían están lejos de ofrecer un interés meramente intelectual. Por el contrario, nuestra acción militante ganaría en claridad de perspectivas y en seguridad política, evitando el empirismo en que ocurren con frecuencia nuestros partidos, empirismo que los arrastra muy a menudo a degenerar en simples grupos izquierdistas nacionales, más preocupados de las tímidas reformas inmediatas que de cumplir una misión trascendente.

Si, además, concebimos la lucha en términos continentales, sabremos asignarle a cada acontecimiento doméstico su verdadero valor y seleccionar las tareas de apoyo y solidaridad susceptibles de asegurar la victoria en los lugares decisivos. No encuentro nada más trágico hoy día que la incomprensión que encuentran en ciertos medios socialistas los procesos políticos de Bolivia y Guatemala. Al calificarlos de fascistas o stalinistas, sin desentrañar su verdadera fisonomía histórica, se corre el riesgo de desestimar dos frentes en que está jugándose nuestro propio destino colectivo. Es posible que existan discrepancias ideológicas y tácticas de alguna entidad entre nosotros y esos movimientos, como seguramente los hay con respecto al Partido de Liberación Nacional de Costa Rica o el aprismo peruano, pero carecen de importancia en la estrategia global del anti-imperialismo.

En suma, ninguna comarca de territorio americano logrará por sí misma objetivos de la revolución agraria y nacional; sólo Latino América unida podrá alcanzarlos en su plenitud.

POSICIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN SOVIÉTICA EN HUNGRÍA

Discurso en el Senado, noviembre 7 de 1956

Según mi parecer, los acontecimientos que se realizan en el escenario mundial y de los cuales somos testigos, no obstante su dramatismo y su crueldad, dan oportunidad a los distintos partidos políticos para expresar su pensamiento ante circunstancias muy complejas.

Si no estuviéramos conmovidos por la sangre que está corriendo en el mundo, diría que es hasta una suerte que se hayan producido casi simultáneamente los sucesos de Hungría y los del Canal de Suez, porque, en realidad, el tener que enjuiciarlos paralelamente da una medida de la sinceridad con que cada Gobierno o cada tendencia política o filosófica los enfoca.

En esta época en que, al parecer, la hipocresía y el cinismo son el signo de la diplomacia de las grandes potencias, hasta el punto de que alegan principios para defender ciertas situaciones que les interesan particularmente y renuncian a esos mismos principios para calificar la conducta de sus adversarios, en esta época, repito, es importante que se sepa cómo los socialistas populares, en cuyo nombre pretendo hablar esta tarde, apreciamos lo que ha venido ocurriendo en Hungría y en Egipto.

No creo necesario hacer una historia acerca de la tradicional diferencia, o, en cierto modo, de la realidad ideológica que el socialismo ofreció siempre a la versión staliniana de la revolución que se había aposentado en la Unión Soviética durante cerca de un cuarto de siglo. Inalterablemente, denunciarnos cómo allí se estaba malogrando una revolución obrera, libertadora y socialista; inalterablemente, condenamos los excesos belicistas y de terror que se constituyeron en medidas normales en el gobierno de la Unión Soviética: inalterablemente, condenamos la pretensión de exportar la revolución llevándola en la punta de las bayonetas del Ejército Rojo a lo que se llamó después la Cortina de Hierro para identificar a los países que estaban colocados detrás de ella.

Hemos sostenido en forma permanente e intransigente que el principio básico de las relaciones internacionales para los socialistas es el respeto hacia la autodeterminación de los pueblos. En términos absolutos, como lo acaba de plantear el Honorable señor Allende, respetamos inalterablemente la autodeterminación para adoptar el socialismo o dejarlo, la autodeterminación para establecer cualquier otro tipo de gobierno que se desee.

Nos parece que el pueblo que no conquista un estado de vida superior con su esfuerzo y con su sangre no hace ningún esfuerzo por mantenerlo y lo pierde con facilidad. Ningún pueblo obtiene ventajas históricas gratuitamente, y cuando llega a lograrlas por coincidencia o por obra de los acontecimientos, no tiene conciencia del valor del patrimonio que ha llegado a sus manos.

Pues bien, ésa ha sido inalterablemente nuestra convicción, nuestro principio y nuestra posición frente a muchos acontecimientos que me parece muy extraño que no hayan encontrado eco en algunos sectores del Senado. Por ejemplo, el caso ya señalado por el Honorable señor Allende respecto de lo que ocurrió en Guatemala. No se trataba de calificar a un gobierno; se trataba de saber si había sido víctima o no de una verdadera invasión de bandoleros armados y financiado por poderes extraños al pueblo guatemalteco. Se trataba, entonces, de condenar esos hechos, de oponerse a ellos y de condenarlos. Y ésa era la única forma, en esos instantes, de ser consecuentes con este principio de reconocer a todos los pueblos el derecho a disponer de sí mismos. Cuando Yugoslavia, en un dramático proceso histórico, con un vigor ideológico que alguna vez habría de ser reconocido, rompió su sumisión a la Unión Soviética, cuando el Partido Comunista Yugoslavo, estrechamente asociado al pueblo yugoslavo por haber establecido con él una alianza indestructible durante los años de la guerra de liberación, cuando ese Gobierno y ese pueblo lograron formar una versión nacional del socialismo, también los acompañamos con idéntica buena fe y conforme a idénticos principios.

Ahora tenemos que resolver nuestra actitud frente a dos hechos brutales: la oposición soviética a sangre y fuego por evitar que el pueblo húngaro busque su propio camino de liberación, y la circunstancia de que dos pueblos poderosos, como Francia e Inglaterra, aduciendo pretextos baladíes, falsos, tartufescos, hayan intervenido militarmente en Egipto para evitar que se consumara un acto de soberanía consistente en la nacionalización del Canal de Suez. Dos hechos éstos muy similares por su brutalidad, por su cinismo y por el atropello de todos los grandes principios de respeto internacional; idénticos casi por la diferencia potencial y material que existe entre el agresor y el agredido. En ambos casos, los socialistas populares condenamos esta intervención; en ambos, nos colocamos al lado de los pueblos que, mediante sus propios esfuerzos, procuran darse un régimen de independencia y de libertad y, en lo posible, un régimen progresista de convivencia social.

Tal es nuestro punto de vista.

Lamentamos que en Hungría, además de estos impulsos generosos y limpios, existan, naturalmente, algunos ingredientes ajenos al interés colectivo del pueblo húngaro. No se puede discutir que también en esa subversión —procurando aprovecharla por sus propios fines— han intervenido elementos reacciona-

rios; pero yo quiero decir, señor Presidente, que la responsabilidad de que esos pequeños grupos, de que esas insignificantes minorías estuviesen a punto de desvirtuar el sentido histórico del esfuerzo del pueblo húngaro, se debe fundamentalmente a la incapacidad del régimen staliniano que había sido derrocado. Yo no me explico sino por eso que un pueblo después de diez años todavía le dé crédito y aliento a fuerzas reaccionarias. Tiene que haber sido muy malo, desastrosamente malo, brutalmente cruel e ineficaz el régimen instalado por el Ejército Rojo en Hungría, para que todavía les dé crédito y aliento a fuerzas reaccionarias derechistas y fascistas.

Por eso, señor Presidente, creo que, no obstante estos elementos secundarios, la lucha del pueblo húngaro es una lucha legítima que debería contar con el respaldo de todos los hombres de avanzada de la tierra, y por idéntica razón nosotros estamos con el pueblo egipcio y contra la agresión franco-inglesa.

Por eso, y porque deseamos que el mundo vuelva a la decencia, esperamos que los procedimientos puestos en práctica por Hitler, disfrazados ahora con argumentos democráticos, no vuelvan a ser un hábito en las relaciones internacionales. Si Hitler hubiera buscado una ocupación fulminante, como la agresión de Israel, para desencadenar su ofensiva contra Checoslovaquia, por ejemplo, se habría dicho que eso era totalitarismo. Como lo han hecho el régimen conservador inglés y, desgraciadamente, los socialistas en Francia, como lo han hecho, en fin, dos potencias que se precian de ser democráticas y partidarias de la libertad, nosotros no nos atrevemos a darle el calificativo que tales procedimientos merecen, procedimientos de agresión belicista incompatibles con el nivel de civilización a que ha llegado el mundo.

REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO

Revista Arauco N° 18, julio 1961

Compañeros: quiero iniciar mis palabras anunciando que se encuentra entre nosotros el camarada David Tieffenberg, Secretario General del Partido Socialista argentino. Estoy seguro de interpretar un sentimiento común de los camaradas presentes al brindar el saludo fraternal de los socialistas chilenos a un viejo amigo y a un militante de conducta política ejemplar.

Deseo, enseguida, ofrecer una excusa: cuando conversé por primera vez con el compañero Ahumada, Secretario General de la Juventud, me solicitó una disertación de limitada responsabilidad intelectual y política. Se trataba de hablar llanamente a un grupo de compañeros jóvenes sobre ciertos temas de interés actual, pero tanto la difusión que se dio al anuncio de esta charla como la atracción despertada en otros sectores del Partido me colocan frente a una tarea en cierto modo inesperada. No será, pues, una conferencia de alto nivel teórico, aunque sus materiales tal vez puedan servir de base de discusión, de análisis y de estudio para otras intervenciones que seguramente preparará y organizará el Instituto.

Para señalar la modesta finalidad enunciada, el título de la charla, deliberadamente escogido, es el de Reflexiones sobre la Revolución y el Socialismo. Con ello quiero indicar que no se trata de la exposición dogmática de un punto de vista oficial del Partido, sino más bien de una serie de conclusiones provisionales de un dirigente que pretende inspirarse en nuestra tradición política. El espíritu de mis palabras procura identificarse con el objetivo propio de todo centro de estudios, vale decir, acumular aportes para un análisis más profundo, evitando la exégesis, la simple exposición de conceptos inamovibles. Estas explicaciones iniciales justifican, también, la notoria falta de método que se advertirá en el desarrollo del tema.

REFORMISTAS Y REVOLUCIONARIOS

Reforma o Revolución es un viejo dilema en la historia del socialismo, pero el litigio alcanzó proyecciones verdaderamente significativas en el campo político sólo cuando la Revolución Rusa planteó la división de la Segunda Internacional.

No desconozco la importancia que tuvo en el cisma la actitud de cada grupo o partido frente a la cuestión de los créditos militares, de la guerra y de la paz; sólo subrayo que, desde entonces, “reformismo” y “revolución” pasaron a ser elementos polarizados de dos tendencias antagónicas en el seno del movimiento obrero internacional.

Sin embargo, en aquellos años, el problema tuvo un carácter diferente del que se presenta en la realidad latinoamericana de hoy. El debate era fundamentalmente una discusión acerca de los métodos. Entre los teóricos de la época, que describieron de una u otra manera los rasgos característicos de la sociedad nueva, no había fundamentales diferencias de objetivos. La divergencia, repito, se situó en una cuestión de tácticas y de medios.

En las condiciones europeas de la postguerra el asunto, por cierto, no era fácil de dirimir, al menos como camino exclusivo para arribar al socialismo. En los países donde se habían establecido plenamente las instituciones democráticas al impulso de la revolución burguesa, éstas habían sido ensanchadas por la clase obrera y se habían transformado en “factores importantes para la conquista del poder político y la transformación del carácter de clase del Estado”.

Allí el capitalismo había alcanzado su más alto desarrollo y la concentración de los medios productivos en manos de una burguesía perfectamente caracterizada era un hecho evidente. Una constelación, en fin, de factores que pudieron alentar —y en el hecho alentaron— la ilusión de un tránsito pacífico hacia la sociedad colectivista.

En la América Latina de 1961, el problema es distinto. Vivimos y actuamos en el seno de lo que se ha llamado el mundo sumergido, el mundo subdesarrollado, el Tercer Mundo. De cualquier manera que lo pretendamos definir, se trata de un campo donde el capitalismo no alcanzó la plenitud lograda en los países metropolitanos, donde el movimiento obrero carece de la potencialidad relativa de los países europeos o de Estados Unidos, de países, en fin, donde la realidad capitalista se complica por la presencia de instituciones arcaicas y limitaciones políticas que corresponden más bien al esquema de la sociedad feudal. Por esto yo diría que en tanto el dilema “reforma o revolución” pudo tener en Europa un cierto significado, que se reflejaba, sobre todo, en el valor que cada tendencia asignaba a los elementos subjetivos en el desarrollo social, porque el medio material sobre el cual actuaban era vigoroso y progresista, en el área americana la elección está determinada por la debilidad de la base material, por el retraso crónico de las economías dependientes. Son, en verdad, más bien los factores externos, la crisis de las estructuras, los elementos que plantean con apremio la necesidad de producir transformaciones profundas que, casi inevitablemente, como lo veremos después, parecen desafiar la legalidad y el orden jurídico. Dicho de otro modo, en otro lugar y en otro tiempo pudo ser un problema mera-

mente estratégico y aún académico el sostener si la reforma o la revolución era la vía más apropiada para el socialismo. En América Latina, en cambio, presenciábamos el espontáneo desarrollo de una situación intrínsecamente revolucionaria, extendida a todo el continente y consecuencia ineludible de violentas contradicciones que no hallan solución dentro del sistema. El problema que debemos plantearnos es el de si el socialismo es capaz de intervenir como dirección consciente del proceso, o si se resigna a permanecer al margen del acontecer histórico.

La elección tiene, en consecuencia, para nosotros, una importancia mucho más sustantiva, más profunda y más trascendental que la que pudo tener la misma alternativa en ámbito diverso al latinoamericano.

SOBRE LA VIOLENCIA Y LA VÍA PACÍFICA EN AMÉRICA LATINA

Yo desearía, compañeros, corroborar lo dicho refiriéndome no tanto a antecedentes teóricos como a la experiencia viva. En el último medio siglo el continente se ha visto violentamente conmovido por los sucesos revolucionarios en diferentes latitudes. Desde la Revolución Mexicana, cuya trayectoria comienza antes de la Primera Guerra Mundial, y continuando con las experiencias de Guatemala, de Bolivia y de Cuba, advertimos que en todos esos casos donde se produjo un profundo cambio de estructura, una revolución social en su más auténtico sentido, en cuanto significaron el desplazamiento de determinadas clases dominantes para ser suplantadas en el poder por otras clases nuevas, en todos esos procesos, la violencia fue un factor inevitable del cambio.

Recuerdo estos casos, además, porque en todos ellos el objetivo principal ni siquiera era una meta socialista. Todos tuvieron, como impulso dinámico predominante, la necesidad de realizar la reforma agraria. Y, dentro de nuestros esquemas teóricos tradicionales, la reforma agraria constituye una conquista típica del orden democrático-burgués. Es casi siempre una demanda del joven capitalismo que busca destruir las formas feudales de la producción agrícola, ganar nuevos mercados para la producción manufacturera y desarrollar la participación de las masas rurales en la vida democrática de la sociedad burguesa. Pero subrayo que aún estas transformaciones debieron lograrse en esos países por la vía de la insurrección armada, de la revolución y de la violencia.

Por ahora únicamente recuerdo lo acontecido en los últimos cincuenta años de nuestra historia; ya llegaremos a un punto de esta disertación donde procuraremos establecer algunas conclusiones.

Agreguemos, todavía, que la insurgencia, la situación de fuerza se produjo tanto en países que sufrían dictaduras abiertas, de carácter policial y terrorista,

como en otros donde habían logrado consolidarse, al menos, las formas primarias de la democracia.

Reiteradamente, aún en aquellas naciones donde la victoria revolucionaria se dio por la vía electoral, se produjo simultáneamente con ella, e inmediatamente después de establecido el nuevo gobierno, una existencia de hecho de los sectores desplazados que hizo indispensable el empleo de la fuerza. Me refiero singularmente a dos casos: al proceso boliviano, donde el Movimiento Nacionalista Revolucionario triunfó en una elección presidencial, que le fue escamoteada por los sectores castrenses y oligárquicos, y la burguesía venezolana luego de haberse establecido una incipiente democracia con la primera victoria del Partido Acción Democrática. Por ahora me interesa dejar formuladas estas observaciones, porque uno de los grandes vacíos de nuestro análisis político lo constituye el insuficiente desarrollo de la tesis del “Frente de Trabajadores” en relación con los métodos de lucha. El Partido Socialista ha sintetizado en esta concepción una política de claro contenido social, una estrategia de valor inapreciable en la práctica de la lucha de clases, pero que enunciada en un plano puramente principista no resuelve por sí sola la elección de los métodos de lucha.

Si el Partido desea cumplir cabalmente con su rol histórico, deberá agotar el examen del significado de la violencia en el curso de los acontecimientos chilenos. Cualquiera que él sea, y ello dependerá de condiciones históricas y sociológicas concretas, su presencia en nuestras luchas políticas parece ineludible, y sería un pecado de leso optimismo el suponerla ajena a las tradiciones de nuestras clases dominantes y una ingenuidad imperdonable incurrir en la idealización de los instrumentos electorales.

Cuando usamos, sin embargo, los medios que ofrece la democracia tradicional, debemos emplearlos a fondo, con la mayor eficacia, sin admitir que las reservas mentales debiliten nuestra acción. Una contienda electoral –como un conflicto sindical cualquiera– es una batalla de gran valor táctico, y aún cuando en ella no se resuelve la lucha de fondo, en su desarrollo y desenlace reclutamos nuevas fuerzas, enseñamos y aprendemos, elevamos la moral y la conciencia política de los participantes. Es tan deplorable el abandono de las tareas inmediatas cuando se utilizan los medios legales, en nombre de la “revolución o nada”, como evadir la participación en las acciones directas de las masas, en nombre de una legalidad en plena crisis.

Siempre será necesario distinguir con claridad entre la revolución como proceso social, como una forma de la lucha de clases, y cierto sentido subjetivista de la revolución que a veces aprisiona a ciertos compañeros cuando la estiman no tanto como una larga, penosa y persistente movilización de voluntades populares, que alcanza su culminación dialéctica en la captura del poder, sino como

una mera exaltación de la violencia individual como mero estallido de la ansiedad revolucionaria.

LA REVOLUCIÓN COMO PROCESO SOCIAL

Para quienes pretendemos analizar los caminos hacia la victoria y el desarrollo del socialismo, es fundamental comprender que sólo se produce una situación revolucionaria auténtica cuando existe un conflicto básico entre la estructura social de un país y el desarrollo de sus fuerzas productivas. Esta situación, a mi modo de ver, está presentándose en los países latinoamericanos, y se está presentando en nuestro país. Tenemos la sensación evidente de que las viejas estructuras políticas y jurídicas paralizan la vida de Chile. Para citar solamente algunos renglones ilustrativos refirámonos, por ejemplo, a nuestra incapacidad para capitalizar, para acumular los recursos productivos que nos pudieran habilitar para un gran salto hacia adelante. No hay duda de que la limitación fundamental para lograr una capitalización acelerada radica en el dominio extranjero de nuestras más poderosas fuentes de riqueza. Indiscutiblemente que sólo reteniendo dentro de Chile y aplicando a objetivos sociales los recursos potenciales de capitalización de la gran industria del cobre, sólo por ese camino podríamos colocar al país en un nivel superior de desarrollo, acortar distancias con los países del capitalismo avanzado.

Es obvio, también, que la estructura actual de la propiedad y de la economía agraria inutiliza permanentemente poderosos recursos productivos del suelo, sin que por las vías tradicionales se ofrezca corrección alguna de tal derroche paradójal. Y si quisiéramos agregar un tercer elemento, demostrativo de que en Chile se acumulan presiones insatisfechas a favor de un desarrollo acelerado, bastaría mencionar la tremenda expansión demográfica, característica de todos los países latinoamericanos; vale decir, densas promociones de mano de obra sin empleo práctico dentro del cansado ritmo de nuestra evolución material. Sesenta mil chilenos anualmente resultan frustrados en la demanda elemental de fuentes de subsistencia para ellos y para sus núcleos familiares.

Es, pues, ésta la primera condición que nos permite afirmar —sin ninguna impaciencia verbalista— que en América Latina se están dando condiciones objetivas de carácter revolucionario, en la medida que exigen romper brusca y definitivamente los marcos tradicionales, políticos y jurídicos que contienen el crecimiento y amenazan la supervivencia de cada uno de nuestros países.

Tradicionalmente se advierte —y para fines didácticos nunca debemos olvidarlo— que no basta la presencia fuera de nosotros de este fenómeno económico y social, de esta coyuntura crítica en la sociedad sobre la cual actuamos. El

proceso revolucionario requiere simultáneamente de una conciencia y de una voluntad políticas, la existencia de factores subjetivos, dinámicos y eficaces. Los marxistas sabemos que el paso de una sociedad a otra no es un trayecto mecánico; que para salvar los escollos se requiere la participación activa del hombre, la acción deliberada y consciente del partido conductor. De ahí la importancia decisiva de la existencia de un partido con plena conciencia de sus metas políticas, de su carácter de agente de la transformación y cuya organización y régimen interno le permitan operar como factor de comando sobre la masa trabajadora en su conjunto. Quiero subrayar la necesidad de un examen serio de las condiciones chilenas, para mejorar y enriquecer el patrimonio de ese factor consciente, de ese factor de mando, de ese elemento de vanguardia que es el Partido Socialista. Hay una profunda diferencia entre la apreciación científica de la clase de tareas que debemos enfrentar y de la manera de ejecutarlas y el concepto de la revolución como “mito”, entre la revolución como proceso social y el concepto de la revolución como “santo advenimiento”.

Entre muchos jóvenes militantes es frecuente la superestimación del factor subjetivo en el accionar político; existe, a veces, la convicción de que un partido resuelto puede forzar las condiciones objetivas, y, aún en un país donde ellas no alcanzan un nivel crítico, lograr los cambios ansiados.

Se cita como ejemplo el de Cuba. Para mantener dentro de los límites de tiempo destinado a esta charla, sólo diré que el juicio ignora datos y antecedentes indispensables para una evaluación justa de lo acontecido allí. Lo más espectacular, lo que sentimentalmente cautivó la atención y el fervor de las masas latinoamericanas en el caso cubano fue, ciertamente, la heroica aventura de Sierra Maestra. Y un análisis superficial del episodio parecería probar que bastó este gesto secular, este gesto de magnífica locura, para que las fuerzas renovadoras y contenidas de la sociedad cubana se desencadenaran en el espectáculo impresionante que mira asombrado el continente. Pero, compañeros, si rastreamos en los largos años del régimen batistiano, comprobaremos el enorme caudal de energías gastadas en la resistencia, el derroche de coraje de gran parte del pueblo y de su juventud para crear una conciencia contra la tiranía, para conectar a los distintos sectores en la lucha común, para enfrentar al sacrificio y al martirio, factores todos que revelan hondas tensiones preexistentes y un clima propicio para el despliegue de la iniciativa revolucionaria. El desembarco de Fidel Castro y de un puñado de combatientes valerosos coronó brillantemente la hazaña común, pero no desmiente que la revolución es una larga cadena de acciones—casi siempre anónimas— que es, por sobre todas las cosas, una heroica empresa social.

Por supuesto, había algo más: en la política de explotación de la dictadura oligárquica y del imperialismo, en la insatisfacción y en la íntima rebeldía del

guajiro radicaban explosivos impulsos, allí se hallaban las raíces de la gesta comenzada en Sierra Maestra, continuada en la Reforma Agraria y proyectada finalmente en la construcción socialista que ahora está realizando Cuba.

En resumen, camaradas, si hay alguna reflexión que quisiera transmitir particularmente al joven auditorio de esta asamblea, es aquella tan diáfana y formulada por Edward Kardelj en su libro "El Socialismo y la Guerra":

"Solamente aquella política que combina una clara orientación revolucionaria con un análisis realista de las condiciones objetivas y de todos los factores del desarrollo social es realmente revolucionaria. Esta es la esencia real del socialismo científico."

EL SOCIALISMO, UNICO FUNDAMENTO DE LA DEMOCRACIA

Discurso en el Senado, publicado en
“La controversia permanente: socialismo y liberalismo”,
por Eugenio González Roja.
Colección Documentos N° 2, Prensa Latinoamericana.

Más de una vez, señor Presidente, he expuesto el punto de vista del socialismo, de nuestro socialismo, tanto como referencia al movimiento general de las ideas políticas, como frente a problemas concretos cuya solución reclama la opinión pública. Al término de mi período, me voy a permitir retomar el tema –de un modo brevísimo, en atención a las circunstancias– porque me ha parecido advertir en juicios emitidos por algunos de mis Honorables colegas, en debates recientes, que los fundamentos y alcances del socialismo en la política positiva suelen ser examinados por medio de criterios que no corresponden a su naturaleza.

Por otra parte, me mueve a insistir en esta materia, aunque sea de manera demasiado sucinta, la convicción de que la coyuntura mundial impone severas y honestas confrontaciones de las ideas y los hechos, que permitan adecuar los esquemas doctrinarios del pensamiento político a las conductas reales de las agrupaciones partidistas. La historia, que es vida, es decir, emergencia constante de formas nuevas, rehuye todo encuadramiento en rígidos sistemas. Para ser eficaces, las ideas políticas tienen que ceñirse al ritmo del devenir social; cuando así no sucede, dejan de ser factores dinámicos para convertirse en estériles dogmas, en fórmulas muertas, en mecánicas consignas.

Una doctrina como el socialismo, que aspira a orientar a las generaciones jóvenes y a determinar las bases de una reconstrucción social, necesita acaso más que cualquiera otra interpretar el sentido de la época, los valores permanentes que en ella operan y los que le son específicos, para ajustar a él, con plena conciencia, la perspectiva de una política. ¿Podrá ser el socialismo de nuestros días idéntico al de la segunda mitad del Siglo XIX? ¿No se atenta contra su fecundidad histórica al querer encerrarlo en los dogmas de una metafísica simplista, propia de un período de cientismo atolondrado y de utilitarismo sin medida? ¿Carece de virtualidades profundas que se actualicen ideológica y prácticamente en función de las necesidades concretas de la vida contemporánea?

No sería posible analizar ahora tan complejas cuestiones. Pensamos sí, por

el contrario, que el socialismo se está realizando en el mundo sin intervención, muchas veces, de los partidos socialistas y al margen de los programas abstractos elaborados por los teóricos, como exigencia perentoria de las transformaciones económicas impuestas por los avances tecnológicos, pero también como imperativo insoslayable de la conciencia moral. Y aquí está, a nuestro entender, la fuente primordial de la vitalidad del socialismo: en que es todavía una esperanza de superación humana. Si él no fuera otra cosa que la racionalización, en términos políticos y económicos, de los impulsos utilitarios y materialistas de las masas urbanas, carecería de verdadera grandeza, de virtud creadora.

Sobre todo en el tiempo que vivimos, tiempo del desprecio, de que hablara Malraux. Desprecio del hombre; desprecio, por lo tanto, de los valores del espíritu, de los cuales es portador y a los cuales, sin embargo, aspira en tensa búsqueda de su plenitud vital; desprecio, en fin, de las potencialidades superiores de una cultura que amenaza desintegrarse bajo el peso de una civilización técnica en portentoso desarrollo. Hay una expresión que revela la tergiversada estimativa predominante en casi todos los círculos sociales: se habla con énfasis ominoso del “capital humano”. ¿Podrá llevarse más lejos la degradación de lo humano por la economía?

El hombre ya no es el hombre, en la terminología al uso, aun entre políticos de avanzada: es una cifra de la estadística, un elemento del cálculo de la producción de bienes y servicios, una pieza en el complejo engranaje industrial. Nunca tal vez en la historia universal se había producido semejante confusión de los medios y los fines, una transmutación tan negativa de los valores vigentes en la convivencia humana. Recursos inventados y perfeccionados por el hombre para mejorar su vida, que es sustantivamente vida social, se han emancipado de su voluntad y, como dice un pensador contemporáneo, “el hombre aparece a la zaga de sus obras; el mundo creado por él se le enfrenta con una independencia elemental”.

Así, la técnica, la economía y la política, de simples medios, han llegado a convertirse en fines eminentes. El socialismo —y ésta es la raíz de su fuerza ética y de su significado cultural— tiende a restablecer la subordinación de los medios a los fines y a determinar estos últimos de acuerdo con una jerarquía de valores cuyo eje sea la dignidad de la persona. Aprovechar la técnica, organizar la economía y configurar el Estado de modo que sean posibles, conjuntamente, la libertad política, la justicia económica y el desarrollo espiritual. Podría decirse, en lenguaje de Toynbee, que el socialismo es una respuesta positiva al desafío de las fuerzas disgregantes del mundo actual.

Planificación económica dentro del Estado democrático con vistas a la dignificación espiritual de la vida humana, tal podría ser la fórmula expresiva del pensamiento socialista. Si ella puede prevalecer como pauta rectora en los vie-

jos países de occidente, enraizando en su rica tradición cultural que el socialismo aspira a continuar y a superar, ¿tendrá ella algún sentido en los países latinoamericanos, en nuestro Chile? ¿O habrá que buscar una fórmula distinta en virtud de nuestras peculiaridades humanas, sociales y geográficas? Las formas de vida en que el socialismo se vaya realizando dependerán, por cierto, de las circunstancias nacionales, pero ellas sólo serán auténticas y, por lo tanto, verdaderamente progresivas si están animadas por lo esencial de su espíritu: la dignidad del hombre.

Ningún método de violencia estatal, menos aún la violencia erigida en sistema, es compatible con la índole del socialismo. Puede realizarse por la violencia una cerrada planificación económica que, acortando etapas, haga pasar a un país, en breve plazo, del feudalismo agrario al industrialismo exacerbado, pero ello se hará a costa de una inevitable deformación moral de las nuevas generaciones en el ámbito inhumano del Estado totalitario. El socialismo es revolucionario por sus objetivos, que implican un cambio radical en la estructura de la sociedad capitalista, pero no puede ser dictatorial por sus métodos, desde el momento en que procura el respeto a valores de vida que exige el régimen de la libertad.

De ahí que no nos parezca posible separar el socialismo de la democracia. Más aún: sólo utilizando los medios de la democracia puede el socialismo alcanzar sus fines sin que ellos se vean desnaturalizados. No se trata, por cierto, de la democracia estáticamente concebida, en pugna con el proceso histórico, sino de una democracia viva, que se vaya modificando orgánicamente, de acuerdo con las mudables circunstancias de la existencia colectiva. La democracia puramente formal, de alcances civiles y políticos, tiene que llegar a ser una democracia real, de contenido económico y por sobre todo, en que la preservación de los derechos humanos, experimente menoscabo alguno en provecho del poder del Estado o del progreso de la economía.

¿Cuáles son, entonces, las tareas inmediatas del socialismo en Latinoamérica y en nuestro Chile? Forman los países latinoamericanos un conjunto de acusados rasgos en lo político, en lo económico y en lo cultural, y a todos ellos, en sus relaciones con el resto del mundo y especialmente con los Estados Unidos de Norteamérica, se les presentan problemas de naturaleza similar. Cabe al socialismo, en esta etapa histórica, contribuir al empleo convergente de las energías nacionales de los países latinoamericanos para alcanzar grandes objetivos que les aseguren una comunidad de destino. Sin salirse de la línea central de su política y sin perder de vista su meta trascendente, el socialismo tiene que actuar, para ello, con criterio realista, liberándose internamente del lastre dogmático que entraba su expansión en amplios sectores de los pueblos y de las juventudes.

La industrialización conforme a plan, la reforma del régimen de propiedad y trabajo de la tierra, el reajuste del sistema institucional democrático, la incorporación de las masas a la actividad cultural, la promoción, en fin, de los países latinoamericanos a un grado de desarrollo que los convierta en sujetos del movimiento histórico, sacándolos de su estado de simples dependencias de la política y la economía de los grandes imperialismos en pugna, sólo pueden lograrse sobre la base de un entendimiento cabal de sus Estados en el plano de la política internacional y de una integración orgánica de sus economías; todo ello supone fundamentalmente la existencia normal de gobiernos democráticos, con firme respaldo de la opinión pública, de gobiernos que, por ser fieles representantes de sus pueblos procedan conforme a la identidad de sus intereses.

He aquí el primer deber del socialismo en América latina: esforzarse por la vigencia del régimen democrático, por implantarlo donde nunca ha existido, por restablecerlo cuando haya sido abrogado, por perfeccionarlo si tiende a anquilosarse obstruyendo el progreso social. Aunque sobremanera defectuosa, la actual democracia tiene en sí misma los factores de su perfeccionamiento ulterior. Entre la dictadura y la anarquía tradicionales, polos de la política latinoamericana, el socialismo está decididamente por el régimen de derecho dentro del Estado democrático. Ni aun a pretexto de realizar una política social de avanzada y de sostener actitudes antiimperialistas, puede el socialismo comprometerse con gobiernos generados y mantenidos por la fuerza, como varios de los que afrontan la conciencia civil del continente.

La planificación económica dentro de la evolución democrática es, a nuestro entender, absolutamente necesaria para acelerar el desarrollo interno de nuestros países, como lo es también, en dinámica correlación con ella, la complementación de sus peculiares economías en el plano continental. No queremos, los socialistas –en varias oportunidades hemos insistido sobre el particular–, la absorción burocrática de las actividades económicas por el Estado, sino su coordinación técnica, por intermedio de organismos sociales y públicos que representen a los grupos de productores y a la sociedad en su conjunto. Esto supone, mientras no cambien las bases mismas de la estructura social, la subsistencia de la empresa privada y el fomento del capitalismo nacional en cuanto sean factores útiles para el desenvolvimiento orgánico de las fuerzas productivas.

Tampoco podríamos ser adversos a los aportes externos, financieros y técnicos, que vengan a suplir nuestras deficiencias de capitales, de equipos de expertos, siempre que ellos se produzcan en condiciones que dejen a salvo la seguridad nacional. Una política contraria acusaría incompreensión de la dinámica de las realidades mundiales y de la interdependencia básica de los procesos económicos. Nuestra actitud antiimperialista tiene, pues, una proyección bien

neta: poner término a la servidumbre de nuestra economía y a sus múltiples efectos negativos y corruptores, sin dejar de utilizar, encuadrándola en una firme política de control de intereses y de influencias, la colaboración multilateral proveniente de países de superior desarrollo. Una política seria y responsable tiene que evitar tanto el desaprensivo entreguismo de ciertos sectores de las oligarquías criollas como la impenitente demagogia de ciertos dirigentes de los movimientos populares.

Señor Presidente, ha sido mi intención subrayar algunos aspectos de la política del socialismo que suelen ser arbitrariamente apreciados y a los cuales me he referido en oportunidad propicia con mayor amplitud. Me asiste el convencimiento de que cuanto contribuya a clarificar las tendencias de las fuerzas políticas es saludable para la democracia, sobre todo en estos días inciertos. Densos problemas se plantean a quienes tienen responsabilidad en el destino colectivo. Las circunstancias políticas y económicas inducen a conjeturas sombrías. La depresión de la moral pública y privada ofrece manifestaciones inquietantes en los diversos círculos de la sociedad y —lo que es de sobremanera grave— aun en las altas jerarquías del Estado. Una atmósfera de incuria y desaliento parece embotar los espíritus y paralizar las voluntades. Un generalizado escepticismo de la tónica de la conciencia pública.

Después de sucesivas frustraciones, el pueblo está desengañado, pero alerta. Bajo su aparente indiferencia, se acentúan peligrosas tensiones y cualquier suceso imprevisto puede provocar en él reacciones violentas. Puede, también, encontrar transitoria compensación a sus agobiantes urgencias materiales y espirituales en la ya lanzada campaña presidencial, que le permitirá proyectar más allá de 1958, con ingenuo mesianismo de siempre, su nunca satisfecha esperanza. Porque la mentalidad del pueblo posee ingredientes mágicos que lo llevan a atribuir poderes excepcionales a los caudillos políticos. Mientras tanto, la vida política se deslizará a la deriva, sin orientación firme y sostenida, siguiendo los vaivenes de ocasionales intereses en torno a las postulaciones a la Primera Magistratura.

Vive Chile —mucho se ha repetido— una crisis de crecimiento. Están en crisis no sólo las instituciones de superficie, las jurídicas y políticas, sino además, las estructuras básicas, las biológicas y morales de la existencia nacional. De ahí que ninguna acción aislada, producida en algún sector circunscrito de nuestra realidad, resulte de cabal eficacia, por altamente inspirada que ella sea. La situación en que estamos exige coordinación de propósitos, convergencia de esfuerzos y solidaridad de sacrificios de los que están en condiciones de influir en los órdenes decisivos de la sociedad, especialmente en los políticos y gremiales, donde se presentan los antagonismos de más inmediata repercusión en la opinión pública.

Estamos refiriéndonos a los partidos de avanzada social. De ellos depende, fundamentalmente, que nuestra democracia representativa –de la cual tanto nos enorgullecemos, a pesar de sus graves tergiversaciones– siga su curso regular, perfeccionando las instituciones libres y abriendo cauce a las transformaciones económico-sociales, o vaya a desembocar en conflictos que imposibiliten la continuidad sin encontrar eco: es hora de superar las discrepancias superficiales, para buscar afinidades solidarias; de suspender recriminaciones estériles, para aunar esfuerzos constructivos. ¿No son los partidos de avanzada social, coincidentes en sus principios libertarios, en sus tendencias económicas, en sus métodos políticos? ¿No representan en su conjunto la mayoría nacional? ¿Por qué, entonces, no podrían encontrar las bases de una acción común en el Parlamento, ahora, y más tarde en el Gobierno?

No concebimos la política como medio de encumbramientos personales. Tampoco como ocasión de popularidad y vanagloria. Menos aún como empresa de utilización partidista del poder del Estado. La concebimos como actividad de servicio, como severa vocación patriótica. Corresponde a los partidos de avanzada social, a los partidos que tienen la responsabilidad del porvenir, imponer un nuevo estilo en la vida pública, por encima de cualquier subalterno y transitorio cálculo electoral, un estilo de veracidad y rectitud, de ética ejemplar. Esto implica pensar con realismo la situación nacional, dejando de lado perturbadoras ilusiones, y actuar con honradez, prescindiendo de tácticas demagógicas. Uniéndose con semejantes propósitos para realizar una gran política creadora, tendrán los partidos del pueblo el firme respaldo de la confianza ciudadana.

LA POLEMICA SOCIALISTA - COMUNISTA

Respuesta del Comité Central del Partido Socialista
Incluida en "La Polémica Socialista-Comunista",
Prensa Latinoamericana, 1962.

Camarada
Luis Corvalán Lepe
Secretario General del Partido Comunista
PRESENTE

Estimado camarada:

La Dirección Nacional de nuestro Partido ha considerado detenidamente la carta remitida por la Comisión Política del Partido Comunista, con fecha 28 de marzo próximo pasado, y me encarga transmitir a Ud. las observaciones que le merecen los diferentes temas abordados en ella.

Antes, sin embargo, de entrar al análisis de las materias sustantativas que allí se tratan, deseamos manifestar nuestra complacencia por el tono fraternal y constructivo del documento que contestamos. Nos parece la manera adecuada para consolidar sinceramente nuestras relaciones, y a la vez, de poner de relieve, con la claridad y firmeza que emanan de nuestras recíprocas convicciones, aquellos puntos de vista que justifican la existencia misma de ambas colectividades. Estimamos que la discusión franca y honesta de las tesis sustentadas por cada organización política, constituye un aporte inestimable para encontrar los caminos que lleven al movimiento popular a la victoria y para abordar con acierto las tareas que la historia nos impone, hoy en el plano de la oposición, y, seguramente, mañana en las actividades de gobierno. En un país como Chile, de alto nivel político y de larga tradición cívica, el pueblo no puede permanecer ajeno al examen de asuntos tan directamente ligados a su misión y a su destino.

UN PROPÓSITO COMÚN: FORTALECER AL FRAP

Casi está de más dejar constancia de nuestro pleno acuerdo con aquellas apreciaciones que caracterizan la situación latinoamericana como una etapa de crisis y de decisiones trascendentales. Desde Cuba hasta Argentina, desde Bra-

sil hasta el Ecuador, en todos los países se advierte una profunda voluntad de cambio en las masas trabajadoras. Los episodios de cada día vienen comprobando el ruidoso fracaso de los grandes mitos erigidos por las clases dominantes: la "unidad continental" bajo el comando norteamericano; el formalismo de la "democracia representativa"; el carácter mesiánico y paternalista de los gobiernos de fuerza; la incapacidad mental de las masas pauperizadas para sustituir las falsas elites intelectuales; la indolencia aborigen como justificación de nuestro retraso; los milágricos de la inversión extranjera y de la libre empresa, todas esas sagradas mentiras han dejado de impresionar a los pueblos. Estímulos, instituciones e ideas nuevas tienden a sustituir el viejo orden y empujan al continente por rutas de auténtica libertad, de progreso y de avance cultural.

Chile no es una excepción, por supuesto. Por el contrario, es la escena donde el fenómeno se da tal vez con mayor organicidad, por diferentes razones que sería ocioso describir. El tradicional equilibrio en que desde hace años se viene desarrollando nuestro acontecer político, tiende a romperse en favor de las fuerzas populares, en virtud de la vigorosa incorporación de los campesinos a la lucha social y por el progresivo acercamiento de las clases medias a las organizaciones y los ideales del proletariado. Todo hace suponer, pues, que estamos en el umbral de una transformación de relieves históricos. Pero nosotros, como ustedes, sabemos que el paso a un nuevo tipo de sociedad no será fácil. La reacción y el imperialismo cuentan con una variada gama de recursos para dilatar el proceso. Desde las argucias de la oligarquía, para bloquearnos los caminos tradicionales de la democracia burguesa, hasta los esfuerzos desesperados del capitalismo norteamericano para ayudar a sobrevivir a un régimen en decadencia, todo indica que habremos de luchar muy bravamente para alcanzar la victoria definitiva.

Compartimos, entonces, sin reservas, el espíritu ya manifestado en Las Vertientes, en orden a fortalecer orgánica y políticamente el FRAP y a permanecer vigilantes y alertas para destruir las maniobras que se traman en los círculos más retrógrados del país.

Antes de pasar a los aspectos capitales de este intercambio de ideas, juzgamos oportuno referirnos con brevedad a su origen. Ustedes, en su carta, junto con atribuirlo a las declaraciones formuladas en Magallanes por el Secretario General del Partido Socialista, deploran la inoportunidad de las mismas, en virtud de haberlas emitido coetáneamente a la celebración del XII Congreso del Partido Comunista. Para colocar las cosas en su lugar, es indispensable decir que estimamos un deber insoslayable de cualquier dirigente de partido el exponer libremente las líneas fundamentales de acción de la colectividad a que pertenece. Ustedes lo han entendido siempre así; bastaría revisar cualquier ejemplar de la prensa comunista o los discursos políticos de sus parlamentarios para

encontrar toda suerte de afirmaciones y de tesis, que, si bien reflejan la posición del comunismo chileno, se hallan en abierta contradicción con nuestros propios puntos de vista. Lo mismo tenemos derecho a hacer nosotros, en tanto no se violen ciertas elementales normas de cordialidad y de respeto mutuo, que sostenemos haberse cumplido escrupulosamente en la entrevista del sur. Por lo demás, la conferencia de prensa, fuente de la actual discusión, se efectuó casi dos semanas antes de la inauguración del congreso Comunista, en la provincia más alejada de la capital, de modo que ni siquiera podría interpretarse como una expresión imprudente o extemporánea de nuestro pensamiento.

EL “PAPEL DIRIGENTE” DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Con toda razón, la réplica de ustedes centra la polémica en el problema del “papel dirigente” de la Unión Soviética sobre el movimiento obrero internacional. Este principio constituye el núcleo de la controversia y el punto de partida de muchas otras discrepancias ideológicas y tácticas que se desprenden de su aceptación o rechazo. Se proyecta, en efecto, en las respectivas concepciones de nuestros partidos sobre los problemas de la paz; de la influencia del factor nacional en el proceso revolucionario; de la apreciación del elemento militar en la lucha anticapitalista contemporánea; del origen de las desviaciones ideológicas y, sobre todo, de los medios adecuados para dominarlas y superarlas; de las formas y métodos en las relaciones entre los partidos obreros y entre los Estados Socialistas, para sólo mencionar algunas implicancias obvias.

Para situar bien las divergencias es indispensable convenir en que las palabras empleadas por nuestro Secretario General pudieron ser otras, pero significan, en todo caso, exactamente lo mismo que ustedes quieren decir cuando se refieren al “papel dirigente” de la Unión Soviética y del Partido Comunista soviético o a su carácter de “centro” y “vanguardia” de las ideas avanzadas. Y, por lo que nosotros entendemos, no hay dirección sin subordinación, ni hay vanguardia sin retaguardia. Vale decir, de cualquier modo que se le designe, el reconocimiento de un “centro” con tales características implica una actitud de acatamiento a su conducta y a sus decisiones, pues, de otro modo, todo lo dicho tendría un mero sentido verbalista o simbólico. Si ese es el valor sustantivo de los conceptos reiteradamente empleados, confirmamos nuestra resistencia a aceptarlos como un principio de acción política, aunque se trate sólo de una supeditación puramente ideológica o intelectual, ya que –por supuesto– estamos muy lejos de compartir el criterio estúpido y reaccionario de quienes sostienen que cada partido comunista es una mera pieza de ajedrez movida caprichosamente por las autoridades de Moscú. Nosotros creemos sinceramente que las decisiones

del Partido comunista chileno son tomadas aquí, por sus propios dirigentes. Si así no fuera, nuestra alianza carecería de toda base moral. Pero estimamos, también, que siguen pesando sobre las mentalidad de los partidos comunistas y, entre ellos, del Partido Comunista chileno, toda una gama de concepciones, prejuicios y apreciaciones teóricas equivocadas, cuya persistencia se explica únicamente por aquel reconocimiento de una autoridad especial en el centro soviético. Para citar un ejemplo dramático y reciente, en cuya apreciación esperamos hoy estar de acuerdo, toda la etapa staliniana fue aceptada en el campo comunista sin críticas de ninguna especie, cuando era evidentes, para cualquier observador medianamente informado, cómo se sustituía allí la dictadura del proletariado por una tiranía burocrática y la democracia obrera por una autocracia repulsiva. Fue, precisamente, a continuación de proclamarse la Constitución Soviética de 1936 —“la más democrática del mundo”, según el lenguaje de la época— cuando se dio comienzo a la etapa descrita por Kruschev como un período de terror sin precedentes, que comenzó haciendo sus víctimas entre los propios dirigentes comunistas de la URSS. Pocos casos ilustran mejor la manera como la subordinación a un “centro” —aún el más calificado— obstaculiza el crecimiento sano y pujante del movimiento internacional y lo hace solidario en la arbitrariedad y el error.

Creemos firmemente que tales características tienden a desaparecer, porque siempre la vida vencerá sobre la inercia de las más rígidas concepciones, y es esa certeza la que ha llevado al progresivo acercamiento de nuestros partidos. Vemos con claridad cómo el fortalecimiento de la lucha de los pueblos por su liberación social y nacional hace cada día más rica y más variada la experiencia revolucionaria universal, y por eso creemos en la solidez de tal alianza, y en sus extraordinarias perspectivas. Pero tenemos derecho a suponer, por lo que la historia reciente nos enseña, que, en tanto no se abandone esta noción cardinal del “centro dirigente” y se la reemplace por un sistema de integración democrática de las fuerzas socialistas, cualquier vía original en la conducción revolucionaria o en la construcción socialista pasará a ser fácilmente una herejía y el origen de un cisma irremediable.

LA ANTIGÜEDAD NO DA PRIVILEGIOS

Ahora bien, podrá argüirse —y ustedes lo han dicho— que lo expuesto corresponde a una lógica abstracta, distante, sin embargo, de los hechos y de la historia. Que la URSS tiene ese papel rector independientemente de nuestros deseos y que a los hechos no se les puede invalidar con razones, por convincentes que parezcan. Lamentamos discrepar también de ese punto de vista. La Unión

Soviética puede, sin duda, servir de guía en muchos aspectos del desarrollo social, pero de allí no se puede deducir un liderazgo absoluto y extensivo a todos los planos. Ni la antigüedad de la experiencia, ni la magnitud geográfica del país, ni el tamaño de su población, ni su poderío bélico o material constituyen factores suficientes para asignar la dirección del movimiento socialista a una nación determinada. El socialismo es una empresa demasiado compleja para suponerla sujeta a un mismo ritmo en todas las latitudes, de modo que algún pueblo que inicie con retardo su construcción bien puede alcanzar estadios superiores en un tiempo más breve que otros que lo iniciaron con anterioridad. Eso ocurrió en el sistema capitalista: los EE.UU. de Norteamérica comenzaron a recorrer ese camino cuando ya los viejos países europeos habían realizado en amplia escala la revolución industrial y, no obstante, hoy constituye el corazón de todo el sistema. Por lo demás, el socialismo no es el punto de partida en la vida de los pueblos; su instauración y desarrollo depende en gran medida –sobre todo en las primeras fases– del grado de adelanto de las fuerzas productivas y de la evolución de los factores políticos subjetivos de la sociedad en el momento en que se establece. Mongolia Exterior es un país que lleva decenios en la construcción socialista; Checoslovaquia, en cambio, muy pocos años. Sin embargo, es probable que este último país tenga muy poco que aprender del primero; por eso pensamos que se hace un pobre servicio a la revolución y al socialismo estableciendo preeminencias basadas en criterios cronológicos. Pero hay algo más todavía: tampoco los progresos socialistas son uniformes dentro de cada nación. Una constelación de circunstancias históricas, geográficas, culturales y de todo orden hacen con frecuencia que mientras un país marcha aceleradamente en el terreno de la organización industrial, por ejemplo, se retrase en cambio en el campo de las estructuras políticas, o que se adelante en las técnicas de la explotación agraria y quede rezagado en los dominios del arte. De todo esto queremos desprender, de nuevo, la conclusión de que el reconocimiento de una **dirección única** en el movimiento obrero, aunque se remita a las grandes líneas ideológicas, implica limitar las fecundas posibilidades de desenvolvimiento del marxismo y de la práctica revolucionaria universal.

Más vulnerables aún son las consideraciones que hacen descansar ese papel dirigente en el poderío material, pero omitimos su examen porque ustedes apenas las sugieren, y porque, además, la cuestión se relaciona con el problema de los bloques, que pasamos a abordar.

LO BÁSICO NO SON LOS “CAMPOS” SINO LAS CLASES

Ustedes sostienen en su carta: **“El mundo está dividido, por así decirlo,**

en dos campos principales y opuestos entre sí, el campo capitalista y el campo socialista. En uno gobiernan los capitalistas y en el otro los trabajadores. La naturaleza de ambos sistemas es diferente y también diferentes son sus objetivos. En relación a un problema capital de nuestro tiempo —el de la guerra o la paz— la tendencia natural de ambos sistemas es distinta. El capitalismo, por naturaleza, tiende a la guerra. El socialismo, también por naturaleza, tiende a la paz. La fabricación de armamentos es un negocio sólo para los grandes consorcios de fabricantes de pertrechos bélicos que existen únicamente en el mundo capitalista y no en los países socialistas. Esto podría ser suficiente para no hablar de “política de bloques militares” como política de ambos sistemas y para no colocar en el mismo pie a la OTAN y al Pacto de Varsovia, a la Alianza Militar imperialista y a la Alianza Militar socialista, a una Alianza Militar ofensiva y a una Alianza Militar defensiva, y para no afirmar, como usted lo ha hecho, que “la Unión soviética, al comprometer a los países de su órbita con el Pacto de Varsovia, al vincularlos con compromisos militares, al realizar actos de prepotencia bélica, como ha ocurrido con la explosión atómica última, está llevando al mundo a un tipo de pugna fundamentalmente militar”.

Aparentemente, la argumentación es irrefutable, y lo sería realmente si no partiera de una premisa absolutamente equivocada y reñida con el análisis verdaderamente científico de los acontecimientos.

Veamos por qué. Para un marxista consecuente, el mundo no está básicamente dividido en dos “campos”, entendiéndose por ellos dos áreas geográficas perfectamente definidas en el mapa, aunque ese hecho tenga un valor innegable en la realidad contemporánea. La afirmación del “Manifiesto Comunista”: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”, nos parece válida aún hoy. El mundo, pues, está dividido, en una contienda que tiene a la tierra entera por escenario, entre las fuerzas de la burguesía y las del proletariado, más nítida y esquemática en algunas regiones, más primaria y compleja en otras, pero constituyendo siempre el factor decisivo de la pugna histórica de la cual somos actores y testigos. En algunas zonas, las viejas clases opresoras han sido totalmente desalojadas del poder político, en otras se sigue luchando contra las fuerzas del capitalismo y del imperialismo en un combate frontal, mientras en otras, aún habiendo conquistado fuertes posiciones en la lucha por la libertad nacional contra el colonialismo, los trabajadores constituyen un elemento importante en la conducción del estado. En otras palabras, al admitir que es el “campo”, es decir, una coalición de estados, el elemento socialista por excelencia, y que la adhesión más o menos incondicional a su política y a su conducta determina el grado de socialismo de quienes luchan contra el sistema capitalista, implica, entonces, un enfoque erróneo y unilateral de trascendentales consecuencias prácticas, en especial si

se recuerda que esos estados se hallan taxativamente enumerados en la "Declaración de los 81 partidos comunistas" de 1960. Significa subordinar las necesidades estratégicas del movimiento obrero a la seguridad nacional de los Estados socialistas; significa subestimar toda victoria revolucionaria en tanto no acceda a integrarse en el sistema del "campo"; significa calificar las conquistas políticas de los pueblos y los partidos en función de sus compromisos internacionales y no por el valor intrínseco de las mismas; significa, muchas veces, paralizar el espíritu de ofensiva del proletariado occidental, ante el temor de aparecer favoreciendo una política "extranjera".

LA NOCIÓN DEL "CAMPO" SE OPONE AL INTERNACIONALISMO

Y lleva más lejos aún: a una suerte de idealización metafísica de la conducta gubernativa de los países del "campo", en circunstancias que la conquista del poder está lejos de hacer infalible a la clase vencedora. Como se sabe, el socialismo no es una gracia del cielo, ni una categoría abstracta. Es una realidad, un proceso. El establecimiento de relaciones socialistas auténticas y avanzadas entre los hombres, en el seno de una sociedad, está indisolublemente ligado al avance de la base material y de la conciencia político-moral de la clase trabajadora y todo ello se da en grados y ritmos diferentes. En el curso de tal proceso se dan contradicciones, provenientes algunas de los resabios del viejo orden, como originadas otras en el carácter del período de transición hacia nuevas normas de convivencia. Por eso, los elementos antisocialistas existen y a veces determinan fenómenos profundamente regresivos en lo que formalmente puede calificarse de Estado Socialista o Estado obrero; por eso un Estado "Obrero" o "Socialista" puede adoptar medidas y actitudes antisocialistas. Se trata de algo más que de uno u otro error ocasional. Las tendencias, por ejemplo, a la burocratización del aparato gubernamental, a la hegemonía política sobre otros Estados, a imponer la felicidad por la vía militar a otros países, a suplantarse la legalidad revolucionaria, por el terrorismo policial, constituyen fenómenos reales, se han producido en los hechos y fueron previstas, por otra parte, como posibilidades concretas, por los más autorizados pensadores marxistas. Cuando Lenin sostuvo que "no puede ser socialista el proletariado que acepta la menor violencia ejercida por su país sobre los otros", o Engels advertía que "el proletariado no será sano, ni infalible, ni estará libre de defecto, por el mero hecho de realizar la revolución social", estaban expresando estos temores.

El "campo", pues, no es sino una de las expresiones específicas de la lucha de clases contemporáneas. No la única. Sus intereses no expresan los intereses totales de las fuerzas comprometidas en la acción anticapitalista, sino una parte

de esos intereses. Cualquiera política, por tanto, diseñada sobre la premisa axiomáticamente sentada por ustedes, a saber, que el mundo “está dividido, por así decirlo, en dos campos principales y opuestos entre sí, el campo capitalista y el campo socialista”, constituye una formulación incorrecta y parcial del problema, que lleva a posiciones de hegemonía, incompatibles con una concepción auténtica y democrática del internacionalismo obrero.

Por todo ello, los socialistas rehusamos incorporarnos al llamado “campo socialista”, y someternos a cualquier “centro dirigente”. Propiciamos, en cambio, un multilateral, democrático y activo intercambio de ideas y experiencias entre todas las fuerzas, movimientos, partidos y estados anticapitalistas, sobre la base de la más estricta igualdad de derechos, a fin de que cada cual pueda encontrar, por sí mismo, la vía más eficaz y rápida —y la menos dolorosa— para establecer la sociedad socialista.

LA PAZ Y EL SOCIALISMO

No se trata, como puede verse, de negar la existencia de “rasgos comunes en toda revolución en sus diversas etapas”, ni de un nacionalismo estrecho. Mas que un principio doctrinal, es ésta una conclusión histórica fácilmente perceptible para el criterio menos avisado. Se trata de averiguar cuáles son concretamente tales rasgos, y cuál la autoridad encargada de definirlos. La respuesta sólo puede darla una generalización científica de la práctica revolucionaria de la clase trabajadora en las más diversas condiciones y en las más distintas latitudes.

Cuando nos pronunciamos contra la política de bloques, de cerradas alianzas de estados —con todo lo que tienen de excluyentes— estamos dando expresión a las mismas convicciones. Sólo que se refieren a una forma más característica, si cabe de la noción del “campo”, sobre todo cuando se traduce en una coalición militar.

No podemos negar al bloque soviético su derecho a disponer de ejércitos poderosos, a organizar su defensa, a perfeccionar su equipo bélico. Lo que discutimos es la preeminencia práctica que tales recursos van adquiriendo en la política internacional del bloque y la gravitación de ese poderío en las relaciones internas de la alianza.

Con respecto a nuestra primera objeción, estamos ciertos que todo alarde de capacidad destructiva por parte de la Unión Soviética se traduce en una pérdida de apoyo político y moral en el proletariado del occidente, en un paso más hacia la sustitución de la lucha social en el seno de cada país por la lucha armada entre potencias. Y es un hecho sociológicamente efectivo que la generalidad de

la clase obrera anhela fervorosamente cambiar de régimen, pero no al precio de cambiar de nacionalidad. Una conducta sinceramente propicia a la eliminación de las tensiones, de negociaciones constructivas, se aviene mucho más con la tradición leninista, abre anchas posibilidades de apoyo en la opinión progresista y hallaría, en el fortalecimiento de las fuerzas antibelicistas internas de los países del occidente, un factor de paz infinitamente más vigoroso que las amenazas apocalípticas.

Las fuerzas antiguerreras son hoy más poderosas que nunca. Los conflictos militares, como todos los fenómenos sociales, junto con crecer en magnitud han sufrido transformaciones cualitativas; tienen un sentido, una naturaleza, unos efectos diferentes. Cualquier comparación entre las guerras nacionales del siglo pasado y una eventual guerra atómica global ofrecería apenas analogías superficiales. Se sabe que aun el hipotético vencedor de mañana sería un vencido. Que la **humanidad** perdería la guerra. Ni siquiera un socialismo universalizado resultaría un consuelo, porque sería una especie de “socialismo de las cavernas”, una vez destruido el patrimonio intelectual y material de la civilización. Hay, pues, millones y millones de hombres y mujeres deseosos de abatir los factores belicistas, dispuestos a paralizar a los dementes que pretenden arrastrarnos a un conflicto militar. ¿Por qué exigirles que se coloquen junto al bloque soviético para aceptarlos como sinceros combatientes de la paz? ¿Por qué, cuando sabemos que la historia trabaja para el socialismo en el corazón mismo del sistema imperialista?

Esas masas, al revés de lo que ustedes sostienen, se han sentido brutalmente desengañadas y confundidas cuando, a continuación de haber dicho en 1960: “quien rompa la tregua que suspende indefinidamente las experiencias nucleares es un criminal que atenta contra toda la humanidad”, Kruschew autoriza la insensata explosión de la bomba de 50 megatones. Esos hombres y mujeres aceptan como una imposición de las circunstancias la organización de la defensa nacional, pero rechazan, con todas las fuerzas de sus espíritus, las jactancias atómicas en boca de quien se proclama campeón de la paz y del socialismo. Sobre todo cuando se recuerda que los actos de la Unión Soviética y de sus aliados, independientemente de sus intenciones, no siempre han contribuido objetivamente a preservar la paz. En 1939 el pacto Molotov-von Ribbentrop, en cuya virtud –al decir del primero– Rusia y Alemania “dejaban de ser enemigas” se firmó el 24 de agosto, y el 1° de septiembre las tropas nazis invadían Polonia, y desencadenaban así la Segunda Guerra Mundial. Hoy día la India, país cuya vocación pacífica sería imposible negar, sufre el acoso de China Popular en sus fronteras.

NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA LUCHA INTERNACIONAL

En el orden interno del grupo de naciones socialistas, el espíritu de bloque y la exacerbación de su carácter militar lleva a peores excesos. En nombre de las necesidades de la defensa común contra el cerco capitalista todo parece justificado de antemano, inclusive el uso de la violencia contra manifestaciones legítimas del pueblo trabajador. Si la noción del **campo** asigna a los estados socialistas un papel dominante sobre el conjunto de las fuerzas mundiales, revolucionarias y antiimperialistas, el concepto de **bloque militar** requiere un mando aún más centralizado y excluyente sobre los propios países asociados. Los procedimientos de fuerza empleados contra la insurrección húngara, después de 10 años de subsistencia del gobierno comunista, estarán ajustados a consideraciones de estrategia militar, pero no a los métodos socialistas de relaciones entre los pueblos. Los procedimientos de presión, muy próximos a la invasión armada que se emplearon contra Yugoslavia durante los años posteriores a 1948 —materializados en 937 incidentes fronterizos en 1950, 1.517 en 1951, 2.390 en 1952— constituyen otra prueba de cómo las concepciones específicamente militares pasan a reemplazar toda política socialista de principios en el seno del bloque.

En la actualidad, lo decisivo para diseñar una actitud correcta es eso: reconocer el carácter negativo de la política de bloques. Analizar sus raíces, tiene en nuestros días un valor ético o histórico, pero no político. Lo que ahora importa es saber si se trata de un fenómeno evitable y si trabajando por su progresiva liquidación ayudamos o no al avance del socialismo en escala internacional.

Nadie dudará de que al bregar contra el sistema de alianzas del imperialismo, trabajamos para el socialismo. Tampoco tenemos dudas de que cuando trabajamos por la sustitución del bloque soviético por una amplia comunidad de naciones políticamente libres, devotas de la paz en razón de su propia supervivencia —aunque diferentes en sus estructuras socio-económicas— trabajamos también para el socialismo.

Hablar del “campo imperialista” como de un conjunto homogéneo, incluyendo en esa acepción todos los territorios ajenos al grupo de naciones socialistas, es, al menos, tan absurdo como llamar “mundo libre”, a esa misma parte del planeta donde proliferan las más abyectas dictaduras militares y fascistas. Existen en esa área estados, pueblos y colonialistas y, en esa misma medida, colaboran a la destrucción del sistema en una escala y con una eficacia que ningún socialista tiene derecho a subestimar.

Así queda explicada nuestra posición en la esfera internacional: no perseguimos una desaparición automática de los bloques, porque no somos soñadores sino políticos conscientes de las realidades y de los hechos, pero sostenemos perentoriamente que, en cuanto al socialismo se refiere, pueden y deben

sustituirse con ventaja por una flexible política de coexistencia activa entre estados de diferentes sistemas y una creciente, fecunda e igualitaria colaboración de las fuerzas progresistas en todos los planos.

CÓMO ENRIQUECER LA IDEOLOGÍA

Sostienen ustedes, más adelante, diversas apreciaciones destinadas a justificar el derecho de los comunistas a calificar la pureza doctrinaria del movimiento obrero internacional.

Ya hemos planteado, en otra ocasión, la inconveniencia de erigir en autoridad ideológica indiscutible a cualquier partido en particular, precisamente cuando las transformaciones sociales abarcan un escenario tan extenso como el mundo y los cambios cuantitativos y cualitativos del proceso se producen con velocidad vertiginosa en nuestra época. En tales condiciones, el proclamarse marxista no da títulos a nadie para suponerse infalible. Únicamente la confrontación honesta de las diferencias y el sostenimiento de las diversas tesis a los resultados de las praxis pueden conceder pautas científicas de valoración.

Es cierto que el análisis colectivo del conjunto de los fenómenos sociales es una manera eficaz de elaborar los elementos subjetivos y obtener la madurez ideológica para conjurar muchos errores. Pero dictaminar desde afuera de los procesos, cuándo un movimiento nacional incurre en una desviación o en otra, acompañando el fallo de toda suerte de proscipciones y amenazas, es un comportamiento ajeno a las prácticas socialistas y casi siempre dará resultados contrarios a los que se buscan. Sólo la promoción, en el seno de cada comunidad colectivista, de una cada día más amplia democracia del trabajo, de una participación creciente de los productores en la propiedad social y en la economía, puede liberar aquellos impulsos progresistas que garanticen una evolución ininterrumpida hacia formas más altas de convivencia. Porque las “desviaciones” no son casi nunca artículos de importación en aquellas partes donde se ha desalojado al capitalismo; son el producto de contradicciones internas domésticas, presentes aún en tales naciones en la fase de transición y que obedecen a leyes aún insuficientemente examinadas.

Por mucho que se haya universalizado la ofensiva de los pueblos, el carácter y la naturaleza de cada sociedad y de cada gobierno dependerá esencialmente de lo que ocurra en el ámbito de sus fronteras. Cuando las clases explotadoras son erradicadas del poder, cuando la propiedad de los medios principales de producción pasa a poder de la nación o de la colectividad, cuando las relaciones de producción se alteran radicalmente, estamos en presencia de un acto revolucionario. Hacer depender la calificación de esos acontecimientos de la adhesión

a posiciones internacionales determinadas, acarrea invariablemente graves errores de juicio. Nadie podría explicar satisfactoriamente, por ejemplo, por qué razón Polonia, al recibir más de 400 millones de dólares de ayuda norteamericana, se estima que contribuye, a pesar de todo, a la derrota del imperialismo, en tanto, al aceptar una ayuda semejante, Bolivia estaría traicionando las esperanzas populares.

NATURALEZA DE NUESTRA REVOLUCIÓN Y DE SUS PERSPECTIVAS

Más de una vez insistimos en el significativo aporte de los socialistas chilenos a una nueva formulación de la estrategia popular en nuestro país y, en cierto modo, en otros países subdesarrollados. Sostuvimos y sostenemos que los cambios requeridos por nuestra sociedad no corresponden a la fase histórica denominada habitualmente “revolución democrático-burguesa”. Ni será la burguesía la clase directora de esos cambios, ni ellos consistirán en poner en movimiento las instituciones, incentivos y relaciones características del capitalismo. Aceptamos el carácter eminentemente antiimperialista y antifeudal de las medidas iniciales y la naturaleza nacional y democrática del proceso, pero afirmamos también que, tanto por la decisiva participación de los trabajadores en su gestación y en su desenvolvimiento, como por la necesidad de incrementar aceleradamente las fuerzas productivas, debe desembocar inevitablemente en la erección de un sistema socialista.

Con frecuencia, el atraso técnico conspira contra la rapidez del avance. Poco puede lograr una alta conciencia política si debe edificar la nueva economía sobre medios tan pobres como la rueca casera, o el arado de madera. Es preciso comprenderlo bien para juzgar con equidad cada experiencia nacional.

Tal vez estas consideraciones expliquen por qué una revolución como la boliviana, conducida, no por la burguesía —inexistente como clase de verdadera gravitación social— sino por obreros ferroviarios, mineros y textiles, no ha podido pasar más allá de incipientes ensayos de tipo cooperativo y delimitadas tentativas de gestión obrera en la propiedad estatal. Cuba llegó más lejos porque tenía —ya antes de la revolución— uno de los más altos niveles de ingreso per cápita en América Latina, más abundantes y variadas fuentes de capitalización y —tampoco lo ponemos en duda— porque los países socialistas incrementaron generosamente su equipo industrial.

Allí donde la revolución inició su curso es donde se justifica la “vía pacífica” y no la insurrección, porque si no es el capitalismo el sistema vigente, ni la burguesía la clase dominante, están abiertos los cauces para una progresiva profundización de sus conquistas. Lo prueba la experiencia cubana y debe comprobarlo mañana nuestra propia experiencia.

LA TESIS DE LA “VÍA PACÍFICA”, FACTOR DE CONFUSIONISMO

El último capítulo de la carta de la Comisión Política se detiene en diversas consideraciones estrechamente vinculadas a los acontecimientos chilenos y a nuestras tareas inmediatas. Las más importantes se refieren a la “vía pacífica” como camino de acceso al poder para las masas populares.

En su contestación al artículo del Diputado Millas el camarada Ampuero omitió toda opinión explícita sobre las tesis relativas a la “vía pacífica”. Dentro de los modestos límites de una polémica periodística parecía un tema demasiado denso para abordarlo en forma útil y razonable. Hizo, no obstante, una alusión parcial a la cuestión, con el fin exclusivo de criticar escuetamente el hábito de elevar a la categoría de revelaciones del marxismo aquellas mismas tesis calificadas como “desviaciones” cuando las pronuncian los adversarios políticos. Así pasó con la “vía pacífica”. La “vía pacífica”, explican ustedes es una “vía revolucionaria”; nada tiene de común con el evolucionismo, el reformismo, el revisionismo, y otras abominables deformaciones del marxismo. Sería, por tanto, una posición inobjetablemente ortodoxa y doctrinalmente legítima. Pero, ¿por qué entonces negar a otras tendencias el derecho a sostener formulaciones análogas? ¿Por qué, cuando las sostienen, deben caer bajo los anatemas más severos y ser presentadas invariablemente como traidoras del movimiento obrero? ¿Por qué reservar sólo al movimiento comunista la limpieza de propósitos y la consecuencia en el espíritu renovador del socialismo?

Ahora ya sabemos que la “vía pacífica” no significa renunciar a las profundas transformaciones económicas y sociales, ni abandonar las metas revolucionarias. Sabemos por tanto, que se trata únicamente de la manera de llegar al poder, de los procedimientos de lucha, de los métodos de acción. Hay, no obstante, otros puntos de la cuestión que permanecen oscuros. Si la proclamación de la vía pacífica fuera una simple ratificación de la voluntad de utilizar a fondo los recursos electorales que brinda la democracia burguesa, no se estaría diciendo nada nuevo, ni se justificaría, en consecuencia, el énfasis que se pone en ella. En 1958, el FRAP dio la batalla en las urnas sin hablar de su devoción por la vía pacífica. Cada vez que le ha sido posible, el movimiento popular ha utilizado los medios legales. Pero el carácter **pacífico** de los medios que se recomiendan ahora parece ir más lejos que la pura decisión de enfrentarnos a una contienda electoral: tiende —aunque ustedes no lo quieran— a crear en las masas una falsa confianza en lo que pudiéramos llamar la “normalidad” de las instituciones democráticas, en el funcionamiento leal de los mecanismos representativos; mientras nosotros, por el contrario, estamos convencidos de que, por la propia profundidad de la crisis social que vivimos, toda la formalidad del sistema republicano tradicional está siendo dolosamente barrenada para perpetuar en el poder a las

minorías oligárquicas. Los fraudes electorales de la última campaña son bastante conocidos, en especial la usurpación de los poderes de un Senador demócratacristiano por el norte; los tribunales vienen cercenando las facultades de los parlamentarios en un grado inaudito; las resistencias del Congreso a ampliar el número de ciudadanos con derecho a voto resultan invencibles; todo esto bastaría para evitar cuidadosamente cualquiera idealización del sistema en vigencia. Pero, hay más: escudada en normas aparentemente constitucionales y en una mayoría parlamentaria espúrea, la reacción oficialista trama un cambio de los procedimientos electorales; su desesperación le lleva a proponer un sistema de listas comunes de distintos partidos para elegir al Presidente de la República, es decir, a proponer que se aplique a una elección unipersonal lo que repudió con toda suerte de argumentos para las elecciones pluripersonales. Difícilmente puede darse un caso de mayor cinismo. Si las bases mismas de la contienda democrática –incluso en los marcos estrechos de una sociedad de clases– se alteran deliberadamente para impedir una victoria del pueblo que aparece inevitable, no podríamos predicar la paz sino la resistencia. De ahí que nuestra decisión de concurrir a las elecciones presidenciales significa, simultáneamente, una firme decisión de impedir –por todos los medios a nuestro alcance– cualquier alteración de las normas de la contienda cívica. De ahí también que no confundamos la aceptación de la “vía electoral” con la consagración de la “vía pacífica”, en la forma generalmente entendida.

Tal vez nuestra interpretación de la conducta del Partido Comunista no sea enteramente compartida por ustedes, pero refleja sí las repercusiones prácticas de una consigna ambigua. El movimiento popular debe ejercer enérgicamente su influencia desde ahora en torno al respeto a ciertas normas esenciales y a ciertos derechos irrenunciables. Cualquiera debilidad, aparente o real, estimula al adversario y desanima a nuestras propias fuerzas.

Del comportamiento de la reacción frente a una derrota de sus candidatos en 1964 nadie tiene derecho a hacerse ilusiones: algunos sectores podrán aceptarla llanamente, pero otros se preparan ya para impedirla sin reparar en medios. Actualmente se organiza clandestinamente la Milicia Republicana y en las Fuerzas Armadas se elimina sin contemplaciones a cuanto oficial exhibe un espíritu progresista, o, por su formación profesional, se estima peligroso para la perpetuación del sistema oligárquico. En Ecuador, Brasil, Argentina, tenemos ejemplos recientes de la forma en que las derechas entienden la santidad de las instituciones representativas y de la soberanía nacional.

También nosotros deseamos vivamente evitar la violencia en nuestro suelo; nunca los revolucionarios la buscaron llevados de una especie de sadismo político, pero renunciaríamos a nuestro papel dirigente y debilitaríamos la conciencia política del pueblo si transformáramos nuestros anhelos de paz interna en

meta substantiva de nuestra acción. Con ello sólo lograríamos envalentonar a quienes persiguen la perpetuación de sus privilegios a sangre y fuego.

UNA DISCUSIÓN NECESARIA

Creemos haber dado respuesta cabal a la mayor parte de las cuestiones planteadas en el curso de nuestra controversia. Esperamos haber contribuido a despejar muchas dudas, a precisar diferencias y a consignar analogías. Aquello que la polémica no pudo resolver en el campo de los argumentos y de las ideas, tendrá que dejarse a la experiencia misma del desarrollo social, a la maduración gradual de la conciencia política del pueblo, al devenir de los acontecimientos.

En el transcurso del tiempo, el entendimiento socialista-comunista ha adquirido un carácter más dinámico y, superándose a sí mismo, ha fomentado el entendimiento leal y franco de todos los partidos populares que forman el Frente de Acción Popular. Largos años vivimos en un ambiente de hostilidad recíproca, de una lucha que a veces fue cruenta. En consecuencia, en los inicios del trabajo común en el seno del FRAP, fue imprescindible acostumbrar a nuestros militantes y dirigentes a convivir políticamente y, luego, la Campaña Presidencial del Pueblo acrecentó las condiciones de entendimiento fraternal. Aprendimos a confiar los unos en los otros, a respetarnos por encima de nuestras divergencias ideológicas y tácticas.

Dimos, entonces, confianza a la clase trabajadora en su conjunto y el FRAP se amplió orgánicamente. Llegaron al seno de la dirección política del movimiento popular otras fuerzas progresistas, anhelosas de participar vivamente en nuestra acción revolucionaria. Es en ese momento cuando el entendimiento de los dos partidos obreros experimenta una transformación positiva, se supera dialécticamente, adquiere una nueva calidad. Se confunde con los objetivos superiores de la alianza de todos los partidos del FRAP, instrumento de la liberación política del pueblo y de su marcha hacia el poder, en la medida en que todos los partidos que lo forman son iguales en derechos y, voluntariamente, participan en las decisiones unánimes de su dirección.

Nos asiste la convicción de que, planteadas en sus términos cardinales las diferencias de posiciones desde el ángulo del marxismo, todos los partidos integrantes del Frente pueden y deben contribuir a su dilucidación. Quienes nos proclamamos socialistas científicos pretendemos disponer de los métodos más justos para desentrañar la sustancia y el sentido de los fenómenos sociales contemporáneos, pero es en el activo contacto con todas las fuerzas avanzadas, en el diario intercambio de experiencias con todos los partidos populares, en el conocimiento de las normas de vida y de los anhelos de todas las clases explo-

tadas de la nación, donde hallaremos los datos imprescindibles para orientar nuestro trabajo, sin exclusivismos y sin errores.

Saluda fraternalmente a la Comisión Política del Partido Comunista, por el Comité Central del Partido Socialista.

RAUL AMPUERO DIAZ
SECRETARIO GENERAL

1964, AÑO DE PRUEBA PARA LA REVOLUCION CHILENA

Extracto del Informe
al XX Congreso General del Partido Socialista,
Concepción, febrero de 1964.

Casi 10 años de escisión en las filas socialistas, que se cerraron con el Congreso de Unidad de 1957, impusieron a los dirigentes una preocupación y un deber: cautelar la integridad del Partido, eliminando sistemáticamente los factores que se encuentran en la raíz de los procesos divisionistas. Dos de ellos eran particularmente graves, aunque en la vida partidaria sea difícil separarlos: la débil articulación orgánica y la heterogénea composición ideológica. En última instancia, ambos se resuelven en una correcta aplicación del principio del "centralismo democrático", único sistema que puede garantizar la continua elaboración colectiva de la línea general y la más severa disciplina en la acción.

La unificación de 1957 aportó enorme vigor y renovado prestigio público al socialismo, pero implicaba también una prolongada etapa de adaptación recíproca, durante la cual era inevitable cierto aflojamiento en el vigor de la disciplina para evitar el renacimiento de viejas rivalidades. Lograda, sin embargo, una real integración de las fuerzas que anteriormente constituyen los Partidos Socialista de Chile y Socialista Popular, y en vísperas de afrontar una lucha decisiva por el poder comprendimos, en el Congreso de Los Andes, que se hacía indispensable una seria revisión del régimen interno del Partido. Para que estuviera en condiciones de soportar sin quebrantos las duras condiciones de una fase tan compleja, era preciso eliminar toda ambigüedad en cuanto a su composición, definir con exactitud la competencia de sus autoridades y despejar la gestación de sus Congresos Generales de todos los posibles obstáculos procesales que pudiesen desvirtuar las decisiones o quitarles peso moral. A ese fin se dirigieron variadas iniciativas.

Comenzamos por establecer un nuevo sistema de documentación personal. Hasta ahora, y en todo el curso de la vida del Partido, se había utilizado siempre un carnet con espacio para cotizar durante cinco o seis años consecutivos. Como en las precarias condiciones de su funcionamiento tradicional el pago de cuotas era el único elemento objetivo para calificar la actividad política del militante, ocurría a menudo que miles de miembros, virtualmente marginados del trabajo efectivo, renovaban periódicamente su condición de militantes con sólo adquirir

las estampillas correspondientes a los meses –o a los años– en que se habían mantenido en una total pasividad.

Ninguna cohesión podía esperarse de tal sistema. Una numerosa proporción de afiliados sólo llegaba a decidir y a juzgar; estaba presente en las elecciones de autoridades, pero no en la acción; criticaba la gestión de los organismos superiores, pero permanecía ausente en la ejecución de las tareas. Las prácticas más nocivas del “asambleísmo” tradicional habían sentado sus reales entre nosotros. La autocrítica –entendida como un honesto examen de la propia conducta, antes de extender la crítica a los demás– pasó a ser la denominación falsa de una actitud de inconformismo negativo e irresponsable. Estadísticamente, las cifras de militantes no expresaban realidades, sino ficciones: no existía correspondencia alguna entre las fichas registradas en nuestros archivos y el número de afiliados en actividad. Las consecuencias en el orden financiero eran –si cabe– peores todavía, ya que a la irregularidad completa en las cotizaciones se agregaban condonaciones frecuentes y arbitrarias, concedidas por toda la escala de autoridades, desde el Comité Central hasta el Núcleo, en términos que el pago de las cuotas ordinarias había dejado de ser el cumplimiento de un deber básico para transformarse en un acto ingenuo o, simplemente, en una dádiva ocasional.

Antes del Primer Pleno, a comienzos de 1962, tomamos las medidas iniciales encaminadas a precisar los contornos numéricos del Partido, a determinar las personas que ostentan legítimamente la calidad de militantes y a eliminar de nuestra convivencia a los “militantes de temporada”. Consistieron:

- a) En establecer un nuevo tipo de carnet, de duración indefinida, que contiene una tarjeta de cotizaciones de validez temporal (un año para 1962 y 1963, y bienal para 1964-65). Quien no dispone de la tarjeta vigente en un período determinado pasa provisoriamente a la calidad de simpatizante y si, al término del mismo período, no ha efectuado todavía el canje, queda definitivamente en esa condición.
- b) En promover una reforma de los Estatutos que consagran reglamentariamente el nuevo sistema, y
- c) En actualizar el control central, confeccionando un nuevo fichero para establecer bases serias en la determinación de las representaciones regionales al presente Congreso, mediante el reemplazo total de los carnets en circulación.

Tales innovaciones están lejos de corregir todos los vicios, pero proporcionan un punto de partida sólido para conocer con exactitud quiénes y cuántos son los afiliados en los cuales descansan las decisiones democráticas del Partido. La circunstancia de que, a pesar del interés puesto por el Comité Central en la

campaña de renovación de carnets, sólo un 30% de los viejos militantes haya cumplido con tal requisito,¹ es una elocuente prueba de la debilidad de los vínculos que los unen a la organización.

Complementariamente, dos resoluciones del Comité Central reforzaron el propósito de eliminar prácticas viciosas y de reducir la extrema vulnerabilidad del Partido frente a las infiltraciones extrañas. La primera tiende a establecer una garantía elemental de lealtad de parte de los que llegan a sus filas provenientes de otras colectividades políticas y consiste en exigirles una declaración escrita —y eventualmente pública— de los motivos determinantes de su cambio de actitud. No vemos razón alguna para rechazar el procedimiento: una sana evolución ideológica debe resolverse en un valeroso acto de definición y no en el desplazamiento clandestino, realizado en la sombra. La entenderán como penitencia o como una imposición odiosa sólo aquellos que, en verdad, alientan objetivos ocultos y se incorporan al Partido en “comisión de servicio”, para realizar un trabajo fraccional y de zapa. Insistimos, por eso, en que debe aplicarse con la máxima estrictez esta norma, y que los Comités Seccionales y los Comités Regionales deben calificar severamente la honestidad de tal declaración, aceptándola únicamente cuando es plenamente satisfactoria.

La otra resolución del Comité Central se refiere a normas detalladas para determinar la Seccional o la Región en que cada afiliado ejerce sus derechos de militante. De poca importancia práctica en la generalidad del territorio, donde los Comités Regionales pueden optar entre criterios diversos, el asunto adquiere significación en la capital, donde es la fuente de prácticas censurables. Allí, en efecto, se da el único caso en el país de militantes que **habitan** en el área de un Comité Regional y que **trabajan** en el área de otro, originando, ya sea una dualidad de afiliación y una doble dependencia disciplinaria o traslados constantes, que alteran maliciosamente las decisiones democráticas de la base. Se conocieron allí numerosos casos de camaradas que votaron en la selección de candidatos a regidores en el Primer Distrito y que presentaron sus propias candidaturas en el Tercero, o que aparecen tan pronto integrando directivas en el Comité Regional Santiago-Sur como, a los pocos días, cumpliendo misiones del Comité Regional Santiago-Central.

Se adoptó la regla fundamental de que el **domicilio** determina la subordinación al Comité Regional que corresponda, manteniéndose, no obstante, un criterio flexible en el nivel **Seccional**. La instrucción pertinente se publicó en el N° 26 del Boletín.

El Comité Regional Santiago-Central, poco después de conocida la resolución, representó los inconvenientes prácticos que a su juicio entrañaba para su trabajo, ya que una gran proporción de los militantes bajo su dependencia vivían fuera de los límites del Primer Distrito. Pese a habérsele dado el plazo de un

mes para cuantificar esa proporción, suspendiendo, entretanto, la vigencia de las instrucciones, jamás logramos una información cabal. La apreciación del Comité Regional envuelve, sin embargo, el reconocimiento de que nuestras seccionales, en el corazón de Santiago, llevan una vida en gran medida artificial. Formadas –o al menos dirigidas–, con frecuencia, por militantes que luego de terminar su jornada de trabajo se trasladan a los barrios, carecen de actividad permanente y de conexiones sólidas con la vida local. El hecho, a pesar de todo, no constituye una objeción seria al principio de organización que examinamos, sino, más bien, una comprobación más de los deficientes métodos empleados por el Partido en el más denso núcleo demográfico de Chile.

Además, era preciso regular acuciosamente el proceso de generación del Congreso General. Sólo un procedimiento claro, que evitara los conflictos sobre cuestiones secundarias y eliminara de las preocupaciones de los Congresos los asuntos relativos a su propia constitución, facilitaría la discusión limpia, tranquila y honesta de las cuestiones fundamentales. Todos recordamos las horas preciosas que se derrochan a menudo en asuntos triviales o en litigios de poderes y la premura inconcebible con que a veces abordamos materias decisivas para el Partido y para el pueblo.

Consagramos así algunas prácticas tradicionales en el texto de los Estatutos y desarrollamos normas nuevas, derivándolas de la concepción general de una organización socialista revolucionaria. Fueron las principales:

- a) La delimitación precisa de la fase de discusión previa al Congreso. En adelante sería el Pleno el encargado de convocarlo, iniciando con ello su gestación.
- b) La elaboración de documentos preparatorios para la discusión en el seno de los Congresos Regionales y del Congreso General, que se encomienda a Comisiones de Estudios designadas por el mismo Pleno. De esta manera se espera terminar con la total improvisación en que se incurría a la hora de redactar las conclusiones de los Congresos y de darles una fundamentación adecuada.
- c) Establecimiento de un organismo superior de supervisión y control del proceso de gestación del Congreso, la Comisión Nacional Organizadora, garantizada en su independencia por una especie de inamovilidad reglamentaria. Para el cumplimiento de sus atribuciones en el dilatado territorio del país operaría a través de las Comisiones Regionales, sujetas en último término a las decisiones de la Comisión Nacional.

Con motivo de la realización del Congreso Santiago-Central se presentó una peregrina interpretación de esta regla, según la cual las Comisiones Regionales dispondrían de facultades exclusivas y soberanas para calificar la elección de

los delegados a los Congresos Regionales y para instalarlos, aun contrariando las disposiciones dictadas por la Comisión Nacional. Omitiendo los fundamentos reglamentarios que consagran las atribuciones de la Comisión Nacional, esta tesis plantea una cuestión mucho más grave y trascendente, que afecta a la concepción misma de la naturaleza y la estructura del Partido. ¿Es el Partido, en efecto, una comunidad nacional o sólo una federación de agrupaciones locales y regionales? Si fuera lo último, se comprendería que cada unidad territorial gozara de autonomía para determinar su representación a los Congresos Generales, sujetándose apenas a normas elementales señaladas en los Estatutos. Así, quedaría bloqueada cualquier posibilidad de examinar –en un nivel superior a la región– todo litigio referente al proceso electoral; las Comisiones Regionales organizadoras podrían ser unas más exigentes y otras más tolerantes en el cumplimiento de los requisitos, y, por último, limitadas sus funciones a vigilar la elección de los delegados **en el seno** de cada Congreso Regional –constituido bajo la autoridad inapelable de la respectiva Comisión Regional– la Comisión Nacional carecería absolutamente de objeto o éste se habría reducido a escrutar las votaciones. Misión tan modesta no justifica ni la inamovilidad de sus miembros ni la exigencia de siete años de militancia para pertenecer a ella. Habríamos, además, consagrado una suerte de feudalismo organizacional, propicio al cacicazgo y fuente de peligrosas disidencias.

Pero el Partido no es una coalición de parroquias independientes, es un instrumento unitario y nacional. Las regiones son unidades geográficas integradas en un conjunto indivisible. Lo que un Comité Regional realiza dentro de sus límites territoriales no es un asunto de su incumbencia exclusiva, sino que interesa y afecta a todos los otros Comités Regionales y al Partido entero.

La autoridad suprema de la Comisión Nacional Organizadora, representa ese interés común y garantiza la unidad nacional del Partido.

Pero, para que el ciclo discusión libre –decisión democrática– ejecución disciplinada se realice plenamente, no basta con establecer mecanismos cada vez más evolucionados. El principio del “centralismo democrático” implica también un elemento subjetivo de capital importancia: la firme lealtad al Partido, la identificación ideológica con su línea, con sus métodos, con sus fines, con su destino.

Comprendo lo difícil que es definir este estado de conciencia, esta vinculación simultáneamente intelectual y emotiva, a un Partido que rechaza las posiciones dogmáticas y cualquier autoridad doctrinal que no sea la de sí mismo. La simple adhesión a las posiciones marxistas es insuficiente: bajo las banderas del marxismo se cubren demasiadas escuelas y tendencias para cumplir con tal finalidad y, por otra parte, miles de trabajadores se adscriben al Partido atraídos, al principio al menos, más por su perfil social que por sus concepciones teóricas.

Llegamos, en consecuencia, a una conclusión inevitable: únicamente la conducta cotidiana del militante puede ofrecer elementos de evaluación de su lealtad. Si discute con objetividad y con limpieza, si acata honestamente las decisiones y realiza un esfuerzo auténtico para asimilarlas cuando no contaron con su apoyo, si cumple con disciplina revolucionaria las tareas concretas, no podríamos dudar de su íntima identificación con el Partido. El que emplea, en cambio, procedimientos incorrectos para vencer en las discusiones, resiste y desfigura las resoluciones democráticas o rehuye el cumplimiento de las actividades necesarias para la ejecución de una línea que no comparte, es un elemento de desintegración. No es la disidencia misma, entiéndase bien, la que envuelve los gérmenes dañinos para la unidad ideológica del Partido, sino **la forma** en que se plantea, se sostiene y se difunde. En otras palabras, el peligro comienza cuando no se repara en medios para imponer posiciones determinadas, cuando la opinión propia se coloca por encima de la estructura y el régimen de funcionamiento de la organización. Por eso decimos que la unidad orgánica y la unidad ideológica se resuelven dialécticamente en el principio del “centralismo democrático”.

En la práctica, las amenazas verdaderas a la unidad se cristalizan en el trabajo fraccional, esto es cuando varios militantes se conciertan para trabajar en común, creando en el seno de la organización regular un aparato clandestino. El sólo hecho de promover un grupo de esas características es ilustrativo del desprecio por los procedimientos y las instancias normales y, en el fondo, por el Partido mismo. Es expresivo, además, de la soberbia intelectual que distingue a sus promotores: se consideran protagonistas de una lucha en que ellos mismos son depositarios exclusivos de la “línea justa” y todo el resto del Partido una colección amorfa de traidores, descarriados, ingenuos o ignorantes.

Si la **psicología fraccional** ya revela una honda separación entre el conspirador y el militante, la “técnica” operativa de la fracción corrompe en sus bases mismas la democracia interna. Un grupo pequeño, que impone a sus miembros una disciplina propia y los obliga a sostener posiciones uniformes, puede dominar con relativa facilidad una organización de base; luego, si extrema en ésta el espíritu de cuerpo, el amor propio y el orgullo, puede transformarla a su vez en punto de apoyo para proyectar la influencia fraccional sobre los niveles superiores, con una gravitación desproporcionada a sus fuerzas numéricas reales. Este esquema explica la resistencia de los comprometidos a toda articulación vertical. Ellos prefieren concebir el Partido como un archipiélago, para conquistarlo isla por isla, de ahí que sean defensores recalcitrantes de las tendencias localistas, feudales, individualistas, desintegradoras; oponiendo el militante al Núcleo, el Núcleo a la Seccional, la Seccional al Comité Regional al Comité Central, surgen como los campeones aparentes de la democracia interna cuando no son más que los sepultureros de la unidad del Partido.

El tema no tiene un mero alcance teórico. Las tácticas fraccionales vienen prosperando en diversas épocas y se desarrollan activamente en estos días, obedeciendo —lo que es más grave— inspiraciones y directivas extrañas al socialismo.

Queremos tratar el problema con entera franqueza, porque es preciso ponerle pronto remedio.

El Partido ha sido extremadamente amplio para acoger a personas y grupos de formación trotskista. Tales elementos —heréticos para la mentalidad comunista— sólo serían objetables para nosotros por su propensión al sectarismo, y, sobre todo, por las dudas que podría plantearnos su lealtad a la organización, en el doble sentido de la disciplina y de su aptitud para asimilar correctamente los principios socialistas. De todo hemos tenido: algunos que lograron asimilarse plenamente a nuestras prácticas y orientaciones, pero, también, otros que se refugiaron aquí para explotar a nuestras bases como campo de reclutamiento para sus propios fines, en reemplazo de la esmirriada audiencia que siempre tuvieron los grupúsculos “cuartistas” en la clase obrera.

Ha llegado la hora de separar la paja del grano. Si el Partido quiere surgir como la vanguardia auténtica del movimiento popular, necesita poner término a la labor diversionista de las fracciones antipartido.

La presencia prolongada en nuestras filas de grupos refractarios a someterse a las normas comunes, no es una prueba de la legitimidad del fenómeno, es más bien una comprobación de los escrúpulos morales y políticos que detuvieron siempre la acción de la directiva. En efecto, aunque nadie podría negar la evidencia de un continuo trabajo subterráneo, “cuartista”, en el interior del Partido. ¿Cómo separar a los conjurados de los que simplemente coinciden labor fraccional cuando ellas se realizan, justamente, con métodos clandestinos? ¿Cómo distinguir la maniobra escisionista de la defensa legítima de una posición política?

La liquidación del problema ofrece riesgos, pero la inercia frente al mismo conlleva otros peores, sobre todo ahora, en vísperas de una batalla decisiva, cuando se formula casi abiertamente el propósito de crear un **tercer partido obrero**. En efecto, la crisis chino-soviética, principalmente, pero también el embrujo de las acciones guerrilleras en otros escenarios o la demagogia irresponsable de algunos aventureros, constituyen los ingredientes básicos de quienes pretenden fundar una nueva agrupación política, que dispute el campo a socialistas y comunistas. Nada tendríamos que objetar si se conformaran con reclutar sus adeptos limpiamente, rivalizando con nosotros a la luz del día; pero no es así, **las expectativas se fundan en la destrucción previa del Partido Socialista**. Y si nadie está compelido a pedir nuestra autorización para fundar un nue-

vo partido, a nadie permitiremos tampoco que realice sus propósitos tolerando pasivamente la desintegración del nuestro.

Los promotores de la campaña divisionista van más lejos. Estiman que, si bien existen desde ahora tendencias contrífugas en los partidos mayoritarios de la clase obrera, una derrota electoral en septiembre determinaría una crisis profunda en su autoridad sobre las masas. No es extraño entonces que el 1° de octubre de 1962, la Comisión Política del antiguo C.R. Santiago-Central emitiera un informe a las bases donde se lee, entre otras cosas: “La posibilidad de un acontecer político electoral, de una vía de acceso pacífico al poder esta **definitivamente** caducada en Chile”. Agrega más adelante: “en realidad dentro del marco estricto de la población electoral actual **somos y seguiremos siendo siempre la minoría**”. Dice todavía: “parece acercarse el término del período constitucional (de Alessandri) sin que se divise una coyuntura que permita a los trabajadores derribarlo por la fuerza”.

En buen romance: en septiembre seremos vencidos en las urnas y tampoco existen condiciones insurreccionales. A la acción desintegradora se añaden las consignas del derrotismo.

En el fondo, son estas consideraciones las que determinaron la enérgica reacción de la Directiva ante los sucesos protagonizados por algunos dirigentes en el Congreso Regional Santiago-Central.

Y los mismos antecedentes deben llevarnos a una severa, extensa y responsable investigación para eliminar a los agentes de la escisión y del derrotismo y para demostrar que el Partido Socialista tiene conciencia de sus deberes históricos.

NOTAS

1 Pertenecientes a la Cuarta Internacional Trotskista

POSICIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN SOVIÉTICA EN CHECOSLOVAQUIA

Discurso en el Senado, Agosto de 1968.

Los acontecimientos que se analizan y comentan esta tarde en el Senado son particularmente penosos para quienes militamos en la fila del socialismo, y mucho más todavía para quienes, como yo, acabamos de abandonar la tierra de la Unión Soviética y de otros países que intervienen en el conflicto.

A lo largo de varias semanas, en representación del Senado, y luego del Congreso, un grupo de parlamentarios chilenos fue testigo del gigantesco esfuerzo material y cultural que se desarrolla, con éxito creciente, dentro de las fronteras de las naciones que han elegido el camino del socialismo.

No creo que sea esta la oportunidad de comentar la magnitud de esos logros ni la plena realización que alcanzaron las masas trabajadoras en cada uno de esos Estados.

Digo que estas circunstancias hacen más penoso para nosotros lo que ocurre, porque parecía no existir razón ni móvil alguno suficientemente poderoso –ningún peligro, diría yo– que anunciara la acción que la Unión Soviética y otras naciones han emprendido sobre suelo checoslovaco.

Llegamos a terreno europeo cuando comenzaba a desarrollarse la crisis. Tuvimos la sensación de que preocupaba vivamente –en forma dramática, añadiría–, de preferencia a los dirigentes alemanes democráticos, lo que estaba ocurriendo en Checoslovaquia. Pero al correr de los días y las semanas, luego de las reuniones realizadas –bilaterales primero, y colectivas después– en Cernya y Bratislava, tuvimos la evidencia de que se había encontrado un camino de transacciones amistosas y de que se abandonaba la vía de la presión militar, política y psicológica, por parte de la Unión Soviética y los países que se reunieron con ella en Varsovia.

Regresamos a Chile con la seguridad de que el mundo socialista había salvado esta crisis y de que empezaba a encontrar una ruta para que todos los Estados que han alcanzado una situación de avanzado socialismo, pudieran entenderse en un terreno de rigurosa igualdad, cualquiera que fuese la extensión de sus territorios, el número de su población, la antigüedad de su experiencia o la calidad intelectual de sus líderes.

Nos parecía de la esencia del mundo socialista en plena creación —y lo seguimos creyendo hasta hoy— que ningún Estado tiene derecho a asumir un papel de hegemonía o de dirección monolítica de una experiencia histórica protagonizada por centenares de millones de hombres y de mujeres sobre el planeta entero.

Pero, señor Presidente, no se trata de divagar. Nos duele tener que expresar opinión sobre lo que pasa en el mundo socialista frente a los adversarios tradicionales de toda forma de progreso, ante los fariseos que sistemáticamente han callado frente a todos los crímenes del imperialismo, ante los cómplices del genocidio de Vietnam y de las invasiones a Cuba y a Guatemala. Nos duele —repito— expresar nuestra palabra frente a ellos, pero es indispensable que sea dicha.

Condenamos terminantemente la acción militar de la Unión Soviética y los países aliados contra el Estado checoslovaco. Ojalá que las deficiencias de información y la premura con que se nos ha invitado a dar hoy nuestra opinión, puedan justificar el día de mañana una rectificación de nuestros conceptos, desmentir lo que afirmamos en esta oportunidad, si hechos nuevos mejoran el oscuro cuadro que ofrece el cable. Pero, mientras los datos de que disponemos sean los que hoy manejamos, partimos de la base de que no ha habido autorización legal alguna, ni de los gobernantes checoslovacos ni de los jefes del Partido Comunista para legitimar la intervención. Fundados en ese hecho, nos parece evidente el atropello, que constituye una actitud contraria a la tradición y a los mejores principios del marxismo-leninismo. No lo juzgamos a la luz de los principios de la moral burguesa, acomodaticia, tendenciosa e hipócrita. ¡No, señores Senadores! Engels tuvo palabras categóricas, cuando trabajó junto a Marx, para sostener el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, inclusive para tomar la decisión de no ser socialistas; y Lenin respetó escrupulosamente ese principio, sobre el cual se construyó la Unión Soviética.

En consecuencia, mientras no se pruebe que el Estado socialista checoslovaco y sus autoridades políticas pidieron realmente el auxilio armado a la Unión Soviética para defenderse militarmente de la agresión del capitalismo y de la burguesía, mantendremos nuestra opinión solidaria con el pueblo checo, con el Partido Comunista de Checoslovaquia y con sus gobernantes.

Los episodios que comentamos constituyen el más rudo golpe sufrido en los últimos veinte años por el movimiento revolucionario en el mundo entero, porque brinda oportunidad a los hipócritas de siempre para desacreditar una experiencia que ha dado vida nueva a millones y millones de hombres y mujeres que antes agonizaron en la miseria.

Señor Presidente —lo digo en la creencia de que interpreto cabalmente la opinión de la Unión Soviética popular—, para nosotros es cuestión de principio el que ningún Estado socialista está autorizado para proclamarse el mejor ejemplo

del socialismo, superior a cualquier otra experiencia. Creemos que la clave de la convivencia y de la paz es la comprensión cabal de tal principio.

En 1948, solos en Chile, y probablemente solos en el mundo, defendimos el derecho de la República Popular Yugoslava a buscar su propio camino para construir la felicidad de su propio pueblo. Pasaron los años, y luego de que nuestra actitud se consideró una herejía y como tal fue condenada, todo el mundo socialista hubo de admitir que lo sustentado por nosotros en aquel entonces era la verdad. Hubo hombres de extraordinaria talla ideológica –pienso en Palmiro Togliatti– que proclamaron el principio del pluricentralismo, la necesidad de aceptar que cada pueblo creara su propia forma de concebir el socialismo y la revolución.

En 1956, asumimos igual actitud cuando condenamos la precipitada intervención militar en Hungría, que tanto afectó al prestigio del socialismo internacional. ¿Por qué habríamos de cambiar ahora, justamente cuando la vida parece demostrar que nadie posee el monopolio de la verdad en este rico universo cultural, ideológico y político que va surgiendo de una gran variedad de experiencias socialistas?

De allí nuestras aprensiones de esta tarde, nuestra pena por lo que viene ocurriendo en Europa. Respetamos la experiencia soviética, que acaba de cumplir cincuenta años, que celebró medio siglo de vida con sus resonantes victorias sobre el cosmos, sobre el espacio, y que pudo exhibir en esta fecha memorable a un pueblo materialmente satisfecho, que colma las universidades y colegios y disputa a los centros más avanzados del capitalismo la vanguardia en todos los planos.

¡Qué lástima que ese aniversario se empañe ahora con esa actitud, de la cual –estoy seguro– habrán de arrepentirse mañana los propios dirigentes soviéticos y –con mayor razón– los amigos comunistas del resto del mundo que la aceptaron sin crítica!

Eso pasó también antes, con el estalinismo, contra el cual combatimos, frente al cual nunca claudicamos y que –ahora parece ser ya una certeza histórica– dificultó el avance del socialismo en lugar de acelerarlo.

Hablamos improvisadamente esta tarde. No hemos querido soslayar el problema haciendo alusiones extrañas al trágico tema que nos convoca.

Queremos creer que éste será el último episodio de una larga etapa durante la cual el socialismo se ha venido fragmentando, víctima de un bizantinismo estúpido, basado en la certidumbre de cada grupo, de cada partido, de cada Estado, de ser el único que lo interpreta, lo aplica y lo realiza correctamente. ¡Pobre concepción de una ideología y de una experiencia que abarca todos los continentes de la tierra, que está llamada a construir el mundo del mañana y que sólo podrá vencer el día en que acepte que cada hombre y cada pueblo tiene algo que añadir a la experiencia común y que es fundamental respetar su derecho a esa experiencia!

UN POCO DE HISTORIA. LOS AÑOS VERDES

De "La Izquierda en Punto Muerto",
Editorial Orbe, 1969.

Los años 1956 y 1957 dividen en dos la historia de la izquierda chilena.¹ Desde el nacimiento del Partido Socialista² hasta hoy, el bipartidismo es una de las características más significativas y persistentes en la política popular; pero, mientras en los primeros veinte años la existencia paralela de socialistas y comunistas generó una polarización que desembocó con frecuencia en graves conflictos y en ásperas rivalidades, en los años posteriores se abrió paso a un entendimiento creciente que, se bien no cristalizó hasta ahora en una vanguardia unificada, estableció las bases para una coexistencia pacífica, primero, y para una larga colaboración, después.

Hasta el establecimiento del Frente Popular, la pugna se expresó más bien en la competencia proselitista; sólo muy vagamente se formulaban las diferencias ideológicas o tácticas entre ambos partidos. En los documentos de la época afloran con frecuencia alusiones críticas a la rigidez sectaria de la línea comunista, objetándose el traslado mecánico del modelo bolchevique a una realidad —como la chilena— tan distanciada de lo que era la situación rusa en los años de la revolución soviética. El Partido Socialista, en cambio, tenía un concepto mucho más amplio de las fuerzas sociales destinadas a participar en el proceso revolucionario y menos esquemático en cuanto a las formas orgánicas que adoptaría el nuevo poder político.³

También se advertía una clara disidencia en el enfoque del movimiento sindical. Mientras el Partido Comunista insistía en resucitar a vieja FOCH⁴ y en repudiar los sindicatos constituidos al amparo de la reciente legislación, los socialistas comprendían que cualquier expansión de las nuevas ideas debería contar con una ancha audiencia de masas, para lo cual era imprescindible agruparlas primero en la defensa de sus intereses más elementales. En el hecho los socialistas —mejor que los comunistas— recogían las lecciones de Recabarren, su experiencia en los sindicatos amarillos de la década anterior y su confianza ilimitada en que la práctica de la lucha social facilitaría el aprendizaje político de los trabajadores y les permitiría adquirir una auténtica conciencia de clase.

El "gran viraje" de la Internacional Comunista en su VII Congreso vino a suavizar las diferencias; instó a los comunistas del mundo entre a buscar la colabo-

ración de las fuerzas antifascistas, sin exclusión de ningún orden, y reconoció la necesidad de unificar al movimiento obrero para las grandes batallas que se avecinaban y para enfrentar las contingencias de un conflicto bélico inminente que ya ensombrecía los cielos de Europa.

Desaparecieron, en consecuencia, los antagonismos más ásperos y ambos partidos pudieron entregarse a la tarea de establecer la unidad tanto en el plano sindical como en el terreno político. El Frente Popular quedaba constituido en abril de 1936 y la Confederación de Trabajadores de Chile surge del Congreso de Unidad Sindical, realizado entre los días 24 y 27 de diciembre del mismo año.⁵ El levantamiento faccioso en España y las proezas del pueblo en armas añadieron a la tendencia unificadora un impulso emotivo irresistible, disipando los recelos y predisponiendo a los mayores sacrificios a la joven alianza que acababa de nacer.

TIEMPOS DE GUERRA

Los años siguientes fueron de tempestuosa lucha contra el gobierno de Alessandri. Tanto los azares de esa contienda, plagada de estados de sitio, huelgas, relegaciones y atropellos policiales, como la excitación del continuo y muchas veces trágico enfrentamiento armado con las tropas nazistas de asalto y, por último, las comunes tareas y fatigas de la campaña presidencial de Aguirre Cerda, contribuyeron a soldar las filas del Frente Popular hasta un grado nunca alcanzado antes por otra coalición política.

Ni los procesos de Moscú, de tan profundas repercusiones en todo el mundo progresista, disminuyeron la cohesión del bloque ni el fervor de sus prosélitos. Las preocupaciones políticas se centraban cada día más en la amenaza totalitaria a medida que, una tras otra, las naciones de Europa sucumbían bajo la avalancha de los ejércitos de Hitler.

En octubre de 1938, sólo dos años y medio después de su fundación, el Frente Popular vencía estrechamente en la elección presidencial. Los partidos obreros, obviamente comprometidos a colaborar con el mandatario electo, se encontraron ante una situación absolutamente nueva, ante un doble deber, que consistía en presionar audazmente en favor de las reformas democráticas, resguardando, no obstante, su independencia, ante las vacilaciones propias y previsibles de un gobierno pequeñoburgués. En esa misión habían fracasado invariablemente los partidos socialistas del viejo mundo.

Cerrada una etapa de esfuerzos comunes para arribar al poder, que obligaba a posponer cualquier fricción extraña a las exigencias prácticas de la lucha, el enfoque de las nuevas tareas exteriorizó serias divergencias tácticas entre so-

cialistas y comunistas, agravadas por la circunstancia de que mientras los primeros compartían responsabilidades ministeriales, los otros gozaban de una ilimitada libertad para la agitación y el proselitismo en los frentes de masas.

Dos hechos circunstanciales contribuyeron poderosamente a limar las asperezas y a mantener una relativa coherencia en la política popular. Uno fue el terremoto que asoló cinco provincias con una violencia espantosa, a comienzos de 1939, destruyendo la economía local y diezmando la población. El otro, el frustrado cuartelazo del General Ariosto Herrera, en agosto del mismo año.

La necesidad de acudir en urgente auxilio de los damnificados, las privaciones y penurias impuestas por la catástrofe, las iniciativas y los desvelos requeridos por la reconstrucción de una economía mutilada, obraron como estímulos de fuerza impresionante desde las bases mismas del pueblo hasta las esferas más altas del gobierno. Idéntico impulso de unión y solidaridad se proyectó sobre las masas, aunque en un plano preponderantemente político —en la mañana del 25 de agosto y en las jornadas posteriores— como respuesta al fallido alzamiento del Regimiento Tacna.

Pero los acontecimientos internacionales seguían su marcha inexorable y debían conducir al primer enfrentamiento crítico de las posiciones socialistas y comunistas. Dos días antes que el General Ariosto Herrera intentara repetir aquí la felonía de Franco, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y de la Alemania nazi —Molotov y Von Ribentropp— en Moscú y bajo la tierna mirada de Stalin, brindaban por una larga amistad entre sus respectivas naciones. Acababan de suscribir el Pacto Ruso-Germano, de tan profunda gravitación en los medios progresistas y en la política de izquierda en los años posteriores. Una semana más tarde los ejércitos hitlerianos invadían Polonia y el mundo entero se sumergía en la guerra más terrible y destructiva de todos los tiempos.⁶

A lo largo de la Administración Aguirre Cerda se acentuaron notablemente las divergencias socialistas-comunistas. Por primera vez en forma tan dramática y ostensible se planteaba la cuestión de la autonomía de los partidos obreros con relación a la política soviética. Bruscamente, el Partido Comunista había pasado de una posición ardientemente antifascista,⁷ a una actitud de condescendencia hacia el Eje y sus aliados. La guerra, propagándose como un incendio, ya no se presentaba como la trágica consecuencia de la agresión nazi sino como un tenebroso pleito de dos imperialismos igualmente repudiables. Era natural, entonces, que los socialistas señalaran la sumisión de sus precarios aliados ante el viraje del Kremlin como una desertión de sus deberes para con los intereses concretos e inmediatos del pueblo de Chile.⁸ Hasta entonces las diferencias de juicio se habían referido a la interpretación de acontecimientos de proyecciones puramente internas, ocurridos en la Unión Soviética, pero ahora el insólito compromiso alteraba todo el cuadro de la situación mundial, desmentía el carácter

principista que hasta entonces tuvo la oposición marxista al fascismo y hacía más vulnerable que nunca la situación del hemisferio frente a la agresión totalitaria, desatada tanto desde dentro como desde afuera.

La polémica se mantuvo viva a lo largo de este período, deteriorando más y más el clima de las relaciones socialistas-comunistas. Cuando, como era de prever, la maquinaria militar del Eje se volvió contra la URSS en el verano de 1941, súbitamente la conflagración cambió de naturaleza otra vez para la acomodaticia dialéctica stalinista, transformándose ahora en una guerra santa de liberación de los mismos pueblos sojuzgados en la primera fase de la contienda. La brusca conversión facilitó el restablecimiento de la unidad en el campo popular, pero sobre un suelo sembrado de recelos, desconfianzas y ambigüedades. Las alternativas de la guerra habían dejado una profunda grieta entre los dos partidos.⁹

Las divergencias se ahondaron cuando la muerte del Presidente Aguirre Cerda¹⁰ abrió una intensa campaña política para designar a su sucesor. Estaban lejanos los días de luna de miel del Frente Popular, el Partido Socialista comenzaba a atravesar serias dificultades internas y el postulante radical y posterior Presidente no hacía misterio de sus antipatías hacia el Partido Comunista.

La administración Ríos, finalmente establecida con el apoyo de comunistas y socialistas, implicó un notorio retroceso en la orientación y el espíritu del movimiento popular. Pese a la constante y enérgica presión desde la izquierda, sólo muy tardíamente el Gobierno rompió relaciones con el Eje Berlín-Roma, y, más allá del campo de las relaciones exteriores, las fuerzas avanzadas carecieron de la cohesión táctica indispensable para contener el proceso de regresión.

Todo el año anterior a la muerte de Juan Antonio Ríos¹¹ se caracteriza por la agudización de las querellas entre los partidos marxistas, por frecuentes interinatos en la jefatura del Ejecutivo y por la incertidumbre y las maniobras que dominan la vida de los partidos mientras declina visiblemente la salud del Primer Mandatario. Bajo la vicepresidencia de Alfredo Duhalde, una huelga salitrera en Iquique, seguida de la cancelación de la personalidad jurídica de los sindicatos comprometidos, provocó ese verano una tensa crisis.

La clase obrera de Santiago respondió al decreto primitivo con una vigorosa movilización de masas, trágicamente reprimida por la fuerza pública, con un saldo sangriento de muertos y heridos. A la masacre siguió un paro general de impresionante amplitud, la renuncia del gabinete y, como primer acto de una descabellada aventura, entre la dirección del Partido Socialista y ciertos sectores de las Fuerzas Armadas se selló una coalición bastarda, carente de principios, de programa y de base popular.

Así se generó el llamado Ministerio del Tercer Frente, híbrido compromiso de algunos altos oficiales, seducidos por la estelar carrera político-militar de Perón,

con jefes socialistas que no supieron responder con lealtad a la confianza que las bases del Partido acababan de otorgarles. Bajo el pretexto de abrir camino a un gobierno intermedio entre la reacción y el comunismo animaron una administración mediocre, ahondaron las grietas que debilitaban el movimiento popular y estuvieron a punto de pulverizar al Partido Socialista como herramienta política. En el Congreso General celebrado en octubre de 1946, esos dirigentes fueron drásticamente destituidos.

EL PUEBLO LO LLAMA GABRIEL¹²

La escisión en las filas populares alcanzó su expresión más dramática en el curso de la campaña presidencial de 1946 y en la primera parte del gobierno de Gabriel González Videla.

Interiormente fragmentado por un violento choque de tendencias contradictorias, originadas en un largo y despiadado debate alrededor de la política de colaboración gubernativa, el socialismo había perdido gravitación, autoridad y empuje. Sus militantes, sin embargo, pese a tales conflictos, coincidían en un común rechazo de la candidatura de González Videla. Los comunistas, por el contrario, jamás se jugaron con tanta decisión y entusiasmo como en esta oportunidad. El antagonismo alcanzó contornos de encono y violencia sin precedentes, anunciadores del clima predominante en la nueva administración hasta el momento en que se produjo la ruptura entre el Partido Comunista y su abandorado de la víspera.

Gabriel González organizó su primer Gabinete con la participación de liberales, radicales y comunistas. El Partido Socialista, pese a haber contribuido a dirimir el pleito presidencial en favor del nuevo mandatario con el voto de sus senadores y diputados, fue acorralado y sometido a un ataque implacable desde las esferas del Gobierno, con el propósito proclamado de destruirlo como fuerza de opinión y como partido.¹³

La minoría derrotada en el XI Congreso Socialista¹⁴, celebrado en Concepción, mantuvo una terca renuencia para acatar la política aprobada allí con el apoyo fervoroso de los delegados de todo el país. Para ella, la línea correcta consistía en adoptar una agresiva actitud anticomunista como eje de la acción partidaria, propiciando inclusive una abierta alianza con los partidos más reaccionarios: el Liberal que, desde dentro del Gobierno socavaba las posiciones del Partido Comunista, y el Conservador, a cuyo cargo corría el ataque frontal desde las filas opositoras.

Para la joven dirección del socialismo la tarea era de una dramática complejidad; se veía enfrentada a luchar bravamente por la supervivencia del Partido,

víctima de una persecución tortuosa y despiadada desde el poder, y, simultáneamente, a ejecutar sin debilidades la política de clase sancionada por el Congreso reciente.

El tratamiento recibido durante largos y aciagos meses no alteró la conducta de principio del nuevo Comité Central Socialista. Cuando el Ejecutivo envió, primero, dos proyectos de Facultades Extraordinarias, y luego el Mensaje de la Ley de Defensa de la Democracia para arrebatarse la legalidad al Partido Comunista, mantuvo intransigentemente su oposición a tales iniciativas, hasta el punto de sancionar severamente a tres diputados que se abstuvieron en determinadas votaciones, dando comienzo —con ello— a la crisis interna que estalló después, de la cual nacieron el Partido Socialista de Chile y el Partido Socialista Popular.

El episodio de la votación parlamentaria de las leyes represivas fue el pretexto final para el establecimiento de una autoridad de facto, generada en los equipos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Chile, que obtuvo el reconocimiento del Tribunal Calificador de Elecciones como directiva legal del socialismo, en un fallo de inaudita parcialidad y torpeza.

Desalojado del Ministerio y confinado a la ilegalidad, el Partido Comunista sufrió de su ex abanderado una persecución inclemente. Su infortunio, sin embargo, no logró conmover al conjunto del pueblo ni restablecer con prontitud los vínculos fraternales con los socialistas, profundamente dañados por la hostilidad sistemática y reciente que sus militantes habían sufrido en todos los planos, desencadenada desde las alturas del poder por sus hermanos de clase. El pronunciado sectarismo de que hizo gala el Partido Comunista en su acción gubernativa, impidió —en el momento de la ruptura— que contara con la solidaridad indispensable para bloquear el entronizamiento de la virtual dictadura legal en que se convirtió después el gobierno inaugurado bajo tan alegres auspicios. Sus propios dirigentes recibieron el cambio de rumbo con una mezcla de perplejidad, irritación e impotencia.¹⁵

Los últimos años de la administración de González Videla ofrecen un espectáculo deprimente para las fuerzas de izquierda: un Partido Comunista en la ilegalidad; un Partido Socialista de Chile colaborando activamente con el régimen en plena vigencia de la Ley de Defensa de la Democracia¹⁶, un Partido Socialista Popular luchando angustiadamente por abrirse paso en un clima de confusión y desencanto. De los partidos de la época, únicamente el Socialista Popular y el Agrario Laborista se resistieron a colaborar con el Presidente González Videla: todos los otros, en una u otra fase, participaron oficialmente en las tareas del gobierno.

EL GENERAL DE LA ESPERANZA

Cuando el Partido Socialista Popular –luego de un prolongado y tenso debate interno– proclamó la candidatura de Ibáñez –símbolo ahora de un vasto movimiento de depuración política, de reivindicación nacional y de restauración democrática– ya se había caminado mucho en el reencuentro de las diversas corrientes del movimiento obrero. Las acciones gremiales unitarias en los últimos años y el repudio general a la legislación represiva presagiaban un progreso en el entendimiento político. Pero este no llegó: en vez de reforzar al Partido Socialista Popular, que había salvado honrosamente una fase de agudo confusionismo y comenzaba a perfilarse como centro de un vigoroso reagrupamiento popular, el comunismo prefirió levantar su propia candidatura presidencial, asociado al pequeño Partido Socialista de Chile, en cuyo seno se había producido el desplazamiento de los primitivos líderes del grupo en favor de un elenco de socialistas populares, que abandonaron voluntariamente el Partido en un gesto de resistencia y repudio a la candidatura del que empezaba a ser aclamado por las multitudes como el General de la Esperanza.

Pese a la distancia numérica que separó a ambos candidatos¹⁷, el Partido Socialista Popular comprendió desde el primer instante la necesidad de ofrecer un camino de colaboración al Partido Comunista, de lo cual dejaron amplio testimonio las declaraciones de sus más altos personeros. Recién instalado el nuevo gobierno los esfuerzos principales se dirigieron a reconstruir la unidad sindical, rota desde 1946, utilizando como punto de apoyo el Ministerio del Trabajo –servido por un socialista popular– hasta culminar con el Congreso Constituyente de la Central Unica de Trabajadores, realizado en Santiago, en febrero de 1953.

Las primeras dificultades entre el socialismo popular y el Presidente de la República no tardaron en surgir. Simultáneamente, la creciente participación de los comunistas en las actividades opositoras tuvo la virtud de soldar en un amplio frente a las fuerzas oligárquicas –enemigas tradicionales de Ibáñez– y al Frente del Pueblo, supuesta vanguardia política de las clases explotadas.

Las divergencias en el seno del Gabinete se centraron en las negociaciones para romper el monopolio norteamericano en la colocación del cobre de la Gran Minería y en la aplicación de medidas de emergencia al conflicto laboral surgido en las oficinas salitreras de la Anglo-Lautaro. En el primer caso, el Partido Socialista Popular alentó vigorosamente la concertación de un acuerdo con la Unión Soviética para la colocación de unas 100.000 toneladas de cobre, a fin de quebrar la resistencia yanqui y mejorar los niveles internacionales de precio, y, en el segundo, repudió sin reservas la aplicación de una legislación represiva a la huelga que sostenían los empleados del salitre. La negociación del cobre terminó en un fracaso, mañosamente gestado en el interior del gobierno mismo, y la

huelga del salitre fue sofocada en otra maniobra conjunta de las empresas y sus agentes infiltrados en los más altos círculos del Ejecutivo.

Cuando, en octubre de 1953, a menos de un año de iniciada la nueva administración, el Frente Cívico, integrado por todos los partidos opositores, ungió senador en una elección complementaria al profesor universitario Luis Quinteros, venciendo a los candidatos de gobierno, la situación del Partido Socialista Popular se hizo insostenible¹⁸. Solo arriba, frente al poderoso Partido Agrario Laborista –agrupación aluvional de heterogéneos elementos terratenientes y pequeños burgueses– y a la gama multiforme de seguidores personales del Presidente de la República, y combatido con saña por las colectividades populares minoritarias, desde abajo, literalmente entre dos fuegos, fue incapaz tanto de empujar al Presidente hacia la izquierda como de ganar el apoyo de otras fuerzas de avanzada para esa ambiciosa tarea¹⁹.

Socialistas y comunistas habían agotado, cada uno en su oportunidad, la experiencia de gobernar en colaboración con partidos centristas, de clara filiación burguesa. Creyeron, en algún momento, que la hegemonía sobre las masas que no habían podido dirimir en una larga rivalidad alentada en la base podría decidirse desde las alturas del poder. Para lograrlo, separadamente, habían desplegado tácticas diferentes, pero unos y otros habían fracasado. Luis Corvalán lo ha reconocido con mucha honestidad:

“...comunistas y socialistas se han disputado muchas veces la dirección del movimiento obrero, tratando de desalojarse recíprocamente. Además, en 1946, con Duhalde, y en 1952 y parte de 1953, con Ibáñez, muchos socialistas soñaron con crear y dirigir un movimiento popular y luego con resolver los problemas del pueblo y del país desde el gobierno, sin o en contra de los comunistas. De otra parte, en 1946 y comienzos de 1947, no pocos comunistas pensaron igual respecto de los socialistas.

Estamos seguros que comunistas y socialistas han sacado las debidas lecciones de los errores del pasado y que, en el presente, no existen aquellas tendencias al exclusivismo en la dirección política del pueblo”.

Como 20 años atrás, socialistas y comunistas estaban en el llano otra vez, enfrentados a la responsabilidad de conducir al pueblo a una nueva ofensiva por sus derechos, por sus esperanzas, por el poder.

NOTAS

1 En este trabajo se usa la expresión “izquierda” simplemente para identificar la política protagonizada o inspirada por socialistas y comunistas, evitando así toda disquisición bizantina.

2 19 de abril de 1933.

3 Durante la llamada “Revolución del 4 de junio”, cuando por primera vez se habló del socialismo como inspiración y meta de un gobierno, entusiastas universitarios comu-

nistas instalaron en la Casa Central un “Soviet de Obreros, Campesinos, Soldados y Marineros”, sólo que, esta vez, sin obreros ni campesinos, sin soldados ni marineros...

4 La Federación Obrera de Chile, que jugó un papel relevante en los primeros años de la década del 20. Estuvo afiliada a la Internacional Sindical roja desde su congreso de Rancagua, en diciembre de 1921.

5 La CTCH refundió en una sola organización a la antigua FOCH, a la confederación Nacional de sindicatos, a la Asociación de Empleados de Chile y a la Unión de Empleados de Chile; sólo se mantuvo al margen la Confederación General de Trabajadores, de orientación anarquista.

6 En suma, el pacto del 23 de agosto de 1939 aseguraba a Hitler que la Unión Soviética no atacaría a Alemania en caso que Francia e Inglaterra entraran a la guerra para cumplir sus compromisos con Polonia, de ser ésta agredida por el III Reich. El 1º de septiembre las tropas nazis invadieron Polonia y comenzaba la II Guerra Mundial.

7 En la página 390 de la Historia del Partido Comunista de la URSS, Ediciones Lenguas Extranjeras, Moscú, 1939, se lee: “Han desencadenado la guerra en los diversos confines del mundo los tres estados agresores: los círculos gobernantes fascistas de Alemania, Italia y el Japón”.

8 El 15 de diciembre de 1940, Oscar Schnake, de regreso de la Conferencia de La Habana, precipitó la quiebra del Frente Popular con un discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán. Pese a que la dirección del Partido Socialista ignoraba el alcance de las palabras que se proponía pronunciar, como se desprende del discurso de presentación de Marmaduke Grove en el mismo acto, ellas reflejaban una opinión compartida por la generalidad de las bases socialistas.

9 La suprema razón del Pacto, invocado por Stalin años más tarde, fue la necesidad de comprometer primero en la guerra a las potencias occidentales, evitando que la Unión Soviética se viera forzada a combatir sola contra el Eje. Cuando Francia capituló y todo el frente del oeste se hizo añicos, poco pudo quedar en pie de esa excusa: a pesar del Pacto, Rusia tuvo que soportar sola la embestida nazi, desangrándose mientras volvía a erigirse el frente desplomado en 1940.

10 El Presidente Aguirre Cerda murió el 25 de noviembre de 1941.

11 El Presidente Juan Antonio Ríos murió el 27 de junio de 1946.

12 En el curso de la campaña del 46 alcanzó gran popularidad un poema de Neruda que llevaba este título. Durante la represión desencadenada después, en la clandestinidad, circuló otro —cuya paternidad desconocemos— titulado “El pueblo lo llama traidor”. Todavía no se escribe el ensayo, en prosa, que llene el vacío entre los dos poemas.

13 Características de esa tendencia es el artículo publicado a fines de 1946, en “El Siglo”, bajo el título “El Partido Socialista marcha hacia su desaparecimiento definitivo”, donde se condena con acritud el desprestigio que se quiere sembrar “contra el Gabinete”, se acusa a todo el Partido Socialista de estar bajo el control de los trotskistas y se anuncia su “naufragio total”.

14 El XI Congreso General se desarrolló entre los días 18 y 20 de octubre de 1946. Allí fue derrotada la dirección presidida por Bernardo Ibáñez y fue elegido Secretario General Raúl Ampuero. En la elección presidencial de septiembre, Bernardo Ibáñez había alcanzado poco más de 12.000 votos en todo el país.

15 Años después, entrevistado Volodia Teitelboim por “Última Hora” (1952), luego de

rememorar que el Partido Comunista había logrado situarse como la segunda fuerza política del país en las elecciones de abril de 1947, dice:

“Nosotros recordamos con toda claridad las expresiones con que nos recibió el Presidente de la República al día siguiente de la elección. Recordamos siempre que nos dijo: “Yo no puedo permitir que el PC llegue al poder por las vías democráticas”.

Pregunta: ¿Y cómo reaccionaron ustedes?

Respuesta: Esto, en primer término, significaba que el Presidente de la República tiene un concepto muy particular de lo que es la democracia. En segundo término, era una confesión indirecta de que había contraído compromisos que precisamente no eran los del programa que juró cumplir, y, en tercer término, llegamos a la conclusión que había madurado el plan de persecución anticomunista y antiobrera que no tardó en poner en práctica”. Pese al rigor lógico de tales “conclusiones”, la pregunta quedó sin respuesta.

16 El Ministerio en funciones al momento de dictarse la Ley de Defensa de la Democracia y encargado de su aplicación estaba conformado así:

Ministro del Interior:	Inmanuel Holger Torres.
Ministro de Relaciones Exteriores:	Germán Riesco Errázuriz.
Ministro de Educación Pública:	Armando Mallet Simonetti.
Ministro de Economía y Comercio:	Alberto Baltra Cortés.
Ministro de Justicia:	Luis Felipe Letelier Icaza.
Ministro de Agricultura:	Víctor Opazo Cousiño.
Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social:	Guillermo Varas Contreras.
Ministro de Hacienda:	Jorge Alessandri Rodríguez.
Ministro de Defensa Nacional:	Guillermo Barrios Tirado.
Ministro de Tierras y Colonización:	Fidel Estay Cortés.
Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación:	Ernesto Merino Segura.
Ministro del Trabajo:	Ruperto Puga Fisher.

17 Carlos Ibáñez del Campo obtuvo 446.439; Salvador Allende 51.975, en la elección presidencial de 1952.

18 La candidatura Quinteros fue proclamada en un documento firmado por Luis Bossay Leiva, Presidente del P. Radical; Hugo Zepeda Barrios, Presidente del P. Liberal; Juan Antonio Coloma, Presidente del P. Conservador Tradicionalista; Jorge Mardones Restat, Presidente del P. Conservador; Salvador Allende Gossens, Presidente del Frente del Pueblo; Alfredo Molina Lavín, Subsecretario General del P. Socialista de Chile; Jorge Costa Canales, Presidente del P. Democrático de Chile; y Juan de Dios Carmona Peralta, Presidente de la Falange Nacional.

19 Como un vaticinio, se puede leer en el informe del Comité Central al Congreso Socialista de Chillán (1952): “Ya todo esto sucedió, como se ha dicho, en 1946, de manera que la experiencia confirma lo que la teoría social puede anticipar. Un gobierno de coalición, de compromiso entre las corrientes revolucionarias y sectores relativamente avanzados de las clases dominantes es un régimen transitorio. Tarde o temprano será necesario aplicar medidas de gobierno que afecten intereses sociales concretos, y entonces se producirá la fricción inevitable, a menos que una de sus alas acepte pasivamente el dominio de la otra. En la generalidad de las experiencias históricas la capitulación la realizan los elementos progresistas; el poder los desgasta y los divide, en tanto los grupos defensores del viejo orden encuentran siempre la espontánea solidaridad de los que fueron desplazados”.

PUNTOS DE CONFLICTO

De "La Izquierda en Punto Muerto",
Editorial Orbe, 1969.

POR QUÉ DOS PARTIDOS

Conociendo la historia de la bifurcación del movimiento obrero europeo en sus ramas socialdemócrata y comunista, es fácil explicarse la hondura de la disputa y las dificultades para una reconciliación. Si grandes distancias las separan en el campo ideológico, más insalvable aún fue el antagonismo estratégico que escindió a la Internacional en el curso de la Primera Gran Guerra. Los acontecimientos posteriores no han hecho más que acentuar el alejamiento, a medida que cada corriente configura sus propios perfiles a lo largo de medio siglo.

En Chile, en cambio, la presencia paralela de socialistas y comunistas obedece a una mecánica distinta. Orgánicamente no surgen de un tronco común, de manera que el nacimiento de los que aparecen más tarde —los socialistas— no produce las heridas ni los rencores que origina la separación de los comunistas en el viejo continente. En el plano teórico, unos y otros hacen profesión de fe marxista y hacia 1933, año de fundación del PS, todas las tendencias reunidas en su seno consideraban la Revolución de Octubre como un hecho cumbre en la historia del movimiento obrero. Ni la guerra ya lejana, ni la Revolución Rusa, admirada por todos, constituían elementos conflictivos.

Agreguemos todavía que el Partido Comunista se gestó en el viejo Partido Socialista Obrero y en la escuela ideológico-práctica de Recabarren, profundamente empapados en la idiosincrasia popular chilena de principios de siglo. Por otra parte, el PS, a diferencia del reformismo europeo, surge con una vigorosa voluntad clasista y revolucionaria, que mantuvo viva hasta en los peores momentos de sus aventuras ministeriales.

Así, mientras el PC brota como expresión genuina de la realidad nacional, vinculado al experimento bolchevique por lazos más bien sentimentales que ideológicos, el Partido Socialista sustentó siempre una línea claramente diferenciada del reformismo prevaleciente en la II Internacional.

En estas condiciones, ¿cómo explicar el bipartidismo obrero en Chile? ¿Qué razones existen para que una acción común prolongada por decenios no logre cristalizar en un Partido Único de Trabajadores?

LA SEGUNDA MUERTE DE RECABARREN

En parte la respuesta puede hallarse en los acontecimientos ocurridos durante la dictadura del General Ibáñez.

Desde la muerte de Recabarren la influencia de masas del PC se hacía sentir a través de la FOCH, más que por la autoridad política del partido mismo, desprovisto de figuras de relieve capaces de llenar el vacío dejado por el maestro. Los sindicatos, a su vez, como soportes naturales del partido, constituían un activo canal de comunicación con los trabajadores, con las zonas de más dinámica vida económico-social. Esa doble corriente fue bruscamente interrumpida por la persecución y la clandestinidad; los viejos sindicatos y federaciones debieron enfrentar una creciente hostilidad del poder y la rivalidad de nuevas organizaciones, mientras el partido, confinado a una actividad puramente conspirativa, perdía el creador contacto con el pueblo, de donde había derivado hasta entonces su poder y su prestigio.

La Gran Crisis de los mismos años golpeó duramente la arcaica estructura chilena e indirectamente afectó también al único partido obrero de la época. Bajo su impacto, la industria salitrera fue desmantelada; las oficinas del norte bajaron sus niveles de ocupación de 40.465 hombres, en 1930, a sólo 8.137 en 1933. El núcleo principal del poderío comunista; la cuna de sus primeros agitadores, organizadores y dirigentes; el centro más vibrante de la lucha social; el teatro, en fin, de las primeras enseñanzas de Recabarren, descendía a un lugar subalterno en el cuadro económico y social chileno.

Paralelamente, en la Unión Soviética, en el PC soviético y en la Internacional Comunista, la muerte de Lenin desencadenó procesos de profunda significación: Stalin asume poderes cada vez más absolutos; se consolida la tesis del socialismo en un solo país como línea oficial; la Internacional adopta un estatuto de rigidez monolítica, destinado a asegurar la lealtad de los partidos de todo el mundo hacia la Patria de los Trabajadores y se inaugura el Primer Plan Quinquenal. Cada sección nacional debe adaptar su conducta a las nuevas modalidades.

Así lo hace también el PC chileno.

Cortados sus lazos con las masas, sumergido en un universo extraño a su propia historia, a esas alturas, sustituye su mentalidad original –mezcla de comunitarismo ético y de pragmatismo insurgente– por la rigidez táctica y el dogmatismo doctrinal del aparato staliniano. Sufre, en suma, una profunda mutación¹.

LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO

Hacia 1933 las discrepancias se manifiestan, además, en cuanto al campo social que se estimaba comprometido en la tarea revolucionaria, si bien los respectivos puntos de vista distaban mucho de enunciarse con claridad.

En la práctica comunista dominaba una noción particularmente estrecha y sectaria del apoyo social requerido para impulsar el proceso revolucionario. Estaban todavía frescos en el recuerdo y en la admiración de sus jefes las épicas Jornadas de Octubre de 1917, las turbulentas asambleas del Congreso de los Soviets, el asalto al Palacio de Invierno, en fin, la tenaz independencia que dio fuerza a los bolcheviques para empujar la insurrección más allá de las claudicaciones y los compromisos, hasta inaugurar el primer gobierno de obreros y campesinos sobre la tierra.

Como pasa siempre, el suceso político victorioso cobra una seducción irresistible y pocos resisten la tentación de repetir mecánicamente el modelo, hasta que la historia —como obstinada maestra que es— demuestra, una vez más, que toda revolución verdadera es una obra de creación política, un episodio inédito y singular, cuyo dinamismo es inseparable del terreno que le sirvió de escenario y del tiempo que condicionó su desarrollo.

El llamado a la insurrección de la clase obrera correspondía a una época convulsionada y propicia a las ilusiones, luego del alzamiento de la marinería de guerra y de la fugaz República Socialista de Matte y Grove.

Como programa, la incitación era vaga y confusa; el objetivo de derrocar al capitalismo era frecuentemente sustituido por fines mucho más moderados, inmediatos y prácticos, estrechamente asociados a la recuperación o defensa de las libertades democráticas, sin que se dibujara con nitidez la línea de separación entre las posiciones de principio y los acomodos tácticos.

El socialismo irrumpió cuestionando todo ese esquema. Sin suficiente claridad ideológica, víctima en muchos casos del eclecticismo teórico derivado del equilibrio entre tendencias dispares —marxistas, anarcosindicalistas, socialistas reformistas— fue, sin embargo, suficientemente lúcido para comprender la necesidad de apoyar el partido revolucionario sobre una base social más ancha que el solo proletariado rural y urbano. Los campesinos, en efecto, carecían de vínculos con el movimiento popular de las ciudades; estaban interiormente escindidos, de acuerdo con las heterogéneas características de una agricultura que en algunas áreas lindaba con el feudalismo, en tanto que en otras se incorporaba lentamente a formas avanzadas de explotación capitalista. A todo lo largo de esta variada escala —acentuada todavía por las peculiaridades geográficas y climáticas— el campesinado mostraba una amplia diversidad de capas con intereses dispares y a menudo contrapuestos. La clase obrera misma tenía aún

escasa magnitud en el conjunto de la población; sólo más tarde –en el curso de la Segunda Guerra Mundial– la industrialización acelerada para sustituir las importaciones tradicionales hizo crecer bruscamente la importancia numérica y política del proletariado fabril y minero.

El llamado socialista se dirigió genéricamente a los trabajadores, sosteniendo que junto a la clase obrera deberían participar en la lucha los campesinos (hasta ese momento una fuerza más potencial que efectiva), los artesanos, y, sobre todo, la extensa capa de trabajadores intelectuales que incluía a maestros, profesionales, estudiantes, funcionarios públicos y empleados particulares. En el lenguaje agitativo de esos días se llegaba a comprender en la misma denominación a los pequeños agricultores, industriales y comerciantes, en la medida que combinaban su actividad personal con el trabajo asalariado.

El mensaje político del nuevo Partido fue eminentemente antimperialista, cargado de un espíritu nacional revolucionario que emergía con inusitado vigor en la literatura didáctica y en la oratoria de sus líderes. Por primera vez el rescate de la independencia –ahora de la servidumbre económica a la metrópoli yanqui– pasó a constituir una gran misión histórica para la juventud y ofrecía a los socialistas la alucinante perspectiva de liberar a la nación, junto con alcanzar la emancipación de su clase.

CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN

Mucho después, en la medida que ambos partidos se vieron requeridos por tareas de gobierno, las discrepancias pasaron a girar alrededor de un tema capital: el carácter de la revolución chilena.

Mientras el Partido Comunista mantenía su firme adhesión al esquema clásico, oficialmente consagrado por la jefatura soviética, que distinguía nítidamente la revolución democrático-burguesa de la revolución socialista como fases históricas independientes, el Partido Socialista fue dibujando paulatinamente una concepción nueva –para Chile al menos– del proceso revolucionario. Aunque su gestación es larga, esas ideas comienzan a tomar forma en 1946, en los documentos del Congreso de Concepción, se enriquecen en las discusiones alrededor del nuevo Programa del Partido y se formulan explícitamente en los informes y tesis de los años posteriores, particularmente a contar de 1953.

En el informe del CC al XV Congreso General Extraordinario, se dice:

“Muchas veces, desde 1945, hemos avanzado ciertas formulaciones fragmentarias acerca de la materia, pero hasta hoy, carecemos de una exposición orgánica de sus líneas principales, aun cuando ellas, en cierta medida, se han incorporado a lo que pudiéramos llamar la mentalidad del Partido. Sin perjuicio

de que alguna vez se llene completamente esta necesidad, creo conveniente hacer un breve resumen de los principales conceptos teóricos que han determinado la conducta del socialismo popular en los últimos años.

Expresados positivamente, los objetivos económicos que se propone la revolución son, por tanto, la reforma agraria y la liberación nacional antimperialista. Allí donde el latifundio impone su sello a la producción rural, debe ser reemplazado por una redistribución de la tierra entre pequeños propietarios sujetos a programas nacionales de cultivo. Las empresas extranjeras deben ser nacionalizadas. Tal es nuestra misión inmediata reducida al más elemental de los esquemas.

Son, también, los rasgos característicos de la revolución democrático-burguesa –según la clásica terminología marxista– definidos desde un ángulo económico: consolidación del estado nacional y eliminación de la clase terrateniente. En todos los países desarrollados esa lucha fue conducida por la burguesía en ascenso, transitoriamente aliada a los siervos, a los artesanos y al proletariado en formación. Políticamente, su victoria trajo consigo una nueva forma de la democracia, enunciada, esta vez, en los planos jurídicos y filosóficos como la más alta, universal y definitiva expresión de la convivencia colectiva.

Como antítesis y sucesora natural de esta fase histórica, Marx enunció su teoría de la revolución proletaria y socialista, destinada a eliminar las clases sociales y, eventualmente, el Estado. Debería realizarse bajo la dirección de los obreros industriales para entregar a la comunidad entera el dominio de los medios de producción.

Sin embargo, en el caso chileno, y generalizando, en casi todos los países coloniales y dependientes, la realidad es mucho más compleja. Nuestra burguesía nació con un campo de operaciones limitado y subsidiario de las grandes empresas foráneas. Porque nunca tuvo el poderío necesario para abordar inversiones de gran magnitud, en lugar de rivalizar con el capital imperialista estableció con él una estrecha asociación de intereses más o menos complementarios. En tales condiciones –a las que se añaden otras que la vinculan a la clase de los poderosos propietarios rurales– está orgánicamente incapacitada para cumplir las tareas revolucionarias que tomó en sus manos en las naciones maduras.

Esta es la primera lección que se desprende de cualquier estudio: la burguesía no es, en nuestros países, una clase revolucionaria. Lo son, en cambio, los trabajadores industriales y mineros, los campesinos, la pequeña burguesía intelectual, los artesanos y operarios independientes, todos los sectores de la población cuyos intereses chocan con el orden establecido. Y en este conjunto cada vez juega un papel más determinante la clase obrera. Por su organización, su experiencia sindical y política, su sentido de clase, es el núcleo más resuelto de la lucha social.

Ahora bien, una clase que asume la misión históricamente abandonada por otra, necesariamente le imprime sus propias características, le da un alcance de mayores proyecciones, le introduce modalidades propias de un estado más avanzado y radical. No puede tener la misma fisonomía ni igual contenido la revolución capitalista y burguesa realizada bajo el mando de la burguesía, que si ella se desencadena y conduce por los trabajadores, o más específicamente, por la clase obrera.

En efecto, las nacionalizaciones no serán un mero desplazamiento patrimonial de las manos extranjeras a las de los particulares del país, sino que ordinariamente se incorporarán al dominio del Estado, y en su gestión se aceptará, de uno u otro modo, el control obrero, como en el caso reciente del estaño boliviano. La tierra será redistribuida, pero mediante sistemas comunitarios de explotación—casi siempre de raíces autóctonas— o bajo formas cooperativas de diferente desarrollo, se buscarán las bases jurídicas que, acompañadas de una mecanización intensiva, faciliten la evolución hacia modalidades colectivistas más avanzadas.

Agreguemos a todo esto las fuertes tendencias hacia la estatización de múltiples actividades monopolistas ejercidas por nacionales, que se hacen sentir en todo el continente, y la dinámica actuación que se le asigna al poder público en el planeamiento integral de la economía, incluidos los sectores privados, y deberemos convenir que la revolución americana cuyos objetivos fundamentales venimos enunciando es agraria y antimperialista, pero tiene simultáneamente un evidente sentido socialista, derivado de la preponderante participación del proletariado en su dirección política y de su tendencia consecuencial a buscar formas primarias de propiedad colectiva. Hasta podríamos añadir que su finalidad únicamente se logra con plenitud en la misma medida en que subsiste la orientación socialista y se acentúa gradualmente la hegemonía de la clase obrera².

LA TESIS DEL FRENTE DE TRABAJADORES

El informe del Comité Ejecutivo del PSP, al Pleno realizado en agosto de 1956, insiste en ideas parecidas:

“En su esencia, nuestra concepción se contrapone radicalmente a la tesis de que la fase democrático-burguesa de la revolución constituye una etapa históricamente necesaria en la marcha de los países atrasados. En efecto, tal como ella se dio en la formación de las actuales sociedades capitalistas, fue siempre una empresa de la burguesía, animada de ideales igualitarios en tanto se oponía al sistema de privilegios jurídicos del orden feudal, y se propuso entregar al nuevo soberano—el pueblo— el destino de las naciones. Apoyada, además, en el

crecimiento de su poder económico, la industrialización acelerada transformó la fisonomía material de las ciudades y rompió las viejas estructuras rurales. El estado nacional moderno surgió como coronación de tal proceso.

Muchos de tales objetivos están por alcanzarse y deben constituir, por tanto, metas vitales para Chile, pero negamos que nuestra incipiente y anémica burguesía tenga independencia y capacidad para conquistarlos. Es aquí una clase tributaria del imperialismo, profundamente ligada a los terratenientes, usufructuaria ilegítima de privilegios económicos que ya carecen de toda justificación social. Concluimos, entonces, que únicamente las clases explotadas, los trabajadores manuales e intelectuales, pueden asumir esa misión en términos de conformar una sociedad nueva, sostenida por una estructura productiva moderna y progresista.

Esa sociedad ayudará a afirmar la personalidad nacional, la independencia de Chile, ampliará la democracia y estimulará la industrialización; pero para lograrlo deberá reemplazar los métodos, los incentivos y las formas de apropiación de los beneficios específicos del capitalismo, por otras formas más justas, racionales y convenientes.

Podríamos decir que la tarea de nuestra generación no consiste en realizar la última etapa de las transformaciones demoburguesas, sino en dar el primer paso en la revolución socialista”.

La insistencia en caracterizar la revolución chilena como una tarea de los trabajadores, excluyendo sistemáticamente a la burguesía nativa como factor determinante en la lucha antimperialista, y la proclamación de una República Democrática de Trabajadores como expresión política del estado revolucionario, llevaron gradualmente –con cierta impropiedad– a conocer estas tesis y la línea general que se deriva de ellas con el nombre de Frente de Trabajadores, en franca oposición conceptual y práctica con las tendencias que buscan la alianza del capitalismo nacional para romper nuestra dependencia de la inversión extranjera.

En buena medida, la Revolución Cubana ha proporcionado una prueba experimental de la corrección de esta tesis. Habiéndose iniciado como una revolución democrática, su creciente e inevitable enfrentamiento con los monopolios yanquis la fue radicalizando para mantenerse leal a sí misma, hasta comprometerse resueltamente en la construcción de un Estado socialista. Ni la debilidad de la clase obrera ni el atraso económico fueron obstáculos suficientes para ahogar el dinamismo desatado por la insurrección. En las condiciones del mundo contemporáneo, cada día existen menos alternativas intermedias para las naciones que se resuelven a liquidar el atraso.

CENTRO ECUMÉNICO Y AUTONOMÍA

El trágico aplastamiento de la clase obrera alemana y los febriles preparativos bélicos de Italia, Alemania y Japón —hacia 1936— impusieron a la Internacional Comunista un audaz viraje. La gran crisis de 1929-30 no había alumbrado nuevas revoluciones proletarias; por el contrario, sus secuelas alimentaban las fuerzas y los malignos fermentos de la reacción mundial.

El VII Congreso de la Internacional Comunista sustituyó bruscamente la política cargada de sectarismos de los años anteriores por otra abierta a las alianzas y concretamente dirigida a acumular fuerzas para detener el fascismo.

En Chile, el viraje comunista acercó a los partidos obreros en sus perspectivas políticas inmediatas y creó un clima propicio a la unidad, aunque persistió por largo tiempo la áspera controversia alrededor de la participación y el rol del Partido Radical en un bloque popular. Pero, simultáneamente, el dócil acatamiento del PC al brusco golpe de timón, introdujo un elemento de desconfianza en las relaciones interpartidistas. En efecto, se habían dado aquí todos los factores necesarios para impulsar un amplio frente de las fuerzas populares, tanto en el campo sindical como en el político, hasta el punto de operar ya en el terreno parlamentario el Block de Izquierdas a manera de respuesta a la acción represiva de Alessandri, y, sin embargo, había sido necesario que la Internacional Comunista consagrara el cambio para que los comunistas depusieran el dogmatismo prevaleciente hasta entonces, y se esforzaran en adaptarse a una línea de amistad y convivencia.

Tres años más tarde, ya en el poder el Frente Popular, el pacto Ruso-Alemania puso de nuevo en evidencia —esta vez en forma más espectacular— la subordinación del Partido Comunista Chileno a las alternativas de la política soviética.

Durante largo tiempo el sentimiento antifascista había constituido el resorte emotivo de mayor importancia en la actitud de las masas. Cada día la prensa daba trágico testimonio del carácter brutal que asumía la agresión contra el pensamiento progresista y las organizaciones populares en todo el mundo. En esas condiciones, la obsecuente aceptación del pacto quebró drásticamente el curso de las relaciones políticas socialista-comunistas y precipitó la liquidación del Frente Popular. Independientemente de la justificación que se pretendió dar al tratado desde el punto de vista de las conveniencias estrictamente nacionales y militares de la Unión Soviética, lo que resultaba incomprensible e inexcusable a los ojos de sus aliados era la proyección de tal episodio en la política nacional del PC Chileno y la certeza de que se daba luz verde a los agresores fascistas para continuar sus planes de dominación mundial.

Antes, la política comunista también se había delineado sobre la defensa incondicional de la Patria de los Trabajadores, la URSS, pero esta vez iba más

allá de los argumentos militares y de la justificación de su conducta como Estado; en los hechos, los comunistas del exterior variaban sustancialmente el eje de su acción, comenzaban a dirigir sus ataques contra un imperialismo intemporal y genérico, y se esforzaron por frenar la polarización de las masas en su rechazo de las bárbaras formas que asumía la reacción internacional.

¿Necesitaba siquiera la URSS tal grado de adaptación a sus intereses políticos si —como se dijo después— sus conductores tenían la certeza que se trataba de una dilación táctica, de un respiro para resistir mejor el ataque inevitable, con la ventaja de que las potencias occidentales estarían ya irremediablemente comprometidas en la guerra?

El hecho planteó con violencia inusitada algunas cuestiones que enturbian hasta hoy las relaciones entre los partidos obreros y que han estado latentes aun en los períodos de más estrecha amistad: a saber, la concepción que uno y otro tienen del internacionalismo y el valor que le asignan a la Unión Soviética en el proceso de la revolución mundial. Básicamente, esas concepciones han informado también la actitud de socialistas y comunistas ante la política de bloques, vigente desde el término de la II Guerra.

LOS COMUNISTAS Y LOS BLOQUES

En el curso de 1962 se suscitó una polémica de vasto alcance ideológico en el más alto nivel de los Partidos Socialista y Comunista. Originada en una controversia ocasional, tuvo la virtud de incitar a una formulación explícita de ciertas cuestiones de principio alrededor de estos problemas. Luis Corvalán las enunció así, a nombre de la Comisión Política del Partido Comunista³:

“En el informe al Pleno de diciembre último del Comité Central de nuestro Partido dijimos que ...se debe recordar que el movimiento comunista ha sido, desde su origen, esencialmente internacionalista y que en él siempre hubo un centro dirigente en el mejor sentido de la palabra, un centro como vanguardia de las ideas avanzadas.

Hace ya mucho tiempo que este centro se encuentra allí (en la Unión Soviética), no por una resolución unilateral del Partido Soviético, ni siquiera por acuerdo de los partidos sino en virtud de un conjunto de situaciones históricas, comprendidas y reconocidas por todos.

El proletariado ruso, encabezado por el Partido de Lenin tuvo el honor de ser el primero en romper las cadenas de la esclavitud capitalista y el primero en construir el socialismo. Al pueblo soviético le corresponde ahora también el honor de ser el primero en escalar las cumbres del comunismo. De allí emana fundamentalmente su papel de vanguardia en la gran familia de los partidos comunistas”.

Reconociendo la trascendencia del asunto, se refiere con cierta irritación a las opiniones de su contradictor:

“Sería útil saber si su alusión al mando único ideológico y político, significa, como puede deducirse lógicamente, que Ud. piensa que al Partido Comunista de Chile lo manda el Partido Comunista de la Unión Soviética en lo que a orientación se refiere. Si tal fuese la posición de su partido y la suya me resulta difícil entender cómo podrán aspirar a gobernar junto con otra colectividad política que no se regiría por sí misma. Se necesita aclarar esto en forma que haga posible una colaboración sincera y leal entre comunistas y socialistas. No vemos la manera de seguir plasmando un verdadero entendimiento si de por medio y de su parte hubieran apreciaciones que implicaran una tal desconfianza. Por desagradable que sea y aunque el enemigo trate de sacar provecho transitorio de estos asuntos, es preferible que estas cosas se aclaren de una vez por todas, ahora y no después. Tenemos la obligación de darle desde ya al pueblo una confianza absoluta y sin reservas en la solidez de nuestra unidad y en la seriedad de nuestra acción conjunta y del gobierno que formaremos”.

Más adelante confirma el valor decisivo de tales cuestiones en una alianza que aspira a ejercer el poder:

“Junto a todos los partidos del Frap, socialistas y comunistas luchamos por darle al país un Gobierno Popular. El éxito del tal gobierno dependerá en gran medida de su posición internacional, de la manera correcta en que aprecie los problemas internacionales y de los rumbos que en este orden siga”.

LOS SOCIALISTAS DISCREPAN

Expresa la respuesta socialista, en sus párrafos más significativos⁴:

“Este principio (el del centro mundial) constituye el núcleo de la controversia y el punto de partida de muchas otras discrepancias ideológicas y tácticas que se desprenden de su aceptación o rechazo. Se proyecta, en efecto, en las respectivas concepciones de nuestros partidos sobre los problemas de la paz; de la influencia del factor nacional en la lucha anticapitalista contemporánea; del origen de las desviaciones ideológicas y, sobre todo, de los medios adecuados para dominarlas y superarlas; de las formas y métodos en las relaciones entre los partidos obreros y entre los Estados Socialistas, para sólo mencionar algunas implicancias obvias.

...De cualquier modo que se le designe, el reconocimiento de un “centro” con tales características implica una actitud de acatamiento a su conducta y a sus decisiones, pues, de otro modo, todo lo dicho tendría un mero sentido verbalista o simbólico. Si ese es el valor sustantivo de los conceptos reiteradamente emplea-

dos, confirmamos nuestra resistencia a aceptarlos como un principio de acción política, aunque se trate sólo de una supeditación puramente ideológica o intelectual, ya que –por supuesto– estamos muy lejos de compartir el criterio estúpido y reaccionario de quienes sostienen que cada partido comunista es una mera pieza de ajedrez, movida caprichosamente por las autoridades de Moscú.

Pero estimamos, también, que siguen pesando sobre la mentalidad de los Partidos Comunistas y, entre ellos del Partido Comunista chileno, toda una gama de concepciones, prejuicios y apreciaciones teóricas equivocadas, cuya persistencia se explica únicamente por aquel reconocimiento de una autoridad especial en el centro soviético.

Creemos firmemente que tales características tienden a desaparecer, porque siempre la vida vencerá sobre la inercia de las más rígidas concepciones y es esa certeza la que nos ha llevado al progresivo acercamiento de nuestros partidos.

Pero tenemos derecho a suponer, por lo que la historia reciente nos enseña, que, en tanto no se abandone esta noción cardinal del “centro dirigente” y se la reemplace por una integración democrática de las fuerzas socialistas, cualquier vía original en la conducción revolucionaria o en la construcción socialista pasará a ser fácilmente una herejía y el origen de un cisma irremediable”.

La carta del Comité Central del P.S. continúa con estas afirmaciones categóricas:

“Ni la antigüedad de la experiencia, ni la magnitud geográfica del país, ni el tamaño de su población, ni su poderío bélico o material constituyen factores suficientes para asignar la dirección del movimiento socialista a una nación determinada. El socialismo es una empresa demasiado compleja para suponerla sujeta a un mismo ritmo en todas las latitudes, de modo que algún pueblo que inicie con retardo su construcción bien puede alcanzar estadios superiores en un tiempo más breve que otros que lo iniciaron con anterioridad.

Pero hay algo más, todavía: tampoco los progresos socialistas son uniformes dentro de cada nación. Una constelación de circunstancias históricas, geográficas, culturales y de todo orden, hacen con frecuencia que mientras un país marche aceleradamente en el terreno de la organización industrial, por ejemplo, se retrase en cambio en el campo de las estructuras políticas, o que se adelante en las técnicas de la explotación agraria y quede rezagado en los dominios del arte. De todo esto queremos desprender, de nuevo, la conclusión de que el reconocimiento de una dirección única en el movimiento obrero, aunque se remita a las grandes líneas ideológicas, implica limitar las fecundas posibilidades de desenvolvimiento del marxismo y de la práctica revolucionaria universal”.

Con relación a la política de bloques, directamente vinculada al tema en discusión:

“Para un marxista consecuente, el mundo no está básicamente dividido en dos “campos”, entendiéndose por ellos dos áreas geográficas perfectamente definidas en el mapa, aunque este hecho tenga un valor innegable en la realidad contemporánea. La afirmación del “Manifiesto Comunista”: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”, nos parece válida aún hoy. El mundo, pues, está dividido en una contienda que tiene a la tierra entera por escenario, entre las fuerzas de la burguesía y las del proletariado, más nítida y esquemática en algunas regiones, más primaria y compleja en otras, pero constituyendo siempre el factor decisivo de la pugna histórica en la cual somos actores y testigos. En algunas zonas, las viejas clases opresoras han sido totalmente desalojadas del poder político, en otras se sigue luchando contra las fuerzas del capitalismo y del imperialismo en un combate frontal, mientras, en otras, aún, habiendo conquistado fuertes posiciones en la lucha por la libertad nacional contra el colonialismo, los trabajadores constituyen un elemento importante en la conducción del Estado. En otras palabras, al admitir que es el “campo”, es decir, una coalición de Estados, el elemento socialista por excelencia, y que la adhesión más o menos incondicional a su política y a su conducta determina el grado de socialismo de quienes luchan contra el sistema capitalista, implica, entonces, un enfoque erróneo y unilateral de trascendentales consecuencias prácticas, en especial si se recuerda que esos Estados se hallan taxativamente enumerados en la “Declaración de los 81 partidos comunistas” de 1960. Significa subordinar las necesidades estratégicas del movimiento obrero a la seguridad nacional de los Estados socialistas; significa subestimar toda victoria revolucionaria en tanto no acceda a integrarse en el sistema del “campo”; significa calificar las conquistas políticas de los pueblos y los partidos en función de sus compromisos internacionales y no por el valor intrínseco de las mismas; significa, muchas veces, paralizar el espíritu de ofensiva del proletariado occidental, ante el temor de aparecer favoreciendo una política “extranjera”.

Como se sabe, el socialismo no es una gracia del cielo, ni una categoría abstracta. Es una realidad, un proceso. El establecimiento de relaciones socialistas auténticas y avanzadas entre los hombres, en el seno de una sociedad, está indisolublemente ligado al avance de la clase trabajadora y todo ello se da en grados y ritmos diferentes. En el curso de tal proceso se dan contradicciones provenientes, algunas, de los resabios del viejo orden, como originadas, otras, en el carácter del período de transición hacia nuevas formas de convivencia. Por eso, los elementos antisocialistas existen y a veces determinan fenómenos profundamente regresivos en los que formalmente puede calificarse de Estados Socialistas o Estados obreros; por eso un “Estado Obrero” o “Socialista” puede adoptar medidas y actitudes antisocialistas. Se trata de algo más que de uno u

otro error ocasional. Las tendencias, por ejemplo, a la burocratización del aparato gubernamental, a la hegemonía política sobre otros Estados, a imponer la felicidad por la vía militar a otros países, a suplantarse la legalidad revolucionaria por el terrorismo policial, constituyen fenómenos reales, se han producido en los hechos y fueron previstas, por otra parte, como posibilidades concretas por los más autorizados pensadores marxistas. Cuando Lenin sostuvo que “no puede ser socialista el proletariado que acepta la menor violencia ejercida por su país sobre los otros”, o Engels advertía que “el proletariado no será santo ni infalible, ni estará libre de defectos por el mero hecho de realizar la revolución social”, estaban expresando estos temores.

El “campo”, pues, no es sino una de las expresiones específicas de la lucha de clases contemporánea. No la única. Sus intereses no expresan los intereses totales de las fuerzas comprometidas en la acción anticapitalista, sino una parte de esos intereses. Cualquiera política, por tanto, diseñada sobre la premisa axiomáticamente sentada por Uds., a saber, que el mundo está dividido, por así decirlo, en dos campos principales y opuestos entre sí, el campo capitalista y el campo socialista, constituye una formulación incorrecta y parcial del problema, que lleva a posiciones de hegemonía, incompatibles con una concepción auténtica y democrática del internacionalismo obrero”.

INTERNACIONALISMO Y AUTONOMÍA

Muchos acontecimientos pretéritos estaban presentes en la controversia e ilustraban el debate: la excomunión de Yugoslavia por el Cominform, en 1948, y la posterior reconciliación; la intervención armada soviética en Hungría, en 1956; el naciente conflicto de la URSS con la China de Mao; la victoria de la Revolución Cubana bajo una dirección independiente del comunismo, etc.

La permanente actualidad del tema acaba de confirmarse una vez más por la actitud del Partido Comunista chileno ante la intervención soviética en Checoslovaquia. Sobre nuestro país se proyecta como un problema de autonomía para diseñar una política interna y exterior que se ajuste a los intereses específicos del pueblo chileno. Sostener como principio que “lo que es bueno para la Unión Soviética es bueno para nosotros” o que “el socialismo practicado por la Unión Soviética es el único modelo correcto” sería consagrar un Vaticano marxista, justamente cuando hasta la infalibilidad del que fundó San Pedro comienza a ponerse en tela de juicio.

El XX Congreso General del Partido Socialista definió el internacionalismo en un conjunto de tesis, algunos de cuyos postulados son los siguientes:

Internacionalismo obrero.- El movimiento obrero constituye una fuerza his-

tórica unitaria en escala mundial. La solidaridad esencial de intereses de la clase obrera, por encima de las fronteras, deriva de la explotación internacional de los trabajadores por el sistema capitalista propagado a todos los continentes.

La integración democrática del movimiento revolucionario mundial.- Ninguna circunstancia autoriza a un solo país o a un partido determinado para asumir la hegemonía del movimiento revolucionario mundial o para subordinar a sus intereses particulares la aplicación del principio del internacionalismo obrero. Sólo una integración democrática, sobre la base de la más estricta igualdad de derechos, hará posible la cooperación solidaria y la coordinación estratégica de las fuerzas que luchan contra el imperialismo en el mundo.

El socialismo es producto histórico de circunstancias nacionales concretas.- No existe un camino exclusivo ni un modelo único para establecer y construir el socialismo. Dentro del objetivo común y esencial de sustituir la propiedad privada de los medios de producción por la propiedad social de los mismos, los pueblos y los partidos eligen las vías y las formas más adecuadas a las tradiciones, a las estructuras, a las condiciones geográficas, socio-económicas y culturales de cada Estado.

El nexo que une los problemas de ayer con los de hoy es tan estrecho que da a la cuestión del centro mundial y de la autonomía de cada partido un valor permanente en la práctica chilena y explica en alto grado la persistente división de la clase obrera en el campo político.

NOTAS

1 Tal cambio se oficializó en la Conferencia de 1933, una de cuyas resoluciones dice: "La ideología de Recabarren es la herencia que el partido debe superar rápidamente. Recabarren es nuestro, pero sus concepciones sobre el patriotismo, sobre la revolución, sobre la edificación del partido, etc., son, al presente, una seria traba para cumplir nuestra misión".

El Buró Sudamericano de la I.C., en carta que aprueba esas resoluciones, manifiesta: "El Buró Sudamericano de la I.C. atribuye gran importancia a la discusión iniciada por el PC chileno para su liberación del lastre ideológico de Recabarren que forma un obstáculo muy serio, ideológica, política y orgánicamente para la penetración del PC del marxismo-leninismo, para su transformación en verdadero partido de combate del proletariado. (Ambas citas las hace Julio César Jobet, "Recabarren", Prensa Latinoamericana, págs. 70 y 71, 1955, Santiago).

2 Hemos preferido reproducir literalmente el texto de algunos párrafos de los informes al XV Congreso y al Pleno de agosto de 1956, en lugar de ofrecer una versión libre de su contenido, para ser más fieles al proceso de elaboración de las tesis y a su sentido original.

3 "La polémica Socialista-Comunista", Prensa Latinoamericana, 1962, Santiago.

4 La suscribe Raúl Ampuero Díaz, como Secretario General, "La polémica Socialista-Comunista", Id.

VIDA Y PASION DE LA UNIDAD

De "La Izquierda en Punto Muerto",
Editorial Orbe, 1969.

UNA AMISTAD DIFÍCIL

La experiencia colaboracionista del Partido Socialista Popular en la Administración Ibáñez fue casi tan breve como la de los comunistas durante el Gobierno de Gabriel González Videla. Sus ministros renunciaron antes de un año y se cumplía rigurosamente el pronóstico enunciado en el Congreso de Chillán de 1952 .

El año 1953 fue rico en acontecimientos de diferente magnitud y procedencia, que influyeron poderosamente en el restablecimiento de los lazos entre socialistas y comunistas. En sus comienzos, y luego de un tenaz y paciente trabajo de los socialistas populares, se logró fundar la Central Unica de Trabajadores, abarcando las fuerzas más representativas del movimiento sindical, con un alto grado de independencia operativa respecto del gobierno y de los partidos. En su seno las diversas tendencias fueron inducidas a un inevitable trabajo de colaboración y se multiplicaron las acciones comunes de carácter reivindicativo.

En marzo murió Stalin. Durante un cuarto de siglo su dirección y su estilo habían cincelado los perfiles del comunismo internacional. En Chile, desde los primeros tiempos, simbolizó orientaciones y modalidades que chocaron persistentemente con las concepciones socialistas. Su desaparecimiento fue acogido entonces como el anuncio de una nueva era: se alentaba la esperanza de que los nuevos gobernantes soviéticos reformarían sustancialmente el régimen interno de la URSS, las relaciones entre los países del bloque y el comportamiento de los partidos comunistas de todo el globo.

En el Congreso Socialista de fines de año se adoptaron resoluciones que en resumen significaron:

- la ruptura definitiva con el gobierno del General Ibáñez;
- la ratificación explícita de una concepción sobre el curso de la revolución chilena, que comenzó a difundirse como "Tesis del Frente de Trabajadores"; y
- la creciente convicción de que ninguno de los partidos obreros podría romper en su favor el equilibrio de poder, en un régimen de colaboración, actuando separados.

Pronto el impulso hacia la unidad se concentró en un intenso y sostenido diálogo alrededor de la política de alianzas de los partidos marxistas. No bastaba, en efecto, con reconocer la necesidad —a todas luces evidente— de reunir los destacamentos dispersos cuyas aspiraciones hegemónicas habían sido tan duramente maltratadas por la experiencia, sino de convenir en las metas de esa unidad y en la determinación de las fuerzas sociales y políticas cuyo apoyo debería lograrse para alcanzarlas.

La discusión proyectaba el terreno práctico todas las disidencias enunciadas hasta entonces en un plano principalmente teórico y las opiniones se expresaron a menudo en un tono cargado de reproches. Una carta del P.C. al XV Congreso Socialista fue contestada por el nuevo Secretario General, Aniceto Rodríguez, en términos airados:

“Uds. Afirman que “son vastos y existen en todos los campos sociales y políticos sectores que coinciden en puntos tales como los señalados en vuestra declaración”. Nosotros, por el contrario, estimamos que sólo pueden coincidir con nuestros puntos de vista los sectores populares, es decir, las capas modestas de la población que son las únicas capaces de sustentar una política antifeudal y antimperialista consecuente. La posición teórica que Uds. mantienen los ha llevado, en la práctica, a acciones comunes con los representantes más caracterizados de la oligarquía y esas acciones se han reflejado, como en el caso de la reciente elección senatorial por Santiago, en un fortalecimiento de las posiciones de los enemigos del pueblo. Los socialistas populares rechazamos categóricamente toda acción y todo entendimiento con las fuerzas reaccionarias y no aceptamos, en ninguna oportunidad y bajo ningún pretexto, peligrosos y dañinos contactos con hombres y Partidos que han sumido en la esclavitud económica a los trabajadores de nuestra Patria.

No parece tampoco facilitar un entendimiento, la política de tregua y acercamiento que Uds. practican respecto de la corrompida camarilla que dirige el Partido Radical, responsable directo de la dictación de las más negras legislaciones represivas que se recuerdan en nuestra historia y culpable de un grave retroceso en el movimiento social chileno. Nosotros creemos que el Partido Radical representa para las masas un símbolo de ineficacia burocrática y de voracidad administrativa, y que debería ser desterrado, junto con el telar y la rueca, al sótano de las curiosidades del pasado. Y queremos repetirle, una vez más, que no nos ha parecido reflejar un propósito unitario la protección que ustedes han brindado a verdaderas bandas de renegados del socialismo, las que gracias al apoyo de ustedes han intentado confundir al pueblo sobre el auténtico rol del socialismo chileno. Al proceder en esa forma, el Partido Comunista ha inferido torpemente un agravio al Partido Socialista Popular, y, mientras esa situación se

mantenga, no podríamos discutir, siquiera, proposiciones como las formuladas en la carta a que damos respuesta”.¹

DISCUSIONES PREVIAS

A medida que se disiparon las esperanzas de darle a las masas movilizadas por el ibañismo una cierta cohesión, para servir de apoyo a una política socialista de ciertas proyecciones, la actitud del P.S.P. giró hacia un enfoque más realista de la unidad popular, expresada principalmente en la paulatina reconciliación con el PC. Este, por su parte, obediente a una táctica cautelosa y reformista, conturbado el ánimo por la incertidumbre que producían los desconcertantes giros del Presidente de la República, buscó ansiosamente toda clase de acuerdos para bloquear las amenazas golpistas. De ahí que, a comienzos de 1955, las circunstancias fueran propicias para reanudar los contactos con mayor decisión.

En el Frente del Pueblo, que por entonces reunía a varios grupos políticos, pero cuyo núcleo principal lo constituía el P.C., la orientación dominante se dirigía a establecer una cierta unidad de acción desde el centro radical hasta los partidos marxistas, en un espíritu puramente defensivo, con fines electorales, legislativo-reformistas y reivindicativos.

Este criterio, estrecho y pragmático, fue defendido por Salvador Allende, entre otros, quien sugería “la necesidad de buscar en el terreno práctico puntos comunes de acción que pudieran servir de vínculo de unión, sobre la base de proyectos concretos que tendieran a resolver los problemas fundamentales del país”. Mientras Carlos Altamirano, en representación del P.S.P. advertía: “se equivocan quienes creen que el problema de la izquierda chilena consiste en preparar proyectos concretos sabiamente elaborados”. “Lo que hace falta –añadía– es una perspectiva general que ponga en marcha todas las energías y recursos nacionales en pos de objetivos trascendentales y revolucionarios”.²

En el P.S.P. pues, que actuaba asociado con el Partido Democrático del Pueblo, la inspiración era sustancialmente distinta: se buscaba el establecimiento de un sólido frente único, capaz de operar como auténtica dirección colectiva de las luchas populares, con una clara política de clase y una vigorosa voluntad de poder. En suma, recogía la reciente lección de la historia: las experiencias colaboracionistas estaban agotadas; si los partidos marxistas querían retener en sus manos los emblemas de vanguardia debían elaborar y abrir camino a una política realmente nueva.

Hay constancia también, en los documentos de la época, de la vigorosa acometida socialista contra todo un conjunto de concepciones rutinarias y rancias. Sus dirigentes justifican el apoyo prestado a la candidatura Ibáñez “para contri-

buir al desmoronamiento de un sistema político caduco y crear así las condiciones para que un gran movimiento popular y revolucionario pudiera asumir la representación de los trabajadores y tomar el poder para realizar sus permanentes objetivos”.³ En esa misma carta se analiza, una vez más, el carácter reaccionario de la llamada burguesía nacional y la necesidad de reemplazar las estructuras básicas de la economía chilena, advirtiendo el trágico error político en que se incurriría si se transara con los sectores que tienen sus raíces y afirman su predominio social en aquella misma estructura y que han hecho del mecanismo inflacionario un sucio procedimiento para burlar el progreso material de las masas, con grave daño para el país entero.

Más adelante se pone en tela de juicio la democracia formal, señalando que “las elecciones han sido tradicionalmente una mascarada legalista en que el fraude, la intervención y el cohecho han torcido la libre expresión de los deseos populares”, de donde se deduce que “es preciso defender las libertades democráticas y ampliarlas cada vez más, es imprescindible mantener esas conquistas y no retroceder frente a los intentos de vulnerarlas; pero es un error defender todo el sistema, tal como lo han edificado nuestros enemigos de clase, y crear ilusiones en una Constitución, en unas leyes y en un sistema que sanciona un régimen de explotación de los trabajadores y una farsa electoral que ha permitido a las minorías gobernantes vestirse con un ropaje democrático fraudulento”.⁴

POR UNA DEMOCRACIA DE TRABAJADORES

Se hace, por último, un apremiante llamado a la unidad:

“La unidad sindical es uno de los requisitos insustituibles para la victoria, la unidad política de los partidos populares debe ser el otro paso, cada día más urgente.

Pero esa unidad debe ser clara, franca y sin doble fondo; no podemos aceptar un Comité de Enlace con nosotros, mientras funcione otro con un partido que, como el Radical, representa primordialmente intereses contrarios; esa complicada fórmula no podrá llevarnos, como la experiencia deberá demostrarlo, sino a la confusión y a la pérdida de energías y de tiempo. Mientras nosotros los invitamos a tomar el camino de la lucha sin cuartel contra los sectores reaccionarios, Uds. eligen el atajo de las concesiones al enemigo de clase. La unidad combativa del pueblo es el medio mejor para salir al encuentro del golpismo y la aventura, porque el golpismo y la aventura están alentados por la misma reacción que aparenta, hipócritamente, adherir a la democracia.

Para combatir el presente repudiable no es necesario volver a un pasado tenebroso. No nos parece serio integrar un aparato de lentos recados, ya que

ninguna organización se compromete a nada. El pueblo está exigiendo un comando enérgico y audaz, que sea capaz de movilizar a las masas por sus aspiraciones más urgentes y pueda, potencialmente, asumir su representación en cualquier emergencia política o social.

Lo que queremos reafirmar es que no hay una política por encima de las clases y que nuestro papel es el de acaudillar a las clases oprimidas en su lucha por conquistar el Poder y edificar una República de Trabajadores, con una verdadera democracia revolucionaria. Frente a las transacciones con el enemigo de clase y los frentes heterogéneos que nada representaban, buscamos una definición social a través de un frente de clase que simbolice la unidad popular⁵.

Todavía el 13 de febrero de 1956 Orlando Millas advertía, en las columnas de "El Siglo", lo pernicioso y contraproducente que resultaría excluir de la unidad a radicales y falangistas, ya que tal actitud los "echaría en manos del enemigo".

NACE EL FRAP

Dos semanas más tarde —el 29 de febrero de 1956— se firmaba el acta de fundación del Frente de Acción Popular. La suscriben Baltazar Castro y José Oyarce, en representación del Frente Nacional del Pueblo, y Humberto Martones y Raúl Ampuero, en representación del Bloque Democrático del Pueblo-Socialista Popular. Radicales y Falangistas quedaban "a merced del enemigo...".

El debate ideológico y político estaba lejos de haber culminado en un acuerdo expreso, pero el pacto —limitado a los partidos populares de inspiración más avanzada y anclado alrededor del eje comunista-socialista popular involucraba por su propia naturaleza una estrategia nueva. El párrafo más importante del acta expresa:

"El Frente de Acción Popular se caracterizará, fundamentalmente, como núcleo aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa antimperialista, antioligárquico y antifeudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas, que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto a los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la emancipación del país, al desarrollo industrial, a la eliminación de las formas feudales de la explotación agraria, al perfeccionamiento de las instituciones democráticas y a la planificación del sistema productivo con vistas al interés de la colectividad y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población trabajadora".

El FRAP libró su primera batalla electoral a pocas semanas de su constitución. Los resultados —más bien modestos— no desalentaron a sus fundadores.

Simultáneamente, desde el XX Congreso del PC de la Unión Soviética, en 1956, se filtraban ciertas informaciones, desconcertantes aunque fragmentarias, que sacudieron los medios políticos de izquierda, encendiendo las esperanzas de algunos y sumiendo a otros en oscuras tribulaciones. Nikita Jruschov, en un discurso secreto del cual comenzaban a conocerse algunas versiones fidedignas, había sometido a Stalin y a su régimen a un ataque despiadado. De un golpe, con acusaciones sobrecogedoras, pulverizó la homérica leyenda tejida alrededor de su figura.

El genial conductor quedó reducido a cenizas: sádico, incompetente, desconfiado hasta el delirio, vanidoso y desleal. Como un viento malsano, sobre los vastos territorios soviéticos había soplado el culto de la personalidad. Todo había sido una pesadilla, ahora comenzaba el deshielo.⁶

En esas circunstancias, ¿cómo no revivir el viejo sueño? Con nuevas vibraciones, volvían a escucharse las viejas palabras: “Proletarios del mundo ¡Uníos!”

ESPERANZAS Y RECELOS

Las repercusiones del XX Congreso del PC Soviético emanaban particularmente de dos enfoques nuevos:

- a) El camino para la realización del socialismo sería diferente en cada país, de acuerdo con sus especiales características nacionales, una vez que las fuerzas revolucionarias capturaran el poder político; y
- b) El “culto de la personalidad” practicado durante el gobierno de Stalin constituía la causa de graves errores, abusos y desviaciones en la política soviética y sería drásticamente sustituido en el futuro por una conducción colectiva, con arreglo a los principios leninistas.

Con la salvedad de que “lo ocurrido en Moscú no vale tanto por el tenor literal de los acuerdos como por el proceso que han puesto en movimiento”, el informe del CC del PSP al Pleno de agosto de 1956 se refería a la política recién inaugurada con notoria esperanza, velada apenas por algunas reservas ocasionales, resabio de desafortunadas experiencias en anteriores virajes:

“Queda por analizar las proyecciones de todo esto en la conducta de los comunistas chilenos, con los cuales, desde un ángulo distinto al enfoque del problema por la socialdemocracia mundial, tuvimos siempre fundamentales diferencias ideológicas y tácticas. Debe añadirse, sin embargo, que cuando la amenaza de la represión se hizo presente, no rehusamos jamás trabajar junto a ellos en aras de un interés superior, comprometidos o no con pactos formales. El comportamiento que adopten en adelante influirá decisivamente en los destinos del FRAP.

El Partido comunista chileno acomodó siempre su itinerario al meridiano de Moscú. Por una especie de deformación progresiva de su rol político, común a todos sus congéneres, comenzó venerando la Revolución de Octubre como un acontecimiento de trascendencia secular, en lo que estaba en la razón; continuó asignando a esa experiencia un valor universal, con total prescindencia de los factores locales y temporales; y terminó por someterse al dogma de que ningún impulso revolucionario lo era genuinamente, si no se hallaba bajo la inspiración soviética o no se integraba funcionalmente en la estrategia mundial de la URSS. Donde estaba la Unión Soviética estaba la verdad, la democracia, la paz. Si mandaba al patíbulo a la vieja guardia bolchevique, era cierto que la constituían un hato de espías y traidores; si estaba con Hitler, la guerra era un crimen inhumano de los imperialistas; si acorralaba a Tito, era para aplastar un nido de fascistas. Un Partido de tales condiciones acaba por situar la consigna por encima del examen objetivo de la realidad, coloca sus prejuicios en el lugar de sus deberes de clase.

Nuestras coincidencias ante la campaña de destrucción del “culto a la personalidad” no deben apartarnos del núcleo del problema, tal como se plantea aquí. Ya vimos en qué medida el Congreso comunista de Moscú parece determinado por un urgente anhelo de buscar la “convivencia pacífica”, mediante la relajación de las actuales tensiones. Ya hemos dicho, también, que ese solo resultado lo consideramos grandemente alentador. Secundariamente, ofrece una coyuntura para la rectificación de la estrategia comunista en todos los países, aunque ella resultara exclusivamente del ruidoso desplome del mito de la infalibilidad vaticana de Moscú.

Si la inercia mental de nuestros comunistas los llevara a jugar positivamente su parte en el proceso de apaciguamiento, no cabe duda que se inclinarán también a extremar la amplitud de su política, a idealizar la eficacia de las instituciones “democráticas” tradicionales, a descubrir cada día nuevas virtudes en la burguesía nativa. Se apartarán, por tanto, mucho más de las concepciones dominantes en el campo socialista.

Si, por el contrario, logran sacudirse valerosamente de los hábitos cultivados durante tantos años para reexaminar el carácter de las tareas planteadas por la realidad chilena de ahora, sin prejuicios y sin servidumbres intelectuales, con seguridad sus conclusiones contribuirían poderosamente a fortalecer la acción del pueblo y la clase obrera. Nuestro trabajo común sería algo más que un episodio de limitados alcances, sería el punto de partida del movimiento más pujante y prometedor de los protagonizados por los trabajadores en nuestro suelo”.

SE PROPONE EL PARTIDO UNICO

A medida que la nueva era se comenzaba a manifestar en todas las esferas de la vida soviética y contagiaba con su espíritu a los partidos más rígidos y burocratizados, la tendencia a buscar soluciones unitarias más definitivas se hizo presente en Chile. El Secretario General del PSP, hacia fines de 1956, formuló públicamente la proposición desde la tribuna del Teatro Caupolicán:

El FRAP —dijo— no ha logrado levantar una fe suficientemente poderosa y se encuentra en vías de ser una nueva desilusión política para el pueblo si no se avanza hacia la constitución del Partido Unico Revolucionario de los Trabajadores. Ahora —continuó— que han desaparecido todos los obstáculos para que socialistas y comunistas busquen, elaboren y adopten una línea chilena para la liberación social de obreros y campesinos, la fusión orgánica encendería el fervor de las masas como un incendio. Si no lo logramos, seguirán combatiendo a medio corazón.

Volodia Teitelboim, en nombre de los comunistas, una vez repuesto de la sorpresa comentó: “Cada cosa debe hacerse a su tiempo. La unidad no puede decretarse, tiene que desarrollarse en un proceso. El FRAP es el comienzo y es un buen comienzo. Por otra parte, la lucha por la unidad tiene etapas y estaciones. La próxima estación es la elección de marzo”.

Allende coincidió en la formación del partido único: “pero él debe nacer como fruto de un proceso político madurado en la base”, añadió.

Un cronista, inclinado por ese entonces a repartir sus simpatías entre Allende y los comunistas, hizo el siguiente agudo comentario: “por un lado (Ampuero) interpreta una aspiración general; por el otro, realiza una “verónica” magistral para escudar la presión unitaria en el seno de su partido y además busca una victoria personal sobre el Partido Comunista, revolviéndole el puñal de los recientes sucesos internacionales (se refiere a los acontecimientos de Hungría). Una manera lamentable de hacer bajar de nivel una polémica de importancia”.⁷

El FRAP ha continuado atravesando estaciones. El proceso sigue madurando. Después de este intento, la condición esencial de la unidad —la autonomía real y absoluta del partido unificado— no se ha vuelto a tocar. Para no rebajar el nivel de la discusión, probablemente.

Han pasado 13 años, desde entonces.

RECONCILIACIÓN SOCIALISTA

Era inevitable que el clima de unidad y la progresiva convergencia de posiciones de las agrupaciones de izquierda llevaran al primer plano la fusión de los

dos partidos socialistas, aliados ya en el seno del FRAP. Existían, en apariencia, todos los elementos formales para avanzar en tal sentido: el marxismo, como doctrina común; una semejante concepción orgánica; un equipo directivo en el P.S.CH. integrado por antiguos socialistas populares o por camaradas de ruta de Bernardo Ibáñez aparentemente arrepentidos de sus viejas aventuras oportunistas; una misma línea táctica concretada en el Frente recién constituido. Faltaba, sin embargo, la confianza.

¿Hasta dónde las heridas de la división persistían? ¿En qué medida era honesto el tránsito de los socialistas de Chile desde el rabioso anticomunismo de los años 1946-48 hasta las actitudes de incondicional subordinación de 1953-56?⁸ Su misma oscilación entre posiciones extremas ¿no era un peligroso índice de ligereza y versatilidad?

Tribulaciones como estas hicieron lento y cauteloso el avance hacia la unificación. Ellas se reflejan nítidamente en este documento:

“Una vez el Socialismo estuvo formalmente unido. Tuvo una sola directiva, una línea política común sancionada por los Congresos y hasta un uniforme que lo hacía presentarse ante el público como una fuerza monolítica. Teóricamente, con un régimen de democracia interna, no había por qué suponer que esa unidad se quebrantaría. Pero andando el tiempo, ese partido se hizo trizas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué unos hombres solemnemente unidos por principios comunes tomaron diferentes caminos? ¿Qué razón hubo para que la democracia interna se demostrara incapaz de resolver las diferencias? Parecen odiosas y extemporáneas estas preguntas, pero no lo son si se considera que en el partido único de mañana puede producirse el mismo fenómeno, haciendo estériles todos nuestros esfuerzos y lanzando al socialismo a una nueva crisis, de la cual no creo que pudiera recuperarse jamás.

Quiero dar mi propia respuesta a las preguntas anteriores. De nada valen los reglamentos, es imposible el juego de las mayorías, no cabe la convivencia cuando falta una real identificación de aspiraciones y conductas, de concepciones y de estilo. Comprendo que la existencia de esta comunión es difícil de apreciar en términos objetivos; pero pienso que cuando un dirigente duda de ella hace mal en precipitar una fusión orgánica que sabe resentida aún por la desconfianza y los recelos. En otras palabras, la unificación debe ser el resultado maduro de una verdadera identificación política, honestamente constatada, y no sólo el producto convencional de fórmulas ambiguas, redactadas de manera que cada tendencia parezca encontrar en ellas la expresión de sus propias aspiraciones. Así conseguiríamos otra vez la apariencia de un Partido fuerte, pero seguiríamos subjetivamente divididos.

Es cierto que arribamos a acuerdos en todos aquellos puntos que se referían a la constitución de la directiva en sus diversos niveles, pero, aunque Ud. en su

carta dé por resuelto el problema de la concepción ideológica y la línea política del partido unificado, la verdad es que él continuaba abierto, sólo que habíamos remitido a una comisión mixta la redacción del documento que los abordase. En su seno —era de esperarlo— se volverían a plantear las diferencias teóricas y prácticas superficialmente abordadas en nuestras conversaciones. En otro punto del itinerario de la unidad se presentaría inevitablemente el dilema: o una fórmula de compromiso con todos los inconvenientes arriba señalados, o una nueva ruptura en los momentos en que nuestros militantes menos la esperaban”.⁹

Las elecciones parlamentarias arrojaron resultados inferiores a los previstos para el FRAP, pero, así como la unidad popular había cristalizado el año anterior en un tenso ambiente de represión política y social (estado de sitio, congelación de sueldos y salarios recomendada por la Misión Klein-Sacks, discusión del Referéndum Salitrero), los acontecimientos de abril de 1957 precipitaron las gestiones para dar una mayor cohesión a las fuerzas de izquierda. La agitación desencadenada en las calles por el alza de tarifas del transporte urbano, de una amplitud y una violencia sin precedentes, demostró simultáneamente dos cosas: el formidable empuje revolucionario potencial de las masas y la carencia absoluta de una vanguardia capaz de orientar y conducir esa rebeldía.¹⁰ La única manera de forjar un comando político solvente y eficaz parecía encontrarse en la aceleración de los pasos encaminados a reunificar el socialismo.

EL CONGRESO ABRE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

El Congreso de Unidad se realizó en la primera semana de julio y, tanto por la elección de Salomón Corbalán para Secretario General, como por el texto del voto político y la composición del Comité Central, significó una clara victoria del ala socialista popular. Decía la resolución política:

“Reafirma (el partido) su más decidida y resuelta oposición a la gestión política, social y económica del actual Gobierno, lo denuncia como mero instrumento del imperialismo y de la reacción chilena, y lo acusa de haber defraudado las esperanzas populares y traicionado el programa que ofreciera realizar.

Traduce concretamente esa oposición en su decidido propósito de trabajar incansablemente por el fortalecimiento del Frente de Acción Popular y la más amplia movilización de masas a su alrededor, sin sectarismos ni exclusivismos de ninguna especie, a fin de convertirlo en eficaz instrumento para la toma del poder por los partidos populares.

Desestima las tentativas de los partidos centristas para encabezar el movimiento político popular y recuperar el poder del Estado, por considerarlos fuer-

zas interesadas en el mantenimiento del "Statu quo", dóciles a la influencia del imperialismo y de la reacción. Y afirma que las próximas elecciones presidenciales ofrecen la oportunidad para que los trabajadores puedan expresarse como clase social mayoritaria, dispuesta a iniciar el camino hacia la conquista del poder con un personero de sus filas. Ante tal evento, el FRAP debe llevar su propio candidato, surgido de una amplia y democrática Convención del FRAP y de los diversos organismos económicos y sociales de las clases asalariadas nacionales, de acuerdo con su línea de clara independencia política, de independencia de clase, en su lucha revolucionaria por la conquista del poder".

El acuerdo que habría de dar su verdadera fisonomía al proceso de reagrupamiento se refirió a la decisión de levantar una candidatura del FRAP a la Presidencia de la República, apoyada en un programa de nítidos perfiles clasistas. Oficialmente desahuciaba el viejo modelo de alianza, más o menos enraizada en la fórmula y las tradiciones del Frente Popular; los partidos centristas, y muy particularmente el Partido Radical, eran definidos como factores de neutralización de una política realmente revolucionaria. En cierto modo, la clase obrera, los trabajadores, a través de sus partidos, reclamaban su mayoría de edad; emancipaban su acción y sus perspectivas del estéril tutelaje del reformismo conservador e inauguraban una etapa nueva por su estilo, sus metas y su programa.

LA ELECCIÓN DEL 58

La Convención Nacional del Pueblo, realizada más tarde, encarnó esos anhelos en la candidatura de Salvador Allende. Allí, la vieja táctica acomodaticia y maniobrera de los tradicionalistas de izquierda fue avasallada por el impetuoso espíritu renovador que desplegó el socialismo unido, bajo la inspiración de las tesis involucradas en el "Frente de Trabajadores".

Muchos hombres de izquierda tuvieron la impresión de que se caía en un extremismo delirante, exactamente en la línea contraindicada para ganar una elección. El propio candidato pensó que se le ofrecía un presente griego, una postulación sin esperanzas, y hubo necesidad de gastar ímprobos esfuerzos para llevar al público la sensación terminante de que se trataba de un propósito firme y no de un romántico saludo a la bandera.¹¹

El desarrollo de la campaña fue la mejor comprobación de la justeza de esa línea. Iniciada con el escepticismo de muchos altos dirigentes, tomó pronto un impulso inusitado, dio confianza a las masas urbanas y abrió una brecha profunda en la conciencia campesina; la candidatura, originalmente considerada sin expectativas, tomó los relieves de una ofensiva impetuosa que desafiaba

amenazadoramente el dominio reaccionario. Las mismas agrupaciones que difícilmente habían acumulado 160.000 votos en 1957, lograron reunir 356.000 en 1958, colocándose a 30.000 sufragios detrás de la primera mayoría alcanzada por Alessandri.

Todo lleva a pensar que jamás el pueblo estuvo más cerca del poder. Con una organización embrionaria, un aparato electoral casi inexistente y menguados recursos financieros, había disputado voto a voto la victoria a los poderosos clanes económicos y a los partidos de más añeja experiencia en la manipulación de la opinión pública y en las artimañas electorales.

Hay fundadas razones para presumir que el auténtico resultado de las urnas fue otro: que una vigilancia rigurosa de los escrutinios habría legitimado muchos miles de sufragios de izquierda arbitrariamente anulados. El papel diversionista asignado al cuarto candidato, el cura de Catapilco, y el despliegue de formas nuevas y más repugnantes de cohecho, además, restaban prestancia a la precaria ventaja del candidato reaccionario. ¿Por qué, entonces, el FRAP se entregó sin lucha, asistiéndole el derecho de colocar al Congreso ante la necesidad de revisar el controvertido resultado de una contienda estrecha?

En el orden material, la inercia se explica por las deficientes condiciones de organización de los partidos; en el orden ideológico, porque ya asomaban los primeros síntomas del electoralismo, expresión candorosa de confianza en la intangibilidad de las reglas del juego democrático; en el orden moral, por el impacto que produjo en las masas el discurso final del candidato. El 31 de agosto había dicho, en tono dramático y solemne: “¡El que saque un voto más será Presidente de Chile!”.

Movilizar al pueblo para bloquear el triunfo de quien aparecía ganando por más de 30.000 votos, cuatro días más tarde, era una tarea impracticable.

EL GOBIERNO DE ALESSANDRI

La designación de Alessandri fue un acontecimiento insólito. Por primera vez, desde 1932, la Derecha volvía al poder con un hombre de sus propias filas, apoyado en una plataforma liberal y libre-empresista, en brazos de una fuerte corriente de opinión que soñaba con el feliz retorno a los mitos económicos y políticos predominantes en épocas anteriores al Frente Popular, si bien estaba lejos de constituir la mayoría del país.

Pese a todo, el estrecho margen entre las dos primeras mayorías dejó una estela de optimismo en la opinión de izquierda. Parecía seguro vencer en una próxima contienda por la Presidencia de la República sólo con subsanar ciertas deficiencias, poner más empuje y, tal vez, ganar determinados sectores vacilan-

tes. Hasta se entendía que Allende, como candidato para el futuro intento, quedaba automáticamente en órbita. En suma, había que refrenar las impacencias y esperar confiadamente la otra prueba. Después de todo, seis años no era demasiado esperar.

Antes de cinco años, en efecto, las ilusiones puestas en Alessandri se habían desplomado. Bajo la inspiración de la política manchesteriana se agudizaron los problemas tradicionales de la economía chilena en todos los campos, mientras una ola de inmoralidades sacudía los venerables cimientos de las instituciones más caras a la oligarquía.

En un documento de 1964¹² se denuncia el envilecimiento ominoso de los sueldos y salarios como consecuencia del violento ritmo inflacionario, que había alzado los precios al consumidor en el curso de 1963 en un 45%, la más alta tasa desde 1955. Se señala también el incremento de la cesantía, principalmente en las ciudades más importantes: Santiago, Valparaíso y Concepción, donde alcanzaba cifras superiores al 5%; mientras en las provincias predominante agrícola se elevaba por encima del 8%, configurando un penoso cuadro de hambre y privaciones en los hogares humildes.

El ejercicio presupuestario de 1963 se había cerrado con un déficit fiscal superior a los 500 millones de escudos de la época, equivalente al 27% del monto total; vale decir, el más alto de nuestra historia. La deuda externa se acercaba a los 2.000 millones de dólares, lo que se ilustraba diciendo que cada chileno, niño o anciano, hombre o mujer, culto o analfabeto, debía un promedio de 250 dólares al extranjero como fruto del irresponsable manejo de las finanzas públicas. “Si el pan de mañana –se añadía– depende del banquero o del prestamista, uno y otro subordinado a determinada política extranjera, no es nuestra voluntad la que manda, sino la voluntad extranjera”.

Se explicaba así la menguada actitud de la Cancillería frente a los acontecimientos recientes: la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos y la indiferencia que rodeó la agresión armada sufrida por Panamá.

En cada uno de estos casos estuvo en juego algún principio fundamental y la línea chilena se caracterizó por su formalismo adocenado y sus reservas meramente procesales, hurtando siempre el cuerpo a los problemas de fondo. La resolución de la OEA eliminando de la comunidad a Cuba por estimar incompatible el régimen socialista con su participación en ella, constituyó una violación flagrante de los principios que rigen a las Naciones Unidas –a los cuales debe supeditarse toda organización regional– en cuanto garantizan a todos los Estados, cualquiera que fuese su régimen económico-social, el derecho inalienable a formar parte de las organizaciones que la integran.

El daño ocasionado a nuestro comercio exterior por las medidas restrictivas derivadas del bloqueo implicaba, en cierto modo, un acto de agresión económi-

ca contra Chile, que debió generar una oposición intransigente. Frente a los luctuosos sucesos de Panamá, el Ejecutivo, encadenado a la tesis de la intangibilidad de los tratados, llegó al extremo de negar el carácter de agresión inherente a los hechos en que se basaba la reclamación panameña, rehusando –en una ominosa soledad– prestar su apoyo a la República hermana.

El análisis permitía concluir que ocho años de rigurosa contención de las remuneraciones, bajo la consigna de estabilizar la economía y de impulsar su desarrollo, habían conducido al fracaso, al anquilosamiento del sistema productivo y a una distribución de la renta cada vez más antisocial y mezquina. El mismo informe resumía así la situación:

“La pobreza colectiva que se pretende idealizar bajo el manto de una frugalidad consciente, no ha sido obstáculo para que el alto mundo financiero, vinculado por múltiples lazos al equipo gobernante, haya vivido un quinquenio de oro. Los felices poseedores de los papeles del Gobierno, bonos y pagarés, y los poderosos negociantes asociados con altas autoridades aduaneras pueden, tal vez, alabar el régimen de los gerentes, pero el pueblo tiene sobrados motivos para repudiarlo con todas sus fuerzas”.

OPOSICIONES PARALELAS

Tanto para el FRAP como para la Democracia Cristiana cualquiera posición futura dependía de su capacidad para captar las fuerzas que comenzaban a distanciarse del alessandriismo. Entre las elecciones de 1961 y las de 1963, los viejos partidos Conservador y Liberal sufrieron una fuerte declinación, bajando en más de un veinte por ciento su participación en el total de electores.

Entretanto, diversos acontecimientos comenzaban a empujar las velas del FRAP con nuevos bríos.

A fines de la administración anterior el Partido Comunista logró su plena rehabilitación cívica, y desde entonces su actuación a la luz del día aportó considerable refuerzo a los equipos dirigentes en todos los niveles. Alessandri, cuya política social se había inspirado hasta entonces en el método de ahogar por el cansancio y el hambre las manifestaciones y movimientos reivindicativos, desencadenó sorpresivamente una brutal represión armada sobre los pobladores de “José María Caro” durante un paro general ordenado por la CUT. Quedó un saldo impresionante de muertos y heridos para cumplir con el atávico ritual de sangre de todos los gobiernos reaccionarios. La imagen del Presidente paternal, desinteresado, severo pero bondadoso, se hizo trizas bajo el impacto de los disparos de esa mañana de primavera.

Desde lejos venían noticias estimulantes. Sobre Cuba, descolgándose por

las verdes vertientes de la Sierra Maestra, un huracán de desaliñadas tropas había dado cuenta de Batista y su pandilla. Con más fe que pertrechos, el “26 de julio” sacudió las tierras de América con la revolución más joven y más sorprendente de su historia. Los nuevos líderes instalados en La Habana, a 80 millas de las costas norteamericanas, dieron comienzo así a la temeraria contienda que dura hasta nuestros días. El socialismo se comenzaba a construir en español. El aniquilamiento del imperialismo dejaba de ser un sueño remoto para transformarse en la tarea concreta de esta generación.

De sus opositores de 1958, Alessandri sólo conquistó a los radicales. Frapistas y democristianos optaron por una resistencia activa como estrategia fundamental para sucederlo en el poder.

La definición de la actitud del FRAP con respecto a la DC constituyó una fase compleja y decisiva en la elaboración de una clara política popular. A lo largo de varios años —en virtud de cierto paralelismo en la acción— se había fomentado la imagen de que entre ambas corrientes existían estrechas analogías, susceptibles de reflejarse en un entendimiento presidencial. Pero si en su comportamiento y en su lenguaje la DC se esmeraba en repetir con la mayor fidelidad las demandas fundamentales de la izquierda, un proceso más hondo se operaba en la composición de sus círculos dirigentes: poco a poco el partido era colonizado por los personeros de las viejas clases dominantes. Sólo la notable capacidad de mimetismo de la DC podía conciliar cosas tan contradictorias: nunca un partido de oposición dispuso de tantos cargos importantes en la administración pública; jamás otra agrupación enalteció tanto la soberanía del país para suscribir, a renglón seguido, las leyes más perniciosas para nuestra independencia, tales como el Nuevo Trato para la Gran Minería del Cobre y el Referéndum Salitrero; pocas veces ideas más conservadoras fueron envueltas en un lenguaje más aparentemente nuevo. Transitando por la cuerda floja de la fe religiosa, decenas de terratenientes y empresarios se deslizaban silenciosamente desde las posiciones ultramontanas al cálido regazo de un partido que les ofrecía, simultáneamente, tranquilidad para sus conciencias y para sus bolsillos.

LAS PRIMERAS CONCESIONES

Consciente del papel históricamente regresivo que jugaría la DC en los acontecimientos ulteriores, el PS resolvió forzar la marcha a fines de 1962. Desde un año antes, en el Congreso de Los Andes, estaba virtualmente proclamada la candidatura de Allende, dejándose a la discreción del CC la conducción de las gestiones y la oportunidad de oficializarla. No obstante ser conocida la disposición de los comunistas para adherir a esa candidatura, se había preferido

arraigarla primero en los sectores más vacilantes –padenistas e independien-tes– antes de su consagración pública por las agrupaciones mayoritarias del FRAP. Entretanto la D.C. había operado con habilidad, amagando seriamente las expectativas políticas de la candidatura Allende mediante una gestión del Padena encaminada a lograr un entendimiento FRAP-DC para la contienda que se avecinaba. Concurría también a fomentar el clima unitario el énfasis con que el PC señalaba al Frente Democrático (formado por conservadores, liberales y radicales) como el verdadero y principal enemigo.

El Pleno socialista de diciembre señala un hito fundamental en la estrategia de esos años. Pese a que el propio Allende bregó por una fórmula de compromiso con la D.C., una mayoría abrumadora rechazó esa alternativa, comprendiendo con absoluta lucidez que el adversario realmente peligroso iba a ser en definitiva Frei y no Durán¹³. Esa mayoría rehusó esperar los resultados de la elección de regidores para dirimir un ambiguo mejor derecho y destruyó así la maniobra dilatoria intentada por Renán Fuentealba¹⁴; simultáneamente, acordó requerir un pronunciamiento definitivo y urgente al FRAP en favor del personero socialista. Se logró poco después, en la Asamblea Nacional del Pueblo realizada los días 26 y 27 de enero de 1963, en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

La enérgica conducción política impuesta por los partidos obreros en esos momentos se debilitó en los meses siguientes, bajo la influencia de los resultados electorales de abril, inferiores a los esperados. Comenzó a ganar terreno una cierta sobreestimación del valor de los independientes. El Movimiento de Independientes de Izquierda, por ejemplo, presionó tenazmente para colocar en los puestos claves a elementos sin partido (Presidencia de Comando Político, Jefatura Electoral, Comando Femenino) aun antes de agrupar en sus filas a los propios independientes adheridos a la campaña. Junto a los partidos principales, dueños de más de medio millón de votos, comenzaron a proliferar toda suerte de organizaciones, serias unas, fantasmales otras. Al promediar el año, los tres partidos con sólidos contingentes electorales flotaban en una espesa constelación de siglas, estados mayores, grupos, movimientos y símbolos, donde se mezclaban el oportunismo y la buena fe, la cooperación abnegada y competente y el arribismo más desenfrenado y más inepto. El propio Comando Nacional pasó a ser una entelequia inoperante. En tales condiciones el verdadero poder de decisión se radicó imperceptiblemente en las manos del candidato y su “staff” íntimo, constituido principalmente por periodistas y amigos personales.

El tema de los independientes se abordó abiertamente en una de las asambleas nacionales de la campaña. Representantes de los partidos dejaron en claro el valor excepcional que asignaban a la adhesión de ciertas personalidades de gran prestigio, como asimismo la importancia decisiva de la colaboración prestada por numerosos intelectuales, dirigentes, técnicos y activistas ajenos a

sus filas, pero, con razón, negaban a la abigarrada, dispersa y anónima masa de independientes toda cohesión social o ideológica para ser representada de alguna manera auténtica. No era ni una clase, ni una tendencia; a lo sumo una multitud heterogénea de hombres y mujeres refractarios a comprometerse formalmente con los partidos –por escepticismo, desconfianza o, simplemente, por carencia de vocación política– pero inclinados a brindar su apoyo a una u otra corriente con notoria constancia y vinculados a uno u otro sector social concreto, sensibles, por tanto, a los problemas, los anhelos y los valores de su clase. Crear la imagen de un independiente abstracto –agregaron– y adaptar a esa imagen la táctica y el contenido de la campaña, era capitular ante el pacifismo pequeñoburgués, trabajar para la conquista de un tipo de ciudadano sin ideales, sin rebeldías, sin pasiones. En suma, era sepultar el contenido revolucionario de la campaña para sustituirlo por una sórdida cacería de votos.

En verdad, una cosa era luchar contra el sectarismo partidista para ofrecer una amplia participación a todos los que tenían algo que aportar, y otra muy distinta renunciar al papel de dirección política que correspondía al FRAP.

LA CAMPAÑA CAMBIA DE SIGNO

La impaciencia pudo más. A espaldas de las autoridades formales de la campaña y de su partido, el senador Allende trató de convencer a moros y cristianos que su candidatura era inofensiva. Visitó al Cardenal, en un gesto más bien lustral que de emplazamiento; sostuvo discreto coloquio con el Serenísimo Gran Maestro de la Masonería para abordar delicados asuntos que, por supuesto, estaban y están todavía vedados al mundo profano, comprendidos los jefes de su candidatura, y terminó con una desdichada entrevista con el Senador Durán.

Cuando la candidatura de la derecha tradicional se desplomó, luego de la elección del Dr. Naranjo, el Senador Allende creyó llegado el momento de imponer su dirección personal sin tapujos y de cristalizar la alianza FRAP-PR que por tanto tiempo añoraba.¹⁵ Primero fue su equívoco llamado al pueblo radical, en la gigantesca recepción de la capital al vencedor de Curicó, y, luego, la cita de marras con el contumaz antagonista de las primeras fases de la campaña.¹⁶ Era una carrera desesperada tras una mayoría abstracta, estadística, irreal, sin relación alguna con el desplazamiento efectivo de electores y sus cambiantes simpatías políticas. En los últimos meses la descoloración del FRAP y la inmolación sucesiva de las posiciones de principio en aras de un electoralismo desenfrenado llevaron a responder con meras declaraciones de ritual a la ruptura de relaciones con Cuba y a silenciar o subestimar la ostensible presión militar que comenzaba a insinuarse sobre nuestras fronteras.

En ese ambiente, enrarecido por el utilitarismo político, comenzaron a desvanecerse las concepciones inspiradoras de la campaña anterior y la impetuosa rebeldía que había vitalizado la acción de la izquierda en sus últimas batallas. En manos de tecnócratas y managers electorales, el Frente de Trabajadores se licuaba como la sangre de San Genaro. El desdichado hombre común, confundido, no atinaba a percibir la diferencia entre la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. Finalmente, entre dos revoluciones prefirió la más barata; la que le ofrecía Frei, alejada de concomitancias peligrosas, incruenta, aséptica y cristiana.

Como otras veces, los radicales de derecha votaron por la derecha, unos pocos disidentes honestos por Allende y los otros por el candidato de su partido. Frei, con el apoyo de los tradicionales partidos reaccionarios logró la mayoría absoluta, con una ancha ventaja sobre el candidato popular.

Alrededor de Allende se agrupó casi un millón de chilenos. Los años siguientes estaban destinados a demostrar que ese contingente carecía de una auténtica voluntad revolucionaria y que su dirección política —el FRAP— era incapaz de utilizar esa extensa movilización como un paso efectivo hacia la conquista del poder.

NOTAS

1 Carta de Aniceto Rodríguez a Galo González, 20 de octubre de 1953. Publicada el 22 de octubre en el diario "La Nación". Santiago de Chile.

2 "Panorama Político". 30 de diciembre de 1955. Discusión de Mesa Redonda.

3 Carta del PSP al Frente Nacional del Pueblo, 22 de mayo de 1955.

4 *Ibíd.*

5 *Ibíd.*

6 Un dato espeluznante del discurso de Jruschov fue su revelación de que 98 miembros y candidatos del Comité Central, de un total de 139 elegidos en el XVII Congreso del PCUS, fueron luego arrestados, y la mayoría fusilados entre 1937 y 1938. Fueron igualmente arrestados bajo la inculpación de crímenes contrarrevolucionarios 1.108 de los 1.966 delegados al mismo "Congreso de la Victoria"...

7 "Ultima Hora", 10 de diciembre de 1956. Santiago de Chile.

8 El acatamiento a la autoridad del PC se reflejó muy nítidamente en el discurso de Salvador Allende en el homenaje rendido a Stalin, con ocasión de su muerte. Años después, para explicar sus elogios, escribía a "El Mercurio": "Ignoraba yo en esa época, como todas las gentes (sic), intimidades de los acontecimientos políticos de la URSS que después fueron revelados".

9 Carta del Secretario General del PSP, Raúl Ampuero, al Secretario General del PSCH, Salvador Allende, 7 de diciembre de 1956.

10 El Comité Central del PSP, único partido que justificó la protesta popular, fue

sometido a proceso por el Gobierno de la época. El episodio sirvió para medir la firmeza de algunos seudorrevolucionarios que dictan cátedra hasta hoy.

11 “Miré la postulación como una simple aventura electoral sin mayor importancia para mí”. Declaración de Allende al autor de “Chile entre dos Alessandri”, Arturo Olavarría Bravo, Tomo III, página 38.

12 Raúl Ampuero Díaz. “1964: año de prueba para la Revolución Chilena”, Prensa Latinoamericana, 1964, Santiago de Chile.

13 En el Congreso celebrado después de las elecciones, en Linares, Allende quiso desconocer este intento suyo, pero el testimonio de los asistentes al Pleno fue demasiado abrumador para permitirle perseverar en tal negativa. Varios de ellos recordaron, inclusive, que Allende había llegado a expresar en privado que la carta a Frei la tuvo redactada.

14 La carta de Renán Fuentealba al presidente de PADENA ratificaba “la firme decisión de resolver en conjunto con los democráticos nacionales, y con todas las fuerzas populares de oposición, la designación de un candidato común a la presidencia en los comicios de 1964”, invitando a esa colectividad a postergar toda proclamación hasta después de las elecciones de abril de 1963.

15 “Todo cuanto me has sugerido y me sugiera la comisión que se va a reunir el lunes, lo haré mío y se realizará, aunque se oponga medio mundo. Está bueno que mis amigos vayan sabiendo que yo no me voy a dejar gobernar por nadie y que haré siempre lo que yo considere justo y conveniente”.

“Lo que yo anhelo es contar con el Partido Radical y gobernar con él”.

Son dos declaraciones que Arturo Olavarría pone en boca del candidato, Dr. Allende. “Chile entre dos Alessandri”, Tomo III, página 226, y Tomo IV, página 163.

16 El lunes 4 de mayo, el candidato del FRAP requirió el apoyo del Senador Durán. Recién al día siguiente en la madrugada tuvieron conocimiento de esta gestión, de labios de Allende, el Secretario General y el Subsecretario del PS (Ampuero y Mandujano). Fue en Los Cerrillos, minutos antes de partir para Magallanes.

LA BRECHA SINDICAL

De "La Izquierda en Punto Muerto",
Editorial Orbe, 1969.

UN FRENTE VITAL

Mucho antes que la industria capitalista concentrara al proletariado fabril alrededor de los grandes establecimientos modernos, la naturaleza minera del país engendró poderosos núcleos obreros, particularmente en las provincias nortinas de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y en las sureñas de Concepción y Arauco. Es imposible ignorar la participación de los trabajadores del carbón, del salitre y del cobre, no ya en los acontecimientos sociales, sino también en la historia propiamente política de Chile, especialmente en ciertos momentos de profundo significado en lo que va corrido del siglo: el movimiento demoliberal del año 20, la caída de la dictadura de Ibáñez, la victoria del Frente Popular. Podríamos decir con propiedad que la gravitación de la clase obrera en la vida cívica se hace presente mucho antes que ella alcance gran desarrollo numérico, favorecida por el hecho de agruparse al servicio de múltiples explotaciones mineras, casi siempre contiguas, debido a las características geológicas de los yacimientos, cuencas o distritos.

Este proletariado, geográficamente confinado en los campamentos, desvinculado casi siempre de sus parientes más próximos, protagonista cotidiano de toda suerte de operaciones riesgosas, conoció desde temprano la disciplina de la organización y las asperezas de la lucha; esas condiciones laborales y ese estilo de vida influyeron profundamente en el comportamiento de la naciente clase obrera. De ahí que la huelga, las manifestaciones de masas, la ocupación de fábricas, los paros solidarios, las marchas, hayan sido sus medios habituales de combate, tanto en respaldo de reivindicaciones puramente salariales como en apoyo de demandas de alcance político.

Cualquiera que sea el valor que se asigne en la actualidad a la acción sindical, en el contexto de una ofensiva global contra el régimen capitalista, parece obvio que ofrece —como manifestación primaria de la lucha de clases— una plataforma de apoyo irremplazable a las fuerzas que bregan por el cambio. Sin embargo, es probablemente el terreno en que las deficiencias, debilidades y

vacíos de la izquierda tradicional se exhiben con mayor nitidez, pese a las grandes ventajas que ofrece el tradicional espíritu unitario que anima a los trabajadores.

La unidad orgánica, en efecto, a nivel nacional, sólo brevemente interrumpida entre 1946 y 1953, ha sido ineficaz para corregir la fragmentación social, sectorial, programática y operativa de la clase trabajadora; hecho que ha malogrado todos los esfuerzos dirigidos a frenar la pauperización creciente del sector laboral y ha impedido ofrecer un horizonte común a quienes incumbe el deber histórico de emancipar a la sociedad emancipándose a sí mismos.

SINDICATOS PARA TODOS

Una primera fisura radica en la circunstancia, vigente hasta hoy, de que al sector público se le niega el derecho a la organización sindical, en virtud de anacrónicas restricciones del Código del Trabajo. Los obreros y empleados fiscales, semifiscales y municipales, se han debido agrupar subsidiariamente en asociaciones gremiales de precaria capacidad negociadora. Dueño el Ejecutivo de facultades absolutas y discrecionales para fijar anualmente los porcentajes de reajuste, ni siquiera la más vigorosa presión parlamentaria produce efectos decisivos; la huelga, por lo demás, como desesperado recurso de hecho, deviene más y más impracticable, en la misma medida en que los grupos funcionales oficialistas operan como cuñas para romper la disciplina de las organizaciones. Agreguemos, todavía, la frecuencia y la rudeza con que se aplican sanciones administrativas sobre los dirigentes y afiliados más responsables de las organizaciones gremiales y tendremos una idea aproximada de las primitivas condiciones en que lucha este sector.

Pero si ya es un grave factor de retraso la prohibición referida aplicada a los servicios públicos tradicionales, mucho más retrógrada es su extensión a los trabajadores de las empresas o corporaciones públicas: la sola Corporación de Fomento tiene en la actualidad cerca de 50 filiales, entre empresas agrícolas, industriales y mineras, institutos y dependencias diversas, que ocupan sobre 35.000 empleados y obreros. Salvo las que adoptaron el estatuto de sociedad anónima, en ninguna otra el personal puede ejercer el derecho a sindicalizarse, en circunstancias que las condiciones laborales son análogas a las que prevalecen en la industria particular. Si se considera el número creciente de empresas públicas y la intervención cada día mayor del Estado en la economía, particularmente en calidad de inversionista, no es aventurado pronosticar que esa evolución producirá efectos regresivos en el campo social al ensanchar día a día el área de las actividades donde se halla vedada la creación de sindicatos. La

prohibición se inspira en un formalismo irritante, porque no se fundamenta en la naturaleza de los bienes o de los servicios producidos por la empresa sino en la particularidad adjetiva de que su patrimonio —en todo o en parte— es de origen fiscal. Así, hay minas en Puerto Cristal, maestranzas en Antofagasta, plantas de telecomunicaciones en Santiago, semejantes a todas las minas, a todas las maestranzas, a todas las estaciones radiotelegráficas, donde, sin embargo, el personal no puede agruparse en torno a sindicatos reconocidos por la ley.

En ciertas usinas vinculadas a la producción militar, como FAMAE y ASMAR, que ocupan personal civil junto a dependientes de instituciones armadas, el régimen interno es todavía más injusto. Existe la tendencia a aplicar a la totalidad de los trabajadores las rigurosas normas de la disciplina castrense, negándoseles a los obreros y empleados sujetos al Código del Trabajo, simultáneamente, tanto los derechos que éste concede a la generalidad de los trabajadores como los beneficios especiales que la ley reconoce a la dotación de uniforme.

La falta de una organización sindical regular viene produciendo consecuencias funestas en la fijación de los reajustes anuales, en el manejo de los escalafones, las promociones y los ascensos y, sobre todo, en el deterioro sistemático de las condiciones para el retiro. Con el fin de abaratar el costo de la revalorización periódica de las remuneraciones, no se ha encontrado otro medio más expedito que el de aplicarla selectivamente al personal activo, negándola o reduciendo su monto a los jubilados, mediante una variada gama de expedientes oblicuos e inmorales. Las organizaciones gremiales han terminado por aceptar la discriminación, asediadas por circunstancias de extrema rigidez, con el resultado que la degradación material de los antiguos servidores públicos ha llegado a límites intolerables.

Para incorporar a los servidores de la Administración y de las corporaciones públicas al campo de la lucha social, es indispensable rodear a sus organizaciones de una protección legal mínima, garantizando al menos que su autoridad podrá sobreponerse a la segregación partidista y al persistente intento de los gobernantes de usar a sus correligionarios como agentes de escisión y de discordia.

EMPLEADOS Y OBREROS

Chile es uno de los rarísimos países del mundo donde persiste la anacrónica distinción de obreros y empleados. Se basa en un criterio de clasificación sin base racional, puesto que el predominio del trabajo manual e intelectual, en las actuales condiciones tecnológicas, es un dato imposible de mensurar en términos científicos. En el hecho de discriminación tuvo y tiene un propósito oculto: se

trata de inocular, en el personal que hace trabajo limpio, de escritorio, en calidad de colaborador inmediato de los ejecutivos, una mentalidad sumisa hacia los jefes de la empresa y, paralelamente, de distanciamiento social hacia los operarios que participan directamente en la producción. Con el tiempo los diferentes sistemas previsionales han agregado un nuevo factor de divorcio entre ambos sectores, de donde surge una tendencia sostenida de los obreros a obtener su clasificación como empleados por medio de la ley.

Son varios y muy significativos los efectos del proceso. Por tratarse, justamente, de grupos obreros calificados y de especialistas con remuneraciones superiores al promedio, su incorporación a la Caja de Empleados Particulares está reduciendo al Servicio de Seguro Social, en la práctica, a la calidad de centro previsional para las capas más pobres, alejándose el sistema cada vez más de su primitiva inspiración solidaria para acentuar las ventajas corporativas de sectores minoritarios. Los trabajadores de ingresos más mezquinos terminan por soportar el peso principal de todo el aparato de seguridad social.

Al nivel de la empresa, la corriente migratoria de los obreros que adquieren la calidad de empleados produce un virtual paralelismo sindical. El antiguo sindicato profesional de empleados, circunscrito al personal administrativo, ha venido recibiendo oleadas sucesivas de trabajadores de producción, de manera que en los talleres coexiste junto al sindicato industrial, compartiendo su competencia sobre las condiciones de trabajo y sobre el personal que participa en el proceso. Cuando cualesquiera de los sindicatos, separadamente, ordena la huelga, se suscitan problemas prácticos extraordinariamente complejos, porque es muy difícil separar las diferentes fases de una faena realizada en equipo a fin de impedir la prosecución de aquellas que deben suspenderse mientras dure el conflicto. Muy a menudo esta dualidad sirve a los empresarios para mantener la producción sin grandes contratiempos, pero causando un daño gravísimo a los huelguistas y al movimiento.

No todo es negativo, sin embargo. La promoción proletaria hacia los sindicatos de empleados ha modificado sustancialmente su clima interior. Dejaron de ser organizaciones domesticadas, amarillas, para adquirir paulatinamente el estilo de los sindicatos industriales, mucho más combativos y permeables a una motivación de clase. Se dan, entonces, óptimas condiciones para fusionar en el plano de la organización sindical a los obreros y empleados, a todos los trabajadores, en sindicatos únicos de empresa, como paso previo a la creación de sindicatos nacionales que cubran ramas industriales completas. Desgraciadamente, en este aspecto como en otros, la indiferencia y la apatía han conspirado hasta hoy contra cualquier progreso.

El Servicio de Seguro Social estima que sólo en los años 1966 y 1967, un número cercano a las 100 mil personas pasaron a constituirse como imponentes

de otras instituciones de previsión en virtud de cambios en su condición jurídica. 30 mil mecánicos y 10 mil electricistas lo hicieron en el curso del primero de esos años. Han seguido el mismo camino los maquinistas y fogoneros, los carpinteros de banco de la gran minería del Cobre, los torneros, matriceros, fresadores y choferes; los soldadores y fundidores de las empresas fiscales; los gásteres navales y ciertas categorías de albañiles y de caldereros.

ESTAMENTOS EN LA CLASE OBRERA

Es, sin embargo, la desigual estructura económica del país el factor de mayor incidencia en la fragmentación que pudiéramos llamar corporativa de la clase trabajadora chilena. Coexisten aquí empresas de elevada productividad y faenas primitivas, unidades de dimensiones óptimas y talleres artesanales, predios agrícolas operados con criterio moderno y fundos que se trabajan igual que hace un siglo, actividades exportadoras beneficiadas con la inflación y negocios basados en insumos extranjeros que viven en una incertidumbre persistente por esa misma circunstancia. De ahí que la escala de remuneraciones dependa más de la inserción de los trabajadores en una u otra rama económica que de su calificación o competencia personal.

En cifras de 1967, los salarios extremos se hallaban representados por los trabajadores domésticos y de la agricultura, en el tramo más bajo, y los del cobre y del petróleo en los niveles más altos. Así, mientras los primeros tenían ingresos de E° 3,20 y E° 4,50, respectivamente, los últimos alcanzaron salarios medios diarios de E° 24,10 y E° 24,60. Comparando los jornales obtenidos en las faenas cupreras y petroleras con las remuneraciones de las actividades domésticas resultaría que aquéllos fueron 7,5 y 7,7 veces más altos y 5,4 –5,5 más elevados si los comparamos con los salarios medios de los campesinos. Como ilustración adicional y elemento comparativo vale la pena agregar que las remuneraciones citadas corresponden en el año (360 días), a E° 1.152 para los trabajadores domésticos; a E° 1.620 para la agricultura; a E° 8.676 para los obreros del cobre y a E° 8.856 para los operarios del petróleo, en tanto el sueldo vital para Santiago, en el mismo año 1967, ascendía a E° 3.675 anuales.

En el centro de la escala se hallaban los trabajadores de la construcción, del carbón, de la industria y de los transportes, con salarios medios que fluctuaban entre E° 9,60 y E° 10,90.

Por razones obvias, la posición estratégica de determinadas actividades coincide casi siempre con un superior desarrollo tecnológico, lo que proporciona a sus dependientes una situación excepcional en las negociaciones laborales. De esa manera se explica también la fortaleza orgánica y el ascendiente de los

sindicatos del cobre y de las asociaciones petroleras y, al mismo tiempo, la debilidad de otros sectores, atomizados en sindicatos industriales de magros contingentes, sin gravitación en la vida económica, ligado a centros industriales o mineros anticuados.

El resultado es una dispersión dramática en la conducta de los asalariados como clase. Sin un programa reivindicativo común y sin trabazón orgánica de los grandes sindicatos con las pequeñas agrupaciones, la suerte de los diversos núcleos es cada vez más divergente. De tarde en tarde, con lapsos de años entre una y otra batalla, se logran coordinar movimientos nacionales de cierta amplitud, pero, desgraciadamente, casi siempre se articulan alrededor de una colección de demandas laborales dispersas. En tales condiciones, lo tradicional es que el movimiento pierda fuerza poco a poco, a medida que diversos sectores consiguen resultados satisfactorios para sus peticiones particulares, y que las ventajas logradas por algunos grupos tengan como contrapartida la derrota terminante y desmoralizadora de otros. Por lo común, tales experiencias dejan hondas huellas en la vida sindical y trizaduras perdurables en los mecanismos de la solidaridad obrera.

LA CUT: DEMOCRACIA Y REPRESENTATIVIDAD

La existencia de la Central Unica ha significado un vigoroso esfuerzo de organización de los trabajadores, desde 1953;¹ sin embargo, su debilidad sigue residiendo principalmente en que cerca de un millón y medio se hallan marginados de los sindicatos y apartados, por tanto, de las acciones de clase más elementales. El total de obreros y empleados, hacia mediados de 1968, se ha estimado en 2.169.000, en tanto los sindicalizados alcanzaban, a esa fecha, a sólo 743.000, incluyendo los agrupados en asociaciones gremiales del sector público. Es este un factor negativo adicional, aunque se pueda argüir que un 34% de trabajadores organizados sobre el conjunto de la fuerza de trabajo es una proporción alta, comparada con la que exhiben países de mayor desarrollo económico, como son los casos de Estados Unidos, con 22%; Alemania, con 26%; Francia, con 16%; Italia, con 35%. Pero, las consideraciones precedentes habría que complementarlas con otro dato que se refiere a la frágil consistencia, a la deficiente articulación interna de la Central Unica, vale decir, a su capacidad real de representación y de combate: de los 700.000 hombres y mujeres adheridos a la Central apenas 340.000, esto es, algo así como la mitad, estuvieron representados en el último Congreso por delegados directos.

En suma, a la Central Unica de Trabajadores, destinada potencialmente a materializar la unidad de clase, le ha faltado el apoyo necesario de la vanguardia

política en sus tareas de organización de los trabajadores y, sobre todo, en aquellas otras destinadas a estrechar sus vínculos con las organizaciones y los afiliados en la base.

En su interior, la rivalidad de socialistas y comunistas o, al menos, la competencia proselitista entre los dos partidos, ha producido ciertos efectos benéficos, pero más a menudo es la causa de graves perturbaciones. Entre los primeros habría que mencionar cierto grado de saludable vigilancia recíproca en el comportamiento de los dirigentes de una y otra filiación, que constituye una forma bastante eficaz de control, y, entre las últimas, la más negativa de todas lo constituye el paulatino alejamiento de los afiliados independientes de las actividades diarias del sindicato. Lo corriente es que la masa participe únicamente en los momentos de máxima tensión laboral: durante la gestación del pliego de peticiones, cuando se vota la huelga, en el momento de resolver sobre fórmulas de avenimiento; pasadas esas ocasiones juega un papel eminentemente pasivo, inclusive cuando se trata de resolver la participación del sindicato en los Congresos provinciales o nacionales de la CUT o de las Federaciones Industriales. La misma representación por número de afiliados puesta en práctica en el V Congreso de la Central –aunque significa un paso adelante– fue más nominal que efectiva: conocemos innumerables organizaciones donde la elección de delegados se hizo por los miembros del directorio, o donde, llegando más lejos, sólo se oficializó el acuerdo previo de las jefaturas políticas de los dos partidos más importantes. Siempre resulta más seguro un arreglo interpartidista en la cumbre que una fatigosa e incierta contienda en la base.

En muchos casos, el bloqueo a la participación activa de la masa trabajadora obedece a preservar la situación directiva de ciertos grupos de burócratas poco dispuestos a aceptar relevos. Uno de ellos, ilustrativo de los nefastos alcances sociales del procedimiento nos ha tocado conocer en detalle en el Sindicato Ganadero de Magallanes. Contando con 1.450 afiliados, los directores se han dado maña para que las elecciones anuales se realicen siempre en pleno invierno, varios meses antes de las faenas de temporada (esquila, frigoríficos) esto es, cuando la enorme mayoría de sus miembros se encuentra fuera de la provincia. Así, en la elección del año 1968 participaron únicamente 453 obreros y, lo que es más sugestivo, los dirigentes elegidos apenas acumularon en su favor 913 votos, mientras los votos nulos y en blanco alcanzaron a 855 (cada afiliado tiene derecho a emitir 5 votos). En esas condiciones se explica que el Sindicato haya jugado un papel claudicante en el momento que se expropió la Estancia Punta Delgada, la mayor de la Patagonia y probablemente la más grande explotación ganadera del mundo (270.000 hectáreas, más o menos). Con argumentos confesionistas y especiosos, esos dirigentes hicieron todo lo posible para

obstruir una medida que, a la larga, ponía en peligro su inmerecida posición de conductores de la clase trabajadora.

AJUSTES NECESARIOS

Una vigorosa democratización de la vida sindical tendrá que ser el fruto de un previo reajuste de orientación en la actividad de los partidos obreros. Es indispensable que ningún trabajador se sienta un intruso o un asambleísta de segunda categoría en el interior del Sindicato; es necesario fomentar la intervención creciente de los afiliados en todas las tareas; es urgente crear un clima de discusión fraternal y de solidaridad de clase; sólo así el sindicato llegará a ser simultáneamente una escuela de socialismo y un arma eficaz en la lucha social. Las iniciativas formuladas en el último Congreso de la CUT para establecer la elección directa, por la base, de todos los órganos directivos y para impedir estatutariamente la reelección de los dirigentes por más de dos períodos, parecen orientarse a corregir la grave tendencia actual, que conduce a mantener indefinidamente a los mismos hombres en los altos cargos, hasta mucho más allá del momento en que tuvieron efectiva autoridad sobre las masas.

La situación sindical en el campo ha mejorado sustancialmente en el último tiempo: la cifra de trabajadores organizados se acerca a 80 mil en la actualidad. Queda, sin embargo, mucho más de medio millón de campesinos por organizar y constituye también un atraso la dispersión a escala provincial y nacional. Aquí prevaleció el criterio pluralista de la D.C. y los 325 sindicatos aludidos en el informe al V Congreso de la Central Unica se hallaban dispersos en 42 Federaciones Provinciales y 33 de estas Federaciones se encontraban ligadas a 3 Federaciones Nacionales. La experiencia acumulada en cortos años está imponiendo rápidamente una mayor coordinación regional en el planteamiento de los pliegos y la conducción de los conflictos y, aún, en el plano nacional del movimiento campesino.

Tarea mucho más larga y de mayores proyecciones será la de crear un sólido frente unido de trabajadores urbanos y rurales capaz de expresarse en el terreno práctico. La CUT tiene en su seno a la Federación "Ranquil" de Sindicatos Agrícolas, pero los obreros industriales y mineros han estado materialmente ausentes de los conflictos y escaramuzas que han tenido por escenario el campo en los años recientes. Las diversas formas de solidaridad son apenas incipientes.

LA INFLACIÓN

Pese a las múltiples circunstancias que conspiran contra la unión de los trabajadores, existen condiciones objetivas para diseñar y emprender una política de clase y darle fuerza operativa a un sector social que tiende a disgregarse en multitud de combates inconexos y parciales. La inflación ha vuelto a levantarse como insidioso mecanismo expropiatorio de una parte sustancial de los sueldos y salarios, independientemente del punto donde comenzó su deterioro. Por su magnitud y su extensión a todo el mundo laboral, constituye la expresión más tangible y concreta de la injusticia y del desamparo, tal como lo experimentan en carne viva los asalariados de todas las categorías. Es cierto que la inflación también provoca distorsiones y efectos nocivos en todo el sistema económico, pero ellos son fundamentalmente problemas de contabilidad para los capitalistas. Para las personas sujetas a remuneraciones fijas, en cambio, implica la pérdida gradual e irrecuperable de sus ingresos y, al fin y al cabo, un descenso efectivo de su nivel de vida anterior. Sería ocioso detenerse a demostrar que la clase obrera es absolutamente ajena al manejo de todos los resortes que influyen en la fiebre inflacionaria: no tiene ningún poder de decisión sobre el gasto público, ni sobre el circulante, ni sobre las inversiones, ni sobre las operaciones de intercambio. Frente al singular fenómeno que desvaloriza diariamente la fuerza de trabajo, no tiene otro recurso defensivo que el de presionar colectivamente para mantener su poder de compra. Lo ha hecho con grandes dificultades y sin una visión clara de los alcances de su esfuerzo. Es comprensible, puesto que se utilizan todos los trucos publicitarios para describir la inflación como un castigo del cielo: ni los empresarios, ni el gobierno, ni la anquilosada estructura económica tendrían mayor participación en el infortunio; y siempre se concluye con la más socorrida y filistea de las interpretaciones: el gran culpable es el obrero; su codicia desmedida habría llevado a los salarios más allá del límite prudente, hasta un punto incompatible con las posibilidades del país...

Abrumado bajo el peso de tal imputación, el movimiento sindical sólo ha atinado a batirse a la defensiva, hasta limitar sus aspiraciones al simple reajuste anual equivalente al ciento por ciento del alza del costo de vida, con excepción de unos pocos núcleos industriales y mineros poseedores de un mayor poder de negociación. Nadie, o casi nadie recuerda como la inflación erosiona los ingresos día a día, a lo largo de las 365 jornadas del año, en términos que la pérdida neta, acumulativa e irreparable de capacidad adquisitiva, llega a cifras siderales a fines del período. Así, por ejemplo, un obrero que se contrate por un salario nominal de E° 12.000 anuales, sometido a una tasa inflacionaria de 2,5% mensual, habría percibido ingresos equivalentes a sólo E° 10.200 al cabo de 12 meses, en escudos que conservarán su valor original. Aceptando provisoriamente

el “índice de precios al consumidor” como fiel reflejo de la realidad, podría afirmarse rotundamente que en los años últimos los asalariados han trabajado gratuitamente dos y hasta tres meses al año. Así se explica que todavía pueda funcionar el sistema, que se paguen intereses descomunales por el crédito bancario –los más altos del mundo– y que los exportadores sigan vendiendo a vil precio el trabajo de los chilenos en el exterior.

UN “ÍNDICE” DE GOMA

Pero tampoco el índice revela la verdad. Antiguo, incompleto, localista, no representa la estructura real de consumo de la población. Confeccionado en 1956, ignora el gas licuado, la carne de pollo, las telas y fibras sintéticas, artículos todos incorporados al presupuesto de compras ineludibles en la actualidad; constreñido a 125 productos, no puede reflejar un mercado donde se transan más de dos millones de tipos diversos de bienes y servicios; confeccionado con arreglo a las necesidades y costumbres de los habitantes de la capital, en un país que se extiende más de 4.000 kilómetros de norte a sur, y en cuyo interior, simultáneamente, unos pobladores padecen por la sequía mientras otros son víctimas de las inundaciones, no reúne los requisitos mínimos para aceptarlo como patrón legítimo.

Derrotado el gobierno en su presuntuosa pretensión de estabilizar los precios en el curso de los tres primeros años de la nueva era, optó por un expediente más sencillo: acomodar el índice a su voluntad. Algo así como lo que acostumbraba el legendario Procusto con las víctimas de sus desmanes: si eran más largos que el lecho de hierro, les cortaba los pies; si más cortos, los estiraba hasta darles las dimensiones convenientes. O, mejor aun, equivale a calentar el termómetro cuando la temperatura baja, creyendo escapar así del frío. Un fraude cruel.

La intervención consiste en manipular artificialmente el mercado para asignar precios falsos a algunos artículos de consumo habitual que a su vez tienen una incidencia determinante dentro del índice. Se ha dado el caso de ofrecerse papas belgas baratas en Santiago –área de las encuestas– mientras se venden caras las papas chilenas en San Felipe. Se ha sustituido en gran escala el consumo de carne de vacuno por la carne de pollo, de inferior calidad; como asimismo se comienza a generalizar el procedimiento de establecer precios oficiales para productos inferiores, mientras se dejan libres los precios para esos mismos productos de clase superior. Un cínico aviso de los últimos días notifica al público que tanto la carne como las papas estarán sometidas a este régimen discriminatorio “en defensa de los consumidores –peores”]; la medida estaría

destinada a obligar a los consumidores de “artículos de lujo” (filete, lomo, papa nueva) a pagar sus caprichos. El Ministerio de Economía no explica, por supuesto, que el truco deformará necesariamente las encuestas próximas, rebajará la tasa de las alzas y ofrecerá al país un indicador adulterado, que servirá de rígida referencia a los futuros reajustes de sueldos y salarios.

Pocos aspectos de la acción gubernativa ofrecen un carácter más repudiable. La conciencia de que la política oficial opera con métodos dolosos y que sobre ellos se construye toda una línea de comportamiento para enfrentar los conflictos laborales, justifica en grado considerable la irritación de los trabajadores y la impopularidad de los gobernantes democristianos. También la incredulidad pública, porque, en cierta dimensión, el índice de precios al consumidor constituye la única escala de medida para múltiples operaciones en un país devorado por la inflación. Si esa referencia es espúrea, todo se desploma.

NUEVA POLÍTICA SINDICAL

Únicamente una profunda reforma de las prácticas sindicales pondrá atajo a la retirada actual. La más imperativa parece ser la imposición de la escala móvil de salarios mediante normas legislativas o a través de contratos nacionales respaldados por todos los sindicatos de determinadas ramas industriales. Fortalecer la resistencia a la expoliación que se opera por la vía de la inflación, es una tarea decisiva para el movimiento sindical y la clase obrera. No hay otro camino, a menos que la lucha la conduzca mañana a posiciones de control y de poder que serían el anuncio de una crisis profunda y tal vez definitiva del estado burgués.

En estos días el gobierno resucita la idea de un Consejo Económico Social de rango ministerial. La iniciativa es digna de recibirse con las mayores precauciones. Nunca los explotadores han tenido interés sincero en compartir la administración de los negocios con sus dependientes. Si ahora se habla de ello es, casi con seguridad absoluta, porque detrás del mecanismo participacionista se busca la manera de abolir o de mutilar los derechos de petición o de huelga. En el pasado fracasó el señuelo de cancelar parte de los salarios en bonos destinados a asociar a los trabajadores en la creación de nuevos complejos industriales; el recurso de las bonificaciones no imponibles y de los reajustes limitados a los jornales mínimos o vitales, está desprestigiado; se ensayará de nuevo, entonces, la vieja treta de simular una cierta forma de dirección paritaria o colegiada de la economía para persuadir a los trabajadores de la necesidad de hacer sacrificios patrióticos.

La inflación, como tema central de las demandas salariales, constituye un

punto de encuentro para el conjunto del proletariado y ofrece anchas perspectivas políticas y revolucionarias. En muchos sentidos la inflación es un problema político, en cuanto su análisis, su dinámica y su terapéutica, saltan inevitablemente del campo puramente reivindicativo en que se mueven las relaciones obrero-patronales hacia el terreno de la conducta del gobierno y de los empresarios como clase. Es todo el régimen el que revela aquí sus debilidades; esto ya constituye un precioso elemento didáctico para las masas; pero, además y a la larga, deberá plantearse inevitablemente la cuestión de fondo: ¿cómo impedir que vuelva a caer sobre los consumidores el peso del reajuste que lograron en calidad de obreros y productores?

Tenemos una dilatada experiencia de la inflación en sí, de sus efectos y también de los programas antiinflacionarios apoyados sobre diversas formas de congelación. Siempre los trabajadores pagaron todas las perturbaciones económicas, sea cubriendo precios altos, sea soportando jornales bajos. Llevarlos a la convicción de que el remedio está en sustituir el régimen no es una tarea imposible si sabemos denunciar los resortes fundamentales de una economía enferma y la necesidad de capturarlos para ponerlos al servicio del trabajo. La capacidad de la burguesía para resarcirse de los mejoramientos haciéndolos nominales no es ilimitada; un momento llevará en que la mayoría del pueblo exija tener en sus manos —y no en manos de una minoría— las palancas de comando de la política económica. Es inevitable que una movilización enérgica y global, acentuadamente clasista contra la inflación, en un medio económico estrangulado, estrecho, sin elasticidad, lleve a formular programas incompatibles con las viejas formas institucionales y de fácil y natural asimilación para las masas.

LAS LUCHAS QUE VIENEN

Aquí, como en otras partes, existe la tendencia a degradar el papel del sindicato al rango de simple medio de expresión del descontento alimenticio y de las demandas de consumo. En días ya lejanos Recabarren comprendió que su rol era de mucho más relieve. Como órgano elemental de la clase, como escuela de la revolución, deberíamos comprender que el movimiento obrero —en su misión de elevar la conciencia política del proletariado— debe utilizarlo paralelamente para bloquear la ideología de la clase antagónica, para establecer un territorio cultural libre, para instalar un baluarte donde se procure desmontar sistemáticamente todo el arsenal de prejuicios, valores falsos, creencias y supersticiones sobre el cual asienta su estabilidad la burguesía. Para ello deberíamos multiplicar con máxima rapidez todas las formas de enseñanza y divulga-

ción, desterrando las concepciones estrechas que estiman esa labor como propia y exclusiva de los partidos.

Por lo demás, la mejor pedagogía será aquella que se una más estrechamente a las experiencias de la lucha concreta. El cambio progresivo alcanzado alrededor de la mesa de negociaciones está agotando sus últimas posibilidades, no sólo porque las conquistas de hoy se evaporan mañana como espejismos fugaces, sino porque el régimen explotaría en el mismo instante en que quisiera dar satisfacción a un cierto conjunto de demandas vitales: trabajo para todos, remuneraciones mínimas verdaderamente justas, techo, escuela, salud. El desarrollo está virtualmente estancado en los últimos años, pese a todos los estimulantes utilizados para impedir la parálisis de la producción. En teoría no se justifica mayor espera para sustituirlo. Lo grave es que aún la clase obrera no adquiere conciencia de que su tarea es precisamente esa: acabar con un régimen que ha demostrado hasta la evidencia su caducidad histórica.

Mientras los explotados replican muy débilmente a la agresión combinada de los patrones y del gobierno, la minoría dominante se parapeta con fino instinto de clase en poderosas organizaciones, entre ellas, la Confederación de la Producción y del Comercio y los mal llamados sindicatos de empleadores agrícolas. La primera es un intento audaz de enrolar, junto a la gran burguesía, a toda una extensa gama de trabajadores independientes y artesanos, con el señuelo de que ellos pertenecerían también a esa casta —a la vez privilegiada y “perseguida”— de los “empresarios libres”, flor y nata del progreso. Cumple una fructífera función de perversión ideológica y social. Los sindicatos patronales de agricultores, por su parte, operan como agrupaciones rurales de choque; seguramente de allí saldrán las peores provocaciones y ataques contra los campesinos que comienzan a emanciparse.

En suma, los sindicatos tendrán que disponerse a luchas cada vez más duras. Es de esperar que los nuevos tiempos y las experiencias recientes les brinden la fortaleza y la decisión que les faltó en los trágicos días de las masacres de El Salvador y Puerto Montt, cuando, en lugar de resueltas acciones solidarias, sólo cumplieron con rituales actos de fraternidad simbólica.

NOTAS

1 Según la Comisión Técnica de la CUT en el período 1950-59 se constituyeron 521 nuevos sindicatos en el sector privado, que cuentan en la actualidad son 68.785 afiliados; entre 1960 y 1964, 304 sindicatos con 36.446 afiliados, y, entre 1954 y 1968, 1.512 sindicatos, con 124.137 afiliados. En menos de 10 años se constituyeron 2.337 sindicatos que agrupan hoy a cerca de 230.000 trabajadores.

AMERICA EN ESTADO DE SITIO

De "La Izquierda en Punto Muerto",
Editorial Orbe, 1969.

EL AGRESOR HABLA DE PAZ

Bajo el impacto de la Revolución Cubana, el año 1961 marca un hito decisivo en la actitud yanqui hacia América Latina. En el terreno económico-social se lanza espectacularmente la campaña continental de la Alianza para el Progreso, que agoniza en nuestros días sobre un montón de ilusiones rotas, y en el orden militar se altera sustancialmente la doctrina y la función de los mecanismos hemisféricos de defensa.

Como resumen de sus 14 años de Embajador en Chile, Claude Bowers había declarado unos años antes, refiriéndose a la posición de las repúblicas americanas frente al comunismo: "Saben mejor que nosotros, me parece a mí, que una idea falaz no se mata a cañonazos: que es más fácil matarla con pan"¹. Kennedy, Mac-Namara y Douglas Dillon no quisieron dejar nada al azar: decidieron emplear simultáneamente el pan y los cañones. Luego de algunos forcejeos, la ayuda de la Alianza quedó fijada en 20.000 millones de dólares, en Punta del Este, y las fuerzas armadas latinoamericanas, articuladas ya en un vasto sistema de "pactos de ayuda mutua", empezaron a disciplinarse bajo la inspiración de la política que después se conocería como de las "fronteras ideológicas". La dura derrota de Playa Girón enseñó a los norteamericanos que se paseaban sobre un jardín minado y las proyecciones pedagógicas del ominoso desastre fueron rápida y ampliamente asimiladas por los responsables de su política exterior.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947), institucionalizó en el meloso lenguaje diplomático la llamada "defensa hemisférica", hija natural, a su vez, de la hipócrita Doctrina Monroe. Los compromisos de asistencia y colaboración militar contraídos en el curso de la II Guerra en el propósito común de contener a las potencias fascistas, dueñas de Europa, pasaron a justificar una engañosa *comunidad de destino* de todas las naciones situadas en el Nuevo Mundo, como si la simple vecindad geográfica gestara vínculos sagrados de hermandad y de interés común. Se dibujó una línea de protección siguiendo el contorno de América y se declaró solemnemente que se trataba del solar privado de naciones fraternas, solidarias, iguales y pacíficas. Quien violara las imagi-

narias fronteras de esa comunidad continental, debería enfrentarse automáticamente a un conflicto con todas ellas. Para no exagerar el optimismo con relación a la paz interna, se agregaron disposiciones mucho menos operativas para el caso insólito y remoto de que algún pleito viniera a enturbiar la plácida convivencia de los 21 signatarios.

Como se ve, una obra maestra de fariseísmo. Históricamente, la agresión militar siempre se había desencadenado desde el norte. Ya en 1846, los yanquis obligaron a México a ceder sus valiosísimos territorios de Texas, Arizona y California; a fines de siglo, como desenlace de la guerra con España, se apoderaron de Puerto Rico y Cuba; durante los gobiernos de Taft, Wilson y Coolidge, invadieron en cinco oportunidades la República de Nicaragua, para ocupar sus aduanas y cobrar ciertas deudas; en 1923, es Honduras la nación atropellada en respaldo de los turbios negocios de una firma norteamericana; México vuelve a ser agredido en los años 1914 y 1916, mientras sólo en 1932 Nicaragua ve partir a los últimos soldados yanquis de su suelo. Los dóciles diplomáticos reunidos en Río no tenían por qué atizar los malos recuerdos. Tampoco tenían por qué cavilar sobre la extraña circunstancia de que ese mismo socio, tan inclinado a resolver por la fuerza sus controversias intracontinentales, era también el único que se había impuesto a sí mismo una ambiciosa misión mundial, inundando todos los confines del globo con tropas, misiones asesoras, bases militares y fuerzas navales, susceptibles de provocar roces, discordias y choques de proyecciones inesperadas en cualesquiera de los cinco continentes.

UN MUNDO PARTIDO EN DOS

Hoy las cosas no han cambiado. Desde 1947 el prontuario del agresor se ha enriquecido con sus intervenciones militares en Guatemala (1954), para derrocar a Arbens; en Cuba (1961), para liquidar la revolución socialista, y en Santo Domingo (1965), para imponer en el Gobierno a los testaferros reaccionarios. Todo ellos sin contar su intervención indirecta en una docena de otros episodios políticos. En su intento de preservar la **civilización occidental y cristiana**, los EE.UU. mantienen contingentes de 320.000 hombres en Europa, 40.000 en Japón, 55.000 en Corea del Sur, 40.000 en Okinawa, 35.000 en Las Filipinas, 45.000 en Tailandia, 532.500 en Vietnam; además de un medio millón de marineros y soldados de desembarco en sus flotas del Pacífico, el Atlántico y el Mediterráneo. Total, un plantel de millón y medio de norteamericanos sobre las armas, distribuidos en 119 países, con 48 de los cuales los EE.UU. han suscrito tratados que los habilitan para intervenir militarmente.

El tratado de Río de Janeiro liga la suerte de América Latina a este aparato

monstruoso, es decir, a las alternativas, los designios y los riesgos de las aventuras alentadas por el Pentágono. Todo lo ocurrido desde entonces no hace más que confirmar los presentimientos más aciagos.

El carácter colonialista del T.I.A.R. se desprende del manifiesto desequilibrio en el potencial bélico y en la gravitación internacional de los signatarios –del tiburón y las sardinas, para decirlo gráficamente– más que del tenor de sus cláusulas. En ese instrumento, como en otros de la época, hay sólo ocasionales menciones de la **democracia, las libertades individuales y el régimen representativo**, pero jamás para exigirlos como requisitos para integrar el sistema y menos como finalidad esencial de su existencia. Con la abundante constelación de dictadores que aparecen solemnizando la ratificación de esos tratados, las referencias libertarias no podrían jugar sino un papel ornamental y retórico. Pero ya en el texto de los Pactos de Ayuda Mutua los gobiernos que los suscriben “convienen en aportar la plena contribución que les permitan sus recursos humanos, sus riquezas, sus facilidades y su estado económico general para acrecentar y mantener su propia fuerza defensiva así como la fuerza defensiva del mundo libre”. Así lo prometen sucesivamente Ecuador, Cuba, Colombia, Perú y Chile, en 1952; Brasil, República Dominicana y Uruguay, en 1953; y en los años siguientes Honduras, Nicaragua, Guatemala, Haití, Bolivia, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Argentina.

Virtualmente todo el hemisferio quedó encuadrado en un vasto sistema de pactos bilaterales, el enemigo potencial identificado, y establecido el Estado Mayor ideológico militar: el Pentágono. Asombra verificar la obsecuencia y el servilismo de quienes en el Parlamento chileno sancionaron el convenio, considerándolo “expresión y consecuencia necesaria de los compromisos internacionales que han contraído las naciones interesadas en la defensa del mundo libre y de su civilización cristiana”² y dando por entendido que en alguna oportunidad los chilenos o sus órganos representativos habrían sido consultados acerca de sus simpatías y sus preferencias en esta curiosa división del planeta: el mundo libre y el mundo esclavo; el mundo cristiano y el mundo pagano.

Aunque se censura con prodigalidad al comunismo internacional, la orientación de las actividades militares yanquis en este período se dirige más bien a situar la amenaza en la Unión Soviética, como punto de partida de un eventual ataque a la Zona de Seguridad Continental. Es fundamentalmente una rivalidad entre Estados la que sirve de pretexto para disciplinar las fuerzas armadas en escala hemisférica, durante el desarrollo de la guerra de Corea y en los años inmediatamente posteriores, vale decir, en la fase más crítica de la Guerra Fría. Todavía prevalece la idea del empleo preponderantemente bélico de los ejércitos, las flotas de guerra y del aire de los países latinoamericanos, aunque en un

plano subalterno; casi podríamos decir como simples fuerzas territoriales de protección.

ARMAS Y NEGOCIOS

Los EE.UU. consiguieron por este camino todo lo que esperaban. Primero, un excelente mercado para sus armas anticuadas y para los desechos bélicos. En el año 1956 sus estadistas hicieron un esfuerzo extraordinario para fortalecer las ventas a América Latina, luego de una concienzuda visita realizada por el representante Porter Hardy, miembro del Comité de Servicios Armados, a los países del sur. Alarmado por el anuncio de negociaciones con proveedores europeos, Hardy presentó un informe en que se aboga vigorosamente por la rebaja de precios, la adopción de procedimientos más acelerados de entrega, la ampliación de los términos de pago y la extensión de los programas de entrenamiento militar en toda el área. Terminaba recomendando al personal norteamericano en comisión de servicios, que fomentara el uso exclusivo de equipo militar de Estados Unidos en América del Sur. Una manera de recordarle que el heroísmo castrense no es incompatible con los buenos negocios.

Los pactos mismos desataron una carrera armamentista que alcanzó pronto caracteres alarmantes. Al amparo de esa silenciosa rivalidad la colocación de excedentes militares se transformó en un renglón particularmente lucrativo, frecuentemente asociado a oscuras operaciones ilegales, como las denunciadas por el Presidente Bosch días después de ser derrocado. Lejos de aliviar sus presupuestos con el aporte gratuito de materiales PAM (Pacto de Ayuda Mutua) los países latinoamericanos siguieron empleando en adquisiciones adicionales los recursos tradicionalmente destinados al equipamiento militar.

Enseguida, el Pentágono se constituyó en árbitro virtual de las disputas internas del continente. Conocedor de todas las intimididades y secretos de cada uno de los Estados incluidos en el sistema de ayuda mutua y proveedor más o menos discrecional de material, equipo y asesoría técnica, pasó a ser el gran regulador del equilibrio. El potencial militar, naval y aéreo de sus socios comenzó a depender decisivamente de las preferencias de los generales yanquis.

La urdimbre se perfeccionó hasta el punto que el senador republicano Bourke Blakemere Hickenlooper propuso e hizo aprobar, en 1961, la enmienda a la ley de Ayuda Exterior que lleva su nombre:

“El Presidente suspenderá la ayuda al Gobierno de cualquier país al que se proporcione ayuda según las estipulaciones de este capítulo o de cualquiera otra ley, cuando el Gobierno de dicho país o cualquiera dependencia o subdivisión gubernativa dentro del país, con posterioridad al 1° de enero de 1962:

- A. haya nacionalizado o expropiado o confiscado la propiedad o control de propiedad de algún ciudadano norteamericano o de alguna sociedad, compañía o asociación en la que no menos del 50 por ciento de las utilidades sea de propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos; o
- B. haya tomado medidas para repudiar o anular contratos o acuerdos existentes con cualquier ciudadano norteamericano o cualquiera sociedad, compañía o asociación en la que no menos del 50 por ciento de los beneficios sea de propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos; o
- C. haya establecido o puesto en vigencia impuestos discriminatorios u otras exacciones o mantenciones restrictivas sobre las condiciones operacionales, o haya tomado otras medidas que tengan por efecto nacionalizar, expropiar u otra especie de confiscación o control de propiedad de tal pertenencia.

Y si dicho Gobierno, dependencia gubernativa o subdivisión del gobierno no toma dentro de un plazo razonable (no mayor de seis meses después de tal acto, o en el caso de que la situación se plantee ante la Comisión de Arreglo de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos dentro de tal período aquí previsto, no más de 20 días después que se haya recibido el informe de la Comisión) medidas apropiadas, que pueden incluir el arbitraje, con el fin de cumplir con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional para con dichos ciudadanos o entidades, incluyendo una rápida indemnización por dicha propiedad en divisas convertibles, equivalentes al valor total como lo exige el Derecho Internacional, o bien no toma las medidas adecuadas que tengan por objeto compensar los impuestos, exacciones o condiciones según sea el caso; dicha suspensión persistirá hasta que el Presidente considere que las medidas pertinentes están siendo tomadas; y ninguna otra disposición de este capítulo se interpretará como autorización al Presidente para dejar de aplicar las disposiciones aquí contenidas.

A pedido del Presidente (dentro de los 70 días a partir de la acción a que se refiere en los subpárrafos A, B, C, de este párrafo) la Comisión de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (establecida en cumplimiento del plan de reorganización N° 1 de 1954, estatuto 68-1279) queda por tanto autorizada para evaluar la propiedad expropiada, determinando el valor total de cualquiera propiedad expropiada o confiscada o sometida a medidas discriminatorias u otras acciones antes mencionadas, para los propósitos de esta subsección y para rendir un informe admisorio al Presidente dentro del plazo de 90 días después de dicha petición.

A menos que esté autorizada por el Presidente, la Comisión no publicará su informe consultivo, con excepción hecha a los ciudadanos o entidades dueños de dicha propiedad. Queda, por tanto, autorizada para adjudicarse dicha canti-

dad, la cual permanecerá disponible hasta que se gaste, como podría ser necesario de tiempo en tiempo, para permitir que la Comisión cumpla expeditivamente sus funciones según lo estipulado por esta subsección”.

Institucionalizada la dependencia, el conjunto de instrumentos jurídicos opera como gigantesco y eficiente mecanismo de extorsión. La amenaza del retiro de la ayuda exterior alienta toda suerte de temores: la indefensión ante los vecinos más belicosos, la pesada carga de los gastos adicionales de defensa, el retraso tecnológico con relación a los enemigos potenciales, la pérdida de oportunidades de adiestramiento para jefes y especialistas, todo eso se agita y se plantea como fundamento de una actitud entreguista. En el hecho, ella expresa una penosa capitulación mental y la renuncia a cualquier forma de dignidad.

Nada de esto es especulación teórica. En nuestros días la Junta Militar Peruana, presidida por el General Juan Velasco Alvarado, ha debido enfrentarse a una situación conflictiva y a la suspensión de abastecimientos convenidos en el P.A.M. como consecuencia de la nacionalización de los bienes de la International Petroleum Company.

CAMBIO DE FRENTE

La tupida red se estrecha con la suscripción de un número indeterminado de Convenios para establecer misiones de ejército, aviación y marina en el territorio de los vecinos del sur, en un marco de muy definidos contornos ideológicos. Cuando el 15 de noviembre de 1956, el Almirante O’Ryan, Ministro chileno de Defensa Nacional, en la ceremonia de la firma deja caer una velada referencia al contenido del compromiso: “La estrecha amistad —dice— entre Chile y los Estados Unidos es la base de este nuevo acuerdo de cooperación de nuestros gobiernos y está por encima de toda suspicacia”; le contesta el embajador Cecil B. Lyon, con abrupto desparpajo: “Este es otro lazo que une a Chile y a los Estados Unidos; otro paso en el camino de la cooperación interamericana, cuando los valores occidentales y cristianos y la integridad misma de nuestras naciones son amenazados en forma creciente por las ateas y brutales fuerzas del comunismo”.

Hacia fines de los años 50 el incremento de los gastos militares en América Latina comienza a preocupar a los círculos dirigentes y determina diferentes iniciativas y discusiones. Facio, representante de Costa Rica en la OEA, plantea una reducción drástica sobre la base de reconocer a los Estados Unidos lo que alguien llamó un “tutelaje defensivo” del continente; el Presidente Alessandri formula un llamado con fines parecidos y en el Congreso yanqui se suceden las intervenciones llamando la atención hacia el tema. Todo revela que se empieza a dudar de la eficacia combativa de las fuerzas armadas latinoamericanas en un conflicto

extracontinental, en la edad de la bomba atómica y los cohetes teledirigidos. Explícitamente lo reconoce así el Secretario de Defensa, Mc Ebro y en un cable publicado el 20 de marzo de 1958: "Washington, 19 (AP).- (Por Stanford Bradshaw). El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Mc Ebro y, prometió hoy estudiar la conveniencia de estipular que la futura ayuda militar a Latinoamérica sea aplicada con la idea de mantener la paz especialmente dentro del mismo país. Anteriormente había expresado que la "modesta" cantidad de asistencia militar que Estados Unidos entrega a Latinoamérica, está dedicada especialmente a ayudar a esas naciones a mantener su "seguridad interna" contra la subversión.

Añadiendo que parte de la ayuda está destinada a la defensa del hemisferio contra un posible ataque exterior, aclaró: "La amenaza reside allí en lo que respecta a la seguridad interna, y no se requieren grandes concentraciones de fuerzas para dominar la subversión.

Esta seguridad interna contra las revoluciones, añadió, es muy importante para la defensa del mundo libre y para la defensa de mi país".

La lección definitiva la extrajo Kennedy del humillante desenlace de la invasión mercenaria en Playa Girón. Días después, sin confesar aún la activa participación de la CIA en la aventura, pronunció un discurso muy expresivo ante la Sociedad Norteamericana de Directores de Periódicos. Sus párrafos más relevantes fueron estos:

"Si en cualquier momento pareciese que la doctrina interamericana de no intervención sencillamente oculta o disculpa una política de inacción —si las naciones de este hemisferio no cumplen sus compromisos contra la penetración del comunismo exterior— entonces quiero que se entienda claramente que este gobierno no vacilará en afrontar sus obligaciones principales, que son aquellas de la seguridad de nuestra propia nación.

Por demasiado tiempo hemos fijado nuestros ojos en las tradicionales necesidades militares, en ejércitos preparados para cruzar fronteras o proyectiles prestos a salir despedidos. Ahora es evidente que esto ya no basta, que nuestra seguridad podría perderse sin disparar un solo proyectil o cruzar una sola frontera.

Sabremos aprovechar esta lección. Sabremos revisar y orientar de nuevo nuestras fuerzas, nuestras tácticas y nuestras instituciones. Sabremos intensificar nuestros esfuerzos para una lucha en muchas formas más difícil que la guerra".

LA ANTISUBVERSIÓN AL PRIMER PLANO

La siguiente etapa se dirigió, en lo orgánico, a acelerar los esfuerzos por integrar las fuerzas armadas en un dispositivo hemisférico, y, en lo doctrinario, a destacar su misión eminentemente antisubversiva. Las Conferencias

Interamericanas Aéreas, Navales y de los Ejércitos, inauguradas en 1960, pasaron en los años siguientes a constituir formas regulares de trabajo cooperativo para el examen de amplias agendas, a menudo recargadas de asuntos típicamente políticos. Mientras los resultados de tales cónclaves están vedados hasta para los más calificados órganos parlamentarios, como concretamente ocurre en Chile, bajo el pretexto de tratarse de materias secretas, los **intercambios de información técnica** entre militares chilenos y argentinos llegaron a producirse al más alto nivel: ¡en una Conferencia Bilateral de Inteligencia!. Hace menos de 3 años que tuvo lugar en Santiago esta extraña reunión de los jefes de espionaje de dos países contiguos, frecuentemente sobresaltados por dificultades fronterizas.³

También se multiplican los ejercicios conjuntos navales y terrestres. Las operaciones "Unitas" multinacionales y preferentemente destinadas al adiestramiento antisubmarino se repiten, año a año, a lo largo del litoral americano. La "Operación América" reúne en Colombia contingentes de siete países, con la misión teórica de cercar y aniquilar una fuerza guerrillera. La "Operación Ayacucho", de un costo aproximado a 40 millones de dólares, con la participación de unos 10.000 hombres y bajo el mando de un Estado Mayor integrado por coroneles norteamericanos, argentinos, paraguayos, venezolanos y bolivianos, cumple la tarea simbólica de aplastar en el Perú una hipotética insurrección popular con apoyo extranjero⁴. Y ocurre que los preparativos de movilización y de apoyo logístico se realizan paralelamente a la campaña presidencial chilena, en los últimos meses de 1964".

La misma Revolución Cubana obligó a una cierta sustitución del vocabulario. Ya no bastaba definir a los enemigos internos como "comunistas" y la expresión fue reemplazada por toda una gama semántica: subversivos, extremistas, castristas, guerrilleros, agitadores, etc. Todo el mundo reacio a aceptar el viejo predominio oligárquico y a glorificar el **modo de vida americano** pasó a inscribirse en la lista de los adversarios del establecimiento militar inspirado por el Pentágono. Sin disimulos se consagró la función estrictamente política, contrarrevolucionaria, de las fuerzas armadas latinoamericanas. Su enemigo principal ya no estará más allá de las fronteras, sino dentro; no son ahora factores neutros en los conflictos internos, sino instituciones comprometidas.

Cuba fue excluida de la OEA en enero de 1962 en virtud de que su gobierno "se ha identificado con los principios de la ideología marxista-leninista, ha establecido un régimen político, económico y social fundado en esta doctrina y acepta la ayuda militar de las potencias comunistas extracontinentales e inclusive la amenaza de intervención armada de la Unión Soviética en América". Desde entonces queda consagrado el principio de que la adhesión de cualquier Estado miembro al marxismo-leninismo "es incompatible con el sistema interamericano"⁵.

Naturalmente, tal calificación queda entregada al juicio imparcial y desinteresado de los generales del Pentágono, los jefes de la CIA, los estadistas que comparten sus preocupaciones entre el Departamento de Estado y los grandes monopolios, los publicistas vinculados al viejo orden, y otros personajes más o menos siniestros. Así, por ejemplo, “El Mercurio” de Chile ha detectado ya consejeros comunistas infiltrados en la Junta Militar Peruana...

Santo Domingo fue otra realización de la flamante filosofía. 42.000 *marines* instalados a sangre y fuego para proteger la vida y los bienes de un puñado de compatriotas, hicieron tan irritante y escandaloso el atropello que los Estados Unidos debieron montar un precipitado sainete para santificar la invasión. Convocharon a la X Reunión de Consulta (mayo de 1965), logrando un difícil llamado a integrar una Fuerza Interamericana que funcionara al servicio de la OEA, y creyeron condonada la fechoría la noche en que los Gobiernos de Brasil, Costa Rica, Honduras y Nicaragua firmaron –junto a los yanquis– un acta ignominiosa, con arreglo a cuyas cláusulas se asociaban al crimen, incorporando sus propios contingentes a las tropas de ocupación norteamericana.

LAS FRONTERAS IDEOLÓGICAS

Por esos días, la Cámara de Representantes aprobó con una mayoría abrumadora –312 votos contra 52– una resolución que resume admirablemente, sin ambigüedades ni rodeos, cómo entiende el Congreso norteamericano el funcionamiento real del sistema de relaciones que diariamente ensalzan nuestros gobernantes:

“Considerando que las fuerzas subversivas conocidas como comunismo internacional, actuando tanto secreta como abiertamente, directa o indirectamente, amenazan la soberanía y la independencia política de todas las naciones del Hemisferio Occidental.

“Considerando que el Continente Americano, mediante la posición libre e independiente que ha asumido, no está sujeto a la colonización ni dominación por ninguna potencia.

“Considerando que la intervención del comunismo internacional, directa o indirectamente, como quiera que se disfrace en cualquier Estado americano, está en conflicto con la política establecida por las Repúblicas Americanas para la protección de la soberanía de los pueblos de dichos Estados y la independencia política de sus Gobiernos.

“Considerando que la Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, sirviendo de órgano de consulta para la aplicación del Tratado interamericano de ayuda recíproca, reconoció que actos que poseen las carac-

terísticas de agresión e intervención contra uno o más de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos pueden ser contestados bien en forma individual como en forma colectiva, que se extendería hasta el uso de la fuerza armada, hasta el momento en que el órgano de consulta tome medidas para garantizar la paz y la seguridad del Hemisferio.

“Se resuelve que es el sentir de la Cámara de Representantes que:

1. Cualquier dominación subversiva o la amenaza de la misma viola los principios de la Doctrina de Monroe, y la seguridad colectiva, según se define en las actas y resoluciones hasta ahora aprobadas por las Repúblicas americanas, y
2. En cualesquiera de estas situaciones cualesquiera de las partes contratantes del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca puede, en ejercicio de la defensa propia, individual o colectiva, llegar al uso de la Fuerza Armada, y de acuerdo con las declaraciones y principios antes citados, tomar medidas para sofocar o combatir la intervención, la dominación, el control y la colonización en cualquier forma, por las fuerzas subversivas conocidas como comunismo y sus agentes en el Hemisferio Occidental”.

Johnson consagró esa “filosofía” como la doctrina de las “fronteras ideológicas” y para confirmar el carácter puramente auxiliar y policial de los ejércitos latinoamericanos advirtió que debían abstenerse de adquirir *armas costosas* o de *prestigio*. Inservibles como fuerzas de combate en un conflicto global; innecesarias para preservar la paz en las fronteras desde que el sistema cuenta con la paternal vigilancia del gran vecino del norte, deberían resignarse al papel de *milicias territoriales antisubversivas*.

El circuito está cerrado. Lo que comenzó presentándose como un vago compromiso derivado de la mera vecindad geográfica, pasó pronto a adquirir los contornos de una extensa coalición defensiva antisoviética; de allí derivó en una furiosa cruzada colectiva contra el “comunismo internacional”, para concluir en una Santa Alianza Militar para la consolidación del imperialismo. Aparentemente huimos a buscar ayuda para preservarnos de nuestros enemigos y terminamos autorizando al peor de todos –al más agresivo, al más poderoso y al más injusto– para que dicte la ley en nuestra casa.

¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Por qué aceptamos la instalación de este régimen de ayuda militar que, en labios del senador yanqui Frank Church, constituye un acto de “extremo imperialismo”?⁶

TERRITORIO TABÚ

La izquierda tiene en el asunto una responsabilidad muy alta. Su resistencia, salvo en 1952, cuando se discutía el pacto militar, fue más bien simbólica y su política fue siempre de meras denuncias⁷; careció –y carece hasta hoy– de una posición coherente frente a los problemas militares y de la Defensa Nacional. Se ha movido en un clima ambiguo, de agudas contradicciones.

Digamos que las clases dominantes (estamos hablando de Chile) crearon una imagen **profesional y neutra** de las fuerzas armadas. En una época en que no se cuestionaba los elementos castrenses habría constituido un factor de inestabilidad, lo que no impidió el empleo ocasional de las corporaciones armadas para liquidar ciertos pleitos políticos. Pero, sustancialmente, para una sociedad conservadora y estancada, el ejército ideal era un organismo cuantitativo modesto, de elevada especialización, fuertemente jerarquizado y servido por una suerte de sacerdotes de un oficio secreto. Su misión: cautelar la integridad territorial y la soberanía del país.

Hoy es diferente. Ni el profesionalismo segrega al militar de los problemas generales de la sociedad en que vive, ni la neutralidad lo excluye del impulso a discernir y a juzgar; el poder al que sirve es controvertido y el mundo está hondamente trizado por antagonismos que apremian la conciencia de todos los hombres, sin excluir a quienes visten uniforme.

La feudoburguesía tiene conciencia que su predominio descansa más y más en la lealtad de los servicios armados de la nación y procura crear a su alrededor una atmósfera hermética, inviolable para los profanos, cuidando que hasta las relaciones personales del plantel militar se elijan exclusivamente en los círculos palaciegos y socialmente elevados. Reaccionando contra ese sigilo, el ex-Ministro Oscar Fenner se preguntaba hace poco, ¿a qué están hoy limitados los secretos militares? Y contestaba él mismo:

“Aparte de la fórmula que la ciencia atómica busca ávidamente y cuya investigación es del dominio de sabios especializados, todo lo restante está a la vista y se conoce. Dotación de hombres del servicio activo y sus reservas, armamentos, municiones, equipo, fortificaciones, barcos, material aeronáutico, telecomunicaciones y demás elementos que integran el aparato bélico, como también los sistemas y planes de organización de las unidades, de sus emplazamientos estratégicos, todo lo referente a esta nutrida enumeración es parte de las informaciones que se difunden diariamente y están al alcance de todo el mundo”.⁸

Ocurre, no obstante, que hasta el número de fardos de pasto que consume un Regimiento de Caballería se remite al Senado con cuidadosas recomendaciones de “secreto” y “confidencial”.

Ha resultado, entonces, que ni la opinión pública ni sus más calificados re-

presentantes se atreven siquiera a incursionar en este terreno vedado, de donde nace la tendencia a dejar todo el asunto en las manos exclusivas del Presidente de la República y a confiar en la infalible competencia del Alto Mando. Como algo semejante debe ocurrir en otros países y parece normal que en las guerras uno de los contendores gane y el otro pierda, se explica la perplejidad con que siempre los vencidos reciben la noticia de su derrota. No sabían nada.

CONCIENCIA Y DISCIPLINA

La izquierda chilena ha sido incapaz de romper este hábito malsano. En el orden personal, humano y profesional ha estado lejos de percibir las nuevas condiciones en que se desarrolla la vida del militar, el marino o el aviador y de hacerlas respetar. Los oficiales, suboficiales y soldados son, desde luego, funcionarios asalariados, sujetos económicos sometidos —como todos— a las prosaicas exigencias del vivir cotidiano y necesitados, por tanto, de remuneraciones suficientes, sistemas equitativos de ascensos, procedimientos disciplinarios justos, condiciones de vivienda y alimentación adecuadas, trato digno, todo ello dentro de las posibilidades materiales de la comunidad. El concepto feudal del “apostolado castrense”, entendido como un servicio virtualmente gratuito y sin más premio que la “satisfacción del deber cumplido” es tan inconsistente en nuestros días como el apostolado del médico o del maestro. Hoy la nobleza de la función no se mide tanto por las privaciones injustas que sus agentes son capaces de soportar, sino por el grado en que entregan sus potencias físicas y morales al servicio de la comunidad.

La evolución de las armas y el aprovechamiento general de recursos y territorios dentro de los modernos criterios de la ciencia militar, impiden, además, el aislamiento cultural, puesto que “un soldado necesita, a la vez, ser un técnico para entenderse con el progreso tecnológico y un político para saber a fondo en qué condiciones nacionales está destinado a desempeñarse”⁹. Cuando la prohibición constitucional a los cuerpos armados para deliberar se entiende como una interdicción personal de los soldados para discurrir, reflexionar o discernir, en buenas cuentas, para formarse un juicio sobre los acontecimientos y las ideas, se les está negando su condición humana, se les impone una mutilación injusta, se intenta aislarlos en una suerte de *ghetto* intelectual inaceptable. Los hombres de avanzada no pueden compartir ese criterio ni confinar las opciones espirituales de los miembros de las fuerzas armadas a una elección entre distintas cofradías religiosas o masónicas. Cosa diferente sería su participación concreta en actividades partidistas, a las que, por supuesto, no nos estamos refiriendo ahora.

¿Que todo lo dicho dañaría la unidad interna de las instituciones? Puede ser;

pero no está en nuestras manos impedirlo. Vivimos una época convulsionada y lo único realmente digno es que cada hombre, cuando sea llamado a decidirse, pueda hacerlo con la conciencia lúcida. Si los acontecimientos nos emplazan, si la historia nos acosa, si es imposible escapar a las responsabilidades que se plantean a nuestro país, algún día cada uno tendrá que resolver su destino por sí mismo. Y si las instituciones, laicas o religiosas, civiles o militares, no dan una respuesta adecuada, inexorablemente se planteará a miles de hombres el dramático conflicto entre la conciencia y la disciplina. Y las fuerzas armadas no serán una excepción.

UNA ALTERNATIVA PATRIÓTICA

En gran parte la carencia de posiciones claras en la izquierda, con relación a estas materias, proviene también de su esquematismo teórico. Desde un ángulo marxista, todas las ramas de la defensa son órganos de coacción de un Estado de clase y, como tales, tienen a su cargo la represión interna y la guerra exterior. Institucionalmente, sería entonces una ingenuidad suponer que pudieran jugar algún papel positivo, principalmente cuando los cambios alcanzan una profundidad revolucionaria. Pero, al mismo tiempo, los partidos populares tienen la evidencia de que Chile está realmente expuesto a una agresión externa en virtud de **condiciones políticas** muy específicas, aunque en apariencia ella se motive o se pretenda justificar con argucias jurídicas, históricas, territoriales, o de otro orden. Esas condiciones consisten en último término en la posibilidad o amenaza de que en nuestro país se constituya un gobierno popular. En tal eventualidad parece razonable suponer —y existen abrumadores antecedentes para pensar así— que los Estados Unidos preferirían desencadenar un conflicto generalizado sobre nuestras fronteras en lugar de arriesgarse en una acción directa como la de Santo Domingo, que tanto dañó su imagen en toda la extensión de la tierra.

Rodeados de tres naciones con todas las cuales tenemos tradicionales querrelas limítrofes, y gobernadas todas también por militares, la operación sería factible, limpia y barata.

En otras palabras, aumentar el poderío militar chileno sería fortalecer la contrarrevolución interna; debilitarlo sería fortalecer la contrarrevolución de fuera. De ahí la indecisión y el dilema.

Por supuesto, no podemos conformarnos con decir que la revolución resolverá nuestras tribulaciones, porque, justamente, que la revolución se realice o no depende de la manera como enfrentamos esta clase de desafíos.

Dos parecen ser las direcciones principales de una correcta política popular:

- a) Restablecer el carácter **nacional** de las fuerzas armadas, y

b) Adoptar formas adecuadas de **control democrático** sobre nuestra defensa nacional.

En efecto, las instituciones militares se han situado en un campo contencioso y polémico porque su función principal, la de cautelar el territorio y la soberanía de Chile, ha sido sustituida en los últimos años por su participación en un dispositivo hemisférico, políticamente dominado por los intereses y las concepciones estratégicas de una potencia mundial. Simultáneamente, dentro de esa estructura se le asignan faenas que las incorporan ineluctablemente a las más agudas controversias ideológicas y a los más violentos enfrentamiento cívicos.

Asistimos a un proceso de **desnacionalización** de las fuerzas armadas; por una parte se **internacionalizan** y, por otras, se **politizan**. Un cuerpo que debería estar rodeado del afecto y la confianza de todos, en tanto se mantenga fiel a los quehaceres básicamente patrióticos, pasa a tener adeptos y adversarios, críticos y prosélitos.

La creciente dependencia logística y formativa de los centros regentados por el Pentágono; la adaptación del material de guerra, de las hipótesis bélicas y de la mentalidad de los mandos a la idea de una conflagración intercontinental; la participación habitual, en fin, en las altas preocupaciones antisubversivas del "Club militar Americano", plantean una oposición insoslayable entre los actuales compromisos internacionales del país y su seguridad exterior.

Nuestros oficiales y suboficiales tendrían mucho más que aprender sobre la guerra en los desiertos y en las montañas de los ejércitos de Israel y Yugoslavia, por ejemplo, que de los **boinas verdes** de Panamá. Más urgencia tiene una eficiente cobertura naval y aérea en los desmembrados territorios del sur, que el adiestramiento en operaciones combinadas a escala oceánica. Mucho más avanzaríamos ensamblando los intereses económicos de los países latinoamericanos a largo plazo, que participando en Conferencias donde se parlamenta "entre gitanos" lo que sería cómico –o con criterio de fraternización política– lo que sería trágico.

Como sistema, la red de pactos militares ha desencadenado una feroz competencia, ruinosa para todos, pero nadie se atreve a salir del juego, temeroso de quedar rezagado. El anuario de la Enciclopedia Británica correspondiente al año 1968 da las siguientes cifras de hombres bajo banderas:

En el mar, Argentina tiene 154.272 toneladas a flote, entre buques de línea, naves auxiliares y de apoyo; Brasil, 127.544 toneladas; Perú, 91.347; Colombia, 41.738; Chile, 40.018; Venezuela, 37.616; México, 39.624; Uruguay, 22.500; República Dominicana, 19.700; Ecuador, 8.971, y Paraguay, 1.176 toneladas.

Es falso, en consecuencia, que los P.A.M. hayan aliviado la carga de los

País	Fuerzas regulares, Total	Número de individuos armados por c/1000 Habitantes
1 Brasil	194.400	2,15
2 Cuba	121.000	15,06
3 Argentina	120.000	5,06
4 México	68.500	1,47
5 Colombia	63.000	3,19
6 CHILE	60.000	6,71
7 Perú	54.100	4,11
8 Venezuela	30.500	3,05
9 Paraguay	20.200	9,35
10 Ecuador	20.000	3,63
11 Rep. Dominicana	19.300	4,96
12 Uruguay	15.400	5,51
13 Bolivia	15.000	3,95
14 Guatemala	9.000	1,91
15 Nicaragua	7.100	3,98
16 El Salvador	5.600	1,77
17 Haití	5.500	1,18
18 Honduras	4.700	1,86
TOTAL	833.300	

gastos de defensa. Por el contrario, han suscitado bruscos desniveles, muchas veces determinados por consideraciones políticas estrechamente asociadas a los planes del Departamento de Estado, que se traducen en situaciones de verdadero riesgo para el país que se retrasa. Así ocurrió con la precipitada firma del Pacto con Argentina, en marzo de 1964, en vísperas de las elecciones presidenciales chilenas; de inmediato ese país recibió cantidades impresionantes de equipo y armas.

En el orden personal, el sistema estimula favoritismos y presiones impropias e introduce elementos distorsionadores en el régimen de estipendios. Las comisiones al extranjero, los viáticos en dólares, las facilidades de importación, la incorporación al **modo de vida americano** en las bases yanquis, proporcionan

satisfacciones materiales que no siempre corresponden a la calidad profesional de los favorecidos ni a sus sacrificios reales en el servicio.

Sobran, pues, justificaciones para independizar al país y a nuestras fuerzas armadas de los compromisos vigentes con la OEA y el Pentágono.

En cuanto al control de la nación sobre los problemas y la política de defensa, ya hemos dicho lo esencial. Las Fuerzas Armadas son el brazo armado del país, del pueblo, no una milicia al servicio del Presidente o del Ejecutivo. Salvo asuntos comprensiblemente confidenciales o secretos por su naturaleza, su orientación doctrinal, su régimen interno y sus lazos con la vida económica y civil, son temas que no pueden sustraerse al conocimiento y examen de los representantes de la nación ni de la opinión pública.

Es esta una cuestión vital para el presente y el futuro de Chile.

NOTAS

1 Discurso de la Universidad de Princeton. Cable de A.P. publicado en "El Mercurio", 1957.

2 El informe de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional del Senado, de fecha 30 de junio de 1952, lleva las firmas de los Senadores Maza, Faivovich, Fernández, Marín, Guzmán, Alessandri (Eduardo) y Bórquez.

3 Crónica firmada por Augusto Olivares. "Ultima Hora", Santiago, 27 de octubre de 1966.

4 Santo Domingo. La guerra de América Latina, Newton Carlos, Ed. Iguazú, Buenos Aires, 1956, página 15.

5 Resolución Sexta de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Punta del Este, enero de 1962.

6 "El Mercurio", cable A.P. de Washington, 25 de junio de 1969.

7 Deberemos reconocer que dos publicaciones, las revistas PLAN y PUNTO FINAL han llevado a cabo diversas campañas de gran interés sobre el tema.

8 "El Mercurio", 3 de julio de 1969, Santiago de Chile.

9 Dardo Cúneo, Informes, Editorial Jorge Alvarez S.A., Buenos Aires, 1966.

LA UNIDAD ¿MITO O TAREA POLITICA?

De "La Izquierda en Punto Muerto",
Editorial Orbe, 1969.

PROBLEMAS VIEJOS EN EL MUNDO NUEVO

A menudo el manejo abusivo de las palabras termina por quitarles todo sentido. Sobre todo en el lenguaje político, tan propenso a las sutilezas de interpretación o, simplemente, tan dado a falsificar el contenido de los vocablos, para tornar inofensivo lo que es atrevido, dramático lo apacible, prosaicos los sueños o ideal remoto lo que es exigencia perentoria. Quién sabe hoy lo que se quiere decir cuando se habla de la **revolución**, de la **democracia**, **del pueblo**, **de la libertad**, **del socialismo**.

¿Qué debemos entender cuando se dice unidad?

Para hacer una paradoja fácil podría afirmarse que es la unidad la que tiene a la izquierda dividida. Son los componentes de esa unidad, sus objetivos y sus métodos, los elementos de la discordia. Todo lo elaborado en pro de una alianza sólida y amplia, estable y articulada, se desmorona a contar del 64; los lazos internos ceden en el FRAP y cada día se advierte en forma más clara su impotencia para dar expresión y cohesión a las fuerzas jóvenes de la sociedad. La unidad pasa entonces a ser una simple exhortación literaria; después, un anhelo; más tarde, un mito. Si cada cual persiste en concebirla a su manera quedará en eso, reducida a los contornos de un culto supersticioso, tranquilizante para el espíritu pero políticamente estéril.

Por ahora, el camino hacia el partido único marxista aparece más intransitable que nunca; habrá que acostumbrarse a la idea de la coexistencia de múltiples partidos en la izquierda, progresivamente articulados en un frente único de nuevas características, si se quiere participar realmente en la superación revolucionaria de la crisis actual. Para ello la unidad deberá plantearse como una tarea política concreta, no como meta utópica, y, menos aun, como recurso dialéctico para disfrazar el sectarismo de ciertos sacerdotes unitarios.

En esa perspectiva, vuelve a adquirir relieves decisivos el viejo problema de la autonomía para trazar la política obrera con relación a los centros socialistas de poder.

Ya en 1956 —estimulados por la disidencia yugoslava y aleccionados por las

conclusiones del XX Congreso del PCUS— los socialistas populares chilenos manifestaban sus esperanzas en el desarrollo “policéntrico” del mundo socialista, junto con señalar la saludable declinación de lo que denominaban la “infalibilidad vaticana” de Moscú¹. Desde entonces, los acontecimientos mundiales tienden a confirmar la tendencia a establecer modelos nacionales diferenciados y acentúan ciertas ásperas disputas en el campo socialista. El idílico vaticinio de una familia de Estados fraternos e iguales, empeñados solidariamente en construir la felicidad del hombre, ha encontrado graves impedimentos en los hechos. La conquista del poder por los trabajadores está lejos de cancelar una historia de siglos: el país que toman en sus manos hereda inevitablemente una cierta carga de tradiciones y una determinada posición geoeconómica que condiciona su marcha. Esos elementos seguirán influyendo por largo tiempo en su trayectoria. El papel del socialismo consiste en proporcionar soluciones constructivas a los conflictos, luego de liquidar los antagonismos sociales que los generaban e impedían abordarlos con arreglo a los intereses colectivos.

Las disidencias ideológicas en el campo socialista no se han originado en el vacío: pensar así sería volver a colocar la dialéctica cabeza abajo, como la encontró Marx en la filosofía de Hegel, esto es, sería suponer que las contradicciones nacen en la mente y se trasladan después a la vida, a los hechos. Y quedarían cosas muy importantes por explicar, como éstas: ¿Por qué las discrepancias más radicales se plantean entre los países donde la revolución fue esencialmente un esfuerzo nacional, tales como China, Yugoslavia, Cuba?. Si se tratara de una confrontación puramente teórica, de alternativas intelectuales ¿cómo explicar que pueblos enteros se alisten tras las opiniones de sus gobernantes, v. gr. chinos o soviéticos?. En el primer caso, es evidente que la conciencia de haber dinamizado su propio proceso liberador y la convicción de que la victoria obedeció a una original y correcta estrategia edificada sobre sus realidades también propias, estimula la prosecución de una línea de independencia en las etapas posteriores. En el segundo, parece también obvio que los desniveles en el desarrollo industrial y tecnológico perduran más allá de la Revolución, deforman las relaciones de intercambio y prolongan en el mercado socialista muchos de los atributos más injustos de la situación anterior.

Es lo que planteó con tanta crudeza el Comandante Guevara en el II Seminario Económico Afroasiático:

“De todo esto debe entenderse una conclusión: el desarrollo de los países que empiezan ahora el camino de la liberación, debe costar a los países socialistas. Lo decimos así sin el menor ánimo de chantaje o de espectacularidad, ni para la búsqueda fácil de una aproximación mayor al conjunto de los pueblos afroasiáticos; es una convicción profunda. No puede existir socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal

frente a la humanidad, tanto de índole individual, en la sociedad que se construye o está construido el socialismo, como de índole mundial en relación a todos los pueblos que sufren la opresión imperialista.

Creemos que con ese espíritu debe afrontarse la responsabilidad de ayuda a los países dependientes y que no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios que la ley del valor y las relaciones internacionales del intercambio desigual, producto de la ley del valor, oponen a los países atrasados.

¿Cómo puede significar "beneficio mutuo", vender a precios de mercado mundial las materias primas que cuestan sudor y sufrimiento sin límites a los países atrasados y comprar a precios de mercado mundial las máquinas producidas en las grandes fábricas automatizadas del presente?. Si establecemos este tipo de relación entre los dos grupos de naciones, debemos convenir en que los países socialistas son, en cierta manera, cómplices de la explotación imperial. Se puede argüir que el monto del intercambio con los países subdesarrollados constituye una parte insignificante del comercio exterior de esos países.

Es una gran verdad, pero no elimina el carácter inmoral del cambio.

Los países socialistas tienen el deber moral de liquidar su complicidad tácita con los países explotadores del occidente".²

LA DOCTRINA BREZHNEV

Ahora bien, que factores más o menos ineludibles se hayan encargado de trizar nuestra certidumbre en la instauración espontánea de una comunidad igualitaria y justa es ya un grave revés para el socialismo, pero que tales disputas –inherentes a fricciones estatales de poder– se proyecten al seno del movimiento revolucionario en el área capitalista, fraccionándolo, es un verdadero desastre y constituye una abdicación de las responsabilidades de los partidos ante sus propios pueblos. En último término las pugnas interestatales tienen una raíz objetiva, por deplorable que sea verificarlo, en tanto la traslación de esos enfrentamientos ideológicos a la política obrera mundial implica alistarse en pleitos que debilitan y dividen; conduce a postergar el análisis de las condiciones concretas de la lucha en cada país para reemplazarlo por el transplante mecánico de concepciones y tácticas frecuentemente inadecuadas.

Un **Vaticano** para la Revolución fue siempre nefasto; la situación no mejora si tenemos cinco o diez. Mientras Cuba y Yugoslavia, China y la URSS, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana, Bulgaria y Rumania, a nivel estatal, descubren un sistema de convivencia verdaderamente socialista, cada pue-

blo oprimido haría bien en aprender de todos pero conduciendo su lucha con arreglo a las condiciones peculiares de cada país. Argelia y Cuba demuestran que la capacidad de crear una línea estratégica autóctona es requisito principal de la victoria; allí se llevaron a cabo revoluciones socialistas sin la participación directiva del comunismo oficial y, al comienzo, venciendo la oposición de los comunistas.

En los últimos tiempos aquí, en Chile, la tendencia a enrolarse en algunas de las varias escuelas que disputan la supremacía en el ámbito comunista ha tenido influencia determinante en la declinación de la izquierda. Ha inoculado odios insuperables entre sus miembros, pero, sobre todo, ha suspendido virtualmente el esfuerzo científico –marxista– para examinar la cambiante realidad del país, para interpretarla y para sustituirla.

El Partido Comunista chileno acentuó su tradicional actitud prosoviética al caracterizarse en el mundo como uno de los partidos más obsecuentes al Kremlin en los momentos de la invasión militar a Checoslovaquia. Descalificados uno a uno los antecedentes de hecho que sirvieron de pretexto a la acción desencadenada por los ejércitos del Pacto de Varsovia, suscribió sin reservas la Doctrina Brezhnev. El resultado ha sido una nueva ola de descrédito para la política popular.

El punto merece un análisis. Más allá de las teorizaciones, el espíritu antimperialista chileno se alimenta de ingredientes de tipo patriótico y moral: sentimientos de dignidad ante el dominador poderoso; confianza en la justicia de la causa de los países pequeños; derecho inalienable de los pueblos al autogobierno. No había razón para suponer que esos valores pudiesen peligrar en un orden socialista; por el contrario, el principio de la autodeterminación había pasado a confundirse en los últimos lustros con la política internacional de la Unión Soviética. Hubo razón entonces para sorprenderse con las diversas declaraciones formuladas en el curso de la crisis checa por altos personeros del gobierno soviético que fueron configurando paulatinamente los contornos de la insólita doctrina. Gromiko, ante el Soviet Supremo, en junio de 1968; luego los jefes del Pacto de Varsovia, en la carta del 15 de julio; enseguida diversos redactores de elevada jerarquía en “Pravda”, y, para terminar, Brezhnev, el 12 de noviembre, en la Conferencia del Partido Obrero Polaco, la formularon más o menos en los términos siguientes:

- Es inadmisibles que la comunidad socialista o la relación de fuerzas en Europa sufra una mutación en virtud de maniobras imperialistas, sea que éstas se realicen desde fuera o desde dentro de un Estado Socialista;
- Solamente integrando la comunidad socialista un Estado puede preservar realmente su independencia y soberanía; y

- En el caso que peligre el socialismo en el interior de un Estado, el problema deja de ser asunto privado de ese país para internacionalizarse y convertirse en un asunto que atañe a todos los estados socialistas.

PROYECCIONES Y CONJETURAS

Jamás se había enunciado explícitamente un cambio tan drástico en el pensamiento socialista referente a las relaciones interestatales. Una distancia abismal separaba esas palabras de las escritas por Lenin en 1913:

“Para que las distintas naciones convivan o se separen (cuando esto más les convenga) libre y pacíficamente, formando diferentes estados, para ello es necesaria la plena democracia, defendida por la clase obrera. ¡Nada de privilegios para ninguna nación, para ningún idioma! ¡Ni la más mínima vejación, ni la más mínima injusticia con una minoría nacional!

Tales son los principios de la democracia obrera”.

Apenas oficializado el nuevo credo, lo impugnó Ceassescu, el líder rumano, en términos bastante rudos:

“La tesis que recientemente luchó por el reconocimiento y según la cual la defensa común de los países socialistas contra un ataque imperialista exige la limitación de la soberanía e, incluso, la renuncia de ella, se halla en completa discordancia con los fundamentos de las relaciones entre países socialistas y no puede ser aceptable de ninguna manera. La afiliación al Pacto de Varsovia no solamente no pone en duda la soberanía de los Estados miembros, ni limita su independencia estatal, sino que les sirve de ayuda, tal como reza el Tratado, para el reforzamiento de la independencia y de la soberanía nacional”.

Otros partidos comunistas también disintieron, entre ellos el italiano, el más poderoso del occidente. Esto es, expresaron sus discrepancias partidos con altas responsabilidades de gobierno y de elevado prestigio público, y al hacerlo corrieron riesgos de diferente carácter. En contraste, la conducta del Partido Comunista de Chile influyó negativamente en la expansión de una conciencia socialista en las masas populares, por mucho que se pretenda demostrar con su leve crecimiento electoral de marzo de 1969 que los trabajadores estuvieron de su lado en la estimación de los acontecimientos europeos. Justamente el enorme volumen de recursos puestos al servicio de la campaña y los magros dividendos alcanzados evidencian las dificultades psicológicas y políticas que debió vencer el partido; tanto en votación absoluta como en porcentaje, el FRAP descendió entre 1967 y 1969.³

Los acontecimientos checos fueron seguidos con enorme interés por todos los sectores; la falsedad de los argumentos invocados para justificar la ocupa-

ción apareció más nítida para el pueblo chileno por el esquematismo de la información cablegráfica misma, de modo que a la hora del análisis no quedó duda alguna de que, bajo la noble cobertura del *internacionalismo* y de la *solidaridad socialista*, se consagraba de nuevo la autoridad omnímoda de la Unión Soviética.

Aunque la doctrina no lo reconozca en términos explícitos, cuando se niega a las autoridades de un país la facultad de juzgar por sí mismas una situación de peligro para la revolución, originada en factores internos o externos, se concede ese derecho al vecino más fuerte, y es su poderío bélico la fuente exclusiva de la función tutelar que asume.

De ahí que el principio funcione únicamente en dirección y desmedro de las naciones débiles o pequeñas, físicamente imposibilitadas de poner orden en la casa de los aliados poderosos si no cuentan con la voluntad de quienes los gobiernan. Es, por eso también, un principio esencialmente antidemocrático y con el tiempo puede devenir en precedente ruinoso para la propia Unión Soviética. China Popular, en efecto, con sus 700 millones de habitantes, sostiene también que la revolución naufraga en los amplios territorios soviéticos en manos de los "revisionistas contemporáneos". ¿No podrían justificarse sus dirigentes con la Doctrina Brezhnev para corregir por la vía de las armas un curso político que estiman contrario a los intereses de la Revolución Mundial? Y en un mundo venidero, donde se hayan alterado las relaciones de poder, ¿no será éste un principio pernicioso en el más alto grado para el establecimiento definitivo de una nueva y pacífica comunidad internacional?

Proyecciones reales o conjeturas, reflexiones como éstas son naturales y explicables en un continente que ha sido notificado recién de una política por muchos conceptos semejante: la de las "fronteras ideológicas". Con arreglo a ella, el Presidente Johnson delineó su propia versión de la "soberanía limitada" por los intereses supremos de la metrópoli imperial. Por eso, muchos que piensan en el socialismo como suprema realización de la independencia nacional han sentido quebrantada su fe.

OTRO PUNTO DE RUPTURA

El FRAP mostró su impotencia para concertar una posición unitaria frente a esos acontecimientos. Peor aun, ni siquiera intentó hacerlo; actuó como si debiera darse por sentada su incompetencia para incursionar en aquellos asuntos donde la Unión Soviética ha comprometido una opinión irrevocable, esto es, demostró ser un mero cartel electoral y no el estado mayor de un pueblo. La libertad de acción de sus integrantes frente a problemas de esa jerarquía puede

ser un recurso para salvar las disidencias cuando el poder está en otras manos, pero ¿a qué autoridad se habría apelado si el FRAP hubiese tenido imperativamente que determinar una conducta como base de un Gobierno?

Tampoco se ha producido avance alguno en la determinación de tácticas comunes en la lucha popular. Hasta 1964 –y sobre todo por los resultados espectaculares obtenidos en la primera campaña presidencial del FRAP– existió cierto consenso para considerar la vía electoral como fase inicial, al menos, del proceso revolucionario. La perspectiva de una victoria en las urnas estaba lejos de estimarse una utopía, por mucho que los elementos más avanzados y maduros tuviesen la certeza de que ella sería inevitablemente seguida del alzamiento sedicioso de la reacción. La hipótesis “victoria electoral-defensa armada” constituía una secuencia tranquilizadora de los profundos escrúpulos legalistas de la mayoría de los chilenos –sin excluir a muchos de la izquierda– y soslayaba una discusión cabal y directa sobre los métodos de lucha.

La derrota del 64 creó otro clima. Por tercera vez en los últimos años las fuerzas avanzadas vieron esfumarse sus expectativas en el minuto mismo en que aparecían más ciertas, arrolladas por el despliegue impetuoso y sorpresivo de corrientes burguesas de relevo. Así ocurrió al término de la administración González Videla con el ibañismo; luego con Alessandri y su fugaz resurgimiento liberal, y ocurría ahora con la revolución democristiana. En cada ocasión, cuando parecían agotadas las viejas opciones, desprestigiados los partidos tradicionales, fracasadas sus recetas de gobierno, abiertas las posibilidades, en suma, para intentar un gran salto político, apareció una alternativa inesperada y el movimiento popular pasó bruscamente de la euforia al escepticismo.

Por lo demás, si bien las elecciones presidenciales, por su mismo carácter, al menos en teoría ofrecen una coyuntura para alteraciones profundas en las relaciones de poder, no pasa lo mismo con las elecciones parlamentarias y edilicias, confinadas paulatinamente al rol de meros muestreos de opinión y cada vez más condicionadas por la capacidad de mixtificación publicitaria de los partidos y los grupos capitalistas de presión. Es ostensible la pérdida de influencia y de prestigio tanto de las municipalidades como el Congreso en la arquitectura institucional de la democracia representativa.

Agreguemos, todavía, que el cuerpo electoral está constituido en proporción predominante por jóvenes, esto es, por una generación dispuesta a hacer pesar su presencia sin demora y a exigir cambios con apremio. En breve tiempo esas promociones han experimentado la inmutabilidad del sistema, la odiosa impermeabilidad del Estado para acoger lo nuevo y, lo que es peor, la penosa ineficacia de las armas que el sufragio universal ha puesto en sus manos. La condenación más sintomática del *establecimiento* radica en ese millón de chilenos que rehusaron votar el 2 de marzo.

Para los desilusionados, la experiencia cubana y toda la teorización guerrillera tienen un irresistible poder de seducción. Con la muerte del *Che* ese poder alcanza los perfiles de un culto, poco dispuesto a someterse a la rigurosa disciplina del razonamiento político. Se ha creado así otro punto de ruptura en los medios revolucionarios.

¿Tendremos efectivamente que elegir entre el reformismo electoral y el desahucio de todas las formas legales de lucha? ¿O entre el alzamiento guerrillero y la claudicación total? ¿Es imposible arribar a conclusiones comunes acerca de los medios de lucha entre revolucionarios de verdad?

Si el diálogo es entre marxistas, entre políticos científicos, y se trata de definir caminos para la revolución chilena, esto es, si nos alejamos de las generalizaciones bizantinas para sumergirnos en la realidad viva de los chilenos, ni las alternativas son tan simples, ni el acuerdo tan inalcanzable.

UNA ESTRATEGIA FLEXIBLE

La naturaleza opresiva del Estado burgués es un axioma en el pensamiento marxista; sabemos que su neutralidad aparente oculta la violencia institucionalizada, secular, invisible, que a menudo se exterioriza con ominosa brutalidad. Si bastara la valoración moral para justificar una política, sería suficiente ese diagnóstico para legitimar todas las formas de subversión vindicatoria; pero el papel de una vanguardia es, al mismo tiempo, más modesto y más arduo: consiste en movilizar a las masas contra ese Estado y en utilizar los métodos y las tácticas adecuadas a la relación de fuerzas de cada momento para alcanzar el triunfo. Mientras una verdad teórica no se traslada al terreno de la organización y de la conciencia no es una verdad política; carece de valor operativo, por elevada que sea su categoría ética.

En las condiciones actuales de América Latina se ahonda la crisis del poder tradicional y resulta imposible disimular su esencia reaccionaria. El andamiaje representativo es sustituido por la decisión de los Estados mayores; se extiende el uso de la represión y la tortura como instrumentos normales de regimentación social; el atropello es la regla. En Chile se ha caminado mucho en ese sentido, pero estamos lejos del clima de encono, de odios vesánicos, de venganzas y agresiones, que impulsa a la lucha a muerte, en el sentido literal de las palabras. Se necesita vivir la profunda humillación de los pueblos ocupados —como en China, Yugoslavia o Argelia— para comprender el ardiente impulso guerrero que los empuja a la acción; o la diaria experiencia del terror policial —como en la Rusia Zarista o en la Cuba batistiana— para explicarse la abnegación sin límites de los militantes de vanguardia. Los destacamentos de combate se constituyen

en núcleos de agrupamiento de la población civil a medida que la opresión terrorista se extiende; históricamente, esos factores pasionales han sido los requisitos psicológicos de la contienda armada. Cuando faltan, el enfrentamiento revolucionario es más bien la consecuencia de la incapacidad del sistema para contener la lucha social en los marcos convencionales, debido a que oprimidos y opresores colocan sus aspiraciones por encima de una legalidad desprovista de significado. En estos casos el choque armado es la coronación de la crisis no el factor desencadenante; las luchas de masas corresponden a una radicalización progresiva del antagonismo insoluble y los viejos partidos no pueden descartarse en tanto exista la posibilidad de que obedezcan a la presión insurgente del pueblo. Ambos factores subyacen, inevitablemente, en toda situación revolucionaria —la opresión política y la injusticia social— pero según cual predomine hace que cambie el centro de gravedad de la lucha, determina diferentes estrategias e impone tácticas distintas.

Aquí, la arbitrariedad del régimen es más perceptible en el orden económico-social que en su comportamiento político; las masas trabajadoras tienen conciencia de su explotación pero todavía asignan cierto valor a las instituciones democráticas —sindicatos, derecho de huelga, prensa libre, municipalidades, elecciones— como elementos de contención, al menos. La capitulación del reformismo consiste en resignarse a usarlas rigurosamente dentro de las reglas burguesas y tradicionales, en lugar de hacer de ellas puntos de apoyo para afianzar el poder político-social de los explotados y detener la fascistización de la vida pública.

En suma, una estrategia ofensiva, flexible, de masas, despojada de ilusiones electoralistas, consciente de la proximidad del choque definitivo como consecuencia del colapso de la democracia formal, puede concertar los esfuerzos hoy desperdiciados de poderosas fuerzas revolucionarias sobre un terreno realista y consecuente.

De otra manera, esas fuerzas se escindirán inevitablemente en dos direcciones igualmente negativas: unas —y parece ser esa la tendencia del PC— hacia la integración paulatina del partido en el sistema, en estricta calidad de grupo de presión que renuncia a la captura del poder, y otras, hacia la agitación y la violencia sin perspectivas, que busca la concientización de las masas mediante la acción directa, pero que frecuentemente sólo consigue regalar pretextos a la contrarrevolución para justificar sus agresiones contra los derechos del pueblo.

Mientras representó una corriente emancipada de cualquier tipo de subordinación exterior, el viejo Partido Socialista fue un aglutinante poderoso de la política de izquierda, principalmente en 1936 y en 1956. En cada ocasión aportó concepciones y actitudes originales que sirvieron a la unidad. Ahora ha preferido sumergirse en el universo comunista, justamente cuando éste se halla sacudido

por violentos desacuerdos ideológicos y tácticos. Como consecuencia, en lugar de operar como catalizador, como agente de una síntesis creadora y objetiva desde posiciones independientes, se ve él mismo desgarrado por litigios apócrifos incorporados a su existencia doméstica.

No se trata, por supuesto, de recomendar el aislamiento intelectual del socialismo chileno, a pretexto de preservarlo de las querellas que conmueven a todos los movimientos progresistas, ni tampoco de regatear su solidaridad hacia quienes luchan en la línea de fuego. Se busca un eje de acción y de pensamiento que corresponda a su tarea principal entre todas, la de abrir camino a la revolución aquí y pronto. Lejos de las disquisiciones escolásticas, de las generalizaciones baratas y de los juegos dialécticos tan caros a ciertos cenáculos, el marxismo es un arma útil sólo en la medida en que ayuda a descubrir la realidad y a transformarla, en un enfrentamiento continuo de la teoría con los hechos.

El penoso fracaso de la filial chilena de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) se debe muy principalmente a la ingenua esperanza de hallar afuera una inspiración que sustituya la ausencia de un análisis responsable adentro. A falta de disposición para encarar un debate definitivo entre socialistas y comunistas —ineludible si se desea salvar el punto muerto— se salió en busca del *Santo Grial de la unidad* a otras tierras. Cuando llegaron aquí, se dieron cuenta de que era un espejismo. Ni siquiera sirvió para cumplir lo que está más allá de cualquier pacto, bueno o malo: ayudar con entereza y decisión a quienes combaten al precio de sus vidas. Mientras el Comandante Guevara, desde las selvas bolivianas, reclamaba el estallido de dos, tres, muchos Vietnam, la organización instalada en Chile con tanto estruendo era incapaz de ofrecer el apoyo más insignificante a los hombres que luchaban al otro lado de la frontera.

REAGRUPAMIENTO URGENTE

A medida que se aproxima el año 70 emerge otra vez el viejo problema de las alianzas y la *unidad popular* retorna a ser un tópico de moda. Si el FRAP aglutinase sólidamente hoy —como en 1958 y 1964— a todas las fuerzas políticas obreras, socialistas y revolucionarias, el debate carecería de verdadera trascendencia, puesto que tras esa vanguardia, de su estrategia y de su programa, tendrían cabida y participación las fuerzas populares más amplias. Lo que da una significación distinta al debate es el hecho de que el FRAP ya no es más un centro unitario de dirección, de modo que los compromisos adicionales con partidos ajenos a la alianza alterarán inevitablemente su contenido, su acción y sus perspectivas. Con mayor razón, si se considera que importantes sectores de la izquierda están a su vez marginados del núcleo socialista-comunista tradicional;

el FRAP está cualitativa y numéricamente debilitado y su rol será diferente según se incline hacia el Partido Radical o hacia los grupos independientes de avanzada.

Pese a que subsiste un bloque nominalmente representativo de la política popular y de sus componentes de mayor poderío electoral, lo cierto es que ese núcleo dejó de tener el monopolio en la dirección de esa política y ha derivado más bien en un simple tribunal arbitral para dirimir los pleitos tácticos, electorales y organizativos entre los partidos que lo integran. Hay, entonces, una asociación física de fuerzas de izquierda, pero falta una **política de izquierda**.

Aparentemente el radicalismo ha girado resueltamente a babor, también en busca de la unidad popular. No es la primera vez, de modo que la sorpresa es relativa. Pero abrir las puertas al Partido Radical es, ni más ni menos, desahuciar toda la política construida alrededor de la tesis del Frente de Trabajadores. Esas tesis no hacen depender la incorporación de los radicales de contingencias tan fortuitas como la presencia o la exclusión de una docena de dirigentes reaccionarios, sino de la **naturaleza social** del partido y de su **desempeño concreto** en las luchas políticas de los últimos treinta años. El ha sido, objetivamente, un freno en la acción del Frente Popular; un instrumento de la dictadura legal de Gabriel González Videla; un cómplice en el sexenio alessandrista; un colaborador de la Democracia Cristiana en los convenios del cobre, y siempre sus actuaciones reaccionarias fueron precedidas por alucinantes períodos de doctrinarismo extremo.

Las objeciones no se plantean en el terreno de la sinceridad de las declaraciones y acuerdos; se formulan en torno a la posibilidad real de que un partido reformista hasta la médula pueda enrolarse en una cruzada que nadie trepida en calificar de revolucionaria. La propia directiva actual revela un devoto respeto por la legalidad y las instituciones vigentes, justamente cuando una y otras empiezan a ser impugnadas hasta por la jerarquía eclesiástica. El CEN, en declaración reciente,⁴ estampa la convicción perentoria y absoluta de que el tránsito al socialismo debe efectuarse dentro de un "régimen constitucional fundamentado en la separación de los poderes y el respeto a la ley". ¿Cuál ley?. ¿La que cubrió con el manto de la impunidad a los homicidas y a los instigadores de las masacres de El Salvador y de Puerto Montt? ¿La que autoriza al Presidente para asociarnos con los inversionistas yanquis en las actividades más vitales para el destino de Chile, notificando por los diarios al Congreso Nacional? ¿Puede pensarse, doscientos años después de su muerte, que el espíritu de Montesquieu debe servir de inspiración a la revolución de nuestros días? No tenemos derecho, como dijo alguna vez Maritain, a incurrir en la deshonestidad de instalar una fábrica de paraguas y anunciar que vendemos ametralladoras.

Se está jugando ahora una disyuntiva histórica para el movimiento popular; o

una alianza con el centro radical, electoralista, rutinaria, inapta para enfrentarse a la mañosa campaña demagógica de la derecha, o una amplia apertura del FRAP hacia las tendencias disidentes de izquierda, en una honesta y vigorosa tentativa de encontrar una renovada convergencia revolucionaria.

Medios y fines, métodos de lucha y programa están dialécticamente ligados; unos y otros deben emerger del análisis conjunto, desprejuiciado y creador de una realidad compleja y dinámica. No serán nunca el resultado de la imposición hegemónica de un solo partido. La unidad es un proceso que exige paciencia, tolerancia mutua, honestidad teórica, independencia crítica; no es una superposición vacía.

LLAMADO SOCIALISTA POPULAR

Se están planteando demasiadas situaciones insólitas para desechar anticipadamente opiniones y aportes, de ahí que sea urgente canalizar la discusión, como lo exigía con particular apremio la Unión Socialista Popular en carta dirigida al Secretario General del PC, en abril de 1968:

“Nosotros creemos, sinceramente, que el FRAP ya no responde a las exigencias del momento. Como ustedes mismos, en cierto modo lo reconocen públicamente, ha derivado en una mera alianza formalista, en un compromiso nominal cuya línea básica se desdibuja y se pierde frente a las contradicciones generales en su seno. Y sin una política de izquierda, vigorosa y unitaria, el FRAP deja de ser una coalición de combate para transformarse en un ente simbólico. Por otra parte, cada día crecen y se multiplican las fuerzas auténticamente antimperialistas y revolucionarias que, voluntaria o involuntariamente, se marginan del FRAP, de donde se desprende la necesidad de un nuevo agrupamiento de la izquierda por encima de compromisos estrechos y sectarios”.

“Tampoco puede negarse la necesidad imperiosa de reunificar criterios sobre problemas tácticos, sobre los medios de lucha, sobre una estrategia común para la conquista del poder. En un país como Chile, cuyos partidos tradicionales de clase tienen una dilatada existencia, y el propio FRAP cuenta con más de 10 años de vida, resulta cada vez más urgente precisar una línea de conducta práctica para el movimiento popular. Nuestra experiencia común, a la luz de un empleo realmente científico del marxismo, es ya más que suficiente para arribar a conclusiones que disipan, por una parte, las ilusiones de algunos en el “tránsito pacífico” hacia el socialismo, en un país situado en lo que alguien llamó “el patio trasero del imperialismo”, y, por otra parte, las ilusiones de quienes piensan que un grupo cualquiera de militantes resueltos, sin conexión con las masas ni responsabilidad ideológica, pudiese desencadenar la insurrección popular”.

“Cualquier reagrupamiento, cualquiera que sea la entidad encargada de darle cohesión y unidad al movimiento popular, debería proponerse –como originalmente se lo propuso el FRAP– ser algo más que un mero centro de coordinación de políticas disímiles. La autonomía de cada partido es un valor irrenunciable en cualquier política de alianza, pero debe entenderse que tanto la coincidencia de objetivos programáticos populares como la común inspiración teórica de los partidos populares chilenos deberían conducir, inevitablemente, a hacer de ese centro cada vez más un núcleo de elaboración colectiva de la línea común. Mientras las masas vean en este frente único o en cualquier otro un simple pacto circunstancial de corrientes rivales, más dispuestas a sacar ventajas de los errores recíprocos que a fundirse en una gran voluntad colectiva, le regatearán su confianza y desertarán de su lado en cualquier coyuntura conflictiva”.

Unir primero a todas las tendencias revolucionarias; discutir después los compromisos tácticos con fuerzas reformistas, parece ser el itinerario más lógico. Sin exagerar los formalismos, porque antes de constituir oficialmente una alianza debería estimularse el entendimiento en la base, en el terreno, alrededor de cada batalla local, de cada incidente, de cada conflicto, sin exclusiones. Animando el reagrupamiento con un espíritu fraterno, nuevo, genuinamente revolucionario, en reemplazo del maquiavelismo tortuoso, de los métodos oblicuos, del sectarismo pérfido, que ha dañado más allá de todo cálculo la imagen de la política y de los políticos de avanzada en los medios no iniciados. Muchos miles de hombres del pueblo se abstienen de actuar en los sindicatos y en las poblaciones, se alejan de sus partidos de clase, porque les ha tocado ser testigos involuntarios de maniobras a veces ruines, que crefan desterradas de la lucha popular: dirigentes valerosos acusados de agentes de la policía, intrigas innobles entre los adversarios, contubernios inexplicables para alcanzar posiciones de poder, hostilidad mezquina hacia líderes espontáneos, etc. Vale decir, la unidad plantea también un desafío moral: consiste en demostrar que ya ahora –en el seno del capitalismo y cincelado por la lucha– está naciendo el hombre nuevo.

NOTAS

1 Informe del Comité Ejecutivo del PSP a la II Reunión Plenaria, agosto de 1956.

2 Ernesto Che Guevara, Pensamiento Crítico N° 14, marzo de 1968, La Habana, Cuba.

3 En 1967, socialistas y comunistas lograron 672.743 votos, con un 28,7%; en 1969, 668.941, con el 28,2%.

4 Declaración del Comité Ejecutivo Nacional del P. Radical, 28 de julio de 1969. “El Mercurio”.

LAS FUERZAS ARMADAS: CHILE O EL PENTAGONO

Revista "Chile-Hoy", septiembre 7 de 1973

En estos primeros días de septiembre, coincidiendo con el tercer aniversario de la victoria de la Unidad Popular, una delegación de altos dignatarios chilenos asiste en Argel a la Conferencia en la cumbre de los **Países no Alineados** y, simultáneamente, en Caracas, con la reserva habitual, una delegación militar de parecida jerarquía participa en la reunión de Comandantes en Jefe de los ejércitos americanos. Para cerrar el panorama de un mes particularmente activo en acontecimientos ligados a nuestra política exterior, antes y después de la fecha que señala simbólicamente la independencia nacional, varias unidades de nuestra marina de guerra se agregarán a una Fuerza de Tarea de la escuadra yanqui para participar en la **Operación Unitas XIV**.

Los Países No Alineados, como se sabe, se denominan así porque rehusan tomar partido en la política de bloques, o, para decirlo en términos más actuales, porque proclaman una total autonomía en la conducción de su política exterior, particularmente en el terreno militar. En cambio, tanto el cónclave de generales como los ejercicios navales que tendrán por escenario nuestro litoral se inscriben en el marco de ciertos compromisos –el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Pacto de Ayuda Mutua– que obligan a Chile a “aportar la plena contribución que le permitan sus recursos humanos, sus riquezas, sus facilidades y su estado económico general para acrecentar y mantener su propia fuerza defensiva, así como la fuerza defensiva del mundo libre”.

AMBIGUA CONDUCTA

La simultaneidad de estos hechos pone en evidencia la ambigua conducta del Gobierno Popular en un campo de especial importancia. La línea pragmática que se halla en la base de una situación tan contradictoria busca justificación en la natural prudencia con que debe conducirse un país pequeño en sus pleitos con la potencia hegemónica, pero oculta al mismo tiempo la dramática verdad de un proceso que alcanza a la vida entera de la nación.

No se exagera cuando decimos que la tarea de hoy –y que ha tomado en sus manos el Gobierno– consiste en consumir la Segunda Independencia de Chile.

No es ésta una metáfora: es una finalidad que deberemos aceptar con todas sus consecuencias, entre ellas, las represalias de cualquier orden que desatan y desatarán los intereses desalojados del manejo de nuestros asuntos vitales. Es innecesario describirlas; cada chileno las conoce desde que arrebatamos el cobre a los norteamericanos. Ahora bien, el deterioro de las relaciones con la metrópoli imperial, efecto inevitable de un acto de soberanía respaldado por la nación entera, por la unanimidad del Congreso y explícitamente consagrado en el texto de la Carta Constitucional, no ha parecido afectar hasta ahora los vínculos militares vigentes entre Chile y los EE.UU. Ni los lazos jurídicos e institucionales (TIAR - PAM – Junta Interamericana de Defensa), ni aquellos de carácter material y financiero. Se da así el caso de un país trabado en una feroz contienda diplomática, comercial, jurídica y política, contra un adversario despiadado y cínico, que mantiene, a pesar de todo, una inexplicable dependencia doctrinal y logística de su estructura militar con respecto a ese mismo adversario. Es una contradicción que no se puede disimular en nombre de ningún practicismo. La propia crisis política que se vive exige una decisión perentoria.

Hasta aquí, un cierto respeto reverencial por el llamado “profesionalismo” de los hombres de armas ha permitido presentar a los militares como víctimas de la tensión política, tironeados desde la derecha y desde la izquierda con móviles mezquinos, perturbados en su tarea por la introducción alevosa de ciertos dilemas ideológicos en los cuarteles.

Ese no es el problema. Lejos de constituir una sórdida conspiración para dividir a los soldados, lo que ocurre es que las opciones en juego comprometen en tal grado el conjunto de la vida nacional y su futuro que la alternativa “liberación o dependencia”, “libertad o dictadura”, “socialismo o fascismo”, no puede soslayar a las Fuerzas Armadas, sino que, por el contrario, plantea una disyuntiva de hierro a todo el aparato de la Defensa Nacional y a las doctrinas en que se inspira. Podrá estimarse una afirmación imprudente o atrevida, pero lo cierto es que nuestro actual poderío militar carece de autonomía: sólo puede funcionar con eficacia al amparo y bajo la dependencia del Pentágono. Y para deslindar responsabilidades debemos añadir que llegamos a esa penosa situación por el increíble sometimiento de los gobernantes civiles a los principios de la defensa hemisférica y a los criterios impuestos por la “Guerra Fría”.

ULTIMAS ESPERANZAS

A medida que la oligarquía agraria y monopólica y los inversionistas extranjeros y sus agentes pierden poder en el manejo de la economía y se reduce su significación social, ponen sus últimas esperanzas en aprovechar esos meca-

nismos para descomponer el soporte militar del Gobierno legítimo, aplauden los devaneos gorilistas de algunos oficiales y alientan el golpe. Toda la retórica “democrática” se disuelve en una persistente incitación para que las Fuerzas Armadas hagan un escarmiento con los trabajadores, atropellen a los sindicatos, “arrastran el poncho”, para colocar al Presidente de la República y a sus representantes en una posición falsa ante los militares o ante el pueblo.

El Gobierno ha facilitado este turbio juego con su indecisión para plantear el problema en sus verdaderos términos. Aquí lo sustancial no es una cuestión de honor o de prestigio, ni tampoco de legalidad o ilegalidad –eso es sólo palabrería que disfraza el verdadero designio de los sediciosos–, sino de estar al servicio de Chile o al servicio del Pentágono. Independizar a las Fuerzas Armadas de su actual supeditación a los intereses y concepciones yanquis es una tarea impostergable. Y los primeros que deben comprender la absoluta prioridad de este objetivo deben ser los propios militares. Basta ya de debates adjetivos, que orillan el nervio de las verdaderas decisiones.

Este no es un punto de vista nuevo. Ni tampoco una tesis extremista o una deformación doctrinaria de la izquierda. En los contactos previos a la reunión de Caracas, dos generales de carrera, Comandantes en Jefe de sus respectivos ejércitos –Mercado Jarrín, del Perú, y Carcagno, de Argentina–, han convenido ya en plantear un profundo viraje en las concepciones militares vigentes, orientándolas a establecer una estrecha asociación entre las Fuerzas Armadas y los pueblos latinoamericanos en la conquista de la liberación nacional y en la resistencia al imperialismo. En Buenos Aires, el principal promotor de estas ideas es el General Juan E. Guglielmelli, de sólido prestigio militar e intelectual en el país vecino, quien viene sosteniendo sus puntos de vista en la revista “Estrategia” y en sus conferencias ante la Escuela Superior de Guerra. En una nueva versión del profesionalismo que él propugna, ha dicho: “Las Fuerzas Armadas protegerán y participarán activamente en el desarrollo del proceso liberador, codo a codo con su pueblo”. Y al anotar los riesgos de la actual dependencia, ha tenido el coraje de advertir la posibilidad “de que ese aparato militar gravite a través de los abundantes canales de “enlace” que el sistema ha creado sobre sectores militares, con el propósito de que éstos actúen contra sus propios gobiernos cuando así convenga a la política estadounidense o a los intereses de los grupos vinculados con el Pentágono”.

Una opinión tan explícita y terminante, emitida por un oficial de la vieja escuela, miembro de un ejército de profunda tradición conservadora, parece inconcebible en nuestro medio. En boca de un militar chileno, en esta hora de hondas transformaciones revolucionarias, daría material para acusarlo de extremista y arrastrarlo eventualmente a los tribunales castrenses.

Las Fuerzas Armadas no pueden quedar al margen de la historia, más aún

que otras instituciones están al servicio de la soberanía del país y están en el deber de participar, en consecuencia, en la lucha que llevamos adelante para consolidarla en todas sus dimensiones. Cualquier actitud negativa o prescindente es una deserción, porque la defensa nacional no es un quehacer abstracto, neutro, intemporal; tiene, por el contrario, un contenido políticamente definido y concreto en cada etapa de la existencia de la nación. La defensa del Chile de hoy está orientada contra la agresión imperialista externa y de sus agentes en el interior de la comunidad; mal podrían las instituciones armadas o sus integrantes mantener afinidades ideológicas con los EEUU. y menos aún, relaciones de dependencia material.

Esperamos que las noticias de Caracas confirmen una nueva actitud de parte de los representantes chilenos. Y confiamos también en que la Operación Unitas XIV sea la última incursión de la flota yanqui en las costas de la Patria. Debemos optar por la defensa de Chile o la defensa del imperialismo.

EL NUEVO PODER MILITAR

Seminario en la Universidad Autónoma de México, 1977

Interrumpiendo una larga indiferencia por el tema, principalmente a partir del golpe de estado chileno de 1973, se vienen multiplicando los estudios acerca del papel de los militares en la historia, en la política y en la sociedad latinoamericanas. Una tarea que se hacía urgente e indispensable, desde luego, para ofrecer una explicación retrospectiva de los acontecimientos y de los mecanismos de la hegemonía militar, así como para proporcionarnos un análisis más prolijo de las características sociopolíticas e instituciones de las fuerzas armadas. La lectura de los trabajos deja siempre la impresión final de que ellas constituyen un puro aparato armado del Estado tradicional, para fines esencialmente de dominación interna. En consecuencia, su brutal desempeño represivo sólo explicitaría una misión primordial y latente, en tanto su espíritu de cuerpo vendría a ser la natural expresión de la comunidad ideológica de sus miembros en torno a esa misión represiva.

Personalmente, creo que se trata de una interpretación justa en sus líneas generales pero que olvida fisuras y contradicciones propias del ejército y del nuevo orden militar latinoamericano, que resulta indispensable conocer para elaborar una correcta respuesta política. Me propongo en esta intervención detenerme en algunos asuntos particularmente significativos, que inciden en conflictos ideológicos, sociales e internacionales, creados o exasperados por la presencia de los militares en el poder.

Los ejércitos latinoamericanos, desde luego, además de experimentar la contradicción común a todos los ejércitos burgueses entre su papel de clase y su naturaleza de masas ("Es decir, el ser un organismo social cuya función primordial es la tutela de los intereses de una minoría que oprime pero que para llevar a efecto esta función debe recurrir a la mayoría oprimida", explica Battistelli en *Escrito e Società Borghese*) son, también, agentes de la dependencia, en circunstancias en que teóricamente deberían ser guardianes de la soberanía. Tales hechos generan profundas grietas en la ideología que sirve de cimiento a la estructura castrense y constituyen elementos imprescindibles para configurar una alternativa democrática y revolucionaria. Si en el pasado ignoramos o subestimamos el peso de los ejércitos profesionales en el acontecer americano, tenemos ahora la obligación de corregir tan trágico olvido. Aleccionados por una

experiencia muy dura, debemos colocar entre nuestras primeras preocupaciones la de romper el control del imperialismo y de las fuerzas reaccionarias sobre las fuerzas armadas, que constituyen el sostén real de las actuales dictaduras latinoamericanas, para hacer viable un cambio verdadero. Para ello necesitamos descubrir y explotar a fondo las líneas de fractura, los problemas latentes, los puntos de crisis que comienzan a deteriorar el monolitismo institucional y a corroer su alianza con el bloque social que les sirvió originalmente de apoyo. Recojo así la invitación que nos hizo Lelio Basso en el seminario de Bolonia. “No imitemos –nos dijo– a los generales franceses que estudiaron siempre, con encomiable acuciosidad, la última guerra, para aplicar sus enseñanzas a la próxima, sin comprender que el nuevo conflicto muy poco de común tendría con el precedente. Naturalmente, fueron derrotados.” Ahora que comenzamos a comprender por qué fuimos vencidos, escapemos a la tentación de creer que las cosas se repetirán nuevamente como ocurrieron ayer. Todos los acontecimientos dejan su huella en la historia, fastos o nefastos, y la lucha por la liberación social y nacional de los pueblos latinoamericanos exige una profunda renovación de los criterios que la orientaron en los años anteriores al nuevo orden militar. Me referiré sólo a tres zonas de conflicto, donde se dan situaciones nuevas: el área social y demográfica, el área ideológico-religiosa y el área diplomático-militar. Se trata de un modesto intento de individualizar algunos temas de debate.

Cuando los regímenes militares comenzaron a generalizarse y los contactos intergubernamentales se multiplicaron, se tuvo la impresión de que la aparente homogeneidad política de la región llevaría a un alto grado de integración y cooperación entre los estados, no solamente para establecer un siniestro mercado común de la muerte (como lo ha llamado Eduardo Galeano, refiriéndose a la internacionalización de los sistemas represivos) sino también en las esferas diplomática, ideológica y económica. Los últimos años han servido para disipar tales previsiones: nunca como hoy el continente –y en forma especial la América del Sur– ha estado más preñado de tensiones y disputas que van adquiriendo amenazadores perfiles militares. Las dictaduras han servido para reforzar la disciplina de las naciones latinoamericanas con respecto a la superpotencia continental, concebida como el corazón de un sistema de sociedad y de vida amenazado por las fuerzas de la subversión, han aniquilado, temporalmente al menos, las conquistas populares y democráticas, y han sustituido el viejo bloque de dominación por la hegemonía de un sector capitalista monopólico estrechamente asociado a las corporaciones multinacionales, que controlan cada vez más los sectores tecnológicamente avanzados, el sistema bancario y hasta las actividades agropecuarias de exportación. Todo esto es cierto y da a los gobiernos del sur del Ecuador un cierto aire de familia, que parecía confirmado por una

retórica patriótica con abundantes alusiones a las luchas comunes de la Independencia. Pero los roces entre las naciones se multiplican, crecen y se encorvan.

Sería una tarea superior a mi compromiso intentar un cuadro sistemático del tenso panorama sudamericano y de sus causas, pero ensayaré algunas explicaciones. Ante todo, señalo la ambigua naturaleza del Estado tradicional latinoamericano, que no llegó jamás a ser la cristalización del Estado nacional que conocieron los países de capitalismo maduro bajo la dirección de una burguesía compacta y dominadora. El Estado latinoamericano, de difícil gestación institucional, internamente debilitado desde sus orígenes por la influencia social y política de oligarquías más leales al regionalismo que a la nación, terminó por acomodarse al papel de agente negociador de la soberanía con el imperialismo de turno, en vez de asumir la función de estructura política protectora del desarrollo nacional. El Estado sirve para reconocer concesiones a las compañías extranjeras, para otorgar regímenes tributarios y cambiarios privilegiados a los inversionistas foráneos, para legalizar la mutilación del territorio; en otras palabras, para institucionalizar el subdesarrollo y la dependencia pero simultáneamente realizar esfuerzos inauditos por darse una identidad nacional. La misma ambigüedad afecta a los ejércitos que, ante la necesidad imperiosa de exhibirse ideológicamente como instrumentos del destino nacional, no han vacilado en presentar las empresas guerreras inducidas por el imperialismo como gestas patrióticas, o en desencadenar enfrentamientos locales que alimentan al orgullo nacional y corporativo. En uno y otro caso, por supuesto, concurren otras causas de diferente valor pero la motivación referida tiene una importancia capital en la exasperación del patriotismo —llamado a veces de frontera— como en el ceremonial chovinista que se cultiva en los cuarteles. Recuérdese la indignación con que los militares chilenos rechazan cualquier alusión al papel de los agentes ingleses en la Guerra del Pacífico (1879-1883) porque, a su juicio, el sólo enunciar la presencia de intereses económicos en el estallido del conflicto empañaría la gloria alcanzada por las fuerzas armadas en los campos de batalla, así como el cuidado de los medios castrenses de Bolivia y Paraguay por ocultar los intereses petroleros que explican la Guerra del Chaco (1932-1935). En compensación, los ejércitos (como los gobiernos militares) son particularmente sensibles a las rivalidades vecinales. Se puede afirmar como una regla general que en cada país latinoamericano se cultiva cuidadosamente la animosidad contra las naciones fronterizas, paralelamente a una devota amistad hacia los estados colocados a espaldas del vecino. No faltan en tal actitud las consecuencias de un pasado borrascoso pero es también un resorte de autoafirmación de los ejércitos en el poder. No es fácil preservar el prestigio de la casta con puras evocaciones retóricas de las virtudes militares; es igualmente necesario demostrar cómo,

además del valor para masacrar a sus propios pueblos indefensos, los hombres de armas tienen coraje para enfrentar a los enemigos de afuera. Las disputas territoriales heredadas de la disolución del imperio colonial ofrecen una fuente inagotable de motivos y pretextos de fricción internacional, mientras la agresividad frente a los adversarios históricos ayuda a disimular el servilismo de nuestros generales ante el Pentágono y el gobierno norteamericano.

Un viaje imaginario a la América del Sur nos permitiría señalar un foco de tensión en cada conjunción de fronteras pero, en las circunstancias actuales, casi todos tienden a diluirse en el conflicto mayor, que opone el Brasil a casi todos los demás países de la zona. La razón es obvia: se trata del Estado más poderoso en territorio, población y desarrollo económico relativo, cuyas fronteras tocan todos los países sudamericanos, a excepción de Chile y Ecuador. Con una fuerte vocación expansionista, que desde la época colonial le ha permitido ganar un enorme espacio a expensas de sus vecinos, a partir de la última guerra mundial constituye un satélite privilegiado en la constelación imperial de los Estados Unidos de Norteamérica. Una posición singular solemnemente reconocida por Nixon, cuando sostuvo que hacia donde se inclinara el Brasil se inclinaría también la América Latina. Si bien los personeros de la administración Carter han venido a corregir y temperar las declaraciones oficiales, su colocación geográfica le reserva al Brasil un papel relevante en el sistema defensivo del Atlántico Sur y del Occidente, de hoy de mañana.

Desde 1964, el Brasil ofrece a las repúblicas hermanas un nuevo modelo de dictadura militar y ha emprendido una ambiciosa empresa hegemónica, según un esquema geopolítico que le reserva el liderato exclusivo sobre el conjunto del continente. Es un designio que los gobiernos contiguos no pueden ignorar, ni siquiera aquellos ideológicamente más cercanos. Algunos, como los de Uruguay, Paraguay y Bolivia, situados en la periferia del subimperialismo, deben su instalación y su estabilidad a la colaboración financiera, política y hasta militar brasileña, y no tienen más camino que el de la capitulación y de la entrega. Pero otros no; así Argentina, por ejemplo, no obstante las similitudes externas en la fisonomía del poder, ofrece tenaz resistencia a su integración subalterna en un esquema dominado por su poderoso vecino del norte. Venezuela y Perú (mientras al menos prevalecieron aquí las tendencias progresistas de Velasco Alvarado) por motivos políticos, además de aquellas de carácter territorial constituyen otras dos importantes fronteras duras.

En los meses recientes, las preocupaciones venezolanas derivadas del Pacto Amazónico propuesto por el Brasil a los países de la cuenca, y los roces diplomáticos argentino-brasileños en que han culminado las tentativas de encontrar una solución común y equitativa para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, han creado tensiones que no parecen amainar. El vicealmirante

Oscar Montes, actual ministro de Relaciones del gobierno de Buenos Aires, se vio constreñido a declarar en el mes de agosto (Diario Clarín, Buenos Aires, 5 de agosto de 1977) que no compartía las “apreciaciones de algunos círculos que mencionaron la posibilidad de un eventual conflicto armado con Brasil si la represa de Itaipú entra en funcionamiento sin ser compatibilizada con la de Corpus”. La primera es un plan conjunto brasileño-paraguayo, en tanto que la segunda iniciativa interesa a Argentina y Paraguay, todo lo cual demuestra, por lo demás, la delicada situación geopolítica de este último país.

En torno a este foco central se dibujan otras presiones y líneas de fuerza que llegan a tocar incluso los puestos avanzados de la influencia brasileña, como acabamos de ver en el caso del río Paraná. El propio Banzer, tan estrechamente asociado a Brasilia, se mueve hoy en una prudente línea de equilibrio buscando apoyos complementarios para sus proyectos (situación de privilegio en el Grupo Andino, puerto propio sobre el Pacífico) principalmente en Venezuela y en Argentina. Sin embargo, la situación más explosiva se plantea entre la junta militar chilena y los gobiernos militares que flanquean su territorio por el norte y por el este. En el norte, la paralización de las gestiones iniciadas con tanto vigor como duplicidad para ofrecer una salida al mar a Bolivia y al mismo tiempo aislar al Perú de Velasco Alvarado, tiende a transformarse en el origen de un nuevo conflicto en el que inevitablemente se verían envueltos los tres países de la zona. Desde luego, para Banzer el colapso definitivo de las negociaciones significaría el brusco desmoronamiento de su ascendiente en el interior de las fuerzas armadas y, tal vez, el prólogo de su caída. Ya tres meses atrás la Falange Socialista, partido que sostiene su gestión, ha reclamado la ruptura de relaciones diplomáticas con Chile, si antes de marzo del año próximo las demandas de La Paz no encuentran plena satisfacción. La fecha no es arbitraria: los primeros días de febrero de 1978 vence también el plazo para que el gobierno argentino se pronuncie frente al fallo emitido por la Reina de Inglaterra, sobre el viejo litigio del Canal Beagle, favorable, como se sabe, a las tesis chilenas. El veredicto ha desencadenado una profusa campaña periodística, diplomática y militar destinada a reforzar el orgullo nacional argentino y a bloquear lo que se estima una marcha chilena hacia el Atlántico, apoyada en las proyecciones jurídicas y espaciales de la sentencia sobre el mar adyacente a las islas Picton, Lenox y Nueva. Mientras se repiten en los últimos tiempos los ejercicios de desembarco en las costas de Tierra del Fuego, el comandante en jefe de la Marina de Guerra argentina y miembro de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, almirante Emilio E. Massera, ha llegado a declarar: “La armada se encuentra en plena capacidad operativa (...) apasionadamente preparada para evitar cualquier mutilación geográfica de la nación en su área de responsabilidad.” (Cable UPI, Buenos Aires, 3 de agosto de 1977, publicado en el diario La Tercera de Santiago de Chile, el día

4). La coincidencia de fechas de que hablamos significa recordar a Pinochet que dentro de poco deberá enfrentar dificultades —que pueden llegar a los hechos— en los dos extremos del dilatado territorio chileno. Una situación parecida, en vísperas de la guerra del 79, obligó al gobierno de Santiago a renunciar a sus derechos sobre la Patagonia en favor de Argentina, ante el riesgo de sostener una guerra simultánea en todas sus fronteras.

La hipótesis de un conflicto local, con o sin complicaciones ulteriores de dimensiones continentales, es entonces verosímil. Las dictaduras de nuestros días tienden a desatar un chovinismo desenfrenado, sea para ocultar su progresiva transnacionalización, sea para aglutinar en torno a ellas —en nombre del patriotismo— una opinión pública cada vez más refractaria a la gestión militar. Se comienza incluso a teorizar un cierto nacionalismo de fines (alcanzar rápidamente una estatura internacional mediante la maciza inyección de capitales extranjeros), en reemplazo del nacionalismo de medios (control soberano de los recursos naturales), que habría inspirado la acción de las izquierdas, en desmedro, se afirma, del crecimiento del país y de su gravitación en los acontecimientos de la región. Contribuye a extremar las tensiones una carrera armamentista inspirada en los mismos criterios, que ya en 1976 (en el año en curso esas cifras deberán sufrir un impresionante incremento) costó a la América Latina un total de 6.790 millones de dólares (Instituto de Investigación para la Paz Internacional Estocolmo). Estimulada primero para servir a la represión interna, ha derivado cada vez más acentuadamente hacia la adquisición de armas de prestigio (cruceiros, destructores, lanzacohetes, aviones supersónicos, proyectiles) con un efecto catastrófico sobre los equilibrios militares de la región.

Estas adquisiciones pueden parecer alarmistas y excesivas. También se juzgaron así en el pasado las aisladas preocupaciones dirigidas a la institución militar, hasta que las fuerzas armadas lograron en pocos años invertir todo el proceso de liberación que comenzaba a perfilarse en el continente entero. Hoy, cuando es evidente que ni siquiera la natural vocación pacifista del socialismo basta para descartar los riesgos del enfrentamiento militar; cuando los análisis simplificadores son insuficientes para comprender conflictos como los que tienen por teatro el llamado Cuerno de África, no puede excluirse la hipótesis de conflictos bélicos en América Latina o, al menos, de tensiones tan violentas que habrán de tener una inevitable repercusión en la estabilidad de ciertos regímenes militares, abriendo así una brecha a la resistencia popular, a condición de que ésta tenga una clara comprensión de los acontecimientos y una actitud política madura y coherente. Ni siquiera una intervención apaciguadora de Washington, con sus abrumadores recursos diplomáticos y materiales, podría evitar en ciertas circunstancias un choque súbitamente desencadenado, con la esperanza de resolver, en el plazo de días, una contienda que se espera por años y

cuya inminencia comienza a agotar los recursos y los nervios de los potenciales adversarios. En todos los países los altos mandos piensan en una victoria inicial rápida, que permita abrir las negociaciones de tregua o de paz sobre la base de hechos consumados.

También es preciso tomar cuidadosa nota de las discrepancias planteadas entre los gobiernos militares y la Iglesia Católica que, en algunos momentos, han llegado casi a la ruptura. Su intensidad varía de país a país y de tiempo en tiempo pero muestra cierta tendencia a hacerse siempre más áspera y global. No faltan tampoco, es cierto, las expresiones más reaccionarias de intolerancia, como las de la iglesia colombiana cuando denuncia una pavorosa infiltración marxista en la educación y acusa al gobierno conservador de no hacer nada por evitarla, pero en Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, en cambio, las iglesias locales se encuentran, más a menudo, enfrentando la gestión gubernativa desde posiciones progresistas.

Las discrepancias se dan en diversos planos, desde el ideológico a las políticas concretas relativas a los derechos humanos, a las libertades públicas, a la educación, etc. En el centro de la disputa o, en todo caso, como elemento polémico más o menos inevitable, se encuentra la doctrina de la seguridad nacional. Lo que comenzó siendo una simple extensión de las técnicas de la guerra a la lucha contra la llamada subversión interna ha venido adquiriendo, con el tiempo, la consistencia de una ideología totalizadora, construida a partir de una concepción expansionista del Estado, a cuyos objetivos deberían subordinarse todos los intereses, tanto individuales como colectivos. Una doctrina, en suma, incompatible con las nociones esenciales del pensamiento cristiano, en cuanto éste considera determinados derechos del hombre como anteriores y superiores al Estado. La contradicción no se detiene en el plano teórico porque, en la misma medida en que bajo la inspiración de la seguridad nacional se trata de legitimar las formas más abyectas de la dictadura, la jerarquía eclesiástica se enfrenta a la necesidad concreta de tomar partido en favor de las víctimas de la arbitrariedad y el atropello. Los obispos franceses, en una declaración aparecida en *Le Monde* en el mes de marzo, evidencian las contradicciones con extrema claridad.

“Ella, dicen refiriéndose a la iglesia latinoamericana, rechaza la doctrina de la seguridad nacional en que se inspiran los gobiernos de diversos países y que amenaza extenderse aún más. Esta doctrina que hace del Estado la regla suprema, y de éste el solo juez de su propio interés, sirve para legitimar la política represiva que los militares en el poder conducen con el apoyo de servicios extranjeros. Los obispos denuncian el peligro que representan estos regimenes totalitarios. Para ellos la defensa de la libertad es inseparable de su tarea apostólica”.

La declaración está firmada, entre otros, por el cardenal Paul Gonyon, arzobispo de Rennes.

La XV Asamblea de los obispos brasileños, por su parte, en una apreciación mucho más concreta de la verdad que se esconde tras la fórmula de la seguridad nacional, expresaron recientemente (Exigencias cristianas de un orden político, Reunión de Itaici, del 8 al 18 de febrero de 1977):

“La seguridad, como bien de una nación, es incompatible con una permanente inseguridad del pueblo. Esta se configura con las medidas arbitrarias de represión sin posibilidad de defensa, con detenciones compulsivas, con desaparecimientos inexplicables, con actos de violencia practicados mediante la valentía fácil del terrorismo clandestino, en una impunidad frecuente y casi total.”

La iglesia se mueve a menudo en una línea incierta y ambigua, como reflejo más o menos fiel de los inestables equilibrios internos entre sus alas moderada y progresista, y del temor a una ruptura irreparable con el poder en beneficio de las ramas cristianas disidentes, que han mostrado una generalizada docilidad frente a las dictaduras. La Iglesia Católica, condicionada por su antigua integración al sistema tradicional, debe ahora hacer frente a una realidad que apenas deja espacio para el compromiso. Su credibilidad de hoy –y, sobre todo, la de mañana– depende estrictamente del grado en que acepte el riesgo de confundirse con las angustias y sufrimientos populares. El dilema es lúcidamente percibido en un reciente documento de la Conferencia Episcopal de Chile (Evaluación de la Realidad, de monseñor Bernardino Piñeira, en *La iglesia en Chile hoy*). Ahí se reconoce que la iglesia ha ganado credibilidad entre los obreros y campesinos, en la pequeña clase media y en la juventud, y, en cambio, “haber perdido la confianza de los elementos más acomodados; o más conservadores del orden establecido.”

El mismo documento, que seguimos con algún detenimiento por la claridad con que aborda diversos aspectos del problema que nos preocupa, individualiza algunos puntos de fricción con la junta militar cuando expresa:

“Tres años de un capitalismo que creíamos cosa del pasado, nos han recordado la existencia de otro ateísmo práctico, si no teórico, en el otro extremo del espectro ideológico.

A nivel universitario la situación es compleja. Las universidades católicas están intervenidas también en el plano intelectual y espiritual. El catolicismo que puede desarrollarse en ellas tiene que ser de corte tradicional y derechista, y aparece como oficializado.

Pero no cabe duda que la palabra (liberación) ha despertado en la iglesia latinoamericana un dinamismo que se ha estrellado en los últimos años, primero contra sectores de la iglesia y luego contra los gobiernos militares.”

Finalmente, el autor brega por una posición consecuente en la solidaridad con los pobres y perseguidos, por encima de los maltratos y de los riesgos, como la vía necesaria para extender la influencia cristiana, "siempre –añade– que ésta parezca al pueblo como sustitutiva más que antagónica (a la influencia marxista)". En el mismo orden de ideas, pone en guardia a los obispos con respecto al estado de ánimo "tímido, humilde, resignado", que imprime a cierta gente el desamparo y la pobreza, y la induce a buscar en las iglesias un refugio devolviéndole de este modo "a la religión su discutido papel de opio del pueblo".

En las conclusiones de la misma reunión de estudio se pueden encontrar expresiones aún más explícitas del antagonismo latente en el análisis. "Incluso –se puede leer ahí– entre los industriales, entre gente de derecha, que está sufriendo la crisis económica en el cierre de sus inversiones y fuentes de trabajo, también aumenta la crítica y el descontento. Estos también entienden ahora la posición de la iglesia y se sienten atraídos por ella".

Por desgracia, no todas las manifestaciones católicas son igualmente valerosas. Cuentan los diarios de Santiago que el cardenal Silva Henríquez, al hablar el primero de agosto en un homenaje al fundador de la Fundación Cardijn, habría dicho: "La iglesia está combatiendo contra dos regímenes intrínsecamente perversos, ambos ateos: es ateo el marxismo y es atea la economía liberal extremada, porque no cree que el hombre es hijo de Dios". Parangón imperdonable en un dignatario que ha dirigido la iglesia en los últimos años, bajo el gobierno de Allende y bajo la dictadura de Pinochet. Bajo la administración del primero, ni la iglesia ni sus pastores sufrieron jamás un atropello; bajo la Junta, al menos dos sacerdotes fueron asesinados por fuerzas militares y más de un centenar debió de abandonar el país, expulsados por la dictadura. Por lo demás, si bien la economía liberal, está haciendo silenciosos estragos en la población chilena, son los tenebrosos y conocidos crímenes de la policía política los que exigen una condenación del máximo conductor cristiano.

Recientemente se ha desarrollado en Chile una polémica alrededor del control de la natalidad, que ha tenido como protagonistas al ministro de Salud de la Junta y al presbítero José Miguel Ibáñez, poeta y conocido ideólogo del Opus Dei. La disputa, prontamente sumergida en el silencio, tuvo el mérito de exhibir en toda su crudeza la orientación del gobierno militar en materia demográfica, como también la hondura de ciertas grietas en un bloque ideológico que acostumbra reclamar inspiración en la moral católica.

La discusión se generó en una denuncia de Ibáñez, respaldada después por numerosos pronunciamientos de entidades religiosas, acerca de la sistemática práctica de la esterilización en las mujeres que debían acudir a los servicios del Ministerio de Salud. Administrativamente, el asunto pareció resuelto con la solemne afirmación de las autoridades en el sentido de que tal tratamiento era

aconsejable sólo en casos específicos, por razones puramente médicas y realizados siempre con el consentimiento explícito de las pacientes. Si bien desde el punto de vista formal, las inquietudes eclesásticas y del mundo católico parecieron encontrar una respuesta satisfactoria, el episodio reveló un problema de dimensiones mayores, que se refiere a la entera política demográfica de la Junta chilena. Una cuestión que no puede ser indiferente a la iglesia ni a sus pastores, ni menos, por supuesto, a los partidos de la izquierda.

Según las expresiones del Ministro de Salud, Fernando Matthei, General de Aviación y piloto de guerra de refinada sensibilidad musical (como podemos leer en el número 2187 de la revista *Ercilla* de Santiago), los esfuerzos gubernativos encaminados a limitar el crecimiento de la población chilena obedecerían al propósito de mejorar su calidad “mediante una distribución más justa del trabajo” (que permitiera mantener en actividad incluso a los mayores de sesenta años), porque “desde el punto de vista del poder nacional, la población de un país interesa en cuanto a su calidad y no a su cantidad. La calidad –agrega– proviene de la alimentación, educación, formación del individuo. En ese sentido, nuestra calidad ha ido de día en día disminuyendo”. Añade después algunas comprobaciones para sostener sus tesis: “piense en algunas cosas que le voy a decir. Hay en la actualidad 221 mil niños en la extrema pobreza, lo que significa desnutridos; dieciséis de cada cien terminan secundaria; el 80 por ciento de ellos no alcanza a un coeficiente intelectual de noventa. Ese niño no es un factor de poder sino un lastre. Es inútil, militarmente hablando.”

Si estas inhumanas confesiones no envolvieran una terrible tragedia nacional, que induce a reflexiones más responsables, nos limitaríamos a señalar su propio contenido como una prueba aterradora de la decadencia intelectual, si no de los chilenos, al menos de sus gobernadores. También de su crisis moral. Pero el autor de tales declaraciones no es más que un general alzado, un hombre de guerra que concibe la salud no como un estímulo para la vida sino como un requisito para la muerte. Conocedor, además, de los estragos de la administración militar sobre la salud física y mental de sus compatriotas, no encuentra mejor respuesta a la cesantía, el hambre, al éxodo masivo, que una teorización autojustificatoria basada en la jibarización demográfica del país. No es el trabajo el que falta, ni las escuelas, ni el pan, ni los hospitales, ni la vivienda: el problema es que sobran chilenos. Hay demasiados ociosos, demasiados analfabetos, demasiados hambrientos, demasiados enfermos, demasiados pobres. Militarmente inútiles, en suma, y por tanto, indeseables para todos. El remedio sería entonces disminuir las tasas de natalidad, inducir a las mujeres –con buenas o malas artes– a la esterilización, lograr que Chile –con más de 750 mil kilómetros cuadrados– no pase de quince millones de habitantes en el año 2000. Un plan

sinistro, antinacional, una suerte de genocidio preventivo que se levanta como un desafío frente a la conciencia cristiana.

Del mismo modo en que la represión militar ha golpeado de preferencia a la clase obrera en el doble plano social y político, es ella también el centro de la resistencia y el núcleo central de la batalla contra la dictadura. Su capacidad para rehacerse, para presentar al pueblo una plataforma de lucha que interprete los anhelos de la nación entera y su diario combate contra la opresión en todas sus formas, serán las claves del retorno a la libertad. Después de todo, la tarea histórica de la junta militar ha consistido en someter a sangre y fuego a los trabajadores para ofrecer a los inversionistas criollos y extranjeros una mano de obra eficiente y barata, de modo que todo el modelo económico se vuelve impracticable en la misma medida en que la clase obrera recupera espacio y fuerza en sus luchas. Pero no es de este aspecto general del que quiero hablar sino de las circunstancias particulares y nuevas, ante todo de aquéllas que imponen un vuelco profundo a la tradición sindical para adecuarla a los cambios producidos bajo la dominación militar. Fundamentalmente, ellas nacen de la desocupación masiva, de la emigración y del hambre. Algunos de esos fenómenos se dan únicamente en ciertos países, o en unos y otros en medidas muy diferentes, pero sus conexiones íntimas constituyen un grande y único problema continental.

La cesantía se originó primero por la expulsión de los profesionales y empleados más cercanos a los centros de poder ocupados ahora por los militares (administración pública, enseñanza, periodismo, universidades), quienes inician la búsqueda del trabajo y seguridad en los países vecinos. Cuando la tiranía y la arbitrariedad alcanzan también a la nación en que han logrado refugio, el éxodo se transforma en una fuga a veces desesperada hacia todos los horizontes. Por último, la represión coordinada en escala continental hace que la América del Sur, meta tradicional de las grandes corrientes migratorias europeas, se transforme en una exportadora inagotable de médicos, escritores, artistas, investigadores y estudiantes, etc., que se pueden encontrar hoy en los puntos más distantes del globo, desde Australia hasta Alaska, desde México hasta Mozambique. Por el número y la calidad de los integrantes de esta primera ola migratoria, como por el hecho de su ulterior dispersión, ella plantea más bien problemas culturales que sociales o demográficos y por ello no me detendré aquí.

Vino enseguida una segunda oleada de emigrados, de menor calificación profesional o constituida simplemente por trabajadores sin oficio y por braceros, desde aquellos países donde la política militar, en su obra de recolonización del continente, ha llevado la producción a niveles precarísimos, como en Uruguay, Paraguay Chile. Argentina ha conocido un flujo parecido pero, sea por su continuidad con los países más afectados por la depresión económica, o por la escasa densidad de su población y las oportunidades de ocupación que parece ofre-

cer su aparato productivo, ha sido también el punto de destino de un gran número de trabajadores desarraigados.

En términos numéricos el fenómeno en su conjunto no admite comparación con el pasado. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en América Latina (Robert Müller, Octava Reunión de Organismos Católicos de Migración del Cono Sur: Santiago, 13-17 de junio de 1977): "Desde hace más de cinco años, América Latina ha dejado de ser un continente de inmigración. Ahora más bien exporta a sus hijos". Los cálculos más moderados señalan la presencia en Argentina de una cantidad de 500 a 700 mil chilenos, 600 mil paraguayos y unos 300 mil uruguayos. En la reunión citada de Santiago, el director de INCAMI (Instituto Católico para las Migraciones) declaraba que en la actualidad más de un millón de chilenos vive fuera de las fronteras del país. Una cifra aproximadamente igual al 20 por ciento de la población total (10 millones de habitantes), que lleva a Chile a disputar con Italia y España los primeros lugares del mundo en las tablas de emigración. Realmente increíble, si se piensa que Italia tiene 185 habitantes por kilómetro cuadrado y España 67, en tanto Chile apenas alcanza a 13 habitantes por kilómetro cuadrado.

Numerosas cuestiones surgen de la situación descrita, pero me limitaré a enumerar aquellas que juzgo principales en una perspectiva política:

- La necesidad de inscribir en la plataforma de lucha del movimiento popular la recuperación de este enorme potencial humano, de manera que el abandono del suelo patrio sea siempre una opción libre y no la consecuencia irremediable de una situación compulsiva.
- La necesidad de promover un tipo de economía que tenga como uno de sus fines capitales la creación de nuevos puestos de trabajo.
- La necesidad de incorporar plenamente a las luchas obreras del país receptor al trabajador inmigrado, bregando simultáneamente por legalizar su actividad y su presencia, por impedir el trabajo negro, y por erradicar la xenofobia y el racismo en el seno del movimiento popular.

No se puede ignorar tampoco que el trabajador marginal, transformado en paria en suelo extranjero, está potencialmente condicionado para ser ganado por empresas políticas absolutamente extrañas a su real interés de clase. El ensamble del movimiento obrero organizado (aún clandestinamente) con los sectores marginales, con las minorías extranjeras, con los problemas que surgen tanto de la carencia de libertades como de la despiadada política económica desarrollada por las clases dominantes, resulta indispensable. Así como la necesidad de desplegar una vigorosa acción con respecto a los desocupados, a fin de evitar que sus apremios sean utilizados para degradar su conciencia de clase. Tampoco es este un asunto de importancia subalterna. Por desgracia, el hambre en América Latina no es un hecho episódico o local sino un rasgo crista-

lizado del subdesarrollo, agravado ahora por una gestión gubernativa absolutamente subordinada al interés de las corporaciones multinacionales. Existe en el nordeste brasileño y en los suburbios de Santiago, en las minas bolivianas y en los puertos del Pacífico. Ni siquiera la prensa más incondicional del nuevo orden puede ignorarlo. Así, El Mercurio de Santiago, ha abierto sus páginas a un erudito que nos informa, a través de las palabras del subsecretario de Economía, coronel Sergio Pérez: “que (en Chile) hay veinticinco personas de cada cien que están dentro de la extrema pobreza. Porque –agrega, para ilustración de los satisfechos– hay diferentes tipos de pobreza: pobres absolutos y pobres relativos. Esos veinticinco no tienen los medios suficientes ni para alimentarse, ni para vestirse, ni para tener techo. Y mucho menos tienen acceso a otros aspectos sociales, como son la educación, etc.”

Son todas situaciones que exigen al movimiento obrero, a los trabajadores que disponen aún de la capacidad de presionar desde el frente de la producción, una atención particular hacia las masas pauperizadas, hacia ese enorme ejército proletario de reserva que habrá de tener una importancia decisiva en el combate por la restauración democrática.

En el período que siguió a los golpes militares nos inclinamos a suponer que, pese a sus precarios soportes civiles, los nuevos regímenes contaban con una gran consistencia orgánica e ideológica, derivada principalmente de la natural cohesión del partido militar y del resuelto apoyo de los centros más poderosos del capitalismo internacional. En el caso del Brasil, una sostenida expansión económica agregó prestigio al experimento, aunque el milagro se lograra gracias a una amplia desnacionalización de vitales sectores económicos y al empobrecimiento aún mayor de extensas capas sociales y de dilatadas regiones del territorio. Hoy, sin embargo, la hegemonía militar muestra los primeros síntomas de agotamiento. El balance de la precursora experiencia brasileña es incuestionablemente negativo: el gigantesco país sudamericano es actualmente uno de los más endeudados del mundo, las instituciones, laboriosamente edificadas para ocultar la sustancia tiránica del sistema, se vuelven contra la dictadura, crecen las sospechas y las resistencias de los países aledaños frente a los designios geopolíticos del gran vecino. En Argentina, internamente dividido y frustrado, el ejército encara una crisis económica sin precedentes, abrumado aún por sus fracasos anteriores y buscando en la represión salvaje una manera de cancelar el peso social de una potente clase obrera, por supuesto, sin conseguirlo. Banzer, en Bolivia, comienza a perder las esperanzas de hacer de la reconquista del mar un punto de partida para legitimar su dictadura. Pinochet mismo inventa plazos y pretextos para alejar el día en que tenga que dar cuenta de sus crímenes, sin poder escapar de una impresionante parálisis de la vida nacional en todos los niveles y en todos los campos. La propia prensa oficial se

ve forzada a reconocer con alarma “que durante los últimos años la inversión realizada escasamente debe haber permitido reponer el desgaste del stock de capital existente a comienzos de la década de los años setenta” (El Mercurio, Informe Económico, septiembre de 1977). Aún en Perú y Ecuador, donde los gobiernos militares asumen inicialmente un carácter distinto, las luchas de fracción, la ebullición social en las ciudades y en el campo, la incapacidad de lograr cualquier progreso material significativo, los llevan a programar un apresurado retorno a la democracia representativa. Y es precisamente en estos momentos de reflujo que se agrega la campaña moralista de Carter en favor de los derechos humanos.

Cualquier pronóstico sobre el porvenir sería aventurado y prematuro, en todo caso, es un hecho que las fuerzas armadas cumplieron en su hora con la sucia tarea de decapitar el movimiento obrero, destruir las organizaciones democráticas, sofocar la cultura y detener transitoriamente la lucha de liberación de los pueblos. Sería legítimo afirmar, no obstante, que si se esperaba institucionalizar perdurablemente tal hegemonía en los moldes de un neofascismo americano, con un mínimo de apoyo social y una cierta capacidad de modernización de la vieja sociedad, aunque ello se lograra al precio de la parcial enajenación de la soberanía y del patrimonio nacional, ese proyecto está ya irremediamente fracasado. Sí, en cambio, la intervención militar fue únicamente la respuesta de emergencia del sistema a una situación de peligro, debemos esperar que sus efectos se proyecten mucho más allá de la etapa en que el poder es administrado directamente por las fuerzas armadas. Se pondrán en marcha nuevas y más complejas fórmulas de gobierno, destinadas todas a contener las luchas populares y a bloquear cualquier avance hacia el socialismo.

En esta perspectiva, las fuerzas de izquierda no podrán escapar a un dilema ineludible: deberán decidirse por conducir una lucha limitada al objetivo táctico de derrocar la dictadura, con la ilusión de ganar tiempo y aliados, o por una batalla de largo aliento, alrededor de un proyecto político que persiga una democracia real, abierta a una eventual transición al socialismo, basada en la voluntad del pueblo. A primera vista, el realismo y el buen sentido deberían inclinarnos a la primera opción, posponiendo toda exigencia de principio, toda discusión sobre el futuro, toda disputa estratégica, en beneficio de la tarea inmediata, urgente, prioritaria, de sacarnos de encima la dictadura. Hay muchos y variados factores que presionan en el sentido de normalizar un sistema político que va resultando intolerable para la comunidad internacional y por cuyo sostenimiento hasta el gobierno de Washington está pagando un alto precio político. Toda la prédica de Carter sobre los derechos humanos, sea dirigida a restablecer la confianza moral de sus conciudadanos en la rectitud de sus gobernantes o a justificar las presiones sobre la Unión Soviética y los países del este europeo,

pierde eficacia y poder persuasivo ante la persistencia de las dictaduras del sur, instaladas bajo la protección norteamericana. De ahí que la Casa Blanca busque soluciones menos incómodas. En una línea semejante se empeñan diversas agrupaciones políticas, como la Democracia Cristiana chilena y el Movimiento Nacional Revolucionario boliviano, que promovieron la intervención militar y hasta colaboraron inicialmente con los golpistas, para descubrir después que destruir el movimiento popular sin aniquilar la democracia es una tarea imposible. El problema reside en que esas fuerzas, o al menos sus núcleos dirigentes, no ocultan sus propósitos de desmontar apenas el decorado exterior de la dictadura, sus mecanismos más visibles pero menos esenciales, conservando en cambio su naturaleza autoritaria y su hermetismo de clase. Buscan un tipo de pseudodemocracia, en suma capaz de bloquear cualquier tentativa de transformar la sociedad capitalista o de romper la dependencia, basada en un nuevo bloque sociopolítico de dominación y en una suerte de tutelaje institucionalizado de las fuerzas armadas sobre el ordenamiento jurídico. Un régimen, por tanto, donde el golpe no sería ya la interrupción de la legalidad mediante el brutal empleo de las armas sino un procedimiento consentido de control militar sobre la vida política del país.

No es entonces indiferente lo que vendrá después de la dictadura, ni es un asunto del cual se pueda prescindir en los momentos de buscar aliados o de diseñar un programa. Tenemos por delante un combate largo y difícil, en cuyo curso deberemos explotar cuidadosamente cada debilidad del enemigo, cada brecha abierta en sus filas, cada paso en falso, cada crisis, y a la identificación de algunos de estos factores he consagrado esta disertación. Pero, por supuesto, el vigor y la eficacia de nuestro asalto depende también de la perspectiva en que nos movemos. Sin una visión de conjunto, sin una concepción global de la democracia que busquemos, la victoria se hace difícil, si no imposible.

PROPOSICIONES PARA UNA REORGANIZACION ANTIFASCISTA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Informe para la Comisión de Estudios
de la nueva institucionalidad
Roma, Italia, 18 de septiembre de 1977

CONSIDERACIONES PREVIAS

Las proposiciones que siguen se formulan con clara conciencia de sus limitaciones teóricas y prácticas. Las primeras resultan de la falta de juicios definitivos sobre la naturaleza y la función del Estado tradicional en las naciones capitalistas de la periferia, sobre la posibilidad histórica de ser “ocupado” por fuerzas sociales que utilicen algunos de sus mecanismos compulsivos para sustituir las relaciones de producción preexistentes (y no para perpetuarlas, como sería su rol natural) y, en fin, –para no citar sino algunas cuestiones fundamentales, apenas aludidas por el debate en curso en la emigración chilena– sobre el grado en que un “Estado Antiimperialista” (no encuentro denominación más apropiada) puede ser la realización de una forma particular del Estado nacional, bajo la dirección de los trabajadores, en aquellas áreas del mundo donde la burguesía hizo de él un eslabón de la dependencia, en lugar de una estructura política destinada a promover un desarrollo capitalista autónomo.

Las limitaciones prácticas son más obvias aún: al iniciarse el quinto año de la dictadura, no hay indicios de la forma en que irá a terminar. Ni siquiera conocemos una estrategia suficientemente explícita y unitaria de las fuerzas de izquierda que nos permitiera trabajar en base a hipótesis relativamente sólidas, sostenidas al menos por la voluntad política de llevarlas a la realidad. Por todo esto, mis proposiciones se apoyan en dos premisas bastante frágiles y genéricas: la primera consiste en suponer que las Fuerzas Armadas han dejado de ser un factor determinante en los acontecimientos chilenos (por causas que no cabe analizar aquí); la segunda, en que el poder, en la etapa sucesiva al derrocamiento de la Junta, será ejercido por una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas, de manera que, por algún tiempo, ninguna clase ni sector estará en condiciones de establecer su propia hegemonía.

Dentro y fuera de Chile existe, sin duda, un proceso generalizado de revalorización de la democracia y de la libertad. No podía esperarse otra cosa después de la terrible experiencia de la dictadura. Detrás, sin embargo, de la aparente unanimidad (importantísima en el momento agitativo) se diseñan dos líneas diversas de reflexión política (decisivas en el momento de proponerse un programa). Si bien ambas parten de la base que ha sido la opción socialista del gobierno de la Unidad Popular la que desencadenó al golpe (en cuanto el imperialismo y las clases dominantes sólo aceptarían el juego democrático en el ámbito del capitalismo), una y otra responden de distinta manera al problema de una restauración democrática. Para una de esas corrientes, el precio del retorno a la libertad sería la renuncia a todo proyecto socialista; para la otra, en cambio, el único modo posible de restablecer plenamente los valores democráticos reside en la radical sustitución del modo de producción vigente.

El tema podría dar lugar a una extensa discusión, pero me anticipo a pensar que la primera tesis no puede encontrar apoyo serio en el interior de la Unidad Popular. Una tal renuncia consagraría en la práctica la victoria de los golpistas mucho más allá de su temporal control del poder. La clase obrera, por lo demás, con o sin la autorización de sus actuales representantes, seguiría bregando por su propio proyecto histórico.

Estas proposiciones se colocan, entonces, en la perspectiva de un régimen democrático abierto a la transición al socialismo. Hasta donde puede garantizarlo el mero ordenamiento político-jurídico, recomiendan orientaciones, medidas y estructuras que impidan utilizar a las Fuerzas Armadas como factor de intimidación, como formación represiva, como grupo de presión al servicio de intereses extranjeros o, en el caso extremo, como superpoder de facto situado por encima de la soberanía popular, pero, al mismo tiempo, tienden a reforzar su capacidad militar para hacer frente a un ataque exterior. Un sistema, en suma, que asegure la neutralidad del aparato militar cuando, por sus propios mecanismos de decisión, la democracia resuelve sustituir el orden socio-económico capitalista.

Este memorándum no pretende ser un proyecto orgánico para el sector militar; se limita a ciertos aspectos claves de la organización y el funcionamiento de los institutos armados en sus relaciones con el sistema político. Un plan global de defensa necesitaría abarcar áreas y actividades tan ajenas al aparato castrense como la política demográfica, el despliegue territorial de ciertos núcleos industriales, las relaciones exteriores, etc., que corresponden a las más altas instancias de decisión política. Mientras la doctrina de la *seguridad nacional* subordina, teórica y prácticamente, toda la vida de la comunidad a los criterios y objetivos militares (y, en el hecho, a los intereses materiales y políticos que la Junta encarna), una eficiente política de Defensa de inspiración popular viene a ser sólo el complemento de un régimen económicamente dinámico y socialmente justo.

Aunque las proposiciones en general se refieren a todas las ramas de la Defensa nacional (excluido el Cuerpo de Carabineros, que debería volver a ser dependencia del Ministerio del Interior), algunas son particularmente aplicables al ejército de tierra. La FACH y la Marina, en efecto, exigen a su personal un grado de especialización que dificulta su integración con unidades no profesionales e, inclusive, su articulación estrecha con el conjunto de la sociedad. Por tal motivo, la selección rigurosa y la formación democrática de sus oficiales y suboficiales tienen una importancia singular.

FUERZAS ARMADAS NACIONALES

Una primera línea de acción consiste en devolver a las Fuerzas Armadas su carácter nacional, al menos en tres direcciones fundamentales. Sobre éste aspecto hay una gran concordancia de opiniones.

a) En el plano de la doctrina, desahuciando la noción estratégica de la defensa hemisférica como misión esencial de las Fuerzas Armadas. Todos los tratados, convenios y compromisos que la consagran deben ser abrogados. Las Fuerzas Armadas tienen deberes de lealtad únicamente con el Estado de Chile, con sus autoridades democráticas y con su pueblo.

b) En el plano del aprovisionamiento de armas y equipos, buscando fuentes múltiples y alternativas de elementos bélicos, comenzando por producir en el país aquellos compatibles con nuestros niveles tecnológicos. Se trata de encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de la estandarización y los graves inconvenientes de la dependencia logística (y política) que resultan de un proveedor dominante o exclusivo.

c) En el plano de la formación profesional, recurriendo a la instrucción superior de oficiales y suboficiales en países desprovistos de ambiciones hegemónicas, que compartan con el nuestro algunas características geográficas, económicas, demográficas o culturales, etc. y hayan acumulado una amplia y moderna experiencia militar.

FUERZAS ARMADAS DEMOCRÁTICAS

Desde comienzos del siglo ha prevalecido la tendencia de hacer de las Fuerzas Armadas un Estado dentro del Estado, es decir, a olvidar sus funciones específicas y limitadas para transformarlas en un sistema polivalente, apto para dirigir, controlar o sustituir –con medios propios y paralelos– los servicios vitales del Estado. No sólo cuentan con sus propias instalaciones hospitalarias, con sus

propios sistemas de comunicaciones y transporte, con su propia legislación penal y sus propios tribunales, sino que hasta los servicios religiosos castrenses han demostrado una increíble autonomía frente a las autoridades eclesiásticas regulares, mientras los órganos de inteligencia han operado como centros de espionaje político, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, tanto de los simples ciudadanos como de los mismos gobernantes. Ninguna hipótesis de guerra justifica una tan desmesurada duplicación, dado que en caso de conflicto toda la infraestructura civil pasa a constituirse en apoyo natural del esfuerzo bélico.

Simultáneamente se ha estimulado el aislamiento corporativo y una mentalidad elitista de signo autoritario, para segregar al sector militar del conjunto de la sociedad. El oficial, principalmente, es inducido a repartir su vida entre el cuartel, el casino y la población militar, a buscar esposa en las familias militares, a encaminar a sus descendientes hacia la carrera de las armas. Con la parcial excepción de los mandos supremos, se da por cierto que el mecanismo natural de ascenso es el de la cooptación. En el terreno cultural, la lectura de cualquier texto crítico del orden vigente constituye una licencia peligrosa, y la inmersión en la vida universitaria un síntoma de debilidad vocacional. En tales condiciones, las Fuerzas Armadas se aproximan más a las características de una congregación cerrada que a las de un servicio del Estado.

Para corregirlo, en algunos documentos llegados a la Comisión de la U.P. se propone la integración del aparato militar en la nación y en el Estado a través de la presencia de “personeros” o “representantes” de las Fuerzas Armadas en todos los órganos y servicios públicos o semipúblicos que tienen relación (a veces bastante remota) con los asuntos de la Defensa. Se espera así asociar las Fuerzas Armadas a los intereses y aspiraciones fundamentales del país. Tal conexión institucional, sin embargo, más bien fortalece el espíritu corporativo y lo proyecta como una voluntad autónoma y sectorial sobre todo el cuerpo de la sociedad, en tanto la superposición de criterios estrechamente castrenses distorsiona a menudo las actividades ajenas a la esfera militar. Un camino, en suma, que conduce a depositar en los mandos de las Fuerzas Armadas un núcleo de poder político potencialmente antagónico al poder civil.

Con fines parecidos, en los mismos documentos se propone una amplia participación de las Fuerzas Armadas en los programas de desarrollo (sanitarios, educacionales, de obras públicas y comunicaciones, de regadío, etc.). Se supone que un contacto directo con los problemas reales de la población debe llevar a los militares a una mejor comprensión de la tarea de gobernar, así como de la estrecha vinculación existente entre las condiciones socio-políticas de un país determinado y su capacidad de defensa militar.

A mi modo de ver, tal vía para romper la segregación entre sociedad y ejército es errónea; concede a los servicios armados un poder extrainstitucional y tiende

a presentarlos como una organización que ejecuta por altruismo aquello que los servicios normales hacen por dinero.

La integración indispensable habría que promoverla en una dirección inversa, esto es, no facilitando la injerencia castrense y su propagación en la sociedad y el Estado a partir de las instituciones militares (mientras éstas conservan sus viejas tendencias a la autarquía y el hermetismo), sino fundiendo el aparato armado de la nación en el tejido de la sociedad y asignándole únicamente aquellas tareas específicas inseparables de su naturaleza militar. Sólo como excepción, para ocupar hombres y recursos que de otro modo permanecerían ociosos, deberían entregarse tareas del orden civil a las Fuerzas Armadas. En otras palabras, la democratización de las Fuerzas Armadas consiste en hacerlas permeables a los problemas del país, en estimular la convivencia de ciudadanos y soldados, en suprimir todo lo que signifique fueros especiales para los hombres de armas, que no sean requisitos del servicio, así como las limitaciones a sus derechos que no obedezcan a idénticas razones.

Algunas de las principales medidas para modificar la situación vigente a la fecha del golpe, deberían consistir:

a) *Carrera militar.*- Servicio militar no discriminatorio. Rigurosa selección de postulantes a las Escuelas militares, suprimiendo preferencias, privilegios y obstáculos económicos. Formación profesional en planteles propios y formación científico-técnica en los centros universitarios comunes. Intervención de las autoridades educacionales del Estado en la elaboración de los programas de estudio y en la designación de los profesores de los institutos militares. Garantías para el personal de todos los grados en los procedimientos anuales de calificación. Evaluación cívico-militar de los ascensos de los oficiales superiores por parte de la Asamblea Legislativa.

b) *Disciplina y Justicia.*- Máxima restricción del campo de la jurisdicción militar, tanto en relación a los delitos como a los inculpados. Tribunales colegiados para tiempos de paz. Integración obligatoria del Tribunal con un militar del mismo grado del inculpadado. Estricta reglamentación de las sanciones administrativas; eliminación de aquellas que ofenden la dignidad del castigado; derecho a reclamar a una instancia superior. Revisión y reforma de la legislación y los mecanismos judiciales de tiempo de guerra.

c) *Derechos individuales y cultura.*- Derecho a voto de todos los militares que cumplan la edad constitucional. Libre circulación en los cuarteles de libros y revistas. Libertad de opciones religiosas y facilidades para el ejercicio de todos los cultos en términos compatibles con el servicio. Supresión de los capellanes militares. Creación de un Servicio de Formación Cívica, particularmente para los conscriptos y cuadro permanente. Libertad de afiliación a entidades sociales, culturales o deportivas que realicen actividades lícitas.

d) *Otras reformas.*- Fusión de los servicios paralelos que no exijan exclusividad con sus congéneres civiles. Unificación de los servicios sanitarios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y coordinación de su actividad con los centros médicos de la ciudad o del sector.

LAS FUERZAS ARMADAS EN EL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

Hasta aquí, las proposiciones precedentes calzan en su totalidad con sugerencias que se repiten con más o menos énfasis y detallan en varios documentos de trabajo que he tenido a la vista: ruptura con vínculos militares de corte colonial, reforzamiento de los lazos de subordinación al poder civil e integración del sector militar en la sociedad y en el Estado, eliminación –por último– de las prácticas corporativas y de la mentalidad de casta, todo en un contexto de renovación democrática. En suma, un conjunto de medidas de relativa eficacia para conjurar eventuales incursiones militares que interfieran las decisiones soberanas del pueblo, pero insuficientes en tanto el aparato militar se reserve el monopolio de las armas y constituya un cuerpo semi independiente, articulado por una forma de obediencia que, en esencia, es la negación de la democracia.

Estas consideraciones, y otras relacionadas con las características geo-estratégicas de Chile, con la naturaleza de los obstáculos exteriores que encontrará un gobierno antifascista y con la exigencia de compatibilizar la seguridad de nuestras fronteras con una avanzada política de desarrollo económico y social, dan nueva actualidad a la formulación de un sistema de Defensa que se apoye orgánicamente en el pueblo mismo.

Las premisas que justifican una nueva estructura del dispositivo de defensa se pueden resumir así:

a) La excepcional conformación geo-estratégica del país, de confines terrestres y marítimos desmesurados en relación con su superficie, y caracterizada, además, por accidentes físicos que interrumpen la continuidad del territorio, dificultando al despliegue de sus recursos militares desde el centro económico, demográfico y administrativo de la nación.

b) Las previsibles tensiones políticas con los estados contiguos, derivadas de la reconquista chilena de un régimen de democracia avanzada antes que el Cono Sur alcance un nivel análogo de evolución política. Debe darse por seguro que el imperialismo aprovechará tal circunstancia para irritar todos los focos tradicionales de fricción y rivalidad.

c) La necesidad de hacer económicamente compatibles la protección de la soberanía y del territorio con un programa social de orientación popular. Por alto que fuese el grado de conciencia de la población, ella no podría soportar la

prolongación indefinida de las penurias materiales impuestas por la dictadura. Aún en términos de potencial militar, será urgente reparar el terrible deterioro sufrido por los chilenos en el campo de la alimentación, la salud y la educación.

d) La necesidad de crear una fuerza alternativa de Defensa para compensar el inevitable debilitamiento del sector militar-profesional. El ejercicio de la dictadura y su fracaso acarrearán consecuencias profundas en la moral de las Fuerzas Armadas, en su cohesión interior, en la calidad de sus cuadros, en sus relaciones con la población, mientras será indispensable mantener un poderío militar suficiente para disuadir eventuales agresores.

La noción de una defensa popular generalizada (en Yugoslavia la han llamado Defensa Popular Total) se inspira en las experiencias militares revolucionarias y en las luchas de liberación de las últimas décadas, pero no existe ninguna razón fundamental que impida adaptarla a los requerimientos de un país que emerge de un largo período de dictadura fascista, impuesta por la fuerza de las armas de su propio ejército, y que busca un régimen democrático libre de la hipoteca militar.

Orgánicamente, la defensa popular consiste en un dispositivo que integra todas las fuerzas aptas del país en un sistema unificado de resistencia armada, de modo que el agresor eventual debe enfrentarse con los elementos que la constituyen en todas las líneas de su ataque. El carácter singular de la defensa popular total lleva a considerar a todo el mundo en condiciones de servir militarmente en una emergencia bélica, compartiendo ese deber con los requerimientos de la producción, y proporciona también la pauta para disponer de una fuerte posición militar sin comprometer una cuota excesiva de recursos financieros.

La organización de la defensa popular descansa básicamente en tres escalones (según los expertos yugoslavos y vietnamitas):

a) *El ejército regular, operacional o de línea.*- Las tropas regulares tienen la misión de hacer la guerra de movimiento en un amplio teatro de operaciones, para aniquilar las fuerzas vitales del enemigo. Las condiciones de guerra modernas hacen imprescindible la presencia de un escalón de fuerzas profesionales para enfrentar al desafío y resistir el impacto de ejércitos bien equipados y provistos de la técnica más avanzada. La calidad, el equipo y el adiestramiento de esa fuerza debe constituir una preocupación básica, pero su capacidad estratégica, operacional y de combate se multiplica en la medida en que forme parte integrante de un dispositivo mayor, constituido por las unidades territoriales, guerrilleras y de autodefensa.

b) *Las fuerzas territoriales.*- Las tropas territoriales son también formaciones de combate, pero destinadas a operar en áreas más circunscritas y bajo las órdenes de comandos regionales descentralizados, salvo que por hallarse en zonas de operaciones o en las líneas de avance de las fuerzas adversarias par-

ticipen en la acción principal, plenamente incorporadas a las fuerzas regulares. En tal caso, luchan en estrecha coordinación con las unidades del ejército para cercenar el poder de choque del agresor.

En la retaguardia, las unidades territoriales tienen la misión de proteger el terreno de las incursiones enemigas, garantizando el orden así como la seguridad de las personas y de los bienes materiales. Si un profundo avance enemigo o la fragmentación del territorio las dejan a la espalda del adversario su deber consiste en adoptar la organización y las tácticas de la guerra irregular, para golpearlo sin tregua, asumiendo inclusive el mando de las unidades dispersas del ejército operacional.

Se trata, en general, de formaciones de hombres y de mujeres firmemente asentadas en los centros de trabajo (fábricas, minas, establecimientos agropecuarios) y en los núcleos urbanos (ciudades, centros vecinales, barrios, aldeas), creadas por las autoridades y las organizaciones sociales al nivel regional y local. Serán éstas, además, las que proveerán a su adiestramiento y equipo. Sus miembros, que son al mismo tiempo productores y soldados, tienen el deber fundamental de mantener a toda costa la continuidad de la vida económica en la comarca, así como el desenvolvimiento normal del aprovisionamiento y los transportes mientras ello sea posible, pero pasan a integrar al ejército regular cuando esa misión se hace impracticable.

c) *Las formaciones civiles de autodefensa.*- Cumplen tareas amplias y complejas. Integradas por los ciudadanos exentos del servicio en las unidades regulares o territoriales, desarrollan también labores de paz, dirigidas a proteger la población y el patrimonio nacional de los efectos destructivos de los terremotos, inundaciones y otras calamidades naturales y, por supuesto, de las acciones bélicas en su caso. Sus unidades funcionan en la más estrecha vinculación con los órganos comunitarios, políticos y administrativos de base (juntas de vecinos, municipalidades, comités de viviendas colectivas, sindicatos, etc.), y asimismo con los servicios y centros de trabajo de cada localidad para adoptar las medidas de precaución, de seguridad, de salvamento, de ayuda y de evacuación, cuando la situación lo requiera. Tales unidades no están destinadas a luchar y su capacidad de desplazamiento es prácticamente nula.

La filosofía de la propuesta no puede ser más simple: el pueblo será siempre abrumadoramente superior en número a cualquier ocupante. Si éste quiere dominar todo el territorio, dispersará sus fuerzas y será débil en todas partes; si concentra sus fuerzas en algunos puntos, podrá aniquilar allí la resistencia, pero tendrá que abandonar el control de extensos territorios.

OSCAR SCHNAKE Y EUGENIO GONZÁLEZ: NO SÓLO HISTORIA

Octubre de 1977

Se acaban de apagar en Santiago dos vidas notables en la historia de las luchas sociales y en la gestación del socialismo chileno: Oscar Schnake y Eugenio González. Aunque se tome por una exageración retórica o como un juicio dictado por el rencor, digamos que los mató la dictadura: eran dos hombres de profunda vocación libertaria, inhabilitados para sobrevivir en la atmósfera pestilente y enrarecida de la Junta Militar. Nacidos ambos en los comienzos del siglo, formaron parte de una generación, la de los años 20, casi legendaria, cuyo principal campo de acción fue la Universidad. Confluían en el horizonte cultural de ese tiempo los acontecimientos de la guerra reciente y de la revolución de octubre, las influencias en los sindicalistas de la IWW y la poderosa atracción de un movimiento obrero nacional de perfiles cada vez más vigorosos. Sus años no pudieron resistir el desolado espectáculo de un pueblo condenado a desenvolver su existencia bajo los signos de miedo y del hambre, mientras las fronteras de la política y de la cultura se estrechan hasta sofocar las más inocuas manifestaciones intelectuales.

La revolución del 4 de junio de 1932 volvió a encontrarlos juntos, como ministros de la Junta de Gobierno de la República Socialista que reconocía en el coronel Grove a su dirigente más significativo. Su sola presencia allí es una prueba de que esa tentativa escapaba a los moldes tradicionales del pronunciamiento militar y justifica el interés político e histórico del episodio, profundamente singular en sus características esenciales, si se considera el panorama continental en fecha ya tan lejana.

Menos de un año después de los “Doce Días” —exigua duración de la fase revolucionaria del movimiento— Schnake y González forman entre los fundadores del PS chileno; Schnake para desempeñar la Secretaría General y sumergirse en una incansable tarea organizativa, y González, más maestro que político, para aportar su lúcida contribución en los años sucesivos a esa concepción autónoma del marxismo, que caracterizó la personalidad del nuevo partido.

Bajo la dirección de Schnake, el PS comienza por proclamar su independencia frente a la II y a la III Internacionales, tomando definitivamente la distancia con respecto a la socialdemocracia europea. Simultáneamente busca un estilo organizativo y un tipo de disciplina desconocidos en la práctica de los llamados

“partidos históricos”. Al proselitismo clientelar, el caciquismo, a la mera lealtad electoral que tradicionalmente caracterizaban la relación entre los jefes y la masa, opone una concepción nueva, dinámica y limpia, en que el partido es más bien una fraternidad de luchadores: los dirigentes colocados a su cabeza por la voluntad democrática de la base deben ser acatados en la acción, sin vacilaciones ni regateos, como lo exige toda formación destinada al combate. Tampoco cabía en ese modelo el hermetismo conspirativo de inspiración bolchevique. Como instrumento del pueblo, como animador de sus luchas, como fruto legítimo de una conciencia de clase cada vez más madura, el partido debía hundir profundamente sus raíces en la fábrica y en la escuela, en las oficinas y en los fundos. Debía ser el Partido de los Trabajadores.

El desarrollo de la nueva agrupación en esos años se hace realmente arrollador pero no es solamente su crecimiento cuantitativo el que cuenta. Los nuevos contingentes no llegan a enrolarse animados de una abnegación, una firmeza de convicciones y un espíritu de solidaridad que alcanza niveles notables en las actividades más diversas, desde la sacrificada asistencia a las víctimas de un terremoto hasta el enfrentamiento armado con las escuadras de asalto del movimiento nacional-socialista. Mientras tanto, en el interior del partido el debate ideológico se mantiene siempre abierto y los congresos son teatro habitual de apasionadas controversias. Se alcanza, sin embargo, un sensato equilibrio entre el ardor de las polémicas y un severo sentido de la autoridad, factor indispensable en el estilo de un partido que busca en la acción cotidiana la comprobación de su vocación revolucionaria.

Desafortunadamente, la prematura participación en tareas de gobierno, durante el régimen de Frente Popular, interrumpe la maduración de tan original modelo organizativo, apenas ensayado en los años anteriores. Los impulsos innovadores se debilitan, un sentimiento de frustración se propaga en las filas, las disidencias envenenan la vida interna y se inicia una fase de degradación ideológica y de fragmentación orgánica. Casi una década después, en una suerte de refundación, el Partido Socialista Popular intenta alcanzar de nuevo esa ecuación ideal, asentada en la elaboración democrática de la línea común y en una compacta disciplina en el trabajo, pero tampoco esta vez la experiencia será muy larga.

De contornos más duraderos será la preferente importancia asignada al problema de la dominación imperialista. Ya desde la primera Declaración de Principios (1933) la lucha contra la dependencia extranjera pasa a ser un postulado esencial del partido, componente ineludible de su programa político y fundamento de una visión latinoamericana de la empresa. No es, por supuesto, que Schnake descubriera esta dimensión de la realidad chilena; mucho antes que él habían subrayado el peso de la servidumbre imperial sobre las naciones del

continente –desde Mella hasta Haya de la Torre– pero ninguno como él en esos años hizo más por sensibilizar a las masas populares frente a un fenómeno considerado, hasta entonces, adjetivo. Es otro factor que aleja al PS de la social-democracia y de sus diversas proyecciones en tierra americana, mientras conforma el original perfil de su diseño político.

Esta orientación, fundada más bien en la percepción pragmática de la dependencia que en un acucioso análisis teórico del imperialismo, se debilita a medida que se acerca la Segunda Gran Guerra, ante el imperativo de concentrar todas las energías en la derrota del fascismo. Con este objeto había nacido el Frente Popular en 1936 y en ese espíritu se había desarrollado hasta alcanzar la victoria del 38, lo que explica el efecto demoledor del pacto ruso-alemán en las relaciones de los partidos del Frente, y, muy particularmente, en las relaciones de los partidos socialista y comunista. Cuando Schnake, en un discurso pronunciado poco después (y, debemos añadir, sin ser previamente aprobado por la dirección del partido) señaló que este episodio ponía fin a la alianza, no hizo más que verificar un hecho ya irremediamente consumado. En estas circunstancias tiene su origen, sin embargo, la persistente hostilidad del PC frente al hombre que acaba de morir. Schnake tampoco olvidó, y en cierto período de su vida estimuló actitudes anticomunistas que le ganaron muchos reproches en su partido.

Eugenio González, aún perteneciendo a una promoción muy vecina a la de Schnake, solo ocupa un lugar de primer plano en los años 1946-1956, como Secretario General y senador del Partido Socialista Popular.

Su huella, brillantemente señalada en el Programa de 1948, es la de un maestro, la de un teórico, la de un intelectual, aunque jamás rehusó la tarea humilde, en contacto fraterno con militantes y trabajadores.

Esquemáticamente, el programa toma una posición “tercerista” –que será paulatinamente corregida en los años siguientes– pero es, sobre todo, una valerosa tentativa de reforzar la imagen política y la identidad ideológica del Partido, en busca de una creadora aplicación del marxismo a los problemas chilenos. Puede encontrarse allí una precursora enunciación del “policentrismo” (que Togliatti definirá después en su conocida entrevista a “Nuovi Argomenti”) que contemporáneamente inspira la rebelión yugoslava contra la política de bloques y la noción del “partido guía”. Con explicable vaguedad se formula también la tesis del “Frente de Trabajadores” en la medida que por vez primera se reconoce la incapacidad histórica de la burguesía “nacional” para llevar a cabo las tareas de la revolución democrática y la liberación del imperialismo, misión que los trabajadores y su partido de vanguardia deben acometer por cuenta propia, enlazándola orgánicamente con los objetivos socialistas, en un proceso dialéctico y continuo.

Se pone en discusión, por último, la corrección teórica y la utilidad política de la “dictadura del proletariado”, entendida como postulado programático. En primer lugar, por las limitaciones conceptuales que opone –en las condiciones chilenas– a la participación de amplias masas de asalariados difícilmente clasificables en esa categoría, dada la compleja y desigual estructura de una economía en parte precapitalista y en parte dependiente. En seguida, porque la larga tradición democrática burguesa del país y el rol jugado históricamente por el movimiento popular en la conquista y ampliación de las libertades tradicionales daba a la postulación de una dictadura (independientemente de su signo) una connotación regresiva, si no reaccionaria. Por todo ello, restituyéndole su sentido político y socialmente positivo, se reemplaza la denominación de “dictadura del proletariado” (que para algunos de sus seguidores es sólo una expresión técnica de Marx) por la postulación de una “democracia de trabajadores”.

González fue en todo esto un inspirador principal. Su prosa fluida, desnuda de retórica y sin embargo elegante, le agregó al documento un valor formal muy raro en los escritos políticos.

Como tipos humanos, Schnake y González eran, ciertamente, muy diversos. Había incluso, entre ellos, contrastes paradójales. Descendiente de alemanes, el primero era dueño de un temperamento inconfundiblemente latino: apasionado, convincente y efectista como orador, poseía una rara capacidad para incitar a la acción a sus oyentes. Fue, por eso, mucho más que un tribuno excepcional; su palabra fue un milagroso instrumento de organización.

Eugenio González, en cambio, de pura sangre española, fue símbolo de mesura, de discreción. Era el equilibrio lo que atraía en sus discursos, no su agresividad. Una fina sensibilidad humana y un irrefrenable sentido del humor lo salvaron del enclaustramiento académico a que pudieron conducirlo su respeto casi religioso por las ideas y su inquietud intelectual. Por eso quiso compartir plenamente el drama del hombre contemporáneo, prisionero en una sociedad degradada, al mismo tiempo que un certero instinto, a veces burlón, a veces escéptico, le permitía descubrir las indignancias que se ocultan bajo la pedantería y la solemnidad.

Mucho de lo que estos dos hombres pensaron y realizaron, forma parte de nuestra herencia y –sabiéndolo o no– seguirá germinando en nuestro país esclavizado. Se ha dicho tantas veces y continúa siendo verdad: los viejos conductores nunca mueren del todo. Son semilla: se siembran.

INFORMES INTRODUCTORIOS

A LAS REUNIONES PARA CONFIGURAR EL AREA SOCIALISTA.

Los Seminarios de Ariccia

INFORME 1

Razones de la Convergencia

Ariccia, Italia, marzo de 1979

Al comenzar nuestros trabajos parece indispensable explicar algunas modalidades y motivaciones del seminario que se inaugura hoy. En primer lugar, del carácter estrictamente personal de las invitaciones. Entre los propósitos que guiaban la iniciativa del recordado amigo Lelio Basso, ocupaba un lugar principal su preocupación por hacer de esta reunión una oportunidad para el libre intercambio de análisis, críticas e ideas, en lugar de una simple y tal vez estéril confrontación de meras consignas de partido. Las opiniones de los participantes, en consecuencia, sólo comprometen a quienes las emiten, lo que debe facilitar el debate abierto y propicio a la elaboración colectiva de juicios y de propuestas. Para cumplir, además, con este espíritu, la convocatoria señala como un objetivo fundamental la búsqueda de las *convergencias*, rompiendo así – ¡ojalá podamos lograrlo!– la vieja e inveterada tendencia de la izquierda chilena e internacional a exacerbar las diferencias teóricas, los contrastes doctrinarios, las distinciones sutiles, los bizantinismos, en suma, para colocar en el primer plano la necesidad histórica y objetiva de recomponer la unidad del movimiento popular.

AREA SOCIALISTA

Aunque sumariamente, el documento de convocatoria explica también el alcance y los límites del campo que nos proponemos estudiar, esto es, el “área socialista” chilena. Dos son los elementos que se tuvieron en cuenta para fijar los contornos del concepto: el primero consiste en la notoria y persistente bifurcación ideológica del movimiento popular chileno. Por espacio de casi medio siglo conviven en él dos fuertes corrientes: una identificada con lo que podría-

mos llamar al *comunismo histórico*, estrechamente asociada en su gestación y su desarrollo a la revolución rusa y a la orientación global del Estado soviético y de los partidos homólogos; y otra, *socialista*, que busca desde sus orígenes una línea nacional y autónoma. Esta última, por más de treinta años, cristaliza en el Partido Socialista, pero en los últimos lustros conoce múltiples polos de expresión política.

La distinción anotada carece absolutamente de intención peyorativa. Sería ingenuo, por una parte (y diría también que anti-científico), negar la profunda huella que ha dejado la experiencia y el pensamiento soviético en los programas, la estructura, los métodos y el estilo del comunismo internacional, y particularmente en el comunismo latinoamericano, como sería equivocado y profundamente negativo, por otra, debilitar el espíritu de unidad que inspira, desde 1956, la acción y la lucha de la izquierda chilena y que constituye una adquisición histórica de las masas. Aceptar los hechos con todas sus implicancias constituye un valioso punto de partida para una práctica pluralista en la dirección del proceso chileno y de restauración democrática y de transformación revolucionaria y, paralelamente, es una invitación a robustecer ideológica y orgánicamente cada uno de los diferentes elementos que la conforman. La misma circunstancia de surgir en épocas y de procesos independientes ahorra a comunistas y socialistas chilenos las profundas laceraciones que hacen hasta hoy difícil o imposible la convivencia en el ámbito europeo. Mientras aquí la regla general consiste en el nacimiento de los partidos comunistas como consecuencia de la escisión de los partidos de la II Internacional, en nuestro país el Partido comunista se funda diez años antes que el Partido Socialista, en forma que este último –como lo prueba su veloz desarrollo– viene a llenar un vacío político y a movilizar nuevos contingentes sociales y no a rivalizar con propósitos excluyentes.

MOMENTOS CRUCIALES

Sin subestimar, por supuesto, los grandes aportes de otros partidos a las luchas populares –que no son tema de discusión en este seminario– es preciso recordar que al menos en dos momentos cruciales la presencia y la política socialistas han mudado sustancialmente la relación de fuerzas y el curso de la lucha. El primero coincide con la fundación del PS: en 1933 el movimiento popular estaba desarticulado; la dispersión del proletariado salitrero, como consecuencia de la crisis, restaba al PC su principal apoyo de masas, en los mismos momentos en que estallaba la escisión trotskista. La clase obrera en retirada, los campesinos ausentes, la clase media incapaz todavía de formular una política independiente. Los sindicatos fragmentados en diversas centrales de variado

signo ideológico. En la dirección del Estado, un gobierno reaccionario, que junto al aparato represivo tradicional se sostenía en una milicia civil bajo el control de los partidos oligárquicos. En tal clima de reflujó, la aparición del PS galvanizó la conciencia de clase de los trabajadores, estimuló su organización y su voluntad de lucha. En el plano ideológico, la clave del cambio podría encontrarse en lúcida comprensión de que en una estrategia antimperialista debían confluir, integrándose, los objetivos de clase de los trabajadores y los intereses más altos de la nación entera. En el terreno práctico, la unificación sindical y la alianza política de las agrupaciones de izquierda abren paso a la victoria del Frente Popular, sólo cinco años después de la fundación del PS.

El segundo momento está señalado por la profunda tarea de renovación ideológica y de reconstrucción del movimiento popular que cumple el socialismo entre los años 1947 y 1953, bajo la guía del Partido Socialista Popular. Como en la oportunidad anterior, ahora el gobierno de González Videla desata una violenta represión reaccionaria, que esta vez tiene como blanco principal al PS, y que daña y disgrega al conjunto del movimiento obrero, provocando una dura guerra intestina entre los diversos núcleos revolucionarios. Luego de superar difíciles conflictos internos, otra vez el socialismo toma en sus manos el proceso de restauración que logre cristalizar en la fundación de la CUT (1953) y en la suscripción del pacto del FRAP (1956), hechos que inician el ascenso del movimiento de masas de los años sucesivos.

PAPEL DECISIVO

Luego de la terrible derrota de 1973 (y resultaría bastante ocioso detenerse a averiguar si fue táctica o estratégica), y de los cinco años transcurridos desde entonces sin progresos visibles en la lucha contra la dictadura, una nueva ocasión pareciera presentarse para que las fuerzas socialistas jueguen un papel decisivo. Lo ha impedido hasta ahora, a nuestro modesto juicio, la falta de un diálogo riguroso y desapasionado entre las agrupaciones que hunden sus raíces en una tradición relativamente homogénea, y la persistencia de un tipo de relaciones interpartidistas, en el seno de la izquierda, que pareciera ignorar los profundos cambios acaecidos desde el golpe chileno, en el ámbito de la resistencia interior y también de las generaciones jóvenes que hacen su aprendizaje político en el exilio.

Un segundo elemento que sirve de marco a la iniciativa es la naturaleza clasista y revolucionaria del socialismo. Para darle un mínimo de coherencia a nuestro encuentro se ha evitado caer en una concepción excesivamente ambigua y genérica, que en algunos momentos de la historia permitió llamarse “socialistas”

a muchos filántropos y a no pocos acróbatas del lenguaje. Sin caer en discriminaciones doctrinales, la invitación se ha extendido a quienes suponemos comprometidos en la lucha por una transformación revolucionaria de nuestro país, que implique el traspaso a la sociedad de los medios fundamentales de producción actualmente en manos privadas, bajo la dirección de un Estado que refleje la hegemonía de la clase obrera.

Con la realización del Seminario, la Liga ha querido ensayar un método nuevo de trabajo y de contacto, ofreciendo una sede neutra y no partidista para una discusión apremiante e indispensable.

FUERZA DE MASAS

Cuando se habla de "área socialista" no se quiere expresar solamente cierto grado de parentesco ideológico; pensamos también en la comprobada receptividad de amplios sectores populares al llamado socialista, es decir, en su decisiva presencia como factor electoral y como fuerza de masas a lo largo de cinco décadas y en la rapidez con que se ha reconstituido aún después de las crisis más agudas. Pensamos, en otras palabras, en la necesidad de activar esta latente inclinación de las masas a ver en el socialismo la vía de una independencia real del país y, simultáneamente, el instrumento de emancipación de las clases explotadas.

Recogiendo en lo esencial tales aspiraciones en una estrategia antimperialista, el Partido Socialista pudo desarrollarse como única expresión política de ese sector por largo tiempo y evitar la aparición de proyectos políticos paralelos, incluso en épocas de regresión y de crisis. Desde 1964, sin embargo, esa situación tiende a cambiar; la derrota electoral de ese año produce una profunda desmoralización en los cuadros del partido y, muy especialmente, en la generación más joven. El Partido Socialista comienza a perder consenso y autoridad en su base histórica de apoyo, facilitando la aparición de otros núcleos ideológicamente situados en su misma perspectiva. Se constituyen el MIR, y el MAPU, y más tarde se fundará la IC, a todo lo cual se agregará todavía la escisión protagonizada por la Unión Socialista Popular. Los acontecimientos que se desenvuelven durante el gobierno de la Unidad Popular debilitan aún más la cohesión del área socialista, tanto dentro como fuera de los confines del Partido Socialista.

AUTONOMÍA IDEOLÓGICA

En nuestros días, las iniciativas destinadas a reforzar las convergencias teóricas y operativas de este vasto campo sólo se justificarían si aún tuvieran vigen-

cia las elaboraciones políticas que han dado al socialismo chileno una fisonomía singular. Una de nuestras tareas será, en consecuencia, individualizar tales concepciones y comprobar hasta qué punto continúan siendo elementos válidos para definir la presencia socialista en nuestro país.

Se puede sostener, por ejemplo, que la afirmación de una *vía nacional* hacia el socialismo, la asimilación crítica de las experiencias revolucionarias de otros pueblos, junto a la firme adhesión al principio de la solidaridad internacional y al destino común de los trabajadores latinoamericanos, contribuyeron a dar a la *autonomía* ideológica del PS una dimensión concreta y original. Sólo a partir de estas premisas se puede entender el rechazo de toda afiliación que implicara una subordinación del partido a alguna autoridad supranacional o extranjera, el resuelto apoyo a la Liga Comunista Yugoslava en el momento de la ruptura con el *Cominform*, la condena de la intervención soviética en Hungría y Checoslovaquia; y en un sentido positivo, la lúcida percepción del contenido social y revolucionario de procesos tan complejos como la revolución boliviana de 1952, la lucha de liberación del pueblo argelino, así como de la revolución cubana, incluso en sus fases iniciales, cuando a los ojos de los escépticos no era más que una ingenua y romántica aventura. Mucho antes de las tesis formuladas por Togliatti en "Nuovi Argumenti", ya eran ideas corrientes entre nosotros las de concebir la transición al socialismo como un proceso variado y múltiple, estrechamente condicionado por las características y factores nacionales, lo que inducía a rechazar cualquier patrón único o modelo universal, tanto en la conducción de la lucha por el poder como en la configuración de la nueva sociedad y del Estado.

ELABORACIÓN SINGULAR

Con múltiples insuficiencias, también en el plano teórico se lleva a cabo una elaboración singular. La primera Declaración de Principios del PS proclama abiertamente su adhesión al marxismo, entendiéndolo no como un conjunto codificado de preceptos inmutables, sino como un método de análisis, una concepción de la sociedad y de la historia, una guía para la acción. De ahí su implícito rechazo del modelo *bolchevique* de partido y de estrategia, en un momento en que el prestigio soviético no era aún empañado por las deformaciones estalinianas. La contribución de la tendencia anarco-sindicalista, en el sentido de evitar una rígida estructura y de prevenir las inclinaciones hacia un nuevo tipo de Estado autoritario, fue significativa y dejó una profunda huella en la mentalidad del Partido.

El plazo que corre entre la fundación del PS y su incorporación a las tareas de gobierno fue demasiado breve para que pudiera madurar, y ello explica las

sucesivas crisis que lo sacudieron entre 1939 y 1947. Era difícil esperar otra cosa de una agrupación recientemente constituida por hombres provenientes de diversas vertientes ideológicas y de distintas experiencias personales que se encuentra de golpe ante la responsabilidad de gobernar, por añadidura, en uno de los pasajes más atormentados de la historia contemporánea.

En los años sucesivos, en cambio, se sitúa el período quizás más rico de elaboración política y teórica, iniciado con la aprobación de un nuevo programa. Se desarrolla allí la idea de que el socialismo es un avance en todos los aspectos de la actividad humana, incluido el campo de la libertad y de la democracia. Con seria fundamentación teórica, pero sobre todo con sagacidad política, se reivindica el contenido democrático que para las mayorías nacionales tiene un gobierno de trabajadores (inadecuadamente, a su juicio, calificado de dictadura), reanudando una vieja polémica que el marxismo europeo revive en nuestros días.

TAREAS SOCIALISTAS

En una línea de pensamiento, es cierto, más intuitiva que científica, se someten también a revisión las nociones tradicionales acerca del carácter del proceso revolucionario en los países atrasados, y particularmente en la América Latina. Contra la arraigada concepción dualista que se negaba a formular demandas socialistas en tanto no culminara plenamente la fase del desarrollo democrático-burgués, el programa formula las primeras indicaciones para concebir el proceso como una transformación global de la sociedad, en cuyo curso las tareas inconclusas de la revolución burguesa se anudan y complementan estrechamente con las tareas socialistas. Tal visión unitaria de la respuesta al subdesarrollo y al imperialismo, descartando la burguesía supuestamente “nacional” como agente de las transformaciones indispensables, fija claramente los contornos del bloque social que debe servir de apoyo a los cambios y los límites de las alianzas posibles de la vanguardia revolucionaria. De ahí que, globalmente, tal enfoque sea conocido como línea del Frente de Trabajadores. El posterior análisis marxista y, en mayor medida, los acontecimientos cubanos, han venido a dar una confirmación abrumadora a tales postulados.

En medio de la creciente crisis del sistema de dominación imperialista y de la institucionalidad tradicional, entre los años 1956 y 1964 pasan a primer plano las actividades de organización y movilización popular. Las ideas maduras en el período inmediatamente anterior se traducen en la gestación y en el programa del FRAP pero, sobre todo, en la progresiva hegemonía de la clase obrera en el seno del movimiento popular y en el peso creciente del eje socialista-comunista sobre sus orientaciones estratégicas.

RESTABLECER COHERENCIA

La aproximación socialista-comunista no se alcanza sin dificultades, pero aún la polémica sobre asuntos vitales –como el papel de guía de la Unión Soviética y las implicaciones de la política de bloques– se desenvuelve en un clima constructivo y fraterno.

Más convulsa es la controversia que se desencadena después de 1964 en el interior del Partido Socialista y se prolonga a lo largo de la campaña presidencial, para proyectarse finalmente sobre el gobierno de Allende y en las tensiones y disidencias que se multiplican en el exilio. Se ha querido presentar estas peripecias como el resultado más o menos inevitable de una tendencia a la radicalización leninista de la estructura y la orientación del Partido, lo que envuelve un cierto grado de ficción y otro de verdad, pero resultaría difícil negar que ellas se ligan frecuentemente a una aceptación excesivamente apresurada y acrítica de experiencias lejanas en el espacio, pero sobre todo, demasiado ajenas por las características del ámbito histórico y social que las incubaba.

Es aquí, tal vez, donde encuentra su justificación mayor este seminario. Si el área socialista, a corto o mediano plazo, es un factor indispensable del proceso revolucionario chileno, parece urgente restablecer su coherencia ideológica y política, impidiendo que las tendencias separatistas y centrífugas terminen por anular su robusta presencia en los acontecimientos actuales y futuros. El problema, por supuesto, no es simplemente disciplinario ni se reduce a cuestiones menores, susceptibles de encapsularse dentro de las cuatro paredes de éste o aquel partido. Es un gran problema teórico y político que concierne a toda la izquierda chilena y a toda la resistencia.

PERSPECTIVA COMÚN

Ya hemos dicho que en los últimos 15 años han surgido varios movimientos paralelos al socialismo histórico que, de diverso modo y con diversa fortuna, han querido ofrecer nuevas perspectivas al sector social que nos preocupa. No analizaremos ni sus causas ni sus justificaciones, para evitar alusiones tal vez ingratas en un debate apenas iniciado, pero debemos reconocer al menos que cada uno de ellos aportó o aporta contribuciones notables al enriquecimiento teórico, a las concepciones organizativas de la vanguardia, al estilo operativo o a las modalidades tácticas, e incluso al comportamiento moral de los militantes, en un período particularmente dinámico de la lucha social.

Hacemos referencia, como se supondrá, al MIR, el MAPU y a la USP. En un plano diverso, también a la IC. Si dejo aquí estas referencias es porque mi pro-

pia responsabilidad política en esos años podría inducirme a apreciaciones demasiado subjetivas. El contenido de tales contribuciones constituye, sin lugar a dudas, un aspecto fundamental del estudio que nos proponemos hacer.

Si en el curso de nuestro diálogo alcanzamos un alto grado de convergencias, surgirán otras cuestiones. Dos de ellas, al menos, ya implícitas en el espíritu mismo de la convocatoria, se hace necesario enunciar. Una se refiere a las *formas de trabajo* encaminadas a dar creciente espesor y coherencia al área socialista como sujeto político. Tarea no fácil, pero tampoco imposible, en la medida que se entienda como una actividad asociada al combate unitario contra la dictadura.

La segunda, de mayor complejidad y trascendencia, es la adopción de una perspectiva común en la lucha chilena.

BATALLA DE LARGO ALIENTO

Las fuerzas de izquierda no podrán escapar a un dilema ineludible: deberán decidirse por conducir una batalla limitada al objetivo táctico de derrocar la dictadura, con la ilusión de ganar tiempo y aliados, o por una batalla de largo aliento, alrededor de un proyecto político que persiga una democracia real y viva, abierta a una eventual transición al socialismo basada en la voluntad del pueblo. A primera vista, el realismo y el buen sentido deberían inclinarnos a la primera opción posponiendo toda exigencia de principio, toda discusión sobre el futuro, toda disputa estratégica, en beneficio de la tarea inmediata, urgente, prioritaria, de sacarnos de encima la dictadura. Hay muchos y variados factores que presionan en el sentido de *normalizar* un sistema político que va resultando intolerable para la comunidad internacional y por cuyo sostenimiento hasta el gobierno de Washington está pagando un alto precio político; de ahí que la Casa Blanca busque soluciones menos incómodas. En una línea semejante se empeñan diversos núcleos políticos que promovieron la intervención militar y hasta colaboraron inicialmente con los golpistas para descubrir después que destruir el movimiento popular sin aniquilar la democracia es una tarea imposible.

El problema reside en que esos núcleos no ocultan sus propósitos de desmontar apenas el decorado exterior de la dictadura, sus mecanismos más visibles pero menos esenciales, conservando en cambio su naturaleza autoritaria y su hermetismo de clase. Buscan un tipo de pseudo-democracia, en suma, capaz de bloquear cualquiera tentativa de transformar la sociedad capitalista o de romper la dependencia, basado en un nuevo bloque de dominación y en una suerte de tutelaje institucionalizado de las fuerzas armadas sobre el ordenamiento jurídico. Un régimen, por tanto, donde el golpe no sería ya la interrupción de la

legalidad mediante el brutal empleo de las armas, sino un procedimiento con sentido de control militar sobre la vida política del país.

Para los socialistas de cualquier denominación no es entonces indiferente lo que vendrá después de la dictadura, ni es un asunto del cual se puede prescindir en los momentos de buscar aliados o de diseñar un programa.

Seguros de interpretar un profundo anhelo del compañero Basso, y junto con agradecer fraternalmente la presencia de quienes han dado respuesta a su invitación deseamos al seminario un fructuoso desarrollo.

INFORME 2

Enero de 1980

UNA NUEVA IMAGEN DE LA IZQUIERDA

Con algún retardo y muchas insuficiencias llegamos a esta segunda cita, rodeada, sin embargo, de un interés considerablemente mayor que el que suscitara en los medios chilenos el Seminario de marzo. Como se subrayara en la carta del Senador Basso y en los documentos de la convocatoria, la iniciativa se propuso revertir el proceso de disgregación que venía caracterizando a la izquierda, promoviendo, para contrarrestarlo, una vigorosa convergencia de aquellas fuerzas que, aún acuarteladas en diversas formaciones partidistas, comparten sustanciales postulados ideológicos y políticos. Tal campo, genuinamente socialista y revolucionario, era reconocido como un elemento insustituible del movimiento popular, tanto desde el punto de vista histórico como de una estrategia emancipadora para el futuro inmediato. Paralelamente a esta "Área Socialista" se reconocía la presencia de una corriente comunista, igualmente nítida, constante y necesaria, en la lucha por el restablecimiento de la libertad en nuestro país.

Nuestro llamado implicaba una cierta innovación con respecto a las prácticas tradicionales: no buscaba las coincidencias en el plano de las abstracciones teóricas, sino las afinidades emergentes de una praxis común, críticamente analizadas a través de la experiencia de los diversos grupos y partidos. Era ésta una condición indispensable para impedir que los viejos bizantinismos frustraran los propósitos originarios; a lo cual se agregó otra, no menos indispensable: la de invitar a un debate entre personas dispuestas a reflexionar en voz alta, con entera libertad, sin comprometer con ello la opinión ni la conducta de sus respectivas agrupaciones.

El momento en que se producía nuestro primer encuentro exigía, además, a los estudiosos y cuadros políticos, la creación de un espacio de discusión democrática, de un foro propicio a la confrontación de ideas, que evitara las rigideces de los coloquios interpartidistas formales y entrara al análisis de los graves y nuevos problemas planteados por la realidad chilena e internacional. Entre ellos, el ya mencionado de la fragmentación progresiva de la vanguardia (que habría de culminar poco después en la penosa crisis sufrida por el Partido Socialista); el de la virtual parálisis de las instancias unitarias trabajosamente construidas a partir de 1956; el de la incapacidad de ofrecer alguna alternativa consistente, luego de fracasadas las ingenuas gestiones para llevar a la Democracia Cristiana a un acuerdo con la izquierda, y otros asuntos de urgencia semejante. Nos rodeaba un cuadro de veras dramático, producto más bien de factores subjetivos que objetivos, ya que contemporáneamente la dictadura veía estrecharse su propia base de apoyo, incluso en el ámbito militar, dejando de ser un gobierno "institucional" e impersonal de las Fuerzas Armadas para transformarse paulatinamente en una autocracia caudillesca, aún cuando la angosta capa de la burguesía monopólica continúe siendo un verdadero soporte social y el núcleo animador de la contra-reforma económica.

EL ÁREA SOCIALISTA COMO MENSAJE CONSTRUCTIVO

La resistencia popular se venía expresando ya desde entonces en significativas acciones de lucha de la clase obrera, en el fermento que agitaba las Universidades y en el antagonismo cada vez más acentuado de las masas católicas y de gran parte de la jerarquía eclesiástica frente al poder castrense. Si a todo esto agregábamos el repliegue militar en Perú, Ecuador, Bolivia y hasta el Brasil, era natural que nos interrogáramos acerca de los factores que impedían a la izquierda chilena –tan imaginativa e impetuosa en el pasado– formular una propuesta incapaz de dar a las rebeldías latentes una consistente expresión política. Incluso en el plano de los acontecimientos internacionales, –ya que durante la crisis chileno-argentina se llegó a una situación que amenazó subvertir radicalmente el cuadro de las luchas sociales en el Cono Sur–, bajo el impacto de un conflicto bélico de consecuencias imprevisibles, pero seguramente catastróficas.

Como primer foro de este tipo en el exilio, como intento de individualizar los nudos sustanciales del debate y de ordenar en torno a ellos las diversas fuentes que constituyen la izquierda real, el Seminario identificó una extensa zona de coincidencias fundamentales, de las cuales ha dado cuenta el comunicado final que acabamos de escuchar. El "área socialista", que había comenzado siendo

una hipótesis de trabajo, en el curso de la reunión pasó a ser una evidencia, adquiriendo cuerpo y perfiles en la medida que fuimos verificando afinidades cada vez más hondas y más ricas de contenido y de consecuencias. El resultado de las deliberaciones se tradujo, por eso, en la creación de un Comité de Iniciativa destinado a preparar esta segunda fase, en el mismo espíritu unitario y fraterno que inspiró la primera. Además, con todas sus limitaciones publicitarias y materiales, el Seminario de Ariccia tuvo la virtud de llevar a la emigración un mensaje constructivo y alentador. Las publicaciones, los debates, los grupos destinados a desarrollar las ideas y las iniciativas inspiradas en la reunión de marzo se multiplicaron, tanto en América y Europa como en el interior de Chile.

Precisamente por el interés que hemos logrado despertar, nos preocupa el resultado de la reunión que iniciamos ahora. Ha llegado el instante de verificar si —como tantas otras iniciativas semejantes— ésta se limitará a ofrecer aportes intelectuales más o menos lúcidos para la cabal comprensión de los acontecimientos chilenos, o si, rompiendo la inercia, logra introducir cambios radicales en el plano del comportamiento concreto. Cambios en el sentido de una nueva imagen de la izquierda, de un debate más libre y abierto en el seno de las fuerzas populares, de una democratización auténtica de la vida política del exilio, de un nuevo modo de integrar el trabajo del destierro con las luchas que empiezan a desplegarse en el interior del país. Cambios, en suma, que en su conjunto se propongan generar un nuevo proyecto político, con el cual el “área socialista” recoja toda la riqueza de su caudalosa tradición histórica para diseñar una línea al mismo tiempo audaz y realista, responsable y revolucionaria.

No resulta ocioso reiterar, una vez más, que la tentativa de dar consistencia ideológica y organizativa a un “área socialista” se coloca firmemente en la perspectiva de la unidad de todas las fuerzas populares. Jamás se ha propuesto la disgregación del amplio movimiento que sostuvo la experiencia de gobierno de Salvador Allende —cualquiera que hubiese sido el grado de participación de cada grupo político en particular— sino que busca una articulación más coherente de sus diversos componentes, un alineamiento más lógico de sus seguidores y, en consecuencia, un debate más transparente y explícito entre sus diversas tendencias, como expresión de un pluralismo que constituye una adquisición histórica de la experiencia chilena.

RECUPERAR LA INICIATIVA POLÍTICA

Ni la Liga ni el Seminario podrían llegar más allá de ciertos límites en la búsqueda de nuevas fórmulas y de nuevos caminos. De ahí que, una vez agotadas las posibilidades que nos brinda la reunión, las agrupaciones, los dirigentes y los

estudiosos que de modo directo o indirecto han brindado su apoyo y colaboración a esta iniciativa, deberían asumir la misión de culminar el estudio de los temas que quedan abiertos, de dar forma orgánica a las tareas que emergen de inquietudes comunes y de llevar las convergencias a un nivel más alto todavía de integración política.

En el plano teórico, dos son los grandes temas apenas enunciados y cuya incidencia en los acontecimientos actuales y futuros resulta, no obstante, indiscutible: uno es el del socialismo entendido como la más alta forma de democracia; el otro, el carácter de la participación de los cristianos en el movimiento revolucionario. El primero envuelve una serie de cuestiones derivadas, tales como la forma de lucha por la democracia en las condiciones de una dictadura totalitaria; la naturaleza de un gobierno de trabajadores; las fronteras de la planificación y de la autogestión en una economía socialista, los derechos humanos en el ámbito de la nueva sociedad y los límites del pluralismo. En la discusión del segundo ha quedado fuera de toda duda la legitimidad de la participación cristiana en el proceso de emancipación social, a partir de los propios valores cristianos, pero estamos lejos aún de elaborar sólidos cimientos ideológicos para una convergencia no puramente ocasional y que en todo el Continente comienza a cristalizar en el combate común. Independiente de las contribuciones que ya ha dado y pueda dar el Seminario, ambos temas parecen justificar la creación de grupos permanentes y de reuniones de estudio para abordarlos en toda su extensión y profundidad. Un método de trabajo común que debería extenderse al análisis de otros asuntos igualmente significativos.

En todo caso, la cuestión preferente y vital para la izquierda continúa siendo la de recuperar la iniciativa política. Mientras ella no se erija en la protagonista principal de la lucha por el derrocamiento de la dictadura, ninguna presión externa, ninguna grieta interior será suficiente para restablecer verdaderamente la democracia en el país. Y el impulso para lograrlo sólo vendrá desde el "área socialista", si ella es capaz de ejercer plenamente su autonomía pensando y poniendo en ejecución una política nueva, que tenga rigurosamente en cuenta el complejo panorama internacional y la renovada pugna entre las grandes potencias, pero que desafíe también los fatalismos geográficos y la lógica bipolar. En América Latina están creciendo fuerzas inéditas, portadoras de un formidable potencial revolucionario, cuyas expectativas de victoria se ligan estrechamente en la capacidad de las formaciones de vanguardia para coordinarlas en una perspectiva continental y a la lucidez con que éstas identifiquen los objetivos verdaderamente vitales y los métodos correctos. La "continentalización de la lucha no puede concebirse, por cierto, en términos simplistas o mecánicos, pero de la rapidez y la fuerza con que logremos vincular a las fuerzas combatientes de nuestros pueblos, de la solidaridad irrestricta, enérgica y oportuna que brin-

demos a los que se batían en las líneas de fuego, del aprovechamiento recíproco de nuestras experiencias y de la cuidadosa adaptación de cada lucha nacional a las condiciones circundantes, depende en buena medida el resultado final.

UN CONSEJO NACIONAL DEL PUEBLO CHILENO

Como, por el momento al menos, nuestras responsabilidades se refieren principalmente a la acción opositora fuera de las fronteras, y sin estar tampoco muy seguros de la oportunidad de la propuesta, quisiera revivir –como motivo de reflexión al menos– la idea de establecer una instancia superior del exilio, destinada a agrupar a todos los chilenos despojados de su tierra, su trabajo, su ciudadanía y sus derechos. Un Consejo Nacional del Pueblo Chileno concebido como una entidad suprapartidaria, democrática y representativa de las mayorías nacionales, generada por los personeros más auténticos y solventes del mundo político, del trabajo, de la economía, de la ciencia, de la educación y la cultura. Junto con preservar el patrimonio humano de la diáspora chilena y de estrechar los lazos de una comunidad que corre el riesgo de perder su identidad nacional y sus valores o de sufrir una fractura generacional irreparable, un organismo de ese nivel podría asumir, con mayor eficacia tal vez que los partidos, la tarea de disputar a la dictadura la representación de la nación chilena ante los gobiernos progresistas, los movimientos populares y los foros internacionales.

Se trataría, –para entendernos– de algo mucho más amplio; que una coacción partidista; sería un ámbito y una estructura abierta a todos aquellos individuos y grupos políticos y sociales que rechazan la Junta Militar como dirección legítima del país, sin perjuicio de garantizar en su seno una libre y dinámica dialéctica política. Sin ocultarnos las dificultades de la empresa, vemos en ésta una proposición una de las pocas maneras de reanimar la vigencia de la cuestión chilena en el escenario mundial, cada vez más denso de episodios y conflictos que tienden a postergarla como una materia de puro interés histórico.

Incidentalmente, en el Seminario anterior se hicieron algunas referencias a las formas orgánicas de conducción del movimiento popular y, particularmente, a la estructura y los métodos de dirección del Partido Revolucionario, sin abrir todavía una discusión sistemática. Un vacío explicable, si recordamos el escaso interés dedicado al tema de las investigaciones y trabajos de la izquierda en el pasado.

Cuando se trató del tipo de partido que se quería construir, todas las organizaciones de vanguardia (con la relativa excepción del MIR y el MAPU) se limitaron a oscilar entre la tendencia pragmática a repetir las modalidades organizativas tradicionales (orientadas casi exclusivamente al trabajo legal de masas y al pro-

selitismo electoral) y la aspiración a reproducir, con mayor o menor fidelidad, las formas orgánicas codificadas por la Tercera Internacional como presunto modelo “leninista”. Ponemos en duda que lo fuese porque resulta obvio señalar, en efecto, los trascendentales cambios operados en el seno del Partido Bolchevique bajo la dirección de Stalin; cambios que imprimieron una profunda huella en todas las Secciones de la Internacional.

La búsqueda de soluciones organizativas originales se vio limitada, además, por una cierta tendencia a escoger entre modelos abstractos partido de masas o partido de cuadros, por ejemplo, que le negaban funcionalidad a la opción. En otras palabras, definidas las metas, la estrategia del partido, se olvidaba que su constitución y funcionamiento debía dar respuesta adecuada y puntual a dos categoría de problemas: el proceso de la formación de su voluntad política y la naturaleza de su vinculación con las masas, con la clase, con la base social destinada a protagonizar la mutación revolucionaria. Dos problemas que sólo pueden separarse con fines metodológicos o didácticos, ya que –en último término– se condicionan también recíprocamente.

BUROCRATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA

Como forma genérica, la del centralismo democrático parece insustituible, si se busca cumplir con dos condiciones esenciales: la participación efectiva de los militantes en la generación de la línea política y de los mandos, y la unidad y coherencia de la orientación en el partido y en su entrega a las masas. Siempre que se mantenga el riguroso equilibrio entre el momento democrático y el momento de la disciplina, lo que no es siempre fácil, en especial cuando el partido enfrenta situaciones de fuerte represión y clandestinidad. Normas precautorias adecuadas, acompañada de una severa vigilancia colectiva de los hábitos democráticos, debería ser suficiente, sin embargo, para alejar las tentaciones del “monolitismo” e impedir la burocratización de la dirección política como resultado fatal de una extrema centralización de las decisiones.

Como reacción a los fenómenos degenerativos de la democracia interna, tiende a encontrar acogida en ciertos medios socialistas la legalización de las corrientes internas entendidas como tendencias coaguladas y estables. Se arguye, con aparente razón, que sólo así se adquiere conciencia la dialéctica interior y sólo de ese modo se garantiza el pluralismo en el seno de colectividades unidas por concepciones y programas que admiten diferentes énfasis e interpretaciones. Si bien es cierto que de un modo inevitable todo debate genera opciones diferentes y, por tanto, mayorías y minorías, parece de todo punto de vista inconveniente a la cristalización de tales contrastes, puesto que su persistencia debi-

lita la puesta en práctica de la línea común y su impacto sobre el mundo externo. Las corrientes cristalizadas (o como quiera llamárselas) conducen además –lo que es mucho más grave– a una profunda deformación de la propia democracia interna que se propondría reforzar, al establecer al interior del partido una multiplicidad de micro-disciplinas, de obediencias, fraccionales, que distorsionan la verdadera y espontánea expresión de la base militante.

Las cuestiones que plantea el tipo de conducción del partido y su relación con las organizaciones de masas son tanto o más complejas particularmente en condiciones de ilegalidad que prevalecen en Chile y que tendremos ocasión de examinar en el desarrollo de nuestra agenda.

LAS CONDICIONES SUBJETIVAS

Hasta el 73, la fuerza numérica y moral de los partidos de izquierda y su relativa facilidad de comunicación con todos los sectores del pueblo, empezando por los mejores organizados, generaron mecanismos marcadamente burocráticos en sus relaciones con las masas asuntos vitales para los sindicatos, los campesinos, los estudiantes, fueron a menudo resueltos más o menos autoritariamente por el vértice político.

Hoy la situación ha cambiado radicalmente. Ninguna acción puede emprenderse sin una cuidadosa evaluación del estado de ánimo de los protagonistas potenciales, sin una detallada planificación o sin la presencia de animadores de gran prestigio y autoridad personal. En otras palabras, la aptitud para mover el consenso, la capacitación de persuasión de los partidos y de los agentes de la resistencia, serán los factores que prevalezcan en las relaciones de vanguardia con los más amplios sectores del pueblo. Seguramente, el punto será mucho mejor ilustrado por los compañeros que han vivido en el terreno de la experiencia de la lucha clandestina.

Me he detenido en estos temas sólo para señalar la importancia en el cuadro de nuestras comunes inquietudes. A punto de terminar la primera etapa de nuestra colaboración, cualquier perspectiva de proyectarla más allá del Seminario nos plantea inevitablemente la cuestión de las formas orgánicas hacia las cuales queremos conducirla. Pero, sea que las imaginemos fluidas y estrechas a plazo breve o mediano, es innegable que necesitamos preparar desde ahora los criterios que servirán mañana para articular mejor las fuerzas del área socialista y acentuar su gravitación en los acontecimientos que vendrán.

El Comité de Iniciativa fue un ensayo positivo, pero su propia naturaleza impuso limitaciones insalvables: carencia de una infraestructura operativa, dificultades económicas para reunir a sus miembros en plazos regulares, ámbito limi-

tado del compromiso que le dio origen. Sobre la base de una plataforma ideológica-política cada vez más explícita deberíamos explorar las posibilidades de dar vida a un órgano de enlace con mayores poderes y capacidades, dándole una composición flexible y amplia, que permita la representación formal de los diversos grupos políticos y, al mismo tiempo, la inclusión de personas independientes en la política de izquierda.

Si una entidad de tales características pudiera surgir al término de nuestros trabajos, a su tarea de difundir los materiales de las dos nociones de Ariccia habría que agregarle la de organizar un sistema de autofinanciamiento para promover actividades más bastas, entre las cuales las de continuar la publicación de un serie de estudios y documentos de interés histórica del movimiento popular destinados a mantener la ligazón de nuestras luchas de hoy con las del pasado no para estimularlo como un culto nostálgico, sino para aprender de él lo bueno y lo malo; para evitar que —olvidándolo— seamos condenados, como otras veces se ha dicho, a volverlo a vivir.

En la medida en que podamos ensanchar y organizar el campo de los chilenos interesados en nuestras propuestas, podría pensarse en otros objetivos igualmente necesarios. Como la edición periódica, por ejemplo, de un boletín o revista que pudiera continuar este diálogo, enriqueciéndolo, hacerlo más sistemático y riguroso. O la también sistemática promoción de conferencias y cursos de formación política, destinados de preferencia a la gente joven. Nuestra penosa segregación física del país, la interrupción de nuestro contacto existencial con el cotidiano fluir de la vida chilena, con sus conflictos y problemas actuales, constituye una grave limitación para la reflexión teórica. Quienes luchan adentro, por su parte, están frecuentemente privados de las informaciones y materiales indispensables para hacer una correcta apreciación global de los acontecimientos y procesos mundiales e incluso, del propio país, donde todas las fuentes permanecen controladas por la dictadura.

Establecer uno o más centros donde podamos cerrar la brecha entre la elaboración intelectual y la praxis, entre la búsqueda teórica y las exigencias de la acción, ha pasado a ser una exigencia prioritaria. En seis años el país ha sufrido una mutación profunda. Las fuerzas que aspiran a protagonizar el futuro de Chile lo lograrán únicamente si son capaces de comprender esos cambios en toda su hondura.

La izquierda socialista está en óptimas condiciones para lograrlo. Aún con graves carencias teóricas, demostró en el pasado una aguda receptividad para interpretar y guiar los impulsos históricos de las masas populares y dispuso siempre de la independencia necesaria para juzgar con cabeza propia el complejo proceso de emancipación de los pueblos, rehusando someterse a modelos sagrados o a cálculos hegemónicos. Hoy tiene la oportunidad de romper de nuevo

la inercia si opera con unidad y con audacia, porque son muchos y muy grandes los errores que se deben corregir y vivimos un tiempo que los viejos mitos –paz, libertad, internacionalismo, liberación, autogobierno– adquieren vigencia concreta y, en su contenido real, no pasarán a ser palabras muertas incapaces de movilizar las inagotables esperanzas de los hombres.

MILITARES Y POLÍTICOS EN LA CRISIS CHILENA DEL '73

“Le Monde Diplomatique” en español,
marzo de 1980, México.

El interés por los acontecimientos chilenos de 1973 no se apaga. La lectura de algunos trabajos destinados a analizar los factores propiamente militares del proceso, me inducen a agregar algunas apreciaciones, en cierta medida testimoniales, acerca del modo en que otros elementos –políticos, económicos, institucionales– contribuyeron a la generación de la crisis y a su atroz desenlace. Y también a rectificar algunos juicios apresurados, y a veces temerarios, sobre las posibilidades que ofrecía para arribar a una conclusión diversa, sea a través de un compromiso estratégico entre las fuerzas que apoyaban a Allende y la Democracia Cristiana, o mediante una acción militar preventiva, que hubiese desarticulado a tiempo la capacidad subversiva de las formaciones armadas tradicionales. Tales alternativas, teóricamente válidas y, para algunos, incluso compatibles, fueron bastante más improbables en el plano de los hechos por el alto precio cobrado por los interlocutores centristas para brindar su apoyo, o por la carencia absoluta de conocimiento del problema militar por parte de la izquierda.

Nada sería más equivocado que analizar el golpe como un episodio inusitado o como una simple respuesta coyuntural y desesperada del imperialismo y de las clases dominantes locales frente al decidido asalto a sus reductos de clase. Lejos de eso, el levantamiento militar es la culminación de un proceso largo y contradictorio, el momento de máxima tensión en un enfrentamiento social que no dejaba espacio al compromiso y debía terminar con la victoria del socialismo o –como ocurrió– de la contrarrevolución burguesa. Los síntomas de la crisis venían delineándose con mucha anticipación y frente a ellos la actitud de los protagonistas no fue siempre lineal y coherente; tanto la derecha como la izquierda tomaron conciencia del carácter definitivo del enfrentamiento cuando se acercaba ya la última fase del conflicto.

En todo caso, el resultado de la contienda no tenía por qué ser necesariamente negativo, como lo estiman aquellos analistas que piensan que en el momento mismo en que la Unidad Popular escogió los medios democráticos, condenó anticipadamente al fracaso su experiencia de gobierno. En los años recientes, la izquierda había reconstruido una sólida unidad, luego de largos períodos de luchas intestinas, había desarrollado una poderosa fuerza electoral

y aumentado su autoridad en la vida política y cultural del país; había, en fin, vencido en la elección presidencial y conjurado los peligros de una rebelión reaccionaria en las semanas siguientes. Así también, una audaz, flexible y unitaria dirección política debió permitirle consolidar sus posiciones de poder y ampliar su base social, al mismo tiempo que dividir, desalentar y paralizar al adversario. Sólo que era necesaria, como se ha dicho, una dirección audaz, flexible y unitaria, de la que lamentablemente careció en los momentos decisivos.

No se busca elaborar aquí una contradicción, sino más bien revisar desde una más larga perspectiva ciertos acontecimientos, ante todo para advertir que la crisis que llevó a la dictadura de Pinochet no tiene nada de exclusivamente local; en diversas partes del mundo se desenvuelven situaciones muy similares a las chilenas de 1973, y mientras los centros de mando reaccionarios revelan una increíble fantasía para usarlos en beneficio de una regresión conservadora y autoritaria, las fuerzas de avanzada vacilan y se disgregan ante un cuadro socio-político, complejo y contradictorio, que no admite interpretaciones simplistas ni esquemáticas.

LA ILUSIÓN DE LA ALIANZA CIVIL

A primera vista, la hipótesis de una alianza de centro-izquierda que envolviera la Unidad Popular y la Democracia Cristiana habría resuelto el problema de la estabilidad del gobierno de Allende. Desafortunadamente, la lucha política no se presenta con el rigor de las ecuaciones matemáticas y las dificultades objetivas para alcanzar un acuerdo de ese tipo fueron insuperables. Los tres bloques en que llegan divididos los partidos a las elecciones de 1970 constituyen corrientes sociales e ideológicas fuertemente diferenciadas y consolidadas, cuya gestación se remonta a la administración Ibáñez. Ya esa triple polarización había colocado a la coalición de izquierda a 30.000 votos de la victoria en 1958, en su primera tentativa de ganar el Poder Ejecutivo, y sólo una espectacular, prematura y desafortunada demostración de su poderío en la elección complementaria de un diputado, en vísperas de los comicios presidenciales, había permitido la victoria de Frei en 1964: el espanto ante una eventual victoria del Frente de Acción Popular volcó a la derecha tradicional a su lado. En el curso del gobierno demócratacristiano se volvieron a abrir las viejas heridas, tanto por el trato humillante dado por Frei a los aliados que le habían abierto el camino del triunfo, como por el agravio que le infligió a la oligarquía latifundista su proyecto de Reforma Agraria, aprobado en el Congreso bajo una fuerte y eficaz presión de la representación de izquierda. En vísperas de la contienda de 1970, las tres corrientes de opinión volvían a presentarse con perfiles muy acusados.

Para la izquierda, no se trataba tan sólo de aprovechar electoralmente una brecha tan propicia, como lo había hecho doce años antes, sino de oponer a las formulaciones falsamente revolucionarias de la Democracia Cristiana un auténtico proyecto de transformación de la sociedad. En todos los campos principales las analogías de ambos programas eran sólo aparentes. Si bien la Reforma Agraria de los demócratas cristianos había alarmado a los terratenientes, habituados a considerar intangibles sus intereses de clase, tal proyecto se transformó en un arma real contra el viejo orden agrario, únicamente cuando la representación parlamentaria popular logró agilizar el sistema legal de expropiaciones y abrió un cauce para la explotación colectiva de las tierras reformadas, ensanchando el contenido y las proyecciones de una iniciativa que originalmente apenas se había propuesto la radicación de unos 100.000 nuevos pequeños propietarios. Lo mismo con respecto a la política del cobre. La llamada “chilenización”, concebida y realizada como una asociación del Estado con las compañías norteamericanas, había resultado a la postre más rentable que el régimen anterior para los inversionistas extranjeros, al mismo tiempo que les había permitido manejar el más importante negocio del país en condiciones de paridad con el poder público y no ya sujetos a su plena soberanía.

La indicación de que el programa presidencial de la Democracia Cristiana y su candidato Tomic propiciaban un socialismo comunitario, logrado a través de una vía no capitalista de desarrollo, ha terminado de confundir a los comentaristas poco acuciosos. La verdad es que tal programa no pasó nunca de ser un inteligente espejismo electoral y sólo revelaba la fuerza de una conciencia colectiva cada día más firmemente orientada hacia las soluciones socialistas. El socialismo comunitario, concebido como autogestión social del conjunto de los medios de producción, en efecto, no podía ser sino una fase subsecuente a la expropiación de la burguesía capitalista, de lo cual el programa no decía una palabra. Como simple administración obrera de unidades económicas dispersa, en cambio, venía a ser nada más que un pobre y tardío sustituto de las cooperativas.

En la época de la contienda presidencial, entonces, las distancias entre ambas concepciones hacían imposible cualquier convergencia estratégica. Lo reconoce inclusive Luis Corvalán, Secretario del Partido Comunista, en su informe al Pleno del Comité Central (agosto de 1967), cuando define el gobierno demócratacristiano como “una experiencia reformista que buscaba, con métodos y lenguaje nuevos, salvar el capitalismo en Chile e impedir la revolución popular y el socialismo”, en circunstancias que toda la historia de los últimos años constituía una prueba abrumadora de que las masas trabajadoras disponían de la voluntad y de la madurez necesarias para proponerse esa ruta. En tales condiciones, la única forma de plasmar un bloque ampliamente mayoritario

habría consistido en que la izquierda se hubiese sumado a la Democracia Cristiana, renunciando a cualquier posición independiente. Es decir, al precio de una capitulación imposible.

LA NEUTRALIZACIÓN ESTÉRIL DE LOS MILITARES

La segunda conjetura es menos fácil de refutar. Si los dirigentes chilenos tenían la convicción o el fundado temor de que una revuelta militar era inminente, parece legítimo preguntarse por qué no hicieron nada verdaderamente eficaz para conjurarla. Ciertamente, no se trataba de constituir una fuerza armada popular, capaz de sobreponerse al ejército profesional en combate abierto. Una iniciativa de tales dimensiones habría requerido de un tiempo y un volumen de recursos materiales absolutamente desproporcionado para los breves plazos y los mezquinos medios de que disponía el gobierno popular. El proceso revolucionario apremiaba, además, y la empresa desbordaba cualquier posibilidad de realizarla en términos clandestinos; pero, sobre todo, habría sido una medida incompatible con la línea central del nuevo régimen, que sentaba su legitimidad en el respeto riguroso de las normas jurídicas vigentes, no para satisfacer abstractos principios morales sino porque de ello dependía básicamente el consenso logrado en el país y, lo que era todavía más importante, la lealtad personal de los cuadros militares.

Es en este punto, sin embargo, donde las críticas tienen mayor asidero. Ya nadie desmiente que la dirección oficial de la izquierda demostró una impreparación inexcusable y una penosa carencia de ideas frente a la cuestión militar, pese a la significación que se le reconocía verbalmente al problema. En ningún plano se anunció una verdadera política: ni en el de la Defensa Nacional, entendida como seguridad física del país; ni en el de la renovación institucional de las fuerzas armadas, ni, por último, en el diseño de una acción antisubversiva, orientada a frustrar la eventualidad de una rebelión castrense.

Afortunadamente, la peligrosa carencia de una política nacional de defensa fue parcialmente remediada por una diplomacia dinámica y abierta, que resultó favorecida, además, por la presencia de tendencias convergentes en los gobiernos vecinos. Nunca las relaciones de Chile con esos Estados se acercaron más al ideal de una convivencia fraterna como bajo la inspiración de Allende, Velasco Alvarado, Torres y Cámpora. Aún mientras Lanusse estuvo a la cabeza del gobierno de Buenos Aires, se mantuvo entre Chile y Argentina un diálogo amistoso, que parecía anunciar el eclipse de las "fronteras ideológicas". El vacío, en cambio, en el terreno de la política propiamente militar o en el otro, decisivo, de la defensa directa del gobierno constitucional ante un ataque armado, no se

llenó con nada. Cada paso que se dio en el sentido de integrar a las fuerzas armadas en la vida de la comunidad –con raras excepciones– contribuyó más a aumentar el peso político del ejército frente al poder civil que a acrecentar la autoridad de éste ante el aparato militar. Las concepciones e iniciativas, por último, dirigidas a enfrentar un hipotético alzamiento en los cuarteles, se limitaron a las propuestas más elementales; precarios cuerpos de seguridad de los partidos, perspectivas de huelga general, eventual ruptura de las formaciones militares bajo la presión de una lucha de clases cada vez más áspera. Ciertamente, es difícil responder a la pregunta que habría formulado Allende a uno de sus colaboradores: ¿Cuánta masa se necesita movilizar para neutralizar un tanque?, pero de esa dificultad no podría deducirse que cientos de miles de trabajadores políticamente empeñados en la lucha fueran un elemento despreciable como factor militar. Menos aún si en el seno mismo de la estructura militar existía una minoría resuelta y leal al gobierno constitucional.

Algunas autocríticas tardías tratan de radicar estas responsabilidades en el Presidente, quien habría exigido a los partidos de la Unidad Popular manejar personalmente los asuntos de las fuerzas armadas. Si así ocurrió realmente, ello vendría a corroborar el antiguo desdén de los dirigentes de la izquierda hacia un aspecto vital de la lucha política, como trágicamente se ha visto después.

EL AGOTAMIENTO PROGRESIVO DEL SISTEMA POLÍTICO

Antes de asumir Allende el poder, diversos fenómenos venían acusando la fragilidad de la dominación de clase en el interior de la sociedad chilena, así como el gradual agotamiento del sistema político. Dos eran los más significativos: la rápida rotación de los partidos en el poder y la regularidad con que todos los sucesivos jefes de Estado recurrían al uso de las fuerzas armadas en la represión de la protesta popular.

En cierto modo, la tolerancia del orden jurídico para soportar bruscos desplazamientos en la cumbre del Estado sin graves quebrantos parecía ser un signo de vigor y no de debilidad. Sin embargo, paralelamente a la notable elasticidad institucional, el hecho revela el acelerado agotamiento de las variadas formas políticas y programáticas, frente a la persistencia de problemas cada vez más agudos. La movilidad del cuadro político demostraba, en suma, hasta qué punto era ya imposible conciliar la situación de dependencia del país con la presión social y política de las masas, consentida por los mecanismos democráticos. En particular, a través de los sindicatos y la lucha parlamentaria las clases subalternas exigen –y logran, a veces– una participación mayor en la distribución del

ingreso, y, en la medida que tales aspiraciones se desvanecen, sus demandas tienden a expresarse en términos políticos cada vez más claros y perentorios. Se puede observar con suficiente regularidad cómo a una fase ofensiva del combate popular —con un cierto peso en la conducta del gobierno— sucede un período de aguda inflación, primero, y después otro de represión abierta. Al comienzo de los gobiernos de González Videla (1946-1947) y de Ibáñez (1952-1953), por ejemplo, se cumplen significativos progresos sociales, anulados después por una inflación galopante, que es seguida por un conjunto de medidas destinadas a bloquear los salarios, de un lado, a reducir, del otro, la capacidad de resistencia y de contratación de los trabajadores. El gobierno de Alessandri, entre 1958 y 1964, es la más seria tentativa conservadora de contener los fermentos que anuncian la nueva ofensiva popular, esta vez con el propósito declarado de alcanzar el poder.

Mientras las masas se reponían de un largo período de reflujo fue posible, entonces, probar sucesivas formas de reemplazo en los límites consentidos por la dominación burguesa imperialista, pero pronto se vio la capacidad del movimiento para sobrepasar dichos límites, particularmente cuando la Revolución Cubana vino a demostrar que el socialismo en América Latina no era una utopía. La década del 50 muestra el crecimiento continuo de la unidad y de la fuerza de la clase obrera y de la izquierda: en 1953 se logra la unidad sindical en el cuadro de la Central Unica de Trabajadores; en 1956 se forma el pacto del Frente de Acción Popular; al año siguiente se reagrupan los socialistas en un solo partido; en 1958, en fin, se conquista la legalidad del Partido Comunista y, en su primera tentativa verdaderamente seria de capturar la Presidencia de la República, la izquierda llega al borde de la victoria. Con Frei, en 1964, las fuerzas reaccionarias y moderadas consiguen imponerse por última vez sobre el bloque popular mediante una alianza de último minuto dictada, como se ha dicho, por el miedo. Pronto el reformismo democratacristiano, generosamente apoyado por la Casa Blanca como alternativa “democrática” a la opción marxista de Cuba, comprobará que del subdesarrollo no se escapa sino por las vías revolucionarias.

Ni uno solo de los sucesivos Presidentes de la época dejó de emplear a las fuerzas armadas en la represión antipopular, una vez extinguidos los entusiasmos populistas de la vigilia electoral. Lo hizo González Videla para aplastar las huelgas de apoyo al Partido Comunista en las minas de carbón, cuando resolvió romper con la agrupación que más enérgicamente lo había sostenido en su campaña; lo hizo Ibáñez, para ahogar un caótico estallido de desesperación en las calles de Santiago; lo hizo Alessandri en las poblaciones periféricas de la capital, lo hizo también Frei para desalojar a los pobladores de Puerto Montt y reducir a los mineros de El Salvador. Y, no obstante la excepcional dureza del comportamiento militar, que llegó a veces al empleo manifiestamente excesivo de la vio-

lencia y de las armas, jamás se supo de alguna sanción aplicada a los responsables. Una justicia corporativa hacía del fuero militar la cobertura de la impunidad.

Contemporáneamente a las esporádicas manifestaciones de fuerza contra los trabajadores, y, en primer lugar, contra los sindicatos obreros, se llevó adelante otra campaña, menos espectacular pero más sistemática, contra el Poder Legislativo, el otro frente donde los partidos de avanzada ganaban terreno. Uno tras otro, los sucesivos gobernantes se empeñan en reducir la gravitación del Congreso, sea reforzando en la práctica el alcance original de ciertas disposiciones normativas de la Constitución Política, que consagraba un acentuado régimen presidencial, sea modificando su texto para impedir la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públicos, primero, y después –durante el gobierno de Frei– extendiendo la misma prohibición a la previsión social y a los reajustes de sueldos y salarios para el sector privado, mientras una voraz inflación continuaba haciendo estragos en la población activa sujeta a un régimen de estipendios fijos. Una injerencia tan exclusiva y amplia de parte del Ejecutivo en la vida económica, agregado a facultades casi discrecionales en el campo de la administración del Estado, de las relaciones exteriores y de la defensa nacional, concentraron progresivamente en las manos del Presidente de la República un poder desmesurado, frente al cual las propias mayorías parlamentarias debían inclinarse, en virtud de complicados procedimientos legislativos que hacían del veto presidencial un instrumento omnipotente. Todas las fuerzas reaccionarias colaboraron con devoción y desenvoltura en las iniciativas que deberían conducir a un régimen cada vez más autoritario, convencidas que era ésa la fórmula más inteligente para restar espacio a la presencia popular. Tarde ya –cuando Allende asumió la dirección del país– vinieron a percatarse de que la historia reserva, a veces, sorpresas amargas.

LA PRESENCIA MILITAR CRECIENTE

Por un cierto lapso la contienda social y política pudo canalizarse en el Parlamento y los sindicatos, hasta que las clases dominantes optan por bloquear tales formas de mediación y comienzan a prepararse para enfrentamientos más ásperos. En esa perspectiva, el elemento esencial serán las fuerzas armadas.

Desde 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (suscrito en Río de Janeiro) había sentado las bases jurídico-ideológicas de lo que será más tarde la dependencia militar latinoamericana, al definir la oposición al comunismo como el eje de la estrategia continental. En otros escritos se ha expuesto con abundancia de antecedentes el modo como, a partir de ese Tratado, se desarrolla un coherente proyecto de integración de las fuerzas armadas de los peque-

ños países del Sur en el sistema defensivo del imperio, de modo que sería ocioso detenerse en el tema. No obstante, interesa consignar el desaprensivo entusiasmo con que los políticos chilenos de derecha acuden a aprobar poco después del Pacto de Ayuda Mutua (PAM), un convenio bilateral complementario, inspirado en el agresivo espíritu del Tratado de Río. Al recomendar su aprobación a la sala del Senado aseguran que el PAM es “expresión y consecuencia necesarias de los compromisos internacionales que han contraído las naciones interesadas en la defensa del mundo libre y de su civilización cristiana” (Informe de la Comisión de Defensa Nacional, 30 de junio de 1952). Son los tiempos de González Videla y la iniciativa del gobierno se inscribe en la convicción del Presidente de que la III Guerra Mundial se encuentra a las puertas. Los partidos de izquierda ensayan una bulliciosa oposición en las calles, sin conmover mayormente a la opinión pública.

Como coronación del sistema, en 1956 se suscribe un convenio de duración indefinida entre los gobiernos de Washington y Santiago para establecer una misión militar norteamericana que “tendrá como finalidad cooperar con el Ejército de Chile, en calidad de organismo asesor del Comandante en Jefe, con el propósito de acrecentar la eficiencia técnica de la Institución” (Artículo 1º). Cuando el Ministro de Defensa Nacional de la época, almirante O’Ryan, usa la palabra en la ceremonia de la firma, lo hace en términos prudentemente protocolares. Es, en cambio, el embajador Cecil H. Lyon quien se encarga de poner las cartas sobre la mesa: “Este es otro lazo dice –que une a Chile y los Estados Unidos; otro paso en el camino de la cooperación interamericana, cuando los valores occidentales y cristianos y la integridad misma de nuestras naciones son amenazadas en forma creciente por las ateas y brutales fuerzas del comunismo”. Dos años antes, el gobierno en cuyo nombre hablaba el Embajador había colaborado abiertamente en el derrocamiento del coronel Arbenz, Presidente constitucional de Guatemala, para proteger los intereses bananeros de la United Fruit.

Se cierra así el circuito de los instrumentos jurídicos que, por una parte, incorporan al país a una virtual alianza militar, sin que nunca los órganos competentes se hayan pronunciado sobre ella, y que, por otra, establecen entre las fuerzas armadas chilenas y el Pentágono una densa red de vínculos directos, cada vez más independientes del control de las autoridades civiles. En adelante, las Conferencias Americanas de las diversas ramas de la Defensa; las operaciones navales y maniobras terrestres conjuntas; las negociaciones relativas al aprovisionamiento de material bélico; el adiestramiento de oficiales y suboficiales en las escuelas norteamericanas de la Zona del Canal y de los Estados Unidos; la naturaleza, en fin, de las funciones desempeñadas por las Misiones Militares junto al Alto Mando, pasan a constituir un campo vedado a la información parlamentaria y, en medida muy similar, al conocimiento de los propios Mi-

nistros cuando son extraños a la institución militar. Al lado de esta red de lazos reservados y sectoriales se edifican las bases de un aparato paralelo a la ordenación regular del Estado, potencialmente capacitado por la variedad de sus unidades y servicios para sustituir en cualquier momento al personal dirigente del gobierno y la administración. Un aparato que cuenta con tribunales propios, comunicaciones y transportes exclusivos, servicios diplomáticos, policía secreta, órganos de publicidad y difusión, almacenes y cárceles; en suma, con la infraestructura suficiente para ocupar instantáneamente los ganglios vitales de la sociedad y del poder. A este punto el ejército ha sido virtualmente “desnacionalizado”, en el doble sentido de depender ideológica y materialmente de una potestad extranjera y de que sus raíces en el cuerpo de la nación han sido amputadas.

Tan eficaz resultó esta política que aún en junio de 1973, es decir, cuando las relaciones chileno-norteamericanas estaban en una fase crítica, un cable de la AP anunciaba que “los vínculos de los Estados Unidos con las fuerzas armadas chilenas están floreciendo, no obstante los problemas planteados en otros aspectos de las relaciones entre Washington y Santiago” (El Mercurio, 14 de junio). Agregaba que para el siguiente año fiscal los Estados Unidos proyectaban destinar mayores recursos al adiestramiento de oficiales chilenos “que el de cualquier otro país hemisférico, con la excepción de Venezuela”, y que la colaboración se extendía a las tres ramas, como podía desprenderse de la voluntad de continuar con la realización periódica de la Operación Unitas y de la apertura de créditos para la adquisición de aviones supersónicos F-5 E. Añade el mismo cable que los observadores “señalan que la inclusión de Chile en la lista parece encuadrar con la tendencia de Washington de retener su influencia dentro de las fuerzas armadas chilenas.”. Una demostración de interés, como se sabe, generosamente retribuida.

En esos mismos años se desarrollan otras manifestaciones inquietantes en relación con el papel de las fuerzas armadas en la preservación del orden público. A su empleo ocasional, ya comentado, como puro instrumento coercitivo, comienza a aparejarse otro, más insidioso y de mayores proyecciones institucionales y políticas. Sobre la base de una ley de dudosa constitucionalidad dictada en 1942, los gobiernos venían haciendo uso frecuente del llamado estado de emergencia para colocar determinadas secciones del territorio bajo la jurisdicción militar y sujetarlas a disposiciones limitativas de las libertades públicas, tales como las de reunión, prensa, desplazamiento físico de las personas, y otras. Esas normas, según lo demuestran los debates parlamentarios de la época, fueron inicialmente concebidas, en sentido estricto, para afrontar calamidades naturales (y particularmente las consecuencias de los terremotos, que con tanta frecuencia asolan al país), y aún con tales limitaciones suscitaban duras

críticas entre los legisladores de la oposición. Gradualmente, mediante sucesivas reformas o a través de una práctica —a todas luces— abusiva, la declaración de una o más provincias como “zonas de emergencia” pasó a ser un expediente administrativo rutinario de los gobiernos para enfrentar la agitación social y las huelgas, sin necesidad de solicitar una ley especial al Congreso para asumir y ejercer determinadas facultades extraordinarias.

Los inconvenientes del procedimiento llegaron mucho más allá de su irregularidad formal: en el hecho se entregaba a la discrecionalidad de la autoridad militar la suerte de la legalidad republicana. Cada Jefe de Zona se constituía en virtual dictador local, protegido, además, en sus excesos por un sistema judicial castrense más inclinado a la complicidad que a la justicia.

La creciente arrogancia de los Jefes de Zona, respaldados por un agresivo espíritu de cuerpo, alcanzó a veces contornos de abierta contienda con el Senado, en las ocasiones en que la Cámara Alta pretendió calificar la conducta de algunos oficiales como Jefes de Zona, al momento de analizar los mensajes de ascenso patrocinados por el Ejecutivo (para cumplir con la norma constitucional que exigía el acuerdo del Senado en la promoción de coroneles y generales y de los grados equivalentes en la Marina). Durante el gobierno de la Unidad Popular se dio el caso de una censura impuesta por el Jefe de Zona de la capital al diario *El Siglo*, del Partido Comunista, sin que el oficial se diera la molestia de informar siquiera al Ministro del Interior o al propio Presidente, cuyas oficinas veía cómodamente desde su ventana y, que, teóricamente al menos, eran sus superiores jerárquicos.

Las tendencias segregacionistas de las instituciones militares crecen a lo largo de los años que preceden el gobierno popular. Dos actitudes confluyen en el mismo sentido: la renuencia de los militares a aceptar un control regular de los órganos competentes del Estado, y el temor de los políticos a ganarse la animosidad de los militares. En esta atmósfera, el ejército pudo continuar cultivando su vieja vocación autoritaria, compatibilizada con los valores ideológico-estratégicos del imperialismo y crearse, en suma, un universo institucional impermeable a toda noción de progreso que no estuviera estrictamente vinculada a los avances de la tecnología bélica. En la práctica, los mandos superiores fueron rigurosamente cooptados; en los mecanismos de promoción, el Presidente de la República pasó a ser un puro ministro de fe de la voluntad castrense.

LA APELACIÓN DEMOCRATACRISTIANA A LOS MILITARES

Allende llega, por todo lo dicho, en una fase difícil. Su antecesor, extraño a cualquier sospecha de contaminación marxista, había tenido que desarticular la

insubordinación de algunos cuarteles encabezada por el general Viaux, mediante complicadas negociaciones. Hasta hoy nadie podría asegurar si ese movimiento fue el ensayo general de la capacidad de las fuerzas armadas para imponerse a la autoridad constitucional, en previsión de lo que podría ocurrir un año después, o si verdaderamente obedeció a una espontánea reacción de la oficialidad frente a las penurias presupuestarias de la Defensa Nacional. Es evidente, en cambio, que la “huelga” militar, como se la llamó, circunscrita en sus alcances al mejoramiento del material y de las remuneraciones, en cierto instante estuvo en condiciones de provocar la capitulación política del gobierno. Todos los que tuvieron ocasión de conocer el estado de ánimo de las unidades que asediaban el regimiento Tacna saben que ni los oficiales ni la tropa habrían obedecido una orden de ataque. El escaso apoyo logrado más adelante por Viaux, cuando buscó capitalizar ese liderato en términos políticos, parecería demostrar la inspiración puramente gremial del motín de octubre. Pero en los cuarteles la inquietud persistió.

En ese clima, el triunfo de Allende adquiere dimensiones dramáticas. Ya antes, en 1938 y en 1946, dos Presidentes elegidos con la contribución de los comunistas (Aguirre Cerda y González Videla) habían logrado su reconocimiento constitucional, y la presencia de ministros socialistas y comunistas no era insólita en la vida política chilena. En ninguna de esas ocasiones las fuerzas armadas habían violado las normas de obediencia, pero ahora la necesidad constitucional de que la victoria popular en las urnas fuera ratificada por el Congreso Pleno, y el asesinato, en el intervalo, del general Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, colocaron el problema militar al rojo vivo.

Más allá de la crónica, algunos episodios del período requieren una referencia especial. En primer lugar, la feliz intuición de Allende al sugerir a Frei que se sujetara escrupulosamente al escalafón para nombrar el sucesor de Schneider. El cargo le correspondió al general Carlos Prats, cuyo leal comportamiento militar y su lúcida apreciación de la lucha política constituyen para el pueblo y para sus camaradas de armas una herencia que habrá de pesar mucho y positivamente en el futuro del país y de sus fuerzas armadas.

El segundo, de naturaleza específicamente política, se refiere a la conducta de la Democracia Cristiana ante las dificultades que Allende debió vencer para obtener la mayoría parlamentaria y con referencia, después, al problema de la intervención militar.

Contra toda una tradición civilista que había caracterizado al partido desde su fundación, los dirigentes demócratacristianos comienzan a atribuir —ya en esta fecha— un rol de guardianes supremos del orden constitucional a las fuerzas armadas. En el conjunto de “garantías constitucionales” que Allende debería aceptar antes de contar con su apoyo, proponen la virtual renuncia del Presiden-

te electo a su facultad de decidir prudencialmente en materia de ascensos y retiros de los oficiales generales. Como era natural, mientras aquellas reformas que entraban en la lógica del reforzamiento del orden constitucional fueron prontamente acogidas por la Unidad Popular y por Allende, esta exigencia insólita fue netamente rechazada; ninguna razón habría justificado la consagración de un cuerpo militar formalmente segregado de la nación y de sus legítimas autoridades ejecutivas.

Desde este momento, la orientación central de la Democracia Cristiana muestra una coherencia absoluta. Con fecha 10 de noviembre de 1972, mientras el gran paro patronal se extiende, el senador Aylwin, presidente del partido, ensaya un primer intento de justificar la rebelión militar en el plano del derecho, desde las columnas sediciosas de *El Mercurio*. Muchas de sus ideas servirán de fundamento, más adelante, a los llamados a la desobediencia suscritos por Frei y Pareto como presidentes de las Cámaras legislativas. Se apoyan en una interpretación oblicua y tendenciosa de algunas declaraciones del general Schneider para demostrar que las fuerzas armadas serían, en última instancia, el órgano competente para juzgar la legalidad de los actos del Presidente de la República. Para sostener tal aberración había que ignorar, por supuesto, que la Constitución Política encargaba a la Contraloría General de la República la supervisión de los actos administrativos; que la misma Ley Fundamental describe y reglamenta un específico procedimiento de acusación contra el Jefe del Estado; que el Presidente de la República está colocado en el vértice de la línea de mando de las fuerzas armadas y que, por tanto, la obediencia, la disciplina y la jerarquización de sus formaciones comienzan con el acatamiento a la autoridad presidencial. En defensa de su tesis tenía que silenciar igualmente la prohibición de deliberar que afecta a los institutos armados, y no señalar los organismos y las reglas de una decisión condenatoria de la política gubernativa adoptada en sede militar. Menos inclinados a las formas, en vísperas del golpe, dos futuros integrantes de la junta comenzarán por destituir a sus propios Comandantes en Jefe antes de iniciar el asalto a La Moneda.

La notable votación alcanzada por la izquierda en los comicios parlamentarios de 1973 (alrededor del 44%) tuvo dos consecuencias importantes: una fue la de convencer a la oposición que la victoria popular podría repetirse en 1976, y, la otra, que ella tampoco disponía de la fuerza necesaria en el Congreso para acusar constitucionalmente al presidente Allende. De ahí la contradictoria y desesperada campaña reaccionaria. Comienza por afirmar que los resultados de las urnas son el producto de un gigantesco fraude electoral (de donde debería deducirse la ilegitimidad del cuerpo parlamentario elegido con tales métodos) para terminar asignando a ese mismo Parlamento acusado de espúreo la tarea de declarar la ilegitimidad del poder ejercido por el Presidente, mediante simples

decisiones mayoritarias de ambas Cámaras, carentes en absoluto de valor procesal. Los pronunciamientos suscritos por los personeros de la derecha y de la Democracia Cristiana servirán de cobertura política y moral al alzamiento de los generales.

Los dirigentes democristianos que disienten de este comportamiento son pocos; la mayoría respaldó sin reservas la línea golpista del partido. Inclusive Tomic, abanderado del socialismo comunitario en las ardientes jornadas de la campaña, enviará una extensa carta al general Leigh hacia fines del trágico año 1973 para proponerle una alianza castrense democristiana, destinada a construir el “socialismo democrático” sobre los escombros todavía humeantes de una democracia aniquilada a sangre y fuego (la misiva fue publicada en Paese Sera, de Roma, el 1 de agosto de 1974, sin que nunca haya sido desmentida). Literalmente expresa allí: “Tentar, a fines del siglo XX, de construir en Chile un nuevo orden social conciliando democracia y socialismo es una tarea histórica más compleja, más profunda, más difícil todavía que aquellas de 1810 o de 1833. ¿Pero igualmente necesario y fascinante? Ud. tiene, señor general, la ocasión de constituir el gobierno más fuerte que el país haya tenido en cien años y de abrir efectivamente un nuevo horizonte histórico (fecha en Santiago el 23 de diciembre de 1973).

Una propuesta increíble. Formulada cuando nadie en Chile ignoraba las proporciones de la masacre, ilumina sobre el sentido que el “socialismo” tiene para algunos alquimistas del pensamiento cristiano.

EL DESENLACE PREVISIBLE

Clodomiro Almeyda en un ensayo sobre “La política internacional del gobierno de la Unidad Popular” publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (1977), precisa que “el objetivo que persiguió el gobierno chileno en sus relaciones con los Estados Unidos, fue el de eliminar todo pretexto que pudiera facilitar o legitimar un bloqueo económico muy estricto de Chile y acciones de otra índole que pudieran adoptar para perjudicar el gobierno popular. Con el mismo espíritu se propuso reducir al mínimo la entidad de las cuestiones objetivamente conflictivas, evitando que éstas se agravaron artificialmente, pero sin contemplar en momento alguno el renuncio a las metas programáticas de la Unidad Popular.”.

Partiendo de esas premisas, sostiene que ninguna conducta alternativa que involucrara una mayor dureza habría “eliminado o disminuido la peligrosidad e intensidad de la intervención” norteamericana. Tal vez tenga razón si por esa vía se hubiese buscado únicamente debilitar la voluntad intervencionista de Was-

hington, ya que –como el mismo Almeyda lo expresa– esa agresividad tenía su origen en el radical antagonismo de la experiencia chilena en relación con el ordenamiento imperial, pero debemos suponer –por idénticas razones– que tampoco la habría exasperado. Una conducta más firme y explícita, en cambio, habría sido un factor esencial para introducir en la mentalidad militar un elemento ideológico válido y nuevo, sin necesidad de exagerar un ápice los términos reales del dilema que comenzaba a delinearse: con Chile o con el Pentágono.

Se optó por el camino inverso y se dio así el caso de un país trabado en una feroz controversia diplomática, comercial, jurídica y política con un adversario despiadado y cínico, y que, a pesar de todo, mantuvo inalterable la dependencia doctrinal y logística de su organización militar con respecto a ese mismo adversario. Un comportamiento discutible en todos sus aspectos, si se piensa que desde diversas capitales llegaban señas de una oposición creciente al sistema implantado por el Pentágono, lo que proporcionaba al gobierno de Chile una óptima coyuntura para agregarse a esas críticas sin el temor de quedar aislado. A mediados de 1973, en efecto, mientras se desarrollaban los preparativos para la Reunión de Comandantes en Jefe de los Ejércitos Americanos en la ciudad de Caracas, los generales Eduardo Mercado Jarrín, peruano, y Jorge Raúl Carcagno, argentino, en representación de sus respectivas instituciones conducen una vigorosa campaña tendiente a cuestionar las funciones de la Junta Interamericana de Defensa y el contenido mismo del Tratado de Río de Janeiro. Simultáneamente proponen rescatar el carácter nacional de las fuerzas armadas en el ámbito sudamericano. A la cita de Caracas, realizada en vísperas de la sedición, se hizo presente una delegación chilena de modesta jerarquía y sin ninguna propuesta original.

A esta altura eran ya visibles los síntomas de debilitamiento de poder civil. Ni el gobierno ni los legisladores de la Unidad Popular, habían intentado una seria resistencia al proyecto de ley que entregaba la pesquisa y la requisición de las armas en manos de particulares a los comandantes de unidades. Por esta vía, al margen de cualquier intervención de los tribunales o de los agentes del Ejecutivo, dispusieron de un instrumento precioso para provocar a las organizaciones populares, para saquear sus sedes, para humillar a los trabajadores, para incursionar brutalmente en las fábricas, para desautorizar, en fin, a los representantes del gobierno. Y, de paso, también para encender el odio de la tropa contra sus hermanos de clase, en preparación de las crueles jornadas de septiembre. La orgullosa avanzada popular estaba tocando a su fin; en el aire comenzaba a respirarse la derrota.

En la misma línea de concesiones se inscribe la autorización de la XIV Operación Unitas –operación conjunta de unidades navales norteamericanas y chilenas que la izquierda había rechazado sistemáticamente desde la primera vez

que se discutiera en el Congreso. La oposición fue tan insistente y sólida que Frei debió apelar a un ardid legal para autorizar la última Operación de su mandato, soslayando mañosamente el pronunciamiento negativo del Senado.

La XIV Operación, como se preveía, constituyó una cobertura propicia a la conspiración en marcha. Parece evidente que la concentración de tres destructores de primera línea y un submarino en aguas del Pacífico chileno, de un grupo de aviones de combate en Mendoza y de un cierto número de aviones de transporte militar en Asunción, todos elementos de guerra bajo bandera estadounidense, no fue una mera casualidad. Más allá del apoyo logístico que sin duda prestó a los conjurados esta poderosa maquinaria bélica, parece haber estado eventualmente destinada a prestar una colaboración directa a las tropas sublevadas, en el caso de haber tropezado con resistencias insalvables.

En la noche del 10 de septiembre la Flota simuló partir al encuentro de la Fuerza de Tarea norteamericana, aguas afuera de Valparaíso. Poco después de medianoche estaba de regreso y en las primeras horas de la madrugada la ciudad caía en manos de la marinería de desembarco y de las dotaciones navales de los establecimientos de tierra. De ninguno de estos movimientos tenía noticias el Presidente de la República ni su Ministro de Defensa Nacional. Es posible que el contraalmirante Robert R. Monroe, a cargo de la Fuerza de Tarea, haya sido la primera persona ajena al círculo de conspiradores en saber que se iniciaban las operaciones de la contrarrevolución.

Ni quiebra inesperada de los frágiles equilibrios democráticos, ni fase conclusiva de una enfermedad insidiosa, de un mal secreto e incurable; el camino que lleva al golpe fue, como se ha dicho, un proceso visible y largo, nítido para todos los que quisieron verlo. Algunos –los políticos de centro–derecha– lo promovieron, lo alentaron y lo aplaudieron, en la certeza de que el alzamiento debía necesariamente conducir a un régimen retrógrado y autoritario; otros –los de izquierda– lo temieron siempre, pero reaccionaron con una mezcla de ignorancia y fatalismo frente a un fenómeno que terminaría por aplastar por muchos años la vieja democracia chilena.

A LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS ACTOS DEL 50° ANIVERSARIO DEL PSCH

Milán – abril de 1983.

Estimados compañeros,

Diversas tareas y compromisos impostergables no sólo me impiden asistir personalmente a los actos preparados por Uds., sino que han hecho imposible también la elaboración de un trabajo que corresponda a la importancia de la invitación. No quisiera, sin embargo, estar enteramente ausente en la discusión de los temas que concentrarán sin duda la preocupación de los compañeros que asistan y, en primer lugar, en el que se refiere al carácter y el grado de compatibilidad entre dos iniciativas que más de alguno estimaría antagónicas y que, por el contrario, según mi opinión deben fundirse en un concertado esfuerzo de renacimiento del socialismo chileno: una es la Convergencia Socialista y, la otra, el Proyecto de reconstitución orgánica del Partido Histórico.

En la imposibilidad de desarrollar sistemáticamente el tema me permitirá hacer algunas consideraciones que, a mi modo de ver, demuestran no solamente la compatibilidad de ambas tareas, sino también su indisoluble complementariedad.

Me parece oportuno recordar que las actividades de Convergencia se iniciaron cuatro años atrás, cuando los desgarramientos internos de la izquierda alcanzaban un punto dramático, ocasionados tanto por las acusaciones y contraacusaciones acerca de la derrota del 73, como por el desencadenamiento de innumerables querellas bizantinas que buscaban “a posteriori” una explicación teórica de los acontecimientos. En tal clima, la convocatoria de los Seminarios de Ariccia constituyó un vuelco importante y se situó en un terreno de gran realismo: buscó la vía del retorno a la unidad a través de las coincidencias programáticas-estratégicas en lugar de privilegiar las definiciones teóricas o ideológicas. Aquí encontramos la razón del por qué en ese camino se avanzaba mientras las relaciones se deterioraban entre los partidos.

Esta primera experiencia deja una enseñanza que vale hasta hoy: la gente que mira el socialismo como alternativa genérica se agrupa con mayor facilidad alrededor de objetivos concretos de lucha política y de los correspondientes cursos de acción que en torno a principios más o menos abstractos o de teorías totalizantes. Y el problema no carece de importancia cuando se trata de movilizar con prontitud voluntades indispensables para abatir la dictadura, incidiendo

oportunamente en la crisis que la sacuda desde hace algún tiempo. Vendrá después –y está llegando ahora– el momento de la construcción o reconstrucción de los partidos en el interior del movimiento; tarea en la que seguramente recobrarán importancia las cuestiones de principio.

Con lo dicho no quiero significar que el Movimiento de Convergencia sea un expediente provisorio, destinado a aportar agua al molino de los partidos para luego ser tratado como mera masa de maniobra. No. Si somos capaces de crear una dialéctica viva entre el Movimiento de Convergencia y la conducción partidista, habremos descubierto una nueva forma de relación entre la vanguardia y las masas, una nueva manera de hacer política recogiendo de primera mano las inquietudes y los anhelos del pueblo y enriqueciendo con tal información el proceso de elaboración política de los dirigentes. Estaremos cumpliendo con aquello de que “el educador debe a su vez ser educado” y abandonando la versión ultra-leninista de que el partido es el dueño exclusivo de la ciencia de la revolución y de que sus líderes son sus profetas, para retornar a la idea de que el verdadero protagonista de la historia es el pueblo, son los trabajadores, es la clase obrera, y que el rol de sus conductores se limita a traducir en una síntesis política las variadas y complejas –pero verdaderas– aspiraciones de las masas.

Todo esto no puede ser entendido como un desconocimiento del valor de la teoría revolucionaria (sin la cual, como se ha dicho, no hay acción revolucionaria). Reconozco –y lo he reconocido desde mi juventud– que el marxismo es el mejor instrumento científico de la clase trabajadora para descubrir la verdadera esencia del capitalismo y comprender y asumir su propio rol liberador. Por eso soy marxista y seguramente lo seguirá siendo también el PS en vías de reunificarse, pero ello no impide que reconozca igualmente que quienes luchan sincera y eficazmente por el socialismo, aún no compartiendo del todo las tesis marxistas, son verdaderos revolucionarios.

La concepción de la Convergencia como Movimiento pluralista envuelve también un propósito político de alto significado. Fuera de las organizaciones de izquierda y de clase, en estos diez años de dictadura debemos reconocer que un sector sustancial de la iglesia católica ha tenido un comportamiento valeroso y ejemplar. Este es un dato nuevo en el acontecer chileno y dejará hondas huellas para el futuro. En términos más generales todavía amplios sectores cristianos se asocian a las luchas revolucionarias en el continente. Es un fenómeno no ya marginal; está marcando un cambio de fondo en las relaciones de las avanzadas políticas y los creyentes. Sería una miopía inexcusable no tomar nota de estos hechos o no sacar las consecuencias necesarias. Si no abrimos generosos canales de colaboración de marxistas y cristianos en un riguroso pie de igualdad, el rico patrimonio moral y político que la Iglesia chilena ha acumulado en estos años será reclamado por la Democracia Cristiana como herencia suya,

sin tener títulos para ello dada su participación directa en el aniquilamiento del régimen democrático y su titubeante actitud política de hoy.

Es fácil comprobar que todo el sistema de alianza de la izquierda está de hecho disuelto. También en este terreno la Convergencia desempeña un papel insustituible: en el hecho es el campo natural de coordinación de un consistente núcleo de fuerzas populares, organizadas o no en partidos, y el punto de encuentro de innumerables hombres y mujeres que desean luchar contra la dictadura sin adherir necesariamente a alguna organización política. Un tipo de unidad, en suma, que implica un notable progreso con relación a los tradicionales “frentes” experimentados con anterioridad por la izquierda. En estos últimos, los partidos se enfrentaban en las discusiones como entidades autárquicas, impermeables, herméticas, generando escasos espacios de elaboración colectiva y haciendo casi siempre infecundos los debates. En el Movimiento de Convergencia, en cambio estamos habituándonos a discutir sin dogmatismos, a analizar con objetividad, a discurrir colectivamente; estamos logrando así una fluida circulación de las ideas, una progresiva compenetración de nuestras reflexiones y, sobre todo, creando el clima que pueda otorgar a este bloque en el futuro una gran capacidad de decisión e iniciativa política.

No dejaré aquí tampoco de subrayar el valor de la Convergencia en la formación política de la generación emergente, tanto de aquellos jóvenes que están en Chile como de los que han vivido de su adolescencia dispersos por el mundo. Ganarlos realmente para participar en la lucha contra la tiranía militar hoy y para la reconstrucción de nuestra patria mañana es una tarea difícil, que no pueda ser encomendada exclusivamente al ámbito familiar. Debemos impedir que se transformen en una generación de apátridas, vinculándolos del modo más estrecho con la cultura y los problemas chilenos y proporcionándoles simultáneamente un ancho espacio para el desarrollo de una experiencia política viva y personal.

Habrían sido mis deseos desarrollar estas ideas y algunas otras similares en una forma sistemática, a manera de comunicación destinada al seminario que Uds. proyectan, pero las circunstancias ya referidas lo han impedido. Confío no obstante, que al proseguir los esfuerzos para restablecer la unidad del Partido Socialista no olviden que un Partido no se construye jamás para sí mismo, sino para servir a la liberación de una clase —y con ella y en nuestro caso— a una nación expoliada y enviada por el imperialismo y sus sirvientes civiles y militares. El mejor homenaje a nuestros fundadores debe consistir en ser fuertes sin ser arrogantes, seguros sin ser dogmáticos, fraternos sin ser complacientes.

Les deseo el mejor éxito en sus tareas. Cordialmente, los abraza,

RAÚL AMPUERO DIAZ

LOS CAMINOS DE LA UNIDAD

“Pensamiento Socialista”. Año VIII, nº 30, 1983.

Periodista. - Es un hecho que la Unidad Popular es sólo un recuerdo histórico: la última experiencia orgánica de una alianza de izquierda. Durante su vigencia se sostuvo que la base de tal coalición, tanto en la teoría como en la práctica, la constituía el eje socialista-comunista. ¿Quiere decir que la quiebra de la Unidad Popular significa que también esa noción ha entrado en crisis?

Ampuero. - Durante los años cincuenta y sesenta, el Partido Socialista se esforzó por dar vida a una fórmula política que fuera una expresión coherente de las fuerzas sociales potencialmente revolucionarias (vale decir, del Frente de Trabajadores), comenzando por establecer un compromiso estratégico con el Partido Comunista, el otro partido de la clase obrera. Formalmente, ese entendimiento se alcanzó en el seno del FRAP (1957), demostrando rápidamente su enorme capacidad movilizadora de masas, pero, al mismo tiempo, algunas graves militaciones: en momentos decisivos, el dualismo de dirección lo paralizaba condenándolo a la inercia. Lo que el movimiento popular ganaba en pluralismo y en creatividad bajo un comando bipartidista, a menudo lo perdía desde el punto de vista operativo, dada la carencia de una instancia decisoria que disciplinara la acción de ambos partidos.

Por algún tiempo se pensó que las exigencias de la lucha ayudarían a salvar este escollo. Se trataba de una época en que las diferencias entre marxistas o entre diversas escuelas marxistas se reputaban solamente tácticas, o coyunturales, o irrelevantes frente a los grandes desafíos de la historia. Había en todo esto una ingenua sobreestimación de la fuerza unificadora de la teoría común, la ilusión de que las discrepancias tarde o temprano encontrarían un punto de síntesis o una solución ecléctica.

En realidad, ninguna solución podía surgir espontáneamente; era preciso construir lazos de unidad más estrechos. En última instancia sólo podían consistir en la confluencia de socialistas y comunistas en el seno de un partido de tipo nuevo. Dos veces fue planteada tal posibilidad desde el campo socialista y dos veces fue rechazada por el Partido Comunista: poco después de constituirse el FRAP y durante el gobierno de Salvador Allende. En ambas oportunidades las circunstancias eran singularmente propicias para promover ese salto de calidad; en 1957, porque todo hacía pensar que la desaparición de Stalin y las denuncias de Jruschov al XX

Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética debían producir cambios profundos en la estructura y en la orientación que los partidos comunistas habían heredado de la III Internacional; en 1973, porque la transformación de la Unidad Popular en una agrupación política unificada, con una vigorosa capacidad de dirección, era condición más que necesaria, indispensable para enfrentar la crisis que todos veíamos venir. El eje socialista-comunista demostró así su inconsistencia; no dio las respuestas que las circunstancias exigían, cerrando una fase histórica del movimiento popular. Por eso, ahora buscamos hacer de la Convergencia el centro de gravedad de nuevos equilibrios internos en el movimiento popular, del cual nadie ha pensado en excluir al Partido Comunista.

FRACASO DE LA BURGUESÍA

Periodista. - en esta nueva perspectiva, ¿qué valor tienen las tesis del Frente de Trabajadores? ¿Están todavía vigentes?

Ampuero. - Del Frente de Trabajadores se han dado múltiples versiones, no todas correctas. Probablemente, como en otras lúcidas intuiciones socialistas, también en este caso nos faltó profundizar científicamente un postulado rico en consecuencias políticas.

Dicho de manera esquemática, el Frente de Trabajadores descarta el liderazgo de la burguesía nacional en el desmantelamiento de los residuos feudales, en la construcción de un Estado soberano, tareas en que históricamente deberían sustituirla los trabajadores, simultáneamente con la transformación de la sociedad en un sentido socialista.

Nada hace suponer que esta tesis haya perdido vigencia. Basta ver la complicidad de la burguesía chilena con el “golpe” del 73 y en el proceso de demolición de la democracia parlamentaria, su apoyo a la contrarreforma agraria, su subordinación a los intereses de las multinacionales y del imperialismo para comprobarlo. Que después de diez años de dictadura y ante la catástrofe económica a que ha sido llevado el país algunos sectores empresariales adopten posiciones críticas nos parece positivo y una abrumadora prueba del fracaso absoluto de la política militar, pero no altera nuestra convicción de fondo: las clases trabajadoras —entendidas en un amplio sentido— constituyen el bloque social insustituible en la lucha por la recuperación de los valores democráticos y en la reconstrucción del país sobre bases nuevas, modernas y justas.

Periodista. - ¿Cómo se concilia esa línea estratégica, entonces, con el llamado de Madrid a todas las fuerzas democráticas (incluidas, se entiende, algunos sectores burgueses) para combatir juntos contra la dictadura?

Ampuero. - La eliminación de la dictadura es un objetivo prioritario y urgente para la enorme mayoría de los chilenos, incluso de muchos que alegremente ayudaron a establecerla. Para los asalariados las razones son obvias: es una condición para reconstruir sus organizaciones de clase y dar la batalla contra la desocupación, el hambre, la represión policial y los abusos patronales. Otros segmentos de la sociedad luchan por razones de orden diverso, aunque no independientes de aquéllas: desde la necesidad de reconquistar la libertad de opinión y de prensa hasta la urgencia de evitar el colapso total de la actividad productiva; desde liberar la enseñanza de una pedagogía primitiva y dogmática hasta el restablecimiento de la dignidad de la nación en el contexto mundial.

Tan diferentes motivaciones confluyen en una irrenunciable aspiración común: reconquistar la libertad, restaurar la democracia, imponer un orden institucional que devuelva y garantice la soberanía del pueblo. Para lograr este fin creemos necesario y posible un acuerdo muy amplio, que hemos llamado Pacto Constitucional, inclusive con fuerzas de la derecha republicana, sin que ello implique ningún compromiso de programa o de gobierno. En el cuadro de la nueva institucionalidad seguiremos bregando por cambiar la estructura social, por el socialismo.

Peridista. - ¿En consecuencia, tal consenso no incluye lo que la Democracia Cristiana llama un “Pacto Social”, que vincularía a empresarios, trabajadores y al Estado en un compromiso solidario de reconstrucción nacional?

Ampuero. - En este punto, la propuesta democristiana es muy insuficiente. Nos parece legítimo entender que se trataría de una cierta distribución de los “sacrificios” en un largo período de transición. Si así fuera, nosotros la rechazamos categóricamente. La brutal represión de estos diez años no persiguió sólo fines ideológicos y políticos; fue simultáneamente el instrumento destinado a someter a los trabajadores al abuso y al arbitrio de los patrones. Los negocios de una parte sustancial de la burguesía y de la tecnocracia que le sirve florecieron al amparo de la destrucción de los sindicatos y de la virtual abrogación de los derechos laborales, mientras la cesantía, el hambre, la enfermedad, la humillación y la intemperie fueron el precio pagado por la clase obrera y los campesinos por una fiesta de la que estaban drásticamente excluidos. Ahora que el folgorio terminó (también con la ruina de algunos desaprensivos participantes), ¿deberán pagar también ellos la vajilla rota?

Una justa política social debería comenzar por devolver a los trabajadores lo que les fue usurpado, y si debemos hacer un sacrificio colectivo para reconstruir la estructura productiva del país no puede ser para reponer el patrimonio privado de los que apostaron a la dictadura y perdieron, sino para que toda la comunidad chilena participe en su gestión futura.

Periodista. - Volviendo a los temas políticos, ¿en qué medida el golpe del 11 de septiembre ha determinado un cambio de actitud de la izquierda chilena respecto de la democracia?, y si es así, ¿alcanza también al Partido Comunista?

LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA

Ampuero. - Debemos reconocer que la izquierda marxista exhibió a menudo una cierta subestimación de la democracia liberal por su falta de proyección sobre la estructura social y económica del país. Sin embargo, es imprescindible afirmar que hizo siempre de los valores democráticos una de sus banderas permanentes de combate. En el plano de la extensión de los derechos electorales, de la defensa de las libertades públicas, de la incorporación de las mayorías nacionales a la vida del Estado, los partidos de avanzada jugaron históricamente un papel fundamental.

De ahí que no se pueda hablar con propiedad de un vuelco, sino más bien de una revalorización y de una reinterpretación de la democracia. Para comprobarlo bastaría recordar algo que muchos tienen interés en olvidar: la antigua democracia chilena fue aniquilada el 73 no por los marxistas que estaban en el poder, sino por los antimarxistas, es decir, por aquellos que son devotos de la democracia sólo cuando ella sirve de cobertura a la codicia de los capitalistas. Por eso resulta paradójico que algunas corrientes que promovieron y sostuvieron el golpe, y que hoy militan en la oposición a Pinochet, exijan a la izquierda pruebas de fidelidad a la democracia, en circunstancias que durante el gobierno de Allende se cumplió rigurosamente con el calendario electoral, con victorias y derrotas del gobierno, y se mantuvieron intactas las garantías constitucionales.

Las sospechas de algunos sectores respecto de la vocación democrática del Partido Comunista chileno tienen un puro fundamento subjetivo y se refieren al modelo de sociedad en que éste se inspira, pero carecen absolutamente de apoyo en el comportamiento histórico concreto de los comunistas en nuestro país. Muchas y muy serias objeciones se pueden formular a su política y a sus posiciones —y la Convergencia no ha silenciado nunca las suyas—, pero no se podría sostener honestamente que de parte de los comunistas provino alguna amenaza contra la democracia en el curso de la gestión de la Unidad Popular.

VIGENCIA DE LA TEORÍA MARXISTA

Periodista. - Después de lo que usted ha dicho, ¿qué es lo que ha cambiado fundamentalmente en las relaciones Partido Socialista-Partido Comunista?

Ampuero. - He tenido ocasión de explicarlo en algunos documentos. Por un largo período la simultánea presencia en el campo popular de una corriente *socialista* y otra *comunista* fue concebida como una simple contienda por la hegemonía entre concepciones estrechamente emparentadas por una común vocación marxista, que en momentos diferentes osciló entre la rivalidad abierta y la emulación fraternal. No obstante, sus respectivos comportamientos prácticos, las crecientes divergencias en la interpretación de la situación mundial y en la apreciación del llamado "socialismo real", han terminado por configurar dos líneas bien diferenciadas de política popular: una de matriz "bolchevique-leninista" estrechamente ligada a la historia y a las características de la política soviética, y otra, de carácter "autonomista y nacional", cuyo postulado central lo constituye la fusión del socialismo y el autogobierno de los trabajadores como estructura básica de la nueva sociedad.

De aquí se desprende que en el lenguaje político de hoy "socialismo" y "comunismo" son categorías que no se emplean para designar etapas sucesivas de un único proceso de transformación (una fase de transición y otra de llegada) de conformidad al léxico marxiano, sino para individualizar dos propuestas paralelas, dos tipos de política, dos modelos de sociedad final. Cualquiera que fuera el grado de compromiso que se alcance en la lucha común, en algún momento la opción de fondo resultará inevitable para el movimiento popular.

Periodista. - ¿Debemos entender que el socialismo chileno —como lo han hecho otros partidos en los últimos años— se aleja del marxismo para adoptar una política 'de corte socialdemocrático'?

Ampuero. - No, en absoluto. La socialdemocracia carece de tradición local y de condiciones ambientales para radicarse en nuestros países, donde el maridaje de los ejércitos nativos con las corporaciones multinacionales tiende a polarizar las alternativas. O el socialismo ofrece una vía revolucionaria de desarrollo o, simplemente, no servirá a la liberación latinoamericana. Su potencialidad revolucionaria, en todo caso, dependerá más de la decisión que ponga en la ruptura de los nudos principales del retraso que del radicalismo de sus postulados teóricos. Y es eso, justamente, lo que busca la Convergencia como *movimiento*: definir un programa de cambios sustanciales y los cursos de acción para alcanzarlos. Pensamos que el socialismo se ha revalorizado en la conciencia colectiva como una imprecisa pero vigorosa aspiración a la libertad y a la igualdad, luego de la trágica experiencia de la dictadura. En otras palabras, el socialismo ha dejado de ser la doctrina hermética de un partido para constituir la esperanza, en la mente del pueblo, de una respuesta eficaz a la crisis objetiva del precario capitalismo aborigen.

Tal proyecto no se contradice con la necesidad de reconstruir un fuerte Parti-

do Socialista de clara filiación marxista, entendida como adhesión científica y no dogmática a ese cuerpo ideológico. Es precisamente, en el seno del Movimiento de Convergencia donde esa reconstrucción puede y debe enriquecerse con el inestimable aporte de gentes y de ideas provenientes de otras experiencias políticas y otras vertientes intelectuales.

LA PROTESTA NACIONAL

Periodista.- En la perspectiva de la Convergencia, ¿qué rol se le asigna a la violencia? ¿Cómo juzga las jornadas chilenas de protesta?

Ampuero.- Sería bastante ocioso discurrir sobre la violencia y los medios pacíficos en un plano abstracto. Abundan los teólogos, los cientistas sociales, los magistrados y los filósofos que se han preocupado de establecer las condiciones que legitiman el uso de la fuerza en la lucha contra el despotismo. Lo específico de la situación chilena es el carácter discrecional y absoluto del poder militar y el uso ilimitado de la coacción para deducir y aplastar cualquier manifestación de disenso, de descontento o de protesta. En ese cuadro, todo gesto de rechazo del sistema adquiere los contornos de un desafío y conlleva implícita, a su vez, un grado de violencia. En un régimen autocrático todo lo que no es sometimiento y obediencia es agresión, es violencia; no admite verdadera oposición pacífica, porque el simple hecho de oponerse implica ya un virtual acto de subversión. Depositar una flor sobre una tumba, cantar una cierta canción, golpear las cacerolas, todos hechos inocuos y pacíficos en una sociedad democrática, en Chile pueden llevar a la cárcel, al exilio o a la muerte.

No hago un discurso efectista. Desde hace diez años el país vive formalmente en “estado de sitio”, cualquiera que sea su denominación oficial, y desde 1980 cuenta con una Constitución teóricamente obligatoria para todos, excepto para Pinochet: su artículo 24 transitorio lo faculta hasta el final de su “mandato” para secuestrar ciudadanos hasta por veinte días en lugares secretos, para restringir el derecho de reunión y la libertad de información, para relegar y expulsar del país a las personas que desee, cualquiera sea su posición o jerarquía, todo esto con fundamentos que él mismo califica y sin que pueda reclamarse de la medida ante ninguna autoridad o magistratura.

En Chile, en consecuencia, la violencia no se plantea como problema ético o de principio, sino como un tema de ponderación política: elegir aquellos medios que mejor reflejen el nivel del movimiento de masas, que produzcan resultados útiles y eludan las provocaciones del poder. En cualquier caso, “el orden” autoritario los considerará una expresión de violencia.

Las jornadas recientes han sido una inteligente acción para demostrar el desolador aislamiento del gobierno militar. Tal vez su resultado más valioso sea la activa participación de los jóvenes. Diez años de brutal despolitización no han podido arrancar la pasión de la libertad del corazón de los muchachos.

EL SOCIALISMO ENTRE AYER Y MAÑANA

Notas sobre la reconstitución del Partido
Socialista de Chile,
Roma, Italia, noviembre de 1985.

No se podría escribir la historia chilena del último medio siglo sin reconocerle un rol determinante al Partido Socialista. Su participación decisiva en la movillización y en la reorganización de los trabajadores después de la Gran Crisis, tanto en el campo sindical como político; su contribución al programa del desarrollo industrial en el curso de la Segunda Guerra; su aporte a la renovación intelectual de la izquierda en los años postbélicos; su resuelta iniciativa para forjar un movimiento de avanzada nacional que tuviera como objetivo la transformación radical de la sociedad y el Estado; su tenacidad —en fin— para defender y ampliar los derechos democráticos y los niveles de vida del pueblo, son hechos demasiado evidentes para ser ignorados.

Dada su latente carga subversiva, entre otros objetivos los militares golpistas se habían propuesto extirpar de la memoria de las masas las huellas de tal comportamiento. Intentaron identificar al socialismo con las prácticas más abyectas de la corrupción, la violencia y el abuso. No obstante, luego de doce años de dictadura se comprueba una terca persistencia de las aspiraciones y los valores que singularizaron la trayectoria del socialismo y la conducta de sus hombres. Cabe esperar que a medida que se ensanchan los espacios democráticos, el socialismo volverá a ser la bandera de la mayoría del pueblo y, particularmente, de la juventud dispuesta a cancelar para siempre los horrores de la tiranía militar. El socialismo como experiencia viva, que alcanzó a mostrar a los pobres, a los marginados, a los oprimidos, y enseñó a todos los chilenos el camino de la dignidad nacional.

Pero si doce años de dictadura no han apagado las aspiraciones, los recuerdos ni los sueños, han logrado sí debilitar y desarticular el principal agente operativo del socialismo: El Partido que representó y divulgó esas ideas a lo ancho y a lo largo del país en el curso de varios decenios. Se hace urgente, entonces, salvar la brecha entre el vigoroso instinto reivindicativo de las masas y la carencia de una fuerza conductora que le dé coherencia política y eficacia combativa a sus demandas. Esta circunstancia nos plantea la exigencia insoslayable de apresurar la creación de estructuras políticas que otorguen rápida consistencia

organizativa a la vasta área socialista y sirvan de apoyo fundamental a la reconstitución del partido de los socialistas. Porque es legítimo reconocer en el PSCH histórico el instrumento principal en la configuración de una conciencia socialista, pero es también innegable que desde mediados de los años sesenta, nuevos contingentes han venido a enriquecer el acervo humano y cultural de este sector, provenientes de otras vertientes ideológicas pero igualmente colocados en la perspectiva de la transformación revolucionaria del país.

Estamos enfrentados a una tarea que no se agota en la mera restauración formal del partido que la furia castrense logró desarticular el aciago 11 de septiembre, sino que, paralelamente, exige una profunda renovación de sus hábitos organizativos, de sus esquemas políticos, de sus métodos de decisión y de sus formas de enlace con el movimiento social. Se trata de una auténtica reconstitución, luego de un paréntesis de doce años en que ha sobrevivido simbólicamente, más como mito que como entidad orgánica, privado de mecanismos expresivos de la voluntad democrática del conjunto de sus militantes. Reconstitución, decimos, para no herir la susceptibilidad de quienes han creído encontrar en la voz "refundación" un secreto propósito de escamotear la vocación revolucionaria del viejo partido. Reconstitución, en fin, que simultáneamente al rescate de su identidad ideológica implique una audaz adaptación al nuevo escenario en que debe combatir.

"No nos bañamos dos veces en el mismo río". Tampoco se transitan dos veces los caminos de la historia. Tenemos a nuestras espaldas muchas cosas de las cuales enorgullecemos: creadores aportes a la teoría de la revolución latinoamericana, valerosas batallas contra las fuerzas represivas del fascismo, resonantes victorias cívicas a la cabeza del pueblo, el generoso sacrificio de héroes innumerables, pero todo eso será fecundo sólo en la medida que nos habilite para conquistar el futuro. "Se vive desde el porvenir" decía Ortega y Gasset, y si esto es verdad para los hombres, es mucho más para un Partido.

I

En el fondo de las discrepancias que obstaculizan la unidad, a veces de modo expreso y otras en forma directa, yace el problema de lo que es permanente y esencial en la tradición del socialismo chileno y de cuáles son los cambios específicos que hoy exige la renovación. Detrás de esta cuestión central se esconden a menudo motivaciones menos legítimas y menos limpias, pero, por eso mismo, es preciso abordarla sistemáticamente si se quiere construir un instrumento político adecuado a las tareas que le esperan.

Se han hecho numerosas tentativas para individualizar las constantes históricas del socialismo chileno, sobre todo en el plano teórico, y ellas dejan de manifiesto un amplio margen de consenso. Casi todos esos trabajos asignan al

Partido una orientación ideológica particularmente rectilínea, sin alteraciones de ruta ni mutaciones visibles, lo que es sólo parcialmente verdadero. No obstante la continuidad de ciertas concepciones de principio, persisten algunas razones ambiguas, que ayer originaron graves contrastes de interpretación y conspiran hoy contra la homogeneidad que se busca en el proceso de reconstrucción unitaria. Parece necesario, en consecuencia, entrar francamente en el análisis de esas materias para remover obstáculos insidiosos y abreviar la fase de dispersión orgánica.

En la definición global de los postulados que inspiran la presencia socialista, hay tres momentos principales: la Declaración de Principios del acto de fundación (19 de abril de 1933); el Programa del Partido Socialista Popular de 1947, y las resoluciones sobre "Principios orgánicos" aprobadas en la Conferencia de Organización de 1967. Se trata en los tres casos de acuerdos que condicionan fuertemente la acción del Partido y modelan, no tanto la conciencia de sus militantes como la mentalidad del grupo dirigente. Otras declaraciones ocasionales sobre la materia, de menor rango o simplemente personales, no dejaron huellas perdurables o carecieron de la jerarquía suficiente para influir en la imagen del Partido.

"La Declaración de Principios" comienza diciendo que "El Partido Socialista adopta como método de interpretación de la realidad el marxismo, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social", con lo que se ubica en el campo de quienes rechazan al marxismo como doctrina dogmática, como verdad revelada, para asumirlo como teoría científica sujeta a la continua verificación de la historia.

Tal concepción del marxismo –podemos asegurarlo– permanece como postulado básico e inamovible en toda su ya larga existencia.

Sorprende, sin embargo, encontrar a continuación en el mismo documento, afirmaciones que parecen contradecir la formulación inicial y recoger, en cambio, nociones más propias del marxismo escolástico implícitamente rechazado en precedentes. Así, cuando agrega: "Durante el proceso de transformación total del sistema es necesaria una dictadura de trabajadores organizados" y cuando añade, "la transformación evolutiva por medio del sistema democrático no es posible porque la clase dominante se ha organizado en cuerpos civiles armados y ha erigido su propia dictadura para mantener a los trabajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su emancipación".

No pretendemos sostener la tesis de que el marxismo científico deba ser necesariamente reformista ni negar que en determinadas circunstancias una fase de dictadura revolucionaria sea históricamente ineludible. Lo que interesa subrayar es el hecho que se establecieron conclusiones tan generales y definidas sin una fundamentación suficiente para justificar su validez, omitiendo el riguroso análisis que el primer postulado parecía exigir y sin enunciar siquiera

los medios alternativos que el Partido usaría para el acceso al poder. Dada la época de emisión del documento cabe pensar que —más que una servil repetición de nociones en boga en la literatura de la III Internacional— tales acuerdos fueron inspirados por las condiciones concretas de la lucha en el Chile de entonces. Apenas un año antes una conjura oligárquico-militar había malogrado la tentativa de establecer una República Socialista. En cuanto Arturo Alessandri asumió la Presidencia de la República, en brazos de la derecha en 1932, había recurrido a las “facultades extraordinarias” como método habitual de gobierno y promovido la creación de una Milicia Republicana de agresiva orientación contrarrevolucionaria. No resulta extraño, entonces, que en tal ambiente se estimara utópico el acceso al poder por métodos democráticos y se concibiera un hipotético Gobierno Popular en términos de dictadura. Por lo demás, era un tiempo en que el régimen soviético no adquiría aún los rasgos autocráticos que caracterizarían más tarde la degradación de la “dictadura del proletariado”.

Si el texto fundacional parece desdeñar el valor de la democracia y de las libertades públicas en el proceso de transformación de la sociedad, la práctica política del Partido —en cambio en un plano más realista— se resuelve en el amplio y enérgico empleo de los instrumentos democráticos y electorales y en la sistemática resistencia a los estados policiales de excepción.

Un segundo momento de definiciones de principios lo constituyó la elaboración y aprobación del Programa de 1947. Se trata, sin duda, del documento de más rico contenido ideológico, de mayor calidad didáctica y de más amplia discusión democrática que haya elaborado el Partido. En la fundamentación teórica de tal documento el marxismo no es una pura y solemne declaración de fe en una doctrina, sino un instrumento analítico de penetrante eficacia. A la luz de sus enseñanzas se describe un amplio arco de materias para darles una respuesta socialista, anticipando juicios y criterios que en los años siguientes pasarán a integrar el patrimonio intelectual de una vasta corriente política. Desde el golpe de Estado militar, tanto en el interior como en el exilio, este documento ha ganado una renovada autoridad en todo el campo socialista y encuentra una aceptación generalizada y sorprendente si se piensa que han pasado casi cuarenta años desde su formulación original.

Es significativo que en toda la extensión del programa del 47 no aparezca ni una sola vez la locución “Dictadura del Proletariado” o “de los Trabajadores”, tan escueta y axiomática en la primera Declaración de Principios. Ni para propiciarla ni para refutarla, lo que lleva a pensar que no se propone una sustitución de criterios de fondo, sino una interpretación o reelaboración más meditada y madura de una expresión sólo ocasionalmente usada por Marx y recogida con excesiva desenvoltura por algunos de sus seguidores, hasta erigirla en postulado esencial de la concepción marxiana.

Más adelante volveremos sobre el tema. Por ahora interesa destacar que el documento del 47 se esmera en señalar cómo el poder socialista no significa la negación de la democracia sino, por el contrario, agrega a su dimensión meramente política un contenido económico y social que la hace más amplia y más justiciera. "Así —dice— mediante la abolición de los privilegios económicos, será posible la verdadera libertad en una democracia auténtica". En este sentido, es el reverso de lo que se conoce por dictadura en el lenguaje moderno.

A propósito de la planificación y la libertad señala que "fundamentar la democracia política en la seguridad económica es condición básica de una planificación socialista". Después añade este párrafo esclarecedor: "La desaparición paulatina de las formas estatales de control político, correlativa al desarrollo planificado de trabajo social, hará posible una verdadera democracia, es decir, una democracia orgánica en la que los hombres, ciudadanos y productores, realizarán la integración de lo individual y lo colectivo, de la libertad y de la necesidad". Finalmente, entre las Directivas principistas incluye esta frase "junto con socializarse los medios de producción será reemplazada la pseudo democracia actual, que se basa en un concepto individualista y abstracto de la soberanía popular, por una democracia orgánica, que responda a la división real del trabajo colectivo".

Consignemos, como simple curiosidad, que en el cuerpo del programa no se da una denominación global al proyecto político que su texto propone. La fórmula República Democrática de los Trabajadores aparece por primera vez y solamente en la carátula de la edición original, como título del volumen y con el fin de resumir y sintetizar su contenido, transformándose con el tiempo en un lema central de los objetivos del Partido.

Un tercer momento de definiciones de principios lo encontramos en la Conferencia Nacional de Organización, realizada en 1967. Una sede impropia, desde luego, porque únicamente un Congreso General tenía legítimas atribuciones para innovar en la posición teórica del Partido, como suprema expresión de la voluntad democrática de sus bases. De modo adjetivo y subrepticio, entonces, en una asamblea convocada para circunscribirse a los temas organizativos y constituida por dirigentes de dudosa aptitud para adoptar decisiones en el plano ideológico, se presentan y aprueban sorpresivamente algunas tesis que alteran profundamente su perfil histórico.

... "Marx y Engels —se dice— uniendo sus concepciones teóricas a la práctica revolucionaria determinan las características generales que debía poseer el partido vanguardia de los trabajadores. Lenin, organizador del primer partido que fue capaz de derribar el sistema capitalista e iniciar la construcción de una sociedad socialista, sistematizó y desarrolló el papel dirigente del partido en la lucha de clases y fundamentó sus principios orgánicos y normas de vida interna. El

conjunto del pensamiento de los fundadores del socialismo científico y el aporte legado por el conductor máximo de la Gran Revolución Socialista de Octubre constituyen la ideología marxista-leninista, base teórica y práctica de la lucha de los trabajadores por su liberación económica y social.

Para rectificar la nueva profesión de fe, la misma resolución sostiene entre los “Objetivos del Partido Socialista”; “El Partido Socialista, de acuerdo con su doctrina, sus principios marxistas-leninistas y de sus objetivos políticos, es una organización revolucionaria que expresa y representa los intereses históricos de la clase obrera y de las masas explotadas de Chile”.

Nunca antes el Partido se había adscrito a tal escuela, apreciada siempre como una corriente de pensamiento estrechamente ligada a las concepciones soviéticas y a las deformaciones burocráticas y autoritarias promovidas por Stalin. El acoplamiento del marxismo con su versión leninista, en términos de hacer del conjunto una doctrina global y cristalizada, única interpretación correcta de la teoría clásica, fue una burda invención de Stalin como herramienta que le sirviera para consolidar su dominio personal sobre la Unión Soviética, y para transformar la experiencia revolucionaria rusa en un modelo supremo y universal. Por una parte Stalin asume el papel de profeta exclusivo de la nueva ciencia y, por otra, el “Partido de Lenin” pasa a constituirse en el centro de la revolución mundial. El marxismo deja de ser una teoría científica para transformarse en una doctrina de Estado.

Históricamente, el primero que habla de leninismo como sistema teórico complementario de las tesis formuladas por Marx fue Bujarin, en un discurso de 1924 pronunciado en la Academia Comunista. Hasta entonces los colaboradores inmediatos de Lenin había apreciado sus enseñanzas sólo como un notable y original aporte a la aplicación del marxismo en un país de capitalismo incipiente. Fue Stalin en persona quien, poco después, en abril del mismo año, en una conferencia en la Universidad de Sverdlov sobre “principios de Leninismo”, promulgó la famosa definición: “El Leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. Más exactamente: el Leninismo es la teoría y la práctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular”. La tendencia a sacralizar las ideas de Lenin llega a su más alto grado en el conocido discurso de juramento de Stalin ante el Congreso de los Soviets.

La consagración del binomio marxismo-leninismo como un cuerpo doctrinario integral e indivisible constituye desde entonces la base ideológica del stalinismo y de los partidos que se formaron bajo las banderas de la III Internacional. Simultáneamente fueron condenados como heréticos los trabajos que se distanciaban de tales concepciones, como los de Gramsci y Rosa Luxemburgo, por ejemplo, y todas las experiencias que no se sujetaban a los cánones consagrados.

Desde su fundación el PSCH había rechazado esta tendencia, hasta que la insólita Conferencia del 67 lo liga forzosamente a una escuela política extraña a su tradición y lo sumerge en un universo intelectual que no agrega nada a la comprensión de los acontecimientos contemporáneos. Basta recordar que el genocidio de la población cambodiana bajo el régimen de Pol Pot se cumple en nombre del marxismo leninismo y luego también en nombre del marxismo leninismo se justifica la intervención militar vietnamita para derrocarlo.

II

Se plantea la necesidad de hacer plena luz sobre el tema viejo y nuevo a la vez de la compatibilidad del socialismo y de la democracia, sea como propuesta política, sea como posibilidad histórica. Hablamos del socialismo, naturalmente, en el sentido de un sistema alternativo al capitalismo, y de la democracia como un régimen que conserve y ensanche el acervo de las libertades y derechos civiles y políticos consagrados en las constituciones liberales.

El problema de la compatibilidad puede considerarse en dos fases sucesivas: la de la lucha por el poder y la de la institucionalización ulterior. En la primera, la cuestión se centra en los métodos que se proponen para asumir la dirección del Estado; en la segunda, en la creación de un sistema que, junto con extender el dominio social de los medios de producción, preserve todos aquellos derechos ya conquistados en la democracia tradicional.

Formulado en un plazo abstracto, la discusión alrededor de los medios de lucha se torna bizantina y justificaría las posiciones más diversas. El propio Marx, en un conocido discurso pronunciado en Amsterdam (8 de septiembre de 1872), llegaba a admitir que los trabajadores de algunos países (la referencia era a Holanda, Inglaterra y Norte América) podrían alcanzar el poder con medios pacíficos. Sería, sin embargo, una imperdonable ingenuidad de nosotros, los chilenos, y de quienes se encuentren en situación análoga, recomendar métodos democráticos para enfrentar la dictadura, que consiste precisamente en la negación de los mecanismos más elementales de la democracia. Lo específico de la situación chilena es el carácter totalitario del poder militar y el uso ilimitado de la fuerza para reducir y aplastar cualquier manifestación de disenso, de descontento o de protesta. En ese cuadro todo gesto de rechazo del sistema adquiere los contornos de un desafío e implica, a su vez, una cierta dosis de violencia. El régimen autocrático no acepta ni reconoce ninguna clase de oposición lícita: el simple hecho de ejercer la legítima defensa frente a la agresión represiva del Estado pasa a constituir un acto virtual de subversión. Parece justo, por tanto, plantearse en nuestro caso el dilema de optar por medios pacíficos o medios violentos no como un problema metafísico, sino como un asunto de estricta ponderación política, a fin de elegir aquellos que mejor corresponden al nivel del

movimiento de masas, que reduzcan el costo humano de la resistencia y debiliten material y moralmente la dictadura.

En suma, dando por descontado el derecho de los pueblos a la legítima defensa colectiva de sus libertades, su derecho a la rebelión contra la tiranía —reconocido por filósofos, juristas y teólogos de los campos más variados— la elección de los medios de lucha depende enteramente de la situación concreta. Si en 1970, en condiciones de normalidad democrática, los procedimientos electorales ofrecían razonables expectativas de victoria a todas las corrientes políticas —como lo demostró el triunfo de Allende— hoy estas condiciones están canceladas: toda la normativa constitucional está concebida para perpetuar la dictadura y otorgar un poder discrecional y omnímodo a quien lo ejerce.

Desde otra perspectiva, tampoco basta con acceder al poder por las vías democráticas, de ser ello posible: el golpe del 73 se dio contra un gobierno popular, que respetó escrupulosamente las reglas inscritas en la Constitución, tanto en su instalación como en el propósito de establecer un orden socialista por vías legales. Propalando una versión delirante de los efectos de las reformas en curso y con el apoyo de los partidos burgueses, de los tribunales y la prensa capitalista, de las corporaciones patronales, del gobierno norteamericano y sus servicios secretos, de las compañías multinacionales, en fin, se alzó en armas el Ejército. Es decir, cuando un pueblo decide dar a la democracia una dimensión socialista, el frente de las fuerzas reaccionarias prefiere sepultar la democracia. Conviene no olvidarlo. De tal experiencia se desprende que no son los revolucionarios ni los marxistas quienes deban hoy ofrecer garantías de lealtad hacia la democracia, sino al revés, aquéllos que ya una vez se conjuraron para destruirla y bailaron desaprensivamente sobre sus escombros.

Con esta experiencia a las espaldas, es difícil ir más allá de lo expresado en el Programa del 47: “este desplazamiento (del poder político desde la minoría capitalista a la clase trabajadora) —dice— será necesariamente la culminación de un proceso orgánico, que se realizará en la superficie de la vida histórica en la forma que determine la resistencia que ofrezcan los grupos privilegiados a las fuerzas en ascenso de la revolución socialista”. “La condición revolucionaria del socialismo (...) —concluye— no depende, por lo tanto, de los medios que emplea para conseguir sus fines”. Ni tampoco —añadiríamos nosotros— depende de ellos su condición democrática.

III

Producida la transferencia del poder político, el problema de la compatibilidad de la democracia y el socialismo se plantea en otros términos y nos enfrenta a la cuestión de la “dictadura del proletariado”, tema largamente debatido en la literatura de izquierda.

Como se sabe, Marx fue notoriamente parco en la formulación de esta tesis; sólo se refiere a ella en tres ocasiones y siempre en textos de importancia menor. Mientras en “La lucha de clases en Francia” la expresión está fuertemente impregnada de un ámbito polémico (que Engels recoge más tarde, exasperando su propósito provocatorio), y se asimila en el texto al gobierno de la clase obrera, vuelve a emplear la fórmula de la dictadura en términos más explícitos y persuasivos en su carta a Weydemeyer, sosteniendo que el aporte suyo a la teoría de las clases se circunscribe a ser demostrado: 1º) que la existencia de las clases está ligada solamente a determinada fase de desarrollo histórico de la producción; 2º) que la lucha de clases necesariamente conduce a la dictadura del proletariado; 3º) que esta dictadura constituye sólo el pasaje a la supresión de todas las clases y a una sociedad sin clases”.

En la “Crítica al programa de Gotha” se expresa así: “entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista está el período de la transformación revolucionaria de una en otra: a ello corresponde un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado.”

Ni en estos escritos ni en otro alguno se detuvo Marx a describir la forma política de la “dictadura”, de donde nacen las discrepancias de nuestros propios documentos teóricos. Nos parece que una correcta lectura de las tesis marxianas debiera tener en consideración:

a) Que el Estado es siempre la cristalización institucional de un dominio de clase, cualquiera que sea el grado de participación y el ámbito de garantías de que gozan sus ciudadanos. En cuanto el fin de todo Estado es el de proteger y reproducir un cierto modo de producción, está al servicio de la clase dominante, lo que lleva a Marx a sostener que todo Estado es, en un grado o en otro, una “dictadura”. Un concepto explícitamente recogido por Lenin en “Estado y Revolución”: “Las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente variadas, pero su sustancia es única: todos estos Estados son de un modo u otro, pero en último análisis, necesariamente, una dictadura de la burguesía”. Lo que singularizaría el Estado proletario sería la circunstancia de estar destinado a disolverse paralelamente a la desaparición de las clases.

Salta a la vista la impropiedad del empleo extensivo de la voz dictadura (al menos en su acepción contemporánea y corriente) que parece dirigido a disipar toda ilusión acerca del carácter neutral del Estado.

Hoy es generalmente aceptado que todo Estado se asienta en la hegemonía de una clase cuyos intereses son privilegiados en desmedro de los intereses de las clases dominadas, pero tal hegemonía puede ejercerse mediante el uso discrecional y arbitrario del poder político (esto es, de una manera dictatorial) o mediante mecanismos de persuasión, jurídicamente regulados en el marco del Estado de Derecho (es decir, de una manera democrática). Se hace, pues, una

clara diferencia entre la naturaleza del Estado y las formas políticas que asumen los gobiernos; una distinción fundamental para concebir una estrategia política correcta. Así, al asumir el poder los trabajadores se constituyen en clase dominante, y si bien la burguesía percibirá ese régimen como una dictadura (en la medida que sustituye las antiguas relaciones capitalistas de producción) en los hechos se tratará de una ampliación real y sustancial de la democracia.

b) Que, aún en su formulación original y sumaria, la “dictadura” del proletariado se entiende sostenida y ejercitada por el conjunto de la clase trabajadora, al punto de que se le designa indistintamente como “dictadura del proletariado”, “gobierno de la clase obrera” o “autogobierno de los productores”, especialmente en los comentarios de Marx y Engels a la Comuna de París, donde valoran ese episodio revolucionario particularmente por sus características de democracia directa, lo que viene a confirmar la interpretación anterior.

c) Que los mecanismos de Gobierno establecidos en los países del “socialismo real”, aún presentándose como formas de la dictadura del proletariado, han suplantado el autogobierno de los trabajadores por la gestión absolutista del poder por el partido gobernante, reduciendo los órganos de poder popular a un rol puramente simbólico.

De lo dicho se desprende que el programa del 47, al formular el postulado de la República Democrática de Trabajadores, permanece fiel en esencia a la tesis marxiana del Estado, optando, sin embargo, por definir el nuevo régimen por sus rasgos positivos en lugar de caracterizarlo desde el punto de vista de la clase que ha sido despojada del poder. Con mayor razón, luego de doce años de cesarismo militar, porque los valores democráticos han pasado a ser un patrimonio legítimo y una aspiración vehemente de las masas, la alternativa natural a la dictadura.

IV

Precisamente porque la idea de la democracia resume una ardiente esperanza colectiva, el debate político tiende a centrarse en torno a las diferentes connotaciones que ella sugiere. Es un gran objetivo unificador de las fuerzas de oposición, que se viene utilizando para ocultar concepciones radicalmente diversas y aun antagónicas.

Algunas aclaraciones previas se hacen indispensables. Debemos entender la democracia, ante todo, como una categoría histórica, lo que equivale a sostener que su contenido ha variado en los distintos tiempos y lugares. Para decirlo con palabras del programa del 47: “cada etapa del desenvolvimiento histórico ofrece al hombre determinadas posibilidades de libertad, dentro del conjunto de relaciones objetivas que resultan fundamentalmente del régimen de propiedad y de producción”. De ahí que se pueda hablar de la “democracia” de las ciudades

griegas, donde una exigua minoría de ciudadanos libres gobernaba sobre una enorme masa de esclavos, o de potencias “democráticas” en el curso de la Segunda Guerra, para referirse a naciones que mantenían bajo el yugo colonial a una parte considerable de la población del planeta.

Desde tal punto de vista la democracia que conocemos en occidente está condicionada por la estructura de clases de la sociedad que la sostiene; es, en suma, una democracia burguesa donde la igualdad abstracta de los ciudadanos ante el derecho corresponde a una sustancial desigualdad de los hombres en las relaciones de producción. Y no es esta una asimetría desdeñable o secundaria, porque es en la esfera de la economía donde se adoptan las decisiones que determinan las condiciones concretas de la vida de la comunidad. De ahí que para nosotros la democracia que vivimos era una democracia trunca, incompleta y formalista, porque independientemente de la generación electiva de los órganos del poder público, era la clase capitalista —nativa y extranjera— la que manejaba las riendas de poder real. Nuestra insistencia en colocar bajo control social los centros estratégicos de la economía, socializando los medios de producción, correspondía y corresponde a la línea de extender la socialización del poder, para darle a la nueva democracia una dimensión auténticamente igualitaria. Es en este sentido que la democracia y el socialismo —tal como lo entendemos— se integran en una aspiración única e inseparable.

Jurídicamente, el Estado Socialista aspira a suprimir sólo aquellos “derechos” que constituyen la base del sistema de dominación que se propone sustituir; esto es, los que permiten a unos hombres explotar el trabajo de otros. En esencia, desde el punto de vista social tales “derechos” son en verdad privilegios, por cuanto en la realidad sólo pueden usufructuar de ellos unos pocos, aunque en teoría se les reconozcan un valor universal. Así ha ocurrido siempre que se pasa de un modo de producción a otro. De ahí que los actos del Estado que opera el cambio han sido vistos como un despojo por las clases vencidas, porque si formalmente derogar para todos lo que antes constituía un derecho, en la práctica lo suprime solamente para aquella minoría que estaba en condiciones materiales de ejercerlo. (Bastaría recordar la actitud de los dueños de plantaciones en Estados Unidos y el Brasil frente a la emancipación de los esclavos para comprobar cómo una medida de evidente sentido democrático es percibida por los terratenientes como un acto despótico).

Si bien la democracia de trabajadores implica un nuevo orden social, ello no significa desconocer que la democracia burguesa, en relación con regímenes anteriores, serviles o esclavistas, ha logrado avances sustanciales en el ámbito del progreso material y también en la esfera de los derechos políticos y de los valores humanos. Un patrimonio que el socialismo estaba y está decidido a conservar y a enriquecer.

Esta concepción de la democracia como una radical socialización del poder en todas sus formas, como sustancial extensión de la capacidad de decisión del pueblo y del autogobierno, superando los privilegios de clases, ha estado siempre implícita en la mentalidad del partido y contradice los injustificados reproches de quienes nos atribuyen una pretérita insensibilidad hacia los valores democráticos tradicionales. A nuestro juicio, si tratáramos de encontrar una clave objetiva para juzgar el nivel de democratización de una determinada fase histórica, sólo podríamos encontrarla verificando el grado en que el sistema ha contribuido a emancipar las fuerzas del trabajo. Frente a quienes aceptan la democracia exclusivamente como un sistema político destinado a perpetuar el capitalismo, nosotros la concebimos siempre como un ordenamiento institucional que debía garantizar el advenimiento pacífico de los cambios requeridos por la sociedad.

V

Desde el punto de vista político, la estrategia del PSCH se viene inspirando desde hace años en las tesis del Frente de Trabajadores; vale decir, en un sostenido esfuerzo por articular un bloque social capaz de dar respuestas adecuadas a los problemas fundamentales del país y de movilizar tras esas demandas a la mayoría de la población chilena. Pese a la diferencia de perspectivas, hasta el golpe militar del 73 se estimó que tal política debía descansar en un eje constituido por socialistas y comunistas, como agrupaciones representativas de la clase obrera, el segmento más avanzado de la sociedad. Tanto la constitución del Frente de Acción Popular (1956) como de la Unidad Popular (1970) respondió a esta idea fundamental, si bien en el primero la conducción de los partidos marxistas fue preponderante –casi exclusiva– en tanto al proceso de la Unidad Popular se agregaron la izquierda radical y sectores cualitativamente significativos desprendidos de la Democracia Cristiana. La participación victoriosa de la UP en la contienda presidencial de 1970 –oportunidad en que alcanzó el 36,2% de los sufragios– ha hecho olvidar, sin embargo, que seis años antes, bajo las banderas del FRAP, la izquierda había caído derrotada con el 38,6% de los votos, de donde podría deducirse que a la ampliación del arco ideológico del movimiento no correspondió un crecimiento paralelo de su fuerza electoral.

Debe reconocerse que la dirección bipartidista del movimiento popular, con altos y bajos, entre conflictos y compromisos, funcionó con cierta eficacia hasta la instalación del gobierno popular para, desde ese momento, demostrarse dramáticamente inadecuada tanto para imprimir una orientación coherente al conjunto del gobierno y del movimiento como, más adelante, para enfrentar la sublevación militar y organizar la resistencia a la dictadura.

Entre otros factores importantes, la crisis del proceso fue resultado de las graves insuficiencias del mando político, la amarga comprobación de que el eje

socialista-comunista carecía de la unidad de concepciones y perspectivas indispensable para llevar adelante un proyecto de gran enlace. Hasta entonces, la presencia de socialistas y comunistas en la arena política era concebida como una simple contienda por la hegemonía entre tendencias emparentadas por una común vocación marxista, siempre inclinadas a encontrar una línea de compromiso. Por algún tiempo se pensó que las diferencias eran sólo tácticas, o coyunturales, o irrelevantes frente a los graves desafíos de la historia. Había en todo esto una ingenua sobreestimación de la fuerza unificadora de la teoría común, la ilusión de que las discrepancias encontrarían tarde o temprano un momento de síntesis o una solución ecléctica. No obstante, sus respectivos comportamientos prácticos y la divergente interpretación de significativos procesos y acontecimientos chilenos e internacionales han terminado por configurar dos tipos diversos de política popular, una de matriz “bolchevique leninista”, estrechamente ligada a la historia y las características de la política soviética, y otra de carácter “nacional y autonomista”, que sostiene como postulado fundamental la fusión del socialismo y del autogobierno de los trabajadores en la estructura de la sociedad futura.

Disuelta de hecho la Unidad Popular después del golpe, ha perdido también su vigencia la premisa de un entendimiento socialista-comunista como centro de gravedad de la política de izquierda. Crece, en cambio, la convicción de que en la cultura popular existe una potencial “área socialista”, coincidente en sus líneas generales con las elaboraciones del PS histórico, pero que desborda su base tradicional de apoyo. En esta tesis se inspiraron los trabajos de la Convergencia en el exilio y volvemos a encontrarla en la fundamentación del Bloque Socialista en el interior, concebida en uno y otro caso como una plataforma de confluencia de las agrupaciones de orientación socialista (PSCH, MAPU, MOC, Izquierda Cristiana) y de grupos y militantes independientes, y destinada a constituir un centro de integración, iniciativa y movilización de la política popular.

(...) El llamado a una amplia concertación de fuerzas opositoras aun incluyendo sectores de derecha, con vistas a derrocar a Pinochet y su camarilla es sustancialmente correcto; no se divisa otra manera de romper la incondicionalidad de las Fuerzas Armadas, único apoyo efectivo con que actualmente cuenta la tiranía, absolutamente huérfana de sustentación civil. En esta línea, sin embargo, la iniciativa del Pacto Constitucional, tal como fue formulada inicialmente en la reunión de la Convergencia en Madrid (1983), fijaba ciertos límites que en el Acuerdo Nacional aparecen sobrepasados. El Pacto, en efecto, tendía por una parte a extender el frente antidictatorial para acelerar el colapso de la autocracia y, por otra, a asegurar que la eliminación del régimen militar no generaría una situación de caos e ingobernabilidad, como pronosticaban los voceros de la Junta, dado que los pactantes comprometían su leal subordinación a las reglas

de la lucha democrática. Si bien estas ideas están también contenidas en el Acuerdo, se añaden en su texto algunos postulados que podrían insinuar una eventual entente programática, un cierto precompromiso de gobierno. La redacción del documento es lo bastante imprecisa para justificar la duda y, por eso mismo, una explícita aclaración parece necesaria. En caso alguno el Acuerdo podría hacernos partícipes de un proyecto de reconstrucción nacional diseñado por los mismos sectores y entidades empresariales que sostuvieron el programa de desmantelamiento industrial, la destrucción de las organizaciones sindicales y de la legislación del trabajo, el envilecimiento de sueldos y salarios, el endeudamiento frenético de la Nación en beneficio de un reducido núcleo de especuladores. Un plan socialista para levantar el país de la postración actual deberá considerar ante todo, la necesidad de compensar a los trabajadores los inhumanos sacrificios impuestos por el régimen castrense. Una cosa es la renuncia a toda forma de sectarismo para obtener la máxima unidad frente a la tiranía y otra, muy diferente, renunciar a nuestros objetivos fundamentales una vez restaurada la democracia.

Al margen de estas consideraciones, se hace también necesario subrayar que las agrupaciones socialistas limitan su compromiso a los puntos en que existía un acuerdo explícito y claro, y mantienen su natural autonomía en las materias ajenas al Acuerdo. Tal precisión se hace indispensable cuando algunos de los firmantes pretenden vetar toda tentativa de recomposición de la izquierda con la participación del PC, invocando sus disposiciones.

Desde luego, la izquierda en la historia del país no es una mera referencia topográfica; por el contrario, es un protagonista de acentuado perfil cultural, independientemente de los episodios y problemas que alejan o aproximan sus diversos componentes. Nada más natural, entonces, que por encima de sus particularidades tienda siempre a reconstituirse, no obstante los cambios que el tiempo haya operado en su composición y en sus equilibrios internos.

El grado en que se pueden restablecer a corto plazo las relaciones socialista-comunistas y las posibilidades de inserción del PC en un amplio compromiso opositor, dependerá más de aspectos tácticos que de cuestiones sustantivas y también de la medida en que el PC preste su protección a grupos disidentes del socialismo. Sería relativamente fácil concordar una plataforma de lucha inmediata o un programa común, pero quedaría por resolver el problema de los métodos de lucha, que en las circunstancias actuales adquiere una importancia decisiva. Faltarían argumentos para objetar en línea de principios el recurso de la violencia contra un régimen terrorista, a condición de que previamente se hayan ensayado a fondo todas las alternativas políticas y que el empleo de las armas sea una convicción ineludible y generalizada, que no es el caso del Chile de hoy. Indiscutible, en cambio, es la necesidad de renunciar al uso de la fuerza una vez

restablecida la democracia, exigencia que, más que a los comunistas –que han observado lealmente esta regla durante medio siglo– debería dirigirse con más prosperidad a los participantes del Acuerdo que retornan de las filas del “golpismo” sin un asomo de autocritica.

Mientras las fuerzas políticas opositoras alcanzan un despliegue más lógico, desde el punto de vista de sus propias tradiciones, de sus principios y de su implantación social, la Alianza Democrática puede cumplir un papel irremplazable para impedir el desplazamiento de la Democracia Cristiana hacia la derecha y robustecer al mismo tiempo la voluntad de la lucha de las capas medias. La presencia socialista allí será muy útil siempre que no se pretenda transformar la Alianza Democrática en un frente político de centro izquierda destinado a administrar el proceso de transición.

VI

(...) No obstante la vehemencia con que los diversos sectores del socialismo histórico proclaman sus propósitos unitarios, los plazos se alargan y se enconan las disputas entre las diversas fracciones a medida que el tiempo pasa. Es el precio de una curiosa contradicción nacida con la adopción del “marxismo-leninismo” como modelo político y organizativo. Mientras en un plano general, tal decisión tendría a darle una fuerte centralización al mando y a acentuar el verticalismo en el funcionamiento del Partido, los verdaderos promotores del viraje fueron diversas tendencias y corrientes que, cada una a su manera creían representar fielmente el nuevo espíritu. El resultado fue que el Partido no sólo no alcanzó la consistencia monolítica que se buscaba, sino que virtualmente legitimó desde entonces los grupos fraccionales. Cuando el “golpe” desbarató las instancias regulares y decapitó las autoridades legítimas, cada fracción se sintió llamada a asumir de facto la representación total del Partido.

El proceso de unidad podrá avanzar únicamente si se parte de la premisa de que no existe hasta ahora una dirección que pueda hablar en nombre de todos los socialistas.

Reconstruir las bases organizativas que permitan restablecer la voluntad colectiva del Partido, el pleno ejercicio de su soberanía interna, será tarea fatigosa y dependerá fundamentalmente del establecimiento de un auténtico centralismo-democrático, esto es, de mecanismos de decisión verdaderamente libres en la elección de los dirigentes y en la generación de la línea política, y, en un segundo momento, del leal acatamiento de las resoluciones de los organismos competentes, de parte de las mayorías y de las eventuales minorías. Un partido que se propone conducir un complejo proceso histórico no puede renunciar a exigir una fuerte coherencia en la acción a sus representantes y personeros.

Menos aún si se propone como guía y persuasivo organizador del consenso y no como frío instrumento de dominación y control.

Al pluralismo del Bloque debería corresponder una severa disciplina en el Partido Socialista unificado, para servir de punto de referencia al proceso de movilización popular. Disciplina como condición complementaria de la democracia interna, expresada en todos los niveles de la organización en el curso del proceso de elección de sus autoridades y de formación de su voluntad política. En tales períodos es lógico que surjan opiniones dispares, se diseñen corrientes diversas y se adopten decisiones por mayoría, pero sería una grave amenaza para el futuro admitir que tales corrientes cristalizarán en alineamientos permanentes. Si son inevitables en el momento del debate, su legitimación como organismos de facto llevaría a la fatal degradación de la democracia interna, a una suerte de feudalización del Partido, en cuanto ineludiblemente derivan hacia estructuras fraccionales, dotadas de jefaturas propias que imponen un cierto régimen de obediencia a sus adeptos. Como consecuencia, los pronunciamientos de los organismos regulares (núcleos, ampliados, congresos) no serán ya el fruto de una deliberación democrática, sino de componendas adoptadas generalmente a espaldas de los militantes.

Como corolario del rechazo de las fracciones (o como quiera llamárseles) las relaciones del militante con el Partido debe obedecer a la máxima lealtad y transparencia. Toda actividad política oculta, toda afiliación secreta, deteriora la confianza recíproca y conspira contra la eficacia de la acción colectiva. Como contrapartida, debería desaparecer de nuestras normas tradicionales aquella que prescribía sólo dos maneras de salir del PS: o muerto, o expulsado. Más que acto de consciente adhesión a una causa, el ingreso al Partido era estimado casi un sacramento religioso, incompatible con el grado de madurez alcanzado por la sociedad chilena. Si bien la afiliación al Partido debe ser una decisión meditada y solemne, la crisis de las propias convicciones debería autorizar moralmente a abandonar sus filas, sin hacerse acreedor a calificaciones infamantes.

VII

Un aspecto sobre el cual coincide el juicio de la generalidad de los estudiosos es el de vigorosa afirmación de la autonomía del socialismo chileno. Desde su fundación declara su voluntad de independencia respecto de la II y la III Internacionales, que complementa con una visión continental de la lucha popular y una temprana vocación antiimperialista. El nuevo partido creía encontrar en la común historia de las jóvenes naciones de la América Latina y en su vistosa y a veces trágica dependencia de las grandes potencias el soporte natural de una respuesta política original y colectiva, que no podría provenir ni de la Internacional Socialista, modelada en una perspectiva eurocéntrica de la historia, ni de la

Internacional Comunista, gestada bajo la influencia de la revolución soviética, más como instrumento de la política exterior del partido gobernante que como asociación mundial de partidos obreros libres.

En el curso de los años la tendencia autonomista se ha venido consolidando en la medida que se acentuaban los rasgos autoritarios y nacionalistas del régimen soviético. Los procesos contra la vieja guardia bolchevique de los años 30, pero sobre todo el Pacto Germano-Soviético del 39, la ruptura con Yugoslavia el 48, y las intervenciones rusas en Hungría y Checoslovaquia en los años 56 y 68, señalan las etapas más notorias de una actitud crítica que, en tiempos más recientes y de manera más global, llevaron al Partido Socialista a traducir su autonomía en un firme y sistemático rechazo de la política de bloques y de la lógica que la inspira. La misma libertad de juicio en el plano internacional le permitió percibir precozmente el profundo significado revolucionario de la insurrección boliviana del 52, del alzamiento anticolonial argelino y de la rebelión castrista en Cuba, mucho antes que los partidos comunistas rompieran sus reservas y les brindaran su apoyo.

CRITERIOS GENERALES DE REORGANIZACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA

Marzo 1987, Roma, Italia.

1. El rechazo de la fórmula “marxista-leninista” como doctrina, según se plantea en mis “Notas sobre la reconstitución del PSCh” impone la necesidad de diseñar un tipo de organización que sustituya también las concepciones y las prácticas organizativas predominantes en los partidos comunistas formados bajo la tuición de la III Internacional. En efecto, el modelo “marxista-leninista” del partido de vanguardia ofrece ciertas características propias y esenciales:

- El sistema de generación de las autoridades es fundamentalmente el de la cooptación, que se traduce en la propuesta por los órganos superiores de aquellos dirigentes que deben ser elegidos por los escalones inferiores, en lista única y voto público;
- La elaboración de la línea política la lleva a cabo el vértice del partido, recurriéndose a las instancias inferiores sólo para legitimar formalmente su contenido. Las ideas circulan sólo en sentido vertical y, generalmente, sólo desde arriba hacia los órganos de base, obstruyéndose su circulación horizontal entre los órganos del mismo nivel.
- En las naciones que experimentan el llamado “socialismo real”, bajo la dirección de partidos comunistas, se produce una total identificación del Partido con el Estado. Los órganos del poder público son meramente simbólicos y las organizaciones sociales carecen absolutamente de autonomía; desaparece así toda manifestación de democracia mientras las instituciones constitucionales y las agrupaciones de masas son reducidas a un rol puramente ritual.

2. Quienes, para defenderlo o descartarlo, identifican tal sistema con el centralismo democrático se equivocan. Nada más falso. El centralismo democrático correctamente aplicado no es más que la consagración de un principio elemental de la democracia: aquel que en cualquier corporación o cuerpo colectivo reconoce en la mayoría la facultad de expresar la voluntad del conjunto. Principio que no ha sido inventado por los comunistas, sino que está naturalmente incluido en el funcionamiento de toda sociedad verdaderamente democrática. En la vida interna de los partidos comunistas tal forma de expresar la voluntad común

ha sido desvirtuada extremando la autoridad de los órganos centrales, en desmedro de la libertad y la iniciativa de las agrupaciones de base. En suma, prevalece un sistema de “centralismo burocrático”, en abierto contraste con el sistema original.

3. Cuando desechamos la noción marxista-leninista del “partido de vanguardia” como dirección iluminada e infalible de las masas, como encarnación providencial de la causa revolucionaria, no es para concebir el partido como un simple foro de debates y de análisis girando en torno a un asambleísmo perpetuo y estéril, sino para constituir una organización que se propone guiar a las clases oprimidas, procurando sintetizar sus aspiraciones históricas en un programa y articulando el consenso en una voluntad colectiva. Tal papel de conducción será más o menos eficaz según la capacidad de persuasión y la mayor o menor uniformidad con que sus militantes divulguen y apliquen la línea del partido.

4. Entendemos, pues, que un genuino centralismo democrático es un atributo indispensable para darle al cuerpo del partido una participación real en la gestación de la línea política y en la elección de sus dirigentes, y una vez agotada esta fase, imponiendo a cada militante el deber de sostener, en su actuación pública, la política resuelta por la mayoría.

Para neutralizar las tendencias verticalistas, será necesario:

- Abrir y estimular un período de debate interno en vísperas de cada Congreso, cuya publicidad dependerá de las circunstancias políticas generales que viva el país;
- Constituir previamente comisiones encargadas de sintetizar las ponencias presentadas en los diferentes temas; en todos los niveles tales comisiones deben ser amplias y podrán presentar informes de mayoría y minoría;
- Establecer un sistema de votación por listas incompletas en cada una de las instancias que deban elegir órganos de dirección;
- Establecer el principio de la rotación en los cargos, especialmente ejecutivos, poniendo límites a la reelección de los dirigentes.

(La mayor parte de estas normas, escritas o no, fueron aplicadas en el PSP y después en el PS durante el período que va desde 1945 a 1967, lapso durante el cual ejercieron el cargo de Secretario General cinco diversos compañeros).

5. La disciplina en la acción del Partido hace que sus orientaciones sean claras a los ojos del pueblo. Es, por eso, una condición para que su mensaje sea comprendido, gane adeptos, ensanche su base de apoyo y fortalezca su autoridad política. Resultados diametralmente opuestos produciría la tolerancia de diferentes “tendencias” en su seno; esto es, aceptando agrupaciones internas de inspiración política más o menos homogénea y estables en el tiempo. Aunque no se propongan constituir formalmente una fracción orgánica, su influencia

sería nociva para el partido, como lo ha sido para aquellos que las han legitimado. Las “tendencias” o “corrientes”, en efecto, rompen la igualdad política de los militantes, expropián la soberanía de los órganos regulares y pervierten la democracia interna. Si se trata de una corriente constituida espontáneamente, por simples afinidades ideológicas, sin lazos orgánicos, girará necesariamente en torno a las personas que propiciaron su nacimiento, transformándose en los hechos en un clan personalista; si se coagula en grupos orgánicos constituirán, a su vez, un verdadero partido dentro del partido y, en ambos casos al imponer cierta disciplina y determinadas posiciones a sus seguidores, aún contra las convicciones íntimas de algunos, deformarán las decisiones naturales del órgano en cuyo interior operan.

Si la vinculación a las corrientes o fracciones es clandestina o secreta, a los inconvenientes dichos agregarán una mutua desconfianza: resulta lógico deducir que quienes proceden así buscan fraudulentamente el control del partido.

6. Paralelamente a los elementos de descomposición que produce la presencia de corrientes o fracciones en la vida interna, originando trizaduras a veces irreparables, ellas se prestan para ser instrumentalizadas por los adversarios del partido, o en la búsqueda de justificaciones doctrinarias, tienden a suscribir posiciones ideológicas y actitudes políticas de centros externos, poniendo en peligro la identidad y la autonomía del partido. En una delicada fase de reconstrucción y al cabo de largos años de una dispersión que impedía el proceso normal de integración de las ideas en una estrategia común, la formal aceptación de las corrientes sería el peor camino en la búsqueda de una síntesis intelectual y operativa que represente verdaderamente la mentalidad del partido. Son muchos y muy potentes los agentes interesados en desvirtuar nuestra historia y, con ella, nuestro futuro, mediante la manipulación de grupos fraccionales.

7. Es también el momento de precisar el alcance del pluralismo comenzando por reconocer que es concepto relativo: estimular la libre discusión interna no significa que en el partido tienen cabida todas las posiciones; cada colectividad política tiene fronteras culturales e ideológicas naturales, codificadas explícitamente en un conjunto de principios o diseñadas en el curso de su historia. Tales principios pueden ser más amplios o más estrechos, pero deben marcar claramente la línea divisoria con otras organizaciones concurrentes, particularmente con los partidos, cuya razón de ser—más allá de la retórica— es alcanzar el poder para organizar la sociedad de acuerdo con sus modelos ideales. El pluralismo está siempre contenido en cierto campo y no nos exime de la necesidad de trazar el perfil ideológico de la organización.

8. Por ahora las indicaciones que siguen tienen un valor teórico, pero si persistimos en darle expresión orgánica al área socialista cobran una importancia especial.

Estábamos habituados a que alrededor de la estructura estrictamente política del partido funcionaran departamentos sectoriales, encargados de transmitir nuestra línea a los frentes de masas mediante los métodos tradicionales. Nos interesaba más dominar que convencer. Si en el futuro queremos innovar en nuestras relaciones con el movimiento social, haciéndolas más flexibles y democráticas, deberíamos establecer –paralelamente a los órganos políticos de enlace entre los partidos que confluyan en el área socialista– organismos sectoriales comunes (femeninos, juveniles, sindicales, etc., etc.) en los cuales las agrupaciones aliadas delegarían una cuota importante de sus funciones directivas y abrirían espacios para la activa participación de las personas independientes.

9. Otra innovación importante debería ser el establecimiento de un Comité Central amplio; esto es, una especie de parlamento partidario, directamente elegido por el Congreso, como autoridad política superior y sede del control democrático sobre los órganos ejecutivos. Esto, en sustitución de los “Plenos”, donde el peso decisivo de sus miembros titulares y los desiguales grados de representatividad de sus integrantes regionales concurrían a debilitar su poder fiscalizador, por una parte, y su autoridad democrática, por otra.

MENSAJE Y VIGENCIA DE LA TESIS DE ARICCIA

"Convergencia" N° 14 de noviembre de 1988

Han pasado diez años desde que el Senador italiano Lelio Basso dirigió su carta-invitación a un cierto número de exiliados chilenos, convocándolos a un seminario alrededor del tema "El socialismo chileno: historia y perspectivas". Es justo recordarlo ahora, tanto para rendir tributo a su apasionado interés por nuestro proceso político —del que da fe esta iniciativa, promovida semanas antes de su muerte— como por la huella que han dejado en el campo socialista los seminarios realizados en Ariccia, en las cercanías de Roma, como las actividades posteriores que recogieron su espíritu.

Formulando la invitación en términos rigurosamente personales, Basso partía de la idea de que "en las luchas sociales chilenas del último medio siglo nos encontramos en presencia de dos grandes vertientes ideológico-políticas: una comunista (identificada con lo que podríamos llamar el comunismo histórico) y otra socialista, de perfil más difuso pero igualmente robusta y tenaz". Sin proponerse arribar a conclusiones perentorias y formales, se busca identificar los postulados principales del "área socialista" y de verificar el "grado actual de convergencia de sus diversos componentes", para corregir "cierta confusión ideológica", evitar la "multiplicación de centros de dirección competitivos" y corregir las "disparas líneas de acción que amenazaban conducirla a una esterilización creciente, originando un grave vacío en el seno de las fuerzas que combaten contra la dictadura militar".

Las dos reuniones del seminario y otras que las siguieron confirmaron, efectivamente, una amplia coincidencia de posiciones, un estimulante consenso sobre cuestiones vitales, hasta el punto de aconsejar la constitución de organismos permanentes de convergencia —en el ámbito europeo— integrados esta vez por representantes oficiales de las agrupaciones partidistas del exilio.

Ante el actual panorama interno, no muy diverso del que originaba las inquietudes de Lelio Basso y su invitación al seminario, parece útil revisar esos materiales para verificar la vigencia de las tesis, los postulados y los juicios emitidos en el curso de esos debates.

UNA DOBLE VERTIENTE

En nuestros días podemos confirmar la referida bifurcación ideológica y cultural del movimiento popular como un objetivo dato histórico. A la época del seminario las diferencias se situaban en ciertas concepciones globales proyectadas sólo de un modo indirecto en los acontecimientos chilenos. Desde luego, en torno a la estructura de la sociedad y del poder en los países del “socialismo real”. El PC y sus seguidores admitían sin reservas la preeminencia del partido-vanguardia sobre las instituciones del Estado y las organizaciones sociales, en tanto el sector socialista sostenía el carácter democrático del poder popular y se inclinaba decididamente por las formas de autogestión de los productores directos en el campo de la economía. Una segunda zona de conflicto lo constituía la apreciación del rol tanto ideológico como propiamente político de la URSS en el plano mundial. Para los comunistas, estaba fuera de discusión el carácter de control dirigente del PCUS y de la URSS sobre las fuerzas populares¹, así como su lógico corolario: esto es, la facultad del Estado soviético de limitar la soberanía de las naciones asociadas, legitimando su intervención, incluso con medios militares, en nombre del interés colectivo de la “comunidad socialista”. En esta materia el juicio adverso de los socialistas era más categórico, si cabe; ilustrado con la conducta histórica del PS (solidaridad con Yugoslavia en su conflicto con el Cominform, repudio de las intervenciones en Hungría y Checoslovaquia y, más recientemente en Afganistán, por ejemplo). Por último y como consecuencia natural de las discrepancias descritas, mientras para los comunistas el movimiento popular debería ver en el Pacto de Varsovia un potente e indispensable instrumento de apoyo a la causa del socialismo, para los socialistas la presencia dominante de dos bloques militares contrapuestos en la arena mundial tendía a desvirtuar los procesos de liberación, sea reprimiéndolos, sea imponiéndoles condiciones contrarias a su naturaleza como precio de una eventual protección. Todo en función de una lógica bipolar que colocaba en primer plano los intereses hegemónicos de una u otra superpotencia.

Sin embargo, la existencia de tales discrepancias no fue obstáculo en el pasado para generar un cierto paralelismo político que en algunas épocas llevó a compromisos muy estrechos y en otros períodos a situaciones de crisis. Los acuerdos más sólidos generalmente se produjeron en las fases de reflujó del movimiento popular (v.gr., segunda presidencia de Arturo Alessandri; abandono de la fase populista del gobierno de Ibáñez), en busca de una inversión de tendencia ya apoyándose en la previa unificación del movimiento sindical (C.T.Ch, 1936; CUT, 1952), indicación elocuente de la voluntad de resistencia del mundo del trabajo, que presiona a los partidos instándolos a articular una común acción defensiva. Tales momentos de estrecha asociación política, es útil subrayarlo,

se producen siempre en una perspectiva electoral, centrada en el proselitismo y basada en programas de valor más bien didáctico y propagandístico. Necesariamente diferentes deberían ser el estilo, las condiciones y la consistencia de una alianza con expectativas concretas de asumir el gobierno del país. En un pacto de este tipo, como lo demuestra la experiencia de la UP, no bastaba con ganar asientos parlamentarios y municipales, aprovechando las ventajas de una ley que premiaba las coaliciones de partidos, sino que era imprescindible establecer en el mando una capacidad decisoria a la altura de los acontecimientos que inevitablemente desencadenaría la captura del principal centro de poder por las fuerzas de izquierda. En los hechos, tal condición no se cumplió; el eje socialista comunista, concebido como clave de una dirección eficaz, no alcanzó nunca tal capacidad después de la victoria electoral del 70. Ni como conductor del gobierno UP, ni como dirección revolucionaria; ni siquiera como centro de organización de la clandestinidad y del exilio.

La verificación de esta circunstancia condujo a sostener una tesis que parece válida hoy: el eje PC-PS no constituye ya la base irremplazable de una eficaz política de izquierda; una larga experiencia debe incitarnos a buscar nuevos equilibrios, que garanticen una dirección solvente, dinámica y coherente al movimiento popular.

NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD

Entre 1979 y los años que corren, hasta la fundación de la Izquierda Unida, la UP tuvo una existencia puramente nominal. Aparte un corto número de declaraciones dedicadas a dejar constancia de su existencia o a solemnizar alguna fecha histórica, careció absolutamente de capacidad operativa, y cuando se enciende la lucha política en el territorio chileno (1983) y los partidos integrantes resurgen asumiendo un comportamiento de completa independencia, entendiendo caducados los precedentes pactos unitarios. Un motivo determinante de la parálisis de la UP, primero, y de su disolución de facto, después, lo constituyó la persistente exigencia comunista de alcanzar un acuerdo con la DC antes de formular una estrategia global de oposición a la dictadura, en ostensible contradicción con la aspereza de sus actuales ataques a los compromisos de un sector socialista con la DC, particularmente en el seno de la Alianza Democrática.

Para medir el valor actual de la premisa enunciada (colapso del eje socialista-comunista), bastaría recordar la incapacidad de la llamada Izquierda Unida para generar una verdadera política común sostenida sin reservas por el PC y el sector almeydista del PS. No obstante algunas declaraciones genéricas formuladas en conjunto, las discrepancias han sido y son hondas y evidentes en lo

que se refiere a la lucha armada, a las inscripciones electorales, a la manera de encarar el plebiscito; en suma, en todo lo que envuelve una línea estratégica concreta para enfrentar la dictadura. Las distancias que separan la posición comunista de la que sostiene la agrupación socialista más vecina a las concepciones marxista-leninistas son de tal entidad que la Izquierda Unida aparece más bien como una denominación de fantasía y con una capacidad decisional aún más precaria que la mostrada por la UP en sus momentos peores.

Resulta difícil negar, entonces, que la situación no está aún madura para constituir un bloque suficientemente compacto; reconociendo, sin embargo (como se decía en Ariccia) que el factor “izquierda” tiene en Chile un profundo significado histórico, imposible de ignorar, y tendrá también en el futuro, desaparecidas ciertas ambigüedades, un rol decisivo en la remodelación del Chile democrático.

¿Dónde situar, entonces, el punto de apoyo del movimiento popular? En el entendido —es claro— que ahora se trata de reestructurarlo con una solidez y una capacidad de conducción adecuadas al enfrentamiento con una despiadada tiranía y no ya para participar en una ritual campaña electoral.

Las circunstancias que aconsejaban partir desde el “área socialista”, dándole una expresión política unitaria, para promover desde allí una acción común del conjunto de la oposición —sin exclusiones: desde la derecha a la izquierda— para restablecer la democracia y garantizar su funcionamiento; la concertación, en suma, de un **pacto constitucional**, de potencialidad suficiente para desalojar la dictadura y asegurar a todos, después, el escrupuloso respeto de sus normas fundamentales; esas circunstancias, decimos, están vigentes hoy como diez años atrás y correctamente asumidas deben poner en evidencia el falaz chantaje del pinochetismo cuando pronostica el caos como alternativa inevitable de la derrota del poder militar.

MOVIMIENTO DE CONVERGENCIA

De los debates del pasado surge un perfil bastante nítido del contenido, la función y la estructura que debería asumir la fuerza política representativa del “área socialista”. Se le asignaba, desde luego, las características propias de un movimiento, en lugar de concebirla como un tradicional frente único de partidos ligados por vínculos de tipo federativo. Con ello se quería significar que, junto a los partidos constituidos, se abren espacios a la afiliación de personas independientes, así como a la adhesión colectiva de organizaciones sociales y culturales de distinta naturaleza. Probablemente la propuesta más radical consistía en propiciar la fusión de las ramas sectoriales de todos los partidos del área (sindicales, estudiantiles, femeninas, campesinas, profesionales, etcétera) en agru-

paciones únicas, dueñas de una cierta autonomía operativa y abiertas a la adhesión de independientes.

A la flexibilidad de su estructura debería corresponder una clara definición de sus propuestas programáticas y de sus perspectivas estratégicas. Elaboradas esas bases, lo ideológico se reduciría a una esquemática concepción de la sociedad socialista, proyectada consecuentemente sobre los planes de reforma. Esquemática en la medida que permitiera un verdadero pluralismo en el interior del movimiento, sea por la variedad de los procesos intelectuales y de las motivaciones éticas que determinen la adhesión de sus miembros, sea por las múltiples alternativas de soluciones posibles a los problemas planteados. De aquí la insistencia en situar, en el interior de la convergencia socialista, el punto de encuentro, coordinación y alianza de las componentes marxistas y cristianas, concertadas en una común tarea de alcance histórico.

Los postulados básicos del movimiento se enuncian en diversos documentos, entre otros en la carta del Comité de Enlace de Ariccia a los participantes en el seminario: “En efecto –dice– (1) la noción de autonomía en el análisis de la realidad nacional y en la elaboración de una estrategia revolucionaria; (2) la concepción socialista científica como método de interpretación de los fenómenos sociales y como guía para la acción; (3) la común convicción de la necesidad de la confluencia de marxistas y cristianos en el proceso revolucionario; (4) el horizonte latinoamericano como perspectiva esencial de nuestra política internacional; (5) la fiel adhesión a los postulados del no alineamiento y el rechazo de la lógica de bloques en la arena mundial; (6) la convicción de que la democracia sólo alcanza su realización plena en el socialismo y de que el gobierno de los trabajadores debe contar con el apoyo de las mayorías nacionales a través de mecanismos de consenso realmente libres; (7) el respeto de las iniciativas de las masas y de la independencia de sus organizaciones en un ámbito de amplia participación democrática; (8) la generación colectiva de la línea política al interior de la vanguardia y la lucha contra el autoritarismo burocrático en la dirección del partido; (9) la conducción de las masas a través de mecanismos de persuasión y del fomento de las instancias de participación de las bases, constituye –entre otros– un conjunto sustancial de principios comunes para perseverar en el camino propuesto”. Añadía “hemos comprobado, además, una coincidencia total para estimar el principio de la autodeterminación de los pueblos y el derecho de éstos a escoger vías nacionales para alcanzar el socialismo, como la base de una justa y democrática solidaridad internacional. Ninguna doctrina ni el más noble pretexto autorizarían a una nación para inmiscuirse en los asuntos internos de otra, ya que obviamente cualquiera excepción a los principios enunciados operaría siempre y solamente a favor de la nación más poderosa” (Roma, mayo de 1980).

En el informe introductorio al segundo seminario de Ariccia (enero 1980), se subraya “que la tentativa de dar consistencia ideológica y organizativa a un área socialista se coloca firmemente en la perspectiva de la unidad de todas las fuerzas populares. Jamás ha propuesto la disgregación del amplio movimiento que sostuvo la experiencia del gobierno de Salvador Allende –cualquiera que hubiese sido el grado de participación de cada grupo político en particular– sino que busca una articulación más coherente de sus diversos componentes, un alineamiento más lógico de sus seguidores y, en consecuencia, un debate más transparente y explícito entre sus diversas tendencias, como expresión de un pluralismo que constituye una adquisición histórica de la experiencia chilena”.

COMPLEJIDAD Y PROBLEMAS ABIERTOS

No se nos ocultaban entonces ni se nos ocultan ahora las dificultades para establecer una clara línea de separación entre la competencia de los partidos y las funciones del movimiento. Siendo esta cuestión compleja, aunque posible en teoría, una tal definición debe alcanzarse sólo con una alta dosis de pragmatismo. Como en muchos problemas políticos, son las respuestas concretas a los acontecimientos las que, a la larga, confirman o configuran una línea de validez teórica. Hasta nociones utilizadas sin reservas en el actual discurso político se tornan equívocas bajo un examen más exigente. Pasa así con los conceptos de “pluralismo” y “autonomía”. Necesariamente el pluralismo en el interior de una agrupación partidista que reclama un rol de conducción no puede tener la misma amplitud del pluralismo en el seno de una organización social. En uno y en otro caso será la función específica que se asigna al organismo la que sugerirá las fronteras legítimas del debate interno; pero sólo en el curso de la acción esas fronteras adquirirán consistencia y carácter imperativo.

Como en otros fenómenos, es la dialéctica de la conservación y el cambio la que da su fisonomía a las fuerzas políticas y este ha sido un proceso particularmente agudo en las variadas tentativas de reconstrucción del PS histórico. En el curso de su existencia de medio siglo adquirió un perfil excepcionalmente nítido, admitiendo una amplia y a veces áspera confrontación de opiniones, pero rechazando sin términos medios tanto las concepciones socialdemócratas como las del marxismo-leninismo de la tradición staliniana. Como concesión al pluralismo hay quienes intentan introducir y legitimar en su interior esas tendencias, ensamblándolas artificialmente con un pasado que las rechazó siempre o con un proyecto de renovación que desnaturalizaría su presencia política. No faltan tampoco los que consideran la legitimación de las fracciones o corrientes en el partido como condición inseparable del pluralismo. La convergencia, en Europa, no abordó sistemáticamente el tema, estimándolo prematuro.

Algo parecido ocurre con la noción de “autonomía”. Mientras el pluralismo se invoca a veces para diluir el contenido original del socialismo, la manipulación del concepto de autonomía se emplea con una connotación estrecha y formalista. Se la quisiera reducir al simple rechazo de vínculos explícitos de subordinación a alguna potestad internacional, aceptando, en cambio, en los hechos, una autoridad externa que condiciona severamente las opciones políticas. Es, por ejemplo, la interpretación que sugiere el razonamiento del compañero Almeyda cuando sostiene en sus “Propuestas de unidad”². “Desde el punto de vista de fondo creo que la puesta en marcha de un proceso unitario serio y consistente, supone el consenso sobre los siguientes puntos: primero, la contradicción principal que afecta a nuestra sociedad es actualmente la que opone la democracia a la dictadura, **y es a través de ella que se manifiesta**, aquí y ahora, la contradicción fundamental de nuestra época entre capitalismo y socialismo.”

UNA AUTONOMÍA VERDADERA

Ya señalábamos en otro trabajo las implicaciones inevitables de una tal simplificación de la realidad internacional o, mejor dicho, de la caracterización estrechamente ideológica de la contradicción estimada *fundamental* en nuestra época, que deja sin explicación una multitud de conflictos en desarrollo, de carácter religioso, nacionalista, racial, limítrofe, o de otra naturaleza, desde la guerra vietnamita-camboyana a la guerra entre Irán e Irak; desde la rebelión palestina contra Israel al enfrentamiento Angola-Sudáfrica. Pero, sobre todo, la aseveración comentada —a la que se le asigna una jerarquía de principio— subordina los conflictos específicos en el ámbito nacional, los minimiza y los deforma, al considerarlos meras derivaciones de la contienda principal, con una doble consecuencia negativa: (a) desplaza la línea de confrontación de las fuerzas en lucha, al insertarlas en un dilema distinto del que generó el enfrentamiento, y (b) lleva al reconocimiento de que el elemento dominante en el frente socialista en las condiciones contemporáneas de la realidad mundial es el poder económico, político y militar de la URSS. La primera está implícita en la afirmación principal de que en la sociedad chilena “que opone la democracia a la dictadura” se manifiesta aquí y ahora, “la contradicción fundamental en nuestra época entre capitalismo y socialismo”. Los chilenos sabemos que ciertamente la alternativa planteada es democracia o dictadura, pero también es evidente que identificar la oposición al gobierno militar con el socialismo es forzar los hechos y tergiversar sus objetivos. La aceptación de tal planteamiento estrecharía severamente el campo de la resistencia y constituiría un servicio gratuito para Pinochet. Es claro que la tesis de Almeyda está fuertemente condicionada por la posición subjetiva del autor y

por el horizonte intelectual en que se nos toca vivir pasa por trastornos extraordinariamente complejos y, si bien continúa siendo cierto que son los conflictos de clase los que mueven la historia, sería imposible demostrar que todos ellos están contenidos en una visión maniquea de los acontecimientos.

El papel rector de la URSS y la necesidad política de compartir incondicionalmente su conducta dentro y fuera de sus fronteras, se desprende naturalmente del carácter ecuménico, global, que otorga a la contradicción socialismo-capitalismo, pero, más que nada, de su proyección dominante en todo conflicto local, al que transmitiría inevitablemente sus propias alternativas, sustituyendo así la naturaleza misma de la disputa. La opción entonces de los protagonistas menores estaría circunscrita a reiterar su lealtad al poder central del campo socialista, al Estado soviético, a su modelo de sociedad, a sus orientaciones estratégicas. Obviamente tal actitud no es otra cosa que la virtual renuncia a una verdadera autonomía, aunque no se hayan contraído expresos vínculos de obediencia.

Estaría pendiente en consecuencia definir el contenido real de la autonomía referida a una formación política que no renuncie a las alianzas y acepte, en principio, ciertos lazos de interdependencia contratada entre iguales, así como al deber moral que implica la solidaridad más amplia con todos los pueblos que luchan por su liberación social y nacional.

Diría que las tesis surgidas en los coloquios de Ariccia y que llegaron a cristalizar en un órgano de coordinación europeo, tuvieron en el país un eco notable, como un renovado enfoque de la política popular en la lucha contra el poder militar. Desgraciadamente los tropiezos encontrados por el proceso de unidad socialista y las rivalidades por alcanzar mezquinas hegemonías frustraron su implantación en Chile mismo. Un análisis abierto de sus aportes debería servir para replantearlas con nuevo optimismo en un futuro cargado de positivos presagios como consecuencia de la reanimación de la política chilena en la perspectiva de la democracia.

NOTAS

1 Escribe Luis Corvalán, Secretario del PC chileno: "en el informe al pleno de diciembre último (de 1960) del Comité Central de nuestro partido dijimos... 'se debe recordar que el movimiento comunista ha sido desde su origen esencialmente internacionalista y que en él siempre hubo un centro dirigente en el mejor sentido de la palabra, un centro como vanguardia de las ideas avanzadas.

Hace ya mucho tiempo que este centro se encuentra allí" (en la URSS, R.A.] en: *La polémica comunista-socialista*; Prensa Latinoamericana. Santiago, 1961.

2 *Análisis* Santiago de Chile, 13 al 21 de Julio de 1987.

LOS DESAFIOS DEL SOCIALISMO CHILENO

“El Mercurio”, Santiago,
Noviembre 24 de 1989

La vecindad de la reconstitución del socialismo chileno plantea, algunos problemas, no sólo a los militantes, sino a todos los que de una u otras manera nos sentimos ligados al movimiento popular y a sus peripecias; entre otros del carácter y los límites de una renovación indispensable. En efecto, los tiempos cambian; las sociedades cambian; los problemas cambian. Los partidos, sujetos activos del acontecer político, deliberada o intuitivamente dan sus respuestas a las nuevas circunstancias en un continuo proceso de adaptación. Cuando la vida democrática se interrumpe, como ha ocurrido en Chile bajo la dictadura, se acumulan las presiones revisionistas, encaminadas a corregir los retardos y a tomar el paso de las nuevas condiciones. Entonces los partidos son apremiados y estimulados, a veces, a operar mutaciones traumáticas, que ponen a prueba su identidad histórica. Sólo una equilibrada combinación de principios fundamentales y de innovaciones razonables puede preservar su presencia en el nuevo escenario con todo el prestigio de una tradición que les proporcione consistencia y credibilidad.

Mientras un partido se defina socialista no podrá omitir un esquema teórico que sirva de marco y referencia a su acción cotidiana, a menos que se busquen puras y simples posiciones de poder con la cobertura de un cínico pragmatismo. En este plano, como lo expresa la Declaración de Principios de su fundación, “el PS adopta como método de interpretación de la realidad el marxismo, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social”. Una versión feliz en su brevedad porque significa asumir el marxismo como una teoría científica de la sociedad y de la historia y no como una “doctrina” de postulados eternos, al mismo tiempo que ofrece una percepción dialéctica de la realidad objetiva y reconoce al hombre un rol activo en la gestación de su destino. Una concepción, en suma, compatible con la fe religiosa; de ahí que distinguidos teólogos católicos no vacilen en utilizar las categorías marxianas en sus severos análisis de la sociedad capitalista. Abjurar de este compromiso intelectual, en nombre de una secularización del partido, significaría exponerlo a toda clase de contrabandos ideológicos y oportunismos políticos.

Una cuestión diversa es, en cambio, el rechazo del “marxismo-leninismo”

como escuela del pensamiento socialista. Como ha sido explicado en otro lugar, la fórmula se adoptó de modo subrepticio en la Conferencia de Organización de 1967 y fue ratificada después en el Congreso de Chillán, del mismo año, bajo la presión de una fracción extremista extraña a la personalidad histórica del partido (y con la ingenua tolerancia de algunos viejos dirigentes); del mismo grupo que impidió articular una firme colaboración constructiva del partido con el Presidente Allende. Fue aquella una fase ambigua en el desarrollo del Partido, apoyada en una decisión que no obedecía a ningún consenso real.

Igualmente forzada —y nos señalan que con parecida ligereza— se aprobó una resolución en el último congreso del sector dirigido por el compañero Arrate para solicitar el ingreso a la Internacional Socialista, lo que no envuelve, es cierto, el sometimiento a una disciplina externa institucionalizada, pero implica sí una elección de campo en el orden ideológico, del cual se mantuvo distante el socialismo chileno por más de medio siglo. La verdad es que para nosotros el desafío, en el plano intelectual y de la lucha política, fue siempre la elaboración de un socialismo latinoamericano, fuertemente condicionado por la ominosa presencia del imperialismo.

Es cierto; la gestión del régimen militar ha provocado cambios significativos en la estructura de clase de la sociedad chilena, dato indispensable para la reflexión política, así como es notorio el impacto del autoritarismo sobre la sensibilidad colectiva, generando una sustancial revaloración de la democracia, colocada ahora como objetivo prioritario del movimiento popular. Es un resultado comprensible luego de dieciséis años de dictadura. Pero la exigencia de democracia no es un postulado reciente de la izquierda: a lo largo de las últimas décadas las fuerzas de avanzada estuvieron siempre en primera línea en las campañas por darle nuevas dimensiones a la participación democrática. Si alguna reticencia tuvimos frente a la democracia, ella se manifestó con referencia a la “democracia real” de los Somoza y los Stroessner, de las oligarquías y caudillos militares, de la OEA y la diplomacia interamericana, a esa “democracia”, en suma, que sólo servía de etiqueta a gobiernos y regímenes espurios. En Chile mismo —donde mejor fructificó un sistema de libertades— pasamos, en tiempos no tan lejanos, de inspiración reaccionaria, y soportamos diez años de represión bajo el signo de la “Ley de Defensa de la Democracia”.

La larga dictadura nos ha enseñado a concebir la democracia no sólo como un conjunto de normas para dirimir convencionalmente ciertos conflictos políticos y sociales, sino principalmente como expresión orgánica de la soberanía popular y portadora de todos los valores consagrados en los derechos humanos. Queda por comprobar el grado en que tal concepción ha penetrado en la mentalidad de quienes impulsaron o legitimaron el golpe del 73, enfrentados a una democracia que crece en su dimensión social y se extiende a la gestión de la economía.

Por otra parte, el socialismo obedece siempre al imperativo de realizar la justicia social, esto es, de emparejar las oportunidades. La falacia del mito neoliberal de la igualdad de oportunidades, en una sociedad caracterizada por las desigualdades de clase, se revela en toda su magnitud cuando en publicaciones del INE leemos que la faja del 10 por ciento más pobre de las familias chilenas ha incrementado sus ingresos, entre 1978 y 1989, en \$ 6.000 mensuales, mientras el 10 por ciento de las más ricas ha tenido un aumento de \$ 174.400 en el mismo lapso. ¡Un crecimiento 29 veces mayor! En la sociedad capitalista quien pertenece a la clase dominante tiene infinitamente mayores expectativas de vivir, de proteger su salud, de adquirir una profesión y una cultura, de tener acceso a la propiedad y a una existencia cómoda, que aquel que pertenece a las capas proletarias. La economía social de mercado no ha hecho más que profundizar la brecha entre ricos y pobres, agravando de manera brutal la diferencia de opciones. Es esta una verificación obvia que se halla en la raíz de la lucha de clases.

Ni la circunstancia de participar en una empresa nacional de rescate de la democracia, en el más generoso sentido de las palabras, ni el compromiso de colaborar con el gobierno de transición que surgirá de los comicios de diciembre, exime a los socialistas de su responsabilidad como partido de los trabajadores. Es esta calidad la que justifica su presencia en nuestro escenario y condiciona su conducta. Concebir el PS reconstituido como un partido interclasista, como simple partido de opinión, implicaría cancelar un rasgo esencial de su pasado. Y no es que hayamos inventado la lucha de clases o sus proyecciones en la sociedad contemporánea por una perversión especulativa.

La sola confluencia física de las dos principales corrientes socialistas sobre una plataforma de principios sería un factor decisivo para contrarrestar la ofensiva ideológica de las fuerzas conservadoras, terreno en el cual la izquierda da la sensación de replegarse, asilándose en un debate más inmediatamente político. Nos referimos a la difusión de doctrinas como la seguridad nacional y la economía social de mercado, ideologías en cuanto ideas y teorías socialmente generadas por las relaciones de dominación entre las clases y que justifican esas relaciones proporcionándoles una "falsa conciencia", velando o disfrazando los aspectos más duros y antagónicos de la dominación para facilitar la aceptación de la situación de poder y la integración política y social.

En ciertos momentos la oposición de izquierda acusa una moderación excesiva con relación a los cambios proyectados una vez liquidada la dictadura y pareciera hasta compartir tácticamente la tesis de los ideólogos del autoritarismo en su obsesiva "satanización" del Estado y "sacralización" de las instituciones militares. Todo en nombre de una modernización que estaría reñida con lo que hemos conocido siempre como socialismo y estrechamente asociada, en

cambio, con la mítica libertad del mercado. La verdad es que hace muchos lustros que el socialismo chileno ha dejado de crecer en un Estado omnipotente y milagroso, mientras en el área comunista Yugoslavia ensayaba, ya en 1948, un tipo de economía con una amplia participación del mercado. La diferencia con el neoliberalismo reside en la promoción de las empresas de autogestión como sujetos dominantes de la concurrencia, en el sitio que ocupan los monopolios en el mundo capitalista. Nos parece, en suma, que el criterio correcto se expresa en este párrafo de la propuesta programática opositora: “En este contexto, estamos por la amplia utilización de los mecanismos de planificación para el desarrollo. La regulación de un sistema de economía mixta requiere combinar la planificación directa del sector estatal, la concertación con el sector privado y los trabajadores en materias de inversiones e ingresos y las políticas macroeconómicas que orientan el comportamiento del mercado”.

La doctrina de la seguridad nacional, por su parte, tiene su centro en el poder militar, pero sus fines son eminentemente políticos. Bajo la apariencia de una óptima y suprema protección de los intereses nacionales radica en las Fuerzas Armadas una autoridad sobrepuesta a la soberanía popular, en términos que el poder político civil queda subordinado en los hechos al vértice militar, dada la verticalidad jerárquica del mando de las instituciones castrenses. Naturalmente, un ordenamiento estatal de tales características no tiene parentesco alguno con la democracia ni tampoco con la defensa nacional racionalmente entendida. La integridad territorial y la soberanía de un país dependen, como lo sabemos todos, fundamentalmente del grado de unidad y cohesión de sus habitantes para enfrentar un peligro común, evidente o potencial, en tanto las teorías de seguridad nacional comienzan por dividir a su propio pueblo en adeptos al régimen que las invoca y enemigos destinados al exterminio.

Si bien es aconsejable una aproximación prudente al problema militar —como factor determinante del trayecto hacia la democracia—, nada impediría una sistemática campaña de esclarecimiento de tales ideologías y de sus perversas proyecciones en la convivencia nacional.

ALREDEDOR DE LA UNIDAD DE LOS SOCIALISTAS ¿PARTIDO DE QUÉ CLASE? ¿QUÉ CLASE DE PARTIDO?

Publicado en "Convergencia", N° 17,
Enero-marzo 1990, Santiago, Chile.

En los últimos tiempos tienden a multiplicarse los signos enunciativos de una pronta unificación de los principales sectores en que se halla fragmentado el socialismo desde la escisión del 79. Es explicable, tanto porque el conflicto original careció de motivaciones claras y suficientes, como por la urgencia en cubrir un segmento vital del frente opositor a la dictadura. ¿Por qué ahora parece más legítima y factible la reagrupación orgánica de los accionistas después de una tan larga separación? Sin entrar en análisis más dilatados se pueden señalar tres factores fundamentales:

- las convergencias estratégicas de las agrupaciones guiadas por Almeyda y Arrate en la lucha contra la autocracia militar. Luego de algunos titubeos y de una luctuosa comprobación de la solidez del régimen se optó por ensayar a fondo el camino de la lucha política, conquistando crecientes espacios de libertad y desmontando pieza a pieza el aparato autoritario. Coincidieron plenamente en esta línea las dos corrientes principales, empleándose a fondo en su ejecución;
- el empobrecimiento de las concepciones marxista-leninista de estilo soviético y del modelo de sociedad de los países del Este europeo como fuentes de inspiración ideológica. La notable campaña revisionista de Gorbachov, junto con desalentar la imitación servil de la experiencia rusa, ha justificado la tenaz posición crítica sostenida por el PS desde su fundación con respecto a la Unión Soviética, sus instituciones y su política internacional;
- la cada vez más fuerte convicción de que históricamente el socialismo chileno constituye un definido cuerpo de ideas y comportamientos, una vigorosa voluntad colectiva, que exige una expresión orgánica unitaria en el cuadro de la restauración democrática. En otros términos, la trayectoria del PS, desde Grove a Allende, marca una conducta política de coherencia tal que rehusa disgregarse en colectividades diversas, a menos que en su mentalidad y en su accionar se inoculen métodos y

objetivos ajenos a la experiencia chilena. Una buena prueba de lo que afirmamos es la circunstancia que los núcleos principales se siguen proclamando herederos de la misma tradición y leales continuadores de un pasado común.

IDENTIDAD Y RENOVACIÓN

La vecindad de la reconstitución plantea, sin embargo, algunos problemas, no sólo a los militantes sino a todos los que de una u otra manera nos sentimos ligados al movimiento popular y a sus peripecias; entre otros el de el carácter y los límites de una renovación indispensable. En efecto, los tiempos cambian; las sociedades también; los problemas cambian. Los partidos, sujetos activos del acontecer político, deliberada o intuitivamente dan sus respuestas a las nuevas circunstancias en un continuo proceso de adaptación. Cuando la vida democrática se interrumpe —como ha ocurrido en Chile bajo la dictadura— se acumulan las presiones revisionistas, encaminadas a corregir los retardos y a tomar el paso de las nuevas condiciones. Entonces los partidos son apremiados y estimulados, a veces, a operar mutaciones traumáticas que se oponen a su identidad histórica. Sólo una equilibrada combinación de principios fundamentales y de innovaciones razonables puede preservar su presencia en el nuevo escenario con todo el prestigio de una tradición que le proporcione consistencia y credibilidad.

Mientras un partido se define socialista no podrá omitir un esquema teórico que sirva de marco y referencia a su acción cotidiana, a menos que se busquen puras y simples posiciones de poder con la cobertura de un cínico pragmatismo. En este plano, como lo expresa la Declaración de Principios de su fundación, "el PS adopta como método de interpretación de la realidad el marxismo, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social". Una versión feliz en su brevedad porque significa asumir el marxismo como una teoría científica de la sociedad y de la historia y no como una "doctrina" de postulados eternos, al mismo tiempo que ofrece una percepción dialéctica de la realidad objetiva y reconoce al hombre un rol activo en la gestación de su destino. Una concepción, en suma, compatible incluso con la fe religiosa; de ahí que distinguidos teólogos católicos no vacilen en utilizar las categorías marxianas en sus severos análisis de la sociedad capitalista. Abjurar de éste compromiso intelectual, en nombre de una *secularización* del partido, significaría exponerlo a toda clase de contrabandos ideológicos y oportunismos políticos.

Una cuestión diversa es, en cambio, el rechazo del "marxismo-leninismo" como escuela del pensamiento socialista. Como ha sido explicado en otro lugar, la fórmula se adoptó de modo subrepticio en la Conferencia de Organización de

1967 y fue ratificada después en el Congreso de Chillán del mismo año, bajo la presión de una fracción extremista extraña a la personalidad histórica del partido (y con la ingenua tolerancia de algunos viejos dirigentes), del mismo grupo que impidió articular una firme colaboración constructiva del partido con el Presidente Allende. Fue aquella una fase ambigua en el desarrollo del Partido, apoyada en una decisión que no obedecía a ningún consenso real.

Habría que agregar, tal vez, que la versión "marxista-leninista" no contribuye en absoluto a esclarecer el contenido sustantivo de determinadas políticas. Desde Stalin a Mao, desde Pol Pot a Hodxa, desde Marchais a Ceassesco, todos se proclamaron en algún momento discípulos del "marxismo leninismo", sólo para justificar en cada caso una particular forma de sectarismo.

Igualmente forzada -y nos señalan que con parecida ligereza- se aprobó una resolución en el último Congreso del sector dirigido por el compañero Arrate para solicitar el ingreso a la Internacional Socialista, lo que no envuelve, es cierto, el sometimiento a una disciplina externa institucionalizada, pero implica sí una elección de campo en el orden ideológico, del cual se mantuvo distante el socialismo chileno por más de medio siglo. La verdad es que para nosotros el desafío, en el plano intelectual y de la lucha política, fue siempre la elaboración de un socialismo latinoamericano, fuertemente condicionado por la ominosa presencia del imperialismo.

DEMOCRACIA Y SOCIALISMO

Es cierto, la gestión del régimen militar ha provocado cambios significativos en la estructura de clases de la sociedad chilena, dato indispensable para la reflexión política, así como es notorio el impacto del autoritarismo sobre la sensibilidad colectiva, generando una sustancial revaloración de la democracia, colocada ahora como objetivo prioritario del movimiento popular. Es un resultado comprensible luego de dieciséis años de dictadura. Pero la exigencia de democracia no es un postulado reciente de la izquierda: a lo largo de las últimas décadas las fuerzas de avanzada estuvieron siempre en primera línea en las campañas por darle nuevas dimensiones a la participación democrática. La incorporación de las mujeres y los jóvenes al cuerpo electoral, la cédula única y el saneamiento del sistema de votaciones, la generación democrática de las autoridades universitarias, la extensión del sindicato a las faenas agrícolas, la derogación de las leyes restrictivas de los derechos ciudadanos, sobre otros elementos, fueron batallas en que la izquierda se jugó a fondo. Si alguna reticencia tuvimos frente a la democracia, ella se manifestó con referencia a la "democracia real" de los Somoza y los Stroessner, de las oligarquías y caudillos militares, de la OEA y la

diplomacia interamericana, a esa “democracia”, en suma, que sólo servía de etiqueta a gobiernos y regímenes espurios. En Chile mismo -donde mejor fructificó un sistema de libertades- pasamos, en tiempos no tan lejanos, por gobiernos apoyados en milicias privadas, de inspiración reaccionaria, y soportamos diez años de represión bajo el signo de la “Ley de Defensa de la Democracia”. Eran tiempos en que sonaban vigentes las palabras de Lincoln: “el mundo no ha tenido nunca una definición justa de la libertad del mundo y el pueblo norteamericano, precisamente ahora, la necesita urgentemente. Nosotros, todos, estamos por la libertad, pero empleando la misma palabra no expresamos la misma cosa. Para algunos la palabra libertad puede significar que cada hombre haga lo que quiera de sí mismo y del producto de su trabajo; mientras que para otro la misma palabra puede significar que algunos hombres hagan lo que les dé la gana con otros hombres y con el producto del trabajo de éstos. Aquí nos encontramos, pues, ante dos o más cosas no sólo diferentes, sino incompatibles, expresadas con la misma palabra libertad. De donde se deduce que cada una de estas cosas se ve llamada por las partes respectivas con dos nombres diferentes, incompatibles: libertad y tiranía.”

La larga dictadura nos ha enseñado a concebir la democracia no sólo como un conjunto de normas para dirimir convencionalmente ciertos conflictos políticos y sociales, sino principalmente como expresión orgánica de la soberanía popular y portadora de todos los valores consagrados en los derechos humanos. Queda por comprobar el grado en que tal concepción ha penetrado en la mentalidad de quienes impulsaron o legitimaron el golpe del 73, enfrentados a una democracia que crece en su dimensión social y se extiende a la gestión de la economía.

EMPAREJAR LAS OPORTUNIDADES

Por otra parte, el socialismo obedece siempre al imperativo de realizar la justicia social, esto es de emparejar las oportunidades. La falacia del mito neoliberal de la *igualdad* de oportunidades, en una sociedad caracterizada por las desigualdades de clase, se revela en toda su magnitud cuando en publicaciones del INE leemos que la faja del 10% más pobre de las familias chilenas ha incrementado sus ingresos, entre 1978 y 1989, en \$ 6.000 mensuales, mientras el 10% de las más ricas ha tenido un aumento de \$ 174.400 en el mismo lapso. ¡Un crecimiento 29 veces mayor! En la sociedad capitalista quien pertenece a la clase dominante tiene infinitamente mayores expectativas de vivir, de proteger su salud, de adquirir una profesión y una cultura, de tener acceso a la propiedad y a una existencia cómoda, que aquel que pertenece a las capas proletarias. La

economía social de mercado no ha hecho más que profundizar la brecha entre ricos y pobres, agravando de manera brutal la diferencia de opciones. Es esta una verificación obvia que se halla en la raíz de la lucha de clases.

Ni la circunstancia de participar en una empresa nacional de rescate de la democracia, en el más generoso sentido de las palabras, ni el compromiso de colaborar con el gobierno de transición que surgirá de los comicios de diciembre, exime a los socialistas de su responsabilidad como *partido de los trabajadores*. Es esta calidad la que justifica su presencia en nuestro escenario y condiciona su conducta. Concebir el PS reconstituido como un partido interclasista, como simple partido de opinión, implicaría cancelar un rasgo esencial de su pasado. Y no es que hayamos inventado la lucha de clases o sus proyecciones en la sociedad contemporánea por una perversión especulativa. Refutando una imputación de éste género Marx ha escrito: "No me pertenece a mí ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases sociales en la sociedad moderna, ni de haber descubierto la lucha entre ellas. Mucho antes de que yo, historiadores burgueses habían expuesto la evolución histórica de esta lucha de clases y economistas burgueses habían expuesto la anatomía económica de las clases" (traducido del italiano: "Marx-Engels, Sul Materiamo Storice", Rinescita, Roma 1949).

DICTADURA E IDEOLOGÍA

La sola confluencia física de las dos principales corrientes socialistas sobre una plataforma de principios sería un factor decisivo para contrarrestar la ofensiva ideológica de las fuerzas conservadoras, terreno en el cual la izquierda da la sensación de replegarse, asilándose en un debate más inmediatamente político. Nos referimos a la difusión de doctrinas como la *seguridad nacional* y la *economía social de mercado*, ideologías en cuanto ideas y teorías socialmente generadas por las relaciones de dominación entre las clases y que justifican esas relaciones proporcionándoles una "falsa conciencia", velando o disfrazando los aspectos más duros y antagónicos de la dominación para facilitar la aceptación de la situación de poder y la integración política y social.

En ciertos momentos la oposición de izquierda acusa una moderación excesiva con relación a los cambios proyectados una vez liquidada la dictadura y pareciera hasta compartir tácitamente las tesis de los ideólogos del autoritarismo en su obsesiva "satanización" del Estado y "sacralización" de las instituciones militares. Todo en nombre de una *modernización* que estaría reñida con lo que hemos conocido siempre como socialismo y estrechamente asociada, en cambio, con la mítica libertad del mercado. La verdad es que hace muchos lustros

que el socialismo chileno ha dejado de creer en un Estado omnipotente y milagroso, mientras en el área comunista Yugoslavia ensayaba, ya en 1948, un tipo de economía con una amplia participación del mercado. La diferencia con el neo-liberalismo reside en la promoción de las empresas de autogestión como sujetos dominantes de la concurrencia, en el sitio que ocupan los monopolios en el mundo capitalista. Nos parece, en suma, que el criterio correcto se expresa en este párrafo de la propuesta programática opositora: "en este contexto, estamos por la amplia utilización de los mecanismos de planificación para el desarrollo. La regulación de un sistema de economía mixta requiere combinar la planificación directa del sector estatal, la concertación con el sector privado y los trabajadores en materias de inversiones e ingresos y las políticas macroeconómicas que orientan al comportamiento del mercado."

La doctrina de la seguridad nacional, por su parte, tiene su centro en el poder militar para sus fines que son eminentemente políticos. Bajo la apariencia de una óptima y suprema protección de los intereses nacionales radica en las Fuerzas Armadas una autoridad sobrepuesta a la soberanía popular, en términos que el poder político civil queda subordinado en los hechos al vértice militar, dada la verticalidad jerárquica del mando de las instituciones castrenses. Naturalmente, un ordenamiento estatal de tales características no tiene parentesco alguno con la democracia ni tampoco con la defensa nacional racionalmente entendida. La integración territorial y la soberanía de un país dependen, como sabemos todos, fundamentalmente del grado de unidad y cohesión de sus habitantes para enfrentar un peligro común, evidente o potencial, en tanto las teorías de seguridad nacional comienzan por dividir a su propio pueblo en adeptos al régimen que las invoca y los enemigos destinados al exterminio.

Si bien es aconsejable una aproximación prudente al problema militar —como factor determinante del trayecto hacia la democracia— nada impediría una sistemática campaña de esclarecimiento de tales ideologías y de sus perversas proyecciones en la convivencia nacional.

DEMOCRACIA INTERNA Y DISCIPLINA

También en el terreno organizativo se justifican algunas observaciones. En líneas generales, se tiende a reproducir la estructura y procedimientos reglamentarios del Partido, anteriores al golpe, con algunas variantes, cuyos efectos sobre la orientación política futura no son indiferentes.

Ante todo, debemos suponer desechada la clásica versión del partido -vanguardia, intérprete exclusivo e infalible de los intereses populares, encarnación mesiánica de la voluntad de las masas. El Chile que emerja de la dictadura -

esperemos- será más maduro y más inclinado a la participación del que conocimos antes y, frente a tal realidad, los partidos de clase sólo pueden aspirar a servir como *guías* del movimiento, sujetos a una continua verificación crítica de sus orientaciones estratégicas y operativas.

Dos consecuencias pueden derivarse de esta nueva situación. La primera, que el estilo de relación del partido con las masas, con las organizaciones sociales, debe cambiar; en lugar de perseguir el simple control político de sus instancias directivas se debería establecer una comunicación de doble sentido: desde la periferia al centro, para procesar de modo constante la información adecuada, y del centro a la periferia con las indicaciones del curso de acción recomendado. Como método la persuasión en lugar de los golpes de mayoría.

La segunda consecuencia consiste en introducir en el partido prácticas que compatibilicen la democracia interna con la disciplina. Efectivamente, las deformaciones sufridas en los hechos por el sistema del *centralismo democrático* invitan a cautelar cuidadosamente la voluntad colectiva, comenzando desde la base. Como la más alta y calificada instancia reglamentaria, corresponderá al Congreso General hacer el balance del desempeño de las autoridades nacionales, diseñar la línea política y elegir a los nuevos dirigentes. Dada la jerarquía y la importancia del Congreso, su sola convocatoria debería abrir un período de libre debate en torno a su agenda, pero una vez adoptadas las resoluciones pertinentes nadie debería excusarse de cumplir con sus acuerdos. Una disciplina firme en la actuación pública de sus militantes es condición básica para darle autoridad y fuerza al mensaje del partido y para que éste cumpla su rol de guía.

LA CUESTIÓN DE LAS FRACCIONES

Buscando modalidades organizativas para reforzar la democracia interna, el PS (Arrate) ha introducido diversas innovaciones que, a nuestro juicio, lejos de cumplir ese objetivo influirán negativamente, sobre todo porque tienden a personalizar el debate político y a fomentar la inclinación de las tendencias a cristalizar en fracciones permanentes.

Con relación a la elección directa del Comité Central por la base bastaría señalar la notoria e injusta ventaja electoral de aquellos candidatos que están en condiciones de recorrer el territorio o disponen ya de una situación de mando en la Dirección Nacional, obstruyendo así la natural promoción de nuevos valores, particularmente de aquellos formados en las provincias. En esta materia mucho más funcional y fluido es el sistema tradicional de sucesivos congresos, seccionales, regionales y general. Si además, con el nuevo sistema, se realiza la elección en vísperas del Congreso General, no sólo se despoja a éste de una

de sus facultades elementales, también se le priva de sus atribuciones de control y fiscalización de lo operado en el período precedente: el anterior Comité Central ya ha terminado su mandato y el nuevo recién ha comenzado a ejercer el suyo. Será, además, inevitable colocar a la cabeza de las listas de candidatos a la Dirección Nacional a aquellos compañeros de mayor popularidad y prestigio, con lo cual se diseña ya una constelación de núcleos fraccionales. El resto lo hará la mecánica de la disputa electoral: cada grupo se esforzará por diferenciarse de los otros asignándose una singular identidad.

Es comprensible que la unificación del socialismo debe pasar por una etapa de fusión imperfecta, de corrientes más o menos informales, herederas de las anteriores “orgánicas”, pero no sería inteligente estimular los factores que conducen a legitimar las fracciones. Los ejemplos abundan para comprobar como el juego de fracciones deteriora moralmente la convivencia interna y degrada la democracia. Sería ocioso añadir como las pugnas de este tipo abren generosas oportunidades de infiltración a fuerzas externas.

Aparentemente, la existencia de tendencias organizadas sería una garantía de pluralismo y condición de la libre confrontación de opiniones. La experiencia muestra, en cambio, resultados exactamente contrarios: en el interior de las corrientes se establece gradualmente una micro-disciplina de grupo con el objeto de presentarlo homogéneo en el trato con las otras corrientes, que impida a las eventuales minorías exteriorizar su disenso cuando la discusión se traslada al seno del pertinente organismo reglamentario. Así la verdadera voluntad colectiva resulta falseada. En suma, el debate será más rico y más auténtico cuando menos cristalizadas estén las tendencias, cuanto menos condicionadas por esas micro-lealtades estén las opiniones individuales.

A medida que se acentúa y personaliza el liderato en los diferentes grupos, los compañeros que lo ejercen pasan a sustituir paulatinamente la deliberación en los órganos regulares por acuerdos entre los personeros de las distintas tendencias. La consecuencia es evidentemente nociva: los órganos de dirección son de hecho privados de sus atribuciones y la democracia interna pasa a ser un mito. La situación no cambia mucho si con el patrocinio de los jefes de corrientes determinadas resoluciones son sometidas a la decisión formal de un órgano colegiado: el peso político de los promotores da por descontada la aprobación de cualquier propuesta.

APUNTES PARA LA CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN

Depto. Nacional de Organización
del PSCH, junio 1991.

Pienso que la Dirección Nacional del Departamento de Organización está en el camino justo al promover reuniones como ésta para motivar a los militantes en el estudio metódico de las normas que habrán de regir en el Partido Socialista, una vez terminado el período de su reconstrucción. Es una valiosa iniciativa porque el proceso de unidad, apremiado por diversas circunstancias políticas, dejó de mano algunas tareas fundamentales, entre ellas, la determinación de la estructura y de la forma de funcionamiento del Partido, materias que parecieran ideológicamente neutras y, por tanto, fáciles de abordar y de resolver. No es así, sin embargo; la adopción de un determinado tipo organizativo y de ciertos procedimientos de decisión puede condicionar fuertemente su carácter y sus orientaciones políticas sustantivas. Por otra parte, la próxima Conferencia de Organización y, poco después, la Conferencia de Programa, como instancias ampliamente legitimadas por una gestión unitaria, están destinadas a establecer en términos definitivos la colocación y el perfil del Partido en la arena política chilena.

Por cierto, también la Conferencia nos planteará el problema de la "renovación", o más bien del alcance y los límites del proceso de renovación en curso. Es obvio que los tiempos cambian, cambian las sociedades y también los temas de la lucha política. Los partidos, protagonistas activos del acontecer político, deliberada o instintivamente se ajustan a las nuevas circunstancias en un continuo esfuerzo de adaptación. Entre nosotros, la brusca interrupción en la vida democrática y los dieciséis años de dictadura militar han hecho que se acumulen las presiones reformistas encaminadas a corregir los retardos y a adaptar el paso a las nuevas condiciones, pero llega un momento en que los cambios recomendados ponen a prueba la identidad histórica del Partido, de modo que sólo una equilibrada combinación de principios fundamentales y de innovaciones razonables pueden preservar su presencia en el nuevo escenario, con todo el prestigio de una tradición que le proporciona credibilidad y consistencia. Esperamos que la Conferencia de Organización programada por la Dirección del Partido nos proporcionará la ecuación correcta.

Como enfoque general y punto de partida de nuestras reflexiones, desde una perspectiva organizativa, parece necesario distinguir entre la definición histórica

de nuestra colectividad como un **Partido de los Trabajadores** y la concepción de un Partido de "opinión", alternativa que ilustra bastante bien el dilema con que nos encontraremos: el de escoger uno de los dos modelos, optando por el que mejor se adapte a las condiciones concretas de la contienda política en Chile.

La noción de partido "de opinión" o de "Ciudadanos" o interclasista, se proyecta en el futuro como fenómeno de contenido y de estilo, estrechamente asociada a la propuesta de hacer de la "**asamblea**" local la estructura de base del Partido, en sustitución del núcleo de vecindad de domicilio o de sitio de trabajo, que fue hasta el golpe militar el organismo primario y sede de la actividad de los militantes.

La alternativa es bastante clara. Mientras el régimen de asamblea estimula una actividad preferentemente discursiva, a cargo de las personas de mejor formación cultural, con débil o ninguna vinculación con el medio laboral o vecinal del militante, la organización nuclear, en cambio, si bien no alcanzó un desarrollo parejo y general, demostró en todo caso su potencial capacidad para interesar a sus miembros en la ejecución de tareas concretas, íntimamente relacionadas con su ambiente vecinal y de trabajo. Un partido que se propone alcanzar la emancipación de los trabajadores de toda forma de explotación necesita recoger la más amplia información posible de los sectores sociales que constituyen su apoyo natural, para después elaborar con ella sus objetivos políticos y programáticos. Ni las circunstancias de participar en una trascendental empresa nacional de rescate de la democracia, en el más generoso sentido de las palabras, ni el compromiso de colaborar con el Gobierno de transición, exime a los socialistas de su responsabilidad como Partido de los trabajadores. Es esta la calidad que justifica su presencia en la sociedad chilena y condiciona su conducta. Concebir el Partido Socialista reconstituido como un partido interclasista, como simple Partido de opinión, implicaría cancelar un rasgo esencial de su pasado. Es posible que la sola referencia a las clases sociales provoque un desdeñoso rechazo de quienes aconsejan extremar la "renovación" hasta un grado incompatible con nuestra historia. Refutando una crítica de género parecido, Marx contestaba: "no me pertenece a mí ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases sociales en la sociedad moderna ni de haber descubierto la lucha entre ellas. Mucho antes que yo historiadores burgueses habían expuesto la evolución histórica de esta lucha de clases y economistas burgueses habían expuesto la anatomía económica de las clases".

Desde el punto de vista de su vida interna, debemos suponer desechada la clásica versión del Partido-vanguardia, intérprete exclusivo e infalible de los intereses populares, encarnación mesiánica de la voluntad de las masas. En Chile que emerge de la dictadura es más maduro y más inclinado a la participación del

que conocimos antes y, frente a tal realidad, los partidos de clase sólo pueden aspirar a servir como guías del movimiento popular si se sujetan a una continua verificación crítica de sus orientaciones estratégicas y operativas.

Dos consecuencias pueden derivarse de esta nueva situación. La primera, que el estilo de la relación del Partido con las masas, con las organizaciones sociales, debe cambiar. En lugar de perseguir el simple control político de sus instancias directivas se debería establecer una comunicación de doble sentido: desde la periferia al centro, donde de un modo constante se debe procesar la información adecuada, y del centro a la periferia con las indicaciones del curso de acción recomendado. Como método, la persuasión en lugar de los golpes de mayoría.

La segunda consecuencia consiste en introducir en el Partido prácticas que compatibilicen la democracia interna con la disciplina. Efectivamente, las deformaciones sufridas en los hechos por el sistema del **centralismo democrático** invitan a cautelar cuidadosamente la voluntad colectiva, comenzando desde la base. Como la más alta y calificada instancia reglamentaria debería corresponder al Congreso General hacer el balance del desempeño de las autoridades nacionales, diseñar la línea política y elegir a los nuevos dirigentes. Dada la jerarquía e importancia del Congreso, su sola convocatoria debería abrir un período de libre debate en torno a su agenda, pero una vez adoptadas las resoluciones pertinentes nadie debería excusarse de cumplir con sus acuerdos. Una disciplina firme en la actuación pública de sus militantes es condición esencial para darle autoridad y fuerza al mensaje del Partido y para que este cumpla su rol de guía.

Buscando modalidades organizativas que refuercen la democracia interna, el Partido Socialista ha introducido diversas innovaciones que, a nuestro juicio, lejos de cumplir ese objetivo influirán negativamente, sobre todo porque tienden a personalizar el debate político y a fomentar la inclinación de las tendencias a cristalizar en fracciones permanentes.

En cuanto a la elección directa del Comité Central por la base en un colegio único nacional, bastaría señalar la notoria e injusta ventaja electoral de aquellos candidatos que están en condiciones de recorrer el territorio o disponen ya de una situación de mando en la Dirección Nacional, obstruyendo así la natural promoción de nuevos valores, particularmente de aquellos formados en las provincias. En esta materia, mucho más funcional y fluido era el sistema tradicional de sucesivos congresos seccionales, regionales y general. Si además, con el nuevo sistema se realiza la elección en vísperas del Congreso General, no sólo se despoja a éste de una de sus facultades fundamentales, también se le priva de sus atribuciones de control y fiscalización de lo operado en el período precedente: a esta fecha el anterior Comité Central ya ha agotado su mandato, en

tanto que el nuevo recién ha comenzado a ejercer el suyo. Será, además, inevitable colocar a la cabeza de las listas de candidatos a la Dirección Central a aquellos compañeros de mayor popularidad y prestigio, con lo cual se diseña ya una constelación de grupos fraccionales. El resto lo hace la mecánica de la disputa electoral: cada grupo se esforzará por diferenciarse de los otros asignándose una identidad singular.

Es comprensible que la unificación del socialismo debe pasar por una etapa de fusión imperfecta, de corrientes más o menos informales, en cierto modo herederas de las anteriores "orgánicas", pero no sería inteligente estimular los factores que conducen a legitimar las fracciones. Abundan los ejemplos que comprueban cómo la pugna de fracciones deteriora moralmente la convivencia interna y degrada la democracia. Sería ocioso añadir cómo las querellas de este tipo abren generosas oportunidades de infiltración a fuerzas externas.

Aparentemente, la existencia de tendencias organizadas sería una garantía de pluralismo y condición de la libre confrontación de opiniones. La experiencia muestra, en cambio, resultados exactamente contrarios: en el interior de las corrientes se establece gradualmente una micro-disciplina de grupo con el objeto de presentarlas homogéneas en el trato con las otras corrientes, lo que impide a las eventuales minorías exteriorizar su disenso cuando la discusión se traslada al seno del pertinente organismo reglamentario. Así, la verdadera voluntad colectiva resulta falseada. En suma, el debate será más rico y más auténtico cuando menos cristalizadas estén las tendencias, cuando menos condicionadas por esas micro-lealtades estén las opiniones individuales.

Entendemos, pues, que un genuino centralismo democrático es un atributo indispensable para darle al cuerpo del Partido una participación real en la gestación de la línea y en la elección de sus dirigentes y, una vez agotada esta fase, imponer a cada militante el deber de sostener, en su actuación política, la línea resuelta por la mayoría.

Para neutralizar las tentaciones verticalistas sería necesario:

- Abrir y estimular un período de debate interno en vísperas de cada Congreso, cuyo grado de publicidad dependerá de las circunstancias políticas generales que viva el país;
- Constituir previamente comisiones encargadas de recibir y sintetizar las ponencias presentadas en los diferentes temas. En todos los niveles tales comisiones deben ser amplias y estarían facultadas para presentar informes de mayoría y minoría;
- Establecer un sistema de votación por listas incompletas en cada una de las instancias que deban elegir órganos colectivos de dirección; establecer el principio de la rotación en los cargos, especialmente ejecutivos, poniendo límites a la reelección de los dirigentes.

Con la Conferencia de Programa llegará el momento de precisar el alcance del **pluralismo**, comenzando por reconocer que es un concepto relativo; estimular la libre discusión no significa que el Partido tienen cabida **todas** las posiciones. Cada colectividad política tiene fronteras culturales e ideológicas naturales, codificadas explícitamente en un conjunto de principios o diseñadas en el curso de su historia. Tales principios pueden ser más amplios o más estrechos, pero deben marcar claramente la línea divisoria con otras organizaciones concurrentes. El pluralismo está siempre contenido en un determinado espacio político y no nos exime de la necesidad de trazar el perfil del Partido Socialista en ese campo como **partido de los socialistas**.

NOTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN EL PARTIDO

Santiago, diciembre de 1992.

Lograda formalmente la unificación del Partido, hemos descubierto que no se trataba sólo de colocar al grueso de los militantes bajo una dirección común, sino de reconstruir una alma colectiva, una identidad histórica, una visión estratégica que reuniera a quienes se definen como socialistas, en un clima de colaboración creadora para proyectar en el futuro la vigorosa presencia del Partido.

Es necesario reconocer que esa fusión plena no se ha logrado todavía. No tanto como secuela de una escisión derivada de las antiguas “orgánicas”, sino como resultado de contrastes entre agrupamientos internos que, en los hechos, se han visto alentados por el tipo de organización y funcionamiento implantado con excesiva premura. Es también evidente que existe una estrecha relación entre las formas orgánicas y operativas y el grado de acatamiento y legitimidad de las decisiones políticas.

El cambio más visible con respecto a la reglamentación tradicional lo constituye la elección del Comité Central por votación directa, realizada en la víspera del Congreso General, en todo el territorio del país. Se presentó esta modalidad como un avance de la democratización en la vida interna, en circunstancias que su aplicación práctica ha puesto de relieve, por el contrario, una insuperable e injusta ventaja para los postulantes que disponen de recursos económicos abundantes o de medios publicitarios superiores. Se traslada al seno del Partido, en consecuencia, una disparidad de opciones que frecuentemente condenamos como un aspecto negativo de la democracia.

Por razones semejantes el sistema tiende a bloquear el acceso de nuevos cuadros a los niveles directivos, particularmente de aquellos que provienen de las provincias, y a “congelar” la composición de las instancias superiores, en perjuicio de su fluido recambio.

Independiente de las consideraciones anteriores, conspira contra la lógica y la coherencia de nuestro comportamiento político la elección del más alto organismo permanente y colegiado —el Comité Central— en vísperas del Congreso General, autoridad suprema y soberana del Partido, que resulta expropiado de sus facultades esenciales: la de examinar y juzgar el desempeño individual y

colectivo de los conductores nacionales del Partido en el período precedente y de elegir para la nueva etapa a los dirigentes que mejor encarnan la línea diseñada por el Congreso mismo. El examen retrospectivo resulta un ejercicio virtualmente inútil en la medida que se ha caducado el mandato del grupo responsable de su gestión, en tanto el nuevo equipo de la Dirección Nacional (con el respaldo de una votación directa como fuente de su autoridad), ha sido promovido sin conexión alguna con el proceso de formación de la voluntad política del Partido.

Experimentalmente se ha comprobado que tal sistema es, además, costoso, si no queremos caer en las mismas anomalías de la elección reciente. El alto número de cargos a llenar y la multiplicidad de boletas de sufragio que debe compilar cada elector para la elección simultánea de los dirigentes de varios estamentos de Dirección, multiplica los errores y puede distorsionar gravemente los resultados, inclusive facilitar eventuales manipulaciones. Como la elección de integrantes del Comité Central es el objetivo principal del acto y constituye el momento más importante de decisión y participación del militante en la vida de partido, la ausencia sistemática de instancias de debate produce una personalización extrema de la contienda.

En suma, el sistema aparentemente más democrático de la elección directa (como algunos habíamos previsto) ha revelado grandes deformaciones, que pueden originar conflictos más serios en el futuro. Sin entrar por ahora en las distorsiones en la proporcionalidad de la representación, ocasionadas por el principio de la discriminación “positiva” en favor de las mujeres y por la aplicación –errónea a mi juicio– de la norma que asigna a las regiones una cuota adicional de miembros del Comité Central, establecida, parece, como una manera de promover el acceso de nuevos militantes a los niveles superiores de mando, lo que sería imposible si debieran competir en una campaña nacional con candidatos mucho más conocidos por la base del Partido.

El sistema en uso tiene además el inconveniente de fomentar la constitución de corrientes más y más inclinadas a darse una contextura fraccional y a agruparse en torno a determinados dirigentes. Creo que todos tenemos conciencia del modo irregular en que se resuelven entonces los problemas más delicados. Ordinariamente se busca el acuerdo entre los personeros de los grupos y se despoja así, de toda significación a los órganos competentes del Partido provocando una peligrosa desmoralización en su base militante. Afortunadamente la experiencia de los últimos años parece haber demostrado a todos que con esos hábitos no se construye Partido. Casi todos los dirigentes más destacados vienen reiterando la necesidad de restablecer la plena institucionalidad partidaria y de desalentar la tendencia a cristalizar las corrientes.

Si a todo lo dicho se añade las dificultades de un escrutinio engorroso y lento

por el número de opciones que cada elector debe señalar en cada cédula, cuando se convoca a varias elecciones simultáneas, tenemos que convenir en la necesidad de reformar radicalmente un método ostensiblemente inadecuado y arbitrario y restablecer el sistema vigente hasta el golpe militar, esto es, basado en la realización de sucesivos congresos locales, regionales y –por último– de un Congreso General, en cuyo curso se forma gradualmente la voluntad política del Partido y se van identificando los ejecutores potenciales más adecuados para conducir la estrategia resuelta en la instancia superior. Por lo demás, el antiguo sistema, al hacer del Congreso su sede principal del análisis retrospectivo del comportamiento de los órganos de dirección y momento final de la elaboración de la línea política, recuperaría su carácter de suprema autoridad que ahora conserva sólo en el papel.

En el Partido tradicionalmente se aceptó que la única nominación unipersonal del Congreso fuera para llenar el cargo del Secretario General. Por una parte, el procedimiento hacía inconcebible la designación del Secretario General con una simple mayoría relativa, y, por otra, junto con sus prerrogativas reglamentarias se le concedía así un cierto liderato moral.

Han contribuido a distorsionar más aún el actual régimen las normas que buscan una cierta proporción femenina en la composición de los órganos directivos (discriminación positiva) y también aquellas que conceden una cuota adicional de miembros del Comité Central a las regiones. Con toda seguridad se presentarán ocasiones relativamente altas para ser reemplazados por compañeros con sólo un discreto apoyo electoral. La elección del Comité Central, dividida en dos segmentos, uno con los postulantes que concursan en un colegio electoral que abarca a todos los militantes del país, y otro con aquellos que postulan en un colegio limitado a la región ha sido y será fuente de conflictos.

La reglamentación de ese proceso deja –me parece– sin respuesta la posibilidad de que un mismo compañero aparezca con votos en ambas cédulas, circunstancia que plantea la cuestión de sumarlas o no y otras dudas menores. Tampoco parece lógico que los candidatos a cargos unipersonales que resulten derrotados no obstante reunir una votación significativa, no tengan acceso al Comité Central.

Como los aspirantes a dichos cargos serán ordinariamente personeros calificados de las diferentes tendencias, al quedar marginados de los organismos superiores se debilita la autoridad de las instancias regulares y se estimula la perniciosa costumbre de resolver los problemas en el ámbito de los acuerdos entre quienes ofician de voceros o inspiradores de terminados grupos o tendencias. Culmina así un virtual despojo de las funciones y facultades de la dirección política.

La experiencia de dos años de unificación formal y de progresiva integración

de las antiguas orgánicas ha demostrado la precariedad de las estructuras y las distorsiones de la democracia interna, todo lo cual conduce a la apatía y escasa o nula participación del militante en la actividad del Partido. La propia gestación del Congreso convocado para trazar una estrategia a largo plazo y las bases de un proyecto programático del socialismo para el año 2000, ha sido exclusiva y aunque meritoria tarea de un puñado de compañeros, sin consulta, ni debate, ni análisis, ni propuesta de la base militante.

Complemento de un restablecimiento de la democracia interna sería la adopción de normas destinadas a desalentar el rol de las tendencias, buscando su desaparición total y robusteciendo en cambio el papel de las instancias regulares. Este es un tema pocas veces abordado, que tiene, sin embargo, una importancia sustancial si queremos prepararnos para el tiempo que viene. En este punto tal vez sea justo proponernos renovar la renovación.

CONTINUIDAD Y CAMBIO: NOTAS SOBRE EL PROGRAMA DE 1947

Santiago, octubre de 1992.

Habían pasado catorce años desde su fundación cuando el PS realizó su primera Conferencia de Programa. Durante todo ese tiempo no se disponía de otros documentos ideológicos que la Declaración de Principios de 1933 y, en un plano más primario, el Programa de Acción Inmediata desde el mismo año. Entre esas fechas habían variado profundamente las circunstancias en Chile y en el mundo:

- Había quedado atrás la Gran Depresión del 29 y comienzos de la década del treinta y sus ruinosos efectos en la economía chilena, particularmente en la industria salitrera;
- Bajo las banderas del Frente Popular y de la unidad de la izquierda, la vieja oligarquía había sido desplazada del poder, parcialmente al menos;
- Habíamos seguido con apasionado interés la guerra civil española y su dramático desenlace: la caída de la República y la instalación de un régimen fascista que se agregaba a las dictaduras totalitarias de Italia y Alemania;
- De la Segunda Guerra Mundial había surgido una institución planetaria –la ONU– como corolario del triunfo militar de las potencias occidentales y la Unión Soviética sobre el Eje. Se redibujaba el mapa político de Europa y comenzaba el proceso de descolonización en el Tercer Mundo;
- Stalin, en la Unión Soviética, había liquidado a la vieja guardia bolchevique, consolidando así su poder personal y consagrando una versión dogmática del marxismo: el “marxismo leninismo”, como doctrina oficial de la tercera internacional y de los partidos comunistas a ella afiliados.

En suma, una serie impresionante de acontecimientos exigía reformular los postulados originales del Partido a la luz de la historia reciente. Con tal propósito, la nueva dirección del PS elegida en el XI Congreso General (octubre de 1946) resolvió convocar una Conferencia Nacional de Programa en el curso del año siguiente. La Comisión encargada de elaborar la ponencia inicial contó con

la participación de un gran número de compañeros y, luego de aprobado su texto en la Conferencia, fue sometido a la sanción final del XII Congreso General.

El Programa del 47 está dividido en dos secciones: una primera parte teórica, de fundamentación ideológica, y una segunda donde se diseñan los planes sectoriales. Mientras en esta última fue indispensable y valiosa la colaboración de numerosos especialistas y profesionales de cada ramo, la introducción teórica fue prácticamente redactada por el recordado compañero Eugenio González quien, con este escrito, nos dejó una herencia intelectual de valor singular. Es este documento el que enunció los principios que sirvieron de plataforma y orientación al Partido en los veinte años siguientes.

La escueta referencia al marxismo *como método de interpretación de la realidad*, formulada en la primitiva Declaración de Principios, resultaba demasiado esquemática, insuficiente para situar ideológicamente al Partido, pero adquiere consistencia en los años que siguen, a través de un persistente y severo enjuiciamiento crítico de las experiencias y actitudes comunistas, dentro y fuera de la Unión Soviética, que el nuevo Programa recoge. Con relación a este punto, se lee: “la política inicial de socialización del poder económico se fue convirtiendo en una mera estatización que condujo progresivamente a un régimen de “capitalismo de Estado”, dirigido por una burocracia que ejerce el poder en forma despótica, sometiendo a una verdadera servidumbre a la clase trabajadora”. Así “los auténticos fines del socialismo (...) se han ido desvirtuando cada vez más en función de una política de Estado que no tiene en cuenta los intereses de los trabajadores.”.

El rechazo del modelo comunista se extiende tanto a la concepción del Estado como simple instrumento del partido, como a la política exterior de Moscú. En este campo el Programa señala una línea que inspirará más adelante la firme condena de las intervenciones soviéticas en Hungría (1956), Checoslovaquia (1968), y Afganistán (1979). Con ocasión de la ruptura soviética con Yugoslavia (1948) el Partido no se limitó a solidarizar con la posición de independencia del país ofendido, sino que acogió con esperanzas las nuevas orientaciones contenidas en la política de Belgrado. Tanto el sistema de la *autogestión* como las iniciativas del *no alineamiento* calzaban con los conceptos de democracia económica y autodeterminación de los pueblos consagrados en el Programa que comentamos.

El postulado de la *autonomía* en sus diversas dimensiones anima todo el documento, sea como premisa de las relaciones interestatales o como condición en los compromisos con otras colectividades políticas dentro y fuera de Chile. En su ejercicio el Partido solidarizó con la Revolución Boliviana (1952), con la insurrección promovida en Cuba por el Movimiento 26 de Julio (1959), con la lucha independentista argelina (1962), en momentos en que otros partidos polí-

ticos de izquierda les regateaban su apoyo. El mismo principio nos permitió condenar la agresión franco-británica contra Egipto (1956), con motivo de la nacionalización del Canal de Suez, pese a que en aquella época el Jefe del Gobierno en París era Guy Mollet, dirigente de primer plano en el partido socialista francés y en la Internacional Socialista.

En realidad el rigor autonomista del Partido está estrechamente asociado a una vigorosa revalorización de la democracia. Si en 1933 había tenido ciertos fundamentos la incorporación del concepto de la “dictadura de los trabajadores” en la Declaración de Principios, en 1947 la gravitación objetiva de esas circunstancias había desaparecido la Milicia republicana —como guardián del viejo orden oligárquico— estaba disuelta; durante diez años el poder Ejecutivo se había movido en un espacio de izquierda moderada, con la presencia —en algunos periodos— tanto de ministros socialistas como comunistas y, por último, el desenlace de la Segunda Guerra Mundial había rehabilitado el valor sustancial de la democracia en el mundo, luego de experimentar en toda su barbarie el totalitarismo fascista. Sin consignarlo en forma expresa el Programa diseña un proyecto político que será conocido en los años siguientes con la denominación de República Democrática de Trabajadores. Dos elementos principales sirven de soporte a ese enunciado: uno es la reducción del papel del Estado en el proceso de socialización de los medios de producción, y el otro la reivindicación humanista del trabajo, como factor económico y como supremo valor social.

Diversos pasajes evidencian esta convicción: “la tarea fundamental de nuestra época —dice— consiste en organizar racionalmente las fuerzas productoras para hacerlas servir a los intereses del hombre y de su vida”.

“El sacrificio de las libertades en un régimen colectivista conduce inevitablemente a inéditas formas sociales de carácter clasista y antidemocrático, del todo ajenas al sentido humanista y libertario del socialismo”.

“El socialismo —señala— lucha fundamentalmente por el establecimiento de un nuevo régimen de vida y trabajo en el que se den las mayores posibilidades de expansión de la persona humana” —y agrega— “pero en ningún caso acepta la estatización burocrática del poder económico, porque ello conduce inevitablemente a la esclavitud política de la clase trabajadora.”.

Podrían citarse numerosos párrafos con alusiones semejantes; todos ellos contienen una advertencia frente a las deformaciones autoritarias que ya caracterizaban las experiencias de signo soviético. El ensayo yugoeslavo de nuevas formas de gestión social en el aparato productivo, asignando al Estado un rol limitado y entregando, en cambio, la responsabilidad principal al colectivo de trabajo, fue considerado una significativa prueba práctica de la extensión de la democracia al campo de la producción, en la misma línea sugerida por el nuevo Programa del Partido. Se decía allí: “para evitar la estatización burocrática de la

economía debe integrarse orgánicamente la dirección de las empresas nacionalizadas por los técnicos representantes del Estado, los delegados de los correspondientes organismos sindicales de los trabajadores y los representantes de los consumidores todos”.

Tal vez la concepción de una planificación *centralizada* del proceso productivo sea la más discutible de las ideas inspiradoras del Programa, aun cuando diversos pasajes la condicionan muy estrictamente, dejando importante espacio a la economía de mercado. El sistema implantado en la Unión Soviética vino a demostrar que la planificación integral es virtualmente impracticable y sobre todo estimula la transformación del personal que la maneja en una “nueva clase social” por la magnitud de sus ingresos en dinero y en servicios. Independientemente del carácter teóricamente “estatal” o “social” de la propiedad sobre los medios de producción, es la tecnocracia la que maneja el aparato productivo, asumiendo simultáneamente una situación dominante en la conducción política.

Nuestra idea de la democracia como una radical socialización del poder en todas sus formas, como sustancial extensión del campo de decisiones del pueblo y del autogobierno, superando los privilegios de clase, ha estado siempre implícita en la mentalidad del Partido y desmiente los injustificados reproches de quienes nos atribuyen una pretérita insensibilidad hacia los valores democráticos tradicionales. A nuestro juicio, si tratamos de encontrar una clave objetiva para juzgar el nivel de democratización de una comunidad en determinada fase histórica, sólo podríamos encontrarla verificando el grado en que el sistema contribuye a emancipar las fuerzas del trabajo. Frente a quienes aceptan la democracia exclusivamente como un sistema destinado a perpetuar el capitalismo, nosotros lo concebimos siempre como un ordenamiento institucional que debería garantizar el advenimiento pacífico de los cambios requeridos por la evolución de la sociedad.

Es importante subrayar el carácter anticapitalista de todo el documento porque es un elemento esencial en todo socialismo verdadero. La amplitud de la planificación, la extensión del mercado, las diversas formas de propiedad, el grado de participación del Estado, todos esos factores, en mayor o menor medida, pueden ser empleados como instrumentos en la conducción económica de una comunidad con un criterio pragmático, para enfrentar sus peculiares problemas, independientemente de su estructura socialista o capitalista. Teóricamente la misma economía de mercado, en sus versiones menos dogmáticas, podría compatibilizarse con un régimen socialista de autogestión, donde la empresa privada estuviese sustituida por las empresas autoadministradas por sus trabajadores.

La visión marxista de los fenómenos políticos que acusa en la dinámica de la historia una presencia determinante de los antagonismos de clase es otro postu-

lado que hoy se niega o se oculta en nombre de una solidaridad social puramente retórica. En el Programa del 47 esa perspectiva ilumina sus párrafos más elocuentes.

Como el anterior, el programa en elaboración deberá responder a un período de cambios inusitados en la esfera internacional, que coincide con el restablecimiento de la democracia chilena después de largos y penosos años de dictadura. El colapso de las estructuras estatales en los países del Este europeo no sólo cambia el mapa político y comprueba el fracaso histórico de la experiencia y del modelo comunista; genera también una nueva realidad planetaria dominada por los Estados Unidos como única superpotencia, en sustitución del mundo bipolar que conocimos desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la fragmentación del bloque soviético, junto con abrir en sus antiguos territorios una fase de agresivos nacionalismos, daña la autoridad política de todas las tendencias socialistas, aún de aquellas —como el PS chileno— que mantuvieron una inquebrantable oposición a ese modelo.

La nueva situación ha dado una oportunidad excepcional al capitalismo para presentarse como único sistema capaz de conducir a los pueblos a la prosperidad y para desplegar una abrumadora ofensiva ideológica en torno a una suerte de “teología de mercado” y la reevaluación del liberalismo, con una aceptación notable incluso entre ciertos dirigentes e intelectuales de izquierda. Tales acontecimientos son interpretados como anunciadores de una época de vigorosa expansión de la democracia, de derrota de subdesarrollo, de paz en todas las latitudes y de prosperidad planetaria.

El derrumbe de los regímenes comunistas alentó las esperanzas de que fueran sustituidos por gobiernos democráticos, pero los acontecimientos más recientes parecen desmentir tan alentadoras perspectivas. En reemplazo del mundo escindido, vigente hasta ayer (que condicionó en todas partes la conducta de los dirigentes políticos) surge el dominio sin contrapeso de los Estados Unidos, que se asigna una misión tutelar sobre todo el planeta tanto en el orden económico como en los planos político y militar.

Por otra parte, la fragmentación geográfica de los estados europeos multinacionales —principalmente de la Unión Soviética y de la Federación Yugoslava— enciende violentos focos de conflictos políticos y de guerras, alimentados a su vez por la reaparición de viejas tendencias reaccionarias —algunas de claro signo fascista— y de añejos integralismos religiosos.

El cuadro se complica y hace más urgente la adopción de una clara línea de conducta si hacemos el inventario de los fenómenos que amenazan la vida humana en términos universales. En la reciente “cumbre” de Río de Janeiro se pasó revista a los fenómenos más alarmantes: la contaminación del aire y del mar, la destrucción de la capa de ozono, la desaparición de las especies, la

desertificación de terrenos que fueron bosques y praderas, todo en función de una actividad productiva inspirada exclusivamente en la persecución de la ganancia.

En un documento de la Comunidad Científica Sueca se puede leer esta síntesis sobrecogedora: "... Esta admirable y portentosa célula (célula verde de las plantas) tenía la habilidad de capturar excedentes de energía solar más allá de sus propias necesidades de mantenimiento y crecimiento. Esta habilidad la utilizaron (los hombres) a lo largo de millones de años para crear todos los compuestos, complejos y concentrados de los que depende toda vida humana y sus actividades. Los seres humanos permanecieron en equilibrio con la capacidad regenerativa de las células verdes hasta hace unos cien años. Fue entonces que nuestra tecnología nos permitió ejercer control sobre fuentes de energía concentrada: carbón, petróleo. Ello nos permitió expandir nuestro dominio sobre el espacio ecológico con tal velocidad y fuerza que comenzamos a revertir el proceso evolutivo de la Tierra, transformando materia ordenada en basura molecular con mucha mayor rapidez de lo que las restantes células verdes eran capaces de procesar."

Si queremos ser fieles a nuestro "método de interpretación de la realidad" en el nuevo Programa deberíamos intentar una respuesta a lo menos provisoria al crítico trance que amenaza al mundo. Entender su dinámica sería ya un progreso en cuanto permitiría enunciar una estrategia política capaz de conciliar el desarrollo científico-tecnológico con una nueva estructura social y una economía de nuevo tipo.

La cruel paradoja de nuestro tiempo: el prodigioso impulso dado a la producción por el avance del conocimiento científico paralelamente a la difusión del hambre y la degradación material de gran parte de la población mundial, como fruto del modelo de consumo generado por el capitalismo, nos impone la tarea de diseñar un programa alternativo inspirado en el manejo social de las fuerzas productivas, cuya realización descansa en el impulso innovador de las clases oprimidas y marginadas en la sociedad capitalista, y en la acción de los pueblos del Tercer Mundo en busca de un nuevo orden internacional. Es cierto que, comprometido en una rivalidad histórica con las naciones de Occidente, tampoco el "socialismo real" intentó aplicar un curso distinto para su propio desarrollo industrial.

La "globalización" de los problemas planteados pone a prueba una tesis ya adelantada por el pensamiento marxista, esto es, que el desarrollo de las *fuerzas productivas* termina siempre por dejar obsoletas, anacrónicas, las *relaciones de producción* históricamente alcanzadas. *Las fuerzas productivas*, es decir el conjunto dialéctico del trabajo humano, de los recursos y energías naturales utilizadas en la producción, los avances del conocimiento científico y técnico e

incluso las modalidades de la estructura social, tienden a desarrollarse sin interrupción, de manera acumulativa, mientras las *relaciones de producción* se inclinan a reproducirse siempre de la misma manera y sólo pueden ser sustituidos en determinados momentos de ruptura revolucionaria. Se plantea así la contradicción entre “*fuerzas productivas*” y “*relaciones de producción*” que constituye el antecedente necesario para superar el modo vigente de producir. Tal situación, condicionando vigorosamente el proceso histórico, abre la posibilidad también de resolver la otra contradicción contenida en todos los modos de producción antagónicos, es decir, la contradicción interna entre clases explotadas y explotadores. Allí donde la evolución de las fuerzas productivas no ha alcanzado un desarrollo suficiente para generar un modo de producción superior, el conflicto entre las clases sociales puede concluir en la total disgregación de la sociedad.

De atenernos a la retórica desatada en torno a la contaminación y sus efectos parecería existir un acuerdo universal para acabar con el insidioso fenómeno. Sin embargo, cuando el análisis se propone identificar sus fuentes y recomendar medidas concretas irrumpen las resistencias de los intereses empresariales en el interior del país y de la diplomacia del mundo industrializado, en resguardo y justificación de su propio crecimiento y el de las corporaciones multinacionales. Incluso la lucha por la supervivencia de la especie adquiere una dimensión social y deberán ser los trabajadores los más consecuentes en asumirla dentro y fuera de Chile.

La respuesta correcta no vendrá del capitalismo. Para entendernos, hablamos del capitalismo “real”, no del capitalismo de fantasía descrito por los teóricos neoliberales, llamado a enriquecer gradualmente la población entera hasta alcanzar con el tiempo los estratos más modestos. Hablamos del capitalismo del libre mercado, el mismo que en Chile ha generado una gigantesca zona de pobreza. Nuestros cinco millones de pobres no son víctimas de una vocación morbosa ni de un momento de distracción de la “mano invisible”, encargada de asignar recursos: son el precio de una política que premia la codicia e ignora la justicia social y la preservación del ambiente.

Resulta, entonces, indispensable la acción de un partido que estimule la presencia de los trabajadores en el campo político, como clase protagonista de la historia, y no como “gente” anónima, carente de voluntad colectiva, inerte destinataria de la filantropía privada o fiscal.

SOBRE EL “PROYECTO SOCIALISTA”

Contribución al Seminario para un nuevo Programa del Partido Socialista

Santiago, noviembre de 1994.

Lograda formalmente la unificación del Partido, luego de un largo proceso, hemos descubierto que no se trataba sólo de colocar al grueso de los militares bajo una dirección común, sino de reconstituir un alma militante colectiva, una identidad histórica, una visión estratégica que reuniera a quienes se definen como socialistas en un clima de colaboración creadora para proyectar en el futuro la vigorosa presencia del Partido. Estamos en eso: convocados para enunciar las líneas generales de un proyecto destinado a sustituir radicalmente el tipo de sociedad en que vivimos. No se trata entonces, de alistarnos para una discusión puramente teórica, sino de aceptar la responsabilidad de proponer al país –y particularmente a los jóvenes– una tarea de alcance histórico que requiere una definición clara de sus objetivos y una pujante y tenaz voluntad política. Este es el papel del Partido en un ámbito democrático, traducir en propuestas concretas los anhelos de la sociedad y constituirse en instrumento operativo de sus exigencias cívicas.

Una condición ineludible de tal empresa es la cohesión interna del Partido, tanto desde el punto de vista organizativo como ideológico. En ambos campos tendrá una importante gravitación el contenido y el carácter del programa que entramos a discutir.

El debate abierto con ocasión del proyecto parece haber interesado en un grado poco frecuente a nuestros militantes (pese a nuestras insuficiencias institucionales) y tiene, además, el mérito de haber revelado desde el comienzo los términos de la controversia alrededor de temas fundamentales, aquellos que caracterizan la posición teórica del socialismo chileno y fijan las fronteras de un pluralismo inspirado en un cuerpo de principios comunes. Mientras un Partido se define Socialista no podría eludir un esquema teórico que sirva de marco y referencia a su acción cotidiana, a menos que se busquen puras y simples posiciones de poder con la cobertura de un mezquino pragmatismo. En este plano –como se expresa en la declaración de principios de su fundación– el Partido Socialista adopta “como método de interpretación de la reali-

dad el marxismo, enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos del constante devenir social”.

Una versión feliz en su brevedad, que significa asumir el marxismo como una teoría científica de la sociedad y de la historia —y no como una “Doctrina” codificada, de postulados eternos— al mismo tiempo que ofrece una percepción dialéctica de la realidad objetiva y reconoce al hombre un rol activo en la gestión de su destino. Una concepción, en suma, compatible incluso con la fe religiosa de muchos de sus seguidores; de ahí que distinguidos teólogos y pensadores del mundo católico no vacilen en utilizar las categorías marxianas en sus severos análisis de la sociedad capitalista. Creo que abjurar de este compromiso intelectual en nombre de la “modernización” del Partido, significaría exponerlo a toda clase de contrabandos ideológicos y oportunismos políticos.

El proceso de elaboración del “Proyecto Socialista” —al que se suma este seminario— no sólo pretende dar respuestas puntuales a problemas concretos, como se ha visto. De una manera inevitable sus debates y sus conclusiones irán modelando y actualizando el perfil ideológico del Partido. Lo que nos interesa es que esa imagen, junto con poner a prueba la capacidad intelectual y la voluntad política del Socialismo, acoja con honestidad y rigor la rica herencia del viejo partido.

Parece inevitable que las jornadas de estudio en curso toquen, aunque sea de paso, algunos problemas de organización ligados a la capacidad del Partido para hacer del “Proyecto” una bandera de movilización y de lucha del pueblo y de la mayoría de los chilenos. No se pueden soslayar: uno es el estilo de relación del Partido con las agrupaciones sociales, y, otra, el establecimiento de la democracia interna en la vida del Partido.

Desde luego debemos suponer desechada la tradicional noción del “Partido Vanguardia”, intérprete exclusivo e infalible de los intereses populares, encarnación mesiánica de la voluntad de las masas. El Chile de hoy es más maduro y más inclinado a la participación del que conducimos antes y, frente a tal realidad, los partidos de avanzada sólo pueden aspirar a servir como *guías* del movimiento, sujetos a una continua verificación crítica de sus orientaciones estratégicas y operativas. Como método, allí la persuasión debería tomar el lugar de los golpes de mayoría.

También se hará más exigente la necesidad de fortalecer en el Partido aquellas prácticas que compatibilicen la democracia interna con la disciplina. Como la más alta y calificada instancia reglamentaria correspondería al Congreso General hacer el balance del desempeño de las autoridades nacionales, diseñar la línea política y elegir a los nuevos dirigentes. Dada la jerarquía e importancia del Congreso, su sola convocatoria debería abrir un período de libre debate en torno

a su agenda, pero una vez adoptadas las resoluciones pertinentes, nadie debería excusarse de cumplir con sus acuerdos.

Una disciplina firme en la actuación de sus militantes es una condición básica para dar la autoridad y fuerza al mensaje del Partido y cumplir así su rol de guía.

Es comprensible que la unificación del Partido haya debido pasar por una etapa de fusión imperfecta, de corrientes más o menos autónomas, herederas de la antigua "orgánicas", pero no sería inteligente estimular los factores que conduzcan a legitimar las fracciones. El juego de fracciones deteriora moralmente la convivencia interna y degrada la democracia mientras las pugnas de este tipo abren generosas oportunidades de infiltración a fuerzas externas. Aparentemente la existencia de tendencias organizadas sería una garantía de pluralismo y condición de la libre confrontación de opiniones. La experiencia muestra, en cambio, resultados exactamente contrarios: en el interior de las corrientes se establece gradualmente una micro-disciplina de grupo, con el objeto de presentarse como bloque homogéneo en el trato con otros grupos similares. Así la verdadera voluntad colectiva resulta falseada. En suma, el debate será más rico y más auténtico cuando menos cristalizadas estén las tendencias. A medida que se acentúa y personaliza el liderato en los diversos grupos, los compañeros que lo ejercen pasan a sustituir paulatinamente la deliberación en los órganos regulares por acuerdos entre los personeros de las distintas tendencias. La consecuencia es evidentemente nociva: los órganos de dirección son de hecho privados de sus atribuciones y la democracia interna pasa a ser un mito.

Confiamos en que la aprobación del "Proyecto Socialista" señalará el momento más alto en el fatigoso camino de la unidad, de cara a los nuevos tiempos y orgullosos de nuestro legado histórico.

CARTA AL XXV CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA

Santiago, mayo 2 de 1996.

Estimados compañeros:

Creo que el Congreso que se desarrolla en estos días marcará una etapa fundamental en la historia del Socialismo chileno. Tenía un vivo interés en participar personalmente en él, pero ante la eventualidad de encontrarme fuera de Santiago en la fecha de la convocatoria he optado por hacerles llegar esta comunicación con algunas reflexiones sobre ciertos temas que seguramente centrarán la atención y el debate del Congreso. Aunque ausente de toda función directiva pienso que no podía excusarme de enunciar algunos juicios, derivados de mi larga experiencia como dirigente y como militante, en un momento significativo en la vida de nuestro Partido.

Por más de medio siglo el Partido Socialista ha sostenido en el escenario político chileno la presencia de una poderosa corriente inspirada en los valores de la justicia social y de la libertad, apoyada en los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, generando un cuerpo de ideas y comportamientos que le conceden una fuerte identidad histórica. En la formulación de un nuevo "Proyecto" los socialistas deberíamos asumir plenamente esa rica tradición para proyectarla en el futuro, conscientes de que sólo una equilibrada combinación de principios fundamentales y de innovaciones razonables confirmará nuestra vigencia en las nuevas condiciones, como leales continuadores de ese pasado común y herederos de un patrimonio moral que otorga consistencia y credibilidad a nuestra acción.

El carácter "socialista" del Partido envuelve una opción esencial en el plano ideológico como alternativa al régimen capitalista. Si bien éste, en ciertos períodos y lugares ha estimulado un notable desarrollo científico y tecnológico, a lo largo de dos siglos ha servido de soporte a una estructura social caracterizada por la explotación del trabajo humano en las naciones del centro del sistema y el saqueo de sus materias primas y recursos naturales en los pueblos de la periferia del mundo.

La "globalización" de la economía y de otros aspectos de la vida moderna, sin ser un fenómeno absolutamente nuevo, ha acentuado el poder político de las empresas transnacionales por encima de las fronteras, debilitando severamente el rol de los Estados Nacionales y otorgando al capital financiero una absoluta discrecionalidad operativa.

Las indicaciones del mercado –como producto de las profundas deformaciones determinadas por las diferencias de renta de los consumidores– conducen una parte sustancial de los recursos a la producción suntuaria, ignorando las necesidades básicas de las enormes masas humanas marginadas. Una situación que exige urgentes cambios a escala mundial y que el capitalismo es incapaz de promover, en tanto los socialistas señalan en la gestión privada de los medios de producción la clave de un sistema que, por un lado, acentúa la concentración de la riqueza y, por otro, propaga la pobreza y el hambre en vastas regiones del planeta.

Algunos de nuestros intelectuales han acogido dócilmente la tesis de la muerte de las ideologías, a comenzar por la que sirvió de constante marco a las postulaciones del socialismo chileno. Sobre esta premisa se fundamenta el llamado a construir un partido “pluralista”, de “ciudadanos”, cruzado de tendencias o fracciones, donde el pragmatismo sería la fórmula rectora de la acción, inspirada, a su vez, en un conjunto de “ideales” (o valores) genéricos y abstractos, sin apoyo en la vida real. Con ese rumbo el partido derivaría fatalmente en un “Club de Debates” o en un ente benéfico, a mitad de camino entre la Sociedad Fabiana y el Ejército de Salvación.

Firmemente implantado a lo largo del país y dueño de una tradición gestada a la luz del marxismo, concebido “como método de interpretación de la realidad” y “enriquecido por todos los aportes científicos del constante devenir social” el Partido Socialista debería mantener tal inspiración presente en el curso de toda su fecunda trayectoria. Sin perjuicio de rechazar, como lo ha hecho desde su fundación, las dogmáticas concepciones que confieren al marxismo la condición de “doctrina” de postulados infalibles y eternos. Abjurar de este compromiso intelectual sería exponerlo a toda clase de contrabandos ideológicos y oportunismos políticos.

En nuestra concepción del marxismo como método idóneo en el análisis de la sociedad y de la historia y como “guía para la acción, no se justifican reparos para quienes militan en el partido y profesan también una fe religiosa. La misma concepción nos permite evaluar y acoger las más valiosas contribuciones de la cultura política contemporánea.

El proceso que caracteriza la época en que vivimos y que se expresa en mutaciones profundas en el sistema capitalista y en el colapso del impropriadamente llamado “socialismo real”, si bien plantea la necesidad de revisar nuestros juicios tradicionales, no cancela el carácter fundamental del antagonismo capital-trabajo y de sus consecuencias sociales, en la medida que se presenta como una contradicción entre el crecimiento de las fuerzas productivas –que tienden a desarrollarse de continuo y de manera acumulativa– y las relaciones de producción cristalizadas en una estructura social ya arcaica; sólo que el proceso alcan-

za una insólita dimensión ecuménica y no logramos encasillarlo con facilidad en nuestras nociones precedentes.

Resulta evidente que el neoliberalismo –cobertura ideológica de esta fase del capitalismo– ha generado los niveles más altos de desempleo en los países industrializados, junto con justificar la virtual demolición de los servicios sociales, mientras en los países del Tercer Mundo, presionados por la competencia en un mercado casi sin fronteras, la cesantía y el envilecimiento de los salarios constituyen un efecto inevitable de las tesis económicas que asignan una consideración casi teológica al mercado. Paralelamente al saqueo de sus materias primas y recursos naturales, acompañado con la desvalorización de la fuerza de trabajo, las burguesías –nativas o extranjeras– llevan adelante una despiadada campaña contra los sindicatos.

El Partido Socialista atribuye al manejo privado de las fuerzas productivas, en la búsqueda obsesionante del lucro, la raíz de los desajustes y lucha para que la democratización llegue a la economía mediante la gestión colectiva del aparato productivo en forma de propiedad social (desde la cooperativa a la autogestión de las empresas) al servicio de la solidaridad y de los requerimientos fundamentales de la población.

Aún reconociendo que en ciertas áreas resulta ineludible, o mejor dicho, recomendable el régimen de mercado, consideramos que la acción del Estado más allá de las instituciones y servicios públicos, que son su ámbito tradicional, debe asumir iniciativas para impedir que los monopolios desvirtúen las normas de la competencia leal, por ejemplo, o que comprometan la seguridad o la soberanía del país o se presten para manipular los precios en perjuicio del consumidor o, en fin, impedir una sobreexplotación de los recursos no renovables.

Como efecto visible del estadio que vive el capitalismo en su versión más moderna, (que contradice la poderosa imagen que proyecta sobre la opinión mundial) están las cifras del avance de la pobreza en todas las latitudes, y muy especialmente en América Latina, y los dramáticos índices de cesantía en todos los países, incluso los más desarrollados. Además de revelar la incapacidad del sistema para lograr la ocupación plena, implica una odiosa mutilación del mismo mercado ofrecido como supremo mecanismo del desarrollo, como la mano invisible del progreso.

Creo que el panorama someramente esbozado bastaría para confiar en la vigencia del socialismo como alternativa a una civilización que se ha olvidado del hombre.

Espero que el Congreso cumpla su tarea de reconstruir un pujante Partido Socialista portador de una nueva esperanza para los trabajadores y el pueblo chileno. Con saludos socialistas,

RAÚL AMPUERO DÍAZ

EPILOGO

LA POLITICA COMO ETICA PERSONAL Y EL ARTE DE LA CONVERSACION

Por Oscar Núñez
ex Presidente de la CUT y
ex Secretario General de la
Unión Socialista Popular

La sociedad moderna es víctima de la superstición de las formas y de las relaciones públicas, de las reverencias y de los vestidos –de las envolturas– y también de la escritura. Cree, a diferencia de la remota antigüedad y de algunos hombres a lo largo del tiempo, que la única notoriedad, éxito y perduración posible de una persona está en su reiterada acomodación y en su vistosa presentación social, y la del pensamiento en que sea escrito, ojalá lo más rigurosamente posible.

En estas creencias están los crecimientos patrimoniales, la búsqueda constante de la notoriedad pública –a veces a cualquier precio–, la sensación de que a las palabras se las lleva el viento y la aceptación de que, lo que escuchamos pertenece al olvido y sólo lo que leemos se guarda en la memoria. Igualmente yace allí la idea moderna que únicamente es válido lo que se produce de un modo industrial porque así puede alcanzar muchedumbres.

Así, una de las más indiscutibles verdades de nuestra tradición –que se fundamenta en múltiples y notorios ejemplos– es aceptar todo sin reclamos ni análisis, adular, entregar, negociar, regalar, falsificar, empeñar canjear, simular, sobornar; por ello también, hablar es hablar para unos pocos; escribir es escribir para todos y para siempre. Hablar es escribir en el viento, escribir es hablar con la eternidad.

Me llegan estas consideraciones pensando en el más relevante ejemplo de sencilla riqueza intelectual y de honestidad personal, en el más hermoso e intenso caso de magisterio verbal que algunos hayamos presenciado: la vida cotidiana, el talante intelectual y la actividad política de Raúl Ampuero Díaz.

He sabido que su féretro estuvo rodeado de rostros atribulados, cubierto de ofrendas, de banderas y de palabras, rubricándose en ese instante de nuevo que no hay nada más lacerante que el homenaje y el dolor a destiempo.

Ya he oído que se está deplorando que su inmensa inteligencia se hubiera disgregado con sus días, en escasas presentaciones y en breves exposiciones

verbales, en conversaciones casuales, y carezca por ello de rigor y de la firmeza de lo escrito.

No sólo no comparto estas deploraciones.

Más de una vez, en vida suya, me pregunté por qué Raúl –jovial, genuino, generoso, hombre de carácter, consecuente y leal, brillante sin proponérselo– era tan extremadamente modesto, por qué le huía tanto a las reuniones sociales, por qué prefería socráticamente hablar a escribir, y me pregunté qué tan adecuada a la época y a la importancia de su capacidad intelectual era esa actitud.

Hoy sé que Raúl tenía razón, y este primer tiempo con dolorosos días de su ausencia ya me han enseñado algunas cosas nuevas sobre él, porque quien ha sido un verdadero maestro no cesará de enseñarnos aunque su cuerpo pertenezca a la danza ciega de los elementos, aunque su voz no sea ya más que uno de los insonoros cauces de nuestra mente.

En alguna parte de su obra Borges dice que el olvido no existe. En otra, que “el olvido no es más que una de las formas de la memoria, su oculto sótano”. Aquello que intuyó el poeta es lo que pensó nuestro camarada. Raúl descreía del olvido, sabía que todo lo que ha pasado por nuestras vidas permanece en nosotros vivo y activo aunque no aflore nunca a la conciencia ni se emancipe en lenguaje. El no podía creer, como tantos, que perdía el tiempo discurriendo sobre los grandes enigmas del mundo o los graves problemas políticos de la historia y de las ideas, ante pequeños y tal vez causales auditorios, no cabía en su espíritu la sospecha de que se derrochaba. Era un huésped gozoso del presente. No creo que le importara demasiado la repercusión que su pensamiento pudiera tener en regiones y edades distantes.

Por ello, cuando la persecución implacable de la dictadura en contra de los hombres y del pensamiento, lo arrojó a Italia, allí aprendió rápidamente profesión e idioma y llenó el espacio universitario, no para entregarse a la dubitación solitaria o al solaz engraido de los académicos, sino para continuar disertando y motivando –como siempre– a la juventud hacia horizontes más limpios e ignotos, sin distanciarse –en esa nueva y tranquila condición– de las penurias de su pueblo y de su patria. No sólo le importaba estar allí, en ese presente evanescente y precioso, en ese momento supremo e irrecuperable, persistiendo en su fidelidad a los principios que alcanzó muy temprano, sino también perseveraba en actuar dispuesto a no despreciar los tremendos o deleitables enigmas de las ideas, lo los acuciantes problemas del acontecer político, y le complacía compartirlos con otros en el momento mismo en que se transmutaban en orden y en lenguaje.

Nadie puede pensar que su gusto por el lenguaje oral fuera una forma de la evasión o el facilismo o la simple manifestación de su talento oratorio y de su magnetismo personal que todos le reconocían.

Hay en sus conferencias, en sus charlas, en sus discursos políticos, en todas sus intervenciones y conversaciones, un rigor tal, una tan serena dosificación de su vasta cultura, que nos sorprende –cuando vemos algunas de ellas transcritas– que no hubieran requerido esquemas previos, planificaciones ni arduos borradores. En ellas está por igual la felicidad del pensamiento, la exactitud y el deleite del lenguaje. Un abandonarse a la aventura de pensar, sin más restricciones que el respeto por la lógica y la vigilancia continua en contra de supersticiones, prejuicios y dogmas.

Para él no había interlocutores despreciables o indignos, pero le irritaban grandemente las inconsecuencias, la cobardía intelectual y la mediocridad, el arribismo y el utilitarismo de los dirigentes políticos. Sin embargo, cualquiera podía ser su contradictor –y hubo varios que gozaron de ese privilegio sin estar a su altura– pero siempre lo vi lanzarse a la discusión con alegría casi inocente y con entusiasmo inmenso.

Ahora bien, Raúl nació como todos los hombres, en una época de dogmas. Creció viendo cómo después de la Biblia y del Corán, también obras admirables de Marx se convertían en libros sagrados vulnerando los mensajes vitales del maestro alemán. Entonces, dedicó su pensamiento y sus reflexiones a fundamentar una actitud hacia el marxismo y su aplicación política, que pudieran esquivar los peligros del dogmatismo. Parte fundamental de su crítica a esa fe ciega en la letra impresa, a esa veneración insensata del texto, fue esa especie de alegre distracción por la suerte de su propia obra. Nunca se propuso, en rigor, una obra concebida como “un corpus” de textos corregidos e impresos. Lo que quiso fue, hacer –como lo logró– de su vida, una obra ejemplar y dejarla imborrablemente escrita –pero también viva y cambiante– en los espíritus de aquellos con quienes le fue dado compartirla.

Todos los que, breve o largamente, tuvimos la oportunidad de asumir, o de advertir, el pensamiento de Raúl Ampuero, somos su inmediata y primera memoria.

No creo que nadie aspire a mayor recuerdo que lograr que su voz resuene después en amistosos labios humanos. No hay mayor premio posible que ser amados por quien nos sobreviva, del mismo modo –como decía Chesterton– tal vez, “ningún hombre puede ser nada más grande que el amigo de otro hombre”.

Seguramente, los pocos escritos de Raúl Ampuero perdurarán y merecerán la atención de sus lectores. Pero ese es sólo uno de sus legados. Importan menos las firmes verdades que contienen o el ejercicio de lucidez que incesantemente ilustran, porque importa más el perfil de dignidad y de nobleza política que diseñó con su vida de dirigente.

Es posible que la política sea una profesión y, por tanto, un ejercicio lucrativo, pero Raúl no lo entendió así sin ninguna duda. Por eso Raúl Ampuero fue siem-

pre un testigo incómodo y preocupante para muchos y es también un ejemplo inquietante de disidencia.

Por eso su lenguaje fue siempre tan cercano y tan cálido.

Por eso su conducta fue siempre tan ineludible y terca contra la simulación, por eso su desprecio fue tan nítido contra las ambiciones personales.

No sólo se situó voluntaria y firmemente al margen de cualquier connivencia con los poderes oficiales, sino enfiló su oposición terminante y su denuncia contra los oblicuos o ladinos y contra los proclives a profitar de los festines del presupuesto del Estado o de las Empresas.

Por eso fue polémico y para los más culpables, a veces, temible.

No sólo fue el crítico más persistente, consistente y coherente de las rebeldes generaciones que a la vez orientaba; además luchó con su ejemplo contra las repeticiones mecánicas y nos tironeó hacia el mundo amplísimo de la realidad en que vivíamos esforzándonos por abrir nuestro pensamiento hacia tantos temas de reflexión y de práctica política.

De distintas maneras, decía frecuentemente que una revolución es como una obra de arte, original por sí misma, y como en el arte, también en este plano, todas las copias son lamentables. Nadie procede –reiteraba– de una revolución distante y nadie puede simplemente ser hijo de ella. Una revolución, cualquier cambio social, se vive o no se vive, y la pretensión de heredar sus emblemas sin haber participado en la dinámica mental, emotiva y práctica que le dio vida, sin haber contribuido a sus victorias ni padecido sus sufrimientos, no es más que una sonora impostura.

Era diametralmente contrario a la tendencia de aceptar que es suficiente repetir embelesados las palabras que expresan una época o un movimiento, para ya ser sus agentes, que basta con proferir los gritos que les secundan para que los episodios se repitan y hasta para simular que ellos son de nuevo promisorias realidades.

No con mucha comprensión de los auditorios marchó a contracorriente de esas tendencias políticas conservadoras, consignistas y acriticas del campo democrático y del movimiento popular, anticipando críticas históricas que hoy son los grandes giros de la época, diseñando con modestia pero agudamente, tesis sobre el futuro que ya en este tiempo comienzan a ser hechos y movimientos.

Predijo los graves efectos históricos del triunfo de un solo modelo, de un solo camino, de una sola verdad, de una sola estética, de una sola lengua “porque es una amenaza tan grande como lo sería en el reino animal el triunfo de una sola especie o en el reino vegetal el triunfo de un solo árbol o de un solo helecho”. Vaticinó el pago dramático y las consecuencias, del vacío ético y de la inaudita falta de carácter por permitir que otras latitudes nos impusieran su interpretación social, histórica y humana.

Siendo un polemista lúcido y contundente jamás aceptó aturdir con espectáculos ni ocultar con reyertas excitantes los asuntos realmente involucrados en las discusiones.

Se le tiene que recordar desde su juventud, cuando a la cabeza de las filas juveniles del socialismo –la vieja FJS– condujo la gran cruzada para romper las redes de las antiguas colaboraciones con gobiernos espurios, iniciando el rescate moral y ético, programático y político del Partido Socialista, guiándolo hacia una vida pública incitante y de gran convocatoria.

Fue fundamental en la reivindicación del socialismo chileno como propósito colectivo, para que fuera parte digna y confiable de la nación, para revitalizar el lenguaje y el programa de las grandes causas populares que estaba envilecido, para limpiar las enormes palabras malgastadas y las abstracciones ilustres que estaban convertidas en símbolos de la traición política y de la impostura personal y para no permitir que haya miserables, seres desamparados que crecen en el hambre, en la indignidad y la incertidumbre.

Allí comenzó a percibirse claramente su perfil inconfundible, esos juegos de su talento, de su irradiante capacidad que algunos interpretaban como soberbia, de su fino sentido del humor y de la ironía que otros percibían como orgullo, pero era su desdén por las cosas menores, por las rencillas, por los valores subalternos de la política; eran el bagaje personal que le permitía moverse con las palabras, los símbolos, las imágenes, sin frases pintorescas ni altisonantes, sin rumbos ruidosos, sino con un lenguaje de gracia y expresión elocuente y vivaz. Fue un real intelectual asomado a los juegos del poder y de la política. Nadie como él supo darle a las luchas políticas un tono de elevación, de noble combate ideológico, de una confrontación firme pero leal, conformada por temas y por ideas.

Ojalá que todos quienes lo recuerden puedan imaginarse un mundo parecido a él, con mayoría de seres auténticos, menos empeñados en disimular lo que son y en simular lo que no son o lo que quieren parecer, una utopía que podrá existir cuando los hombres se decidan. Un mundo con respeto por la honradez política, por los procedimientos cristalinos, por los signos de inteligencia; una práctica que rechaza como simples medidores de prestigio a los séquitos y a los medios de comunicación que tan fácilmente gradúan expertos y notabilidades.

En su estirpe no tenía cabida la discriminación entre tareas grandes y faenas menores; con el mismo fervor que acometió los altos asuntos teóricos estuvo en los barrios urbanos y en los rincones campesinos, con sus manos vivas, ayudando a levantar –ladrillo a ladrillo– las sedes modestas del PS., contribuyendo a que la organización creciera y se afirmara a sí misma. Igualmente fundó y animó las publicaciones partidarias: la revista Arauco, los periódicos Barricada, Consigna, La Calle, la Editorial Prensa Latinoamericana, fueron iniciativas preferidas en los planes de desarrollo para el socialismo que soñaba como fuerza

creativa y de comunicación, con alma y rostro, con soportes perdurables, constituido por seres con conciencia común, con unidad de propósitos y con certidumbre.

Encarnó espontáneamente la sentencia de José Martí, “la mejor manera de decir las cosas es haciéndolas cotidianamente”.

Transitó con ese aire característico de la superioridad natural, y toda esa riqueza de razón, de imaginación, de dialéctica y de humanismo la entregó a la empresa grandiosa de convertir al Partido Socialista en el instrumento programático y orgánico apto para realizar las grandes transformaciones institucionales de nuestra historia.

Por eso su figura era un centro que atraía, porque hizo posible un programa y una actitud política. Por eso también –sin proponérselo– a su alrededor creció una conducta diaria, un conjunto de comportamientos y un estilo de vida, distintivos por su probidad y transparencia. Por eso hubo ampuserismo.

Por supuesto que conoció el hostigamiento. Ese fue el precio por su independencia y crítica imperturbable, por su inclinación a discrepar con los pontífices pequeños y grandes, por desmontar la inercia moral y los compromisos sospechosos, por ser auténticamente probo y sobrio. Por ello en más de un episodio recibió ataques simplemente arteros. Nunca se le criticaron sus ideas directamente y siempre, los que aparecían públicamente en desacuerdo eran sólo servidores periféricos. Precisamente, porque para los corifeos y profesionales de la hostilidad oprobiosa, los golpes bajos a quien no acude a los festines ni participa de los negocios ilícitos o no se ajusta al esquema de la secta, presenta varias ventajas: les produce una paga inmediata como guardaespaldas, les evita el trabajo de elaborar argumentos sensatos, encandilan la barbarie, deleitan al coro con cualquier cosa ruidosa, colorida y vil. Así procedieron en su contra algunos servidores, puliendo procedimientos calumniosos, desarrollando métodos de mercadeo de noticias para instigar y convocar a los demonios a prácticas sucias y degradantes.

Pero jamás se resintió ni su confianza en los intercambios humanos que forman la base de la existencia, ni la firmeza de su misión de saneamiento, ni mucho menos su pasión por el pueblo o su amor entrañable por el Partido que construyó –con otros pocos y en tiempos difíciles– desde los cimientos, con la esperanza de cambiar alguna vez al mundo.

Creo sinceramente que después de Eugenio González, de Salvador Allende y de Raúl Ampuero, nadie ha vuelto a pronunciar palabras que de veras instauren una comunidad política, que hagan posible el crecimiento de unos lazos de solidaridad, que permitan enrollar la voluntad colectiva hacia ideales trascendentales. Sus imágenes y mensajes nos instan a seguir buscando en toda la incomparable geografía nacional los hombres libres y serenos; a seguir trabajando para

que no se mueran esa nobleza, esa hospitalidad, esa generosidad que siempre han caracterizado a nuestros obreros y campesinos, intelectuales y analfabetos, mujeres y hombres, que alientan todavía bajo las frustraciones y tensiones de estos días el proceso descomunal de cambiar las rutas ciudadanas.

De ahí por qué el mejor homenaje a sus memorias no consiste en los duelos y ceremonias, sino en la decisión del socialismo de hoy de consolidar su patrimonio progresista, humanista y transformador del país para aproximarlo más al ideal que la democracia sugiere y que estos valores se reflejen en la vida de los ciudadanos, de los trabajadores, que no se resignan a que el partido que tuvo en Salvador Allende a su superior guía histórico, esté convertido en simple administrador y en un náufrago de las campañas electorales, incapaz de superar los abismos de la historia y de medir la temperatura y el pulso de los grandes propósitos nacionales.

Con Eugenio González y Salvador Allende, Raúl Ampuero entendió que su deber era acercarse a las multitudes porque en esos labios iletrados está la vida y la razón del mundo más humano y próspero. Por eso se ubicó firmemente contra esa expresión jurídica de Estado —aún presente— que ha existido siempre para defender privilegios y que a pesar de pregonar con clarines su raíz republicana y hasta revolucionaria, es un engendro bifronte, con un rostro para atender a los poderosos, hecho de deferencia y servilismo, y otro, hecho de arrogancia y ferocidad, para despachar a los pobres.

¿Cómo —decía— podremos reclamar que se comporten como ciudadanos respetuosos de la ley los que crecen en el abandono, formados en la amargura y el resentimiento, los que no tienen nada que agradecerle a la sociedad, los que no esperan nada de ella?

Tímidos, como buenos hijos de Los Andes, nos cuesta aceptar que un hombre que vivió entre nosotros haya sido una de las inteligencias más brillantes del mundo político nacional en las últimas seis décadas del siglo XX.

Pero, en cuanto al por qué Raúl Ampuero haya renunciado al lenguaje escrito como su principal medio de expresión, creo que hay todavía otra razón. El pensaba que la política, por sobre todo, debe fundirse a la vida, debe impregnar la existencia humana de intensidad y de sentido; y por eso, yo sé que en nada creyó tanto Raúl Ampuero como en el socialismo y en la conversación. Por eso cultivó tanto la amistad transparente, la camaradería y el diálogo.

Hablar suponía para él una relación directa e inmediata con otros, una relación viva, que él sentía e interpretaba certeramente. Para él la política era expresión oral en todas sus formas, vivas y directas, y las lecturas eran apenas un ejercicio de preparación para la gran fiesta del diálogo.

Sin embargo, nunca creyó que su hablar fuera un espectáculo. Más de una vez, el hombre más elocuente, el más brillante expositor y el orador más seduc-

tor que yo he conocido, me dijo: “no quisiera hablar en esta concentración, sé que debo hacerlo, pero me siento un poco atemorizado”. Pero a continuación, como quien marcha a cumplir un deber difícil se daba ánimos y caminaba resuelto hacia la tribuna que lo esperaba. Y allí, rápidamente, con las manos como aspas, tendidas, luego de provocar el choque de las palabras y los conceptos, lograba la síntesis que hacía posible la sentencia y subrayaba con el puño cerrado y en alto, desafiante, un sonoro final con su garganta profiriente.

En otros momentos decía: “¿no te pasa a veces que frente a ciertas personas no se te ocurre nada? Es que todo lo que uno dice proviene en realidad del otro, de los que escuchan. Sólo si quienes están frente a ti te inspiran, puedes pensar, discurrir y crear, puedes hablar de un tema”.

Seguramente cuando así hablaba no era de sus conferencias, sino de su conversación más silvestre y corriente con que nos deleitábamos sus amigos o de los discursos públicos de agitación y motivación política.

Ahora entiendo aquellas observaciones como otras pruebas de que al optar por el lenguaje oral, también Raúl estaba siendo fiel a hondas convicciones, estaba desplegando las verdaderas posibilidades de la vitalidad de su ser y su sensibilidad para comprender a la sociedad y la historia.

Le era fiel además, a su amor por el presente, y a esa vocación democrática que lo hizo creer siempre en la irreductible dignidad de todo ser humano, hasta el punto de sentir, seguramente con razón, que el don y la fuerza de su expresión venían del otro. Tal vez por eso su vida será menos un cúmulo de teorías o verdades y más un espléndido ejemplo, una conducta transparente de dignidad y limpieza acerca de la forma de hacer política, del arte de pensar y un ejercicio de fe práctica en el futuro de la especie para no prohiar dogmas, sino hombres libres, aplicados al goce singular de pensar por sí mismos.

OSCAR NUÑEZ BRAVO

Julio de 1996.

CRONOLOGIA DE UNA EPOCA Y DE UNA VIDA MILITANTE

1917

19 de diciembre. Nace en Ancud (Chiloé) Raúl Ampuero Díaz, hijo de Galvarino y Herminia, profesores normalistas.

Don Galvarino Ampuero estudió en el Liceo de Ancud y en la Escuela Normal de Valdivia, titulándose en 1907; ejerció la docencia en el mencionado Liceo, donde, además, del cargo de Inspector General, atendió las asignaturas de ciencias físicas y naturales. Fue exonerado en 1928, durante la dictadura militar de Carlos Ibáñez. En octubre de 1932, se reincorporó a la enseñanza como profesor de la Casa de Menores de Santiago. En 1941, ingresó al servicio público, llegando a ser Jefe del Archivo General del Registro Civil. Militante activo del Partido Radical, desempeñó diversos cargos dirigentes. Colaboró en diarios y revistas de Santiago, y, particularmente, escribió sobre los mitos, leyendas y supersticiones de Chiloé.

1931

26 de julio. Incapaz de hacer frente a un levantamiento popular, el dictador Carlos Ibáñez abandona el poder.

En los años 1925 y 1926, ante la profundización y combatividad del movimiento social con participación de obreros, empleados y estudiantes, la oligarquía dominante y los partidos reaccionarios se entregaron al amparo de la dictadura militar. A través del gobierno de Ibáñez, las clases privilegiadas en Chile se aliaron estrechamente con el imperialismo norteamericano. Así fue como aquella administración puso atajo a la actividad democrática de las fuerzas media y obreras. Durante cuatro años, de 1927 a 1931 subsistió en Chile una áspera tiranía, seguida, brevemente, por la presidencia de Juan Esteban Montero.

A la caída de Ibáñez, se desató un amplio movimiento "civilista" como antídoto al período de hegemonía de los militares.

1932

4 A 15 DE JUNIO

Marmaduke Grove proclama la República Socialista.

El descontento popular fue canalizado por los grupos socialistas fundados

desde 1931. En un breve lapso, la doctrina socialista se extendió considerablemente en los diversos sectores intelectuales y obreros del país. La actividad proselitista de estos grupos políticos avanzados se relacionó con el descontento de militares jóvenes animados por un espíritu progresista y democrático, originándose una actividad conspirativa que estalló en forma de pronunciamiento militar el 4 de junio de 1932.

Fue instaurada la República Socialista, inspirada en el lema "Pan, techo y abrigo para el pueblo". Sus caudillos más destacados fueron: el abogado y tribuno Eugenio Matte Hurtado, fundador de la Nueva Acción Pública (fue senador y falleció prematuramente en 1934) y el Comodoro del Aire, Marmaduke Grove Vallejos.

Grande es la importancia y mayor aún la trascendencia de la Revolución Socialista del 4 de junio, a pesar de sus escasos doce días de duración. Despertó la adhesión y el entusiasmo de las masas populares y, desde ese instante, el pueblo se entregó a la lucha política activa, con objetivos propios, con una definida posición revolucionaria en contra de los sectores económicos y sociales capitalistas, nacionales e internacionales. Asimismo, la Revolución del 4 de junio influyó en la fundación del Partido Socialista de Chile.

1933

19 DE ABRIL

La contrarrevolución de junio de 1932 seguida por los cien días de la dictadura de Dávila descabezaron el núcleo socialista y el movimiento popular. Ambas realidades fructificaron en el triunfo de la candidatura presidencial de Arturo Alessandri Palma, sostenida por los sectores liberales de la burguesía, y algunos círculos obreros no politizados atraídos por su pasado populista y su demagogia reformista. Alessandri asumió una actitud objetivamente dictatorial, aunque encubierta en un manto de legalidad; gobernó con los sectores más recalcitrantes de la derecha económica y política, con inclinaciones fascizantes, apuntalada en el aparato represivo del Estado y en cuerpos civiles armados, las llamadas Milicias Republicanas.

En estas circunstancias, los grupos socialistas comprendieron que la única posibilidad de supervivencia era la unidad, con el propósito de dar vida a un gran partido, capaz de canalizar efectivamente las grandes inquietudes políticas y sociales de los sectores medios y obreros de Chile, mediante un Programa que lo identifique ideológicamente, una estructura orgánica democrática y eficaces métodos de lucha.

El 19 de abril de 1933 se realizó la fusión de los cinco grupos constituyentes: el Partido Socialista Marxista, la Nueva Acción Pública, la Orden Socialista, el

Partido Socialista Unificado y la Acción Revolucionaria Socialista. Se redactó la Declaración de Principios del nuevo Partido Socialista de Chile, inspirada en la doctrina del socialismo científico; se eligió un Comité Central, y se designó a Oscar Schnake Vergara secretario general ejecutivo.

El Partido Socialista, en esos años, agrupó a los demás partidos democráticos populares en el block de izquierda, y con su acción, movilizándolo a los trabajadores, contuvo los desbordes dictatoriales del gobierno reaccionario de Alessandri Palma y sus milicias republicanas. Más tarde, dinamizó el Frente Popular; orientó la actividad sindical por nuevos caminos de unidad y lucha social, impulsando la constitución de la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH; difundió y profundizó una nueva conciencia política y de clase en las grandes mayorías obreras y campesinas, denunciando los males causados por el latifundio y los consorcios imperialistas, "pilares del sistema de atraso y explotación del país, de expoliación y miseria social".

En abril de 1938, en la Convención de Izquierdas, con su generosa actitud de retirar la candidatura de Marmaduke Grove, el Partido Socialista aseguró la victoria del pueblo en las elecciones presidenciales del 25 de octubre de ese año. ¡Todo Chile con Aguirre! Fue la consigna de los socialistas.

1934

Raúl Ampuero, recién cumplidos los dieciséis años de edad, inicia sus estudios superiores en la Universidad de Chile e ingresa al Partido Socialista, incorporándose por disposición orgánica reglamentaria a las filas de la Federación Juvenil Socialista, FJS, recién fundada.

En noviembre de 1934, la FJS celebra su primer congreso. Secretario general, elegido democráticamente por los delegados que representan a los jóvenes socialistas de todo Chile, es Carlos Colella.

1937

FEBRERO

II Congreso General Ordinario de la Federación Juvenil Socialista

Raúl Ampuero es elegido Secretario General de la organización, y, en esta calidad, integra, con voz y voto, el Comité Central del Partido, presidido a la fecha por Oscar Schnake.

1938

FEBRERO

La FJS realiza, en Santiago, su III Congreso general. Aprobado el informe del

Comité Central, discute y resuelve propuestas políticas con vistas a la inminente campaña presidencial. Raúl Ampuero es reelegido por aclamación Secretario General.

MAYO

En representación de los jóvenes socialistas chilenos, Ampuero asiste al Congreso Mundial de la Juventud celebrado en Nueva York.

25 DE OCTUBRE

El abogado y profesor radical, Pedro Aguirre Cerda, candidato presidencial del Frente Popular –constituido por los partidos Radical, Socialista, Democrático y Comunista–, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de Chile, obtiene un triunfo histórico sobre Gustavo Ross, abanderado de las fuerzas derechistas y de los sectores ligados a los intereses financieros del imperialismo.

Durante su administración, Aguirre Cerda tuvo que luchar contra la persecución implacable de los partidos derechistas, y al mismo tiempo, remediara las repercusiones financieras y económicas de la II Guerra Mundial y del terremoto de enero de 1939, que causó treinta mil muertos y destruyó materialmente a una vasta zona del centro-sur de Chile, particularmente las ciudades de Chillán y Concepción. Para paliar las graves consecuencias económicas y sociales del mismo, Aguirre creó la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, a iniciativa del Partido Socialista.

1939 a 1946

Durante este lapso, época de la colaboración gubernativa y de divisiones internas –escribe el historiador J.C. Jobert–, el PS pasó por descorazonantes experiencias. Aunque fue decisiva su participación en la creación de la CORFO, con el objeto de proceder a la electrificación y al desarrollo industrial del país y, a la vez, formuló un amplio programa de reformas para modernizarlo y superar las condiciones de vida de las masas. Fracásó en su colaboración ministerial y no se retiró a tiempo de su infecundo compromiso. Sus sectores dirigentes se burocratizaron y se alejaron de los principios doctrinarios y revolucionarios, divorciándose a menudo de los intereses de las masas. Se desataron, entonces, luchas internas que condujeron a una serie de divisiones lamentables, debilitándolo y desprestigiándolo (...) La celebración del XI Congreso General de Octubre de 1946, en Concepción, inició la nueva etapa de reorganización interna y de recuperación política del socialismo chileno. En aquel torneo ganaron la dirección del partido los sectores jóvenes dirigidos por Raúl Ampuero Díaz. Bajo su jefatura, el Partido Socialista se rehizo lentamente; se depuró de sus pasados errores; y en la Conferencia Nacional de Programa, celebrada en noviembre de

1947, se reafirmaron sus principios teóricos socialistas, enriquecidos con los avances mundiales de la clase obrera; se definieron con precisión sus bases programáticas de acuerdo con las necesidades del país y las exigencias del progreso; y, en general, se recuperó y se acentuó su orientación revolucionaria.

1939

19 A 22 DE MAYO

Talca. IV Congreso General de la Federación Juvenil Socialista.

En su informe a los ciento cincuenta delegados asistentes, Raúl Ampuero proclama las consignas que precisan las tareas ideológicas y políticas de los jóvenes socialistas chilenos: por una juventud libre en una tierra libre. El fascismo no pasará, la juventud socialista vigila. Una juventud para la revolución; una revolución para la juventud.

20 A 23 DE DICIEMBRE

Santiago. Teatro Capitol. VI Congreso general ordinario del Partido Socialista efectuado al cumplirse el primer año de gobierno del Frente Popular. En el congreso se enfrentaron dos corrientes: una defendía la permanencia en el poder, y la otra, inconformista, se manifestaba resueltamente contraria con la actuación del socialismo en el Gabinete, en razón de su objetiva ineficacia.

En definitiva, triunfó la corriente partidaria de continuar colaborando en el gobierno. El Congreso eligió secretario general del Partido al senador Marmaduke Grove.

Por su parte, las corrientes inconformistas continuaron actuando en forma fraccional hasta precipitar la división del Partido.

César Godoy y sus seguidores, incluyendo a Orlando Millas, secretario general de la FJS –elegido en el congreso de Talca el año anterior–, fundaron el Partido Socialista de Trabajadores, cuyos principales personeros, poco tiempo después, se incorporaron al Partido Comunista.

1940

21 AL 24 DE MAYO

Curicó. El II Congreso General Extraordinario del PS fue convocado a causa de los trastornos que produjo la escisión de los inconformistas.

Se planteó un debate sobre los principios teóricos del Partido; y en lo político, se mantuvo la línea de Frente Popular y de colaboración en las tareas de gobierno.

2 DE MAYO

Raúl Ampuero contrae matrimonio con Hilda Villagrán, militante de la Federación Juvenil Socialista. En los años siguientes, la familia se amplió con la presencia de sus tres hijos: Hernán, Rodrigo y Jorge, quienes, con el tiempo, llegarán a ser, cientista político, arquitecto e ingeniero naval, respectivamente.

4 A 8 DE JUNIO

Santiago. VII Congreso general ordinario del PS. Se inauguró en el teatro Municipal, y en ese acto, el Ministro de Fomento, Oscar Schnake, pronunció un importante discurso sobre la responsabilidad política del Partido Socialista y la situación general del gobierno, enfrentado a la anarquía de los partidos que constituían su base política, incapaces de llegar a un acuerdo eficaz que les permitiera impulsar la gestión creadora reclamada por el pueblo.

El Congreso reeligió a Marmaduke Grove como Secretario General del Partido.

25 DE NOVIEMBRE

Fallece el Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda. Sus restos son velados en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Millares de chilenos, hombres y mujeres, trabajadores y estudiantes, formaron una interminable fila para testimoniarle su afecto.

14 Y 15 DE DICIEMBRE

Santiago. III Congreso General Extraordinario del PS. Esta reunión fue convocada para analizar el problema de la sucesión presidencial, luego del fallecimiento de Pedro Aguirre Cerda.

La mayoría de los delegados era partidario de levantar la candidatura de Oscar Schnake. Un grupo creía viable las posibilidades de Marmaduke Grove.

La candidatura de Schnake, proclamada con gran entusiasmo en el teatro Caupolicán el 21 de diciembre, fue entregada en beneficio del candidato del Partido Radical, Juan Antonio Ríos. El abanderado radical resultó, así, elegido Presidente de la República el 1 de febrero de 1942. Inauguró su gobierno de "alianza democrática" con un ministerio formado por radicales, liberales y socialistas.

1942

13 A 16 DE MARZO

Santiago. Teatro Brasil. VIII Congreso General Ordinario del PS.

Se enfrentaron dos corrientes: una partidaria de continuar en el gobierno de Juan Antonio Ríos, y otra, anticolaboracionista, que pugnaba por alejar al partido del poder y la burocracia. Esta corriente opositora fue encabezada por la delegación de la FJS, presidida por Raúl Ampuero.

El Congreso reeligió secretario general del partido a Marmaduke Grove.

Poco tiempo después, la dirección nacional de los jóvenes socialistas envió una carta al Comité Central del Partido haciendo suyos el descontento y la frustración de las bases socialistas por el servilismo manifiesto de la dirección del partido a la política reaccionaria del gobierno de Ríos. A modo de respuesta, todo el comité centra de la FJS, del cual formaba parte Raúl Ampuero, fue expulsado de la organización.

1943

22 A 24 DE ENERO

Rancagua. IX Congreso General Ordinario del PS. Se enfrentaron dos corrientes claramente definidas: la del comité central, que persistía en la colaboración del socialismo con el gobierno de Ríos, y la llamada “corriente de recuperación”, que postulaba rescatar al Partido de su lamentable experiencia. En definitiva, esta posición venció en forma abrumadora, y se acordó el retiro inmediato del PS del gobierno radical-liberal.

Grove y sus partidarios abandonaron el Congreso provocando una escisión. No obstante, la mayoría de los delegados aprobó la línea de independencia política, eligiendo secretario general a Salvador Allende.

Raúl Ampuero, a quien el Congreso restituyó todos sus derechos de militante socialista, fue elegido miembro del Comité Central.

Poco después de la celebración del IX Congreso, se reconciliaron los dos sectores socialistas, bajo la jefatura de una dirección colegiada encabezada por Salvador Allende y Marmaduke Grove.

14 A 17 DE AGOSTO

Valparaíso. IV Congreso General Extraordinario.

Se revisaron la estructura y el funcionamiento del partido. (La FJS hizo lo mismo en un Pleno Nacional efectuado en el puerto). El Congreso confirmó la línea de no participación de los socialistas en el gobierno; su mantenimiento dentro de la Alianza Democrática, junto a los partidos radical, comunista, demo-

crático y socialista de trabajadores. En el nuevo comité central, presidido por Salvador Allende –que integró por derecho especial M. Grove– figuraron Raúl Ampuero y su sucesor en la Secretaría General de la FJS, Humberto Elgueta.

1944

6 A 9 DE JULIO

Talca. X Congreso General Ordinario del Partido Socialista.

(Mientras se desarrollaba reglamentariamente el torneo, Marmaduke Grove convocó a Congreso Extraordinario, dando vida al Partido Socialista Auténtico. Por otra parte, en junio, el Partido Socialista de Trabajadores, que lideraba César Godoy, se había fusionado con el PC).

El X Congreso eligió Secretario General a Bernardo Ibáñez, dirigente máximo de la CTCH.

Raúl Ampuero fue reelegido miembro del Comité Central.

Dadas las circunstancias, fue inevitable un retroceso del socialismo chileno, demostrado en las elecciones parlamentarias de marzo de 1945, cuando el partido obtuvo un solo senador y cinco diputados.

1945

JUNIO

Santiago. Congreso Regional del Partido Socialista.

Raúl Ampuero fue elegido Secretario Regional de Santiago.

27 A 29 DE JULIO

Santiago. V Congreso General Extraordinario del Partido Socialista.

Acentuó la línea de independencia frente al gobierno radical-liberal de Ríos.

El congreso reeligió Secretario General a Bernardo Ibáñez, a la cabeza de un Comité Central reducido.

1946

12 Y 13 DE ENERO

Santiago. Pleno Nacional del Partido Socialista.

El Comité Central anuncia su decisión de aplicar la política de Tercer Frente. Atropellando los acuerdos del congreso de julio de 1945, la dirección del partido, luego de la masacre de trabajadores en la plaza Bulnes, resuelve, en febrero, el ingreso del socialismo al gobierno de Alfredo Dhalde, colaboración que en pocos meses se caracterizó por lo caótico y estéril de su gestión.

MAYO

Santiago. Congreso Regional del Partido Socialista.

En la difícil situación política y orgánica en que se debatía el socialismo chileno, el liderazgo de Raúl Ampuero señalaba el ascenso a la dirección del partido de una nueva generación de jóvenes socialistas, comprometidos en la ardua tarea de rehacer la organización como fuerza popular y revolucionaria, leal a su doctrina y declaración de principios.

1946 a 1952

Luego de una prolongada enfermedad, Juan Antonio Ríos falleció en el invierno de 1946.

En la elección presidencial del 4 de septiembre fue elegido el candidato radical-comunista, Gabriel González Videla.

El socialismo, a la deriva en ese momento histórico, levantó la candidatura de Bernardo Ibáñez, que obtuvo el 2,5% de los votos.

Con el fracaso del gobierno de Tercer Frente, la abrumadora derrota electoral, las desviaciones políticas y las divisiones internas, culmina la primera etapa en la trayectoria histórica del socialismo chileno.

1946

Concepción. XI Congreso General Ordinario del Partido Socialista.

En el desarrollo de este trascendental torneo socialista se enfrentaron dos corrientes: la oficial, responsable de la dirección del partido y de la colaboración con el gobierno de Alfredo Duhalde, y cuya línea tercer-frentista desembocó en la aplastante derrota electoral de septiembre de 1946; y la oposición, con anhelos de rehacer el partido como organización popular y revolucionaria, leal a su doctrina socialista, encabezada por Raúl Ampuero, quien, en definitiva, resultó elegido secretario general, derrotando por estrecho margen a Salvador Allende. Fue designada una Comisión de Programa, con el propósito de redactar un nuevo documento teórico y programático del socialismo chileno.

NOVIEMBRE

CONFERENCIA NACIONAL DE PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIALISTA

El título original del nuevo Programa del socialismo chileno resumía la inspiración creadora y el propósito estratégico de enlazar la teoría con la práctica revolucionaria: "Hacia una República Democrática de Trabajadores."

El preámbulo del notable documento lo redactó el catedrático y escritor Eugenio González Rojas, más tarde senador socialista y rector de la Universidad de Chile. El documento fue elaborado por la Comisión de Programa, aprobado por el comité central que presidía Ampuero y, finalmente sancionado por el XII Congre-

so. Fue entregado a la clase trabajadora chilena en una época marcada por el auge del stalinismo, el Plan Marshall, el populismo peronista, el asesinato del Mahatma Ghandi, los inicios de la guerra fría, la presencia del socialismo yugoslavo y el nacimiento de la República Popular China.

1948

27 A 29 DE FEBRERO

Santiago. Pleno Nacional del PS. La reunión de secretarios regionales y dirigentes nacionales del Partido tuvo por objeto, analizar el progresivo deterioro de la coyuntura política, como consecuencia del alejamiento de los comunistas de las tareas de gobierno, y la ausencia de capacidad constructiva en los órganos superiores de la Administración.

En estas circunstancias, el Presidente González Videla pidió facultades extraordinarias al Congreso. El Partido Socialista, consecuente con su tradición de lucha contra la represión y el terrorismo de Estado, ordenó a su brigada parlamentaria oponerse a la dictación de esa ley, mal llamada “de defensa de la democracia”. Los afanes de la dirección del Partido se vieron entorpecidos por la rebelión de la oposición interna, encaudillada ésta por el presidente de la CTCH, Bernardo Ibáñez, y el diputado Juan B. Rossetti, quienes a la postre, fueron expulsados de la organización.

26 A 29 DE JUNIO

Valparaíso. XII Congreso General Ordinario del Partido Socialista.

Graves sucesos políticos y sociales se produjeron en esta época. En Chile, la dura represión desatada por el gobierno de González Videla contó con el apoyo de un sector del Partido Socialista, encabezado por Bernardo Ibáñez y Juan B. Rossetti, actitud que provocó una nueva división del socialismo chileno.

El XII Congreso debió enfrentar las consecuencias y repercusiones de esta situación.

El Informe de Raúl Ampuero se refirió a las condiciones políticas en que se encontraba Chile y, asimismo, a los acontecimientos internacionales: particularmente a la decisión de Stalin de aplastar el régimen socialista conducido por Tito en Yugoslavia.

El Congreso aprobó resoluciones que comprometieron al socialismo en una línea de defensa de las libertades ciudadanas y mantenimiento de las instituciones democráticas, de lucha tenaz tanto contra el expansionismo soviético, como contra el imperialismo capitalista. Por lo demás, el Congreso acentuó y definió claramente el carácter de la lucha antiestalinista del socialismo, reafirmando el propósito invariable del Partido de crear condiciones reales para la

reconstitución de una central unitaria de trabajadores, orientada hacia la defensa de sus intereses de clase.

El XII Congreso eligió secretario general al profesor Eugenio González Rojas. Raúl Ampuero integró el Comité Central.

1950

2 A 4 DE JUNIO

Santiago. XIII Congreso General Ordinario del Partido Socialista Popular.

En lo fundamental, se acordó mantener la línea de independencia política, ratificada por el XII Congreso. El Congreso eligió a Raúl Ampuero Secretario General del Partido Socialista Popular.

1952

21 A 24 DE MAYO

Chillán. XIV Congreso General Ordinario del Partido Socialista Popular.

Acordó ratificar la política seguida por el comité central: denuncia y lucha contra la gestión antipopular y represiva del gobierno de González Videla.

El Congreso confirmó la adhesión del partido a la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, facultando a la directiva nacional para determinar la conducta del partido si en las elecciones de septiembre resultaba elegido su abanderado. Raúl Ampuero fue reelegido Secretario General.

1952 a 1957

El 4 de septiembre de 1952 triunfó en forma arrolladora Carlos Ibáñez, obteniendo el 48% del electorado. El PSP entró a participar en el gobierno con dos ministros, y desde el primer día empeñó sus mejores esfuerzos en imponer el cumplimiento del programa de la victoria. La acción de los socialistas populares significó un gran impulso unitario en el campo sindical, que se tradujo a los pocos meses, en la constitución de la Central Unica de Trabajadores.

1953

MARZO

Elecciones parlamentarias. Raúl Ampuero, Secretario General del Partido Socialista Popular, es elegido senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta.

16 A 18 DE OCTUBRE

San Antonio. IV Congreso General Ordinario del PSP.

Raúl Ampuero leyó un completo informe sobre la marcha del partido, y en el cual dedicó un profundo estudio al carácter y naturaleza de la revolución latinoamericana. Su cuenta política fue aprobada por aclamación:

El voto político aprobado por el congreso, refiriéndose a las causas del retiro del partido del gobierno, afirmaba categóricamente que el PSP no ha aceptado ni aceptará jamás transacciones con los enemigos del pueblo de Chile, y prefiere recuperar su independencia antes que aparecer en situación dudosa, eludiendo o retardando urgentes medidas de beneficio popular.

El Congreso eligió Secretario General a Aniceto Rodríguez. El senador Raúl Ampuero integró el Comité Central del PSP.

1955

29 A 31 DE OCTUBRE

Valparaíso. XIV Congreso general ordinario del Partido Socialista Popular.

Discutió un documento sobre “La situación económico-social y las tareas de la revolución chilena.” Su estudio permite encontrar en él la fundamentación de la llamada política de Frente de Trabajadores.

Por aclamación, fue designado Secretario General del Partido el senador Raúl Ampuero.

1956

DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 1956

Raúl Ampuero participa, en Montevideo, en la constitución de un Comité Consultivo Latinoamericano Socialista; que realizó una segunda reunión del 20 al 22 de diciembre, en la que el Partido Socialista Popular se hizo representar por Raúl Ampuero y Clodomiro Almeyda. En sus resoluciones, esta Conferencia “declara su repudio a los regímenes dictatoriales de América Latina, condena el militarismo que los sustenta, el imperialismo al que sirvan de instrumento, y a las clases sociales cuyos intereses defienden.”

7 DE NOVIEMBRE

En sesión del Senado, Raúl Ampuero se refiere a los sucesos de Hungría, sosteniendo que en forma permanente e intransigente el PSP ha afirmado que el principio básico de las relaciones internacionales para los socialistas es el respeto hacia la autodeterminación de los pueblos.

1957

5 A 7 DE JULIO

Santiago. XVII Congreso General Ordinario. Consagra la Unidad del Socialismo chileno. En definitiva, el histórico torneo, junto con sellar la unidad, impulsó una tesis en la cual se contempló un examen de la situación política mundial, de la realidad latinoamericana con sus características específicas, de la realidad chilena, y finalmente, la conducta concreta del Partido en el momento político y social que vivía Chile.

El Congreso de Unidad Socialista eligió Secretario General del Partido a Salomón Corbalán. El senador Ampuero, que no participó en el torneo por encontrarse en el extranjero, en visita a Yugoslavia y otros países europeos, fue reelegido miembro del nuevo comité central con la primera mayoría.

En la elección de 1958 venció por estrecho margen Jorge Alessandri, candidato de las fuerzas conservadoras proimperialistas, que consiguió 390.000 sufragios, contra 360.000 obtenidos por Allende. En esta elección, Antonio Zamorano, el Cura de Catapilco, obtuvo 41.000 votos; su candidatura fue sostenida por el comando de la campaña de Alessandri para confundir a los sectores populares no politizados, permitiendo así el precario triunfo del sector oligárquico que lo alentó y financió.

1959

9 A 12 DE OCTUBRE

Valparaíso. XVIII Congreso General Ordinario del Partido Socialista.

Acordó mantener en plena vigencia la política de Frente de Trabajadores y fortalecer el Frente de Acción Popular.

El Congreso reeligió Secretario General del partido a Salomón Corbalán y miembro del Comité Central a Raúl Ampuero.

1961

MARZO

Raúl Ampuero es reelegido senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Integra la Comisión de Defensa del Senado.

JULIO

El senador Ampuero expone su pensamiento teórico y político en una conferencia, "Reflexiones sobre la Revolución y el Socialismo" brillante análisis de los problemas relacionados con el proceso revolucionario latinoamericano.

7 A 10 DE DICIEMBRE

Los Andes. XIX Congreso general ordinario del Partido Socialista.

Luego de un análisis de los acontecimientos políticos y sociales ocurridos desde el XVIII congreso socialista, el torneo resolvió impulsar con mayor ahínco la lucha del FRAP en todos los frentes.

El Congreso eligió Secretario General del PS a Raúl Ampuero.

1962

ABRIL

Se publica "Nuestra respuesta al Partido Comunista", documento en el que Raúl Ampuero analiza las diferencias teóricas y prácticas que separaban a socialistas y comunistas.

1963

ABRIL

El senador Ampuero desarrolla sus concepciones socialistas en el seminario organizado con motivo del trigésimo aniversario de la fundación del Partido Socialista de Chile. En esta conferencia, "Los distintos caminos hacia el socialismo", enunció las grandes cuestiones del socialismo en ese momento histórico:.

1964

14 A 16 DE FEBRERO

Concepción. XX Congreso General Ordinario.

En este torneo partidario se completó la revisión del régimen interno del PS, iniciada en el Congreso de Los Andes.

El informe destacó, respecto de la organización, su carácter de instrumento político unitario en todo el ámbito del país, denunciando las amenazas a su integridad que significaba el trabajo fraccional.

El XX Congreso, por aclamación, reeligió Secretario General del Partido al senador Ampuero.

MARZO

Raúl Ampuero publica "1964: año de prueba para la revolución chilena".

ABRIL

Se publica el documento de Raúl Ampuero: "Sobre la controversia chino-soviética: un comentario crítico de las posiciones en conflicto".

JUNIO

Conferencia del senador Ampuero en el Instituto Lenin, de la Juventud Socialista de Chile, sobre el tema: "Reflexiones en torno de la Revolución y el Socialismo."

1964

Tres candidatos se presentaron a las elecciones presidenciales del 4 de septiembre: Salvador Allende, por el FRAP y otras fuerzas independientes de izquierda; Eduardo Frei Montalva, por el Partido Demócratacristiano con el apoyo de la derecha y Julio Durán, con el único propósito, este último, de retener tanto cuanto fuera posible el apoyo de las bases radicales a la candidatura de Allende.

1965

26 AL 29 DE JUNIO

Linares. XXI Congreso general ordinario del Partido Socialista.

Fue ratificada la línea política nacional e internacional, en orden a fortalecer el FRAP, y acentuar la acción de los socialistas en contra de la demagogia del gobierno de la "revolución en libertad" y "la promoción popular", en el país; y en contra de las provocaciones belicistas del imperialismo norteamericano en Latinoamérica.

El Congreso eligió Secretario General al senador Aniceto Rodríguez.

1967

Los afanes "renovadores" del Comité Central presidido por Aniceto Rodríguez, en lo orgánico y político, desataron una conflictiva situación de crisis interna en el seno del socialismo chileno.

Así fue como la dirección del Partido decidió expulsar de la organización a los senadores Raúl Ampuero y Tomás Chadwick quienes recibieron la solidaridad de los diputados Ramón Silva Ulloa, Eduardo Osorio, Oscar Naranjo, Fermín Fierro, Juan Aravena y Ernesto Guajardo.

En octubre de 1967, los socialistas marginados convocaron a una asamblea constituyente, que dio vida a una nueva agrupación política: la Unión Socialista Popular, y designó un comité central presidido por el profesor Oscar Núñez, en aquel entonces Presidente de la Central Unica de Trabajadores.

1968

AGOSTO

En sesión del Senado, Raúl Ampuero condena tajantemente la intervención militar soviética en Checoslovaquia:

1969

Raúl Ampuero publica "La Izquierda en punto muerto".

1970

4 DE SEPTIEMBRE

Salvador Allende, abanderado de la Unidad Popular y con el apoyo de otras fuerzas independientes de Izquierda, incluida la Unión Socialista Popular, obtuvo la primera mayoría relativa en las elecciones presidenciales. El Congreso Pleno, el 24 de octubre, confirmó el triunfo de Allende. El PDC ordenó a sus parlamentarios votar por el candidato popular a cambio de la firma de un "estatuto de garantías democráticas". El 3 de noviembre, Salvador Allende Gossens asumió el mando de la Nación.

1970 a 1973

El nuevo gobierno de la Unidad Popular delineó una rápida gestión política, financiera, social y cultural, en cumplimiento del plan básico aprobado como programa de la campaña presidencial. El propósito del gobierno popular de emprender la construcción de la sociedad socialista en Chile fue, inmediatamente, obstaculizado por los sectores de derecha y la democracia cristiana.

Encarando con energía estas dificultades, el gobierno de Allende logró algunos éxitos: la aplicación efectiva de la reforma agraria, la intervención y nacionalización de empresas y bancos, y, especialmente, la nacionalización del cobre, en julio de 1971, riqueza nacional básica que, hasta entonces, permanecía en manos del capital norteamericano. Por esta causa, el gobierno hubo de enfrentar una serie de represalias económicas por parte de los Estados Unidos de NA, e, incluso, un plan para derrocar al Presidente Allende, con la participación de la CIA, financiado por la International Telephone and Telegraph Co., ITT.

A pesar de los triunfos alcanzados por la UP en las elecciones de la CUT (mayo de 1972) y en las parlamentarias (marzo de 1973), la situación de crisis política y social se endureció en un clima de extremismo protagonizado por las organizaciones ultraderechistas. El país quedó inmovilizado a causa de paros patronales que constituyeron la punta de lanza de una vasta operación subversiva financiada y articulada por el Gobierno de los EEUU.

En junio de 1973 tuvo lugar una intentona golpista encabezada por oficiales del regimiento de blindados. El caos se acentuó después del asesinato de un edecán del Presidente, en julio, y de la campaña de desprestigio desatada por la derecha contra los militares que, desde noviembre de 1972, colaboraban con el gobierno popular, y, principalmente, contra el Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, que, en definitiva, provocaron su retiro en la segunda quincena de agosto. El Presidente Allende nombró en su reemplazo al general Augusto Pinochet quien encabezó el Golpe de Estado Militar, el 11 de septiembre de 1973.

1973

7 DE SEPTIEMBRE

El periódico santiaguino "Chile, HOY" publica un artículo de Raúl Ampuero, titulado "Las FF.AA.: Chile o el Pentágono".

"Las Fuerzas Armadas (chilenas) –afirma el político socialista– no pueden quedar al margen de la historia; más aún que otras instituciones, están al servicio de la soberanía del país y están en el deber de participar, en consecuencia, en la lucha que llevamos adelante para consolidarla en todas sus dimensiones.

Cualquiera actitud negativa o prescindente es una deserción, porque la defensa nacional no es un quehacer abstracto, neutro, intemporal, tiene, por el contrario, un contenido políticamente definido y concreto en cada etapa de la existencia de la Nación.

"La defensa de Chile hoy está orientada contra la agresión imperialista externa, y sus agentes en el interior de la comunidad; mal podrían las instituciones armadas o sus integrantes mantener afinidades ideológicas con los EE.UU. y, menos aún, relaciones de dependencia material."

23 DE SEPTIEMBRE

Allanado su domicilio por una patrulla del Ejército, Raúl Ampuero es conducido a la Escuela Militar, permaneciendo en una celda, estrictamente incomunicado, hasta fines de diciembre.

Reflexiona y escribe en un trozo de papel: "Borrar del recuerdo, espantar de la cabeza toda imagen querida, hundir en el olvido cualquier reminiscencia sentimental, antes que tome cuerpo, antes que se fije en la memoria y llame a las lágrimas, es un proceso necesario, si no quieres sucumbir a la humillación o la locura."

Posteriormente, Ampuero es trasladado a un cuartel de la Fuerza Aérea, siempre en calidad de preso incomunicado.

1974

ENERO

Luego de permanecer algunos días en arresto domiciliario, Raúl Ampuero es expulsado del país. Ampuero abandona forzosamente la patria junto a su familia.

MARZO

Raúl Ampuero, apenas instalado en Roma, se incorpora a la liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, presidida por el senador italiano Lelio Basso.

1975

Junto a destacadas figuras de la intelectualidad y la política europea y latinoamericana, Raúl Ampuero participa en la Reunión de Argel, convocada por la Liga y el Tribunal Russell, en la que se analiza objetivamente y se adoptan resoluciones sobre las situaciones de atropello flagrante de los derechos humanos en América Latina y, particularmente, en Chile.

Ese mismo año, Raúl Ampuero se incorpora a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Sassari, Córcega, como Profesor Adjunto de la cátedra de Historia Latinoamericana. Años más tarde, en 1982, con un trabajo de investigación histórica sobre el tema "América Latina: pasado y presente", en concurso, obtiene la calidad de profesor titular, cargo académico que desempeña hasta 1988.

1977

La Universidad Autónoma de México invita a Raúl Ampuero para intervenir en un Seminario sobre la cuestión militar en América Latina. El propósito del Seminario es debatir materias relacionadas con el carácter de las fuerzas armadas en el continente, el establecimiento de las dictaduras militares, la sistemática destrucción de las instituciones democráticas y el terrorismo de Estado imperante.

Raúl Ampuero lee, en esta oportunidad, un documento notable, que alcanza amplia difusión en Europa y en los círculos de la resistencia latinoamericana: "El nuevo poder militar".

SEPTIEMBRE

Destinado a la Comisión de Estudios de la Nueva Institucionalidad, órgano de la Unidad Popular en el exilio, Raúl Ampuero envió un memorándum con "Proposiciones para una reorganización antifacista de las fuerzas armadas."

1979-1980

En dos reuniones sucesivas –marzo de 1979 y enero de 1980– y bajo el título común de “El socialismo chileno: historia y perspectivas”, se desarrolló en Ariccia (Italia), un seminario dedicado a los problemas políticos que enfrentó la Izquierda en Chile. El propósito principal de estas reuniones fue, junto con evaluar correctamente sus resultados, aprovechar sus aportes para fortalecer la acción de los socialistas contra la dictadura militar.

1980

MARZO

La prestigiosa revista francesa “Le Monde Diplomatique”, en su edición en español, publicada en México, incluye un extenso artículo de Raúl Ampuero, en que éste analiza, los antecedentes del golpe militar de septiembre de 1973.

JULIO

México. El órgano de análisis e información de los exiliados socialistas, *Convergencia*, publica un artículo de Raúl Ampuero: “Rumbo y tareas de la convergencia socialista”.

Octubre

Madrid. Revista “Pensamiento socialista”. Año VIII. Núm. 30. Publica una entrevista a Raúl Ampuero, en la que éste manifiesta su pensamiento sobre diversos tópicos relacionados con la situación política en Chile.

1987

MARZO

Roma. Preocupado por los problemas de la unidad del socialismo, Raúl Ampuero redacta un memorándum: “Criterios generales de reorganización del Partido Socialista de Chile.”

“La disciplina en la acción del partido hace que sus orientaciones sean claras a los ojos del pueblo. Es, por eso, una condición para que su mensaje sea comprendido, gane adeptos, ensanche su base de apoyo y fortalezca su autoridad política. Resultados diametralmente opuestos produciría la tolerancia de diferentes “tendencias” en su seno... Las “tendencias” o “corrientes” rompen la igualdad política de los militantes, expropián la soberanía de los órganos regulares y pervierten la democracia interna.

Las autoridades permiten a Raúl Ampuero una breve permanencia en Chile. En esta oportunidad, establece contacto con socialistas de la resistencia y, en particular, con Ricardo Lagos.

1989

ABRIL

Raúl Ampuero, junto a su familia, retorna del exilio; es recibido con alegría por los militantes socialistas, y con afecto y respeto por los personeros de la Izquierda.

En el momento oportuno, el líder socialista formaliza su calidad de militante del Partido. Recomienza de inmediato su actividad política, participando en centros de estudio y debates, y en seminarios. Pero, su preocupación principal apunta hacia las cuestiones relativas a la unidad ideológica, política y orgánica del socialismo chileno.

OCTUBRE

Raúl Ampuero envía una carta a las bases socialistas expresando sus opiniones en torno de la unidad del Partido. La carta busca una respuesta adecuada a dos preguntas pertinentes: “¿Partido de qué clase? ¿Qué clase de partido?”

1991

JUNIO

Especialmente invitado a una reunión del departamento nacional de organización del PS, preparatoria de la conferencia correspondiente, interviene Raúl Ampuero para referirse a las normas que deberían regir en el Partido una vez terminado el proceso de su unidad y reconstrucción.

En esa oportunidad, el experimentado líder socialista atribuye particular trascendencia, tanto a la anunciada conferencia nacional de organización como a la próxima conferencia de programa, reiterando que son “instancias ampliamente legitimadas por una gestión unitaria, destinadas a establecer en términos definitivos la colocación y el papel del partido en la arena política chilena.

1992

OCTUBRE

Su enfermedad no le impide a Raúl Ampuero, en vísperas de cumplir 75 años de edad, desarrollar una lúcida y creadora actividad intelectual. En este momento, escribió “Continuidad y cambio. Notas sobre el Programa del PS de 1947”.

DICIEMBRE

Preocupado por los complejos problemas derivados del proceso unitario del

socialismo, Raúl Ampuero escribe sus “Notas para el desarrollo de la democracia interna en el Partido”.

1994

Concepción. El Instituto de Estudios Latinoamericanos rinde a Raúl Ampuero emotivo y fraternal homenaje, con asistencia de intelectuales, políticos y trabajadores de la zona. Los oradores expresan el público reconocimiento por esa vida entregada a la lucha del socialismo y la liberación de los trabajadores.

NOVIEMBRE

Ampuero participa en un seminario convocado para debatir el tema de un “Proyecto Socialista”.

1996

ABRIL

Santiago. Edificio del Congreso Nacional. En la que fue Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, el Partido Socialista de Chile rinde homenaje a su ex secretario general y ex senador, Raúl Ampuero Díaz.

Pronuncian discursos: el diputado Camilo Escalona, Secretario general del Partido, y el Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos.

El discurso de respuesta, escrito por el querido y respetado líder socialista –presente en el solemne acto– lo lee la dirigente nacional y ex diputada, Carmen Lazo Carrera, militante de la Federación Juvenil Socialista en los años en que Ampuero era su Secretario General.

MAYO

Raúl Ampuero envía una “Carta al XXV Congreso del PS.” Es su último escrito político y constituye el postrer esfuerzo de un revolucionario consecuente para ayudar “a la tarea de reconstruir un pujante Partido Socialista, portador de una nueva esperanza para los trabajadores y el pueblo chileno.”

11 DE JULIO

A los setenta y ocho años de edad, fallece en Santiago Raúl Ampuero Díaz, abogado y profesor, valeroso, tenaz y consecuente militante socialista, revolucionario ejemplar, hombre cabal.

Sus restos mortales son velados en la sede del Partido Socialista de Chile.



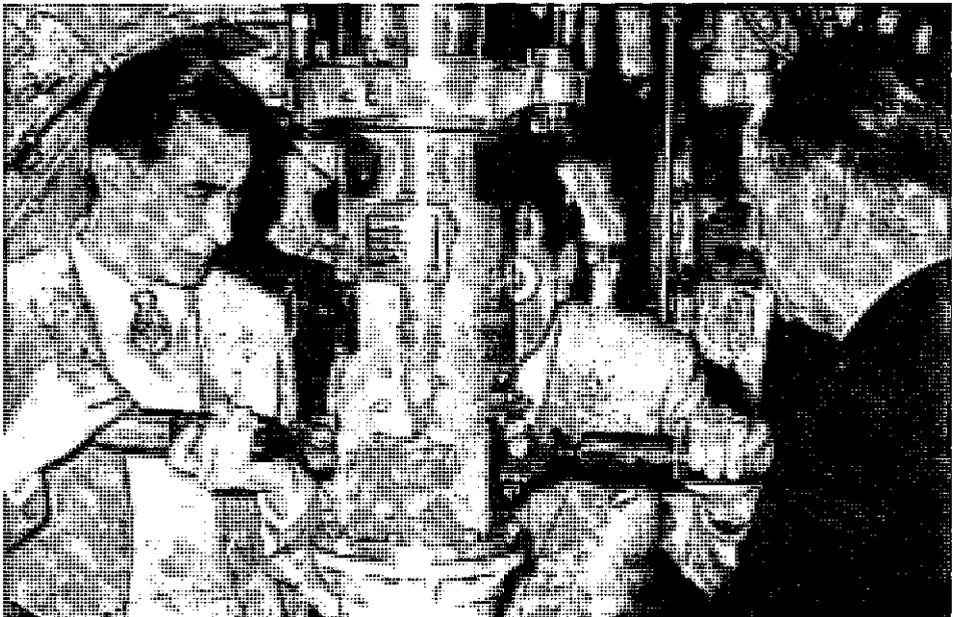
Excursión al Cajón del Maipo en 1940, junto a su esposa y camarada de siempre Hilda Villagrán.



Rumbo a la Antártica en el rompehielos Piloto Pardo, en 1962. Ampuero fue el primer parlamentario en visitar Isla de Pascua y la Antártica.



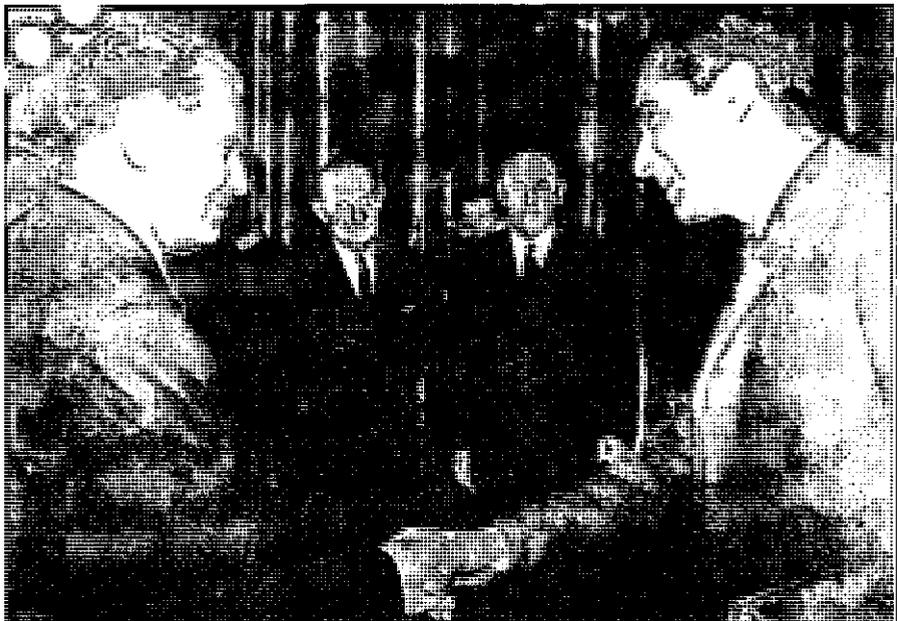
La Federación Juvenil Socialista desfila frente a la Moneda, en 1939.
Las Milicias Socialistas enfrentaron en las calles a las Tropas Nazis de Asalto de Gustavo Von Maré.



Raul Ampuero se ocupó activamente de los temas militares como integrante de la Comisión de Defensa del Senado. Aquí aparece en 1961 asistiendo a maniobras navales submarinas.



1966: Ampuero, junto al Diputado Osorio y otros camaradas, en el muelle de Valparaíso esperando arreglar cuentas con Darío Saint Marie, Volpone, al regreso de su viaje a Europa. En su época el conflicto conmocionó a la opinión pública.



Con el Mariscal Tito, en Belgrado, ex Yugoslavia, durante los peores años de la Guerra Fría, sosteniendo la política de los No Alineados.



1996: Último Homenaje en el ex Congreso Nacional.
De izquierda a derecha: Raúl Ampuero, el Diputado Camilo Escalona, Sec. General del PS, el entonces
Ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos y la ex Diputada Carmen Lazo.